

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AMÉRICA I



TESIS DOCTORAL

**Las ideas hispanoamericanistas de Rafael María de Labra:
(Ultramar y sus problemas durante el siglo XIX)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Fernando Laguna Ochoa

DIRIGIDA POR

Jaime Delgado Martín

Madrid, 2002

ISBN: 978-84-8466-077-4

© Fernando Laguna Ochoa, 1991

FERNANDO LAGUNA OCHOA.

LAS IDEAS HISPANOAMERICANISTAS DE RAFAEL MARIA DE LABRA.
(ULTRAMAR Y SUS PROBLEMAS DURANTE EL SIGLO XIX).

Director: Dr. Don Jaime Delgado Martín.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Facultad de Geografía e Historia.

Departamento de Historia de América.

Año, 1990.

V O L U M E N I .

FERNANDO LAGUNA OCHOA.

LAS IDEAS HISPANOAMERICANISTAS DEL RAFAEL MARIA DE
LABRA. (ULTRAMAR Y SUS PROBLEMAS DURANTE EL SIGLO XIX).

	I N D I C E.	Página
I)	<u>Introducción.</u>	1
II)	<u>Aproximación Temática.</u>	7
1)	Planteamiento General.	7
	Notas.	24
2)	Rafael María de Labra, Apunte Biográfico.	26
	Notas.	41
III)	<u>Labra y el Mundo Ultramarino.</u>	42
1)	Colonialismo e Historia Colonial Española. ...	42
	Notas.	71
2)	El Ambito Antillano.	75
2.1)	La Cuestión Social: El Problema de la Mano de Obra.	75
	Notas.	99
2.1.1)	La Ley Preparatoria de Abolición para Cuba y - Puerto Rico o Ley Moret (1870).	104
	Notas.	111
2.1.2)	La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico - (1873).	113
	Notas.	135
2.1.3)	La Abolición de la Esclavitud en Cuba (1880)..	137
	Notas.	168
2.2)	La Reforma Política en Ultramar: Aspectos Polí- ticos y Económicos.	174
	Notas.	194
2.2.1)	La Revolución de 1868 y el Mundo Colonial	197
	Notas.	249
2.2.2)	La Paz del Zanjón (1878) y sus Consecuencias..	254
	Notas.	273

2.2.3)	Los Años Posteriores al Zanjón.	275
	Notas.	329
2.2.4)	La Larga Espera de las Reformas.	335
	Notas.	387
2.2.5)	Los Intentos Reformistas de Maura (1893).	393
	Notas.	407
2.2.6)	España se Decide por las Reformas: La Ley Abárzuza (1895).	409
	Notas.	423
2.2.7)	Nuevos Derroteros Políticos.	425
	Notas.	454
2.2.8)	El Desafío Bélico Cubano.	457
	Notas.	480
2.2.9)	Los Decretos Autonómicos (1897).	484
	Notas.	509
2.3)	La Cuestión Estratégica: Presencia de Estados Unidos.	511
	Notas.	518
2.3.1)	Estados Unidos y el Problema de Cuba.	520
	Notas.	528
2.3.2)	La Actividad Estadounidense a Fines de Siglo..	530
	Notas.	553
2.3.3)	La Ingerencia Norteamericana.	556
	Notas.	585
2.3.4)	La Intervención Armada y el Desenlace del Proceso.	589
	Notas.	618
3)	España y América tras el 98.	621
	Notas.	676
IV)	<u>Conclusiones.</u>	682
	Notas.	690

	Página
V) <u>Bibliografía</u>	691
1) Bibliografía de Rafael María de Labra.	691
1.1) Libros y Folletos.	691
1.2) Publicaciones Periódicas.	700
2) Bibliografía General.	704
2.1) Libros.	704
2.2) Publicaciones Periódicas.	731

I) INTRODUCCION.

El punto de partida de este estudio tuvo su origen en un pequeño trabajo sobre el pensamiento político de Rafael María de Labra, realizado dentro del seminario: España en la Europa del Imperialismo (1870-1905), organizado como Curso Monográfico de Doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid por don José María Jover Zamora en el ya lejano año académico de 1974-1975. Circunstancias personales, que no son del caso relatar ahora, me llevaron a posponer, demasiado dilatadamente, lo que hoy se presenta como Tesis Doctoral que ha tenido la amabilidad de dirigir, orientar y corregir don Jaime Delgado y de alentar don Mario Hernández Sánchez-Barba. Asimismo, agradezco vivamente la ayuda prestada por José Vicente Lucas Marcos sin cuya colaboración material al informatizar este trabajo no hubiera sido posible la presente Tesis.

Una aproximación posterior y más detallada sobre el particular me llevó a considerar las posibilidades de realización del mencionado estudio así como de las fuentes a utilizar. Como puede suponerse, la base fundamental, en un trabajo de esta índole, se centra en torno a los escritos del autor objeto de consideración, motivo por el cual las publicaciones de Rafael María de Labra se convirtieron en la fuente primigenia y original, necesaria para conocer su pensamiento político. No obstante, dicho desarrollo intelectual no nos diría demasiado, si no lo consideráramos enmarcado dentro de la época en que vivió el autor. Así, me ví obligado a realizar una cala, si bien no exhaustiva, por lo menos general, del siglo XIX español en relación con el conjunto de temas abordados por Labra con respecto al mundo ultramarino y a la problemática colonial española.

El estudio de este panorama histórico general se convirtió de esta forma en la referencia bibliográfica de fondo, sobre la cual se organizó el análisis de las fuentes de primera mano estructuradas en torno a tres puntos fundamentales: 1º) Los discursos parlamentarios de Labra recogidos en las series correspondientes de los Diarios de Sesiones del Congreso de Diputados y del Senado respectivamente (obra dispersa); 2º) Los escritos del autor impresos y publicados bajo forma de libros y folletos, en muchos casos compilación de sus discursos parlamentarios y de sus artículos periodísticos, simplemente refundidos o bien ampliados y o comentados en alguna de sus partes (obra recogida), y 3º) Artículos periodísticos de muy diversa índole y condición aparecidos en periódicos y revistas tales como: El Abolicionista; La América; Boletín de la Sociedad Geográfica; Los Conocimientos Útiles; El Correo de España; El Correo de Ultramar; La Correspondencia de España; Las Cortes; La Democracia; La Discusión; La Escuela del Derecho; El Financiero Hispano-Americano; La Igualdad; La Justicia; El Mercurio; Nuestro Tiempo; La Nueva Iberia; El Progreso; El Pueblo; Revista de Andalucía; Revista Contemporánea; Revista de España; Revista Europea; Revista Hispano-Americana; Revue Internationale; La Tribuna; El Tribuno; La Unión; Unión Ibero-Americana; El Universal; El Voto Nacional, etc. (obra dispersa).

De esta forma, el desarrollo de esta triple apoyatura de fuentes me llevó a consultar los fondos existentes sobre la materia en la Biblioteca del Senado; Biblioteca de las Cortes (Congreso de Diputados); Biblioteca Nacional; Biblioteca del Ateneo Científico-Literario y Artístico de Madrid; Hemeroteca Municipal de Madrid y Sección de Publicaciones Periódicas (Hemeroteca) de la Biblioteca Nacional y del Ateneo de Madrid. Establecidos, pues, estos criterios, la estructura general del presente trabajo se ha organizado en tres partes. La primera de

ellas pretende una aproximación cuya intención busca introducirnos en los problemas y aspectos genéricos del tema por lo que recoge, en los dos apartados que comprende, un planteamiento de las cuestiones de fondo y una presentación biográfica del personaje cuyas ideas políticas son analizadas.

La segunda parte, núcleo central de la temática objeto de consideración, engloba en sus tres puntos principales las tres ideas angulares sobre las que giró la problemática ultramarina decimonónica, desde el punto de vista de Rafael María de Labra, es decir: los aspectos doctrinales relacionados con el colonialismo; el mundo antillano propiamente dicho, complejo caleidoscopio que implicaba a su vez la cuestión social (abolición de la esclavitud), la cuestión política (reformas políticas, administrativas y económicas) y la cuestión estratégica (intromisión norteamericana), y, por último, el planteamiento de las siempre preocupantes, pero a la vez esperanzadoras, relaciones de España con Hispanoamérica.

A su vez, la tercera y última parte queda distribuida en unas conclusiones y en una selección bibliográfica. Como complemento se presenta en último lugar un apéndice documental. Tanto en la bibliografía como en el apéndice se hace una distinción entre la temática general y la específicamente relativa a Labra y en la catalogación bibliográfica se separan, además, libros y folletos de publicaciones periódicas.

Por otra parte, el marco bibliográfico general, que ha servido de fondo a la presentación del pensamiento político de Rafael María de Labra con respecto al mundo ultramarino, es inmenso, si bien cabe destacar algunos títulos que pueden indicarse con carácter paradigmático. Para las cuestiones relacionadas con la problemática colonial: Miguel Blanco Herrero:

Política de España en Ultramar; Rafael Maldonado Macanaz: Principios Generales del Arte de la Colonización, y José Perojo: Cuestiones Coloniales y Ensayos de Política Colonial.

Para la temática social: Hubert H. S. Aimes: A History of Slavery in Cuba, 1511 to 1868; Raúl Cepero Bonilla: Azúcar y Abolición. Apuntes para una Historia Crítica del Abolicionismo; Arthur F. Corwin: Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886; Luis M. Díaz Soler: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico; Kenneth F. Kiple: Blacks in Colonial Cuba. 1774-1889; Franklin W. Knight: Slave Society in Cuba during the Nineteenth Century; Rebecca J. Scott: Slave Emancipation in Cuba: The Transition to Free Labor, 1860-1899, y Hugh Thomas: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970).

Para el ámbito político: Melchor Fernández Almagro: Historia Política de la España Contemporánea; Manuel Fraga Iribarne: Las Constituciones de Puerto Rico; Francis J.D. Lambert: The Cuban Question in Spanish Restoration Politics, 1878-1898; Andrés María Lazcano y Mazón: Las Constituciones de Cuba, y Gabriel Maura Gamazo: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria.

Para el factor estratégico representado por la presencia de Estados Unidos: Pablo de Azcárate: La Guerra del 98; Philip Sheldon Foner: Historia de Cuba y de sus Relaciones con Estados Unidos; Ramiro Guerra Sánchez: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos; Jesús Pabón: El 98, Acontecimiento Internacional; Herminio Portell Vilá: Historia de Cuba en sus Relaciones con los Estados Unidos y España; José Ignacio Rodríguez: Estudio Histórico sobre el Origen, Desarrollo y

Manifestaciones Prácticas de la Idea de la Anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de América, y Emilio Roig de Leuchsenring: Cuba no debe su Independencia a los Estados Unidos y Cuba y los Estados Unidos, 1805-1898.

Por lo que respecta a la producción del propio Labra (estudiado desde un punto de vista biográfico por: Guillermo Domínguez Roldán: Rafael María de Labra; Alvaro de Figueroa y Torres: D. Rafael María de Labra y la Política de España en América y Portugal, y Antonio Sendras Burín: D. Rafael María de Labra. Estudio Biográfico) igualmente copiosa, aunque muy repetitiva, pueden citarse como más representativas las siguientes obras: Para el colonialismo: Las Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898; La Colonización en la Historia. (Política y Sistemas Coloniales), y La Cuestión Colonial (1871-1896-1898).

Para los problemas de índole social: La Abolición de la Esclavitud en las Antillas Españolas. (Contestación a Saco y a Cochin); La Abolición de la Esclavitud en el Orden Económico; La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico. (Propaganda Antiesclavista); La Abolición y la Sociedad Abolicionista Española; La Cuestión Social en las Antillas Españolas, y La Experiencia Abolicionista en Puerto Rico.

Para los aspectos políticos: La Autonomía Colonial en España; Cuestiones Palpitantes de Política, Derecho y Administración; La Política Colonial y la Revolución Española de 1868; La Reforma Colonial en España. (En las Antillas); La Reforma Colonial Española de 1868 a 1898. (Historia Política); La Reforma Electoral en las Antillas Españolas; La Reforma Política de Ultramar (1868-1900), y La República y las Libertades de Ultramar.

Para las cuestiones relacionadas con la intervención norteamericana: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios); El Pesimismo de Última Hora, y El Tratado de París de 1898 entre España y los Estados Unidos.

Para todo lo relativo a las relaciones entre España e Hispanoamérica: La Intimidad Ibero-Americana; La Orientación Internacional de España; La Personalidad Internacional de España; La Política Exterior de España; Política Internacional, La Orientación Americana de España, y El Problema Hispano-Americano.

Por último, desde el punto de vista metodológico, el presente estudio ha seguido un criterio expositivo, que en este caso conjuga los valores temáticos con los cronológicos, dado que la estructura temporal coincide con los sucesivos núcleos temáticos que desarrolló Labra a lo largo de su dilatada existencia. En primer lugar (desde sus primeros artículos hacia 1858 y sobre todo desde sus primeras intervenciones parlamentarias en 1871 hasta 1880), la problemática de la mano de obra de color y de la subsiguiente cuestión de la abolición de la esclavitud; después (desde 1880 hasta 1898), la cuestión de la reforma política de Ultramar y de la consecución de la autonomía, temática presente en parte en el periodo anterior; por último (tras el Desastre y una vez liquidadas las situaciones que lo habían creado hasta su muerte acaecida en 1918), los aspectos relacionados con las nuevas posibilidades abiertas por la aproximación entre España e Hispanoamérica.

II) APROXIMACION TEMATICA.

1) PLANTEAMIENTO GENERAL.

La conservación de un Imperio ultramarino de base fundamentalmente antillana, tras el proceso de emancipación que dió vida independiente al resto de la América hispana, se convirtió, con toda su carga de problemas y de dificultades a escala nacional e internacional, en uno de los puntos clave de la historia decimonónica española.

En el desarrollo histórico del mundo antillano los problemas metropolitanos y los coloniales se implicaron mutuamente, existiendo entre ellos una profunda interrelación. Los asuntos coloniales repercutieron en la vida de la metrópoli y en muchos casos alteraron su relación de fuerzas políticas y sociales y, a su vez, la situación histórica de aquélla determinó los criterios y los comportamientos en relación con la colonia. De esta forma, la situación de España creó el clima determinante, explicativo, de su conducta con Ultramar, pero, por otra parte, el hecho ultramarino fue un elemento integrante de la vida española del siglo XIX imprescindible para comprenderlo (1).

En realidad, las posesiones antillanas iniciaron su andadura en solitario sobre una base falsa, ya que Cuba y Puerto Rico quedaron bajo el control español, mientras se independizaba el resto del continente, como consecuencia de la situación internacional del momento. Sobre esta plataforma, un tanto vacilante, pronto se perfiló la necesidad de abordar tres tipos de problemas: el político, el económico y el social. Los tres factores estaban concatenados, aunque el punto principal consistía en el tema político, es decir, en el sistema, que se estableciese para gobernar las Antillas.

Realmente, las premisas liberales de Cádiz y del Trienio Constitucional se montaron sobre la igualdad, pero sobre una igualdad más teórica que práctica, que, por otra parte, desconocía la evolución de los acontecimientos y que, en vez de tratar de formular una política adecuada a las nuevas circunstancias, se empeñó en ofrecer, sin más, la Constitución como panacea universal.

No obstante, con el tiempo podían haberse ido aclarando las posiciones, mediante el contacto y el intercambio de pareceres, pero en lugar de esto, en 1837 y sin que existiesen motivos de peso para ello, se cortó bruscamente todo contacto entre españoles y antillanos al prohibir a estos últimos su presencia en las Cortes y al establecer, que las provincias de Ultramar serían gobernadas por "leyes especiales", lo que estaba en abierta contraposición con los principios liberales, ya que de hecho otorgaban a los Capitanes Generales y a los Gobernadores militares verdaderas facultades "omnímodas" (2).

Así, pues, fue pasando el tiempo, sin que en nada variara la actitud inicial del Gobierno español, haciendo inútiles los esfuerzos del reformismo encabezado por José Antonio Saco y fomentando los deseos revolucionarios y anexionistas. Para empeorar la situación, la convocatoria y ulterior desarrollo de una Junta de Información, destinada a estudiar los problemas antillanos, resultó ser un verdadero fracaso, dada la posición española, lo que sirvió para ahondar el cisma existente.

Con posterioridad, la Revolución del 68 reconoció explícitamente la necesidad de introducir reformas, pero una cosa era el reconocimiento teórico de esa necesidad y otra la aplicación práctica de aquélla sin perder de vista, tanto el factor político peninsular, caracterizado por la aritmia del

constitucionalismo español, que dificultaba la buena marcha del proceso, como el carácter de los mismos postulados septembrinos, según los cuales todo consistía, simplemente, en extender a Ultramar las libertades revolucionarias.

Por otra parte, la aparición de nuevos problemas como el de la guerra cubana sirvió desgraciadamente a los interesados en mantener la situación existente para enmascarar las cuestiones de fondo, presentando la revolución como prueba irrefutable de la mala fe de los antillanos y prolongando, así, una vez más, la concesión de las reformas al dejarlas pospuestas al restablecimiento del orden. Además, la solución del problema político, siempre peligrosamente complicado por sus implicaciones de carácter internacional, vino lastrada por los problemas económicos y sociales de muy compleja estructura e íntimamente unidos a aquél, de tal forma que sin solucionar los segundos no se podía llegar a resolver el primero. El planteamiento de la cuestión económica y social dependió esencialmente de los condicionamientos de la economía metropolitana y colonial, y como ambas fueron deficitarias y correspondieron más bien a un sistema arcaico y cerrado, hicieron poco factible su solución.

La economía, dejando aparte la comercialización de los productos ultramarinos (lo que constituyó un problema más, en relación con su desplazamiento hacia el mercado estadounidense y con el consiguiente choque con el monopolio peninsular y con sus detentadores metropolitanos), careció de infraestructuras adecuadas para un aprovechamiento más completo de la riqueza colonial y por lo tanto vió muy limitadas sus posibilidades de evolución de acuerdo con el carácter industrial, que marcaban los nuevos tiempos. En última instancia, la solución se obtuvo gracias a la ayuda prestada por Estados Unidos, pero a costa de enajenar en la práctica las posesiones antillanas.

De esta forma, la existencia dentro de aquella órbita de una mano de obra esclava (estructura social arcaica, unida a una economía del mismo signo y sujeta, por otra parte, a fuertes intereses creados) se hizo muy difícil de desarraigar. Así, pues, la necesidad de replantear el sistema colonial chocó con numerosas trabas, entre las que destacaron la multiplicidad de los planos a reestructurar, la escasez de recursos, las desfavorables circunstancias internacionales y las apetencias sobre las posesiones hispanas de otros imperialismos en fase ascendente (3).

Realmente, el trato discriminatorio imperante desde 1837, que anulaba toda posibilidad de diálogo, fue fatal en el desarrollo del proceso, ya que produjo un desfase entre los deseos antillanos y las concesiones que los políticos peninsulares estaban dispuestos a otorgar. En el centro de todo ello figuraba un factor decisivo: el paso del tiempo, que hizo disímiles los ofrecimientos españoles en relación con las peticiones de cubanos y de puertorriqueños.

Con el transcurso de los años las apetencias antillanas, en evolución, se deslizaron hacia la autonomía, mientras que la actitud peninsular, estancada, cuando reaccionó de alguna forma, volvió al punto en que había quedado detenida, ofreciendo simplemente la asimilación o la equiparación de estructuras, con la consiguiente divergencia de intereses entre ambas partes. Este error de óptica fue fundamental e hizo, a su vez, extraordinariamente difícil el esfuerzo autonomista, ya que los políticos españoles al no mantener una posición evolutiva de acuerdo con el paso del tiempo, no estuvieron en condiciones de asimilar lo que el autonomismo significaba.

Evidentemente en la Península no se vió o no se quisó

ver el hecho real de que las Antillas evolucionaban y de que dentro de esta evolución, de carácter político, que englobaba los aspectos sociales y económicos de la igualdad con España, por otra parte no concedida en su momento, se había pasado a los deseos autonómicos y de que de éstos tarde o temprano se pasaría a la independencia, que no era más que la culminación del lógico e inevitable proceso. En líneas generales se reconoció el principio universal de que la colonización terminaba en la independencia, pero esto no se admitió para el caso concreto de España o, por lo menos, existió una gran resistencia para ello (4).

En el fondo, la mentalidad española no estaba preparada para un proceso descolonizador, que tampoco correspondía al horizonte histórico del momento. Se contaba con la experiencia proporcionada por la pérdida del Imperio a principios de siglo, pero, quizá por esta misma circunstancia, se desarrolló una política dirigida al mantenimiento de lo existente el mayor tiempo posible, sin más, en vez de hacerla compatible con el abordaje paulatino y adecuado de las necesarias reformas.

Tan sólo vieron con claridad el problema los republicanos y algún que otro político, entre ellos Labra, pero aquéllos ocuparon el poder con tal fugacidad, que no tuvieron tiempo de acometer un programa adecuado (pese a lo cual terminaron con la esclavitud en Puerto Rico), aunque fueron mirados con prevención en las Cortes y fuera de ellas y tachados de antipatriotas al exponer sus ideas. La Restauración tuvo que enfrentarse con este complejo panorama, y si bien es verdad que su tarea no podía ser fácil, no era menos cierto que la adopción de determinadas medidas en nada la favorecieron, pues aunque se solucionó, y no sin dificultades, el problema de la esclavitud en Cuba y se sofocó la revuelta armada iniciada en 1868, la concesión de reformas fue lenta y la discriminación, a pesar de

devolver el derecho de representación a los antillanos, evidente. En última instancia, se mantuvo la tesis peninsular de la asimilación, con lo cual los diputados ultramarinos o siguieron la línea conservadora o si eran partidarios de las reformas, en líneas generales no fueron escuchados.

Inevitablemente, la cuestión colonial implicó a todos los españoles; unos se preocuparon por ella y otros se caracterizaron por su falta de atención, pero ninguno, dejando aparte la galvanización sentimental o patrioter, la sintió intimamente como en épocas pasadas. Entre los primeros figuraron los que se apasionaron por el tema por formación intelectual o política o por intereses materiales, y entre los segundos el absentismo culto, que creía que todo estaba perdido y que nada esperaba de Ultramar, al tiempo que ponía sus ojos en Europa, y el pueblo en general, llamado únicamente, cuando era necesario su esfuerzo militar. A caballo entre uno y otro grupo estuvieron los militares y los funcionarios, para quienes un puesto en Ultramar era una recompensa a sus esfuerzos, y los emigrantes, núcleo importante, que nutrió el "Cuerpo de Voluntarios" y que constituyó un sector de intransigentes, que dificultó, con su actitud, el camino hacia soluciones de concordia (5).

Realmente, Cuba, pieza clave del mundo ultramarino, dominada por el monocultivo y por la necesidad de exportar el azúcar y el tabaco a los mercados extranjeros, en especial a Estados Unidos, para poder adquirir sus importaciones esenciales, pasó a constituir un grave problema para el dominio español al entrar en la órbita de dependencia económica estadounidense. Por otra parte, la soberanía española también se vió viciada por la presencia de un gran número de emigrantes peninsulares, grupo compuesto principalmente de advenedizos, en su mayoría solteros, empleados en las ciudades en diversos trabajos, que arribados a

la isla con la sola idea de hacer fortuna, encarnaron la intransigencia popular y patrioter.

Desde el punto de vista político, el sufragio quedó limitado a los varones con posibilidades económicas, reflejadas en su capacidad tributaria, mientras que los peninsulares, que contaban con el apoyo gubernamental, dominaron las elecciones en la isla y dieron a la Unión Constitucional, que apoyaba la asimilación de Cuba con la Península, una mayoría segura en los escaños parlamentarios. En el ámbito económico, la Península sufrió asimismo las consecuencias del déficit del presupuesto cubano, fruto de la naturaleza artificial de la economía isleña y asunto con el que se relacionaba el espinoso problema del arancel.

Ciertamente, las fuentes de ingreso con que contó la administración española en Cuba se centraron principalmente en los impuestos indirectos, sobre todo en los aduaneros, y en estas circunstancias el dilema se presentó en los siguientes términos: si se mantenía el arancel a un nivel suficiente para equilibrar los presupuestos, se haría imposible la exportación de los productos cubanos, a causa de las represalias de Estados Unidos; si, por el contrario, el arancel era rebajado, la administración cubana no podría pagar sus obligaciones, especialmente las deudas derivadas de la Guerra de los Diez Años. La cuestión terminó con un acuerdo, que acabó de completar el control yanqui sobre la isla.

Por otro lado, la representación cubana en las Cortes se distribuyó en dos grupos, correspondientes a las agrupaciones políticas que se habían creado en las Antillas: la Unión Constitucional, que quería la asimilación con la Península y que englobaba a miembros de los partidos monárquicos peninsulares, y

el Partido Autonomista, que proponía el autogobierno dentro del seno de la unidad nacional y con el que simpatizaban la mayoría de los grupos republicanos.

Los autonomistas exigían el derecho a elegir una Cámara insular, que controlara el presupuesto y el arancel, cuestión vital, ya que la isla de Cuba dependía del comercio para su subsistencia; pero, aunque la mayoría fue leal a España, salvo algunos separatistas que encontraron en el partido un amparo para sus actividades, en líneas generales no se les hizo caso, perjudicándoles el hecho de no querer aliarse a los partidos gubernamentales. Mientras tanto, en el extremo opuesto, los diputados de la Unión Constitucional, que habían aceptado plenamente el "sistema del turno", participaron en la formulación y en la ejecución de la política ultramarina.

Dentro de este campo, la cuestión cubana dividió también a los partidos políticos peninsulares. Así, los conservadores, partidarios de una asimilación gradual, iniciaron su andadura política, que completaron con algunas medidas más, concediendo a Cuba el régimen provincial y municipal existente en la Península y admitiendo a sus representantes en las Cortes, aunque se opusieron a la autonomía por considerar que podía crear un deterioro de la autoridad española en la isla.

Los liberales, por su parte, más avanzados en la formulación de su política, mantuvieron, no obstante, el asimilismo y fueron bastante reacios a las reformas radicales en los primeros años. De esta forma, Sagasta, por ejemplo, no estuvo esencialmente preocupado por los problemas coloniales y el Partido Liberal distó mucho de mantener una política única al respecto, si bien en él se agruparon diversos sectores interesados por los asuntos de Ultramar, como algunos

librecambistas, que luchaban por la rebaja del arancel cubano; ciertos militares, que habían hecho sus campañas en Cuba y que atacaban los abusos de la administración española, y un grupo de liberales izquierdistas, que, aunque abogaban por el asimilismo, insistían en la necesidad de una descentralización.

Por fin, en 1893 don Antonio Maura, miembro de un Gobierno liberal, acometió de forma decidida la cuestión de las reformas con su plan de una Asamblea insular única. Sin embargo, la fuerte oposición parlamentaria que se desató en torno al proyecto Maura dió al traste con aquel plan descentralizador, aunque poco después se consiguiese sacarlo adelante bajo una forma más moderada con la Ley Abárzuza (6).

En cuanto al problema de la guerra cubana, desatada de nuevo en 1895, y a su implicación internacional, hubo, asimismo, divergencia de pareceres entre conservadores y liberales. Cánovas confiaba en la acción de las armas y recelaba de los propósitos mediadores de Estados Unidos, opinando que las reformas tenían que aplicarse una vez que se hubiese obtenido el restablecimiento del orden; en cambio, Sagasta creía en la buena voluntad norteamericana y en la eficacia de las reformas políticas que, según su criterio, debían anteponerse a la guerra, para que trajesen la paz (7).

Dentro de este contexto, la creciente presión norteamericana y el relativo fracaso de la política de "mano dura" del General Weyler indujeron, por fin, a Cánovas a decidirse por la ampliación de las reformas de Abárzuza de 1895. Al mismo tiempo, los liberales, bien fuese por oposición política o por convicción, habían apostado por la autonomía, que aplicaron, tras el asesinato de Cánovas, en Noviembre de 1897.

No obstante, el desfase que había acompañado durante tantos años a la política seguida en Ultramar, imposibilitando un desarrollo armónico, impidió que el nuevo régimen fructificara. La demora, que había desanimado a muchos, permitió, entre otras cosas, esgrimir a Estados Unidos, siempre amenazantes, determinados argumentos, bajo los cuales se ampararon para llevar a cabo su secular propósito: terminar con la soberanía española en las Antillas. Así, pues, aunque con la rectificación española de última hora pudo haberse llegado a suprimir la acción separatista y a implantar la autonomía cabalmente, quedó, en definitiva, truncado el proceso por voluntad de un poder extranjero que se impuso por la fuerza.

Precisamente, en el marco de este complejo y abigarrado panorama del último tercio del siglo XIX, brevemente descrito, es donde se desarrolló la labor de don Rafael María de Labra, en pro de los ideales de reorganización y de reforma del mundo antillano en su vertiente social y político-económica, que terminó completando, de forma más intensiva, en la última etapa de su vida, con la preocupación por los problemas relacionados con el americanismo y con la presencia de España en el Nuevo Mundo. En este sentido, tres fueron las grandes líneas maestras, íntimamente imbricadas, sobre las que se asentó el pensamiento de Labra, base y motor de su actividad personal: la política colonial, la política exterior y la política interior española.

Por lo que respecta a la política colonial, preocuparon a Labra: la extensión a Ultramar de las libertades y de los derechos asegurados por la Revolución de 1868; la abolición de la esclavitud; la concesión de la autonomía colonial; el mantenimiento de la integridad del territorio español y de la unidad nacional; el desarrollo de una política administrativa y económica adecuada en Ultramar y la consecución de una reforma democrática en el mundo colonial.

En relación con ello, la España constitucional debía empeñarse en dar a las provincias de Ultramar lo que ella disfrutaba, de la misma manera que la España de los siglos XVI y XVII había entregado a América sus derechos. En este sentido, era necesario rectificar el error de los políticos españoles, cuya campaña había sido menos comprensiva, firme, lógica y generosa que la de los hombres de las Leyes de Indias, ya que éstos habían llevado a Ultramar las mismas ideas fundamentales y los mismos principios políticos que privaban en la metrópoli (8). Realmente, los políticos constituyentes del siglo XIX no habían tenido en cuenta la tarea realizada por España en América, por lo que no habían advertido que una de las mayores fuerzas de la insurrección americana había consistido en el espíritu de igualdad.

El tema de la abolición de la esclavitud fue la base de una extensa campaña parlamentaria por parte de Labra, prolongada a lo largo de muchos años, que se convirtió en su pensamiento en el punto de partida para concluir la insurrección en Cuba, objetivo primordial de cara a abordar con posibilidades de éxito las tan ansiadas reformas ultramarinas (9).

Con respecto a la autonomía colonial, ésta debía entenderse acomodada al espíritu y a las tradiciones coloniales de España sobre la base de la identidad perfecta de los derechos civiles y políticos de los españoles de uno y otro lado del Atlántico (10).

La idea de la unidad nacional suponía la de la conservación de la integridad del territorio español, de forma que la concesión de la autonomía a las provincias ultramarinas implicaba el libre desenvolvimiento de los poderes locales en todo lo que les afectase, respetando siempre la soberanía

nacional, con lo cual aquélla, lejos de ser una tendencia separatista, constituía una directriz unificadora y conservadora. Por esta razón, frente a la insurrección cubana el Gobierno creyó que debía asumir una actitud pacifista, por lo que era necesario refrenar los ímpetus del partido dominante en Cuba y mantener una actitud conducente a la consolidación de la libertad y de las reformas liberales (11).

En relación con la política administrativa y económica en Ultramar, la cuestión de los empleados constituía un punto de capital importancia en las provincias ultramarinas por su doble carácter de servidores de una administración difícil y de representantes del nombre y del prestigio de la patria en aquellas tierras. Dentro de este contexto, se hacía necesaria, asimismo, una reforma arancelaria librecambista, dado que se debía robustecer la riqueza de las Antillas y defenderla de la crisis, afianzándola frente el insurrecto y al extranjero (12).

Por último, la reforma democrática del mundo colonial constituía el complemento de la Revolución de 1868, que había abierto los horizontes y las perspectivas de la democracia. Por ello, esta cuestión revestía un carácter excepcional, una importancia y una trascendencia inmensa para la suerte de España y para el arraigo y el robustecimiento de las conquistas septémbrinas y se entroncaba con el carácter internacional de la moderna colonización y con la influencia que en la vida interior de España había tenido y continuaba teniendo el orden político y social de las provincias americanas (13).

Por su parte, la política exterior española exigía, según Labra, dar una dirección y un sentido a las fuerzas del pueblo español, realizando una gran política internacional; afirmar la personalidad nacional; conseguir la aproximación hispanoamericana, y marcar una posición frente a Estados Unidos.

Por lo que respecta al primer punto, se precisaba urgentemente una política de exteriorización, sujeta a las leyes del tiempo e inmersa en las grandes corrientes de la época, con lo que se pretendía sobreponerse a las cuestiones de política interior y a las preocupaciones y diferencias entre los partidos, así como al desaliento y al pesimismo de grandes masas de la sociedad española tras la crisis de 1898. Precisamente, para lograr este objetivo se necesitaba resistir la frustración, fortificar los medios de vida y comprender lo que implicaba la personalidad nacional en el círculo de las naciones soberanas, renunciando a ser una excepción en el mundo contemporáneo (14).

Por otro lado, la personalidad nacional se destacaba dentro de los fines que debía perseguir la acción política, siendo ello no sólo la solución de los males interiores de España, sino el medio de afianzarla en todo lo referente a la política internacional, a fin de lograr así un lugar destacado en el concierto mundial (15). Ciertamente, el derecho de España a mantener su personalidad internacional suponía el derecho de las demás naciones a recabar de la Península la conciencia de su destino y de sus medios, los títulos de su representación y las pruebas de su vida, en relación con su presencia activa y con su acción junto al resto del mundo civilizado (16).

Se trataba, pues de revitalizar la sociedad española con elementos nuevos y de fortalecer su personalidad en el trato continuo con los demás pueblos, a fin de superar las frustraciones existentes. En este sentido, el Desastre debía ser tomado como una experiencia positiva, que permitiera reiniciar la tarea abandonada, recordando el pasado próximo y lejano al objeto de propiciar en España la aparición de una actitud optimista y racional, que aportase soluciones al país. En orden a la aproximación hispanoamericana, Labra consideraba que los

compromisos de España, después de 1898, habían aumentado, por lo que era absolutamente necesario aprovechar la lección con más sentido del demostrado a principios del siglo XIX, tras la pérdida del continente americano (17).

Así, pues, era necesario defender la orientación internacional americana de la política exterior española, cuyo supuesto estaba en el hispanoamericanismo, que afectaba por igual a América y a España (18). Además, la acción de España en América se hallaba respaldada por una serie de factores, tales como la posición geográfica española, el idioma, la emigración, la actividad política a escala gubernamental e individual, y la labor diplomática.

La posición geográfica de España tenía un valor excepcional para la política y para el comercio del mundo y exigía de aquélla un apostura en consonancia con el espíritu de expansión y con el vigor característico de la raza hispánica (19). También el idioma obligaba a una acción internacional firme y constante. Ciertamente, en América hablaba el castellano un gran número de personas, por lo que no se podía abandonar esa representación, dada la existencia de esos miles de hombres y de mujeres, que por medio de la lengua se habían identificado con la Historia y con las costumbres de España.

La emigración era el tercer hecho importante, que en el caso español tenía su razón de ser en las características de la raza, expansiva, desbordante y propagandista, y que se destacaba por la forma de su establecimiento, por la manera de vivir de los emigrantes allí donde se afincaban y por el modo de mantener sus relaciones con la Madre Patria (20). La propia colonización tenía, pues, la necesidad de considerar esa masa de españoles, que pesaban en la vida de los países americanos y que constituían

el primer factor de la aproximación hispanoamericana.

Asimismo, debían potenciarse los medios de relación internacional de España tanto por la obra directa del Gobierno, a través de las leyes, de los tratados y de la diplomacia, como por la acción individual sostenida y ayudada por el Gobierno o entregada a sus propios y exclusivos recursos, pero protegida por las leyes nacionales garantizadoras de la vida y de los derechos del súbdito en país extranjero.

En cuanto a la labor diplomática, ésta tenía que acentuar su acción, teniendo en cuenta el momento presente, especialmente favorable con respecto a América y, dentro de ella, con respecto a Cuba y a la Argentina, países en que las circunstancias eran particularmente propicias. En este sentido, en el mundo docente, que examinaba las condiciones interiores y el alcance final del régimen español en América y de la Historia Colonial, existía una rectificación absoluta de las antiguas críticas, con lo que se hacía plena justicia al carácter de la colonización española, al tiempo que tanto Cuba como la Argentina volvían su mirada hacia la Madre Patria, reconociendo así sus vínculos raciales.

Ciertamente, a España le quedaban deberes, derechos y medios en América y fuera de ella para afirmar su personalidad internacional y esto quedaba confirmado por los españoles residentes en el Nuevo Mundo, que no renunciaban a la representación histórica, que tenían en los distintos países, donde trabajaban y donde convivían. Por esta razón, España debía conquistar esa representación no sólo en beneficio propio, sino también como victoria de toda la raza, que poblaba aquel continente (21).

Precisamente, dentro de este contexto, el Congreso Internacioal de Río de Janeiro, celebrado en 1906, acentuó, dada la posición adoptada por los representantes argentinos, el movimiento de simpatía hacia la raza latina, frente a la acción y a la propaganda norteamericanas, presentes en congresos anteriores y específicamente en la intervención estadounidense en Cuba, lo que llevó a los países hispanoamericanos a afirmar su propia personalidad distinta de la de Estados Unidos.

A partir de entonces, el panamericanismo tuvo un objetivo bien definido y tendencias latentes. Su objetivo buscaba la comunicación y la aproximación de los pueblos americanos y la consagración de la personalidad continental, pero por debajo de esto palpitaba una cierta resistencia al influjo europeo y el deseo de consolidar la hegemonía norteamericana en el Nuevo Mundo, razón que condujo a la unión de los pueblos hispanos en un movimiento de simpatía hacia la antigua metrópoli, a la estimación de los residentes españoles en América y a la necesidad de reconstruir la familia hispanoamericana dentro del ámbito propio y soberano de cada uno de los Estados, que tenían, sin embargo, un mismo origen y un destino común (22).

Por último, en relación con la posición frente a Estados Unidos, la acción de Europa en América había pecado de despectiva en lo político y había propiciado la coacción, que, a su vez, dió oportunidad para el ejercicio de una acción protectora por parte estadounidense. De esta forma, la actitud del Gobierno norteamericano, respecto del principio de beligerancia en las Antillas, así como la manera como se planteó allí la intervención fueron cuestiones que trascendieron el Derecho Internacional y que se relacionaron con el nuevo sentido otorgado a la Doctrina Monroe, a la cual la opinión general estadounidense dió un mayor alcance a fines del siglo XIX,

pretendiendo no sólo sustraer a América de la relación política, económica e internacional con Europa, sino someterla a una especie de protectorado (23).

En última instancia, la política colonial realizada por España le llevó al Desastre de 1898, producto, en parte, de la soledad en que quedó frente a Estados Unidos y fruto de una conducta exterior no acorde con los postulados de la hora y de una sobreestimación de la capacidad del pueblo español para enfrentar la insurrección cubana apoyada por Norteamérica. En este sentido, el propio Gobierno tampoco tomó verdadera conciencia de la auténtica situación, reflejada, poco después, por los jóvenes de la Generación del 98, quienes detectaron el pesimismo y el abatimiento en que cayó, a partir de entonces, una gran mayoría de los españoles (24).

Por su parte, la política interior española, aspecto que escapa de la consideración del presente estudio, fue analizada por Labra a través de dos cuestiones: la Revolución de 1868 y los partidos políticos peninsulares, punto este último que, a su vez, englobaba aspectos de la política interna, tales como las relaciones Iglesia-Estado, la Enseñanza Pública, el Ejército, la vida local (municipal y provincial) y la Economía.

N O T A S.

- (1) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Colonial y la Revolución Española de 1868 (Madrid 1915), pág. 82.
- (2) MESA, ROBERTO: El Colonialismo en la Crisis del XIX Español (Madrid 1967), pág, 51.
- (3) Ibid., pág. 53.
- (4) BLANCO HERRERO, MIGUEL: Política de España en Ultramar (Madrid 1888), pág, 14.
- (5) MESA, ROBERTO: Ob. cit., pág. 38.
- (6) Para estas y otras cuestiones relacionadas con el tema véase, LAMBERT, FRANCIS J.D.: The Cuban Question in Spanish Restoration Politics, 1878-1898 (Oxford 1968).
- (7) PABON, JESUS: El 98, Acontecimiento Internacional, en "Días de Ayer (Historias e Historiadores Contemporáneos)" (Barcelona 1963), pág 142.
- (8) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 77 y 81.
- (9) Ibid., pág. 63.
- (10) Ibid., pág. 154.
- (11) Ibid., págs. 75; 139; 152 y 170-171.
- (12) Ibid., págs. 54; 81 y 154-155.
- (13) Ibid., págs. 82 y 89.
- (14) Ibid., pág. 110.
- (15) Ibid., pág. 110.
- (16) Ibid., págs. 120-121.
- (17) Ibid., pág. 118.
- (18) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Orientación Internacional de España (Madrid 1910), págs. 85-86.
- (19) Ibid., págs. 86-88.
- (20) Ibid., pág. 89.
- (21) Ibid., págs. 115-116.

(22) Ibid., págs. 118 y 121.

(23) Ibid., pág. 149.

(24) Ibid., pág. 13.

2) RAFAEL MARIA DE LABRA, APUNTE BIOGRAFICO.

Don Rafael María de Labra y Cadrana nació en La Habana a fines de 1840 y murió en Madrid en 1918. Su padre, el Brigadier don Ramón María de Labra, asturiano de familia y de nacimiento (hijo de labradores acomodados, nació en Cangas de Onís el 1 de Febrero de 1788), inició estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo, que abandonó para servir como militar del ejército español en la Guerra de la Independencia. Alistado en los primeros momentos, como voluntario, en el ejército asturiano de defensa, fue nombrado Sargento 1º el 28 de Mayo de 1808, adquirió el empleo de Capitán en 1812 y combatió en Asturias, en Galicia, en León, en Castilla y en Cataluña.

Doceañista entusiasta y Comandante de tropas ligeras en 1820, el padre de Labra estuvo preso durante seis meses por sus ideas liberales en el castillo de San Sebastián de Cádiz. Fugado de este lugar, participó en el alzamiento de Riego y defendió después, como jefe, la plaza de Pamplona contra los "Cien Mil Hijos de San Luis", por cuya acción ganó la Cruz de San Fernando. Emigrado a Inglaterra en 1823, vivió allí durante once años y regresó a España en 1834. En Febrero de 1836 marchó a Cuba como Coronel del Regimiento de Galicia con sede en La Habana. Allí contrajo matrimonio con doña Rafaela González Cadrana, nacida en Gijón, e hija del Subintendente de Cuba don Ignacio González Cadrana. En 1843 ascendió a Brigadier y fue encargado del Gobierno civil y militar de Cienfuegos. Regresó a España en 1849 y fue nombrado al año siguiente Comandante General de Almería, lugar en el que estuvo hasta 1851. A partir de esa fecha se estableció, como General de Brigada en la reserva, en Madrid, en donde murió el 8 de Mayo de 1870 (1).

Inserto en este ambiente familiar, Rafael María de

Labra llegó a España con apenas nueve años y vivió en Cádiz y después en Madrid. Desde muy niño demostró un talento precoz, de tal forma que a los cinco años leía con soltura, a los nueve redactaba un periódico, cuyos ejemplares autógrafos repartía entre sus amigos y a los trece hacía peroratas políticas, por las que estuvo a punto de ser expulsado del colegio. En un principio vaciló entre estudiar Ingeniería o Abogacía, pero se decidió por esta última, cuya carrera cursó, junto con la de Filosofía y Letras y la de Derecho Administrativo, en la Universidad de Madrid, con las máximas calificaciones, hasta graduarse de abogado en 1860. Al tiempo que realizaba sus estudios, se inició también en la preparación de sus actividades políticas, en las que destacó por su lucha en favor de los intereses antillanos. A los diecinueve años recibió el premio a la elocuencia en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de manos de don Salustiano de Olózaga. Desde siempre se distinguió por sus cualidades de orador, perfeccionadas en el Ateneo de Madrid, donde recibió lecciones de oratoria de Alcalá Galiano, y por sus conocimientos y aptitudes polifacéticas. Conocía varios idiomas, montaba a caballo, tocaba el piano, estudió dibujo, destacó como espadachín y cultivó la floricultura y la arboricultura en una finca heredada de sus padres y cercana a Oviedo, la Quinta de Abuli. Fueron famosas las reuniones que celebraba los domingos en su casa de Madrid, a las que asistieron conocidos publicistas, artistas, políticos, catedráticos, banqueros, etc. Viajero incansable, efectuó largos recorridos por el extranjero, en especial por Francia, Inglaterra, Bélgica y Suiza (2).

En 1870, Labra explicó en el Ateneo de Madrid un curso sobre Política y Sistemas Coloniales. Publicadas en 1874, estas lecciones se reeditaron dos años después, ampliadas y refundidas, bajo el título de La Colonización en la Historia, y en ellas aplicaba un criterio democrático en el tratamiento de la cuestión

colonial. Por aquella época, preparó oposiciones a la Cátedra de Legislación Comparada de la Universidad Central, pero no se presentó al hacerlo su amigo don Gumersindo de Azcárate. Poco después, Moret creó tres cátedras más (Historia de la Colonización Inglesa en Asia y Oceanía, Historia y Civilización de las Islas Filipinas, y Lengua Tagala) y Labra obtuvo el primer lugar, en terna con Maldonado Macanaz y con Valle, para la de Historia de la Colonización, puesto que no pudo ocupar al ser vetado por el Ministro López de Ayala con motivo de sus opiniones políticas (3).

Labra fue uno de los organizadores del Congreso Jurídico Ibero-Americano, celebrado en Madrid en Octubre y Noviembre de 1892 para conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de América, y trabajó también en la preparación de un Congreso Pedagógico, que se celebró aquel mismo año. Celoso defensor de los intereses de la enseñanza, colaboró en la ley que incorporó los Institutos de Segunda Enseñanza al Estado en el año 1877, y fruto de su labor en este campo, en 1904 el Real Consejo de Instrucción Pública, de acuerdo con el Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras y como rectificación por su bloqueo de antaño, cuando ganó la Cátedra de Historia de la Colonización de la Universidad Central, le nombró profesor de Historia de América, cargo al que renunció, ya que, como dijo, "no entraba de favor en la Universidad" (4).

Especialmente desde 1904 se convirtió en un portavoz de los españoles de América, siendo elegido representante en España de la mayoría de los principales Centros españoles en aquel continente (Casino Español y Centro Asturiano de La Habana; Federación de los Centros Españoles de la Isla de Cuba; Centro Español de Panamá; Sociedad Patriótica Española de Buenos Aires; Centro Español de Santiago de Chile; Centro Asturiano de Tampa,

etc.). Asimismo, destacó como miembro del Ateneo de Madrid, institución en la que ingresó con el número 1.769 el 15 de Noviembre de 1857. Elegido Secretario 2º de la Sección de Ciencias Morales y Políticas en Junta de 21 de Septiembre de 1863, fue proclamado socio de mérito en Julio de 1894 y desempeñó una Cátedra en la Escuela de Estudios Superiores, en la que explicó Historia de las Relaciones Internacionales de España, durante los cursos de 1896-97 y 1897-98. Presidente de la Sección de Ciencias Históricas desde el 3 de Junio de 1904, fue reelegido para este puesto entre 1905 y 1911 y alcanzó la Presidencia de la Junta de Gobierno de aquella entidad en sesión de 19 de Febrero de 1913, cargo que ocupó hasta su muerte.

Alternó Labra su labor de conferenciante, de publicista, de articulista de periódicos y de propagandista con su actividad como abogado, como orador y como literato. Casi toda su producción mantuvo un tono de oratoria y de conferencia, dada la manera misma de hacer sus libros, muchos de los cuales fueron lecciones tomadas taquigráficamente o dictadas a intervalos entre otros quehaceres. Sus obras, presentadas en repetidas ediciones, ampliadas y corregidas, bajo forma de conferencias, de libros o de folletos y repartidas por él mismo, se estructuraron fundamentalmente en torno a tres ideas: la reforma colonial en su doble aspecto de abolición de la esclavitud y de establecimiento de la autonomía en las Antillas; los problemas de la educación y de la Instrucción Pública y las cuestiones referentes a la personalidad internacional de España. Durante toda su vida don Rafael María de Labra presentó una gran elevación de espíritu, olvidándose del interés personal, y mantuvo una gran unidad de criterio, desde su primer discurso en el Congreso en 1871, hasta su última intervención en el Senado en 1916 (5).

A lo largo de su vida, Labra escribió centenares de

artículos y folletos, así como numerosas obras sobre materias jurídicas, históricas y literarias en defensa de sus ideales políticos, sociales y económicos. Al fallecer, en 1918, era Senador electo por la Sociedad Económica de León; Consejero de Instrucción Pública; miembro de la Comisión de Códigos; del Consejo Penitenciario; del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya; del Instituto de Derecho Internacional, y Presidente del Ateneo de Madrid (6).

Desde el punto de vista de la temática, la actividad desarrollada por Labra puede organizarse en torno a cinco aspectos, que recogen convenientemente las distintas facetas a que se dedicó en el transcurso de su vida: abogado, escritor, propagandista, parlamentario, y hombre político. Como abogado, abrió bufete en Madrid y practicó dos años en casa de Rivero Cidraque. En sus primeros tiempos vió mermada su actividad en la abogacía por sus opiniones políticas, pues fue tachado de separatista y de enemigo de la patria y no recibió apenas encargos de pleitos. A partir de la Restauración mejoró su situación en este aspecto y llegó a ser un afamado abogado de Madrid.

Como escritor, Labra cultivó gran variedad de géneros. Colaboró como articulista en un gran número de periódicos, escribiendo sobre temas políticos, literarios, científicos, etc. Así, en 1858 redactó uno de sus primeros artículos, publicado en "La Discusión" de Madrid, en defensa de los intereses antillanos, aunque fue a partir de 1860, cuando empezó a ser conocido como orador y como periodista y a colaborar asiduamente en revistas y en periódicos de España y del extranjero. Entre otros conocieron su firma "La Democracia", de Castelar; "La Discusión", de Rivero; "El Pueblo", de Ariño; "Las Cortes", de Alvarez Osorio; "El Universal", de Asquerino; "La Unión", de Sánchez Pérez; "El

Tribuno", de Ariño; "El Voto Nacional", de Figueras; "El Liberal", de Araus y, sobre todo, "La Tribuna", bajo su dirección de 1880 a 1882 y en donde escribió casi a diario. Realizó trabajos sobre política exterior y sobre problemas contemporáneos en la "Revista Europea"; en la "Revista Contemporánea"; en la "Revista de España"; en "La América"; en la "Revista Hispano-Americana", etc. Escribió sobre cuestiones jurídicas en "La Escuela del Derecho"; en la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia"; en la "Revista de los Tribunales", etc. e hizo, asimismo, crítica literaria de libros extranjeros y españoles; artículos humorísticos; estudios sobre esgrima; artículos de viaje; estudios biográficos y obras generales de índole política y jurídica.

Entre los libros y folletos escritos sobre estas materias cabe destacar: El Ateneo de Madrid; Portugal y sus Códigos; De Madrid a Oviedo; Gijón: una Villa del Cantábrico; Los Diputados Americanos en las Cortes Españolas de 1872 a 1873; Estudios de Derecho Internacional Novísimo; Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz; Discursos Políticos, Académicos y Forenses; La Cuestión de Puerto Rico; Política y Sistemas Coloniales; La Colonización en la Historia; La Cuestión Colonial; La Cuestión de Ultramar; Las Armas en Madrid; Las Cortes de Cádiz; Introducción a un Curso de Historia Política Contemporánea; La Cuestión Colonial Española en 1869; La Revolución Norte-Americana del Siglo XVIII; Programa Razonado de un Curso de Historia del Derecho Internacional Público; La Mujer Española y la Legislación Castellana; De la Representación e Influencia de los Estados Unidos de América en el Derecho Internacional; Un Aspecto de la Cuestión de Oriente; El Tratado de Berlín; Turquía y el Tratado de París; El Derecho de Gentes y la Cuestión Colonial; La Libertad de Imprenta en Italia, Bélgica e Inglaterra; La Pérdida de las Américas; Puerto Rico en 1885; La Situación de Cuba en

1884; Mi Campaña en las Cortes Españolas de 1881-1883; Don José María de Orense, Marqués de Albaida; Gladstone; Lincoln; Tonusaint L'Ouverture; El Marqués de Pombal; El Marqués de la Sonora y la Reforma Colonial; La Constitución Española de 1812, etc. (7).

Dentro de esta faceta, tuvo especial importancia la dedicación de Labra a los temas de la aproximación hispanoamericana, elemento que formaba parte de un todo más amplio en el conjunto de la política internacional española, expuesto en obras tales como: La Orientación Internacional de España; El Derecho Internacional en España; Estudios de Derecho Público; El Instituto de Derecho Internacional de Gante; El Movimiento Político Contemporáneo y los Grandes Conciertos Internacionales; Historia de las Relaciones Exteriores de España; La Orientación Internacional Americana de España; La Intimidad Ibero-Americana; La Personalidad Internacional de España; El Problema Hispano-Americano; La Emigración; Programa de la Futura Campaña Hispano-Americana; Las Cortes de 1812 y sus Leyes Americanistas, etc.

Como propagandista, Labra desarrolló una gran actividad a través de libros, folletos, periódicos y, sobre todo, conferencias, en las cuales abordó multitud de temas tales como la libertad en sus diversas vertientes, la emancipación del esclavo, de la mujer y del obrero, la difusión de la enseñanza, la reforma penitenciaria y la reforma colonial. A su vez, dicha actividad se canalizó, fundamentalmente, en torno a tres asociaciones madrileñas: La Sociedad Abolicionista Española, de la que fue Presidente muchos años y que preparó la obra de la emancipación de los negros; El Fomento de las Artes, dedicado a mejorar y a instruir a las clases obreras, y La Institución Libre de Enseñanza, establecimiento docente, centro de iniciativas

pedagógicas y motor de las reformas de Instrucción Pública.

La Sociedad Abolicionista Española, como centro de los esfuerzos abolicionistas, fue fundada en Madrid en 1864 por los señores Orense, Olózaga, Rodríguez, Sanromá, Bona y otros, a iniciativa de Julio Vizcarrondo. Suspendida en 1866, reapareció en 1868, siendo Labra uno de sus elementos fundadores y el redactor de los manifiestos, circulares y documentos suscritos por la Junta Directiva y de la mayoría de los folletos publicados a partir de la segunda etapa. Presidente de su Comité Ejecutivo de 1869 a 1876, a partir de esa fecha ocupó la Presidencia de la Sociedad hasta 1888, año en el que, tras haber obtenido pleno éxito en sus propósitos, la mencionada institución cesó en sus actividades. Redactor casi exclusivo de "El Abolicionista" y organizador de mítines y de banquetes en favor de la abolición, inspiró la fórmula de la Junta Revolucionaria de Madrid de 1868 en este tema, dirigió la campaña abolicionista de las Cortes de 1872 y apadrinó materialmente la Ley de 22 de Marzo de 1873, que estableció la abolición inmediata de la esclavitud en Puerto Rico, y el artículo adicional de los presupuestos de Cuba para 1886-1887, que abolió el Patronato.

Realmente, uno de los empeños fundamentales de su vida fue la campaña abolicionista, que enlazaba con el espíritu cristiano que había informado las normas de la colonización de España en América y por el que tuvo que enfrentarse a una serie de intereses creados. Su labor en pro de la abolición quedó compendiada, en buena parte, en el discurso pronunciado en el mitin celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid el 9 de Diciembre de 1881 y en los libros La Abolición de la Esclavitud en las Antillas Españolas. (Contestación a Saco y a Cochín) y La Abolición de la Esclavitud en el Orden Económico. Además,

escribió numerosos folletos sobre esta materia, entre los que destacan: La Emancipación de los Esclavos en los Estados Unidos; El Artículo 5º de la Ley Preparatoria de 1870; La Catástrofe de Santo Domingo; La Abolición en Puerto Rico; La Abolición de los Negros en Puerto Rico; La Experiencia Abolicionista en Puerto Rico; La Cuestión Social en Cuba; La Abolición en Inglaterra; Los Códigos Negros; La Brutalidad de los Negros; la Abolición y la Sociedad Abolicionista Española en 1873; El Cepo y el Grillete, etc.

Presidente del Fomento de las Artes por tres veces y Catedrático de mérito de dicha institución, Labra reorganizó la Enseñanza Primaria y la de las Artes; preparó conferencias científicas, en las que invitó a catedráticos y oradores; abrió debates sobre la situación de la clase obrera; estableció contactos con entidades análogas peninsulares y solicitó la representación de ellas en el Senado. En este orden de cosas, fue uno de los fundadores de la Liga contra la ignorancia y defendió la Instrucción Pública como recurso político y como elemento democrático y la libertad de la Enseñanza Estatal. Catedrático de Derecho Civil, de Derecho Internacional Público y de Historia Política Contemporánea en La Institución Libre de Enseñanza, fue tres veces Rector y dos Vicerrector de dicha entidad (8).

Tampoco fue escasa su actividad como parlamentario, aspecto en el que descolló ampliamente. La Revolución de Septiembre de 1868 le abrió un ancho campo en la vida pública, en la que puso toda su actividad al servicio de los intereses de Cuba y de Puerto Rico y, sobre todo, de la causa de la abolición de la esclavitud y de la autonomía colonial, así como de la extensión a Ultramar de todos los derechos políticos y civiles de los españoles de la Península. Diputado en 1871, en las

Legislaturas de 1872, en la Asamblea de 1873 y en las Cortes Constituyentes del mismo año, se presentó primeramente por el distrito de Infiesto (Asturias), luego por el de Sabana Grande (Puerto Rico) en cuatro ocasiones y por primera vez por el de su ciudad natal en 1879. Su elección como Diputado por Infiesto, sin el apoyo de ningún partido político, le permitió actuar en el Congreso con independencia y con libertad, como haría siempre. Fue, precisamente, con su discurso defendiendo una enmienda al proyecto de Contestación al Discurso de la Corona en Mayo de 1871, con el que inició su vida parlamentaria y su actuación en pro de la abolición de la esclavitud y de la cuestión colonial, lo cual supuso una protesta contra la arbitrariedad imperante en Ultramar y un alegato en favor de la conclusión de la guerra (9).

Realmente, el discurso de 1871 fue la primera protesta eficaz que se produjo desde 1837 en el seno de las Cortes españolas contra los aplazamientos sin término de las reformas ultramarinas; contra la propensión del Parlamento a no discutir, por miedo, las cuestiones coloniales y contra la tendencia de la mayoría de los políticos a invocar el interés nacional para seguir manteniendo el "statu quo" colonial, revestido de dictadura, de burocracia, de división de clases, de esclavitud y de explotación económica (10).

Ante el éxito obtenido en las Cortes de 1871, Labra fue invitado por los puertorriqueños a ser su representante por el distrito de Sabana Grande. Labra aceptó el ofrecimiento, y dada la carencia de representantes de Cuba y su afinidad con los problemas de Puerto Rico, ostentó aquella representación, junto con la de La Habana, a partir de 1875. De esta forma, el programa del Partido Reformista Puertorriqueño, cuyos antecedentes se encontraban en los informes que los representantes de los

Ayuntamientos de Puerto Rico habían dado a la Junta de Información, reunida en Madrid en 1866, por convocatoria del entonces Ministro de Ultramar Cánovas del Castillo, fue asumido y defendido por Labra. Dicho programa, en el que se resumían las aspiraciones puertorriqueñas, contenía los siguientes puntos: identidad de derechos políticos y civiles de peninsulares y antillanos; abolición inmediata y simultánea de la esclavitud; ampliación de la vida municipal y de las facultades de la Diputación Provincial; reforma arancelaria tendente a asegurar el mercado peninsular a los productos puertorriqueños y a facilitar el trato mercantil con los pueblos de América; organización de los Tribunales sobre la base de la autoridad del Tribunal Supremo y de la promulgación en Ultramar de los Códigos Penal y Procesal, y supresión de las facultades "omnímodas" de los Capitanes Generales, de la centralización administrativa y de la diferencia de derecho electoral, según que el elector fuese peninsular o criollo. Convertido, así, en Diputado reformista por Puerto Rico, poco tiempo después, pasó a ser jefe de dicho grupo y dirigió sus trabajos durante el período de 1872-1873, lo que le granjeó gran número de enemistades entre los partidarios de la represión y de la esclavitud en las provincias de Ultramar, aunque logró ver impuesta la reforma colonial en la Pequeña Antilla al producirse la abolición inmediata de la esclavitud y el planteamiento incondicional de los derechos individuales, reconocidos por la Revolución del 68 (11).

A partir de 1879, momento en el que fueron admitidos en el Parlamento los diputados cubanos, Labra realizó fundamentalmente dos acciones: el ataque al sistema asimilista (mantenimiento del "statu quo" con cierto aire reformista) y la organización de la isla desde el punto de vista de su exclusiva competencia. Como consecuencia de ello, tras plantear en 1880 el

problema ultramarino, el propio Jefe del Gobierno, Cánovas del Castillo, reconoció en la Legislatura de 1884 la validez de la doctrina autonomista, convencimiento al que también llegaron los liberales en 1885 y que supuso, entre otras cosas, la abolición del Patronato en 1886, forma de servidumbre disfrazada, mantenida por la Ley de 13 de Febrero de 1880 (12).

Como político, en los años del período revolucionario comprendido entre 1868 y 1874, Labra se afilió al Partido Radical, el más avanzado de los que apoyaron a Amadeo I, y se mantuvo a la izquierda del grupo. Una vez establecida la I República el 11 de Febrero de 1873, dió a ésta su voto favorable y se comprometió a defender en adelante la causa republicana, desde la que mantuvo los derechos individuales y la soberanía nacional. Al producirse el enfrentamiento entre republicanos y radicales, formó parte del grupo conciliador y combatió el cantonalismo. Tras la caída de la República, trabajó por la reorganización del Partido Republicano, consagrándose al trabajo en el foro, a la publicación de libros y a la propaganda científica durante las primeras Cortes de la Restauración, en las que no quiso participar por expreso deseo personal.

Más tarde, fraguada ya la Restauración, Labra se dedicó a fomentar la inteligencia entre radicales y republicanos, defendiendo sus ideas en pro de una República democrática, en "El Pueblo", de Ariño, y en "La Unión", de Sánchez Pérez. En función de este pensamiento, figuró como uno de los fundadores de la Unión Democrática, plasmada en el Manifiesto de 19 de Abril de 1879, que defendía: la unión de todos los republicanos sobre las bases del Título I de la Constitución de 1869, de las Cortes Constituyentes y de la República; la acción unánime y directa para el fin común y el aplazamiento de los trabajos particulares

de partido para después de establecida la República. Inspirador directo de "El Tribuno", se abstuvo de tomar parte en las luchas de grupo, figurando como republicano independiente. Entre 1881 y 1882 dirigió "La Tribuna", en la que defendió la Unión Republicana, y a la muerte de Figueras se le propuso la dirección del partido, aunque declinó aceptar tal ofrecimiento. Trabajó, asimismo, en la formación del Centro Republicano en 1885 (intento de fusión de partidos y de grupos sobre los supuestos de la Constitución del 69 y de la autonomía municipal, regional y colonial), que defendió desde las páginas de "El Progreso" (13).

Empeñado durante toda su vida en la lucha por conseguir las reformas ultramarinas, Labra conservó, como ya se ha dicho, su independencia personal en política, negándose, hasta 1890, a ingresar en un partido político peninsular determinado y prefiriendo ser en España y en el Parlamento el más genuino representante del Partido Autonomista de Cuba y Puerto Rico. En aquel año, ingresó en el Partido Centralista Republicano, liderado por Nicolás Salmerón, cuya asamblea aceptó como propio el programa autonomista antillano, dentro del cual defendió siempre la autonomía colonial y la completa libertad de las Antillas en el marco de la unidad nacional. Consecuencia de su mantenida acción política fue su elección, en la última etapa de su vida, como Senador por las Sociedades Económicas de Amigos del País del Norte y del Noroeste de España, por unanimidad de los partidos políticos (14).

Don Rafael María de Labra fue una de las mentes más claras de la España contemporánea, cuya labor, llena de copiosos frutos, se plasmó, como ya se ha indicado, en una gran cantidad de obras científicas y literarias. El juicio que merecieron, ya al final de su vida, su labor y su persona, puede resumirse en las siguientes palabras: "El señor Labra ostenta la hermosura de

la ancianidad serena con su luenga barba blanca y con su cuerpo erguido, que no abaten los años. Es un viejo que está animado todavía por la fuerza del optimismo, llevando pródigo a los jóvenes, faltos de entusiasmo, ardor de acción con su palabra insinuante y con su ejemplo fecundo. Bien merece el señor Labra la simpatía que en todas partes despierta su nombre, particularmente en América, a la que ha consagrado los mayores esfuerzos de su inteligencia y los cariñosos ideales de su corazón" (15).

Ciertamente, Labra luchó sin tregua para conseguir la libertad de los esclavos y para lograr que España otorgase a las Antillas la posibilidad de un autogobierno propio, manteniendo la unidad del Estado. Con posterioridad, una vez consumado el Desastre, puso sus ojos en el porvenir, sin perder la esperanza en la raza hispánica, pensando constantemente en los países salidos de aquel crisol y trabajando sin cesar en favor del ideal hispanoamericano y de la identidad de intereses y de ideas con aquellas naciones. De esta forma, continuó viviendo, hasta el final, "en constante comunicación con los americanos españoles y con esos españoles de América llamados a cumplir una misión histórica y étnica, asegurando el predominio del alma ibérica en los destinos de la América latina" (16).

Por otra parte, Labra "fue uno de los hombres públicos españoles que no obtuvo el menor sueldo, ni la menor asignación en el curso de una vida pública iniciada en la primera juventud. No fue Ministro, por más que tuvo ocasión de serlo, ni Embajador en América, no habiendo otro que como él hubiese merecido desempeñar una Embajada en Ultramar para la que estaba preparado como nadie". Y "ante la avalancha pesimista, que cayó sobre el alma nacional, fue uno de los que se mantuvo en pie, fijos los

ojos esperanzados en el horizonte, iluminado por los resplandores futuros de la raza. En aquellos instantes aciagos comprendió vivamente el insigne pensador, que no había terminado, ni mucho menos, la misión histórica y providencial de España en América, sino que comenzaba una era más grande y definitiva". En última instancia, vió con claridad, "que había que sustituir los vínculos de dependencia por los lazos del afecto y del interés, forjados por el fuego de la sangre y del idioma" (17).

N O T A S.

- (1) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: D. Rafael María de Labra y la Política de España en América y Portugal (Madrid 1922), pág. 6 y SENDRAS BURIN, ANTONIO: D. Rafael María de Labra. Estudio Biográfico (Madrid 1887), pág. 5.
- (2) Ibid., pág. 7 e Ibid., págs. 5-8.
- (3) Ibid., págs. 8-9 e Ibid., pág. 8.
- (4) DOMINGUEZ ROLDAN, GUILLERMO: Rafael María de Labra (La Habana 1920), pág. 15.
- (5) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: Ob. cit., págs. 13-16; 19 y 26.
- (6) DOMINGUEZ ROLDAN, GUILLERMO: Ob. cit., pág. 10.
- (7) SENDRAS BURIN, ANTONIO: Ob. cit., págs. 8-15.
- (8) Ibid., págs 16-22.
- (9) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: Ob. cit., págs. 8-9 y SENDRAS BURIN, ANTONIO: Ob. cit., págs 40-42.
- (10) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Colonial y la Revolución Española de 1868 (Madrid 1915), págs. 87-88.
- (11) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: Ob. cit., págs. 9-11.
- (12) SENDRAS BURIN, ANTONIO: Ob.cit., págs. 24-27 y 43-44.
- (13) Ibid., págs. 59-64.
- (14) FIGUEROA Y TORREES, ALVARO DE: Ob. cit., pág. 13.
- (15) RAHOLA, FEDERICO: La Personalidad Internacional de España y el Señor Labra, "El Mercurio" (Barcelona), XII, núm. 153 (27-VI-1912), pág.193.
- (16) Ibid., pág. 193.
- (17) RAHOLA, FEDERICO: Don Rafael María de Labra: Un Gran Español y un Exímio Americanista, "El Mercurio" (Barcelona), XVIII, núm. 305 (25-IV-1918), págs. 97-99.

III) LABRA Y EL MUNDO ULTRAMARINO.

1) COLONIALISMO E HISTORIA COLONIAL ESPAÑOLA.

Realmente, fueron bastantes los españoles que se ocuparon de los temas coloniales en función de su formación intelectual y política o de sus propios intereses materiales, si bien considerados genericamente constituyeron una excepción en el seno de la sociedad. Por otra parte, se dió una especie de absentismo culto, reforzado tras el 98 por la idea de que todo estaba perdido y de que aquel acontecimiento suponía más que un punto de partida, el final de un largo proceso de decadencia, mientras que el pueblo, sólo llamado cuando se requería su esfuerzo militar o abocado a la emigración al objeto de paliar su mísera condición, vivió de espaldas al proceso colonial. Por último, junto a estos dos grupos cabía considerar el estamento de los administradores y de los militares coloniales, aferrados al sistema vigente y sin más preocupación por el problema que la derivada de su propia situación personal (1).

En última instancia, era preciso enmarcar estas líneas vitales y sociales, relacionadas, de una forma o de otra, con el colonialismo, dentro de la problemática histórica del siglo XIX español, plagada de contradicciones políticas, de inadaptaciones económicas y de desajustes sociales. Dentro de este contexto, el fenómeno colonial español entró en el siglo XIX en una profunda contradicción derivada de un planteamiento antagónico (España fue a lo largo de la centuria una potencia colonial, aunque de segunda fila, si bien no tuvo los medios para aplicar de forma eficiente las prácticas coloniales desarrolladas por las grandes potencias imperialistas del momento) (2).

Precisamente, esta situación creó una especie de

complejo de frustración, a escala nacional, que modificó sustancialmente las líneas directrices de la labor civilizadora española, atrapada, de este modo, por el sentido utilitario del moderno concepto colonial, lo que desenfocó la visión de las cuestiones e impidió la adopción de medidas políticas acordes con el tiempo. Ahora, el término colonia pasó a ser sinónimo de beneficio y de riqueza, contrastando con la antigua visión, según la cual la acción colonizadora española se caracterizaba por el rasgo misional, secundado por una política de asimilación y de fusión. Esta finalidad de la colonización había sido aceptada por la sociedad española, que además se había identificado con aquella misión, tal como expuso un especialista en el tema al definir la colonia como una "nueva comunidad, que una Nación fundaba en países lejanos, de conformidad con la ley, que disponía la posesión y el dominio del Globo por la Humanidad" (3).

Sin embargo, una fuerte corriente crítica al hilo de las nuevas directrices, basadas en el módulo del máximo rendimiento, puso en tela de juicio la labor realizada a lo largo de siglos, planteándose entonces el tema de las oportunidades perdidas e imponiéndose la idea del capitalismo progresista, que trataba de integrarse rápidamente en la nueva situación extendida por toda Europa (4).

De esta forma, España intentó sumarse al movimiento de expansión entonces imperante, cuestionándose la forma de articular la incorporación al proceso colonial, para lo cual se hacía necesario conocer y dominar el nuevo concepto de colonia. En este sentido, era preciso saber que una colonia y una provincia eran cosas distintas; que en toda cuestión colonial estaba implícita una cuestión internacional; que se había rectificado la doctrina sobre la soberanía y sobre la

independencia de las naciones, y que no era factible vivir fuera del concierto mundial. Establecidas así las cosas, España quiso aprovecharse, aunque sólo fuera modestamente, del vigente capitalismo colonial, razón por la cual se abandonaron los antiguos y tradicionales valores, en que se había basado su labor colonizadora a lo largo de tres siglos (5).

De acuerdo con ello, el colonialismo pasó a ser sinónimo de monopolio de la producción y del consumo de sus posesiones en beneficio de la metrópoli, y de prohibición para los colonos de importar productos extranjeros y de cultivar lo que la metrópoli produjese. En función de estos supuestos, se extendió de forma paulatina el concepto de "Pacto Colonial", como eje y como motor de la acción colonizadora, idea esta que comportaba para la metrópoli el monopolio de las mercancías valiosas producidas por la colonia y el sometimiento de ésta a la necesidad de consumir los artículos de la metrópoli con la permisión de producir otros determinados. A ello se unía toda una serie de normas restrictivas, tales como exportar productos de la colonia a países distintos de la metrópoli, importar a la colonia productos procedentes de países extranjeros, transportar mercancías a las colonias y desde éstas en buques distintos de los metropolitanos y manufacturar, por parte de los colonos, sus propias materias primas. A cambio de esto, la metrópoli se comprometía, teóricamente, a no importar productos procedentes de otras colonias distintas a las suyas propias.

Así, pues, este vino a ser el planteamiento de lo que debía ser una colonia, según una concepción económica moderna, planteamiento que entró en un doble plano de contradicción, mediante el cual España mantuvo los conceptos retóricos de la igualdad de todos los españoles y de la consideración de las provincias ultramarinas como parte integrante de la nación, al

tiempo que aplicaba los modernos métodos de la explotación imperialista decimonónica sin contar con medios adecuados para ello (6).

Todo esto supuso una distorsión del problema y una inadecuación de estructuras, lo que unido a la situación internacional del momento, a los propios problemas internos y al lastre producido por el proceso emancipador de principios del siglo XIX, hizo inviable cualquier tipo de solución constructiva y eficaz, que hubiese posibilitado el desarrollo de la temática colonial, de forma gradual, hasta concluir en la autonomía y, quizás, en la independencia. De esta forma, quedó, pues, totalmente arrumbado el antiguo criterio colonizador, cuyo espíritu basado en la propaganda misional y en la reducción de los indios, que en un momento dado llegó incluso a paralizar la acción conquistadora, había quedado recogido en las Leyes de Indias (7).

Realmente, al colonialismo del siglo XIX no le interesó la tarea de la cristianización, ya que sus esfuerzos se dirigieron hacia la más eficaz utilización de las materias primas coloniales, de modo que mediante unos adecuados canales comerciales y de consumo produjesen el mayor enriquecimiento posible. Por otra parte, los criollos vieron sus aspiraciones económicas cercenadas y sus deseos políticos boicoteados por las sucesivas dilaciones, aplazamientos y ambigüedades que jalonaron el constitucionalismo español, unas veces recogiendo dichas aspiraciones de forma exclusivamente teórica, otras prescindiendo directamente de éstas. En cualquier caso, las condiciones de la propia economía metropolitana, derivación directa de la tardía y mal encauzada revolución industrial española, repercutió en el ámbito colonial de tal forma, que el Gobierno necesitó replantearse el sistema hasta entonces existente, si bien eran

muchas las estructuras a modificar, escasos los recursos, desfavorables las circunstancias internacionales y grandes las apetencias de los imperialismos sobre las posesiones hispanas. La empresa colonizadora había sido un proceso iniciado tiempo atrás por un generoso impulso, pero que en la actualidad se caracterizaba por la explotación. De esta forma, las colonias se convertían en una fuente de beneficios, para cuya explotación se hacía necesario perfeccionar los métodos de administración.

De acuerdo, pues, con esta nueva mentalidad la colonización se convirtió en una válvula de escape para la metrópoli, desde el punto de vista de la presión demográfica, de la sobreproducción agrícola e industrial y de la marginalidad social. Además, tal como explicitaba la doctrina sobre el tema, la colonización así entendida facilitaba la explotación de la tierra, la producción y el cambio de la riqueza, la división del trabajo entre las naciones, la educación de las razas indígenas y el equilibrio de las poblaciones (8).

Así, pues, si se afinaba la maquinaria administrativa, las colonias podían suponer el aumento de las relaciones comerciales e industriales, el desarrollo y la mejora de la Marina mercante y la ampliación de las operaciones bancarias, contribuyendo de esta manera a acrecentar el prestigio material y moral de la metrópoli, de acuerdo con la acción general civilizadora. El camino a seguir por la colonización española en el siglo XIX quedaba, pues, bien claro: asunción por el Estado del protagonismo directivo y explotación mercantil, mediante una administración eficaz, haciendo frente a las exigencias de la economía liberal imperante con la ayuda del capitalismo privado.

Según estos criterios, los métodos colonizadores empleados antaño se demostraban desfasados e inservibles para una

nueva época y era necesario introducir en el sistema reformas que permitieran "llevar a fondo la explotación torpemente iniciada", explotación que, dadas las características económicas de España, carente de industrialización adecuada, debía revestir la condición de agrícola, mediante la concesión de tierras o la venta de éstas al capital privado (9).

Sin embargo, fracasado el sistema de la colonización agrícola, a base de la cesión de tierras a los colonos que quisieran asentarse en las colonias, se imponía, si se quería obtener un dominio colonial próspero y una colonización floreciente, la participación del capital privado por medio de la creación de empresas explotadoras, dotadas de la autonomía necesaria hasta los límites que fuesen compatibles con la independencia nacional y con la integridad territorial, según los métodos practicados por otras naciones modernas, como Inglaterra y Holanda. De esta forma, como no se quería perder la situación de privilegio existente, se impuso la aplicación de un modelo evolucionado, que garantizara el mayor tiempo posible la conservación de lo que tarde o temprano se perdería, aunque la contradicción surgió de la carencia del desarrollo económico y social adecuado para la realización de tan vastos programas reformadores (10).

En materia de política colonial, podía decirse que se habían dado fundamentalmente dos sistemas: el asimilistas, seguido por los pueblos latinos, y el autonomista, desarrollado por los pueblos anglosajones. El primer sistema procuraba fundir los elementos políticos y sociales de la colonia y de la metrópoli y tendía a la dilatación de la nacionalidad por encima de las contradicciones físicas, de las diferencias de carácter y hasta de la oposición histórica, y para lograr su fin violentaba la individualidad local y recurría a la centralización. Asimismo,

llevaba a las colonias todas las instituciones de la metrópoli y traía a la capital de ésta la representación de aquéllas bajo un pie de estricta igualdad con el resto de las provincias que constituían la nación.

El segundo sistema partía de la necesidad de respetar la vida individual de la colonia, llevando a ella sólo el espíritu de la metrópoli y la tutela más o menos enérgica del poder central y tendía a armonizar los elementos políticos y sociales de unas y otras regiones. Este sistema, después de negar a las colonias el derecho de reformar las bases generales de la vida nacional, es decir, lo común a la colonia y a la metrópoli, les otorgaba, según su estado, la gestión de sus negocios y les autorizaba para crear Cámaras y con ellas un verdadero movimiento político, reservando a la Madre Pátria tan sólo el mando supremo (11).

Así, pues, de acuerdo con las modernas tendencias, el sistema asimilador no parecía el más adecuado, ya que no era compatible con el concepto de Estado que tenían casi todas las escuelas; con la significación y con el alcance que iba tomando la idea de la nacionalidad; con el desenvolvimiento que había logrado el comercio y que entrañaba las exigencias de su desarrollo; con la importancia que había adquirido el Derecho Internacional, ni con la naturaleza de las relaciones extrajurídicas que sostenían los pueblos contemporáneos.

Realmente, para el autonomismo la cuestión estribaba en reconocer a la colonia una vida propia sobre la unidad política, que constituía el carácter externo más acentuado de la nacionalidad, de modo que la colonia a la par que encarnación del mismo espíritu de la metrópoli y no indiferente a la suprema dirección de las cosas nacionales y al papel que ésta desempeñaba

en el concierto de los pueblos civilizados, pudiese adoptar las medidas que exigiese su situación particular.

En resumen, podía decirse que las escuelas políticas del momento se dividían en dos grupos. Una procuraba más las libertades que la libertad, defendía su logro desde el punto de vista de la conveniencia y tenía en cuenta, sobre todo, el estado y las condiciones históricas del pueblo a que se habían de conceder y de aplicar. La otra miraba más al individuo, se preocupaba, ante todo, del Derecho y se fijaba, según los matices, en las circunstancias históricas, si bien nunca llegaba a considerarlas más que para atenuar el rigor de los principios (12).

Ciertamente, la colonización moderna, tal como indicó Labra en el Congreso, revestía, por muchos motivos, un carácter de explotación, pero dicha acción era realizada de muy diversa forma por los distintos países colonizadores. En este sentido, Inglaterra se preocupaba casi exclusivamente de crear factorías, de proteger su navegación y su industria y de imponer tributos; en cambio, los pueblos ibéricos se ocupaban de la "reducción" y de la formación de sociedades; en una palabra, de la extensión de su carácter y de su vida, de sus leyes y de sus creencias a los nuevos países descubiertos o conquistados. Portugal lo había hecho por medio de una centralización estricta; España, mediante un método más expansivo, pero, en cualquier caso, sobre esto privaba en la actualidad el carácter mercantil. La diferencia estribaba en que en el caso anglosajón, este carácter revestía un valor exclusivo, mientras que en el ibérico "sólo dominaba como respondiendo a la ley del tiempo" (13).

Realmente, la existencia del Imperio colonial español, lejos de ser una contrariedad para la riqueza y para el progreso

nacionales, había constituido un elemento valioso, había respondido a una condición muy importante del carácter nacional y había servido para mantener un puesto en el concierto de las grandes naciones del mundo moderno.

Además, España había contraído una obligación con la sociedad colonial, a la que había traído al mundo culto y de cuyos pasos era responsable, mientras su vida interior no hubiese adquirido plena robustez y sus problemas característicos no se hubieran resuelto. Sin embargo, no se debía utilizar el sistema de la desconfianza ni los procedimientos de fuerza y no se podía aceptar la colonia desde el punto de vista de la explotación, "reducida a una mera factoría, a un puesto militar, a un cuartel o a una mina". En cualquier caso, no se podía conciliar el mantenimiento de la integridad nacional con la existencia de un sistema que negase al español que nacía en las provincias de Ultramar o que residía en ellas, los mismos derechos fundamentales reconocidos al español de la Península. En este sentido, "jamás, jamás, nuestros mayores, los hombres de las Leyes de Indias, los españoles de los siglos XVI y XVII habían apadrinado tales ideas. Unos mismos eran los derechos fundamentales en Madrid y en México y si aquellas leyes habían consagrado alguna diferencia, había sido en ventaja de los indios y de los colonos, pero sin afectar nunca al carácter esencial de la nacionalidad" (14).

Por otra parte, para determinar las condiciones de una verdadera política colonial española era necesario considerar dos cosas: en primer lugar, que era una colonia y, luego, tener en cuenta que eran las colonias españolas. En aquel momento, se valoraba la colonia como un punto estratégico para la Marina militar y mercante o como un mercado fácil y ventajoso para la producción de la metrópoli, concepto este que, aunque estrecho,

superaba al anterior en el tiempo, que reducía la colonia "a una finca explotable o a un puesto militar, a cuya sombra una Nación ambiciosa podía tener sojuzgados a los pueblos, que por la fuerza de las armas o con los recursos de cierta equívoca diplomacia había logrado reducir a la obediencia o por lo menos someter a su imperio". En cualquier caso, los resultados inmediatos de esta concepción eran la conquista, la explotación, el recelo, el egoísmo, la discriminación de las fuerzas vivas de un país, la ampliación de las atribuciones del Estado y la preocupación absorbente de los intereses materiales (15).

No obstante, era preciso subvertir este concepto profundamente materialista. Una colonia era ante todo una sociedad, por lo que sus individuos y sus instituciones debían reponder a un ideal humano. La colonia no era sólo un mercado, ni tenía una vida exclusivamente económica, ni sus individuos podían dejar de ser ciudadanos o sus Gobiernos revestir únicamente el carácter de una compañía comercial. De ello se deducía que la misión de las metrópolis en las colonias no era explotarlas ni oprimirlas, sino educarlas, por lo cual el vínculo de unión entre ambas no debía ser la fuerza, sino que tenía que existir en su lugar un nexo moral y político, dando al colono garantías para que como individuo y como ciudadano manejase sus propios negocios y asumiese toda la responsabilidad de su gestión y reservando a la metrópoli, dentro de ciertos límites y en ciertas condiciones, la dirección de aquellos intereses, que, aunque aparentemente apareciesen como coloniales, tenían una transcendencia decisiva en el orden general de la nación.

De acuerdo con este planteamiento, el fin de las colonias no era mantenerse eternamente unidas a las metrópolis por medio de vínculos puramente jurídicos, ni con el carácter de

provincias y menos aun de dependencias, sino que educadas y preparadas de forma adecuada, debían llegar a la vida independiente. Así, pues, la colonización no era un mero interés, ni una misión especial del Estado, sino una obra de expansión individual o social, en la que aquél no debía interferir en las corrientes migratorias, ni ocuparse de monopolios industriales y mercantiles o de expansiones desproporcionadas a sus fuerzas (16).

En orden a la comprensión doctrinal de los problemas de la colonización, debía tenerse en cuenta que en las colonias modernas se daban tres cuestiones, sin cuya consideración no era posible abordar ningún tipo de planteamiento: la cuestión de las razas, la cuestión del trabajo y la cuestión de la espontaneidad local, entrelazadas todas ellas con dos hechos de carácter puramente externo (la posición geográfica y la historia de la colonia propiamente dicha), sobre los que, además, obraba una última y compleja condición, referida al adelanto moral y material del país, es decir, a su cultura y a su riqueza (17).

Por otra parte, las cuestiones coloniales estaban insertas en el Derecho Público Internacional y afectaban al Derecho de Gentes, motivo por el cual era falso, según Labra, considerar que los problemas de la colonización podían resolverse desde la vida interior de los pueblos, teniendo en cuenta, además, que las colonias descubiertas y pobladas a base de sacrificios y de desvelos "no eran fincas de inmoral explotación", sino "sociedades con un destino propio y natural" (18).

En un principio la colonización española había consistido en llevar a los países ultramarinos el espíritu de la vida peninsular y con él sus instituciones fundamentales, pero

hora los Gobiernos habían renegado de esa "brillante tradición", por lo que tenían que enfrentarse con el problema de la reorganización general de la acción colonizadora (19). En cualquier caso, había que valorar el sentido que en la dinámica de los acontecimientos pudiera tener la idea de la separación, teniendo en cuenta que dicha idea no significaba lo mismo en una provincia que en una colonia. En la provincia "implicaba una subversión completa de todo principio jurídico, una negación absoluta del organismo primero y fundamental de la vida jurídica de los tiempos modernos, la nacionalidad". En las colonias, en cambio, tal como expuso el propio Labra, tenía otro valor, supuesto que no debía confundirse la colonia con la provincia, porque la Colonia tenía fin y destino propios, de acuerdo con la idea de separación, ya que las Colonias nacían, prosperaban y se educaban para la vida independiente, y, por tanto, todo sentido separatista era en rigor una anticipación" (20).

Realmente, las colonias que merecían el nombre de tales eran de dos clases: o comarcas pobladas por el esfuerzo de los colonizadores o pueblos atrasados, a quienes los colonizadores hacían entrar en la vida de la civilización. Tanto en un caso como en otro, era falso que una colonia fuese lo mismo que una provincia o que un departamento de la metrópoli y absurdo, "que la Colonia hubiese de estar sometida eternamente, con el carácter de una finca o de una mina, a la dirección o, mejor aun, a la administración de la Madre Patria". Por esta razón, y dado que una colonia era ante todo una sociedad, las legislaciones coloniales modernas favorecían el desarrollo de la vida propia, reduciendo la intervención de la Madre Patria, en los asuntos de aquellos países, a lo que estaba en relación con las funciones de tutela" (21).

Ciertamente, la colonización era uno de los modos de

exteriorización de un pueblo y en su iniciación y en su desarrollo obedecía a la ley general del progreso y a las condiciones históricas de la nación que la realizaba. Por eso, la colonización no podía considerarse un mero accidente, ni podía obedecer a fines de escasa importancia o a un hecho de mera casualidad, así como tampoco la colonia podía ser considerada una cosa extraña a la Madre Patria, ni "moverse fuera de las condiciones generales del progreso universal, sin otro destino, ni otro norte que servir mera y exclusivamente por siempre y para siempre los intereses de la Metrópoli" (22). Así, pues, una colonia no era un elemento extraño, sino una entidad dotada de personalidad, en la que confluían las últimas consecuencias del Derecho de Gentes y los últimos reflejos del Derecho Privado, opuestos a la política de la asimilación y contrarios a la táctica del olvido voluntario de las cuestiones ultramarinas (23).

No obstante, la marcha de los acontecimientos había producido una amplia evolución en el desarrollo de la empresa colonizadora, desde el período del Descubrimiento y de la Conquista hasta los tiempos actuales. Así, en un principio, la idea del descubridor no se sujetó a un plan seriamente ordenado, ocupando la reflexión un lugar muy secundario; después, sobre estos esfuerzos iniciales, vino la etapa de la organización, destinada a dar carácter de estabilidad a la empresa colonizadora y a dotar de leyes, de ordenanzas y de bases definitivas a la nueva sociedad para buscar en el presente la explotación de los productos coloniales por la metrópoli, la reserva del mercado colonial para sus productos, el monopolio del comercio y el favoritismo en la concesión de los empleos ultramarinos (24).

En general, podía decirse que a lo largo del siglo XIX los políticos españoles habían tenido un desconocimiento

importante no sólo de las condiciones físicas y morales de las provincias de Ultramar, sino de lo que para España representaba la posesión de aquellas tierras, de tal forma que se habían entregado a los informes y a los consejos de los que, inmersos en la centralización y en la burocracia, pensaban que nada era posible fuera de la tutela del Estado. Por esta razón, no se había comprendido en las altas esferas gubernamentales que al otro lado del Atlántico había verdaderos pueblos, que tenían aspiraciones y que querían derechos (25).

En virtud de sus propias características, la cuestión colonial se había convertido en un motivo para verificar el valor y la trascendencia de ciertas ideas generales en materia de política y de administración. De esta forma, era preciso considerar cómo se había entendido y realizado el fenómeno de la colonización en el transcurso de los tiempos y según la experiencia de los distintos países, para deducir así sus verdaderos principios y contrastarlos con las ideas en que descansaba la política de los pueblos civilizados. Realmente, en Ultramar tanto las cuestiones de índole económica como las de carácter político y social revestían unas características peculiares. Así, por ejemplo, en el orden económico la tutela del Estado, que hacía posible el régimen protector en el comercio, las trabas gremiales en las profesiones o las garantías administrativas de la sociedad mercantil se hacían incomprensibles en Ultramar, ya que allí todo se cifraba en el esfuerzo individual. Por su parte, los problemas políticos también aparecían dotados de características propias. Por ello, aparte de identificar la democracia con la libertad, era muy importante la organización de los poderes, dada la fuerza absorbente de la vida local y la consideración del problema de las nacionalidades tanto desde el punto de vista de las relaciones de las colonias con su metrópoli, como de cada una de

sus partes con el todo y entre sí. Por último, los problemas sociales tenían igualmente otra consideración, ya que no aparecían en Ultramar los tradicionales intereses de clase, que se daban en Europa, existiéndolo, además, diversidad de razas y oposición de civilizaciones (26).

Dentro de este contexto, las metrópolis estaban obligadas con respecto a sus colonias y tanto más comprometidas cuanto más difíciles y trascendentales eran los problemas que en ellas se daban. Pero, además, al lado de estos deberes estaban los que las metrópolis tenían, con motivo de las colonias, respecto del mundo civilizado y de la Humanidad, de tal forma que la metrópoli adquiría una gran importancia en el concierto de los pueblos cultos al hacer entrar en la vida libre a las colonias, trayéndolas al mundo de la civilización y contribuyendo al interés de la Humanidad y a la causa del progreso universal. En este sentido, las colonias españolas se encontraban en medio de sociedades nacidas a la civilización occidental gracias al esfuerzo de su metrópoli y en la actualidad, por la lógica de los acontecimientos, gravitaban sobre la antigua Madre Patria, destinada a llevar su representación ante Europa, lo cual le confería una consideración de primera categoría, ya que España todavía era "la segunda Nación colonizadora del Mundo Contemporáneo por la extensión de su territorio en el círculo de las Naciones civilizadas" (27).

En cualquier caso, la preocupación por los problemas coloniales debía ser ineludible, ya que constituía un elemento de vital importancia para el propio desarrollo de las metrópolis. Un análisis de la realidad indicaba que imperaba en aquellos momentos el concepto materialista de la colonia, dominada por los intereses económicos y por los criterios de consideración mezquinos y rastreros.

Ante esta situación se imponía, pues, un cambio en el modo de apreciar la naturaleza, el carácter y el sentido de la colonización. En este sentido, una factoría o un puesto militar nunca habían merecido el nombre de colonias, y jamás un pueblo verdaderamente colonizador, a excepción de momentos de extravío o de decadencia, había reducido su labor al exclusivo fin de la explotación, aunque era preciso tener presente que en toda empresa colonizadora siempre se daba, en cierto grado y en determinada medida, un objetivo económico (28).

Por otra parte, se hacía muy difícil admitir que los grandes hechos que marcaban un hito en la Historia y que servían al progreso universal obedeciesen tan sólo a miras torpes e interesadas y a impulsos egoístas, razón por la cual se debía protestar contra la existencia de estos conceptos materialistas en materia de colonización.

Realmente, una de las obras que entrañaba más responsabilidad y que requería más cuidados era la de la colonización, es decir, la labor de guiar y de organizar las sociedades creadas o traídas al mundo de la civilización por el esfuerzo de las metrópolis (29). En este sentido, España podía considerarse la primera nación colonizadora de los tiempos modernos, dado que desde el primer día de las exploraciones marítimas y de las empresas militares de América no sólo había dedicado a ellas una atención preferente, sino que lo había hecho con la intervención activa del Estado, representación genuína de la totalidad nacional, y con el propósito de no limitar su acción a la explotación de las comarcas descubiertas y de los pueblos subyugados, tratándolos como meras factorías, sino con el propósito de propagar las ideas políticas y religiosas, implantando en Ultramar las instituciones fundamentales de la sociedad europea e incluyendo en un mismo marco a indios y a españoles.

Desde este punto de vista, España había fundado nuevas sociedades con el mismo espíritu y con la misma sangre de la metrópoli, había dado la mano a pueblos extraños al movimiento general de la civilización, había prodigado en aquellos territorios esfuerzos y sacrificios y los había puesto a la altura de la consideración y del respeto de los pueblos cultos. España había llevado a América su carácter y su modo de vivir con elevación de miras, con un gran empuje y con un relativo desinterés, lo que hacía muy difícil encontrar un parangón entre las naciones que durante la misma época se habían comprometido en una empresa similar. Posiblemente, los medios colonizadores empleados por España no habían sido los mejores, considerados a la luz de los principios jurídicos y económicos de la Edad Contemporánea. Tal vez, la misma intervención del Estado en la obra colonizadora había perjudicado el pleno desarrollo de las provincias de Ultramar; quizás otros países con menos sacrificios habían conseguido mayores ventajas para las sociedades ultramarinas, pero, en cualquier caso, ahí estaba la labor realizada, digna del mejor encomio (30).

Realmente, la colonización era una obra de exteriorización; de difusión del espíritu, de las costumbres, de las leyes y de la riqueza; de propagación de la civilización y de desbordamiento del pasado en el porvenir, realizándose en épocas de plenitud y siendo propia de naciones capaces de representar algo en la Historia. De todas formas, era preciso tener presente que la obra colonizadora suponía la existencia de tres intereses, que se daban siempre, pero que se articulaban en un orden valorativo de distinta manera según las épocas: el interés económico o mercantil, el político o de dominación y el moral o de exteriorización. En este orden de cosas, parecía que lo más justo por parte de las metrópolis era el mantenimiento de una actitud alejada de la idea de explotación, ya que las colonias no

istían únicamente para el exclusivo provecho metropolitano, entendiéndose, además, entre los criollos el deseo de participar en la administración de los negocios coloniales (31).

Dentro de este contexto, se daban la asimilación y la autonomía. Ambas tenían en común la idea de la intervención de la metrópoli en los asuntos coloniales hasta el momento de terminar la formación, pero mientras que la asimilación confundía la colonia con la Madre Patria, la autonomía perseguía para aquélla la vida propia y relativamente distinta. Por otra parte, en el colonialismo se daban dos contradicciones: tener que establecer leyes y garantías especiales para la vida colonial y admitir a las colonias en la dirección política de la nación sin tener en cuenta sus peculiaridades, lo que suponía una fuente de recelos y desigualdades. En cambio, el régimen autonómico no implicaba cesiones prematuras, ya que las metrópolis tenían el deber de preparar nuevas agrupaciones sociales de carácter libre, verdaderamente autónomas, y de no consentir el desprendimiento de sociedades destinadas a vivir de manera imperfecta y a turbar el progreso de la Humanidad con sus pretensiones (32).

En cualquier caso, tal como indicó Labra en el progreso, la autonomía colonial englobaba dos conceptos: por una parte, la autonomía, que implicaba el gobierno de sí mismo, la gestión de las cosas particulares por el individuo, por la agrupación, por el pueblo y por la sociedad; por otra, la dependencia, que suponía una entidad necesitada de tutela, un territorio separado de la metrópoli por una distancia material y unas condiciones distintas a las de aquélla (33).

De esta forma, la colonización debía entenderse como el señalamiento de aquellos pueblos, que después de afirmar un carácter y definir una personalidad en el concierto de las sociedades

cultas, sentían la necesidad de desbordarse para difundir su espíritu y enriquecer su vida, logrando, así, unir el pasado con el futuro y llevar a nuevas tierras el resultado de sus experiencias, para que se engrandeciese el progreso y se ampliase la civilización, concretándose en "formas más capaces y en contenidos de mayor sustancia y fecundidad".

Por esta razón, la colonización no se daba en todos los períodos de la Historia ni se adecuaba a todos los pueblos, no debiendo ser considerada una empresa egoísta en la que sólo privaba el interés inmediato, ya que suponía una acción de alto valor moral, que sólo conseguían las naciones que tenían un destino en la Historia. En este sentido, la dilatación del espíritu y la difusión de las ideas constituían una necesidad y una misión para los pueblos directores del mundo, que se realizaba de distinta manera, según los casos concretos, pero que siempre estaba revestido de un interés moral superior, de un mismo fondo y de un mismo carácter (34).

Dentro del esquema colonizador, España había puesto todo su interés "en la gobernación de la Colonia y en la educación de los pueblos conquistados o reducidos", y en ese sentido la doctrina de la asimilación, si bien había sido aceptada por las Leyes de Indias, lo había sido únicamente para la raza autóctona, es decir, para los indios, pero nunca para los españoles, fuera cual fuese su origen. Ciertamente, en aquella legislación se habían fijado los medios de reducir y de educar a los indios, a fin de que a la larga se incorporaran a la "masa general de españoles, disfrutasen de todos los derechos y sufriesen todas las cargas de éstos". Sin embargo, por lo que respecta a los españoles, no se podía hablar mas que de identidad, motivo por el cual no admitir cualquier tipo de equivalencia entre españoles de uno y otro lado del Atlántico

suponía "renegar del criterio clásico de la tradición española en materia de Colonización".

Por otra parte, los dos criterios modernos por los cuales se regían las normas de la colonización mantenían que la colonia era una sociedad y que la obra colonizadora no entraba en los fines propios y directos del Estado, y ello implicaba que los criollos eran hombres lo mismo que los de la metrópoli, por lo que no se les podía negar "los derechos y las aspiraciones del ser nacional y político de las sociedades cultas de los tiempos modernos". Además, según las modernas teorías jurídicas, entre las funciones del Estado no se encontraba la fundación de colonias y mucho menos el dirigirlas o el administrarlas, de forma que la acción colonizadora, por su esencia, le correspondía a la acción individual y a la espontaneidad local, "a despecho de todo espíritu de centralización y fuera de todo interés mercantil del Estado" (35).

No obstante, tal como indicó el propio Labra, en el caso español había empezado, después de 1835, una verdadera falsificación de la tradición colonizadora de España, la cual jamás se había separado antes de las Leyes de Indias, ni aceptado la teoría de que hombres de una misma raza gozasen de derechos distintos. En este sentido, se había aplicado, hasta entonces, a las razas inferiores y a los indios la teoría de la asimilación a fin de irlos incorporando a la raza española (36). En cualquier caso, la autonomía colonial aparecía como la doctrina más coherente, dentro del orden de la colonización, al afirmar la identidad de derechos políticos y civiles entre los españoles de una y otra parte del Atlántico; el reparto de todas las cargas generales de la nación en proporción similar para unos y otros, y la intimidad de relaciones morales, políticas y económicas (37).

De todas formas, era preciso reconocer que la colonización española, considerada en su conjunto, había superado a todas las de su tiempo, por cuanto, si bien en su realización no se había librado del interés económico existente en todas las colonizaciones, por encima de éste, había señalado un rumbo y marcado unas pautas, que habían determinado la organización de unos pueblos que con el paso del tiempo habían llegado a alcanzar el nivel de naciones libres e independientes. Por eso, las Leyes de Indias tenían un valor trascendental, ya que no sólo resolvieron importantes problemas en el ámbito de la Historia del Derecho Público Internacional, sino que habían sido la base de los pueblos sudamericanos independientes (38).

Por otra parte, en materia de colonización había que establecer una serie de parámetros que sirvieran de referencia. En este sentido, era un absurdo pretender gobernar del mismo modo provincias y colonias, puesto que eran cosas distintas, y además había que armonizar el régimen colonial con el Derecho Público Internacional, dadas las implicaciones internacionales que comportaban dichos temas. De la misma forma y de acuerdo con las directrices modernas, una nación tenía que contar con el asentimiento de los demás pueblos cultos para realizar su labor colonizadora, al tiempo que debía valorar las condiciones de la civilización contemporánea y las bases fundamentales del Derecho Internacional (39).

Precisamente, dentro de ese contexto operaba la autonomía como solución a los problemas coloniales, ya que armonizaba con la tradición colonizadora española, que exigía la afirmación de la identidad de los derechos políticos y civiles y la consagración en las provincias de Ultramar de los derechos naturales del hombre, del mando superior civil y de una organización interna autonomista, que , en el grado y en el modo

que aconsejasen las circunstancias, introdujese la competencia local para los asuntos propiamente coloniales hasta llegar al máximo de descentralización compatible "con la integridad nacional y con la unidad del Estado" (40).

De cualquier forma, el sistema colonial español, basado en las Leyes de Indias, redactadas durante los siglos XVI y XVII, precisaba de una adecuación a los progresos posteriores del mundo contemporáneo y a sus exigencias, ya que el mero intento de introducir reformas sobre la base pura y simple del Código Indiano las hacía incompatibles con los supuestos económicos e internacionales del momento (41). Por esta razón, toda cuestión colonial no sólo implicaba un problema interior, dado el concepto del Derecho Colonial y las propias condiciones de la población de la colonia, sino que, como apostilló Labra, revestía aspectos relativos al ámbito externo (42).

Según algunos tratadistas, la colonización española había carecido de justicia y de un verdadero y sólido progreso, cuestión esta que debía desmentirse con rotundidad, ya que la labor colonizadora desarrollada por España desde fines del siglo XV hasta principios del XVIII había respondido a la idea general que sobre la materia había privado en aquella época y en la que precisamente España había llevado una considerable ventaja sobre los demás pueblos colonizadores de su tiempo, tanto en el modo de realizar dicha labor, como por el empuje, por la precisión y por el alcance de la acción en relación al bienestar y al progreso de los países colonizados.

Realmente, el principio determinante de la colonización moderna había sido interesado. Se había pretendido el aprovechamiento exclusivo, por parte de la metrópoli, de las riquezas de los países descubiertos y colonizados, pero, con ser

esto cierto, en este particular las leyes españolas no habían sido tan exageradas como las de otras metrópolis y, además, en el modo de organizar la explotación colonial habían superado a los demás pueblos colonizadores de la época por su regularidad y por el sentido orgánico de las instituciones que habían creado (43). Así, pues, la superioridad de la colonización española se había basado en las Leyes de la Recopilación de Indias, que contenían lo sustancial de tan complicada empresa, y todo esto era de gran importancia, si se tenían en cuenta la grandiosidad del propósito, la comprensión, extensión y generosidad de los preceptos legales, la época en la que se habían producido y lo que por aquel entonces habían hecho sobre el particular los demás Gobiernos europeos.

De esta forma, los fines capitales de la empresa colonizadora española habían sido la extensión de la civilización occidental a los nuevos países, la propaganda de la fe católica y la reducción de los indios al dominio de Castilla. De acuerdo con ello, toda la disposición del orden político y social de las Indias había descansado en el doble vínculo de la unidad jurídica de la metrópoli y de Ultramar, en lo fundamental, y de la diversidad en los intereses y en las circunstancias particulares de aquellas tierras. Así, en virtud de estos supuestos, la legislación indiana no había sancionado el principio de la asimilación de los españoles de aquellos países a los españoles de la metrópoli, ya que para aquel Código eran lo mismo los españoles de la Península que los de Ultramar; los asimilables habían sido los indios, respecto de los cuales se habían armonizado sus leyes y prácticas con el espíritu de las leyes españolas (44). Además, la acción colonizadora no sólo había sido objeto de la solicitud de reyes y de gobernantes, así como del interés de mercaderes y de exportadores, sino que había determinado también la atención de filósofos, jurisconsultos,

economistas, críticos y propagandistas, propugnadores, en general, de soluciones progresistas y de rectificaciones profundas en el régimen colonial imperante.

Realmente, la colonización revistió un carácter de seriedad, en el que España puso todo su esfuerzo, cuyas ideas fundamentales correspondieron a lo más alto del pensamiento y de la orientación de la época y cuyos efectos experimentó la metrópoli misma. En tal sentido, podía decirse que hasta muy entrado el siglo XIX para ninguna otra nación de la Edad Moderna habían representado sus colonias lo que las españolas para su metrópoli. Más tarde, se hicieron grandes esfuerzos tendentes a regenerar la vida política, económica y social a fin de contener la relajación del sistema ideado en el siglo XVI y de limpiarlo de los defectos que no parecían tales en los primeros momentos, pero que luego resultaron ser considerables como consecuencia del progreso de la civilización, del contraste y de las exigencias de los demás pueblos. No obstante, todas estas determinaciones, importantes en sí mismas, se estrellaron ante las dificultades surgidas a lo largo del siglo XIX. Con el paso del tiempo, el Gobierno español exageró la importancia del orden material y económico, sobreponiéndolo al orden moral de la colonización, y así abandonó el espíritu tradicional de ésta, precisamente cuando los progresos políticos de la metrópoli, los requerimientos del mundo contemporáneo y los progresos económicos de las propias provincias de Ultramar hacían inexcusable una reforma política en relación con los adelantos peninsulares en esta materia (45).

Realmente, España había sido grande cuando había identificado su causa y su representación con las corrientes jurídicas y culturales del momento, pero había iniciado su decadencia al apartarse de aquella representación, acentuándola a medida que se había empeñado en mantener unos ideales muertos no

acordes con los nuevos tiempos. En cualquier caso, la colonización tradicional había consagrado la preeminencia del poder civil y otorgado la dignidad, la libertad, la vida y la propiedad a los criollos, sancionando la identidad de derechos políticos y civiles de los españoles de la Península y de Ultramar y proclamando respecto de los indios la asimilación, es decir, la evolución constante y progresiva, mediante las instituciones metropolitanas, para convertirlos en verdaderos españoles, de acuerdo con los objetivos de la empresa colonizadora.

Por ello, si se hubiera mantenido el mismo elevado espíritu de la antigua colonización, pero acondicionándolo a las exigencias de los tiempos, se hubiese podido conseguir un resultado satisfactorio, que en ningún caso se hubiera obtenido por el mantenimiento de la intolerancia mercantil, del gobierno militar y de la centralización burocrática (46). Ciertamente, una de las grandes dificultades que aquejaron a la política ultramarina fue la tardanza con que se otorgaron las leyes, además de la falta de lógica con que frecuentemente se hicieron los reglamentos para la aplicación de aquéllas y del carácter poco satisfactorio, empleado por las autoridades españolas, en relación con el cumplimiento de los preceptos más expansivos.

Por otra parte, el mero retraso en la aplicación de una reforma determinada provocaba una auténtica exasperación y una considerable merma del necesario prestigio de los poderes públicos de la metrópoli, junto con el triste efecto que esto producía en el extranjero, más atento de lo que pudiera pensarse a las cuestiones coloniales españolas (47). En cualquier caso, dentro del planteamiento general de la acción colonizadora era necesario establecer una gradación, en orden al tratamiento de las colonias, relacionado con los distintos niveles alcanzados

por éstas. De esta forma, los pueblos que habían llegado a la "plenitud de la riqueza, del esplendor y de la conciencia de sus propias fuerzas" debían recibir la posibilidad del autogobierno, porque era lo propio y porque, si no se hacía así, se abría un abismo de incompresiones entre la colonia y la metrópoli. Del mismo modo, los que estaban en segundo, tercero o cuarto grado de progreso tenían que recibir esa libertad de movimientos, de una manera proporcionada, "hasta llegar a la plenitud de las franquicias y de las competencias locales". Por último, los que estaban en el grado inferior debían ser administrados por la metrópoli (48).

Aparte de estas cuestiones, podía decirse, por otro lado, que España no se había limitado, como otras metrópolis, a colonizar a América sin más, sino que había continuado contribuyendo activa y directamente al mantenimiento de sus antiguas provincias de Ultramar, aunque fuese de un modo distinto al del periodo colonial. En este sentido, España y la América española se habían compenetrado a lo largo de la Historia Moderna, produciéndose como consecuencia de esta compenetración una cierta aproximación moral, intelectual y aun política, situada por encima de las formadas jurídicas y de las apariencias oficiales. Por esta razón, podía afirmarse que los españoles habían hecho una colonización superior a la iniciada y desarrollada por otros países durante los siglos XVI y XVII. Así, pues, no se podía admitir la idea de que España había poseído las Indias para conservar allí el orden político y social de pueblos atrasados, constituídos en una perdurable inferioridad respecto de su metrópoli, y para explotarlas económicamente sin más consideración que el interés de los explotadores (49).

Sin embargo, lo que ocurrió fue que a partir de 1837 se puso a las colonias españolas, llamadas desde entonces provincias

de Ultramar, fuera del código político fundamental, con lo cual al cerrar las puertas de las Cortes a los representantes de América se quebrantó el principio básico de la unidad política de la acción española y la tradición colonial del país. Más tarde, cuando se legisló para Ultramar, se hizo con enormes deficiencias y con un criterio centralizador lleno de desigualdades y de privilegios, totalmente opuestos a la unidad política de España y al principio fundamental de la igualdad jurídica. En este orden de cosas, resultó altamente perjudicial para la Historia Colonial española el hecho de identificar como separatista todo lo que contrariase al "statu quo" existente, lo cual rebajó el prestigio y la acción de los reformistas, de tal forma que, aunque con el paso del tiempo se hicieron reformas, cuya valía no podía negarse, casi todas se quedaron fuera del criterio de la libertad democrática y de la igualdad de derechos de peninsulares y de antillanos (50).

No obstante, había que reconocer que el viejo sistema colonial había basado buena parte de sus supuestos en la explotación mercantil. De esta forma, "el extranjero fue objeto de una exclusión absoluta, el mercado indiano se reservó a la producción y al comercio de la Metrópoli y el Gobierno de ésta intervino en el comercio y aun en la producción colonial por medio de reglamentos, que se supusieron protectores, y a cambio de una parte de los productos y de impuestos excepcionales, que compensaron con creces los sacrificios del Estado protector". Sin embargo, a pesar de esta vertiente económica, siempre presente en todo proceso colonizador, la economía y la disposición del orden político y social de las Indias españolas había descansado en el doble principio de la unidad jurídica en lo fundamental y de la especialidad en lo particular (51).

Por otra parte, había que valorar el cambio operado en

el ámbito de la explotación económica antillana, lo cual suponía una modificación de los esquemas hasta entonces en vigor. La competencia en materia de producción colonial era grande, y ello, unido a la sustitución del trabajo esclavo por el libre, a la lentitud con que se había efectuado la inmigración blanca y a la necesidad de cambiar la antigua maquinaria y de modificar los viejos procedimientos agrícolas e industriales, había colocado en graves dificultades al hacendado y al productor antillanos. Todo ello comportaba, pues, un mundo de problemas, entre los cuales estaban los relativos al coste de la mano de obra, a los impuestos, al gasto público, a la facilidad de la inmigración, a la tasa de los jornales, a la baratura de la vida y a las relaciones mercantiles con los pueblos de América y de Europa, de donde las Antillas sacaban sus principales elementos de existencia y de producción y donde colocaban la mayor parte de sus productos (52).

En otro orden de cosas, estaba el tema del desenlace final del proceso colonizador, en el que se contemplaba la emancipación como fin natural y obligado, aunque se valoraba la posibilidad de la solución autonomista, como un medio de retrasar aun de evitar la separación. Realmente, la tradición colonizadora española se había opuesto a la diferencia de los españoles por razón de su origen aunque después la adhesión de las provincias de Ultramar había estado en relación directa con reformas de los Gobiernos, produciéndose las grandes perturbaciones coloniales como consecuencia de la defraudación de las esperanzas. En última instancia, se debía buscar la armonía con las últimas conquistas y afirmaciones del Derecho Colonial, para lo que se precisaba la prudencia y la sinceridad de los Gobiernos, la reflexión, el patriotismo y el desinterés, unido a la energía de los antillanos, que debían poner toda su confianza en la opinión pública para interesarla "por una gestión

intencionada y perseverante, inspirada en los grandes ejemplos de la política moderna y de la propaganda contemporánea" (53). Como dijeron los hombres de Cádiz, las provincias de Ultramar no eran factorías como las de las demás naciones, y tal como se reflejaba en las Leyes de Indias y en el pensamiento de los colonizadores españoles nunca se había concebido la colonización "como una empresa local, egoísta, mercantil, de explotación exclusiva y de dominación absoluta".

Ciertamente, los fines capitales declarados por el Estado español en la obra colonizadora, que jamás abandonó la dirección de la empresa al mero interés individual, habían sido la difusión de la idea católica, la aplicación de las leyes españolas peninsulares, la extensión del Imperio de España con fines educativos y civilizadores y la participación de los pueblos descubiertos, reducidos o conquistados en la labor común, en función de su formación como sociedades y con vistas al progreso de la civilización.

De esta forma, España se había preocupado de crear sociedades al otro lado del Atlántico y de llevar al Nuevo Mundo, por encima de cualquier otra cosa, el espíritu, las costumbres y las características de la familia hispánica. Sin duda, contó, de acuerdo con las ideas de la época, el interés económico, pero ni esa idea ni ese propósito habían sido los únicos, ni aun los dominantes, y cuando realmente se impusieron, entonces empezó la decadencia de la colonización española (54).

N O T A S.

- (1) Para una visión general del problema véase, MESA, ROBERTO: La Idea Colonial en España (Valencia 1976).
- (2) Estas y otras cuestiones pueden verse en JOVER ZAMORA, JOSE MARIA: 1898. Teoría y Práctica de la Redistribución Colonial (Madrid 1979).
- (3) MALDONADO MACANAZ, RAFAEL: Principios Generales del Arte de la Colonización (Madrid 1878), pág. 28, citado por MESA, ROBERTO: El Colonialismo en la Crisis del XIX Español (Madrid 1967), pág. 42.
- (4) BLANCO HERRERO, MIGUEL: Política de España en Ultramar (Madrid 1888) pág. 315.
- (5) Para la adopción de las nuevas prácticas coloniales y sus íntimas contradicciones, en el caso español, puede verse PEROJO, JOSE DE: Ensayos de Política Colonial (Madrid 1885).
- (6) Para estas cuestiones véase, PEROJO, JOSE DE: Cuestiones Coloniales (Madrid 1883).
- (7) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898, Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900), pág. 15.
- (8) BLANCO HERRERO, MIGUEL: Ob. cit., págs. 404 y 408-409.
- (9) MALDONADO MACANAZ, RAFAEL: Ob. cit., pág. 198.
- (10) BLANCO HERRERO, MIGUEL: Ob. cit., pág. 14.
- (11) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión de Puerto Rico. (Cuestiones de Ultramar (Madrid 1870), págs. 44-45 y Los Sistemas de Gobernación Colonial, "El Abolicionista" (Madrid), VII, núm. 14 (15-VIII-1876), pág. 209.
- (12) Ibid., págs. 46-47 y 54 e Ibid., págs. 209-210.
- (13) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 10 de Junio de 1871.
- (14) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Carta que a Varios Electores del Distrito de Infiesto (Oviedo) Dirige su Ex-Diputado a Cortes (Madrid 1872), págs 10-12.
- (15) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Nuestras Colonias, "El Abolicionista" (Madrid), I, núm. 4 (15-XI-1872), pág. 25.

- (16) Ibid., pág. 26; La Colonización, "La América" (Madrid), XVIII, núm. 2 (28-I-1874), pág. 3 y La Colonización en la Historia. (Política y Sistemas Coloniales) (Madrid 1876), Vol. I, págs. 84-89.
- (17) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Nuestras Colonias, "El Abolicionista" (Madrid), V, núm. 13 (25-II-1873), pág. 110.
- (18) Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 27 de Febrero de 1873.
- (19) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Emancipación de América, "El Abolicionista" (Madrid), V, núm. 21 (28-VI-1873), pág. 169.
- (20) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 23 de Julio de 1873.
- (21) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Espontaneidad Local en Nuestras Antillas, "La América" (Madrid), XVII, núm. 20 (28-X-1873), pág. 10 y La Abolición de la Esclavitud en el Orden Económico (Madrid 1873), págs. 271-272.
- (22) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Colonización, "La América" (Madrid), XVIII, núm. 1 (13-I-1874), pág. 2.
- (23) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Colonización Moderna, "Revista de Andalucía" (Málaga), I, núm. 1 (1874), págs. 30-31.
- (24) Ibid., I, núm. 3 (1874), págs. 121 y 126-127.
- (25) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Colonización en la Historia. (Política y Sistemas Coloniales) (Madrid 1876), Vol. I, págs. 2-5.
- (26) Ibid., Vol. I, págs. 11-12 y 19-24.
- (27) Ibid., Vol. I, págs. 26-27; 29 y 31-32.
- (28) Ibid., Vol. I, págs. 66-69; 73-75 y 83-84.
- (29) Ibid., Vol. I, págs. 84 y 80-91.
- (30) Ibid., Vol. II, págs. 83-87.
- (31) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Introducción a un Curso de Historia Política Contemporánea (Madrid 1879), págs. 49-51.

- (32) Ibid., págs. 54-56.
- (33) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 25 y 28 de Febrero de 1880.
- (34) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Primer Presupuesto de Cuba. (Madrid 1881), págs. 6-7.
- (35) Ibid., págs. 7-8 y 11.
- (36) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 28 de Junio de 1882.
- (37) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Algo de Todo. (Articulos, Suelos, Crítica Ligera, Notas de Viaje) (Barcelona 1886), pág. 141.
- (38) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Historia de las Relaciones Internacionales de España (Madrid 1897), pág. 27.
- (39) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión Colonial (1871-1896-1898) (Madrid 1898), pág. 9.
- (40) Ibid., págs. 30 y 41.
- (41) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Nuestras Colonias de Africa (Madrid 1898), págs. 37-38.
- (42) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Junio de 1898.
- (43) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Colonias Españolas Después del Tratado de París de 1898, Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900), págs. 12-13.
- (44) Ibid., págs. 14-16 y 18.
- (45) Ibid., págs. 19-20; 22; 26 y 32.
- (46) Ibid., págs. 86-87.
- (47) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Política de Ultramar (1868-1900) (Madrid 1902), págs. 125 y 128.
- (48) Ibid., págs. 827-828.
- (49) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Problema Hispano-Americano (Madrid 1906), págs. 35-36 y 38.

- (50) LABRA, RAFAEL MARIA DE: España y América, 1812-1912.
(Estudios Políticos, Históricos y de Derecho
Internacional) (Madrid 1913), págs. 293-295; 335 y 457.
- (51) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Problema Colonial
Contemporáneo (Madrid 1895), págs. 29-31.
- (52) Ibid., págs. 85-86.
- (53) Ibid., págs. 92-93 y 97-98.
- (54) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Problema Hispano-Americano
(Madrid 1915), págs. 72-74.

2) EL AMBITO ANTILLANO.

2.1) LA CUESTION SOCIAL: EL PROBLEMA DE LA MANO DE OBRA.

La vida de las Antillas españolas se vió alterada en sus supuestos económicos y sociales, como consecuencia de la ocupación de La Habana por los ingleses durante la Guerra de Siete Años (de Agosto de 1762 a Julio de 1763). En virtud de esta situación, se produjo un despertar de las posibilidades económicas criollas, con la subsiguiente revalorización de la mano de obra negra, que debía impulsarlas, dado que la ocupación británica supuso la abolición del monopolio comercial español y la apertura a los mercados de Europa de los productos habaneros, especialmente del tabaco y del azúcar; así, sólo en esclavos para trabajar la caña, los ingleses introdujeron en Cuba, durante su estancia, varios miles de personas. Ciertamente, el costo de fundar una plantación de azúcar derivaba, en buena parte, del precio de los esclavos, ya que éstos constituían la parte más valiosa de la inversión, con lo cual el crecimiento de esta industria dependía del acceso al mercado que controlaba su comercialización (1).

Otra de las coordenadas sobre la que se asentó la reestructuración económica y social del sector vino determinada por la rebelión de los negros de Haití (1791), gran productor de azúcar y de café del momento, muy cercano geográficamente de las Antillas hispanas y en particular de Cuba. En efecto, en Saint Domingue existía una estructura socioeconómica, sobre la base del azúcar y del café, en la que menos de treinta mil blancos dominaban una colonia de explotación agrícola, trabajada por más de seiscientos mil negros; la revuelta provocó el hundimiento de esta economía, que quedó arrasada por el incendio de cafetales y cañaverales, pasando, lo que pudo salvarse de ella, a Cuba cuya

vida se había visto ya alentada por la libertad comercial, otorgada por los ingleses. Algunos hacendados galos huyeron a Jamaica, otros a Puerto Rico y una gran mayoría buscó refugio en la Gran Antilla (proceso de reestructuración social, provocado por la inmigración) y reemprendió allí su vida (creación de plantaciones) (2).

Las consecuencias de este acontecimiento se revelaron especialmente fructíferas para Cuba; sobre todo, las derivadas de la ruina del comercio azucarero francés al verse libre de su principal competidor hasta entonces. Al mismo tiempo, los inmigrantes franceses llevaron consigo modas, costumbres, técnicas y capital, lo que redundó igualmente en el futuro desarrollo de las industrias del café y del azúcar (3). De esta forma, al reforzarse, por las razones antes expuestas, el complejo mundo de la explotación azucarera en Cuba quedó fuertemente anudada la conexión entre la industria del azúcar y el tráfico de esclavos: "La relación exacta entre la acumulación del capital original, necesario para el lanzamiento de la industria azucarera cubana, y el tráfico de esclavos es imposible de establecer, pero el comercio de esclavos, al igual que en los años de 1760, a menudo suministraba no sólo la mano de obra para el funcionamiento de la industria, sino también el capital, y el mercader, esclavista o no, que poseía a la vez una plantación, era, en cierto sentido, el único plantador libre" (4).

También Puerto Rico, aunque en menor medida, se vió afectado por la convulsión haitiana en sentido positivo, ya que el mencionado fenómeno histórico dinamizó su economía, basada asimismo en el azúcar y en el café, productos que en el siglo XVIII habían sustituido a los cueros y al jengibre. Así, pues, en pocos años Cuba se pobló de ingenios de azúcar y de cafetales y vió aumentada su población y acrecentada su riqueza, si bien,

como en el caso de Haití, a costa de convertirse en una colonia de plantaciones, en la que una mayoría de negros trabajaba para una minoría de blancos: se acababa de crear un complejo formado por la economía del azúcar y por la mano de obra, que le era aneja (5).

La suerte de la economía y de la sociedad antillanas quedaron marcadas, de esta forma, de modo inexorable, cuando poco después y al hilo de las nuevas circunstancias Francisco de Arango y Parreño obtuvo de España algunas franquicias arancelarias y la concesión del comercio libre de esclavos africanos; a partir de este momento, todo vino lastrado por la nueva realidad: el problema negro estigmatizó a Cuba y en menor grado a Puerto Rico, y en uno y otro caso las costumbres se relajaron, el trabajo se envileció y la sociedad quedó atenazada por un perpetuo temor a que se produjese una sublevación de esclavos semejante a la de Haití. Este hecho explica una de las ambivalencias que se produjeron en el mundo antillano a principios del siglo XIX, ya que, aunque como consecuencia de estas circunstancias aumentó el grado de corruptela de la administración metropolitana, la aspiración a la independencia quedó contrarrestada, por su parte, por el peligro representado por los esclavos: "Cuba se halló frente a esta encrucijada: permanecer sumisa, cuando toda la América se insurreccionaba a favor de la independencia, o exponerse a una catástrofe como la de Haití" (6).

Establecida la cuestión en estos términos, aunque la su presión del comercio de esclavos estaba en la mente de muchos cubanos liberales, éste se mantuvo por la connivencia de hacendados y negreros por una parte, y de las autoridades ultramarinas con el Capitán General a la cabeza, por otra, quienes mantenían una actitud tolerante al margen de las

prescripciones establecidas sobre la materia por los tratados internacionales (7). Ciertamente, partiendo de las ideas abolicionistas, surgidas en el seno del liberalismo inglés a fines del siglo XVIII y recogidas por la Revolución Francesa, se había planteado la cuestión del problema negro esclavo, que comportaba dos aspectos correlativos y a la vez conexionados: la supresión de la trata y la de la esclavitud propiamente dicha. Al frente del mencionado proceso estuvo Gran Bretaña, que dió el primer paso en orden a la abolición de la esclavitud y del tráfico negrero, logrando extender esta última a escala internacional en el Congreso de Viena (8).

No obstante, en España el abolicionismo, que entró de la mano del liberalismo gaditano, se mantuvo en una línea de manifiesta ineficacia, debido a un conjunto de cuestiones, que confluyeron sobre el tema: herencia del pasado (concepto paternalista de la esclavitud); estructura económica, creada tras la revuelta de Haití, que hizo a los criollos afianzarse en sus posiciones y no querer perder una mano de obra barata, que les era vital, y dilema entre el mantenimiento de una institución, de la que por los motivos expuestos les era muy difícil prescindir, y la posición filantrópica de los movimientos internacionales de carácter abolicionista (9). Así, pues, el tráfico negrero continuó persistiendo, a pesar de que la presión inglesa consiguió desembocar en el tratado anglohispano de 1817 para la supresión de la trata de negros, configurándose, en torno a dos grandes núcleos: los Estados meridionales de la Unión y la isla de Cuba, que se convirtió en un mercado negrero de gran actividad y en un constante problema, derivado del incumplimiento por parte de España de los tratados suscritos con Inglaterra (10).

Realmente, cada vez era más difícil salirse del círculo vicioso, creado por esta polarización de situaciones, ya que las

plantaciones aumentaban y al hacerlo coadyudaban al crecimiento de la riqueza de ellas derivada, que, a su vez, se vió incidentalmente incrementada por las especiales concesiones económicas otorgadas a Cuba por Fernando VII, al objeto de contrarrestar el peligro representado por el movimiento independentista del resto del continente. El café, el tabaco y, sobre todo el azúcar fueron configurando lo que podríamos llamar la trilogía agrícola antillana, y, en torno a estos productos y al complejo socioeconómico que comportaban, se creó un mundo variopinto, que nutrió de vida propia el transcurrir de la sociedad antillana, influyendo en ella con sus costumbres, modos de vida y métodos de trabajo (11).

Las tensiones surgidas alrededor de la temática, necesidad de brazos para el trabajo agrícola-intereses creados, se polarizaron de tal forma, que impidieron acabar de manera radical con la trata, con lo cual se violaron, más o menos sistemáticamente, los compromisos internacionales adquiridos por España (12). De esta forma, el tráfico y la introducción fraudulenta de esclavos en Cuba continuaron con la implicación de las propias autoridades españolas y hasta 1866 no quedó formalmente suprimida la trata, a pesar de que los ingleses protestaron repetidas veces, tanto diplomática como materialmente (bloqueos de vigilancia de las costas cubanas a fin de interceptar los barcos negreros). De esta situación, se derivó algo tan insólito como el hecho de que al final del periodo había en Cuba más negros que al principio del éste, tras haber transcurrido cincuenta años entre 1817 y 1866 y haber firmado España y Gran Bretaña cinco tratados entre 1814 y 1845 (13).

Moralmente, se justificó tal actitud al basarla en la llamada teoría política del "equilibrio de las dos razas", que suponía una salvaguarda contra las insurrecciones en el

mantenimiento de un número constante de esclavos, al tiempo que la trata y su tolerancia por las autoridades se revistieron de un matiz de españolismo y adoptaron una posición de carácter patriótico (14). Así, pues, por este camino fue dibujándose un panorama poco esperanzador, que prometía agudizar más las tensiones en un futuro próximo: "las Colonias eran buenas para soportar todos los golpes: mientras un español debía pagar por término medio cinco reales de impuestos al fisco, el promedio en Cuba era de doce reales y medio. Sobre una población de un millón cuatrocientos siete mil hombres había seiscientos veinticinco mil esclavos negros, que eran propiedad de quinientos sesenta y cinco mil blancos. El negro trabajaba en las inmensas plantaciones y en los ingenios azucareros. La trata proseguía, pese a todas las declaraciones de buena voluntad, hipócritas e ingenuas" (15).

Ciertamente, la situación del negro no fue digna de envidia, existiendo una auténtica explotación del trabajador esclavo, que se vió inmerso en un mundo marcado por las abismales diferencias existentes entre éste y su amo, respaldado, jurídicamente, por el respeto hacia la propiedad, lícitamente adquirida (16). Sobre la base de la creencia en su inferioridad racial, los negros fueron infravalorados, trabajando duramente, a merced de mayores y de contramayores en plantaciones y cafetales desde la salida del sol hasta el anochecer; y otro tanto podía decirse, por lo que a su situación personal respecta, de los que lo hicieron en las ciudades, dedicados al servicio doméstico o alquilados, temporalmente, por sus amos a un tercero.

De acuerdo con estas diferencias de carácter laboral, se organizaron los tres tipos fundamentales de esclavos, que coadyudaron con su esfuerzo a sostener la economía antillana: los domésticos, que desempeñaron faenas en las ciudades o en las casas grandes de los ingenios o de las plantaciones; los de tala,

que cultivaron la tierra, y los jornaleros, que fueron alquilados por sus amos para hacer trabajos fuera de las haciendas a base de un jornal. Antes de esto, una larga odisea les había acompañado desde la separación de su tribu africana al barracón del ingenio o del cafetal, tras ser transportados, de forma inhumana, en las bodegas de los barcos y descargados en los muelles o, clandestinamente en las costas de Cuba (17). Mal alimentados y sometidos a un duro trabajo, contaban con escasas posibilidades de alcanzar la libertad (18).

En todo caso y en la medida en que eran factibles, tres fueron los caminos que se les ofrecieron a los negros esclavos para alcanzar la libertad: la fuga individual (cimarrones) (19), la fuga colectiva (apalancados o negros cimarrones, que en número de siete se reunían en la manigua y construían una rancharía o palenque, lugar protegido en el que se refugiaban) (20), o la integración en las filas rebeldes, cuando estallaron las grandes insurrecciones del último tercio del siglo XIX. Por otra parte, aunque existieron dos caminos no forzados para obtener la libertad, éstos tuvieron un valor más bien teórico. Una posibilidad residía en efectuar un viaje a la Península en compañía de su dueño, con lo cual, dado que en España no existía la esclavitud, al pisar su suelo quedaba liberado automáticamente, aunque es preciso tener en cuenta que estos viajes no fueron ni muy frecuentes, ni alcanzaron, en todo caso, a una gran cantidad de negros, sin olvidar que esta disposición se violó más de una vez. La otra vía, la de la coartación, o pago de su emancipación con el salario fruto de su esfuerzo, encontró grandes dificultades en llegar a ser una realidad, amén de los posibles fraudes por los cuales se consideraba al coartado como cimarrón (21).

De esta forma, planeando sobre una estructura económica

que le era aneja, se desarrolló una organización social tensionada por las polarizaciones, representadas por los negros esclavos, sector dominado, de un lado, y los esclavistas (hacendados, dueños de ingenios, negreros, altos comerciantes y autoridades coloniales), sector dominante, de otro: "La propiedad esclavista, base y fundamento de la sociedad colonial, tenía todo el amparo de las leyes y del poder del Estado. La voluntad del esclavo nada valía. En el recinto de la finca o del ingenio, la voz del amo era la ley incontrastable. Las leyes civiles y penales le concedían ese privilegio. El amo era dueño de la vida del esclavo, que podía arrancársela, si lo estimaba conveniente. Las instituciones jurídicas, viabilizadas por el poder coactivo del Estado, cuidaban del mantenimiento de la esclavitud" (22). Fruto de esta presión fueron las rebeliones negras de 1841 y 1843 y la llamada "Conspiración de la Escalera", de 1844.

A pesar de los fraudes existentes en relación a la abolición de la trata, la presión internacional, ejercida especialmente por Inglaterra, fue haciendo cada vez más evidente que tarde o temprano la supresión total llegaría, lo cual conllevaba, como lógico corolario, el planteamiento del problema sustitutorio de la mano de obra negra por la de otro tipo de trabajadores, con lo cual empezaron a hacerse experimentos, basados en la importación de mano de obra distinta de la de color. Planteada, pues, esta situación, la Real Junta de Fomento de La Habana, creación de los plantadores criollos, se afanó por combatir el problema de la reducción de la mano de obra negra, arbitrando toda una serie de soluciones, encaminadas a dar viabilidad a tan espinosa cuestión y, así, y de acuerdo con ello, en 1839 se enviaron a Cuba doscientos cuarenta canarios; Miguel Estorch contrató en 1840 a noventa catalanes; en 1847 llegó a La Habana el primer cargamento de chinos y en 1854 Urbano Feijóo y Sotomayor realizó una famosa importación de colonos gallegos (23).

Dentro de este contexto, tuvo lugar, como ya quedó indicado, la llamada "experiencia gallega" a base de importar colonos pobres de aquella región a Cuba, aprovechando la mala situación económica acaecida en Galicia en 1853, y al hilo de un plan, presentado por Feijóo y Sotomayor al Capitán General de la Gran Antilla (24). De acuerdo con ello, en 1854 el Gobierno metropolitano aprobó la concesión de un privilegio de importación a favor de Feijóo por un periodo de quince años con la obligación de transportar y reexportar trabajadores libres, contratados ante notario cada cinco años. No obstante, el proyecto terminó en un rotundo fracaso, ya que al poco tiempo de su arribo a Cuba estos colonos vagaban por la isla, enfermos y mal alimentados, dado que ante la opresión de que fueron objeto, habían desertado desperdigándose por el campo en busca de colocación sin lograr obtenerla, puesto que los propietarios no les contrataban por resultar más caros que los negros. En estas circunstancias, el Gobierno, para paliar el problema, tuvo que emplearlos, en último extremo, en obras públicas y afrontar un escándalo parlamentario, del que, sin embargo, el contratista Feijóo logró salir airoso. De esta forma, una doble conjunción coyuntural fue responsable del fracaso de la experiencia al hacer coincidir una falta de requerimiento, por parte de los propietarios (mayor carestía de esta mano de obra con respecto de la negra), con el hecho mismo de la deserción de estos colonos, lo que sirvió a los esclavistas para argumentar que la colonización blanca era imposible y que sólo el negro era apto para aquellos trabajos (25).

La inminente supresión de la trata y la posterior aparición del movimiento abolicionista acrecentaron igualmente la importación de colonos de raza amarilla, especialmente chinos, cuya introducción había empezado en Cuba a mediados del siglo. Estos colonos determinaron, por su parte, un grave problema social, ya que su modo de vida no difería del de los negros,

puesto que, aunque teóricamente se contrataban de forma libre, los contratos eran amañados por las agencias con el objeto de esclavizarlos. Una serie de reglamentos y de tratados efectuados entre España y el Celeste Imperio jalonaron este proceso de emigración de mano de obra asiática, articulado fundamentalmente, a lo largo de tres fases: transporte clandestino o, por lo menos, no regulado, totalmente ventajoso para el país receptor por incontrolado, en un primer momento; posteriores protestas del país proveedor, que dieron lugar a una situación difusa, en la que la empresa quedó en manos de intermediarios, y fase final, que condujo a una canalización del tráfico con la consiguiente organización oficial del mismo y la paulatina reducción de situaciones abusivas como consecuencia del planteamiento de sucesivas y cada vez más serias reclamaciones (26).

En general, pues, y a pesar de la progresiva evolución de carácter positivo en pro de la suavización de las condiciones laborales de la mano de obra asiática, entre 1849, fecha en que se aprobó el primer reglamento, y 1877, Tratado de Pekín, que marcó la solución del problema, la población de color amarillo vivió en unas circunstancias muy similares a las de la negra. Los abusos y malos tratos fueron frecuentes y, de hecho, la emigración fue forzada en numerosas ocasiones, produciéndose contrataciones totalmente clandestinas, acompañadas de fraudes en los censos, amén de otro sinfín de irregularidades. Teniendo en cuenta que esta mano de obra no era esclava, estuvo sometida a una serie de condiciones un tanto denigrantes, puesto que debían renunciar a sus derechos civiles al firmar los contratos, quedando sujetos a un duro horario de trabajo, por el que recibían un salario de miseria. Del mismo modo, los hijos quedaban sujetos durante largo tiempo al mismo sistema laboral de los padres y tan sólo lograban liberarse de tal situación al cabo de unos años de duro trabajo. En última instancia, el Estado

amparó al propietario, legalizando por medio de las leyes su derecho de propiedad y tolerando, en general, que se cometiese toda clase de abusos (27).

Al hilo de estas circunstancias y con el paso del tiempo, se fue difundiendo en España el ideario abolicionista, uno de cuyos más ardientes propagandistas resultó ser Rafael María de Labra. Al frente de este proceso ocupó un lugar destacadísimo la Sociedad Abolicionista Española, fundada en 1865 por el puertorriqueño Julio Vizcarrondo. La Sociedad realizó múltiples campañas propagandísticas tanto en Madrid como en provincias a través de secciones delegadas, que se repartieron por toda España; presionó a los Gobiernos en pro de su ideario, presentando a las Cortes y a los altos cargos gubernamentales gran cantidad de exposiciones, ruegos y quejas; convocó concursos poéticos, mítines y conferencias para extender sus ideas y tuvo en el periódico quincenal "El Abolicionista Español" su principal órgano difusor, alcanzando su más resonante triunfo con la supresión de la esclavitud en Puerto Rico en 1873 (28).

Dada la situación, se hizo cada vez más necesario dar cauce a las aspiraciones reformistas, que se venían arrastrando desde las famosas "leyes especiales" de 1837, y aclarar el sentido de éstas, que suponían, entre otras cosas, vaguedad y falta de representación ultramarina en las Cortes, así como renovar el régimen colonial. A tal fin, el entonces Ministro de Ultramar don Antonio Cánovas del Castillo convocó una Junta de Información en Noviembre de 1865, cuyo objetivo pretendía enfrentarse con los mencionados temas, al tiempo que conseguía que se aprobase, el 9 de Julio de 1866, tras su presentación en Cortes, un proyecto de ley para la supresión del tráfico de esclavos; logro al que no fue ajena la labor realizada en este sentido por la Sociedad Abolicionista Española.

Una vez convocada la Junta y anunciadas las elecciones para elegir representantes (comisionados) de aquélla, la opinión política antillana se dividió en reformistas y antirreformistas, desatándose amplias campañas en pro o en contra de los ideales que debían defender sus elegidos, los cuales deberían representarles en número de veinte, dieciseis por Cuba y cuatro por Puerto Rico. Las elecciones tuvieron lugar el 25 de Marzo de 1866 y quedó demostrado el triunfo de la línea reformista; en Cuba, de los dieciseis comisionados, doce eran reformistas, y en Puerto Rico de los cuatro, tres.

No obstante, este inicial intento reformador vió frustradas sus intenciones como consecuencia de los cambios políticos peninsulares que tuvieron lugar por aquel entonces. Al poco tiempo, el Gobierno de la Unión Liberal, bajo cuyos auspicios había tenido lugar la convocatoria de la citada Junta, fue sustituido por un Ministerio moderado, el cual dió marcha atrás al asunto, preocupado como estaba por tratar de salvar el ya vacilante trono borbónico, con el consiguiente cierre ideológico que ello implicaba. Así, pues, se produjo un total viraje en relación con la orientación inicial de la Junta al introducir en ésta representantes gubernamentales con voz y voto, que fueron nombrados por decreto, con lo cual se aumentó la presión del Gobierno y se desvirtuó la inicial línea electiva de signo mucho más liberal y democrático (29).

La Junta quedó convocada para el mes de Octubre según un Real Decreto de 11 de Agosto de 1866, y de acuerdo con el nuevo sistema establecido, frente a los genuinos representantes antillanos se alinearon los nuevos comisionados de Cuba y Puerto Rico, todos ellos conservadores, los cuales, con la fuerza de los votos que les otorgaba su mayoría, se apoderaron del control de la mencionada Junta. Las sesiones se celebraron a puerta cerrada

en un salón del Ministerio de Ultramar, quedando prohibido hablar sobre las cuestiones relativas a la unidad política o religiosa de la Nación; por su parte, los temarios de los interrogatorios se prepararon de antemano y ni tan siquiera se abordó el problema de la esclavitud (sólo se propusieron una serie de medidas, encaminadas a mejorar la vida del esclavo con miras a su mayor rendimiento).

De acuerdo con estos supuestos, los asuntos que traían en sus carteras los comisionados reformistas se vieron relegados al olvido y en su lugar se revisó una serie de tópicos ante las presiones ejercidas por el nuevo Ministro de Ultramar, sucesor de Cánovas, Alejandro de Castro, y del propio Presidente de las Conferencias, Alejandro Oliván. Así, al poco tiempo de iniciarse las sesiones, los comisionados reformistas puertorriqueños pidieron la abolición inmediata de la esclavitud para su isla, mientras que los reformistas cubanos, por su parte considerando el problema de la Gran Antilla mucho más complejo, presentaron un "memorandum" en el que pedían una abolición gradual a realizar en ocho años y la supeditación de la cuestión social a la reforma política; sin embargo, tal problemática quedó totalmente relegada y la información, que inicialmente debía abarcar por orden de prelación tres interrogatorios básicos (Cuestión Política, Cuestión Social y Cuestión Económica), vió alterado su orden, pasando a primer término el interrogatorio de la Cuestión Social, aunque tergiversado en su sustantividad (30).

Como queda dicho ya, por expresa prohibición gubernamental los problemas de fondo no se tocaron y las peticiones de los reformistas fueron desestimadas, de tal forma que los únicos resultados a los que se llegó tras la realización de treinta y seis conferencias, celebradas entre el 30 de Octubre de 1866 y el 28 de Abril de 1867, arrojaron un balance totalmente

negativo. Tan sólo se tomaron medidas encaminadas a obtener un mayor aprovechamiento de la mano de obra, junto con la adopción de una propuesta de los reformistas cubanos, pero en un sentido radicalmente inverso al del que éstos le habían dado, con el agravante de que fueron culpados de la innovación, Prohibiéndoseles, además, protestar por tan arbitraria medida (en vez de la creación de una contribución directa, única y proporcionada con la supresión de los demás impuestos parciales existentes, se impuso otra por el doble del valor pedido sin que se suprimiesen los impuestos tradicionales) (31). El fracaso, pues, con el que terminó la Junta de Información supuso la quiebra del reformismo, en parte, el "Grito de Yara" y, posteriormente, el engrosamiento del independentismo, que se nutrió de bastantes reformistas, desencantados y convencidos de que nada se lograría del gobierno peninsular.

Establecidas así las cosas, el abolicionismo halló una coyuntura favorable como consecuencia del triunfo revolucionario de Septiembre de 1868, comprometidos como estaban los conspiradores de "la Gloriosa" con la cuestión social de la esclavitud de los negros (32). En este sentido, Labra expuso la necesidad absoluta de extender a Ultramar los beneficios de la revolución, entre los que, naturalmente, estaban los derivados de la abolición de la esclavitud. Se iba a llevar a las Antillas los supuestos liberales que debían proclamar las libertades de los blancos, pero se hacía necesario que ello tuviera un correlato con respecto a los negros. Y todo esto debía realizarse a pesar de las dificultades y siendo conscientes de la distinción entre el principio teórico (que no podía ser otro que el de la abolición inmediata) y las medidas de tipo práctico, que tenían que recoger las experiencias sobre el particular a fin de evitar el máximo posible de perturbaciones (33).

Dentro de este contexto, fructificó, al poco tiempo, la propuesta del propio Labra al ser asumida por la Junta Revolucionaria de Madrid y aceptada por el Gobierno Provisional. En la mencionada propuesta debían quedar libres todos los nacidos de madre esclava desde el 17 de Septiembre (libertad de vientres). No obstante, el tema de la esclavitud revestía tal cúmulo de dificultades, que debía abordarse con sumo tacto y de forma harto inteligente. Así, como queda dicho, se propusieron entre tanto dos medidas previas; someter el asunto de la abolición a las Cortes y proclamar la libertad de vientres, a partir del 17 de Septiembre (34).

Por todas estas razones se imponía la necesidad de entender los derechos políticos establecidos en la Península por la Revolución de Septiembre a todos los habitantes de Ultramar, sin distinciones, lo cual comportaba el reconocimiento de la existencia de diversas razas y situaciones sociales. Si se consultaba la opinión de las provincias transatlánticas, no podía dejar de tenerse en cuenta la presencia de todos los sectores implicados, incluido el de color. Por ello, si en la Península se había proclamado la libertad en todo y para todos, no se debía excluir de la vida política a un conjunto de hombres, negándoles los derechos, que, por lo demás, eran inherentes a la propia persona humana (35). Por su parte, la Sociedad Abolicionista Española reanudó sus actividades propagandísticas y difundió un manifiesto, en el que tras definir su posición se declaraba totalmente a favor del abolicionismo; mientras tanto, en Cuba, Espedres, caudillo del movimiento separatista que acababa de fallar, recogiendo un pensamiento similar, hizo público en unas declaraciones, que "Cuba libre" era incompatible con "Cuba esclava" (36).

Inauguradas las sesiones de las Cortes Constituyentes

de 1869, pronto se recibió en éstas un gran número de peticiones, en las que se solicitaba la abolición de la esclavitud, tanto para Cuba como para Puerto Rico. No obstante, el asunto, tal como ya había apuntado José Antonio Saco, no revestía una fácil solución desde el punto de vista práctico. Un decreto de abolición inmediata tendría que hacer frente en Puerto Rico y en mayor grado en Cuba a la imposibilidad de indemnización; a la aceptación de las consecuencias de una abolición radical y a la posible resistencia a un proceso de tal naturaleza, lo cual podía cristalizar en un intento de separación de la metrópoli por parte de los criollos (37). Así, pues, como queda indicado, la tesis de Saco se asentaba sobre tres supuestos: imposibilidad material de indemnizar a los poseedores de esclavos, tanto en España como en las Antillas; necesidad de una abolición gradual para evitar las perturbaciones derivadas de una acción brusca y repentina.

Y peligro de separatismo, si se adoptaban tales medidas en sentido radical. Ante tal tipo de argumentación, Labra se vió obligado a refutar tales planteamientos, aprovechando la ocasión para hacer una larga exposición teórica sobre el particular. En primer lugar, pasó revista a la cuestión relacionada con la indemnización. En tal sentido, consideraba que el proceso abolicionista tenía que producir inevitablemente algún tipo de trastornos, pero el problema no residía en este punto, sino en considerar cuáles eran los obstáculos y en abordarlos adecuadamente, valorando los supuestos de los opositores, cuyas propuestas podían ser todavía más nefastas que las de los abolicionistas. En el problema era preciso considerar la naturaleza misma de la indemnización a los poseedores de esclavos y la triple vertiente de relación: esclavos-amos-Estado. No parecía estar claro que los poseedores de esclavos tuvieran un firme derecho a la indemnización y en este asunto la posición del Estado era de responsabilidad subsidiaria con respecto a los esclavos (38).

Aun así, era aceptable una exigencia de los poseedores frente al Estado por el hecho de que el Gobierno español era el que por más tiempo había mantenido la esclavitud y la trata, beneficiándose del proceso. Del mismo modo, podía aceptarse la petición de indemnización para paliar los efectos de la abolición misma. Así, pues, podía admitirse un cierto grado de indemnización como consecuencia de estas consideraciones, sin que ello supusiera el reconocimiento de un derecho en sí. El segundo punto era el relacionado con los peligros derivados de una abolición inmediata. Frente a los ejemplos aducidos en pro de una acción gradual, Labra sostuvo que esto no suponía más que la prolongación de la institución esclavista bajo formas en las que se enmascaraban los conceptos de libertad y de emancipación, y tal planteamiento no podía aceptarse para una sociedad como la antillana, que demandaba soluciones con carácter de urgencia. Lejos de ser fuente de conflictos, la abolición inmediata, allí donde se había producido, había sembrado la paz y la concordia entre los afectados. Por otra parte, no modificaba la situación el hecho de que en algunos casos el proceso hubiese ido precedido de algunas medidas preparatorias (39).

Precisamente, las Antillas estaban mejor preparadas que otras colonias para llevar a cabo el proceso de abolición; proceso que no podía ser ignorado, puesto que de mucho tiempo atrás éste era un tema al que eran sensibles la ley, la costumbre, el Gobierno, los políticos, los esclavistas, los propietarios, las Sociedades emancipadoras, el mundo civilizado y la propia marcha de los tiempos. La cuestión era de absoluta justicia y existían mecanismos de compensación para neutralizar cualquier tipo de consecuencias negativas que pudieran producirse. Por último, Labra refutó la posible resistencia antillana ante un proceso de abolición en el sentido de plantear la separación de la metrópoli para evitarla. Dentro de esta

uestión, se consideraba que el movimiento insurreccional de Yara iba encaminado en ese sentido; antes al contrario, dentro de este contexto se presentaba una situación mas favorable para la abolición de la esclavitud. No obstante, se reconocía la flagrante contradicción existente entre la petición de libertad política para los blancos y la negación de la libertad civil para los negros, cuando para éstos la cuestión se debatía en términos de necesidad vital (40).

Debatidos éstos puntos, Labra pasó a considerar los efectos de la abolición gradual, entre los que podían contarse: la frustración de esperanzas, el fomento de rencores, las perturbaciones de todo orden, el mantenimiento del espíritu de rebelión ante la injusticia existente, el desequilibrio del mundo ultramarino, las envidias, las agitaciones, los odios, etc. (41). Si se perdía tiempo en abordar una abolición inmediata, sería mucho peor, puesto que en todo caso al término de la insurrección cubana se impondría la abolición con un mayor coste político y económico, amén de una mayor dificultad en la imposición de ésta por cauces normales. En todo caso, no se podía olvidar la importancia del hecho abolicionista en la zona insurrecta. Según Cochín, a quien también comentó Labra, la cuestión colonial española se diferenciaba respecto de lo sucedido en otras colonias en dos aspectos: el problema esencial para la solución de los temas a debatir residía en la propia metrópoli y la libertad de los blancos era inseparable de la de los negros. En realidad, en Ultramar, dado el sistema político existente, era imposible tratar públicamente el tema de la esclavitud, ya que el mantenimiento de ésta se consideraba un punto de apoyo para la permanencia de España en las Antillas, y todo pensamiento contrario en este sentido era sospechoso de separatismo (42).

Con respecto a esto, la responsabilidad de España era

evidente, tanto desde un punto de vista histórico como actual, y ello era incompatible con la existencia de libertades en la propia Península. Lo cierto era que en España no existía una recta conciencia de lo que sucedía en las Antillas. En contrapartida, los antillanos, con un atrayente ejemplo a seguir en Estados Unidos y una importante pujanza comercial, sí se habían formado un claro panorama de la realidad ultramarina: era precisa la abolición y ésta era inseparable de la adopción de reformas en el ámbito político. Por otra parte, estaba planeando el aspecto político internacional, que resultaba poco tranquilizador para el equilibrio de la sociedad antillana, dadas las apetencias de Estados Unidos y la postura de Francia y de Gran Bretaña. En último término, Labra concluía: "pensamos nosotros una cosa aun más triste, porque, creyendo que a seguir como van los asuntos España perderá sus Colonias de América en un plazo no remoto, tememos con gran fundamento que no tan sólo las Antillas se emancipen de la Madre Patria, si que hasta se pierdan para la Civilización" (43).

Ciertamente, parecía que dentro de la cuestión relativa a la abolición y a la libertad política, se interconexionaban otros supuestos, entre los que se encontraban la reforma del presupuesto colonial, la terminación de los fraudes y malversaciones y el planteamiento y desarrollo de todo género de franquicias comerciales. La reforma del presupuesto proporcionaría una disminución de las cargas sufridas por el contribuyente, una mejor clasificación de gastos y una distribución mucho más beneficiosa de los ingresos. En fin, la reforma arancelaria contribuiría a paliar las malversaciones producidas por el contrabando y a fomentar el comercio, lo que quitaría fuerza a la tentativa de anexión de las Antillas a Estados Unidos. Todo ello, en conjunto, facilitaría la adopción de las medidas abolicionistas, puesto que las reformas podrían

contribuir a hacer frente a los gastos derivados del proceso de abolición: "En la reforma de todo el orden económico de las Antillas y en el de todo el sistema colonial que allí priva, es donde pensamos nosotros que deben buscarse los primeros recursos para atender a los amos de esclavos, privados ya de los servicios gratuitos de éstos" (44).

Con respecto al tema de los conflictos entre blancos y negros y al de la desarticulación del orden económico, como consecuencia de la implantación de la abolición radical, Labra resaltaba la necesidad de tener en cuenta tres puntos, que diferenciaban la situación de la raza negra antillana con respecto a la que habitaba en otras colonias, en las que ya se había producido la abolición; singularmente, en las de Francia e Inglaterra: distinta proporción de razas, diversidad de condiciones de vida y diferencias en el estado moral de éstas (45).

Más adelante, Labra definió nuevamente los supuestos relativos a la holgazanería, la ferocidad y la incapacidad para la recepción cultural por parte de los negros. En todo caso, si algo de verdad había en ello, venía propiciada por la existencia de la propia esclavitud, que estirilizaba todo proceso laboral y lo deshonraba al privarlo de un clima de desarrollo en libertad. El propio argumento contra el carácter del negro se derrumbaba por sí sólo al apoyarse en algo que por sí mismo lo explicaba y que, en todo caso, en vez de servir de prueba en contrario, se convertía en atenuante. Toda una serie de ejemplos eran aducidos en favor de la condición del negro al objeto de puntualizar su actitud, que no estaba condicionada por la vagancia en libertad como posible alternativa a la opresión para evitar desórdenes. Se reseñaban: la tendencia del negro hacia el matrimonio y la vida de familia, la neta predisposición para el ejercicio de algunas

profesiones, su disposición en relación con la formación cultural, etc., ejercido todo ello en un ambiente carente de libertad, lo cual lo revestía de mayor importancia (46).

Por último y a modo de resumen, Labra concluía lo siguiente: 1º) La abolición de la esclavitud no había terminado en una catástrofe, allí donde se había producido (las colonias francesas e inglesas), sino que tras un breve descenso de la producción, más acusado en las zonas de adopción de medidas graduales, la prosperidad de las colonias había aumentado por encima de los índices iniciales; 2º) La baja producida no se derivaba directamente del proceso abolicionista, sino de un orden económico viciado, cuya ruina se anunciaba mucho tiempo atrás, y de una incorrecta aplicación del proceso mismo; y 3º) Las condiciones de Cuba y Puerto Rico eran distintas y, en todo caso, favorables a la abolición (47).

Ciertamente, la abolición, para llegar a un desenlace definitivo, se encontraba con una dificultad hasta cierto punto contradictoria, ya que no se había dado una reducción previa; antes al contrario, se había creado una situación opuesta a aquélla, puesto que se había afirmado en las Antillas el carácter de colonia agraria cerrada con la consiguiente ampliación del número de esclavos, lo que suponía irremediablemente empeorar la situación vital y laboral de aquéllos. En relación con todos estos problemas se hizo famosa la intervención parlamentaria de don Emilio Castelar en la sesión del 25 de Mayo de 1869, en la que el ilustre tribuno definió la postura del Partido Republicano frente al problema ultramarino.

Al mismo tiempo, la cuestión social de los negros fue adquiriendo especial importancia en las propias Antillas, en las que de la declaración de la Junta Revolucionaria de Bayamo sobre

la incompatibilidad de una Cuba libre con una Cuba esclava se había pasado al primer Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Patriotas Cubanos (emancipación gradual con indemnización) y al Decreto de la Asamblea de Representantes del Centro, de 26 de Febrero de 1869 (supresión de la esclavitud e incorporación al ejército insurrecto de los libertos aptos para el servicio militar, permaneciendo los restantes en sus trabajos para subvenir las necesidades de los combatientes), lo que supuso el paso de un gran número de negros a las filas de los independentistas (48).

Por su parte, las Cortes, ante las presiones ejercidas habían ordenado la creación de una comisión para discutir, estudiar y preparar las bases de una reforma sociopolítico-administrativa en las Antillas con la obligación de rendir un dictamen sobre el tema en el plazo de treinta días. En función de este mandato, la comisión elaboró cuatro planes de abolición gradual con indemnización, ante los que hicieron frente común, oponiéndose con gran dureza, conservadores españoles y esclavistas cubanos y puertorriqueños (49).

En tales circunstancias, se produjo un intento moderador, por parte del Ministro de Ultramar, don Manuel Becerra, el cual presentó un plan, cuya base reconocía los derechos civiles de los negros y establecía el pase de éstos al sistema de contratación por un tiempo no superior a seis años y en el que aquéllos indemnizarían a los propietarios con el fruto de su trabajo (en última instancia, se trataba del viejo sistema de la coartación ya existente en el siglo XVIII). No obstante, estos intentos quedaron bloqueados ante la oposición a los planes de Becerra, las dificultades que encontró la propia comisión y las presiones ejercidas por los comerciantes peninsulares en Cuba. Tampoco tuvo mayor éxito una nueva exposición de su

proyecto por parte de Becerra, el cual se encontró con la contestación, tanto de los esclavistas cubanos (Julián de Zulueta) como de unionistas y conservadores (Francisco Romero Robledo), ya que existía el temor generalizado de que la solución del problema en Puerto Rico supondría su extensión a Cuba y conduciría en un plazo más o menos breve a la adopción de una medida semejante para la Gran Antilla (50).

Las exposiciones y argumentos de uno y otro bando en pro y en contra de la abolición continuaron llenando la mesa de las Cortes, mientras transcurría el tiempo y de vez en cuando se escuchaban los tradicionales tópicos, relativos a los posibles peligros derivados de la adopción de medidas liberalizadoras: la abolición traerá el entorpecimiento de la producción amén de las posibles perturbaciones políticas y sociales de todo orden. En la presentación de dicho panorama apocalíptico se jugaba con la equiparación de las realidades de Cuba y Puerto Rico, lo cual comportaba una evidente inexactitud, y se mantenía una postura absolutamente hipócrita, al presentar en un plano puramente abstracto una ambivalencia que hacía compatible una doble formulación: la esclavitud era inhumana y debía ser suprimida, pero en la práctica ello comportaba múltiples problemas que hacían inviable la adopción de esta medida.

En todo caso la mayoría de los representantes parlamentarios de las Antillas no eran otros que los propietarios de los esclavos. Estos individuos, como cierto diputado de Puerto Rico llamado Plaja, explicaban imperturbablemente a los demás diputados que no solamente era necesaria la esclavitud, sino también los castigos corporales y las torturas a los esclavos porque "si así no se hiciera, no trabajarían" (51). Frente a esto, los abolicionistas hicieron una sistemática defensa de sus principios, rebatiendo tales tipos de argumentación y apelando a

la realidad práctica, basada en la verificación de los hechos: lo que sí atentaba realmente al honor de la patria y redundaba en perjuicio de su buen nombre era el desolador panorama existente, en el que se inscribían el analfabetismo e indigencia de los negros, las penalidades y duro ritmo de trabajo a que estaban sometidos, la falta de saneamiento de hábitos y costumbres y la limitación de todo tipo de libertades y derechos para aquéllos. De ello se hizo eco el propio Labra, que denunció la situación existente, caracterizada por una falta de auténtico interés por parte de los poderes públicos en el tema de la abolición. En las Cortes, apenas se había abordado el asunto, mientras los pobres negros tenían que soportar toda clase de vejaciones, al tiempo que sus amos se enriquecían con el esfuerzo de su trabajo (52).

N O T A S.

- (1) Para una visión de conjunto de la economía azucarera y de la mano de obra esclava, con ella relacionada, véase, MORENO FRAGINALS, MANUEL: El Ingenio (1760-1860) (La Habana 1964) y también La Historia como Arma y otros Estudios sobre Esclavos, Ingenios y Plantaciones (Barcelona 1983).
- (2) BOSCH, JUAN: Cuba, la Isla Fascinante (Santiago de Chile 1955), págs. 30-33.
- (3) Como fondo puede seguirse el proceso en la novela de Alejandro Carpentier El Reino de este Mundo.
- (4) THOMAS, HUGH: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970) (Barcelona-México 1973), Vol. I, págs. 120-121. A su vez, el papel desempeñado en el proceso de producción por la mano de obra de color puede seguirse en DESCHAMPS CHAPEAUX, PEDRO: El Negro en la Economía Habanera del Siglo XIX (La Habana 1971) y en KIPPLE, KENNETH F.: Blacks in Colonial Cuba. 1774-1899 (Gainesville 1976).
- (5) Sobre estas cuestiones véanse, GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Azúcar y Población en las Antillas (La Habana 1961) y KNIGHT, FRANKLIN W.: Slave Society in Cuba during the Nineteenth Century (Wisconsin 1970).
- (6) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 8 - 9.
- (7) Para los problemas relativos a la trata de negros pueden verse AIMES, HUBERT H.S.: A History of Slavery in Cuba, 1511 to 1868 (New York 1967) y MANNIX, DANIEL P. y COWLEY, M.: Historia de la Trata de Negros (Madrid 1968).
- (8) Sobre la abolición por parte británica véanse, GREEN, WILLIAM A.: British Slave Emancipation. The Sugar Colonies and the Great Experiment, 1830-1865 (Oxford 1976) y The Abolition of the Atlantic Slave Trade: Origins and Effects in Europe, Africa and the Americas (London 1981).
- (9) Sobre los primeros pasos del abolicionismo en España véase, HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, MARIO: Las Cortes Españolas ante la Abolición de la Esclavitud en las Antillas. (Opinión Institucional ante un Tema de Política Social) "Quinto Centenario" (Madrid), núm. 8 (1985), págs. 15-29.

- (10) CORWIN, ARTHUR, F.: Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886 (Austin 1967), págs. 17-46 y MESA, ROBERTO: El Colonialismo en la Crisis del XIX Español (Madrid 1967), págs. 71-81.
- (11) Sobre estos tres productos agrícolas básicos y el mundo que les era anejo véanse, PEREZ DE LA RIVA, FRANCISCO: El Café, Historia de su Cultivo y Explotación en Cuba (La Habana 1944); RIVERO MUNIZ, JOSE: El Tabaco: Su Historia en Cuba (La Habana 1964); ELY, ROLAND T.: Cuando Reinaba su Majestad el Azúcar (Buenos Aires 1963) y ORTIZ, FERNANDO: Contrapunteo Cubano del Tabaco y del Azúcar (Barcelona 1973).
- (12) Sobre el tema de la trata véase también, SACO, JOSE ANTONIO: Historia de la Esclavitud de la Raza Africana en el Nuevo Mundo y en Especial en los Países Americano-Hispanos (La Habana 1938).
- (13) Sobre el número de negros, introducidos en Cuba durante este período véase, LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en el Orden Económico (Madrid 1873), pág. 253.
- (14) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), pág. 9.
- (15) TUÑON DE LARA, MANUEL: La España del Siglo XIX (París 1968), pág. 232. Para una descripción de la vida en las plantaciones puede verse PEREZ DE LA RIVA, JUAN: El Barracón y otros Ensayos (La Habana 1975).
- (16) GALLEG0 GARCIA, TESIFONTE: Cuba por Fuera. (Apuntes del Natural) (La Habana 1890), págs. 238-240. Sobre la vida y situación de esclavos, hacendados y negreros, así como sobre las pingües ganancias de muchos de los altos mandatarios de Cuba en conexión con aquéllos véase, THOMAS, HUGH: Ob. cit., Vol. I, págs. 187-273.
- (17) DIAZ SOLER, LUIS M.: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (San Juan 1974), pág. 150 y JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Los Chinos en las Luchas por la Liberación Cubana (1847-1930) (La Habana 1963), págs. 7-8.
- (18) FERRER DE COUTO, J.: Los Negros en sus Diversos Estados y Condiciones, tales como Son, como se Suponen que Son y como Deben Ser (Nueva York 1864), pág. 92, citado por MESA, ROBERTO: Ob. cit., pág. 99. Sobre la vida de los esclavos véase también, ORTIZ, FERNANDO: Los Negros Esclavos (La Habana 1975).

- (19) Como ejemplo de la vida llevada por los cimarrones véase, BARNET, MIGUEL: Biografía de un Cimarrón (Barcelona 1968), págs. 41-55.
- (20) Sobre la vida de los palenques véase, PEREZ LANDA, R. y JUSTIZ DEL VALLE, T.: Los Palenques en Cuba, "Nuevos Rumbos" (La Habana), Octubre-Noviembre (1947).
- (21) Sobre la estructura jurídica de la coartación véase, ALONSO Y SANJURJO, EUGENIO: Apuntes sobre los Proyectos de Abolición de la Esclavitud en las Islas de Cuba y Puerto Rico (Madrid 1874), págs. 6-7.
- (22) CEPERO BONILLA, RAUL: Azúcar y Abolición. Apuntes para una Historia Crítica del Abolicionismo (La Habana 1948), pág. 13, citado por JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Ob. cit., pág. 7.
- (23) CORWIN, ARTHUR, F.: Ob. cit., págs. 107-109.
- (24) El plan y su planteamiento vienen recogidos en FEIJOO Y SOTOMAYOR, URBANO: Isla de Cuba. Inmigración de Trabajadores Españoles (Documentos y Memoria) (Madrid 1855).
- (25) MESA, ROBERTO: Ob. cit., págs. 170-179.
- (26) Sobre estas cuestiones puede verse HUNG HUI, JUAN: La Presencia de China en Cuba en el Siglo XIX (Madrid 1975).
- (27) JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Ob. cit., págs. 21-31 y 33-47 y MESA, ROBERTO: Ob. cit., págs 180-221.
- (28) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., págs. 153-171; DIAZ SOLER, LUIS M.: Ob. cit., pág. 270 y MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: El Movimiento Abolicionista en España (1865-1873) (Barcelona 1968), págs. 16-20.
- (29) Todos los incidentes, interrogatorios, discusiones y debates de la Junta, así como otros pormenores de la misma pueden seguirse en MINISTERIO DE ULTRAMAR: Junta Informativa de Ultramar (Extracto de las Contestaciones Dadas al Interrogatorio sobre las Bases en que Deben Fundarse las Leyes Especiales) (Madrid 1869) y también Junta Informativa de Ultramar (Extracto de las Contestaciones Dadas al Interrogatorio sobre la Manera de Reglamentar el Trabajo de la Población de Color Asiática y los Medios de Facilitar la Inmigración, que sea más Conveniente en las Mismas Provincias) (Madrid 1869).

- (30) Sobre las peticiones formuladas por los puertorriqueños ante la Junta véanse, RUIZ BELVIS, SEGUNDO; ACOSTA, JOSE JULIAN y QUINONES, FRANCISCO MARIANO: Proyecto para la Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico Presentado a la Junta de Información Reunida en Madrid el 10 de Abril de 1867 (San Juan 1978) y también Informe sobre la Abolición Inmediata de la Esclavitud en la Isla de Puerto Rico (Madrid 1867).
- (31) MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: Ob. cit., pág. 23. Véase también, VALIENTE, PORFIRIO: Réformes dans les Iles de Cuba et de Porto-Rico (Paris 1869).
- (32) HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, MARIO: Ob. cit., págs. 29-36.
- (33) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Abolición de la Esclavitud, "La América" (Madrid), XII, núm. 19 (13-X-1868), pág. 7.
- (34) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Representación de Ultramar, "La América" (Madrid), XII, núm. 20 (28-X-1868), pág. 8.
- (35) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Representación de los Negros Libres, "La América" (Madrid), XII, núm. 21 (13-XI-1868), pág. 13.
- (36) ACOSTA Y QUINTERO, ANGEL: José Julián Acosta y su Tiempo (San Juan 1899), págs. 300-301; LABRA, RAFAEL MARIA DE: La República y las Libertades de Ultramar (Madrid 1897), págs. 22-23 y también La Cuestión de Puerto Rico. (Estudio de un Proyecto de Constitución Colonial) (Madrid 1870), pág. 55.
- (37) Sobre los puntos de vista de Saco véase, SACO, JOSE ANTONIO: La Esclavitud en Cuba y la Revolución en España (Madrid 1868).
- (38) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en las Antillas Españolas. (Contestación a Saco y a Cochín) (Madrid 1869), págs. 10-11.
- (39) Ibid., págs. 13-14 y 18-21.
- (40) Ibid., págs. 23 y 25-26.
- (41) Ibid., pág. 31. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 1
- (42) Ibid., págs. 33-36.
- (43) Ibid., págs. 39-42.

- (44) Ibid., págs. 42-43 y 45-46.
- (45) Ibid., pág. 48.
- (46) Ibid., págs. 54; 62; 65 y 69
- (47) Ibid., pág. 109.
- (48) MESA, ROBERTO: Ob. cit., pág 113.
- (49) Véase Apéndice Documental II. Apéndice núm. 1
- (50) Sobre el plan presentado por Becerra véase, ALONSO Y SANJURJO, EUGENIO: Ob. cit., págs. 20-24.
- (51) TUÑON DE LARA, MANUEL: Ob. cit., pág. 233.
- (52) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Cargos de Conciencia, "La América" (Madrid), XIV, núm. 1 (13-I-1870), pág. 12.

2.1.1) LA LEY PREPARATORIA DE ABOLICION PARA CUBA Y PUERTO RICO O LEY MORET (1870).

A pesar de todas las adversidades, la dura lucha en pro de la libertad de los negros obtuvo, al fin, un importante triunfo con la aprobación de la Ley de 23 de Junio de 1870 o Ley Moret, que, si bien en el fondo era esclavista y tenía un carácter preparatorio, supuso un importante adelanto en el proceso liberalizador por su característica de antesala de la ley definitiva (1). La Ley Moret, presentada por el Ministro de Ultramar del mismo nombre, condensaba sus principales aspectos en los siguientes puntos: libertad para los esclavos nacidos desde el 17 de Septiembre de 1868 y posteriores; para todos los esclavos confiscados a los rebeldes y a los barcos negreros; para los que ayudasen al ejército español o luchasen en él y para los negros que perteneciesen al Estado. La abolición sería gradual, ya que se pasaría de la esclavitud al sistema del Patronato, cuya duración oscilaría entre diez y quince años. Como de hecho la ley aun aseguraba la existencia de la esclavitud por bastante tiempo, encontró una buena acogida entre los conservadores y entre los esclavistas, aunque fue combatida por los reformistas, por la Sociedad Abolicionista Española y por los Gobiernos extranjeros (2).

Era impropio, realmente, la actitud de muchos conservadores que con sus voces habían logrado desorientar a hombres de innegable espíritu liberal, haciéndoles creer que los negros de las Antillas y, muy particularmente, los de Puerto Rico ignoraban todo cuanto pasaba a su alrededor y que necesitaban, para saber que había llegado la hora de su emancipación, que así se dijese uno y otro día desde la prensa y la tribuna. La abolición era una idea perfectamente conocida, por lo que era ridículo prohibir su examen y discusión o presentarla bajo forma

tal, que en ella no se hablase de derechos ni de libertades; aparte de que en Puerto Rico constituía un mero accidente. Ciertamente, no se daban en Puerto Rico esos antagonismos entre las clases y las razas, que eran el gran peligro de todas las sociedades esclavistas. No había bozales, como en Cuba, ni los esclavos vivían en ingenios completamente separados del movimiento general de la civilización, por lo que no cabía temer las violencias propias de una raza salvaje, traída al seno de una sociedad culta y abandonada luego a sus instintos. Por otra parte, la abolición no entrañaba ningún peligro para el orden económico, puesto que, si bien la gran producción, es decir, la del azúcar, el tabaco y el café, era la que se llevaba la mano de obra esclava, el elemento libre constituía la base de la pequeña producción, que era a su vez la verdadera fuente de la riqueza agrícola (3).

De momento, quedó establecido que la ley no entraría en vigor en Cuba hasta que se publicasen los reglamentos para su aplicación, y esto no ocurrió hasta el 23 de Noviembre de 1872 (4). Por su parte, en Puerto Rico la ley fue publicada por el Gobernador Baldrich el 1º de Noviembre de 1870, circunstancia que produjo de rechazo la creación, a fines de 1870, del Partido Liberal Reformista como medio a través del cual los liberales puertorriqueños intentaron encauzar sus aspiraciones y ejercer una presión adecuada en orden a la abolición inmediata, dado el carácter conservador de la citada ley. Aun así, es preciso tener en cuenta que también en Puerto Rico la aplicación de la ley quedó pendiente del reglamento correspondiente, que no se hizo efectivo hasta el 2 de Octubre de 1872 (5). Mientras tanto, la labor de la Sociedad Abolicionista Española en pro del proceso de abolición se desarrolló en tres direcciones interconexionadas: exigir el cumplimiento de la Ley Moret, denunciar la situación social de las provincias ultramarinas y pedir una nueva ley, que suprimiese totalmente la esclavitud.

En este sentido y en una de sus más tempranas intervenciones, don Rafael María de Labra presentó ante las Cortes una exposición de ciudadanos de Madrid, en la que se solicitaba la abolición de la esclavitud en las islas de Cuba y Puerto Rico (6). Pocos días después, comentando la inobservancia de las leyes y de los decretos en Cuba, el propio Labra indicó la tardanza con que era aplicada la legislación en Puerto Rico, que necesitó de una intensa campaña, llevada a cabo por los abolicionistas de la Península a través de incesantes preguntas y reclamaciones, para obtener cierto grado de atención. Aun así, cuando se promulgó la legislación relativa al tema, ésta se vió entorpecida con retenciones, lo cual provocó una serie de conflictos, y con una interpretación adversa, que excluyó de las consultas pertinentes a los poseedores de menos de veinticinco esclavos, cuyos intereses se oponían a los de los grandes propietarios, y a los síndicos constituidos según la ley en los abogados de los esclavos. De esta forma, la Ley Preparatoria de abolición se encontró violentada en su espíritu y en su texto, aun en las zonas en que podía haber dado mejores resultados (7).

No obstante, la oposición pronto dejó sentir su voz, creando Centros o Círculos Hispanoultramarinos, genuína representación de los intransigentes, quienes realizaron todo tipo de presiones y llevaron a cabo intensas campañas al objeto de obstaculizar los esfuerzos de los reformistas. Fruto de esta política fue el boicot declarado a la ley en las Antillas y, especialmente, en Cuba, en donde la labor de las autoridades se hallaba entorpecida por la acción de hacendados y comerciantes. En este mismo sentido y demostrando con ello las implicaciones internacionales del problema, el Presidente de Estados Unidos, Ulises S. Grant, en su Mensaje al Congreso norteamericano (4 de Diciembre de 1871) hizo referencia a la ineficacia con que se llevaba a cabo la aplicación de la Ley Moret en las Antillas, así

como a las posibles complicaciones que podían derivarse de la continuación de la guerra en Cuba.

Una vez publicados los reglamentos para la aplicación de la ley, se formaron (1872) Juntas Protectoras de Libertos al objeto de hacerlos cumplir, tanto en Cuba como en Puerto Rico, mientras en las Cortes se intensificaba la acción de los abolicionistas (8). Así, por ejemplo, Labra, como representante electo por el distrito de Sabana Grande (Puerto Rico), a través de una serie de intervenciones a lo largo de 1872, reclamó la revisión de varios documentos relativos a la cuestión social en Cuba y en Puerto Rico (9); presentó una exposición de varios vecinos de León, pidiendo el cumplimiento de la Ley Preparatoria de 1870 y la presentación de una ley definitiva (10); pidió, que se le suministrasen datos y documentos referentes a dicha Ley Preparatoria (11), y avaló una exposición de Santander, en la que se solicitaba la abolición de la esclavitud (12).

Abundando en el mismo tema, al finalizar el año, Labra volvió a presentar dos exposiciones más en pro de la abolición inmediata de la esclavitud: una de los diputados provinciales de Valencia y otra de la Sociedad Abolicionista de Sevilla (13), y en ese mismo sentido continuó la lucha, al empezar el nuevo año, con la presentación de una exposición de vecinos de Amieva, otra de Tineo y una más de Llaneza, todas ellas de Asturias (14); acciones éstas que se vieron reforzadas por una enérgica intervención, a fines de Enero de 1873, en la que presentó una nueva exposición de vecinos de Loja en pro de la abolición en Cuba y en Puerto Rico, seguida de una petición de datos sobre esclavos en dichas islas y de documentos sobre esclavitud, cruzados entre la Embajada de España en Londres, el Embajador inglés en Madrid y el Ministro inglés de Negocios Extranjeros con el Ministro de Estado Español (15).

Al hilo de estas circunstancias y al amparo de la coyuntura favorable, representada por el Gobierno de Ruíz Zorrilla, los abolicionistas hicieron patente su protesta, aumentando sus demandas y presentando un sinnúmero de quejas y de exposiciones, en las que se ponían de manifiesto los abusos que se cometían, entre los que se podían consignar, entre otros: falsificaciones en los registros; fraudes con los negros capturados a los negreros, que debían quedar bajo la custodia del Estado, pero que de hecho eran vendidos; trampas en relación con los negros confiscados a los rebeldes, que en lugar de obtener su libertad, eran considerados de nuevo esclavos, etc.

En este sentido, Labra hizo una exposición del panorama existente en relación con la cuestión de la esclavitud , en un discurso pronunciado en 1872 dentro del Ciclo de Conferencias Antiesclavistas del Teatro Lope de Rueda. Por aquel entonces, regía en las Antillas la Ley Preparatoria de abolición de la esclavitud de 1870, pese a haberse prometido ante el Parlamento y los Gabinetes extranjeros la aplicación de una ley definitiva, que recogiera la situación en que habían quedado más de trescientos mil esclavos. Habían transcurrido tres años desde entonces y no sólo no se había avanzado nada en absoluto, sino que ni siquiera se aplicaba adecuadamente la Ley Preparatoria. De entrada, era preciso establecer una distinción entre la situación de Puerto Rico y la de Cuba, ya que no era de la misma importancia la valoración de la esclavitud en una y otra Antilla. De acuerdo con esto, se debía instar del Estado la adopción de medidas radicales a fin de terminar con la servidumbre, por lo menos allí donde ésta revestía formas poco alarmantes y donde el problema parecía medio resuelto por el progreso de las costumbres y por las condiciones económicas del país. No obstante, en lugar de adoptar esta postura, se hacía todo lo contrario, aduciendo que la gravedad de la cuestión en Cuba imposibilitaba las soluciones para Puerto Rico (16).

Los esclavistas repetían incansablemente que la Ley Preparatoria se cumplía de forma taxativa, pero lo cierto era que carecía de realidad práctica, por lo menos en alguno de sus aspectos. Realmente, la reforma colonial y la abolición de la esclavitud constituían un asunto de primer orden para España y afectaban a la situación y a la vida de las provincias ultramarinas, colocándose por encima de cualquier otra consideración, máxime si se tenía en cuenta que la metrópoli debía velar por aquellas tierras, ayudándolas, dado que, como consecuencia de la permanente intromisión metropolitana, se las había privado de la preparación necesaria para dirigirse por sí mismas. En todo caso, "Dios no podía consentir que la libertad se afianzase y nuestra riqueza aumentase y nuestra gloria creciese, mientras con nuestros gritos ahogábamos el ruido de las cadenas de aquellos pueblos y las protestas de aquellos hombres, que con el mismo derecho que nosotros pretendían su redención y clamar por el día espléndido de la justicia" (17). Lo cierto de todo esto era que la Ley Preparatoria no se cumplía en Cuba y que tal y como se presentaba el panorama, se auguraba que no se cumpliría, "porque la aspiración unánime de de los esclavistas de Cuba era que las cosas quedasen en el estado actual, convirtiendo la que se llamó desde el primer instante Ley Preparatoria en ley definitiva, a reserva de que aquélla quedase reducida en sus efectos a lo que era hoy" (18).

Como alternativa a esta situación, se barajaba un proyecto de inmigración blanca para Cuba, proyecto con respecto al cual Labra se mostraba escéptico. Nadie iría allí, mientras subsistieran las circunstancias políticas, económicas y sociales del momento. Fundamentalmente, los proyectos de inmigración blanca habían fracasado por dos razones: la primera, porque la esclavitud degradaba el trabajo y envilecía al trabajador, constituyendo el primer obstáculo para toda colonización, y la

segunda, porque el colono necesitaba tanto de las cuestiones de índole material (la vivienda o el trabajo), como las de carácter personal (seguridad individual, libertad de acción, garantía contra los abusos), de las que, evidentemente, carecía. Ciertamente, no podía haber colonización sin libertad. En todo caso, la guerra de Cuba era antes abolicionista que separatista, de tal modo que, cualquiera que fuera el resultado de ésta, lo que no subsistiría de ninguna forma sería la institución de la esclavitud. Además, cabía la posibilidad, si el Gobierno no actuaba correctamente, de que el proceso desembocara en una guerra social de consecuencias incalculables (19).

Así, pues, la abolición inmediata era urgente, tanto en Cuba como en Puerto Rico, aunque el estado del problema social en la Gran Antilla distaba del que aparecía en la Pequeña. En Puerto Rico, la solución se presentaba fácil; en Cuba, el problema revestía graves dificultades, que por lo mismo exigían grandes remedios, que atacaran en sus raíces el mal y devolvieran a aquella sociedad la moralidad, el orden, la confianza y las fuerzas perdidas. No existía más que una solución en el terreno de los principios: la abolición inmediata y simultánea. A medida que pasase el tiempo, se acudiría a toda clase de pretextos para entorpecer el advenimiento de dicha solución, pero ello no tenía que desanimar a los que veían claro el camino a seguir. Era preciso continuar luchando a pesar de los inconvenientes y de las dificultades: "Es seguro que los que aquí, por diversos motivos, hemos tomado sobre nuestros débiles hombros la tarea de poner de manifiesto las cosas tal como ellas son seremos injuriados, calumniados, denunciados y perseguidos como desleales y enemigos de la Patria. Pero no desmayamos por esto, no. La causa de los negros es sagrada y exige de todos toda clase de sacrificios" (20).

N O T A S.

- (1) Véase Apéndice Documental II. Apéndice núm. 2.
- (2) Sobre esto véase, ORELLANA Y RINCON, LUIS: La Abolición de la Esclavitud y el Proyecto del Sr. Moret (Madrid 1870).
- (3) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión de Puerto Rico (Cuestiones de Ultramar) (Madrid 1870), págs. 98-100.
- (4) CORWIN, ARTHUR F.: Spain and the abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886 (Austin 1967), págs. 245-154; DIAZ SOLER, LUIS M.: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (San Juan 1974), págs. 307-308 y MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: El Movimiento Abolicionista en España (1865-1873) (Barcelona 1968), págs. 47-52.
- (5) Para un análisis de la Ley Moret y de sus repercusiones en la opinión pública véase, NAVARRO AZCUE, CONCEPCION: La Abolición de la Esclavitud Negra en la Legislación Española, 1870-1886 (Madrid 1987), págs. 37-82.
- (6) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 6 de Julio de 1871.
- (7) Ibid., 10 de Julio de 1871.
- (8) Las cuestiones relativas a la aplicación de la Ley Moret pueden seguirse en NAVARRO AZCUE, CONCEPCION: Ob. cit., págs. 83-126.
- (9) Ibid., 5 de Junio de 1872.
- (10) Ibid., 8 de Octubre de 1872.
- (11) Ibid., 8 y 23 de Octubre de 1872.
- (12) Ibid., 4 de noviembre de 1872.
- (13) Ibid., 21 de Noviembre y 4 de Diciembre de 1872.
- (14) Ibid., 18 de Enero de 1873.
- (15) Ibid., 27 de Enero de 1873.
- (16) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión Social en las Antillas Españolas (Madrid 1872), págs. 5-6.
- (17) Ibid., págs. 9; 11; 13 y 14.

- (18) Ibid., pág. 25.
- (19) Ibid., págs. 26 y 28-31.
- (20) Ibid., pág. 38-39.

2.1.2) LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO (1873).

Como ya se indicó anteriormente, entre 1868 y 1873 los abolicionistas esgrimieron una serie de argumentos en contra de la abolición de la esclavitud en Cuba, y en Puerto Rico. Incluso, en relación con la Pequeña Antilla, donde no había guerra y donde el número de esclavos, casi todos nacidos en el país era menor de cuarenta y cinco mil para una población total de cerca de setecientos mil individuos, se aseguró que un decreto abolicionista produciría inmediatamente el desorden público y la ruina de la producción ultramarina y, además, trascendería a Cuba, excitando a los negros de esta isla y desalentando a sus amos.

En esas circunstancias, a fines de 1872 el Gobierno Ruíz Zorrilla, acosado por las presiones internacionales (norteamericanas especialmente) y comprometido por su propia actitud con el reformismo, declaró que llevaría a cabo la abolición en Puerto Rico a tenor de que en esta isla y a diferencia de Cuba no existían los obstáculos que se presentaban en la Gran Antilla; antes al contrario, se daba allí una estructura favorable para realizarla. Ante esta situación, arreciaron las oposiciones, como la representada por la Liga Ultramarina o Liga Nacional (formación política conservadora y antiabolicionista, opuesta a la dinastía de Saboya). Al mismo tiempo y para contrarrestar semejante influencia, don Rafael María de Labra, en incansable campaña, dedicó parte de sus esfuerzos a extender la propaganda antiesclavista a través de los mítines y reuniones celebradas bajo el auspicio de la Sociedad Abolicionista Española, como la que tuvo lugar en el Teatro Nacional de la Opera el 23 de Enero de 1873, en la que defendió sus puntos de vista en relación con la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

El proceso abolicionista se presentaba objetado por una serie de cuestiones, entre las que figuraban los derechos existentes; la preparación que se argumentaba como necesaria para abordar cualquier tipo de reforma económica y de transformación social, y la oposición metropolitana con respecto al comercio marítimo, que veía con malos ojos toda acción encaminada a menoscabar, aunque fuese temporalmente, la riqueza de la Pequeña Antilla. Ante tales supuestos, Labra entendía que no podía hablarse de derechos cuando de la esclavitud se trataba. En esta cuestión no debía fundamentarse ningún derecho en otro principio que en el de la naturaleza humana, y si se hablaba del respeto a la propiedad y se invocaba el argumento de la expropiación, ello suponía el derecho del esclavo a reclamar el respeto a la propiedad de su trabajo y la indemnización de su libertad, tanto más si se tenía en cuenta que lo era contra su naturaleza y su voluntad (1).

Cualquier tipo de reforma que se adoptara en este sentido, sólo podría hacerse en nombre del Derecho y de la Justicia y con la vista puesta en la naturaleza racional y libre del ser humano, en su vida y en su destino. Frente a este criterio de justicia, palidecía todo tipo de consideraciones basadas en los intereses creados y en la conveniencia; el interés no podía imponerse, de forma absoluta, bloqueando la labor del legislador, exigiendo el sacrificio del derecho mismo y lesionando valores absolutos y racionales.

Se imponía, pues, la necesidad de una transformación social y la fuerza de un derecho atropellado frente al interés creado, que sólo ofrecía "economía de daños, suavidad de procedimientos y prudencia en la operación". Dicho interés no podía aducirse para detener la reforma, ya que bajo ningún concepto se la debía adulterar en nombre de supuestos derechos

históricos. En todo caso, únicamente era admisible hablar de conveniencias relacionadas con la conservación del orden económico y con la posibilidad de que los poseedores de esclavos fueran capaces de sufragar los gastos de modificación del material y del personal de ingenios y de fábricas en el supuesto de asumir la posibilidad de una indemnización (2). La libertad de los esclavos estaba planteada y ya nada podía detener dicho proceso, aunque éste se tratara de enmascarar bajo los aspectos de una Ley Preparatoria y a pesar de que los esclavistas hicieran frente a los dictados de las autoridades ultramarinas y esgrimieran los argumentos del patriotismo y de la situación existente en Cuba (3).

No obstante, y a pesar de la conmoción política representada por el advenimiento de la I República, el proyecto de abolición para Puerto Rico fue presentado a discusión en la Asamblea Nacional y, por fin, hecho realidad, aunque después de pactar con la oposición a fin de llegar a un acuerdo y tras azarosas circunstancias (la ley fue votada el último día en que estaban abiertas las Cortes republicanas). En relación con este tema, Labra volvió a presentar una exposición de varios pueblos en favor de la abolición, así como una moción relativa a la compra de negros en Puerto Rico con destino a Cuba (4), y, poco después, hizo una presentación general de la cuestión en intervención más prolongada, en la que puso de manifiesto que la clave para la reforma colonial residía en la abolición de la esclavitud, aspecto éste que no sólo constituía el punto clave de la cuestión social en las Antillas, sino un elemento fundamental dentro del Derecho de Gentes para el mundo civilizado. De acuerdo con ello, consideraba que la cuestión social se estructuraba en torno a tres supuestos interconexionados, de los que formaban parte el esclavo, el amo y el Estado. Era justificable hasta cierto punto la postura estatal y la del poseedor de esclavos en

relación con los supuestos jurídicos establecidos por el propio Estado; lo que ya no se sostenía era la posición de los propietarios frente a sus siervos (5).

Tras estas disquisiciones, Labra pasó a rebatir a sus opositores en los puntos en que éstos se apoyaban para oponerse a una abolición inmediata: no era precisa una preparación; el número de esclavos existentes era infinitamente menor, con respecto a los de las Antillas inglesas y francesas, y tampoco era cierto que la totalidad de la producción descansase únicamente en el trabajo esclavo, con lo cual la abolición inmediata no paralizaría la producción de la Pequeña Antilla. Por otra parte, aunque las circunstancias no eran las mismas, no había argumentar con el supuesto de su repercusión en Cuba y, en todo caso, era palpable, tal y como se desprendía del ejemplo dado por otros países, que la abolición gradual constituía un fracaso (6).

La defensa de la abolición inmediata la realizó Labra en sesión del 3 de Marzo, haciendo una disquisición en torno a sus resultados: siempre que se había intentado la abolición gradual, se había terminado en la inmediata; si bien era cierto que se reducía la producción, ello era solamente con carácter temporal, y a la postre se mejoraba aquélla por la propia libertad imperante en las relaciones laborales, aun a pesar de los problemas que la abolición misma implicaba (la cuestión de la inmigración, el tema de la indemnización, la propia reforma comercial, así como las complicaciones políticas). Así, pues, la abolición inmediata no producía los graves trastornos augurados por la oposición y no se encontraba, precisamente, Puerto Rico en las peores circunstancias para aplicarla, no obstante la presión política que pudiera ejercer el caso cubano y la acción de Estados Unidos con respecto al éste (7).

El 14 de Marzo Labra presento de nuevo una exposición, esta vez de vecinos de Madrid, en pro de la abolición en Puerto Rico (8), y pocos días más tarde volvió a criticar la situación existente, relativa a las dilaciones y tardanzas con que se intentaba frenar el proyecto de abolición, poniendo de manifiesto la culpa con que debía cargar, no sólo la sociedad ultramarina, sino el propio Estado metropolitano y destacando la labor llevada a cabo por la Sociedad Abolicionista Española, tanto desde el punto de vista propagandístico como desde el de una acción concreta, por parte de aquélla, con respecto a la emancipación del mayor número posible de esclavos. Dicha alocución contó con la rectificación del señor García Ruíz y con las posteriores intervenciones del Ministro de Ultramar, señor Sorni, y del propio García Ruíz (9).

Así, pues, el 27 de Marzo de 1873 quedó aprobada la ley, por la que se abolía la esclavitud en Puerto Rico de forma inmediata, después de acalorados debates, desarrollados en un clima de alta tensión, consecuencia de los especiales acontecimientos políticos que se vivían entonces en la Península (10). Según la mencionada disposición legal, los libertos venían obligados a contratarse por un periodo mínimo de tres años, y no adquirirían los derechos políticos hasta cinco años después de promulgada la ley. De esta forma, el problema social de los negros en Cuba pasó a ser el único en esta materia al quedar resuelto el de Puerto Rico. La abolición en Cuba, aunque prevista por los republicanos de forma inmediata con indemnización parcial, quedó, sin embargo, detenida por la evolución política subsiguiente, pasando como problema pendiente al nuevo régimen de la Restauración (11).

No obstante, la solución del problema en la Gran Antilla venía preñada de dificultades, a pesar del importante

aso dado con la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Realmente, se perfilaba, con respecto a Cuba y en torno a esta materia, todo un mundo de contradicciones y desequilibrios internos, que si bien no iban a hacer imposible la solución del problema, sí lo dificultaron sobre manera, dada la superposición estructural de varios planos, que, interconexionándose con respecto a un elemento nucleador, lo hicieron sumamente complejo: estaba el aspecto humano de la mano de obra de color, ciertamente deplorabile, en muchos aspectos; la consideración puramente económica de esa mano de obra, ligada a unos sistemas de producción que se habían quedado anticuados; la implicación de intereses creados y de grupos de presión, unidos a ellos; el ejemplo de la abolición en Puerto Rico (que, sin embargo, tenía todavía que abandonar el terreno de la teoría sin olvidar la disparidad de estructuras económicas y sociales de ambas islas, por lo que no podía constituir un punto de referencia totalmente sólido); la conexión internacional, principalmente norteamericana, que la cuestión había tenido desde los primeros momentos y la existencia de la guerra cubana, que supuso el paso a un gran número de esclavos a las filas rebeldes.

En estas circunstancias, el 14 de Abril de 1873 don Rafael Primo de Rivera llegó a Puerto Rico para hacerse cargo de la gobernación de la isla en nombre de la República, cuando aquélla se preparaba para emprender la nueva organización de su sistema productivo con el uso exclusivo de trabajadores libres. Como ya se ha apuntado repetidas veces la situación de Puerto Rico difería sustancialmente de la de Cuba, y nunca se dieron allí los elementos de conflictividad y de agudización de problemas que atenazaron a la Gran Antilla.

Si se examinaba la cuestión con detenimiento, se observaba que el trabajo libre era más ventajoso que el del

esclavo. Ciertamente, el trabajador esclavo costaba más que el libre, aunque en los dos o tres primeros años esto no pareciese evidente, ya que el trabajador libre no ofrecía en tan gran medida los problemas de la enfermedad, la mutilación y la muerte. Desde que se había suprimido la trata y dada la escasa capacidad de reproducción de la raza esclava, no era fácil reemplazar los vacíos que se producían entre los negros en ingenios y vegas; a todo ello había que añadir el precio del esclavo en sí y el tanto por ciento que importaba anualmente el capital representado por el siervo. Además, el trabajo libre suponía una economía de brazos y de medios y representaba un aumento en la producción (12).

En aquellas circunstancias, no parecía que el amo fuera a tener más consideración con el liberto que con su antiguo esclavo, dado que aquél quedaba obligado a trabajar por ley. El trabajo obligatorio tenía sus condicionamientos en el orden político y económico y suponía la negación de garantías para el trabajador, de la misma manera que la esclavitud tenía sus supuestos en el orden moral y era la negación del pensamiento y de la conciencia del esclavo (13). En los ingenios de Cuba y en las haciendas de Puerto Rico, no habían dejado de emplearse los medios habituales de persuasión de los que se valía el amo para amedrentar al esclavo, por lo que esto suponía un engaño y representaba un atentado contra la libertad del hombre y la moralidad de la vida social. Por medio de los contratos existentes, los emancipados habían vuelto a caer en los moldes de la antigua servidumbre, por lo que el espíritu y los preceptos de la ley se habían visto burlados. Realmente, en un país esclavista existían costumbres y maneras peculiares, que sólo podían corregirse por la fuerza de la ley, por el celo de las autoridades y por una actitud firme frente a todo lo que fuese un pretexto para el recrudecimiento de la esclavitud o pudiera contribuir a su prolongación.

Dado que en las Antillas había existido la servidumbre hasta el punto de ser una institución fundamental y la forma ordinaria del trabajo y que se había identificado con la diferencia de razas, introduciendo un criterio de superioridad social a favor de los blancos, era preciso que la libertad se desplegara, rodeada de toda clase de garantías. Mientras no se acabase con el régimen esclavista de forma total, no sería posible que el trabajo libre diera resultados, tanto en el orden moral como en el ámbito económico. De esta suerte, en tanto en cuanto no se avanzase más allá, constituía un auténtico engaño el hecho de adscribir por la fuerza más o menos disimulada a un negro, cuya libertad se proclamaba, a la finca o a la casa donde había trabajado como esclavo; de someterlo al mismo mayoral, que no hacía mucho lo había maltratado, y de reducirlo a trabajar del mismo modo que antes, si bien reconociéndole el derecho a un jornal, que, por otra parte, no podía emplear en el fondo del ingenio y fuera del alcance del síndico o de la autoridad, sino como el amo quisiera (14).

Por otra parte, no era factible solucionar el problema de la esclavitud a base de propiciar la inmigración libre. Estaba absolutamente claro que la primera condición para la inmigración era la libertad. Mientras no existiesen garantías para el ciudadano ni más ley que la voluntad de la autoridad, no era posible esperar que fructificase una adecuada oleada migratoria en las Antillas, máxime si ésta se planteaba sobre la base de la esclavitud como centro del orden económico. La esclavitud no sólo impedía la llegada de nuevos elementos de trabajo, sino que destruía aquellos con que se contaba en la actualidad (15).

En todo caso resultaba muy difícil armonizar la adscripción del liberto a la finca donde había trabajado como esclavo, con los principios de la abolición, las leyes de la

economía social y las exigencias de la política. En otro orden de cosas, era preciso establecer que los supuestos desastres acaecidos en las colonias francesas y británicas y en los propios Estados Unidos como consecuencia de la abolición, no habían sido tales y en la medida en que se habían producido contrariedades en el orden económico y hasta el retroceso en la producción y en el comercio en los primeros tiempos, subsiguientes al planteamiento de las leyes emancipadoras, ello se había debido a lo complejo de dicha transformación social. El problema no estaba ahí, sino en ver la magnitud de esas alteraciones y la duración de sus efectos y en considerar si los logros superaban o no a esos desequilibrios iniciales (16).

En las colonias modernas se daban tres cuestiones, que se podían considerar como características porque a ellas se referían principalmente todos los problemas planteados en aquellas sociedades: la cuestión de las razas, la cuestión del trabajo y la cuestión de la espontaneidad local. A su vez, sobre estas tres cuestiones influían dos hechos de carácter puramente externo: la posición geográfica y la historia de la colonia. Por último, sobre todas estas condiciones, por efecto de la propia naturaleza de las cosas humanas y de la economía de toda sociedad colonial, obraba e influía una última y compleja condición: el adelanto moral y material del país, es decir, su cultura y su riqueza. No obstante, era preciso establecer una distinción entre la situación de Cuba y la que se daba en Puerto Rico. En Cuba existía un grave problema de razas como consecuencia del mosaico de hombres que albergaba. En Puerto Rico el problema estaba completamente vencido, pues la esclavitud era un detalle, la inmigración insignificante y la densidad de población extraordinaria, de tal forma que allí los intereses humanos, sociales, económicos, políticos y morales se superponían a los matices de piel y a las preocupaciones de origen (17).

Ciertamente, cabía establecer una distinción entre la situación social existente en las Antillas y la de la metrópoli, relativa a la inversión valorativa de los términos capitaltrabajo. Mientras en España la mano de obra abundaba hasta el extremo de que los conflictos provenían de la falta de empleo o de la retribución insignificante que obtenían las masas obreras, en las provincias ultramarinas las dificultades del movimiento industrial y las crisis económicas procedían las más de las veces de la carencia de brazos. De ahí que el problema de la población tuviera en Ultramar una importancia excepcional y que los productores coloniales hubiesen puesto particular empeño en asegurarse por medios más o menos violentos (la esclavitud entre ellos) el contingente de trabajadores necesarios para sus especulaciones (18).

En Cuba, el trabajo vivía constantemente en condiciones extremadamente desfavorables, motivo por el cual era urgentísima la necesidad de una numerosa y constante inmigración. Sin embargo, las cosas no mejorarían, mientras no variase el modo de ser político y social de la isla: la inmigración libre, la única fecunda y verdadera, no se produciría mientras subsistiesen la esclavitud y la dictadura. Y esto era así aun en contra del aparente argumento de los esclavistas, según el cual la dictadura y la esclavitud tenían que subsistir mientras no hubiese brazos libres y pobladores constantes, para que la producción continuara y para que la misma densidad de población hiciera difíciles o imposibles las perturbaciones políticas y economicosociales.

En todo caso, esto era, evidentemente, un argumento contradictorio. Cuando en Cuba se había aplicado dentro de ciertas condiciones una política reformista, liberal y expansiva, los resultados habían sido satisfactorios, tanto en el orden político como en el mercantil. De esta forma, aunque la isla era

esclavista y, por lo tanto, no sólo tenía escasez de obreros, sino que la esclavitud era la base de su organización industrial, estaba preparada excepcionalmente para una reforma de fondo en su organización económica y social, y ello era así con independencia de las inspiraciones del siglo, de las influencias del mundo culto, del ejemplo de otras colonias extranjeras y de la acción y propaganda de Sociedades y prohombres antiesclavistas (19).

Realmente, según los datos aportados por los abolicionistas y en contra de la argumentación adversa, la gran producción y, en concreto, la producción agrícola no sufriría una merma considerable al producirse la desaparición de la esclavitud, dado que, al margen de las estadísticas oficiales, el trabajo servil no representaba dentro de la población un porcentaje excesivamente alto, de manera que si, por ejemplo, del elemento esclavo de Cuba se rebajaban los niños y después las mujeres dedicadas al campo, el número de esclavos útiles se reducía a menos de la mitad (20).

De todo lo expuesto se deducían dos cosas: 1º) No era cierto que la abolición de la esclavitud hubiera producido en los países extranjeros en que se había realizado las perturbaciones, los desastres y las ruinas que tanto se ponderaban; y 2º) No era verdad que las Antillas hispanas se hallasen en situación análoga a la de aquellos países la víspera de la abolición, sino que, por el contrario, todo en ellas era excepcionalmente favorable a una solución radical del grave problema de la libertad de trabajo. Ciertamente, la abolición tenía que lastimar, inevitablemente, algunos intereses, pero ello se hacía en aras del progreso y, en todo caso, no equivalía a una completa ruina, sino que suponía el triunfo de la justicia sobre las minorías existentes. No obstante, se precisaba un arranque de valor que abordara el problema de forma inmediata, pues cada día que pasara haría más compleja su solución.

Como ya se dijo, la adscripción del liberto a la finca donde trabajaba como esclavo era una auténtica burla, amén de suponer una imposibilidad moral y un peligro constante para el orden público y para el desarrollo de la riqueza; de forma que ese liberto se creería esclavo por la fuerza, pero nunca por su nacimiento o por la ley y no se le podría obligar al trabajo sin acudir a procedimientos esclavistas. Además, ni las decantadas catástrofes de las colonias extranjeras habían sido verdad, ni sus desgracias habían procedido de la abolición, ni el estado de las Antillas hispanas autorizaba a tener las contrariedades que registraba la Historia económica contemporánea de aquellos países; antes al contrario, lo que del estudio de aquellas comarcas en los días de la abolición se deducía era que allí donde los poseedores de esclavos no habían logrado vencer sus preocupaciones y aceptar con ánimo la transformación del trabajo, que se imponía por diferentes caminos, era donde la emancipación del negro se había realizado con algún perjuicio en todo caso local y limitado (21).

Por otra parte, en Puerto Rico el propio desarrollo demográfico favoreció el progreso insular, al tiempo que el apalancamiento rural se hizo sumamente difícil, debido a que el mayor contacto entre los individuos no lo propiciaba; de hecho, fue inexistente el peligro a la tan temida revuelta negra, tópico al uso de la oposición conservadora. Tal como señaló don Rafael María de Labra, los resultados de la abolición en Puerto Rico excedieron de lo que inicialmente podía haberse esperado de ellos: los negros libres organizaron sus viviendas en chozas contiguas a las haciendas azucareras; se mantuvo el orden público; se redujo la delincuencia; la producción disminuyó poco, y muchos libertos acordaron contratos con sus antiguos dueños.

Dentro de la labor de reorganización socioeconómica que implicaban las nuevas estructuras sobre las que se tendría que

asentar la vida de la isla en lo venidero, desempeñó un importante protagonismo la Sociedad Abolicionista Española. En efecto, la Sociedad Abolicionista, que tan destacado papel había desempeñado en pro de la consecución de la abolición de la esclavitud, no se quedó atrás ahora que era preciso dar otro paso no menos importante: la correcta aplicación de los reglamentos que debían llevar al terreno de la práctica lo que ya se había aprobado teóricamente. De acuerdo con estos supuestos, la Sociedad desarrolló su trabajo en un triple plano, tendente a conjugar tres aspectos: el social, el jurídico y el administrativo. En este sentido, cuidó de que los libertos encontrasen trabajo; de que recibiesen la educación adecuada y de que se asistiese a los enfermos, incapacitados y disminuidos. En el plano jurídico decidió acometer la tarea de denunciar a las autoridades los abusos que se cometiesen contra la ley, y en el plano administrativo, la de realizar un informe cada medio año sobre el estado general de la isla y aspectos particulares de ésta, acompañado de las recomendaciones que juzgase oportunas.

Esta actitud de vigilancia ejercida por la Sociedad junto al propio desenvolvimiento generado por la nueva situación coyuntural, pronto tuvo sus repercusiones de carácter positivo, presentes en la reducción de los malos hábitos y costumbres y de las infracciones contra la paz pública, con lo que el orden quedó más firmemente establecido que antes y, lo que es más importante todavía, ampliamente respetado por los libertos. Todo ello desmontaba las consabidas argumentaciones de los esclavistas, relativas a la producción de graves perturbaciones sociales, inherentes a la abolición de la esclavitud (22). Por lo que respecta al punto de vista económico, éste no se vió esencialmente alterado, sobre todo si se consideran las fluctuaciones propias de todo cambio estructural. Así, pues, las primeras repercusiones surgidas de la nueva situación se

mostraron prometedoras tal y como fueron consignadas por el General Primo de Rivera al abandonar la isla a principios de Febrero de 1874 (23).

La ley de abolición en Puerto Rico se asentó, fundamentalmente, sobre tres supuestos: la plena libertad civil, la contratación temporal forzosa y el aplazamiento de los derechos políticos de los libertos. Planteado el problema de dar plena vigencia a la ley, llevándola del terreno de los supuestos teóricos al de las realizaciones prácticas, se confeccionó un reglamento para su aplicación, que fue aprobado por el Ministerio de Ultramar en Marzo de 1873. El contenido fundamental de dicho reglamento giraba en torno a la regulación laboral y a su control, motivo por el cual todo lo relacionado con dicha materia encontraba en él un amplio desarrollo: registro de los libertos; situaciones de los disminuídos y desamparados; contratos de trabajo de los citados libertos, que no podían estar parados; normas salariales y de horario laboral; características jurídicas de los contratos; delimitación de la figura y atribuciones del Protector de libertos; división departamental de la isla a efectos de contratación, etc.

Sin embargo, con la entrada en vigor del reglamento, destinado a poner en práctica la ley de abolición, pronto empezó a surgir toda una serie de dificultades y de contratiempos. Así, por ejemplo, y en el terreno meramente jurídico, se planteó una contradicción evidente al promulgarse en Puerto Rico, con fecha 30 de Agosto de 1873, el Título I de la Constitución de 1869, dado que el citado Título garantizaba los derechos políticos y civiles de los españoles de Puerto Rico, mientras que según la ley de abolición esos mismos derechos no podían ser disfrutados por los libertos hasta pasados cinco años. Pero todavía se acentuaron más las contradicciones al publicarse el 10 de Abril

de 1874 (casi al año de la aparición del reglamento de 1873) otro texto reglamentario, que se oponía abiertamente a los derechos ciudadanos de los libertos al obligar a éstos a cumplir los contratos por espacio de tres años sin posibilidad de rescindirlos, amén de contener otras medidas de tipo restrictivo en sus condiciones laborales.

De esta forma, no sólo se adulteró básicamente el sentido de la ley abolicionista y se atentó contra la libertad personal de los libertos, sino que el mencionado reglamento de 1874, dado el espíritu de su contenido, supuso un retorno, en conjunto, al Reglamento de Esclavos y a la legislación sobre esclavos cimarrones, de carácter claramente coercitivo. Así, pues, de acuerdo con este nuevo reglamento de 1874, que sentaba el principio de la no retroactividad de las leyes, se empezó a revisar los contratos, con lo cual resultó de hecho que las nuevas disposiciones legislativas daban carácter interino y provisional a las de 1873, de tal forma que estas medidas se constituyeron en la negación más rotunda y completa de la propia ley abolicionista votada por la Asamblea Nacional. Ante tal situación, no se hizo esperar la reacción de protesta, por parte de la Sociedad Abolicionista Española, la cual frente a tan arbitrarias medidas desarrolló una activa campaña, que no obtuvo más resultados que el mantenimiento, por parte del Gobierno, de la contradicción legislativa, de acuerdo con la cual el Gobernador don José Laureano Sanz declaró en vigor el reglamento de 1873 e hizo otro tanto con el Decreto de 10 de Abril de 1874.

En tal sentido, la Sociedad Abolicionista Española elevó al Ministerio de Ultramar, en 15 de Julio de 1874, una extensa y razonada exposición respecto de los primeros efectos de la ley abolicionista en la Pequeña Antilla. En ella se extractaban los informes de los Cónsules de Inglaterra, Francia,

Estados Unidos y Alemania en Puerto Rico; los del Gobernador General; los del Presidente de la Audiencia y los del Jefe de la Guardia Civil y muchas otras cartas de hacendados puertorriqueños de positiva importancia, en las que se ponía de manifiesto el estado político, económico y social de la isla antes y después de la abolición. Asimismo, se hacía referencia a lo que había sucedido en las Antillas francesas e inglesas en la época de la abolición de la esclavitud en aquellos países.

La citada exposición, junto con otra posterior del 30 de Septiembre de aquel mismo año, fue recogida y comentada por Labra, publicandose bajo los auspicios de la propia Sociedad Abolicionista. En dicha publicación se ponía de manifiesto cómo los esclavistas habían atacado el proyecto abolicionista para Puerto Rico desde el primer momento, clamando contra las perturbaciones que esta reforma produciría en la Pequeña Antilla y contra los efectos desastrosos que determinaría en Cuba; postura esta, que fue claramente contestada por los abolicionistas.

No obstante, la experiencia puertorriqueña exigía una más amplia profundización en sus logros, ya que, inicialmente, había alcanzado unos resultados satisfactorios. Aun así, el reglamento de aplicación no era asumido, en plenitud, por las autoridades en Puerto Rico, mientras que en Cuba se ponían trabas a su desarrollo tal como demostraba el hecho de que se exigiese el pago en metálico de las coartaciones y rescates que debían satisfacer los siervos. Pero estas circunstancias adversas no debían debilitar en lo más mínimo la fe y la perseverancia de los abolicionistas, aunque de momento las esperanzas en un porvenir más halagüeño se vieran ensombrecidas por los sufrimientos, la guerra civil, la crisis económica y el desequilibrio social (24).

Aparte de estos hechos, no paró aquí la manipulación de la situación, ya que al tiempo que se publicaban las disposiciones gubernativas antes citadas, se auspició intencionadamente la creación de una atmósfera de desorganización en la propia aplicación de otros aspectos de la ley al objeto de provocar entre los libertos un sentimiento de aversión hacia la nueva situación que les había otorgado la libertad. En este mismo sentido y abundando en esta idea, tendente a fomentar el disgusto y la desorientación entre los libertos, se les acusó, lo cual no era cierto, de protestar en contra de las mencionadas leyes aprobadas por el Gobierno, que, en realidad, tergiversaban, como se ha indicado, la ley abolicionista.

Al cumplirse en 1876 los tres años del cese de la esclavitud, se impuso la necesidad de dar una nueva orientación al proceso, dado que al mismo tiempo caducaba la obligatoriedad de los contratos. De acuerdo con esto, el Gobernador de Puerto Rico propuso a Madrid que se aprobase un nuevo reglamento que regulara las relaciones laborales entre patronos y obreros, pero esta vez el Gobierno no se mostró favorable a la propuesta, sino que más bien sostuvo la tesis de continuar, lisa y llanamente, los procedimientos de la ley de abolición que se oponían a la reglamentación del trabajo libre; de esta forma, se mantuvo el derecho a la libertad, limitado tan sólo por las prescripciones del Derecho Común. En relación con ello estaba claro que en el momento en que quedasen abolidos los contratos, los libertos podrían ofrecer su trabajo libremente a quienes quisiesen, motivo por el cual a instancias del Gobierno las autoridades municipales y eclesiásticas se comprometieron a velar por los intereses de los mencionados libertos.

Por su parte, los expatronos se obligaron a ofrecer trabajo a los que se encontraran en una situación precaria y de

desamparo, al tiempo que se organizaron en juntas, lo mismo que los obreros al objeto de defender los intereses comunes y vigilar el estricto cumplimiento de los nuevos contratos. La situación llegó a término el 20 de Abril de 1876, momento en el cual terminaron de forma oficial los contratos obligatorios, pasando los libertos a contratarse libremente y a disfrutar en plenitud de los derechos civiles (25). Ciertamente, la escasez de mano de obra produjo en un primer momento una cierta alteración al quedar los negros en libertad de acción para contratarse con quienes quisieran. Sin embargo, aunque algunos se dieron a la vagancia y otros buscaron a los hacendados que les ofrecían mejor salario, con lo que desequilibraban la estructura económica existente, en general, la cuestión no revistió mayor gravedad, ya que los negros fueron integrándose en una u otra plantación azucarera ante la necesidad de sustentarse con el fruto de su trabajo. Otras implicaciones se derivaron de la emancipación total, tales como una revolución de índole económica, debida a la industrialización de los procesos productivos (aunque esto no ocurrió inmediatamente, dada la carencia de capital, que afectaba a los propietarios en aquellos momentos) y la cuestión de la indemnización a los propietarios por los esclavos libertados, tema cuya solución debía cerrar de forma definitiva la obra abolicionista.

Los propietarios se defendieron ante el pequeño retroceso económico producido en los primeros momentos, aduciendo que, si se les hubiese indemnizado como el Gobierno les había prometido, hubieran adquirido la maquinaria necesaria para llevar a cabo la industrialización precisa. Como medida de urgencia se arbitró la solución de depositar en el Banco de Puerto Rico las cédulas de esclavos, contra las cuales la citada entidad bancaria les adelantó el dinero necesario. En relación con esta cuestión, tal como se indicó anteriormente, el 30 de Septiembre de 1874 ya

había enviado la Sociedad Abolicionista Española una protesta al Gobierno de Madrid, quejándose de la situación existente. En la mencionada exposición se denunciaba el incumplimiento de los artículos 3º, 4º y 6º de la ley de abolición, relativos a la indemnización, al tiempo que se ponían de manifiesto las dificultades que atravesaban la agricultura y el comercio de Puerto Rico, motivadas por la escasez de metálico, cuestión que, evidentemente, redundaba en perjuicio de las clases trabajadoras (26).

También los esclavistas realizaron una intensa campaña a fin de lograr el pago de la indemnización. Fruto de estos planteamientos fue la reunión, en Diciembre de 1874, en el Ayuntamiento de San Juan de cien propietarios de esclavos con el objeto de elegir cuatro exdueños, dos de los que hubiesen tenido el mayor número de esclavos y dos de los que hubiesen poseído la menor cantidad de ellos con la misión de representarlos en una junta que se reuniría al efecto para decidir sobre la cuestión de la indemnización. La junta quedó constituida el 29 de Diciembre de aquel año con la misión de llevar a cabo la indemnización, llegándose al acuerdo de abonar una cantidad equivalente al valor de los esclavos poseídos en 30 de Marzo de 1873 sin más distinción y de añadir un veinticinco por ciento por cada uno que no se hubiera contratado con su antiguo dueño. Para llevar a cabo los aspectos de tipo práctico relacionados con el tema, se acordó nombrar una comisión, cuyo cometido era averiguar el número de esclavos comprendidos por la ley, los nombres de los dueños a quienes afectaba la medida y los de aquellos a los que se les debía pagar la sobretasa del veinticinco por ciento. Por último, se decidió que, una vez se hubiese reunido toda la información al respecto, se daría cuenta de ello al Gobernador, acordándose la forma de efectuar los pagos.

Dentro de estos planteamientos y mientras se procedía al estudio correspondiente, se intentó arbitrar soluciones de tipo particular, como la protagonizada por don Tomás Sáenz Hermua. El señor Sáenz Hermua presentó a la Sociedad de Agricultura de Ponce una proposición para negociar los bonos que el Gobierno debía entregar a los exdueños de esclavos: la citada Sociedad se constituiría en un sindicato, que garantizaría a una firma bancaria de Europa las cuatro quintas partes de los mencionados bonos. Realmente, siempre que los tenedores de cédulas depositasen su confianza en la Sociedad de Agricultura, la operación tendría grandes posibilidades de éxito; por ello y al objeto de sondear la opinión, se hizo un llamamiento a los propietarios, pidiéndoles que emitiesen su parecer por escrito. Pero las negociaciones del señor Sáenz Hermua fracasaron, en cuanto se enteraron de ellas las autoridades gubernamentales, las cuales protestaron airadamente, objetando que eran innecesarias las acciones intermediarias de particulares, puesto que el Gobierno no había eludido en modo alguno las responsabilidades inherentes al decreto de la ley de abolición, de acuerdo con lo cual las autoridades metropolitanas cumplirían su promesa y afrontarían el problema por sí, bien mediante la contratación de un empréstito o mediante la entrega de títulos a los expropietarios de esclavos (27).

Mientras tanto, la junta, formada en Diciembre de 1874 para enfrentarse con el problema de la indemnización, se reunió de nuevo el 3 de Abril del año siguiente para informar de sus realizaciones, nombrándose una comisión, que debía revisar el trabajo efectuado y liquidar, posteriormente, a los poseedores. Siguiendo con esta tónica, el 12 de Junio de 1875 Alfonso XII autorizó al Ministro de Ultramar don Abelardo López de Ayala para contratar un empréstito de treinta y cinco millones de pesetas para el pago de la indemnización, al tiempo que se procedería a

la emisión de setenta mil títulos por un valor de cien pesos cada uno con un interés del seis por ciento y amortizables mediante sorteos anuales sobre las rentas públicas de la isla. En el mes de Agosto quedó decidida la tramitación del empréstito, prometiéndose a los exdueños que para fines de año serían indemnizados, bien con dinero en metálico o bien con títulos. Sin embargo, la cuestión adquirió cierta complicación, ya que al expirar la fecha prometida el empréstito no se había colocado, ante lo cual tuvieron que expedirse unas carpetas provisionales en sustitución de los títulos definitivos, suscitando, además, dicha situación una protesta por parte de los exdueños, que intentaron compensarse con la solicitud de que se abriesen los puertos nacionales a los azúcares puertorriqueños o bien que se efectuase un acuerdo comercial con Estados Unidos (28).

El 18 de Abril de 1876, la Junta de Indemnización tomó la decisión de enviar las relaciones de los libertos a los Alcaldes y pueblos correspondientes y se estableció un plazo de medio mes para realizar las reclamaciones que estimasen oportunas. El 26 se publicaron las listas de exdueños, enviadas dos días más tarde, al tiempo que se ordenaba la impresión de las mencionadas carpetas. El 9 de Junio se recibió una comunicación del Ministerio de Ultramar, en la que se indicaba que se acelerase el proceso de distribución de las carpetas y que se comunicara a los afectados que se pagarían. Ante tal comunicación, la Junta se defendió aduciendo dificultades de procedimiento para justificar el retraso que se había producido en el reparto de las cartillas y ordenó a los Alcaldes que cumplieran con toda celeridad las órdenes remitidas. Una vez elaboradas las estadísticas correspondientes tras algunas modificaciones motivadas por la inclusión de algunos esclavos no integrados en el Padrón de 1873, la Junta fijó la fecha del 31 de Julio de 1876 para dar comienzo al canje de las carpetas

provisionales por las cédulas, mientras que se autorizaba en el mes de Agosto al Ministerio de Ultramar, para que diese las órdenes oportunas conducentes a la confección de los títulos.

Aun así, hubo un retraso, prolongado hasta el mes de Diciembre de 1877, aunque inicialmente se había pensado que para el 15 de Octubre de aquel año estarían canjeadas todas las cédulas. De hecho, desde principios de año se había iniciado la celebración de sorteos conducentes a la amortización de los billetes, que alcanzaron el número de quince, el último de los cuales tuvo lugar el 12 de Mayo de 1890, momento en el que quedó definitivamente liquidada la cuestión de la esclavitud en Puerto Rico, diecisiete años después de decretada por ley la abolición (29).

N O T A S.

- (1) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico. (Propaganda Antiesclavista) (Madrid 1873), págs. 23-24.
- (2) Ibid., págs. 24-25.
- (3) Ibid., págs. 29; 36-37 y 38.
- (4) Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 27 de Febrero de 1873.
- (5) Ibid., 27 de Febrero de 1873.
- (6) Ibid., 27 de Febrero de 1873. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 2.
- (7) Ibid., 3 de Marzo de 1873. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 3.
- (8) Ibid., 14 de Marzo de 1873.
- (9) Ibid., 18 de Marzo de 1873. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 4.
- (10) Sobre la Ley de Abolición de 1873 y sus vicisitudes véase, NAVARRO AZCUE, CONCEPCION: La Abolición de la Esclavitud Negra en la Legislación Española, 1870-1886 (Madrid 1987), pág. 127-159. Véase también Apéndice Documental II. Apéndice núm. 3.
- (11) CORWIN, ARTHUR, F.: Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886 (Austin 1967), págs. 255-291; DIAZ SOLER, LUIS M.: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (San Juan 1974), págs. 309-348 y MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: El Movimiento Abolicionista en España (1865-1873) (Barcelona 1968), págs. 60-87 y 91-121.
- (12) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en el Orden Económico (Madrid 1873), pág. 6.
- (13) Ibid., págs. 15-17.
- (14) Ibid., págs. 18-19 y 21-23.
- (15) Ibid., págs. 26-39.
- (16) Ibid., págs. 41-43.
- (17) Ibid., págs. 221-222; 231 y 233.

- (18) Ibid., págs. 235-236.
- (19) Ibid., págs. 255-256; 258, 261 y 266.
- (20) Ibid., págs. 269-270.
- (21) Ibid., págs. 384-386.
- (22) Sobre diversos aspectos relativos al problema de la esclavitud en Puerto Rico y a su proceso emancipador véase, COLL Y TOSTE, CAYETANO: Historia de la Esclavitud en Puerto Rico. (Información y Documentos) (San Juan 1972).
- (23) Sobre los resultados y repercusiones de la Ley de abolición en Puerto Rico véase, La Abolición en Puerto Rico. (Primeros Efectos de la Ley de 22 de Marzo de 1873) (Madrid 1873).
- (24) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Experiencia Abolicionista de Puerto Rico (Madrid 1874), págs. 99-102.
- (25) Sobre estas cuestiones véase, LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico. (Propaganda Antiesclavista) (Madrid 1873).
- (26) Para algunos comentarios sobre el particular véase, RODRIGUEZ OTERO, ELADIO: La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico: Su Significado en el Proceso de Liberación del Hombre y de la Patria (s.l. 1973).
- (27) Sobre aspectos relacionados con estos temas véase, PICO, FERNANDO: Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del Siglo XIX (Bogotá 1979).
- (28) Estas y otras cuestiones pueden seguirse en El Proceso Abolicionista en Puerto Rico: Documentos para su Estudio (San Juan 1974).
- (29) Para el proceso en general véase, DIAZ SOLER, LUIS M.: Ob. cit., págs. 349-371.

2.1.3) LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD EN CUBA (1880).

Como ya se indicó anteriormente, la solución de la cuestión social de los negros había quedado pendiente en la isla de Cuba. No obstante, su desenlace venía ya preludiado por una serie de hechos, entre los que se contaban, tanto la ley abolicionista de Puerto Rico de 1873 como la propia Paz del Zanjón de 1878, cuyo artículo 3º otorgaba "la libertad de los colonos asiáticos y esclavos que se hallen hoy en las filas insurrectas", al tiempo que tampoco podía olvidarse, por la repercusión social que había tenido, el acuerdo tomado por la Asamblea de Representantes del Centro, departamento de Camagüey, aboliendo la esclavitud en 1869, de tal forma que desde la toma del mencionado acuerdo la abolición en Cuba se presentó ya como inevitable.

Así, pues, y tal como sabemos, en Julio de 1870 los esfuerzos antiesclavistas se concretaron en la ley preparatoria (conocida como Ley Moret), por la que quedaban libres, tanto en Cuba como en Puerto Rico, todos los nacidos de madre esclava desde 1862, previo pago a los dueños de ciento veinticinco pesetas como indemnización; los esclavos pertenecientes al Estado (emancipados); los mayores de sesenta años; los que hubieran servido en las filas rebeldes (liberados ya por los insurrectos) y los que no apareciesen inscritos en el censo formado en Puerto Rico el 31 de Octubre de 1869 (1).

Muy distintos fueron, no obstante, los efectos de la Ley Moret en Cuba y en Puerto Rico. En relación con ello, Labra al destacar el papel jugado por la Sociedad Abolicionista Española con respecto a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, puso de relieve la problemática existente en Cuba, en un discurso pronunciado en la Junta General de Socios, celebrada el

1º de Enero de 1874 en el Salón de Sesiones de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. Consideraba Labra que la abolición de la esclavitud en Cuba era un asunto que evolucionaba de día en día, pasando de ser una cuestión de justicia, un punto de honra y una exigencia derivada de los postulados revolucionarios de 1868, a convertirse, además, en un imperativo que obligaba categóricamente a la metrópoli. Parecía casi incomprensible que una vez proclamado el dogma de los derechos naturales del hombre, consignados, incluso, por la propia Constitución de 1869, subsistiera todavía la servidumbre en las provincias de ultramar. Realmente, ello era deplorable y no debía mantenerse por más tiempo, ya que, como había dicho Lincoln, un pueblo no podía ser "mitad libre y mitad esclavo" (2).

Ciertamente, el panorama se presentaba en Cuba muy ensombrecido por el hecho de haberse burlado hasta el presente la normativa antiesclavista, de tal forma que, por ejemplo, continuaban en servidumbre los bozales, cuya venta, no obstante, estaba prohibida desde 1815 de acuerdo con un tratado suscrito entre España y Gran Bretaña. Por otra parte, no suponía una dificultad menor la cantidad de negros huídos a las filas insurrectas, en donde habían encontrado la libertad que en otro lugar se les negaba, amén de todos los que la habían obtenido por encontrarse desde el primer momento en el campo rebelde. Esto suponía una fuerte distorsión en el plano social y político de la vida antillana, cuyo planteamiento contrario podía, sin embargo, suponer la solución de los problemas existentes.

Ciertamente, uno de los medios más poderosos para acabar con la insurrección cubana era hacer ver a los negros la posibilidad de conseguir una libertad mayor en el seno de la sociedad que hoy combatían y en medio del orden que atacaban, de

la que disfrutaban en el campo de la rebelión. De esta forma, si se quería tener entre las manos un instrumento político eficaz para devolver la paz a Cuba, era preciso acabar con el problema social planteado por la raza de color, y arrancar, de una vez por todas, de la vida antillana las influencias del monopolio y de la esclavitud (3).

Como era de todos conocido, la abolición se había efectuado en Puerto Rico, aunque sin dotar a los poseedores de esclavos de los medios necesarios para hacer frente en los primeros instantes a las dificultades que traía consigo la exigencia de jornales a los trabajadores libres, y sin facilitar mercados para los productos de aquella isla. Por esta razón, una vez que se había producido la abolición en la Pequeña Antilla, era preciso extenderla a Cuba, a pesar de que allí topaba con una serie de dificultades, entre las que se contaban: la guerra como factor principal; el hecho de que muchos esclavos eran bozales; la administración esclavista existente todavía, y la siempre perturbadora presencia de Estados Unidos, exarcebada, por aquel entonces, por la captura del buque norteamericano "Virginius". Precisamente, la mayor dificultad provenía de la guerra misma, ya que ésta restaba fuerza a la adopción de medidas abolicionistas. "Por esto, señores, yo he lamentado con tanta insistencia la insurrección cubana; por eso afirmo hoy, sin temor a ser desmentido, que el primer obstáculo de la abolición es esa insurrección que tanto daño ha hecho a la reforma colonial" (4).

No obstante, como ya se indicó anteriormente, no era la guerra la única dificultad existente. El gran número de bozales con que contaba Cuba (cerca de las dos terceras partes de los esclavos de la isla), y el régimen de vida que llevaban, apartados de la sociedad (la mayor parte de ellos se hallaban dedicados a los trabajos rústicos en los ingenios y en los campos

de caña) los hacía difícilmente asimilables. Se trataba de un considerable grupo de hombres, totalmente extraños por su origen, por su lengua y por sus costumbres, no sólo a la propia sociedad cubana, sino incluso a los usos y prácticas del mundo civilizado, con lo cual se hacía patente el choque que se produciría al ponerlos en contacto con la cultura y los intereses de la sociedad moderna. Y a esto había que añadir que parte del personal administrativo de Ultramar era refractario a la adopción de las reformas (5).

Para terminar, Labra dejaba clara su posición y la de los abolicionistas: "Nuestra posición es inexpugnable. No entra en nuestros principios el apelar a los medios violentos, no cuadra a nuestras tradiciones, ni a nuestros fines el salir fuera del círculo de la ley. El procedimiento pacífico y legal ha sido siempre uno de nuestros principales recursos, la primera de nuestras reglas de conducta. En este supuesto, incesantemente hemos recomendado a los pobres esclavos de Ultramar que lo esperen todo de la propaganda pacífica que aquí hacemos y de la legítima influencia que en el ánimo de nuestro Gobierno ha de ejercer el consejo del mundo culto escandalizado" (6).

En Puerto Rico, aunque a través de un proceso un tanto complicado, se llegó, por fin, en 1873 a una ley definitiva, cuya consecución supuso la libertad total para los negros, pero, en cambio, en Cuba el Capitán General retrasó todo lo que pudo su aplicación, y cuando se publicó en la "Gaceta de La Habana" la Ley de 1870, todavía quedó en suspenso hasta la redacción de un reglamento que le diera viabilidad práctica.

Realmente, la situación en que había vivido el negro, oprimido por el sistema esclavista, le predisponía a la desesperación y a la muerte y fomentaba la posibilidad de un

estallido de violencia en las mismas provincias de Ultramar. Se le había desarraigado de su entorno africano de forma violenta, para pasar, después, un sinnúmero de calamidades durante la travesía, que le conduciría a su ulterior destino. Una vez adquirido por su amo, no le esperaba mejor suerte en el ingenio, víctima de la brutalidad del mayoral y sometido a toda clase de castigos, para terminar su jornada apiñado junto a sus compañeros en un infecto barracón; y, precisamente, contra el intento de superar esta situación se habían rebelado los esclavistas con toda clase de argumentos (7).

Desde un punto de vista histórico, España y Portugal habían estado a la cabeza de la trata negrera. Mientras Portugal se había dedicado más a la captura de negros en Africa, España lo había hecho en el sentido de organizar el sistema en las propias Indias Occidentales, al tiempo que Portugal se había anticipado a España en la abolición de la servidumbre en Europa (8). Por otro lado, Inglaterra suprimió, por fin, la trata y se convirtió en abanderada del abolicionismo, mientras en España subsistía esta lacra con el consiguiente peligro que ello representaba para la sociedad ultramarina (9). De esta forma, las repercusiones morales, sociales y económicas del mantenimiento de la trata no terminarían, si no se acababa totalmente con la esclavitud (10). En el mismo sentido era perniciosa la influencia social y política de los esclavistas, que hipócritamente ocultaban sus verdaderos objetivos tras una argumentación retórica, encaminada a hacer una presentación falsa de los hechos con el fin de confundir a la opinión (11).

Los esclavistas, amparándose en la etiqueta de conservadores, pretendían a toda costa defender sus posturas, que eran presentadas como prudentes, en tanto que se tachaba de exageradas y extravagantes las de los abolicionistas. No eran

válidos los ejemplos aducidos, que abonaban más bien las tesis a favor de la abolición y, en todo caso, se hacía impresentable la idea de una abolición gradual, que no hacía más que prolongar la situación, envolviéndola con subterfugios y falacias. Además, todo ello arrastraba hacia la subversión del orden económico y social y hacia la perturbación del orden público, por lo que se hacía imprescindible la aplicación de la abolición simultánea e inmediata (12).

Por otra parte, era preciso tener en cuenta los insuperables inconvenientes que suponía para el proceso inmigratorio la existencia de la esclavitud. El problema se manifestaba en el sentido de que la inmigración se hacía necesaria para el ulterior desarrollo de la economía y del proceso civilizador del mundo antillano, y desde luego no podía llevarse a cabo, si no era en una atmósfera de libertad, incompatible con el mantenimiento de la institución esclavista bajo la forma que fuera. Evidentemente, mal podía moverse en semejante ambiente una corriente migratoria que tenía que relacionarse en el ámbito laboral con situaciones que deshonraban al trabajo mismo, y desde luego esto no iba a solucionarse prolongando una situación falsa bajo la forma de una abolición gradual, a pesar de lo que dijese los esclavistas. Aparte de todo esto, no debía olvidarse el pernicioso influjo que suponía la esclavitud para el desarrollo de la sociedad misma al introducir en su seno elementos de desequilibrio (13).

Dada la campaña de desprestigio desatada contra los negros, a los que se les acusaba de toda clase de desviaciones, propias de su naturaleza, era preciso aclarar las cuestiones relativas a este tema. Entre otras cosas, se achacaba a los negros el ser indolentes para el trabajo, tener unos feroces instintos y estar negados para la recepción de la cultura. Sin

embargo, los negros presentaban valores como la abnegación y la humildad, patentes en innumerables casos y especialmente visibles en las ausencias de importantes revueltas; por otra parte, su robustez física les dotaba adecuadamente para el trabajo (14). Estas cuestiones venían avaladas por datos estadísticos, que ponían de manifiesto lo argumentado, especialmente al referir el tema a Puerto Rico (15). En relación con la supuesta vagancia atribuida al negro, aparte de no ser cierta, caso de existir algo de verdad en ello, no era de extrañar, si esto se enmarcaba dentro del contexto de la esclavitud, en donde desde luego no era exigible que el trabajador esclavo mantuviese una actitud de entusiasmo y de dinámica colaboración. Por otra parte, el ambiente esclavista, en lugar de estimular cualquier acción propiciaba por su propia naturaleza todo lo contrario (16).

Por último, quedaba claro que el negro no era ni con mucho refractario a la cultura moral e intelectual, tal como se desprendía de varios ejemplos, y todo esto aun teniendo que desarrollarse dentro del conjunto establecido por la esclavitud misma (17). Según se desprendía de la actitud gubernamental, parecía que el problema de la esclavitud ya no existía, dado que la postura oficial consistía en mantener un silencio absoluto sobre el particular. En las Cortes no se hablaba para nada de la libertad de los negros; los poseedores de esclavos, solícitos, anteriormente, en discutir y proponer planes de abolición, habían desistido de la idea y continuaban explotando a los negros, y la Capitanía General de Cuba, que no hacía mucho incitaba al examen de la cuestión, afirmando que era una necesidad el discutirla y resolverla conforme demandaban las circunstancias, aunque de un modo sosegado, ahora no dedicaba ni una sola palabra al problema, a la vez que vinculaba la solución de los temas pendientes en Cuba a la terminación de la guerra (18).

En todo caso, las circunstancias políticas y sociales de Cuba no eran las más adecuadas para exigir un paradigma de conducta ejemplar por parte de un sector de la población que se encontraba sometido a toda clase de presiones. Por otro lado, la cuestión se diluía todavía más, si se refería a Puerto Rico, donde, como era conocido, el problema no alcanzaba los límites que en la Gran Antilla (19). Realmente, no se podía aceptar una argumentación contra el carácter del negro, fundada, precisamente, en una condición externa que rebajaba y corrompía a todo individuo de cualquier raza que fuera, y en segundo lugar el mero hecho de que la esclavitud hubiese existido y existiera en las Antillas, debía ser tenido como circunstancia atenuante para juzgar al negro (20).

De todo lo expuesto se deducía lo siguiente: 1º) Todo cuanto se decía de la perversidad moral y de la miseria intelectual de la raza negra era falso; 2º) En la misma Cuba, a pesar de las dificultades que ofrecía toda sociedad esclavista, los negros libres, o igualaban o superaban a los blancos en algunos aspectos; 3º) En Puerto Rico y en otras sociedades libres el espectáculo que ofrecía la raza africana era grandemente alentador y daba derecho a creer que en condiciones favorables el negro de Cuba llegaría al apogeo de la civilización; y 4º) En ningún caso podía hacerse de la supuesta brutalidad del negro un argumento contra la abolición de la esclavitud. Mientras la sombra de la servidumbre envolviese al negro africano, éste carecería de los medios necesarios para su redención, que solamente se haría posible en la libertad y por la libertad. Por otra parte, estaba demostrado que allí donde se había intentado la abolición gradual, ésta había fracasado. Si se quería educar al negro, se tenía que proclamar ante todo su libertad, reconocer su derecho y avivar en su conciencia el sentido de su personalidad, complementado todo ello por un aumento de la

enseñanza, un fomento de las instituciones benéficas y una reorganización del orden, sin que esto supusiese una eternización de la injusticia existente hasta aquel momento (21).

Ciertamente, en 1878 el planteamiento general en Cuba no había mejorado ostensiblemente. Cuando se publicó el reglamento destinado a poner en práctica la Ley de 1870, tampoco se puso en libertad a los emancipados ni a los cien mil negros que los insurrectos habían liberado en 1869; no se había hecho el censo que ordenaba la ley; a los emancipados que tenían contrato por ocho o diez años, si huían se les anunciaba entre los esclavos fugados, quedando sometidos a su régimen, y, además, se hizo toda clase de trampas en las edades de los negros con el beneplácito de las autoridades. A pesar de ello, poco antes de la firma de la Paz del Zanjón y al objeto de facilitar la consecución de ésta, se dió un nuevo paso en sentido positivo, según el cual el Capitán General Martínez Campos mandó publicar una orden, por la cual quedaban libres todos los esclavos insurrectos del departamento central que estuviesen en condiciones insurgentes desde antes del 1 de Noviembre de 1876, siempre que solicitasen el indulto con anterioridad al 1º de Marzo de 1878, aunque sin derecho a indemnización en el caso de que los dueños hubieran sido igualmente insurrectos (22).

Sin embargo, era preciso reconocer que en Cuba el problema de la abolición de la esclavitud comportaba una serie de variables, que complicaban enormemente la cuestión, si se la comparaba con Puerto Rico (23). Ciertamente, la implantación en Cuba de las medidas abolicionistas tenía en contra las oposiciones internas y las complicaciones internacionales, en especial protagonizadas por la actitud al respecto de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Estados Unidos, que veía con disgusto la existencia de la esclavitud en Cuba, se había pronunciado,

además, abiertamente en contra de la guerra, deseando que ésta terminase cuanto antes e incluso dejando entrever que, si no acababa pronto, podría llegar a intervenir. Por su parte, Gran Bretaña y otras potencias europeas se decantaron asimismo por la abolición de la esclavitud y por la reforma colonial. La actitud del Gobierno español ante estas presiones diplomáticas consistió en responder que primero debía cesar la insurrección y que luego se emprenderían las reformas pertinentes (24).

Durante el transcurso de la guerra, la Ley Moret no se había aplicado en Cuba en líneas generales, y en la medida en que lo había sido, respondía en su aplicación a la voluntad del Capitán General, quien controlaba los criterios al respecto. Ante la puesta en práctica de la ley, se constituyó una Junta Central Protectora de Libertos, que debía hacerse cargo de los problemas planteados por los emancipados; pero, en todo caso, las dificultades se allanaron al reducirse considerablemente el número de esclavos como consecuencia de la mortalidad provocada por la guerra (el censo de 1869 dió un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y ocho esclavos, mientras que el de 1878 registró solamente la cantidad de doscientos veintisiete mil novecientos dos (25)). Un papel semejante en orden a falicitar la abolición de la esclavitud lo constituyó la debilitación de la economía esclava, consecuencia de las destrucciones producidas por la guerra en las plantaciones, de tal forma que la mayor parte de la prosperidad de Oriente había quedado arruinada (la mayoría de los ingenios del distrito de Santiago de Cuba fueron devastados y otro tanto ocurrió con los de la zona de Puerto Príncipe) y hacia 1877 casi todos los ingenios que habían en la isla, se concentraban en la región de Occidente (26).

Por su parte, se formó un frente común conservador cubano, del que eran parte integrante plantadores y comerciantes

y cuyo órgano representativo era la Junta de Hacendados. Las pretensiones de sus miembros no estribaban, en principio, tanto en una oposición directa a la abolición cuanto en la resistencia a ésta en la práctica, alegando las circunstancias existentes y exigiendo, en todo caso una indemnización. Fruto de estas circunstancias fue una serie de enfrentamientos y de tensiones entre criollos y peninsulares, entre abolicionistas y conservadores, mientras la Sociedad Abolicionista Española desarrollaba dentro de este ámbito la última etapa de su actividad (27).

Con la llegada de la Paz del Zanjón en 1878, que puso fin a la guerra de Cuba, se produjo la normalización de la vida política y con ello la organización de los partidos y su inmediato corolario, la representación insular en las Cortes españolas. De esta forma, el Partido Liberal, constituido en La Habana el 3 de Agosto de 1878, expuso en su programa, por otra parte muy similar al de la Junta de Información de 1866-67, en relación con el problema de los negros, los siguientes puntos: abolición inmediata o, en su defecto, abolición con conservación del Patronato por un periodo de tiempo a determinar; regulación de la libertad y del trabajo negro; educación moral y civil del liberto e inmigración exclusivamente blanca (28).

En todo caso, a los ojos del Partido Liberal Cubano quedó muy claro que la prolongación de la esclavitud dependía de los monopolistas españoles, los cuales se oponían a las reformas socioeconómicas. De todas formas, aprovechando las elecciones de Agosto de 1879, que supusieron la primera representación de los cubanos en las Cortes desde su expulsión en 1837 y a pesar de que el número de representantes isleños con respecto a los escaños que se aseguraron los españoles, fue claramente discriminatorio, se levantaron importantes voces en el Parlamento a favor de la

abolición y de la autonomía colonial, entre las que cabría destacar las de Bernardo Portuondo, José Ramón Betancourt y Calixto Bernal entre otros, con Rafael María de Labra como adalid (29).

Dadas las responsabilidades contraídas por la Paz del Zanjón y, en especial, las presiones diplomáticas ejercidas por parte de Estados Unidos, se hizo preciso que el Gobierno español abordase el asunto de forma directa, y así ocurrió, cuando Martínez Campos accedió al poder en Marzo de 1879, secundando una maniobra política del propio Cánovas del Castillo, y anunció que se haría responsable del asunto. Pronto se dejó notar una postura más definida en torno al tema, de forma que ya el Mensaje de la Corona del mes de Junio dejó consignado que el Gobierno trabajaba en la completa extinción de la esclavitud y que esta cuestión ocupaba un puesto preferencial en las preocupaciones de aquél (30).

Aun así, Labra no cesó de fustigar en las Cortes al Gobierno, haciendo uso de cuantas posibilidades le otorgaba su condición de parlamentario para solicitar informes acerca del proceso emancipador de Cuba y de su relación con el de Puerto Rico, haciendo especial hincapié en sus efectos y desarrollo (31). Días más tarde en contestación al Mensaje de la Corona defendió la necesidad de una abolición inmediata en Cuba, basada en la propia marcha de los tiempos, en el ejemplo de Puerto Rico, en las promesas del Gobierno y en sus explicaciones ante los Gabinetes extranjeros y en las estipulaciones establecidas en la Paz del Zanjón (32). Estas actuaciones fueron acompañadas de dos intervenciones más dentro del mes de Julio, en las que presentó dos nuevas exposiciones en pro de la abolición en Cuba, una de vecinos de Gijón (33) y otra de vecinos de Oviedo (34).

Así, pues, apoyando las declaraciones del Gobierno, Martínez Campos creó en Agosto una subcomisión para el estudio de las cuestiones relativas a la esclavitud, a la política aduanera, a las tasas y a otros aspectos comerciales. Tras una presentación general, encaminada a justificar la situación existente, en la que se argumentaba que se había sido cauto en la formulación del plan abolicionista como consecuencia de la guerra de insurrección, la subcomisión apuntó el peligro de las convulsiones y recomendó la aplicación del Patronato establecido por la Ley de 1870. En este sentido, el Ministro de Ultramar don Salvador Albacete había dicho ya que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de 1870, el Gobierno presentaría una nueva ley de abolición para Cuba, y, en efecto, el 5 de Noviembre de 1879 el Gabinete Martínez Campos presentó al Senado el tan prometido proyecto de abolición, que suprimía la esclavitud en Cuba y establecía la protección o tutela (patronato) de los libertos por sus antiguos dueños durante un periodo de ocho años (35). De esta forma, el Patronato se convirtió en el sustitutivo de la indemnización, que quedó suprimida, garantizando así, la continuidad del trabajo negro (36).

Mientras esto ocurría en el Senado, en el Congreso de los Diputados don Rafael María de Labra continuó presentando exposiciones de diversas procedencias en favor de la abolición de la esclavitud en Cuba, tales como las provenientes de Pollensa, Cartagena, Almadén, Solar de la Vega, Galera (37), Santander, Motril (38), Aldeanueva, Villa del Río, Capdepón, Pamplona (39), Alcalá de Guadaira y Viana del Bollo (40), junto con otro tipo de intervenciones como la relacionada con los hombres de color, declarados libres en 1872 por el señor Aldama, un poseedor de esclavos (41), o con las transgresiones realizadas en materia de trata de negros (42).

Ciertamente, en orden a extender la medida abolicionista a Cuba, el hecho de su existencia en Puerto Rico invalidó un gran número de argumentos en contra, de tal forma que el propio Ministro Albacete el día de la presentación del proyecto de ley indicó que no existía motivo alguno para que la esclavitud continuase en la isla (43). No obstante, los debates del Senado pusieron pronto de manifiesto las profundas incompatibilidades económicas y políticas existentes entre los intereses metropolitanos y los de Ultramar (44). Por su parte, Labra mantuvo, en lo que restaba de año, una actitud similar a la sostenida hasta entonces, presentando nuevas exposiciones de vecinos de distintos pueblos de España, en las que se reiteraba la petición de abolición de la esclavitud en Cuba (45).

En relación con el tema, se pronunciaron contra el proyecto hacendados, negreros y elementos opuestos al espíritu del Zanjón, por considerarlo una debilidad frente a los insurrectos. A la cabeza de este movimiento oposicionista estaba Francisco Romero Robledo, personaje intimamente relacionado con los más importantes hacendados de la isla. A estas dificultades iniciales vino a sumarse la perturbación provocada por la caída del Gobierno Martínez Campos, que ante las oposiciones encontradas para desarrollar su programa, dimitió el 6 de Diciembre de 1879, circunstancia que fue aprovechada por Cánovas, un tanto necesitado de imponer su autoridad en el Partido Conservador, relajado con motivo del proyecto de ley de abolición de la esclavitud y demás reformas derivadas del Zanjón, para constituir un nuevo Gabinete, cosa que hizo tres días después (46).

En esta tesitura, el Conde de Tejada de Valdosera expuso los motivos por los que no era factible la indemnización como en el caso de Puerto Rico, basándolos en la mayor cantidad

de esclavos cubanos en relación con los puertorriqueños, ya que mientras en la Pequeña Antilla su número no era superior a los treinta y un mil, en Cuba alcanzaban los doscientos mil (47). Aunque la oposición se dejó sentir fuertemente, moviendo sus argumentos en torno al área de los problemas creados por la indemnización, los cubanos, por su parte, no desaprovecharon ninguna ocasión para elevar sus quejas al Gobierno, tanto en todo lo referente a las cuestiones políticas cuanto en lo relativo a las económicas y constitucionales.

Los reformistas, reorganizados de nuevo en el Partido Liberal Cubano, dijeron que aceptarían la ley sin indemnización tan pronto como el Gobierno otorgase concesiones económicas; y, así, el liberal cubano Ruíz Gómez forzó el debate, acentuando la nota en la situación aduanera al plantear el problema de Estados Unidos, constituido en mercado vital para los productos cubanos (48). En última instancia, el Partido Conservador Cubano se mostró de acuerdo con el Partido Liberal en el sentido de compensar la falta de indemnización con concesiones económicas. En La Habana, tanto el conservador "Diario de la Marina" como el liberal "El Autonomista" no dijeron demasiado sobre la abolición, pero, en cambio, insistieron en la necesidad de las reformas económicas. Por su parte, los periódicos españoles estaban divididos, pero la mayoría de los liberales indicó que las reformas económicas debían acompañar a la ley de abolición. Así, "El Imparcial", en su edición de 9 de Enero de 1880, dijo: "La ley de abolición es incompleta sin las reformas económicas" (49).

Mientras tanto, en las aulas parlamentarias hicieron acto de presencia los viejos tópicos conservadores, que ya habían sido esgrimidos con ocasión de los debates sobre la abolición en Puerto Rico. En primer lugar, se intentó obtener una indemnización, lo que suponía el reconocimiento de una propiedad

por parte del Estado; más tarde, se aceptó el Patronato, lo que equivalía a una demora, ya que, de hecho, aun aplicando rigurosísimamente la legislación, la esclavitud perduraría en Cuba, bajo una forma u otra, hasta 1888. Se habló del derecho de propiedad y del capital invertido en los esclavos y se presentó de nuevo el sofisma, según el cual se admitía que la idea abolicionista era justa, pero se añadía que se derivarían grandes males de su supresión. Así, se manejó una serie de argumentos como los aducidos por el señor Fernández de Castro, que aseguraban que el trabajo libre arruinaría la producción (este señor puso como ejemplo, para apoyar su posición, la ruina de los Estados meridionales de la Unión tras las medidas de Lincoln, dió una serie de razones antropológicas sobre la inferioridad del negro con respecto al blanco y terminó diciendo que en ningún sistema esclavista se había dado tanta humanidad como en el español) (50).

También se insistió en que el negro libre era un peligro revolucionario, señalando en este sentido la mayor longevidad de aquél; se expuso las dificultades inherentes a la evolución económica de ingenios y cafetales y a la integración del trabajador libre en los procesos de producción y se adujo ejemplos médicos destinados a demostrar que las taras fisiológicas pesaban sobre la constitución mental del negro, para quien la esclavitud era el trabajo y la libertad la holganza, tal como indicó Fernández de Castro (51), sin que faltasen las elucubraciones sobre situaciones anómalas o patológicas. De todo ello se dedujo que había que mantener una actitud paternalista, cuya expresión era el sistema de la esclavitud (sistema este, que, como dijo el Marqués de Alhama, suponía una protección para el propio negro, ya que ponerlo en libertad significaba desampararlo y, por lo tanto, atentar contra la caridad misma) (52). Así, pues, y en su conjunto, se pretendió mejorar la

situación del negro, pero nanteniendo la institución esclavista. Reflejo de ello fue la enmienda presentada por el señor Creus, tendente a lograr que se incluyesen en el articulado de la ley instrucciones relativas a tomar medidas en relación con aquel fin (53). Por su parte, el abolicionismo contestó rebatiendo directamente todos y cada uno de los supuestos defendidos por los esclavistas.

Las últimas discusiones senatoriales versaron sobre la cuestión del Patronato: Güell y Renté se decantó por la completa abolición con o sin indemnización; Ramírez y otros abogaron para que se introdujese en Cuba la Ley de 1873 vigente en Puerto Rico, y el Partido Conservador Cubano se inclinó en líneas generales por la Ley Moret de 1870, al tiempo que también se propuso que fuese posible la emancipación por la vía de la coartación (sistema, en que el negro tenía que redimirse pagándose él mismo su propia libertad), a lo que el señor Lóriga contestó que no entendía una ley de abolición en que fuese necesaria la redención, que, por otra parte, se convertía en una posibilidad teórica, dado su elevado precio (54).

Por otro lado, los abolicionistas demostraron su oposición al Patronato, basándose, entre otras cosas, en las manipulaciones ilegales que se efectuaban con respecto a aquél. En este sentido, las maniobras más corrientes efectuadas por los esclavistas consistían en falsear las edades de los negros y en manipular los censos. Con respecto al primer sistema se procedía a reducir las edades de los esclavos a base de retocar las partidas de bautismo, con lo que se alargaba su situación y se aumentaba su valor en el mercado; en cuanto a la segunda artimaña, el propietario de negros esclavos y emancipados hacía figurar en su declaración obligatoria como fallecidos tan sólo a los emancipados (lo que mantenía en una cifra casi constante el

número de esclavos, entre los que raramente se daban defunciones mediante la táctica de poner en los censos a los emancipados vivos, que, de esta forma, cubrían los huecos producidos por las defunciones reales de los esclavos).

Sin embargo y a pesar de todas las dificultades, aunque se presentaron cuatro votos particulares contra el proyecto, el Senado terminó aprobando el dictamen de la comisión. Mientras tanto, el Congreso suspendió, de momento, sus sesiones con motivo de la celebración de las fiestas conmemorativas del matrimonio del Rey Don Alfonso XII con la Archiduquesa de Austria Doña, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Y así, el proyecto de ley, remitido por el Senado el 24 de Diciembre de 1879, empezó a discutirse en el Congreso pasadas las festividades navideñas (55). Reanudadas las actividades parlamentarias, abrió el debate Ibáñez Palenciano, presentando una enmienda, que fue rechazada, por la que se alteraba aun más la ley en favor de los propietarios al ampliar el Patronato de ocho a quince años (56). El señor Santos Guzmán pronunció un discurso en contra de la totalidad de la ley, que fue contestado por Francisco de Armas, miembro de la comisión (57), y el liberal cubano Vázquez Queipo sostuvo, por su parte, un interesante debate con el señor Cisneros, precisando frente a éste su posición, que mantenía el carácter de inmediatez para la abolición, incluyendo a los negros en el régimen de trabajadores libres (a esta declaración personal y en la misma intervención acompañó una consideración general sobre la totalidad del proyecto de ley) (58).

El señor Laiglesia se mostró también contrario a la ley (59), que fue defendida frente a éste por el señor Isasi, de la comisión, y por el Ministro de Ultramar, Marqués del Pazo de la Merced (ambos defendieron la posición gubernamental, insistiendo en la necesidad del Patronato, que por su carácter gradual

evitaria brusquedades) (60). Don Francisco Silvela tomó la palabra para tratar del tema de la indemnización, resaltando las grandes dificultades que había para su aplicación y que, de hecho, la hacían imposible (61). En nueva intervención, Ibáñez Palenciano, tras presentar varias enmiendas, volvió a insistir en que la abolición inmediata causaría grave quebranto a los que habían estado luchando para defender los intereses de la patria y, muy posiblemente, produciría la pérdida de las Antillas (62). Los liberales cubanos, a su vez, siguieron insistiendo en que a la abolición debía acompañarle la reforma del sistema colonial (63), manifestándose en el mismo sentido el representante puertorriqueño Teodoro Guerrero (64).

Sánchez Bustillo, siguiendo a Cánovas, que ya había dicho que, de momento, las concesiones económicas eran imposibles, explicó a los cubanos que la cuestión de las reformas económicas nada tenía que ver con la ley de abolición (65). También se trató del tema de la mano de obra a punto ya de votarse la ley, en relación con lo cual, en un intento de compensar los intereses afectados el Gobierno español había prometido el envío de inmigrantes procedentes de Canarias, China e Indochina, aunque los hacendados cubanos, dada su mejor aclimatación, pidieron negros africanos libres.

De acuerdo con esto, introducida esta proposición en las Cortes, el Gobierno manifestó por boca de su Ministro de Ultramar, Marqués del Pazo de la Merced, que tan pronto como se aboliera la esclavitud, se contratarían los mencionados africanos libres (66). Antes de la presentación de la ley de abolición habían tenido lugar contactos entre las autoridades británicas y el Gobierno de La Habana para el empleo de negros ingleses en Cuba, pero el Capitán General, Blanco, temiendo una rebelión en la isla, invocó el Decreto de 1843 sobre importación de negros

ingleses y bloqueó el proceso (67). De todas formas y a pesar de los inconvenientes en contra, Cánovas del Castillo, que no quería hacer peligrar la continuidad de su obra de gobierno, se decidió a llevar adelante el proyecto de ley de abolición de la esclavitud, y en este sentido también Romero Robledo, tenaz opositor de las reformas que presentara Martínez Campos, cedió ahora, no porque hubiese, ni mucho menos, cambiado de parecer, sino en función de sus apetencias políticas, ya que intentaba dominar el Partido Conservador desde el Ministerio de la Gobernación y poder así erigirse algún día como sucesor de Cánovas en la jefatura de aquél (68).

Así, pues, el 30 de Enero de 1880 las Cortes aprobaron, por fin, la ley por amplia mayoría, aunque los representantes cubanos se abstuvieron de votarla, reservándose el derecho de volver a plantear la cuestión en relación con la problemática que preveían se derivaría de la existencia del Patronato (69). La Ley constaba de dieciocho artículos, cuyo contenido quedaba establecido así: el primero ordenaba el cese de la esclavitud en la isla; el segundo consignaba el sistema del Patronato; los artículos tercero y cuarto precisaban los derechos y deberes de los patronos (derecho a utilizar el trabajo de los patrocinados por el tiempo establecido; obligación de asistirlos, mantenerlos, instruirlos y retribuirlos); el quinto estaba destinado a regular los derechos y obligaciones de los patrocinados; el sexto hacía referencia a la retribución indicada en el párrafo cuarto del artículo cuarto; los artículos séptimo y octavo reglamentaban todo lo referente al cese del Patronato (de forma normal, a los ocho años, y por otras causas, como acuerdo mutuo entre patrono y patrocinado, renuncia del patrono, etc., en cualquier momento, en la forma y con las salvedades prescritas).

El noveno y el décimo estaban relacionados con la

situación civil y jurídica de los que salían del Patronato; el undécimo y el duodécimo prescribían lo relativo a coartados y libertos según la Ley de 1870 (éstos últimos quedaban bajo la inmediata protección del Estado); el decimotercero fijaba la menor edad a los efectos de la Ley (eran considerados tales, los que no habían cumplido los veinte años); el artículo decimocuarto se refería a los castigos (aunque suprimía los corporales, concedía a los patronos, por otra parte, toda una serie de medidas coercitivas); el decimoquinto estructuraba el papel de las Juntas, encargadas de vigilar el cumplimiento de la Ley; el decimosexto establecía las normas jurídicas, bajo las cuales quedaban los patrocinados; el decimoséptimo aludía al Reglamento para la ejecución de la Ley, y el decimoctavo y último derogaba todas las leyes, reglamentos y disposiciones opuestos a la Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por la de 1870, siempre que no hubiesen sido modificados por la presente (70).

De esta forma, con la modificación del proyecto inicial, introducida a última hora, según la cual podía cesar el Patronato por indemnización de servicios de acuerdo con la forma prescrita en la cláusula cuarta del artículo séptimo, se obtuvo una importante victoria en pro de la solución del problema social al quedar claro que podía llegarse a la terminación del mencionado Patronato antes de cumplirse el plazo previsto de ocho años. No obstante, aunque se había conseguido una buena baza con la aprobación de esta Ley, el triunfo aun no era del todo completo. Así, a pesar de la insistencia de algunos diputados cubanos, como Portuondo, en el sentido de completar la abolición con las reformas, o de la proposición del propio Labra para que fuese declarada urgente la discusión de los restantes proyectos, de momento, las demás reformas económicas y politicoadministrativas no salieron adelante, al tiempo que todavía quedaba pendiente la supresión del Patronato, para que

quedase definitivamente resuelta la cuestión social de los negros. En relación con estos temas, Labra denunció ante el Congreso el incumplimiento de los supuestos relativos a la abolición que se estipulaban en la Paz del Zanjón, según los cuales debía existir una equiparación entre Cuba y Puerto Rico en los aspectos políticos, orgánicos y administrativos, de acuerdo con lo que se reconocía la libertad total de todos los negros y chinos que hubiesen figurado en el campo insurrecto (71).

Además, el problema, como ya se dijo anteriormente, tenía también sus implicaciones internacionales, en relación con lo cual se temió, en un principio, que el Gobierno británico protestase por los ocho años de tutela que establecía la Ley, pero el Primer Ministro Salisbury lo aceptó. Por su parte, el Presidente de Estados Unidos en su Mensaje al Congreso de 7 de Diciembre de 1880, no hizo mención alguna de la cuestión de la esclavitud en Cuba. La Liga Cubana, organización de los exiliados, atacó la Ley, declarando que España no la pondría en marcha, al tiempo que los propietarios se oponían, en la práctica, a las medidas abolicionistas, según el informe del Capitán General de Cuba al Ministro de Ultramar, Sánchez Bustillo, en el que respondía a la consulta que se la había formulado sobre el particular (72).

En lo tocante a la aplicación de las medidas emancipadoras de 1880, éstas se regularon de modo similar a las de la Ley Moret y entraron en vigor el 29 de Julio de aquel mismo año. En relación con esto, las autoridades cubanas estaban investidas del suficiente poder como para llevar a cabo todo lo relativo a las operaciones de registro. Así, la Ley estipulaba que el patrocinado debía estar provisto de una cédula, que tenía que ser revisada por el Comité Central de La Habana, a cuyo fin los inspectores registraban a los negros en las Cartas de Libertad y efectuaban periódicamente visitas a las plantaciones.

A pesar de ello las cosas no se desarrollaban con la rapidez que hubiesen deseado los abolicionistas, quienes, por su parte, no cejaban en el empeño de seguir de cerca el proceso y de preocuparse por su desarrollo, cuestión en la que Labra se había convertido en adalid, tal como se desprendía de su actividad parlamentaria, en la que principalmente se interesaba por la aplicación del Reglamento de Ejecución de la Ley abolicionista en Cuba (73). Un año después de la nueva medida el Capitán General, don Ramón Blanco, juzgaba su desarrollo altamente satisfactorio y el 18 de Abril de 1881 el "New York Sun" admitía que reinaba la armonía entre patrón y patrocinado. El propio Blanco el 28 de Agosto de ese mismo año indicaba que funcionaban ciento dieciseis Comités Administrativos en los distritos de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba y que los treinta y seis existentes en el de La Habana habían otorgado la libertad total a mil ochocientos trece libertos (según cálculos oficiales, del 13 de Febrero de 1880 al 13 de Julio de 1883 habían quedado libres treinta y cuatro mil treinta y tres negros, y el 8 de Noviembre de este último año similares fuentes indicaban que sólo quedaban en Cuba noventa y nueve mil quinientas sesenta y seis) (74).

A pesar de todo, la aplicación práctica de la Ley encontró toda una serie de dificultades, especialmente en el campo, donde muchos exsoldados y negros andaban errantes como vagabundos y donde se daba la resistencia de algunos propietarios, que procuraban escamotear en lo posible el proceso, motivo por el cual éste se desarrolló de forma mucho más rápida en las ciudades, donde los patrocinados estaban sometidos a un control más efectivo. Ante estos y otros problemas, las autoridades ultramarinas hicieron frecuentes consultas al Gobierno de Madrid pidiendo instrucciones, en vista de lo cual se ordenó a los Gobernadores que aplicasen la Ley al pie de la

letra. Así ante la decisión gubernamental de llevar a cabo la ejecución de la Ley hasta el final, los ricos plantadores acabaron aceptando en su mayor parte como inevitable la medida y, como tenían dinero, pudieron pagar el trabajo libre, mientras que resultaron mucho más afectados los propietarios criollos pobres, que encontraron grandes dificultades para hacer frente a las necesidades de la libre contratación.

Mientras tanto, en las Cortes los diputados abolicionistas y liberales continuaron mandando peticiones expresivas de su insatisfacción por la cuestión del Patronato y por los abusos que aun seguían cometiéndose por parte de algunos propietarios. Los memoriales procedían de pueblos y ciudades de España y Cuba y fueron presentados en su mayoría por Labra, Güell y Renté, Baselga, Gil Bergés y Portuondo. En líneas generales, mantenían que la marcha de la civilización y el honor nacional exigían el cese de las rudezas, la inmediata libertad de los negros no inscritos en los registros de 1867, 1871 y 1877, la supresión de cepos y grilletes y la extinción del Patronato. En tal sentido, Labra, tras interesarse por las cuestiones relativas al registro de negros y por el reglamento para la ejecución de la ley abolicionista en Cuba, temas en que fue contestado por el Ministro de Ultramar, León y Castillo (75), pasó a presentar una serie de exposiciones en pro de la abolición de la esclavitud de Motril (76), Cartagena, Oviedo (77), Villarrobledo y Alcoy (78). Por su parte, la Sociedad Abolicionista Española se quejó asimismo de los notorios abusos cometidos con los patrocinados y continuó en su lucha en pro de la defensa de los derechos de los negros, denunciando las irregularidades que se cometían (por ejemplo, el negro no alcanzaba la libertad, porque el patrono rehusaba pagarle el estipendio señalado por el artículo cuarto de la Ley).

Así, a fines de 1881 el señor Cubas preguntó en las Cortes acerca de la situación de los negros en Cuba, pregunta a la que el Ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez, contestó que los negros continuaban inmersos en el régimen evolutivo del Patronato, que el Gobierno tenía la intención de suprimir cuanto antes (79). En Marzo de 1882, el señor Feijóo y Sotomayor anunció que interpelaría al Ministro de Ultramar sobre la cuestión del Patronato (80) y, días después, don Rafael María de Labra pidió al citado Ministro que remitiese a las Cortes el Reglamento de "Cepos y Grilletes", a lo que León y Castillo respondió que sería enviado en breve plazo (81).

En este mismo sentido denunció el mantenimiento de la esclavitud en Cuba bajo la forma del Patronato, aunque un grupo interesado quisiera ocultar esta situación. La existencia de tal anomalía era nefasta para el desarrollo de la Gran Antilla e introducía un claro elemento de desequilibrio en la propia vida política peninsular. Se hacía, pues, de todo punto necesario adoptar las medidas radicales que habían hecho posible la abolición en Puerto Rico (82). A mediados de aquel mismo año, el propio Labra resaltó la falta de cumplimiento de las Reales Ordenes sobre las inspecciones fiscales a ingenios y fincas en Cuba, establecidas por la ley abolicionista (83) y junto con otros diputados, incluidos los cubanos Portuondo, Betancourt y Bernal, presentó a las Cortes un proyecto formal de abolición del Patronato (84).

A todo esto, se produjeron en Cuba algunos incidentes, por lo cual y para evitar presumibles enfrentamientos políticos, algunos prominentes propietarios cubanos, como el Marqués de Villalva, el Marqués de Cerralbo y Tomás Terry, se decantaron hacia la abolición del Patronato. Por su parte, el Gobierno ultramarino, sospechando de los liberales cubanos, les achacó los

incidentes acaecidos y prohibió sus actividades, ante lo cual éstos, bajo el liderazgo de José Antonio Cortina, protestaron vivamente diciendo que nada habían tenido que ver con las manifestaciones públicas contra el Gobierno español y que tan sólo habían suscrito la liberación de los patrocinados. A pesar de todo esto, el periódico "Revista Económica de las Antillas" fue censurado y su editor, Francisco Cepeda, deportado. Entre tanto, en la Península diputados tales como Betancourt y Güell y Renté no dejaban de insistir en que las actividades autonomistas no estaban en conflicto con la integridad nacional (85).

No obstante, durante este tiempo los autonomistas cubanos estuvieron sujetos a una severa vigilancia por parte del Partido Español y de las autoridades ultramarinas, fruto de lo cual fue el desánimo que se extendió entre los criollos, cercano a determinar su disolución como entidad política, cosa que logró evitar la determinación de Gálvez en La Habana y el esfuerzo de Labra en Madrid. Todo pareció suavizarse, cuando el propio Labra telegrafió a Gálvez, el 30 de Marzo de 1882, haciéndole saber que el nuevo Gabinete liberal, presidido por Sagasta, había reconocido en las Cortes la legalidad de las doctrinas autonomistas y la rectitud de sus publicaciones; pero, a pesar de todo, el Gobernador General recibió instrucciones para combatir las ideas autonomistas y "El País" y otros periódicos criollos de La Habana vieron grandemente dificultadas sus demandas en pro de la supresión del Patronato y de la concesión de reformas (86).

Mientras tanto, en las Cortes españolas continuaba la batalla por la definitiva solución del problema negro. En Enero de 1883, Labra volvió a presentar un proyecto de ley de abolición del Patronato, pidiendo al mismo tiempo aclaraciones sobre lo dictaminado con respecto a los castigos de cepos y grilletes y sobre la situación de los sesenta mil esclavos que aun se

encontraban en aquel estado (87). Al mes siguiente, Portuondo y Labra interpellaron al Ministro de Ultramar, Núñez de Arce, sobre la cuestión de las reformas y del Patronato, a lo que el Ministro les contestó que el Gobierno cumpliría sus promesas, aunque existían grandes dificultades para ello (88) (unos días después el mismo Portuondo expuso más ampliamente sus ideas en un discurso, en el que censuró la política del Gobierno de forma bastante dura) (89).

Por su parte, en el Senado Güell y Renté presentó un ruego, a fin de que se suprimieran los castigos sufridos por los patrocinados (90), a lo que el Conde de Tejada de Valdosera le contestó pidiendo al Gobierno que tuviese presentes las disposiciones relativas a las facultades coercitivas y disciplinarias concedidas a los patronos para asegurar el orden y el trabajo (91). Al poco tiempo, Güell y Renté volvió a intervenir, solicitando que se remitiese al Senado el reglamento establecido por los esclavistas de Cuba con respecto a los patrocinados y el expediente para que los hacendados modificasen dicho reglamento y no se castigasen las faltas leves con grilletes (92). Por su parte, Labra reiteró en el Congreso su postura, presentando varias exposiciones, en las que se solicitaba la abolición del Patronato en Cuba (93).

En Mayo, el señor Betancourt preguntó si se había cumplido la disposición por la que se otorgaba la Carta de Libertad a cuarenta mil negros e inquirió, asimismo, sobre diversos asuntos relacionados con trampas y fraudes en la concesión de las mencionadas cartas (94). Este esfuerzo, desarrollado para la supresión del Patronato y de los abusos cometidos, empezó a dar sus resultados, y aunque el Ministro de Ultramar, Suárez Inclán, declaró que serían utilizadas medidas coercitivas con los negros refractarios, al amparo de la

coyuntura ofrecida por el Gobierno liberal de Posada Herrera, una Real Orden de 27 de Noviembre de 1883 abolió los castigos de cepos y grilletes, que durante los tres años transcurridos desde la Ley de 1880 habían sido aplicados a los tutelados por sus protectores.

No obstante, todavía a principios de 1884, al presentar Labra una enmienda al párrafo decimoquinto del proyecto de Contestación al Discurso de la Corona, solicitó la extensión de derechos políticos a Ultramar junto con la abolición del Patronato y del uso de cepos y grilletes (95). Y pocos meses después, en contestación al Discurso de la Corona, hizo patente su postura al dejar claro que siempre había defendido la abolición inmediata, aunque condicionada y completada por reformas económicas encaminadas a sufragar las posibles indemnizaciones a los poseedores de esclavos; reformas de las que era responsable inmediato el propio Estado, dado que había sostenido en su momento la institución esclavista, por lo cual las repercusiones de la abolición debían recaer sobre todos los responsables de la servidumbre, entre los que se encontraban las provincias peninsulares como parte integrante de la maquinaria estatal.

A pesar de todo, reconocía las posibles perturbaciones, derivadas de la abolición al repercutir ésta sobre la propiedad y producción ultramarinas e incidir con la necesaria reforma económica en las relaciones del capital y el trabajo, para lo cual sería preciso el paso del tiempo, a fin de que se restañasen las heridas que pudieran producirse al respecto. En ningún caso era aceptable por condenado al fracaso el proceso de abolición gradual y, por supuesto, quedaba claro que había sido altamente pernicioso para Cuba la institución del Patronato al prolongar sin solucionarlos los problemas existentes (96).

prosiguiendo por este mismo camino, una sentencia del 13 de Febrero de 1885 declaró libres a los negros mayores de sesenta años, si bien venían obligados a continuar residiendo en casa de sus antiguos dueños; y en Junio de aquel año Labra, presentó, una vez más, un proyecto de ley para la abolición del Patronato (97), al tiempo que afluían a las Cortes múltiples peticiones sobre la supresión inmediata de la esclavitud. Tal como señaló Labra: "El gran problema cubano es el problema de la esclavitud. Siempre daremos en él. Si discutimos un proyecto económico, relativamente, de segunda importancia, pues ya lo veis, en el fondo tocamos con el problema social de Cuba. Porque, entendedlo, con esclavitud no habrá allí ni reformas económicas, ni reformas políticas, ni producción, ni orden, ni Patria, ni moralidad, ni porvenir, ni nada" (98).

Por fin, 1886 conoció la victoria final del abolicionismo. El propio Labra subrayó en las Cortes la postura de los abolicionistas cubanos en defensa de sus ideales y en contra de cualquier situación legal que pudiera llevar a la resurrección de la trata. Para ello proponía una acción educadora de los libertos y la equiparación de éstos con los restantes españoles en pie de igualdad (99). Tras estos acontecimientos, el 26 de Julio los señores Vergés y Montoro presentaron sendos proyectos de ley sobre el cese del Patronato, y Labra una exposición de la Sección de la Sociedad Abolicionista, establecida en La Habana (100). Al día siguiente, las Cortes aprobaron su propuesta, por la cual, al cesar la relación existente entre patronos y patrocinados, se ponía término al último vestigio de la esclavitud.

De acuerdo con ello, debían emanciparse los veinte mil negros que aun estaban bajo el régimen del Patronato y que de todas formas hubieran sido liberados en brevísimo plazo (en el

transcurso de un año por renuncia completa del patrono, por acuerdo entre los patronos y los patrocinados o por el sistema de "indemnización de servicios", ya habían obtenido su libertad veinticinco mil). Así, pues, el Real Decreto de 7 de Octubre de 1886, refrendado por el entonces Ministro de Ultramar, Germán Gamazo, consagró el fin del largo proceso iniciado años antes. En la dura lucha había destacado Rafael María de Labra, quien durante años fue el portavoz de la abolición, atacando sistemáticamente, con pruebas palpables, los argumentos en contra. Terminaba de esta forma uno de los más importantes problemas que afectaron al mundo colonial antillano. Los cubanos, por su parte, lograban cerrar, por así decirlo, el ciclo social, centrando a partir de ese momento sus esfuerzos en la obtención de las reformas económicas y políticoadministrativas (101).

Dentro de esta primera fase y en relación con la supresión de la esclavitud de los negros, también quedó solucionado el problema de la mano de obra amarilla. Los chinos habían sido introducidos en bastante cuantía para paliar la falta de negros, especialmente sensible desde la supresión de la trata y las primeras campañas abolicionistas. En este sentido, el 10 de Octubre de 1864 se había firmado el Tratado de Tien-Tsín entre España y China para la importación de mano de obra amarilla contratada, pero este convenio se prestó a toda clase de abusos y de malos tratos, motivo por el cual, con el fin de acabar con esta situación y de retocar los defectos de fondo y de forma del anterior acuerdo, el 17 de Noviembre de 1877 se firmó el Convenio de Pekín entre España y el Celeste Imperio, cuya ratificación se firmó el 6 de Diciembre y fue publicado en la "Gaceta de La Habana" el 29 de Junio de 1879.

En virtud de este convenio quedó suprimida la emigración por contrato de carácter forzado, que, a partir de

este momento, sería libre y totalmente voluntaria. Asimismo, quedaron prohibidos los malos tratos y los súbditos chinos pasaron a ser considerados en pie de igualdad con respecto a cualquier otro emigrante extranjero. Los Decretos del Capitán General Blanco de 24 de Octubre de 1879 sobre el empadronamiento de los inmigrantes chinos y el establecimiento de un Consulado de China en La Habana y de un Viceconsulado en Matanzas completaron las medidas para hacer cumplir lo preceptuado en el convenio. A todo esto, había que unir el propio espíritu del Zanjón, que también alcanzaba a los trabajadores chinos existentes en Cuba. De esta forma, a la abolición de la esclavitud de los negros acompañó la de los contratos de los colonos asiáticos (102).

N O T A S.

- (1) CHAMORRO, DEMETRIA y CARRILLO, ISABEL: Polémica sobre la Abolición del Trabajo Esclavo en las Colonias Españolas (1865-1886), "Revista de Trabajo" (Madrid), núm. 26 (1969), pág. 275.
- (2) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición y la Sociedad Abolicionista Española en 1873 (Madrid 1874), págs. 25-26.
- (3) Ibid., págs. 27-28.
- (4) Ibid., págs. 31-33 y 34.
- (5) Ibid., págs. 36-38.
- (6) Ibid., págs. 44-45.
- (7) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Explotación de los Africanos, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 2 (20-II-1875), págs. 21 y 22. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 5.
- (8) Ibid., VI, núm. 6 (28-IV-1875), págs. 88-89.
- (9) Ibid., VI, núm. 7 (15-V-1875), pág. 100.
- (10) Ibid., VI, núm. 11 (15-VII-1875), págs. 164 y 166. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 6.
- (11) Ibid., VI, núm. 12 (31-VII-1875), pág. 182. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 7.
- (12) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Un Poco de Historia, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 14 (15-IX-1875), págs. 211-213. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 8.
- (13) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Inmigración en Cuba, "El Abolicionista" (Madrid), VII, núm. 6 (3-IV-1876), págs. 84 y 87-88.
- (14) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Ferocidad de los Negros, "El Abolicionista" (Madrid), VII, núm. 9 (17-IV-1876), págs. 136-139.
- (15) Ibid., VII, núm. 10 (31-V-1876), pág. 146.
- (16) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Holganza de los Negros, "El Abolicionista" (Madrid), VII, núm. 11 (15-VI-1876), págs. 162-163.

- (17) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Salvajismo de los Negros, "El Abolicionista" (Madrid), VII, núm. 12 (30-VI-1876), págs. 183-184.
- (18) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Brutalidad de los Negros (Madrid 1876), Del Prólogo.
- (19) Ibid., págs. 10-11.
- (20) Ibid., pág. 34.
- (21) Ibid., págs. 70-74.
- (22) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. I, pág. 324.
- (23) Para una comparación de las situaciones de Cuba y Puerto Rico ante el problema de la abolición véase, MURGA Y MUGARTEGUI, GONZALO DE: De la Abolición de la Esclavitud en las Islas de Cuba y Puerto Rico (Madrid 1868).
- (24) CORWIN, ARTHUR F.: Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886 (Austin 1967), págs. 293-294.
- (25) Sobre estas cuestiones véase, ARMAS Y CESPEDES, FRANCISCO DE: De la Esclavitud en Cuba (Madrid 1866).
- (26) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO; PEREZ CABRERA, JOSE MARIA; REMOS, JUAN J. y SANTOVENIA EMETERIOS.: Historia de la Nación Cubana (La Habana 1952), Vol. III, págs. 152 y 165.
- (27) Para una visión de carácter general sobre temas relacionados con el abolicionismo véase, FIGUERA, FERMIN: Estudios sobre la Isla de Cuba: La Cuestión Social (Madrid 1866). Sobre aspectos de la labor desarrollada por la Sociedad Abolicionista Española, La Abolición en Cuba. (A las Cortes Constituyentes la Sociedad Abolicionista Española) (Madrid 1873).
- (28) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., pág. 297.
- (29) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), pág. 20, nota núm. 11.
- (30) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., pág. 300.
- (31) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Julio de 1879.
- (32) Ibid., 12 de Julio de 1879. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 9.

- (33) Ibid., 14 de Julio de 1879.
- (34) Ibid., 19 de Julio de 1879.
- (35) Diario de Sesiones del Senado, 5 de Noviembre de 1879. Apéndice.
- (36) Para el desarrollo del proceso abolicionista en Cuba véase, NAVARRO AZCUE, CONCEPCION: La Abolición de la Esclavitud Negra en la Legislación Española, 1870-1886. (Madrid 1987), págs. 161-226.
- (37) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 7 de Noviembre de 1879.
- (38) Ibid., 11 de Noviembre de 1879.
- (39) Ibid., 13 de Noviembre de 1879.
- (40) Ibid., 18 de Noviembre de 1879.
- (41) Ibid., 12 de Noviembre de 1879.
- (42) Ibid., 18 de Noviembre de 1879.
- (43) Diario de Sesiones del Senado, 5 de Noviembre de 1879.
- (44) Ibid., 22 de Noviembre de 1879.
- (45) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 22 de Noviembre y 5 y 6 de Diciembre de 1879.
- (46) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol I, págs. 333-334 y 339.
- (47) Diario de Sesiones del Senado, 12 de Diciembre de 1879.
- (48) Ibid., 12 de Diciembre de 1879.
- (49) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., pág 303.
- (50) Diario de Sesiones del Senado, 15 de Diciembre de 1879.
- (51) Ibid., 15 de Diciembre de 1879.
- (52) Ibid., 17 de Diciembre de 1879.
- (53) Ibid., 19 de Diciembre de 1879.
- (54) Ibid., 23 de Diciembre de 1879.

- (55) Para una presentación del conjunto de los problemas relativos al tema véase, BARON FORTACIN, M.: Cuestión de Cuba. La Abolición de la Esclavitud (Madrid 1879).
- (56) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 14 y 17 de Enero de 1880.
- (57) Ibid., 14 de Enero de 1880.
- (58) Ibid., 15 de Enero de 1880.
- (59) Ibid., 15 de Enero de 1880.
- (60) Ibid., 16 de Enero de 1880.
- (61) Ibid., 17 de Enero de 1880.
- (62) Ibid., 17 de Enero de 1880.
- (63) Ibid., 18 de Enero de 1880.
- (64) Ibid., 19 de Enero de 1880.
- (65) Ibid., 19 de Enero de 1880.
- (66) Ibid., 22 de Enero de 1880.
- (67) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., pág. 304.
- (68) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. I, pág. 340.
- (69) Ibid., pág. 341.
- (70) Véase Apéndice Documental II. Apéndice núm. 4.
- (71) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 24 de Febrero de 1880.
- (72) Para una visión de conjunto relacionada con estas cuestiones véase, RODRIGUEZ, GABRIEL: La Idea y el Movimiento Antiesclavistas en España en el Siglo XIX (Madrid 1887).
- (73) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Febrero de 1881.
- (74) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., págs. 306-307.
- (75) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 29 de Octubre de 1881.
- (76) Ibid., 17 de Noviembre de 1881.

- (77) Ibid., 26 de Noviembre de 1881.
- (78) Ibid., 27 de Diciembre de 1881.
- (79) Ibid., 7 de Diciembre de 1881.
- (80) Ibid., 21 y 28 de Marzo de 1882.
- (81) Ibid., 24 de Marzo y 3 de Abril de 1882.
- (82) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Los Partidos en Ultramar, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 1 (2-V-1882).
- (83) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 9 de Junio de 1882.
- (84) Ibid., 12 de Junio de 1882. Apéndice.
- (85) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., págs. 309-310.
- (86) Sobre los problemas relacionados con la abolición durante esta etapa véase, SCOTT, REBECCA J.: Slave Emancipation in Cuba: The Transition to Free Labor, 1860-1899 (Princeton 1985).
- (87) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 25 de Enero de 1883.
- (88) Ibid., 8 y 12 de Febrero de 1883.
- (89) Ibid., 23 de Febrero de 1883.
- (90) Diario de Sesiones del Senado, 9 de Febrero de 1883.
- (91) Ibid., 10 de Febrero de 1883.
- (92) Ibid., 14 de Febrero de 1883.
- (93) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 31 de Marzo de 1883.
- (94) Ibid., 18 de Mayo de 1883.
- (95) Ibid., 4 de Enero de 1884.
- (96) Ibid., 20 de Junio de 1884. Véase Apéndice Documental I. Apéndice núm. 10
- (97) Ibid., 13 de Junio de 1885.

- (98) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Algo de Todo. (Artículos Suelos. Crítica Ligera. Notas de Viajes) (Barcelona 1886), pág. 163.
- (99) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 21 de Junio de 1886.
- (100) Ibid., 26 de Julio de 1886.
- (101) Además de las obras citadas el proceso general de la abolición en Cuba, subsidiario de la crisis de su industria azucarera, puede seguirse en THOMAS, HUGH: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970) (Barcelona - México 1973), Vol. I, págs. 359-386.
- (102) JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Los Chinos en las Luchas por la Liberación Cubana (1847-1930) (La Habana 1963), págs. 81 y 88-90.

2.2) LA REFORMA POLITICA EN ULTRAMAR: ASPECTOS POLITICOS Y ECONOMICOS.

Durante todo el siglo XIX los antillanos se esforzaron por obtener reformas políticas y cambios en la estructura de su sistema colonial, pero las desestimaciones del Gobierno español, en un caso, y las circunstancias políticas, internas o exteriores, en otro, impidieron que aquéllas llegasen en su momento oportuno. Donde el malestar se notó más, en parte por su estructura mucho más compleja respecto de la de Puerto Rico, fue en Cuba, que protestó repetidas veces contra el trato gubernamental metropolitano, caracterizado por la opresión, la arbitrariedad, la injusticia, el abandono y la explotación, pidiendo con insistencia la concesión de reformas politicoadministrativas (1).

La situación de las Antillas hispanas sufrió un cambio radical como consecuencia de la pérdida de las posesiones continentales en el primer cuarto del siglo XIX, de forma que aquéllas pasaron a un primer plano dentro de la política ultramarina de España, acusando en poco tiempo un auge económico y cultural y una evolución política. Las Cortes de Cádiz constituyeron, con todos sus errores y utopías, un intento de entendimiento liberal, pero pasada la experiencia gaditana se produjo en las provincias ultramarinas una tremenda contradicción, dado que mientras en España, aunque con altibajos, se fue avanzando en la implantación del régimen constitucional y liberal, en Ultramar, sin embargo, se fue retrocediendo en la organización política y administrativa (2).

De esta forma, el enriquecimiento económico, el crecimiento demográfico y la evolución cultural se hicieron patentes en las Antillas y sobre todo en Cuba, mientras aumentaba

progresivamente la falta de entendimiento entre los aborígenes y los peninsulares. Así, la Gran Antilla, "situada en medio del Continente, recibía del Norte el sentimiento de la libertad y del Sur el ejemplo aun caliente de cómo se hacían libres los pueblos" (3).

Todavía en 1820 el P. Félix Varela presentó varios proyectos, entre ellos uno sobre la abolición de la esclavitud y otro sobre la autonomía de Cuba, al tiempo que hacía su aparición la generación romántica, primera en albergar sentimientos de autogobierno, cantados por el poeta José María Heredia. No obstante, poco después (1825) se restablecieron las llamadas "omnímodas" o poderes absolutos de los Capitanes Generales. Prosiguiendo por este camino de incomprensiones, en 1837 se consumó la separación entre españoles y antillanos al ser excluidos estos últimos de la representación en Cortes y al declararse que las provincias de Ultramar serían gobernadas por "leyes especiales", cuya significación nunca se aclaró.

Así, pues, la administración ultramarina quedó sustentada desde entonces por los pilares de la centralización y de la dictadura militar (Cuba ya no volvió a tener representantes hasta 1879; Puerto Rico, teóricamente, desde 1869, y Filipinas nunca más). En realidad, desde este momento la política de la metrópoli fue de centralismo encubierto bajo la etiqueta de la asimilación, mientras se distanciaban cada vez más los intereses de los antillanos, que aspiraban a un trato liberal y equivalente al de los demás españoles, de los peninsulares, que situaban a aquéllos en condiciones de inferioridad política y de subordinación respecto de los Gobernadores.

En este sentido, continuaron el marasmo y la confusión administrativa y legislativa, a pesar de que a fines de 1838 se

creara una Comisión Regia para el estudio de las "leyes especiales", que debía actuar seis meses en Cuba y tres en Puerto Rico y cuyos resultados fueron nulos. No obstante, a mediados de siglo se inició un cierto cambio, aunque lento, y se realizaron algunas reformas de tipo administrativo, que culminaron con la creación del Ministerio de Ultramar en 1863 (4).

Al hilo de estas circunstancias, se fueron configurando las corrientes políticas antillanas y, en especial, cubanas en torno a tres supuestos fundamentales: reformismo, anexionismo y separatismo. El reformismo, que tuvo en José Antonio Saco a su principal valedor, intentó la obtención de libertades autónomas y de mejoras políticas dentro del régimen español. Sus esfuerzos se dirigieron a tratar de extender a Cuba los beneficios de unas medidas encaminadas a hacer más soportable la dominación metropolitana y a buscar los medios para encontrar el amparo y la justa correspondencia de la metrópoli y lograr, así, la implantación de las reformas concordantes con las necesidades y el progreso logrado por la isla (5).

La labor del reformismo se canalizó a través del Círculo Reformista de La Habana y de su portavoz periodístico, "El Siglo", y aparte del Partido Españolista y de la élite gubernamental tuvo que combatir, fundamentalmente, contra dos frentes: el criollismo esclavista y el separatismo. Frente a ambos se alzó la figura de Saco, dado que tanto uno como otro movimiento entrañaban graves riesgos para Cuba. El anexionismo, patrocinado por los esclavistas criollos, suponía la anulación de la personalidad nacional, que quedaba integrada en otra estructura, y ello debía evitarse a toda costa. Esta era la base de su pensamiento, expuesto en sus Ideas contra la Anexión. En cuanto al separatismo, Saco pensaba que Cuba presentaba por aquel entonces (años cuarenta del siglo) unos factores impropios para cimentar una personalidad nacional (6).

Por su parte, los reformistas intentaron, sin conseguirlo, hacer aprobar su ideario ante la Junta de Información, pero el rotundo fracaso ésta desmoralizó a muchos e incitó a otros al separatismo, que alentado por la incomprensión metropolitana y viendo, así, reforzada su postura moral, inició los pasos (Junta Revolucionaria de Bayamo, auspiciada por la Cubana de Nueva York y formada desde las expediciones de López, que agrupaba a hombres como Tamayo, Aguilera, Figueredo, Palma y Céspedes), que, aprovechando la coyuntura peninsular del 68, condujeron a Yara.

De esta forma, la intransigencia española y la lucha armada quebraron el noble intento del reformismo de lograr una autonomía política, económica y administrativa, que permitiera el libre desenvolvimiento de las actividades criollas en ese orden de cosas sin las cortapisas y explotaciones inherentes al régimen hasta entonces existente, para, así, por medio de la evolución, ir preparándose para un gobierno propio, evitando, al mismo tiempo, los trastornos bruscos de una revolución (7).

Por otro, lado el anexionismo intentó el logro de las mismas libertades que deseaban los reformistas, pero dentro de la Unión norteamericana, que deslumbraba a los criollos esclavistas con el espejismo de la libertad y del bienestar conquistados por Estados Unidos. Ciertamente, con ello se anulaba la aspiración a la independencia, pero se pensaba que, por lo menos, con la anexión a Estados Unidos se lograrían la libertad, la seguridad interior y la paz, necesarias para seguir manteniendo la próspera economía esclavista entonces existente, basada en el trabajo de la mano de obra de color y en las plantaciones, sobre todo las de azúcar. En realidad, los ricos propietarios pensaban que la mejor manera de conservar la estructura socioeconómica que ellos habían creado era integrándose en la similar de los Estados meridionales

de la Unión, mucho más segura que la española. De esta forma, se resolvía el problema político (no independencia, pero sí mucha mayor libertad política en el seno de una estructura democrática) y el económico (creación de una especie de imperio esclavista, formado por los Estados sudistas americanos, por Cuba y por Puerto Rico).

Por otra parte, también los esclavistas estadounidenses soñaban entonces con ampliar su radio de acción con la inclusión de Cuba dentro de su órbita. La disyuntiva, en la que se movieron los anexionistas cubanos, era clara: o vivir seguros y libres bajo la bandera norteamericana, o soportar el régimen colonial español, esperando que condiciones más favorables permitiesen la independencia, teniendo en cuenta, además, las dificultades progresivas con que tenía que topar el tráfico negrero. Frente a este planteamiento, conocida era la posición sostenida por Saco y por los reformistas.

Así, pues, con el objeto de lograr su fin, los anexionistas realizaron múltiples gestiones en Norteamérica (canalizadas por el Club de La Habana, fundado en 1847, y por el periódico "La Verdad", órgano propagandístico del anexionismo cubano en Nueva York), así como conspiraciones en la propia isla, tendentes a la integración de Cuba en la economía de los Estados del Sur de Estados Unidos mediante la inserción de aquélla como un Estado más de la Unión. Pero todo este movimiento, que tuvo en los años medios del siglo, especialmente, entre 1848 y 1855, su edad dorada, se frustró como consecuencia del desenlace de la Guerra de Secesión (1861-1865), favorable a los nordistas, partidarios, como es sabido, del abolicionismo (8).

Por último, estaba el independentismo, que ya había tenido sus primeros balbuceos en aquella generación romántica, de

la que formara parte integrante el poeta Heredia, y que no admitía ningún tipo de solución que no condujese a la plena nacionalidad. El movimiento, alentado desde los primeros momentos por Estados Unidos, tuvo sus primeras manifestaciones en las expediciones del venezolano Narciso López y su llamamiento a la acción directa, a partir de 1868 (9). El separatismo encontró posteriormente en José Martí su máximo inspirador y director y alcanzó con la segunda guerra en 1895 su edad madura, si bien Estados Unidos se encargó de arruinar sus logros (10).

Realmente, con respecto a este último punto, Martí se expresó repetidas veces, dándose cuenta del peligro representado por Norteamérica, circunstancia por la cual creía del todo necesaria la independencia cubana, pues pensaba que Estados Unidos se lanzaría sobre Cuba española, pero no sobre Cuba independiente. Del mismo modo, vislumbró las dificultades referentes a las cuestiones económicas, al afirmar, en relación con el monocultivo, que "el pueblo, que quería morir, vendía a un solo pueblo" (11). Por lo tanto, era necesario que Cuba se liberase, tanto de España como de Estados Unidos, puesto que una ayuda excesiva por parte de la Unión acabaría en la intervención y ésta era, a todas luces, peligrosa para los intereses cubanos, dado que, una vez Estados Unidos se apoderara de la isla, sería muy difícil sacarlo de allí (12).

Desde un punto de vista sociológico, los partidarios del reformismo y del anexionismo pertenecían a la misma clase social: eran azucareros, cafetaleros, comerciantes, ganaderos y madereros, y todos temían una sublevación de esclavos, si Cuba se hacía libre. Se trataba de dos manifestaciones de una misma aspiración, tendente a perpetuar la vigencia de las estructuras existentes, con la única diferencia de que el anexionismo entendía que la integración en la Unión presentaba muchísima

mayor estabilidad al ofrecer libertades públicas y comerciales, un mercado comprador seguro y esclavos.

El separatismo, por su parte, estaba formado por los pequeños propietarios, los profesionales, los trabajadores blancos, los negros libres y por algunos azucareros de visión avanzada y constituía el estamento más lábil y dinámico, socialmente hablando. De esta forma y conforme transcurría el tiempo, los reformistas enviaron memoriales y hombres a Madrid; los anexionistas, delegados a Washington, y los separatistas conspiraron en Estados Unidos y en Centroamérica (13).

Evidentemente, con el paso del tiempo la personalidad antillana fue tomando cuerpo a través de sus intelectuales y de sus políticos más preclaros. Como ya se indicó con anterioridad, en Cuba se fue fraguando, de manera paulatina, la conciencia nacional de la mano de hombres como el P. Félix Varela, notable propagandista contra el régimen español; José María Heredia, poeta de intenso lirismo y sensibilidad; José Antonio Saco, famoso escritor y político de cultura enciclopédica; José de la Luz Caballero, conocido maestro y singular pedagogo; Cirilo Villaverde, el novelista de la Cuba colonial, que tan bien dibujó la vida criolla decimonónica en su Cecilia Valdés, y otros (14). Por su parte, en Puerto Rico se hizo patente, a su vez, la evolución de las generaciones con Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruíz Belvís, Eugenio María de Hostos, los historiadores José Julián Acosta y Alejandro de Tapia, etc.

Ciertamente, el caso de Puerto Rico todavía revistió, por sus caracteres de incompreensión por parte de los políticos peninsulares, mayor gravedad que el de Cuba, supuesto que en la Pequeña Antilla nunca se dieron las circunstancias que rodearon el desarrollo de la vida política cubana. A principios del siglo

XIX, una serie de reformas de orden económico, de evidente repercusión social y política, había producido en Puerto Rico unos excelentes resultados, cuyo influjo se dejó sentir en Cuba, contribuyendo, de este modo, a impedir que las Antillas siguieran los pasos de la América Continental. Tras estos acontecimientos iniciales, vinieron a Madrid los comisionados de los Ayuntamientos y de los mayores contribuyentes de Puerto Rico para informar al Gobierno de la metrópoli sobre las reformas urgentes que en el orden político y económico debían llevarse a cabo en aquella isla. Más tarde, estos comisionados, unidos a los de Cuba, protestaron contra el supuesto de intentar abordar cualquier tipo de reforma, sin que la precediese la reforma social, es decir, la abolición de la esclavitud, proponiendo con carácter urgente la adopción de tal medida con o sin indemnización.

Posteriormente, la Revolución de 1868 no se atrevió a pasar de la convocatoria de diputados a Cortes, con la cual únicamente se rompió el vergonzoso paréntesis de treinta y cuatro años de ausencia de representación parlamentaria y de vida libre en las provincias de Ultramar. Así, los diputados a Cortes fueron elegidos en Puerto Rico, conforme a un censo arbitrario de cincuenta pesetas de contribución directa al año, manteniéndose allí el régimen antiguo, de tal forma que por el Decreto de 14 de Diciembre de 1868 y la Circular de la misma fecha sobre el ejercicio de la libertad de imprenta y del derecho de reunión, se estableció que la Real Orden de 28 de Mayo de 1825 (llamada de las "omnímodas") se entendería en suspenso, únicamente durante el periodo electoral. Dentro de este contexto, Puerto Rico, con gran discreción y exquisito tacto, aprovechó las mezquinas libertades que se le otorgaban y utilizó los mermados derechos que sucesivamente le fueron reconocidos, haciendo verdaderos prodigios de cordura y de sentido político para aclimatar las

pequeñas novedades que se introducían en el antiguo sistema colonial como medio de capacitarse para pretensiones más considerables.

De esta forma, la Ley Preparatoria para la abolición de la esclavitud fue cumplida allí activamente, y lo mismo sucedió con la Ley de Extranjería y con el Decreto de unificación de Fueros y el de libertad religiosa. Luego, y por el sólo impulso de la propaganda democrática que se hacía en la Península y de los éxitos logrados por las reformas hechas en Puerto Rico, se planteó la reforma electoral de 1871, que reconoció el derecho de votar diputados a Cortes a todo español libre de veinticinco años en adelante, que supiera leer y escribir o que pagase cuarenta pesetas de contribución directa al Estado (15).

Por otra parte, era preciso considerar la acción de los partidos políticos organizados en Puerto Rico desde 1869, en especial la del Partido Liberal o Reformista, que valientemente precisó sus aspiraciones en la fórmula de "identidad de derechos políticos y civiles de peninsulares y puertorriqueños", a pesar de las restricciones en que tuvo que moverse. Hasta 1870 no se consiguió que se votaran las Leyes Provincial y Municipal para aquella isla, pero esto sólo sirvió para disgustar a los reformistas y, en general, al pueblo puertorriqueño, porque en cuanto se publicaron dichas leyes los elementos reaccionarios solicitaron y consiguieron que quedaran en suspenso. Al poco tiempo, se aplicó la Ley Provincial con algunas modificaciones, pero no así la Ley Municipal, y como ésta era la base de aquélla, los cambios efectuados en la organización de la provincia resultaron de escasísima importancia.

En todo caso, resultaron evidentes las dificultades de compaginar la reforma política y la transformación económica y

administrativa con la abolición radical de la esclavitud, amén de los obstáculos que en la Península supusieron el planteamiento y desarrollo de las nuevas instituciones ultramarinas. La Liga Antirreformista prodigó toda clase de alarmas y de amenazas, al tiempo que los reaccionarios organizaron en Puerto Rico conspiraciones y motines para demostrar que la isla se levantaba, precisamente, cuando las reformas se iban a realizar; pero, no obstante, no se perturbó de manera fundamental el orden público, ni se perjudicó la vida económica del país, paralizando el trabajo (16).

Así, pues, el panorama ultramarino y singularmente el cubano quedó configurado por la desigual posición de los criollos frente a los peninsulares, detentadores de todos los favores metropolitanos. Los criollos protestaron por la situación política y administrativa en que se movían los españoles y algunos cubanos privilegiados, y por el desfase económico de estructuras entre la metrópoli y las provincias de Ultramar. Por una parte, la discriminación política supuso para los criollos el alejamiento de los puestos gubernamentales y el sometimiento total a las directrices emanadas de Madrid; por otra, la desigualdad económica comportó una serie de obligaciones comerciales con España, totalmente desfavorables para las Antillas (así, por ejemplo, Cuba se vió obligada a absorber una serie de productos peninsulares, la mayoría de los cuales no le interesaban, mientras que España no constituía un amplio mercado de exportación para los productos cubanos fundamentales -café, tabaco y, sobre todo, azúcar- y tampoco podía facilitar la maquinaria necesaria en un proceso de industrialización, en el que ella misma era deficitaria, posibilidades ambas que sí le brindaba Estados Unidos).

La consecuencia de todo ello fue, pues, unas relaciones

comerciales cada vez más desventajosas (problema del arancel) y con un considerable influjo estadounidense. Así, pues, el papel preponderante, tanto política como económicamente, estuvo desempeñado en las Antillas por los peninsulares, estamento integrado básicamente por los cuadros militares y administrativos, altos y bajos; por las grandes compañías comerciales, como la montada por el conocido negrero Julián Zulueta; por la clase media urbana, y por los pequeños comerciantes (17).

Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias y salvo algunos pequeños brotes, hasta 1868 no hubo movimiento alguno de independencia. Ciertamente, ello se explicaba por la inercia política producida por la prosperidad, de tal forma que, aunque a mediados de siglo la élite criolla hubiera podido llevar a cabo una sublevación contra España, ésta no tuvo lugar, ya que esto entrañaba un riesgo, la posibilidad de un fracaso y, por tanto, la ruptura de la base de su riqueza y el peligro de un levantamiento de esclavos negros, como les había ocurrido a los plantadores franceses de Santo Domingo. No obstante, este panorama cambió en la década de los sesenta a partir de la terminación de la Guerra de Secesión momento en el que una parte importante de los terratenientes criollos, hasta entonces partidarios del anexionismo, se pasó al movimiento reformista y después, fracasado éste (desastroso resultado de la Junta de Información), a la guerra de independencia (18).

A pesar de todo, hacia 1850 y ante las presiones internacionales existentes, empezó a perfilarse en la mente de las autoridades la necesidad de introducir ciertas reformas como consecuencia de los esfuerzos de los reformistas y de la relativa frecuencia de los movimientos insurreccionales (19). El Capitán General O'Donnell fue el primero en propugnar el entendimiento

con los criollos, y tras la detectación del problema por parte del General Concha (20), se caracterizaron en este sentido los gobiernos de los Generales Serrano (Proyecto de Ley Orgánica de la Isla de Cuba de 12 de Noviembre de 1860, basado en la teoría de la asimilación) (21) y Dulce, partidario, asimismo, de una política de atracción (22). En estas circunstancias, el reformismo, alentado por esta coyuntura favorable, se lanzó a su labor con más entusiasmo si cabe, aumentando sus actividades y fundando el periódico "El Siglo" (1863), que quedó constituido en el órgano difusor de sus ideas. A la cabeza de este movimiento, cuyo principal inspirador, como ya se dijo anteriormente, fue José Antonio Saco, se alinearon hombres como José Morales Lemus, José Manuel Mestre, José Antonio Echevarría, Miguel Aldama, Nicolás Azcárate y otros, que centraron sus principales peticiones, en aquellos momentos, en torno a los siguientes puntos: reforma del sistema de tarifas (en especial, de cara a la importación a Estados Unidos), representación de Cuba en las Cortes y otras reformas políticas y extinción del tráfico de esclavos (23).

Por aquellas fechas, Labra, recogiendo el ambiente reinante, escribió un artículo, publicado en la revista jurídica "La Escuela del Derecho", en el que se hacía eco de los indicios de cambio existentes en la política ultramarina. De acuerdo con estos criterios, constataba la existencia de aires renovadores, gracias a los cuales los antillanos empezaban a tener conciencia de sí tras el paréntesis en que habían vivido hasta el presente, siendo evidente, además, que no se llevaba con resignación el orden actual de las cosas coloniales. La reforma había entrado en las antecámaras del poder, si bien, de momento, no se esperaban cambios plenamente radicales, dado el estrecho criterio que sobre materias políticas y sociales imperaba en las altas esferas del Gobierno. Con todo, el sesgo que tomaban los asuntos, la

variación de conducta y las promesas que se hacían pública y oficialmente predisponían a una benévola expectación y a la esperanza de que pronto el orden existente cambiaría (24).

Hasta el presente, la situación era de absoluta arbitrariedad, de forma que las Antillas vivían plenamente de la gracia de un Capitán General. En estas circunstancias, podía despoblarse una región, si sus habitantes no marchaban al ritmo que les marcaba su administrador; la vida ordinaria suponía la práctica suspensión de las garantías individuales y el casi estado de sitio y los Tribunales de Justicia se colocaban en un orden secundario, con lo cual en vez de ser la salvaguarda de la vida, de la honra y de los intereses de todos los ciudadanos, contemplaban cruzados de brazos cómo se vulneraban la seguridad, la existencia y el porvenir de aquéllos sin poder decir una palabra. Todo dependía tan sólo de que el capricho del Ejecutivo decidiera si una cuestión afectaba o no a la seguridad pública o a la firmeza del Gobierno metropolitano en la provincia de Ultramar y de que considerase que un asunto era de orden inferior o secundario para proceder, así, a absolver a un ciudadano, víctima de una falsa delación o de una extralimitación de la propia autoridad (25).

De todas formas, el porvenir apuntaba hacia un horizonte esperanzador, animado por un espíritu distinto, que parecía enmarcar un nuevo período de civilización. No se trataba, no obstante, de discutir ahora la identidad política y económica de las provincias ultramarinas con la metrópoli o cualquier otro sistema de plena autonomía. En realidad, se pedía mucho menos; se pedía únicamente la reforma de aquello que debía reformarse de manera perentoria e imprescindible (26).

Poco más tarde, Labra expuso sus reparos en relación

con el predominio del gobierno militar en la administración ultramarina. Realmente, tal como estaba organizada la administración de Ultramar, nada tenía lugar dentro de ella, si no era supervisado por la Capitanía General. De esta forma, la vida de la provincia ultramarina estaba oprimida e infradesarrollada, ya que no había garantías políticas, ni estaba garantizada la inviolabilidad personal, ni la prensa libre y, por supuesto, no podía presentarse objeción alguna frente a la voluntad omnímoda de la primera autoridad provincial, sujeta después de su mandato tan sólo a una responsabilidad meramente nominal.

Los intereses de una provincia de Ultramar, por ser menos extensos, aunque no menos graves y complejos que los de toda una nación y estar más cerca y casi al contacto de la persona que a su cargo tenía la resolución de todos los negocios públicos, debían ser llevados de un modo altamente satisfactorio, pero en ninguna parte como en las Antillas se decía que eran más necesarias la fuerza y el vigor en el mandato por razones particulares de situación, posición, historia y carácter. Por otra parte, este sistema no había logrado la felicidad del país ni su mejora ni progreso, y aunque se habían obtenido adelantos y reformas en ciertos detalles, éstos habían tenido siempre un alcance secundario y accidental. En todo caso, los avances logrados hasta entonces se habían hecho contra la voluntad del régimen militar, que en todo momento había puesto obstáculos a éstos (27).

En esta situación, la esclavitud, que era un escándalo además de ser un peligro, pedía una pronta resolución. La Hacienda reclamaba medidas tan serias como amplias; la vida económica del país exigía atención profunda, por lo que se refería a la reforma del trabajo, a la inmigración de colonos

libres, al fomento enérgico y positivo de una verdadera industria y al régimen comercial. Las exigencias del mundo y de la moralidad solicitaban una satisfacción cumplida y que en su provecho se crease una atmósfera limpia, que no impidiese su privanza y sus progresos; la vida política esperaba su desarrollo y la libertad reclamaba su sitio en el movimiento general de las cosas ultramarinas.

Frente a esto, el régimen militar había huido de cualquier resolución sabia y enérgica, desconociendo las urgencias y dando mil pruebas de su incapacidad para entender los intereses, los movimientos y, en una palabra, la vida compleja y varia de los pueblos. Todo esto se debía a la incompetencia y a la ineficacia propias de los gobiernos militares para entender en la gestión de los negocios civiles y lograr la felicidad de un país en la segunda mitad del siglo XIX. Así, pues, dentro de este contexto, si no se terminaba con el régimen militar en las Antillas, cualquier otra postura resultaría inútil en orden a la solución de la grave crisis por la que atravesaban aquellos pueblos (28).

Dado el planteamiento existente, en un intento de crear un "status" jurídico definitivo en las provincias de Ultramar y comprendiendo que los asuntos ultramarinos no eran simplemente un incidente de la administración pública y de la política interior, Cánovas del Castillo convocó una Junta de Información con la finalidad de ocuparse de estos temas. No obstante, como ya se había indicado al tratar de los problemas de la mano de obra colonial, la inestabilidad política de los últimos años del reinado de Isabel II impidió que la idea tuviera un feliz resultado.

Mientras tanto, don Rafael María de Labra continuó

ocupándose de los temas ultramarinos, tratando de aclarar las cuestiones que se suscitaban en torno a la autonomía antillana. Ciertamente, una de las causas del malestar existente en el seno de la sociedad antillana residía en la falta de vida política. Debido a ello, la inmensa mayoría de la población vivía fuera de la realidad actual; el Gobierno se mostraba opresor, estrecho y falto de inteligencia; no se escuchaba para nada al ciudadano; el contribuyente carecía de voto y no se respetaba ningún derecho político. Por otro lado, todo proyecto serio, toda reforma trascendental se estrellaba contra la apatía o contra la ignorancia de la metrópoli, cuando no se eternizaba por razón de las comunicaciones y de las distancias. En estas circunstancias, no era de extrañar la desorganización reinante, dada la incompetencia forzada y artificial de las provincias ultramarinas para entender de sus propios asuntos.

Sin embargo, la idea de la autonomía no era aceptada con facilidad por la mayoría de la gente. Realmente, resultaba muy duro desprenderse de ciertos criterios y renunciar a determinados derechos, arropados bajo el escudo del patriotismo e incluso del interés nacional. Por este motivo, se sostenía que la concesión de derechos a las provincias de Ultramar era la más segura base de su independencia y que exigir reformas y rebajar un ápice los grandes poderes de la metrópoli suponía discutir su dominio y marchar en contra de los intereses de España (29).

Era preciso tener presente que las tierras de América, antes que españolas eran de los que las ocupaban y trabajaban, y que si bien sus habitantes nos debían reconocimiento y gratitud, nosotros teníamos que considerarlas con arreglo a la civilización en la que las habíamos iniciado, como algo más que meras e interesadas explotaciones. Ciertamente, el porvenir estaba lleno de dificultades y había que valorar los inmensos sacrificios que

supondría determinado estado de cosas. Pero, en todo caso, aun cuando fuese posible, con las reformas que se defendían en España, crear las bases de la independencia futura de las provincias de Ultramar, era siempre un grave error cerrar los ojos para no ver la lógica de los sucesos y pensar que los grandes imperios eran los únicos que hacían la Historia y que abarcaban todos los destinos de la Humanidad. Además, sin la vida política y sin la autonomía no era factible mantener el orden, la paz y el bienestar en las provincias ultramarinas.

Por otra parte, no se vislumbraba cercana la época de la emancipación de las Antillas, pues si se producía ahora, España no perdería gran cosa, mientras que el quebranto sería enorme para las provincias de ultramar. Parecía más conveniente, pues, aceptar la tutela de la metrópoli, pero por lo mismo ésta no debía olvidar su obligación de educarlas y prepararlas para un futuro autónomo. En cualquier caso, de esta actitud se derivarían importantes beneficios para España en el ámbito de la América hispana, cuyo apoyo sería muy necesario con vistas a evitar posibles desastres, que inevitablemente se producirían si las cosas no cambiaban de rumbo (30).

No obstante, lo cierto era que, mientras se vitorease la bandera de España y se reclamase la unión de las provincias ultramarinas con la Madre Patria, no habría solución alguna; todo lo más que se podía pretender era la Asamblea colonial con facultades absolutas para el arreglo de los asuntos económicos y administrativos. En cambio, con respecto a los derechos políticos y civiles, lo adecuado era la identidad en relación con la Península, porque esto era lo general, ya que tales derechos eran cosmopolitas, sin que sufriesen alteración por la distancia o los climas; además, de esta manera, se reconocía el principio de la unidad nacional, haciendo que todo español, por el mero hecho de

serlo, disfrutase de los mismos derechos fundamentales; y, así, tanto en España como en las Antillas gozase de seguridad para su persona, de libertad para su pensamiento y de facultad para entender en los negocios totales de la nación y en los particulares del país en que vivía y trabajaba.

Dentro de este contexto, pensar en otra cosa era forzar el significado y el nombre de las instituciones sin llegar a una solución satisfactoria, ya que, si bien los autonomistas creían en la emancipación a tiempo de las provincias de Ultramar y defendían en nombre de la libertad la reforma del mundo ultramarino asimismo abogaban en nombre de la justicia por los intereses de España. Ciertamente, eran dos cosas completamente distintas y que comprometían de muy diversa manera la autonomía colonial y la independencia de las Antillas, motivo por el cual era necesario saber por su nombre y por su realidad lo que de verdad se deseaba para ser lógicos en el sistema y prudentes en las concesiones (31).

Así, pues, las demandas presentadas por los comisionados reformistas de Cuba y de Puerto Rico y agrupadas en uno de los interrogatorios básicos preparados para la Junta de Información, que hacía referencia a la cuestión política, no fueron tenidos en cuenta en modo alguno. Las mencionadas demandas se centraban básicamente en torno a las siguientes cuestiones: fin del estado de excepción en Cuba existente de hecho desde 1825; municipalidades descentralizadas con vida propia y Ayuntamientos de elección popular directa; distritos provinciales con Diputaciones y Consejos, organizados de un modo análogo a los de la Península y con la extensión de las facultades que exigían las circunstancias especiales de aquellas islas; Gobernadores de distritos provinciales, en cuya elección, que correspondía exclusivamente al Gobernador Superior Civil, tuviese también

influencia el elemento popular; Corporaciones Insulares con facultades bastantes para deliberar y proponer todo lo que, directa y peculiarmente, interesase a aquellas islas; representación en el Congreso Nacional para todo lo que en conjunto con las demás provincias pudieran afectar a aquéllas, y Administración de Justicia, organizada en términos adecuados a las necesidades de aquellos países y que evitase a sus habitantes la necesidad de recurrir a la metrópoli.

Asimismo se pedía Hacienda, contabilidad, estadística, Registro Civil y de la Propiedad, catastro y archivo públicos, organizados, regularizados y vigilados por empleados competentes; que la naturaleza, el arraigo y la residencia continuada en aquellos países, lejos de estimarse obstáculos, se considerasen, como en realidad eran, motivos de preferencia para obtener allí empleos y garantías de mejor desempeño; separación absoluta del Gobierno y del mando militar; representación del Poder Ejecutivo mediante un Gobernador Superior Civil; facultad del Gobierno para estacionar en las Antillas por cuenta del presupuesto nacional las Fuerzas de Mar y Tierra que estimase convenientes, y nombrar sus jefes superiores con todas las facultades necesarias para el mando, pero sin ninguna atribución que rozase con el Gobierno, ni les permitiese sobreponerse a la representación del Ejecutivo, que sería siempre considerado el Jefe Superior de la isla respectiva; inviolabilidad de las libertades, derechos y garantías constitucionales y prefijación de los casos en que únicamente podrían suspenderse algunos para la mejor defensa de las libertades y derechos; revisión de las tarifas y tasas, y medidas eficaces para poner fin al tráfico de esclavos (32).

Por toda respuesta el Gobierno español promulgó un Decreto, por el cual, contra las recomendaciones, tanto de los comisionados liberales como de los comisionados conservadores y

gubernamentales, se fijaba como tipo contributivo el seis por ciento sobre el producto neto de la propiedad real e industrial; se autorizaba al Gobernador a fijar los recargos adicionales que considerase necesarios para cubrir las atenciones de los Ayuntamientos y se le facultaba, además, para acordar la exacción de nuevos tributos hasta el doce por ciento, si los establecidos no bastaban para cubrir los gastos. Y todo ello, sin que, según habían recomendado aquéllos, se prescribiera, en su caso, la supresión de la contribución indirecta de Aduanas (33).

Y no solamente terminó en esto la política gubernamental, sino que tras la Junta de Información el Capitán General de Cuba, Francisco Lersundi, renovó la actitud despótica, mientras en Puerto Rico el Gobernador José María Marchessi desencadenaba una dura persecución contra los reformistas y ordenaba el destierro de gran número de ellos, como Pedro Jerónimo Goycoo, Vicente María Quiñones, José de Celis Aguilera, Rufino de Goenaga, Calixto Romero Togores, Carlos Elio Lacroix, Julián Eusebio Blanco, Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruíz Belvís (este último marchó a Chile, donde murió, y Betances se refugió en la isla de Santo Tomás, donde, ya plenamente convertido al separatismo, escribió su proclama Los Diez Mandamientos de los Hombres Libres, llamando a los puertorriqueños a la revolución) (34).

N O T A S.

- (1) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), págs. 11-12. Para una revisión general del proceso véase también, SEDANO Y CRUZAT, CARLOS: Cuba. (Estudios Políticos) (Madrid 1872) y Cuba desde 1850 a 1873 (Madrid 1873).
- (2) Las dificultades y las contradicciones relativas a la implantación del régimen liberal en España pueden seguirse en FONTANA LAZARO, JOSEP: Cambio Económico y Actitudes Políticas en la España del Siglo XIX (Barcelona 1973).
- (3) COLLAZO, ENRIQUE: Desde Yara hasta el Zanjón (Apuntaciones Históricas) (La Habana 1893), pág. 1, citado por Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES María: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. XII.
- (4) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico (Madrid 1953), págs. 12-13.
- (5) Sobre el pensamiento de Saco véanse, SACO, JOSE ANTONIO: Colección de Papeles Científicos, Históricos, Políticos y de otros Ramos sobre la Isla de Cuba, ya Publicados, ya Inéditos (Paris 1859); Ideario Reformista (La Habana 1935) y Contra la Anexión (La Habana 1928).
- (6) A su vez la figura y las ideas de Saco son analizadas en MERINO BRITO, ELOY G.: José Antonio Saco: Su Influencia en la Cultura y en las Ideas Políticas de Cuba (La Habana 1950) y en PEREZ, LUIS MARIANO: Estudio sobre las Ideas Políticas de José Antonio Saco (La Habana 1908).
- (7) THOMAS, HUGH: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970) (Barcelona-México 1973), Vol I, págs. 309-323.
- (8) Ibid., Vol I, págs. 289-307.
- (9) Sobre las expediciones de López véanse, CALDWELL, ROBERT G.: The López Expeditions to Cuba, 1848-1851 (Princeton 1915) y PORTELL VILA, HERMINIO: Narciso Lopez y su Epoca, 1848-1850 (La Habana 1952).
- (10) Sobre la vida de Martí véanse, LIZASO, FELIX: Martí, Místico del Deber (Buenos Aires 1952); MANACH, JORGE: Martí el Apostol (Madrid 1975) y MARTINEZ ESTRADA, EZEQUIEL: Martí Revolucionario (La Habana 1967).

- (11) HUBERMAN, LEO y SWEEZY, PAUL M.: Cuba. Anatomía de una Revolución (Buenos Aires-Montevideo 1961), pág. 29.
- (12) Un seguimiento de los escritos de Martí puede hacerse en MARTÍ, JOSE: Obras Completas (La Habana 1963 y sigs.).
- (13) BOSCH, JUAN: Cuba, la Isla Fascinante (Santiago de Chile 1955), pág. 96.
- (14) Ibid., pág. 148.
- (15) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 112-115.
- (16) Ibid., págs. 115-117.
- (17) Sobre el problema de las relaciones comerciales véase, ALZOLA Y MINONDO, PABLO: Relaciones Comerciales entre la Península y las Antillas (Madrid 1895).
- (18) CARR, RAYMOND: España: 1808-1939 (Barcelona 1969), págs. 298-299.
- (19) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Manual de Historia de Cuba (Económica, Social y Política) (La Habana 1964), pág. 547. Para una visión más pormenorizada de los acontecimientos puede verse GUERRA SANCHEZ, RAMIRO; PEREZ CABRERA, JOSE María; REMOS, JUAN J. y SANTOVENIA, EMETERIO S.: Historia de la Nación Cubana (La Habana 1952).
- (20) Sobre la política de Concha véase, CONCHA, JOSE DE LA: Memoria sobre el Estado Político, Gobierno y Administración de la Isla de Cuba (Madrid 1853).
- (21) Sobre el período de mando de Serrano véase, SERRANO Y DOMINGUEZ, FRANCISCO: Informe Presentado por el Excmo. Sr. Capitán General, Duque de la Torre, al Ministro de Ultramar en Mayo de 1867 (Madrid 1868).
- (22) La gestión de Dulce puede seguirse en DULCE, DOMINGO: Informe Referente al Régimen y Administración de las Islas de Cuba y Puerto Rico Presentado por el Excmo. Sr. D. Domingo Dulce, Marqués de Castelflorite, al Sr. Ministro de Ultramar en Enero de 1867 (Madrid 1867).
- (23) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Manual de Historia de Cuba (Económica, Social y Política) (La Habana 1964), pág. 555.

- (24) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Justicia en Ultramar (Madrid 1863), págs. 5-6.
- (25) Ibid., págs. 9-10.
- (26) Ibid., pág. 22.
- (27) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Brazo Militar y la Administración Ultramarina, "Revista Hispano-Americana" (Madrid), I, núm. 3 (10-I-1864), págs. 263-265.
- (28) Ibid., págs. 267-268 y 270.
- (29) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial y las Rentas Ultramarinas, "Revista Hispano-Americana" (Madrid), II, núm. 5 (27-III-1865), págs. 188-189.
- (30) Ibid., págs. 189-190.
- (31) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Los Derechos Políticos en Ultramar, "Revista Hispano-Americana" (Madrid), III, núm. 10 (27-IX-1865), págs. 363-364.
- (32) CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol. I, págs. 553-554.
- (33) Ibid., Vol. I, págs. 557-558.
- (34) DIAZ SOLER, LUIS M.: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (San Juan 1974), pág. 288.

2.2.1) LA REVOLUCION DE 1868 Y EL MUNDO COLONIAL

El fracaso de la Junta de Información y la apertura de la primera guerra de independencia cubana, unido al propio proceso revolucionario peninsular, que expulsó del trono a Isabel II, pospusieron, una vez más, el problema de la reforma política en Ultramar, que se convirtió de este modo en uno de los puntos clave a resolver en el futuro. De esta forma, quedó pendiente la mayor parte de los problemas que habían configurado el mundo político ultramarino desde principios de siglo, agravados por el paso del tiempo, por su falta de solución. En el centro de la cuestión estaba el deseo de los antillanos de recibir un trato en pie de igualdad con respecto a la metrópoli, que hiciera desaparecer la flagrante discriminación existente desde la implantación en 1837 de las llamadas "leyes especiales". En realidad, el problema de la reforma política no podía ser de fácil solución, pues, además, había que tener en cuenta que esta cuestión estaba íntimamente relacionada con el aspecto económico, sin que pudiera perderse de vista la vertiente internacional del asunto.

Por otra parte, a todo ello hubo que añadir dos elementos nuevos, que vinieron a complicar la problemática existente, haciéndola mucho más compleja, de tal forma que junto a la dificultad que suponía la multiplicidad de planos a reestructurar, fue preciso considerar, tanto el valor que representaba el paso del tiempo (con la consiguiente evolución de las peticiones criollas de lo puramente administrativo a lo estrictamente político) como la aparición de la guerra cubana, relacionada con la profunda desilusión que produjo entre los antillanos el fracaso de la Junta de Información, e inevitablemente envuelta en el apasionamiento y en la radicalización de posiciones (1).

El proceso evolutivo en la marcha de los acontecimientos ultramarinos encontró en 1868, con la iniciación de la primera guerra de independencia cubana, su momento de tránsito hacia una nueva etapa. Con ello se abrió un periodo distinto, caracterizado por la existencia de un grupo político que ya no admitió reformas de ningún tipo, sino tan sólo la independencia de su tierra. Anhelos más o menos vagos de independencia los había habido en las Antillas desde el primer cuarto del siglo, pero ahora estos deseos tomaron cuerpo de una manera efectiva, concretándose y llevándose por primera a la práctica de la lucha armada.

Ciertamente, el efecto de este acontecimiento fue imborrable, pues, si bien es verdad que la Guerra de los Diez Años adoleció de múltiples errores y que en muchos casos estuvo falta de un sentido político adecuado, no lo es menos que sirvió de experiencia positiva; que fue una prueba de capacidad para los cubanos; que creó una aureola de martirio y de sacrificio, y que supuso para muchos una toma de conciencia, que les llevó al convencimiento de que el camino revolucionario era el único adecuado (2).

A partir de este momento, hubo un sector antillano más o menos amplio que ya no renunció a sus ideales y que continuó, subrepticia o abiertamente, la lucha, lo que supuso un cambio fundamental, puesto que ahora ya no se trataba tanto de otorgar reformas administrativas cuanto políticas. Realmente, el fracaso de la Junta de Información constituyó el elemento coadyuvante que convenció a no pocos de la ineficacia del diálogo con la Península; tan sólo faltaba un plano coyuntural adecuado y éste vino dado por las conmociones políticas españolas de Septiembre de 1868.

Terminadas las reuniones de la Junta de Información, pronto se dejaron sentir sus resultados en las Antillas: el reformismo quedó superado y las ideas separatistas enraizaron en la conciencia de los ilustrados cubanos, a quienes se les hizo patente que los métodos del reformismo eran insuficientes para obtener de la metrópoli lo que Cuba había estado pidiendo, motivo por el cual necesitaban la fuerza y la violencia para lograr el reconocimiento de sus derechos (3).

Desde 1865 funcionaba en Nueva York la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, a cuya labor vino a sumarse una serie de conspiraciones, planes y reuniones, llevadas a cabo en colaboración con diversas sociedades secretas, y cuyo fin era provocar una sublevación contra el régimen español. En 1867 empezaron a trabajar en la región oriental, con contactos en Camagüey, La Habana y Santa Clara, Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo, Francisco Maceo Osorio y algunos más. Meses después, se unió al grupo el hacendado Carlos Manuel de Céspedes, mientras que Francisco Vicente Aguilera era nombrado jefe del movimiento insurreccional, cuya fecha de comienzo se fijó para el 3 de Septiembre de 1868.

Poco más tarde, se aplazó el momento del alzamiento para después de la zafra, y en nueva resolución se acordó el mes de Diciembre de 1868 ante la impaciencia de los conjurados. Por último, se eligió el 14 de Octubre de aquel año, al tiempo que se nombraba jefe a Carlos Manuel de Céspedes (4). No obstante, aun se produjo una alteración de última hora, puesto que, enteradas de la conspiración las autoridades españolas, tuvo que adelantarse la fecha acordada en cuatro días. De esta forma, el 10 de Octubre de 1868 los conspiradores abrieron el proceso revolucionario al trasladarse desde el ingenio "La Demajagua" al vecino pueblo de Yara, desde donde Céspedes lanzó un Manifiesto

al País, en el que explicaba la razón de ser y los fines de la revolución y pedía la colaboración de todos para el mejor logro de ésta (5).

También los puertorriqueños consideraron llegado el momento de extender la revolución a su isla, para lo cual habían estado trabajando lo mismo que los cubanos. Desterrados por el Gobernador Marchessi en 1867, Ruíz Belvís y Betances habían marchado a Nueva York, donde entraron en contacto con la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico por conducto del doctor José Francisco Basora. Después, Ruíz Belvís pasó a Chile, donde murió al poco tiempo (4 de Noviembre), y Betances inició sus campañas revolucionarias en Santo Domingo, continuándolas en Curacao y Haití.

El espíritu revolucionario puertorriqueño fue aumentando paulatinamente, y junto a Betances aparecieron otros independentistas, como Hostos y Ríos Rivera, que trabajaron incansablemente para el logro de sus fines. Betances, como Martí, estaba convencido de que la revolución era el único método de actuación, y fiel a este pensamiento dirigió todos sus esfuerzos a preparar la insurrección, que debía tener lugar en el pueblo de Lares, con lo cual se convirtió en su inspirador intelectual y material (6). Desde su destierro, en Julio de 1867 Betances había desarrollado una intensa actividad, recaudando fondos, comprando pertrechos y armas y redactando proclamas, que reflejaban el espíritu maximalista propio de un revolucionario. De acuerdo con este estilo, se mostraba intransigente y, al igual que Martí, consideraba que Puerto Rico, como Cuba, había llegado "en su actual estado y problemas al punto de entender la incapacidad de una política conciliadora", motivo por el cual se imponía "la necesidad de una revolución violenta", tal como diría Martí a Máximo Gómez, años más tarde (7).

Así, pues, en pos de esa revolución violenta se fraguó la conspiración que debía llevarla a cabo, aunque circunstancias adversas impidieron que tuviera un feliz desenlace: fijada la fecha inicial del levantamiento para el 29 de Septiembre de 1868, ésta tuvo que adelantarse al 23 al ser descubiertos los planes de los conjurados, mientras que el Gobierno español negaba a Betances la entrada en Puerto Rico. De esta forma, la insurrección quedó en manos del venezolano Manuel Rojas y del norteamericano Brugman, quienes el 23 de Septiembre de 1868 marcharon de la hacienda del propio Rojas al pueblo de Lares, en donde proclamaron la República de Puerto Rico, mientras que Betances lanzaba una proclama desde Santo Domingo (Los Diez Mandamientos de los Hombres Libres), que sirvió de manifiesto y en la que se declaraba la abolición inmediata y el fin del dominio español (8). Poco después, se adoptó una Constitución Provisional de la Revolución Puertorriqueña, en la que el Gobierno revolucionario quedó constituido bajo el nombre de Comité Revolucionario de Puerto Rico, pero ante la rápida reacción de las tropas españolas, los insurrectos fueron copados a la altura de la localidad de San Sebastián del Pepino y la revolución quedó malograda (9).

Realmente, la revolución cubana se convirtió en un proceso más complejo de lo que a simple vista pudiera parecer, en el que, aparte de la coyuntura representada por la Revolución de Septiembre en la Península y del clima moral creado por el fracaso de la Junta de Información, coexistieron otros elementos coadyuvantes que contribuyeron a dinamizarlo (10). El sistema económico imperante por aquel entonces en la isla estaba basado en una estructura rígida, dentro de la cual el Gobierno español oprimía a los terratenientes, quienes, a su vez, dominaban a los obreros y a los campesinos libres o esclavos, inmersos en el marco agrícola, caracterizado por la trilogía formada por la caña de azúcar, el tabaco y el café.

En estas circunstancias, la primera guerra de la independencia cubana se presentó como un movimiento encabezado por los grandes terratenientes cubanos y destinado, fundamentalmente, a conservar su preeminencia como hacendados y ganaderos, mediante la destrucción de las trabas que el régimen colonial español imponía al libre disfrute de la riqueza nacional (11). Todo ello vino aumentado, además, por las circunstancias económicas adversas de los últimos tiempos, durante los cuales el tabaco y el azúcar habían perdido precio, se elevaron los impuestos y se produjeron una serie de conmociones económicas, tales como paro en las ciudades y en el campo, cierres por parte de los comerciantes, hipotecas a las que tenían que hacer frente los terratenientes, con lo que los esclavos se convirtieron en una carga, etc.

De ahí que la insurrección se localizase, fundamentalmente, en Oriente, donde, aparte del mayor distanciamiento geográfico en relación con La Habana, había una más acentuada penuria fruto de la ruina de los cafetales y de la necesidad de grandes capitales para remontar la producción azucarera. Junto a todas estas cuestiones de carácter económico, también estuvo presente, de forma más o menos clara, en la conciencia de los revolucionarios el ideal de independencia y los principios liberales, igualitarios y progresistas infundidos por el sector de los pequeños propietarios participantes en la revolución (sector, poco importante, al principio, pero que, después, fue desplazando, progresivamente, a los hacendados e imponiendo, así, al movimiento insurreccional un sello cada vez más democrático) (12).

Como ya se indicó anteriormente, el panorama social a mediados de siglo se había distribuido en cuatro grandes grupos: funcionarios del Gobierno, incluyendo el clero; hacendados, casi

todos esclavistas; obreros y campesinos libres, y esclavos. La clase dominante estaba formada por los dos primeros grupos, divididos en peninsulares y nativos, a su vez subdivididos en anexionistas y reformistas. Por otro lado, esta distribución del espectro social quedó rota como consecuencia de la quiebra del anexionismo, provocada por el resultado de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, con lo cual en 1868 los elementos integrantes de la revolución quedaron agrupados de la siguiente forma: hacendados y dueños de ingenios, que habían animado el movimiento reformista y actuado en la Junta de Información y que ahora se erigieron en directores del alzamiento, pero que a pesar de ser importantes no controlaban, como antaño hicieran los anexionistas, la economía isleña; pequeños propietarios de la zona oriental de la isla mucho más pobre que la occidental, a quienes estorbaban para el desarrollo de sus fuerzas productivas, más que a ningún otro, las relaciones de producción existentes y que de hecho constituyeron el elemento nutricio de la revolución, llamado a borrar el carácter aristocrático de los primeros momentos; y, por último, la mano de obra libre y esclava, materia prima del proceso (13).

Ciertamente, los efectos producidos por la primera guerra fueron importantes y sus resultados influyeron sobre la segunda, configurándola de manera peculiar y distinta. En realidad, la Guerra de los Diez Años dió fe a los insurrectos más humildes, ahondó el sentimiento de la nacionalidad cubana y aniquiló y empobreció a los nativos ricos, que pasaron a engrosar la clase media. De esta forma, se produjo un auténtico corrimiento social, de manera que, mientras la primera guerra fue concebida e iniciada por un pequeño grupo de intelectuales más o menos ricos y por terratenientes sin raíces en la masa popular, la segunda, en cambio, fue preparada por hombres de la clase media, con lo que su carácter fue de un estilo mucho más democrático.

Fruto de esta evolución sociopolítica fue el mayor contenido económicosocial de la Revolución del 95 con respecto a la del 68. Así, por ejemplo, en tanto que la primera guerra tuvo a su frente un abogado, dueño de un ingenio, muy vinculado a la clase dominante, Céspedes, la del 95 contó con otro abogado, pero pobre, con más conocimiento político (estancias en Norte y Suramérica), más cerca de las capas humildes de la población cubana y menos vinculado a las élites dominadoras, Martí (14).

Al poco tiempo de la marcha sobre Yara, los insurrectos tomaron Bayamo (20 de Octubre de 1868), plaza que quedó bajo la defensa de Aguilera, Modesto Díaz, Donato Mármol y Máximo Gómez, con lo que pronto se extendió la revolución a Camagüey y a Las Villas, en donde operaban Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía, Ignacio Agramonte y Augusto Napoleón Arango. De esta forma, la guerra de Cuba se convirtió en el principal problema con que tuvo que enfrentarse la Revolución del 68. Llegados al poder, los conspiradores de Septiembre iniciaron rápidamente el planteamiento en las Antillas de los supuestos políticos del liberalismo revolucionario peninsular, pero de forma errónea, ya que lo entendían como la extensión a Ultramar de las conquistas revolucionarias, una vez quedase aplastado el movimiento separatista.

Haciéndose eco de estas cuestiones, Labra abordó una serie de temas, que expuso por aquellas fechas en la revista "La América". Realmente, se constataba en las Antillas la existencia de una situación desastrosa, derivada de la actuación del Gobierno metropolitano, que le había arrancado sus derechos y libertades. Pero, a pesar de ello, siempre se había mantenido en aquellas tierras la creencia de que algún día la Madre Patria reconocería sus errores, dando plena satisfacción a los agravios de Ultramar con la proclamación sincera y absoluta de la

libertad. Y al parecer, la hora había llegado, ya que pronto se pensaba otorgar a los antillanos seguridades relativas a la proclamación de sus derechos, y convocar a sus representantes para las Cortes Constituyentes (15).

Según el criterio autonomista, en aquellos momentos España se jugaba, por última vez, su porvenir en América. Desde este punto de vista, se asumía la posibilidad de la emancipación de las Antillas, aunque no se debía ni podía justificarla, ni darle siquiera un pretexto por interés de las provincias ultramarinas y por los saltos e inexcusables deberes de gran nación colonizadora que tenía España. En estas circunstancias, cualquier indecisión, recelo o reserva, por parte del Gobierno Provisional, sería un motivo suficiente para provocar la abstención de los partidos liberales de Ultramar, habida cuenta de que dicha abstención supondría la desaparición de la presencia española en las Antillas.

Por esta razón, los autonomistas pedían al Gobierno Provisional que llamase a los diputados ultramarinos a participar en las tareas políticas, de modo que se convenciesen de que la Revolución había proclamado la libertad en todo y para todos. De acuerdo con ello, la metrópoli debía reconocer plenamente la libertad de imprenta y de reunión de los antillanos, para que las elecciones no fuesen una farsa, dado que aquellos insulares estaban sometidos al despotismo burocrático y militar, y para que se viese el interés que se tenía en la Península por conocer sus verdaderas opiniones. Además, se tenía que reconocer el derecho electoral bajo un pie de igualdad con respecto a la Península, motivo por el cual era rechazable la idea de extender a las Antillas cualquier sistema que no recogiese el beneficio del sufragio universal (16).

Desde este punto de vista, era evidente que esperar el aplastamiento del movimiento separatista suponía retrasar la aplicación de las libertades revolucionarias hasta que acabase la guerra, con lo que de hecho se aplazaba la solución indefinidamente. A primeros del año 1869, el Capitán General Lersundi fue sustituido por el General Dulce, que llegó a Cuba pertrechado de un programa liberal de concesiones, entre las que se incluía las elecciones, la libertad de prensa y de asociación y, en general, la promesa de participar en los derechos y libertades que estableciera la Constitución, dándose por descontado la participación en Cortes.

No obstante, este planteamiento tropezó con una serie de dificultades que bloquearon el proceso, tales como el mismo aplazamiento en la aplicación de las medidas liberalizadoras, hasta que fuese totalmente dominada la revuelta separatista; el propio programa presentado que era inaceptable para los separatistas; la errónea óptica peninsular, que creía que la solución consistía simplemente en extender a las Antillas los derechos que el liberalismo consiguiese en la Península (en parte era esto, pero matizado con ciertas salvedades, que imponían los tiempos); la intransigencia de los "Voluntarios" y de otros sectores españolistas, etc (17).

Puestas así las cosas, no es de extrañar que pronto fracasase la política conciliadora del Capitán General Dulce, el cual se vió constreñido por la imposición de los "Voluntarios", milicia urbana de los peninsulares, financiada por las ricas familias españolas, que ejercían una presión evidente sobre las altas magistraturas de la isla (18). Así, pues, los posibles perjudicados por la aplicación de las reformas se apresuraron a defender sus intereses, argumentando que todo se hacía para defender la soberanía española. A partir de este momento, se

acudió a la exposición del siguiente tópico, que se mantendría de forma invariable hasta el fin de la presencia española en las Antillas: Cuba formaba parte de España, era una provincia más y toda cuestión reformista, tachada rápidamente de separatista, atentaba a la soberanía nacional.

Presentadas así las cosas, si bien las libertades revolucionarias eran ciertamente incompletas en la medida en que atacaban privilegios y situaciones creadas, eran peligrosas, y el modo de defenderse de ellas consistió en tildarlas de revolucionarias. Apoyándose en una situación concreta (la insurrección), todo podía ser presentado bajo ese aspecto, con lo cual se cerraba el paso a toda posible solución por la que abogaban los reformistas cubanos y ciertos sectores peninsulares. Realmente, las reformas no suponían necesariamente la separación, aunque así quisieran hacerlo ver los grupos interesados.

Mientras sucedían estas cosas, Rafael María de Labra, atento a la situación política del momento, recogió, durante los primeros meses de 1869, a través de su colaboración en la prensa, sus impresiones sobre el particular. La situación de las Antillas era verdaderamente deplorable, pues no se les prestaba la atención debida, teniendo en cuenta, además, que la importancia de Cuba y las condiciones de Puerto Rico no permitían la resignación o el estancamiento. Realmente, toda una serie de situaciones ensombrecía el panorama existente.

Así, el mantenimiento legal de la esclavitud constituía un manantial permanente de inmoralidad, que había ido socavando los fundamentos de la sociedad antillana; la carencia de derechos y de garantías propios de la vida civilizada alcanzaba incluso a la esfera administrativa y a la gestión de los negocios más pequeños y locales, y, por último, la conciencia de vivir en una

situación de inferioridad, en comparación con otros pueblos libres y ricos, que, a todas horas y bajo todas las formas, mostraban el testimonio de su grandeza y de su prosperidad, suponía un terrible tormento para un pueblo, que se veía de esta forma oprimido y vejado.

En las Antillas toda la vida política estaba mediatizada por la influencia de los pensinsulares, favorecidos ostensiblemente por las autoridades gracias a las facultades extraordinarias de que éstas estaban investidas. De esta forma, dicha situación provocaba un sinfín de anomalías y de desajustes, que entorpecían el normal desarrollo de las actividades. La aparición del sentimiento provincial, llevado al extremo y revestido de exageraciones y de imprudencias, dada la falta de vida pública, hacía imposible la preocupación por las grandes cosas y el atractivo por lo superior y lo desinteresado, permitiendo que las miserias personales fuesen el patrimonio de todos los espíritus y que el orgullo, la envidia, el odio y la falsedad sustituyesen a la emulación y a la franqueza. La discriminación existente entre los habitantes de la Península y los de las Antillas creaba una irritación, que aumentaba con el paso del tiempo, al consolidar una situación que otorgaba a unos la plenitud de los derechos políticos y civiles, mientras negaba a los otros no sólo la posibilidad de disfrutarlos, sino también la esperanza de gozarlos en un plazo más o menos remoto.

La utilización del espíritu de desconfianza y de la táctica de las sospechas y de las imputaciones calumniosas se había generalizado, con lo cual era posibles todo tipo de excesos, agobiando, así, a los hombres honrados y a las voluntades resistentes con los mote de insurgentismo, filibusterismo y otras semejantes. En última instancia, toda acción renovadora quedaba paralizada ante la sugestión de que la

situación imperante con todas sus injusticias, todos sus inconvenientes y todas sus inmoralidades y escándalos, era la causa no de un grupo determinado de hombres, sino de la Madre Patria (19).

Los antillanos habían tenido en la medida de lo posible una participación más o menos directa en la política de España, comprometiendo sus personas y sus bolsillos en todas las revoluciones liberales de la Península, incluso en la de Septiembre de 1868. De ahí que, por lo menos desde 1823, todos los partidos progresistas y revolucionarios hubieran sido pródigos, pública y particularmente, en promesas para las Antillas. Pero ninguna situación liberal o con pretensiones de ello había cumplido la palabra de sus dirigentes, agravándose el panorama, paulatinamente.

Por otra parte, las consecuencias de todo esto no podían ser más funestas, ya que cada planteamiento liberal aumentaba en las Antillas el número de los desengañados y favorecía el progreso del antiespañolismo, a pesar de que la influencia española, pese a algunas opiniones en contrario, tenía profundas raíces en Ultramar, como siempre las había tenido en la América hispana. En estas circunstancias, la única solución aceptable era la autonomía colonial dentro de la nacionalidad española, acompañada de la prudencia, tal como exigía una actitud sensata y una conducta eficaz y adecuada a los momentos críticos y a las condiciones internas y externas de aquellos territorios (20).

Ciertamente, la causa primera de la insurrección cubana estaba en los vicios perpetuados por el régimen español, pero la razón de su progreso y el motivo de que no llegase a un punto final radicaba en la actitud y en las medidas adoptadas por el

Ministerio de Ultramar. Era necesario desconocer por completo la situación de las Antillas y olvidar absolutamente el proceso emancipador americano para pensar que Cuba y Puerto Rico se iban a contentar con unas meras palabras y unas simples promesas tras la Revolución de Septiembre, máxime si a estas buenas palabras se unía la conservación de las autoridades existentes y el mantenimiento del "statu quo".

Ninguna situación liberal de la Península había cumplido hasta la fecha las promesas reformistas hechas a las Antillas por los partidos de la oposición. El desengaño se había apoderado de casi todos los ánimos, y sobre él, fomentado por una desatentada política, había crecido el partido antiespañol. Precisamente, dentro de este contexto era preciso recordar que la primera exigencia de los reinos de América a principios de siglo, cuando, merced a una revolución, se había proclamado la soberanía nacional en España y la igualdad de las Indias con la Península, había sido que inmediatamente se tradujeran en hechos las teóricas declaraciones de la Junta Central y de las Cortes de Cádiz, so pena de suceder lo que por desgracia sucedió. A esto había que añadir que en Cuba la protesta estaba ya en el campo de batalla.

Ante tales hechos, la política adecuada, supuesto que los caudillos separatistas con dificultad o nunca se reducirían a una transacción, consistía en combatir su influencia, en quitarles simpatías y en aislarlos, impidiendo que se creasen intereses en favor de la insurrección y que los grupos que no se habían alzado aceptasen sus apasionadas ideas, comprometiéndose con ellas (21). Resultaba claro y palmario que las reservas, la intolerancia y las persecuciones, lejos de deshacer la insurrección, habían contribuido a su progreso. Si la abolición de la esclavitud se tenía que hacer de modo radical, eran

necesarios soldados; si los sucesos de Cuba debían que ser contenidos por la fuerza, se tenían que enviar tropas, pero todo ello exigía al mismo tiempo reformas. La fuerza militar debía haberse utilizado desde el principio, si bien precedida del reconocimiento de las libertades individuales, con lo cual, posiblemente, no hubiera sido necesaria para reprimir la insurrección, ni se hubiese visto aumentada hasta alcanzar la proporción que tenía.

Así, pues, la falta de reformas y no la ausencia de tropas había sido la causa de la insurrección y de su progreso. Con las libertades, la insurrección hubiese sido imposible; con las concesiones, el mal se hubiera atacado de frente y en su raíz. En la actualidad, a la altura a que habían llegado las cosas en Cuba, si sólo se encomendaba la empresa de restablecer el orden a la fuerza, todo estaba perdido; el separatismo se extendería y haría inútil cualquier clase de esfuerzos por parte de España.

La situación presente no podía contrarrestarse, no debía combatirse con la opresión; por el contrario, en estos casos más que nunca era necesaria la vida pública, para que se desvaneciesen las pasiones, para que se perdiesen en el espacio o se transformasen al contacto de las grandes ideas. Más aun, si las torpezas pasadas habían hecho posible que el conflicto, de meramente político se hubiera transformado en nacional, lo único acertado en aquellos momentos era atacar el carácter de la lucha, de manera que, levantándose por encima del interés provincialista, se hiciera fácil el desmembramiento de los grupos hostiles por el atractivo de una idea generosa, "por la pasión devoradora de un principio político y de interés social" (22).

No cabía situación más crítica, más dolorosa y de

consecuencias más graves que aquella por la que atravesaban las Antillas. "Cuba, profundamente perturbada, sus intereses violentados, sus campos tintos de sangre, su porvenir oscuro y su presente nublado por la declaración del estado de guerra. Puerto Rico, si, materialmente tranquilo, poderosamente excitado, desatendidas sus reclamaciones y hollados sus derechos" (23). Mientras el país estaba preocupado con la insurrección de Cuba, las personas que debían hablar permanecían silenciosas; el sentimiento patriótico se hallaba excitado hasta la exageración; los más arrojados se mantenían temerosos de que su lealtad fuese puesta en duda, y muchos se hallaban interesados, por muy diversas razones, en que se creyesen ciertas cosas, tanto en los niveles oficiales como en la prensa; el común de las gentes tenía una idea equivocada acerca de los acontecimientos de Ultramar, y la opinión nacional no sólo toleraba, sino que hasta se inclinaba a que los graves problemas allí planteados se resolviesen por la fuerza de las armas o por la acción del tiempo.

Hasta cierto punto, podía admitirse un determinado grado de desinformación sobre la verdadera situación de las cosas entre buena parte del vulgo, si bien esto era bastante lamentable. Sin embargo, semejante postura no cabía en los que creían que gobernar no era dormirse, en los que habían estudiado algo la Historia y pretendían conocer un poco lo que había sucedido en las primeras colonias del mundo, y en los que estaban interesados en que la justicia resplandeciese en Ultramar y en que se impusiese la Revolución de Septiembre. Estas personas debían conocer adecuadamente todos los hechos y decir la verdad muy alto, costase lo que costase, exponiendo lo que a su juicio era necesario para evitar que las cosas fueran de mal en peor. Precisamente, en esta circunstancia se encontraban los autonomistas, quienes tenían la obligación de alzar la voz, reclamando la atención general sobre los errores que se cometían en las Antillas.

El desorden que reinaba en Ultramar afectaba extraordinariamente a la metrópoli y comprometía la honra de la patria, poniendo en grave peligro los intereses del ya anémico comercio español. El problema parecía debatirse en los siguientes términos: ¿Convendría a la metrópoli, del mismo modo que a Ultramar, que ésta renunciase a mantener dentro de su órbita aquéllos territorios?. Asimismo, había que preguntarse si los esfuerzos que se tendrían que hacer para afianzar el dominio o en influjo de la metrópoli en Cuba compensarían o no las ventajas que esto último pudiera proporcionar no a un puñado de españoles, sino a la nación toda, a las mismas provincias ultramarinas y, por ende, al mundo civilizado en general.

Ciertamente, si la dominación española en Ultramar entrañase un agravio positivo al Derecho y a las conveniencias sociales y exigiese constantes y nunca compensados sacrificios, lastrados por un porvenir de continua lucha, por una violación permanente de la libertad y por una política de intransigencias y de persecuciones, lo que a la postre ocasionaría en América un conflicto internacional a todas luces desventajoso para España, se debería mostrar a la nación la necesidad de reconocer "la independencia de Cuba". Sin embargo, no parecía por ahora que hubiese llegado dicho momento.

En circunstancias ordinarias interesaba a la metrópoli la conservación de las provincias de ultramar, pero, dado un conflicto inexcusable, convendría a España buscar una solución pronta y pacífica, que permitiese obtener la continuación regular de unas buenas relaciones económicas con aquellas tierras. Ciertamente, en Madrid llamaban la atención a las provincias ultramarinas tan sólo por los sobrantes y por los succulentos puestos de aquella Administración, profundamente desorganizada y revestida de una lamentable fama, lo mismo en España que en el

extranjero. "Así, que no era extraño oír decir a muchos, que presumían de políticos, que a no ser por el puntillo de honor, verían con plena indiferencia la separación de nuestras Antillas, y aun había algunos que teniendo en cuenta que por lo regular (salvo ciertas excepciones) la Administración colonial había servido para dotar de recursos a más de cuatro tiranuelos, que luego aquí habían lucido sus gracias, constituyendo, así, un foco de perturbación y de inmoralidad para la vida nacional, opinaban que hasta nos sería muy conveniente la pérdida de las Colonias" (24).

Sin embargo, los hombres verdaderamente políticos se preocupaban de las condiciones actuales de la vida económica al objeto de ensanchar las relaciones internacionales, haciendo posible que las naves españolas frecuentasen los puertos sudamericanos, cerrados por la torpeza de los Gobiernos peninsulares, y cuidaban de dar segura base a esa buena inteligencia, moralizando las conexiones de la metrópoli y de las provincias de ultramar por medio de la abolición de la esclavitud y del abandono de todo pensamiento egoísta de explotación, de modo que no pudiera echarse encima y de improviso un conflicto, que rompiese brutalmente la correspondencia económica e hiciese, que se pudrieran las mercancías en los almacenes y se perdieran los barcos en los puertos durante los dos, cuatro o diez años, que nuestros comerciantes, tristes y resentidos, tardasen en hallar un nuevo mercado.

Pero todavía quedaba más, ya que existía otro tipo de consideraciones de carácter político, relacionado con la importancia que tenía España como potencia colonial. En este sentido, se debía prestar atención a la circunstancia, ciertamente notable, de que toda la América meridional hablase el mismo idioma, padeciese los mismos defectos y se enorgulleciese

con las propias glorias. De acuerdo con ello, las provincias ultramarinas y sobre todo las Antillas podían ser la base de una gran política internacional que abarcase las relaciones de España con todo el mundo sudamericano, del que se estaba, desgraciadamente, separado, pero cuya representación moral en Europa le correspondía con toda la importancia, que tal significación llevaba aparejada. Para lograr dicho empeño, se tenía que acometer reformas expansivas en Ultramar; desistir de la idea de que las ventajas económicas de las provincias ultramarinas las debía procurar y obtener el Gobierno; renunciar "a los humos del Cid y de Pizarro, que nos caracterizaban"; tener en cuenta, que, a la postre, lo más justo era lo más conveniente, y, en fin, reparar en que, sólo, con la paz y por la prudencia vivían los intereses económicos, el vínculo más poderoso, que, en la actualidad, mantenía unido a los pueblos (25).

Fuera del pabellón español, las Antillas no tenían más que dos soluciones: la independencia o la anexión a uno de los pueblos vecinos. La primera era la más simpática y la más popular dentro de ciertos círculos cubanos, pero su logro en aquellos momentos no podía esperarse. Faltaba población en la Gran Antilla para sostener una vida propia y la existente estaba condicionada de tal manera, que no podía enfrentarse al orden y al progreso, entregada a sus únicas fuerzas. La mitad, por lo menos, de la población cubana era gente de color y la mayor parte de ésta, esclava, lo que impedía que hubiese en aquella Antilla un verdadero pueblo, es decir, un conjunto de gentes de idénticas preocupaciones y análogos intereses, en que se pudiera apoyar de un modo sólido y estable una verdadera política independiente o nacional.

Realmente, sería mucho más fecundo y factible apelar a la anexión a uno de los pueblos vecinos. En todo caso, dicha

anexión debía entenderse referida a Estados Unidos, pues era impensable englobarla dentro de la órbita de las Repúblicas sudamericanas, ya que ni convenía que Cuba corriese las aventuras y la triste suerte de la América hispana, todavía en proceso de formación, ni semejante idea, aun acariciada por muchos cubanos, podía contar con el beneplácito de Estados Unidos, enemigo declarado de que las Antillas saliesen del poder de España "para unirse a otro pueblo que no fuese la Gran República septentrional". No obstante, esta solución no podía mirarse con simpatía, ni ser aceptada más que como expresión de la desconfianza más absoluta. "Lo que un yankee dueño de Cuba haría, podía calcularse, por lo que hacía, allí, siendo nada más que huésped". Así, pues, esta posibilidad, destinada a borrar de la vida a la familia hispana y a arrancarle la representación social, la dirección política, la influencia, la fuerza, la importancia y la significación en el mundo americano era, ciertamente, lamentable (26).

La verdadera solución consistía en otorgar a Cuba la plenitud de sus derechos y la libertad que para todos había proclamado la Revolución de Septiembre, dotándola de una Asamblea o Cámara Colonial, de manera que quedase protegida, directa y eficazmente, pero no explotada por la metrópoli. De esta forma, los hijos de aquella Gran Antilla podrían desempeñar los altos cargos políticos y administrativos y ver consagrada su representación social y organizada la isla entera adecuadamente. Así, Cuba podría convertirse en un foco que irradiase ilustración y progreso en el golfo de México y que llevase allí la voz de la gran familia latina.

En última instancia, no convenía la separación de las Antillas de la metrópoli. No había, pues, verdaderas razones para aconsejar el abandono más o menos próximo de Cuba; antes al

contrario, existían motivos suficientes para exigir a España que mantuviese allí su poder, pero siempre y cuando no esgrimiese única y exclusivamente una política de fuerza, de resistencia, de pasión y de exclusivismo. Esto último, sólo podía conducir a la desorganización total y al desastre más espantoso (27).

Dado este panorama, cabía preguntarse si era seguro que con una política expansiva y liberal se obtendría la sincera adhesión de Cuba, lográndose la consolidación del Imperio español en Ultramar. Realmente, había una razón decisiva, que abonaba esta política, aun prescindiendo de su justicia, y ello era que en las circunstancias presentes constituía el único recurso posible. Así, pues, si se probaba que una política expansiva traería inevitablemente la próxima separación de las Antillas, habría que sostenerla, porque no se podía luchar contra lo incontrastable (28). El Imperio español en Ultramar sólo se salvaría con la libertad. Además, existían otros ejemplos históricos, que daban derecho a esperar que con esta actitud se lograría cierta inteligencia entre los criollos y la metrópoli, de tal forma que se imponía un régimen político, cuyo término fuese de la autonomía colonial (29).

Ciertamente, el problema ultramarino entrañaba una cuestión de honra para la patria, además de grandes consecuencias para la civilización en general, para los intereses más comunes de España y, singularmente, para la suerte definitiva de las Antillas. Cuando se identificaba de un modo casi absoluto la política de las provincias de Ultramar con la de la metrópoli, sucedía una de estas dos cosas: o dominaba la primera, o se imponía la segunda. En el primer caso, se consagraban todos los ánimos a la provincia ultramarina con grave daño de los intereses metropolitanos, que vivían una vida prestada y cuyos procedimientos, a la postre, daban la voz de alerta a los

estadistas para que separasen los problemas ultramarinos de los negocios de la Madre Patria, so pena de una perturbación que podía concluir con el agotamiento y la catástrofe. En el segundo, apenas algún hombre de Estado se cuidaba de las cosas coloniales, dejando los capaces la inteligencia de tales asuntos a los medianos, "que pretendían ser sabios por el mero hecho de cobrar unos sueldos" (30).

En todo caso, se debía luchar contra aquellos que miraban las guerras sólo por el lado de las contratas; los rigores autoritarios por el de las confiscaciones; las crisis económicas por el de los empréstitos y los cambios de política por el de las jugadas de Bolsa. Esos hombres eran los que hablaban del honor de la patria, puesta la vista en sus monopolios, y los que intentaban calumniar las más honradas intenciones y excitar los sentimientos de las gentes ignorantes o de los hombres apasionados contra todo el que se atreviese a sostener que no había de tenerse en cuenta para nada sus infames tráficos y sus repugnantes explotaciones, más que para la condenación enérgica e inapelable, cuando se tratase de aquellos intereses conservadores que debían ser considerados en toda reforma discreta y fecunda.

Parecía claro, pues, que el porvenir de las provincias de Ultramar estaba a la sombra de España y que sólo por la libertad podía asegurarse su imperio. No obstante, si este empeño no podía realizarse, cosa que no parecía probable, era aconsejable que España "renunciase para siempre a sus Colonias de Asia y de América" (31). De esta forma, la visión del Gobierno entenebrece por la guerra quedó oscurecida por la propaganda partidista de los interesados, tanto en la isla como en España. Así, al poco tiempo, Dulce tuvo que dimitir, mientras quedaba muerta la verdadera solución (las concesiones reformistas de

carácter autonómico), ante la imposibilidad de conciliación de los extremos en pugna: retirada de España de la isla (secesionistas criollos); vigencia del antiguo sistema en su totalidad (32).

Desde los primeros momentos, la Junta Revolucionaria de Madrid prometió prestar la debida atención a los problemas ultramarinos y poco después varios puertorriqueños residentes en la capital de España pidieron al Gobierno Provisional que se hiciesen extensivos a Puerto Rico los principios y derechos proclamados por la Revolución. Dentro de esta tónica, no pasó mucho tiempo sin que Labra solicitase que se llamara a Cortes a los diputados de Ultramar, eligiéndolos por sufragio universal y otorgando a todos los ciudadanos el derecho al voto (33).

De acuerdo con ello, el Gobierno se hizo eco de estas inquietudes y ordenó un cálculo de la población de ambas Antillas a fin de enviar diputados antillanos a las Cortes. No obstante, los supuestos seguían siendo evidentemente discriminatorios, puesto que se acordó que Cuba tuviera dieciocho diputados sobre un censo de novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cinco hombres libres y Puerto Rico once sobre uno de seiscientos doce mil cuatrocientos veintidos. Siguiendo con esta línea de actuación, el 14 de Diciembre de 1868 se otorgó, en teoría, la representación en Cortes a Cuba y a Puerto Rico (a Filipinas ni si quiera se la mencionaba), si bien, de momento, no podrían concurrir los representantes cubanos hasta que no se acabase la guerra, ya que no se podía celebrar elecciones con normalidad.

Estas quedaron autorizadas en Puerto Rico, determinándose la cualificación de los electores según su capacidad y condición de contribuyentes, que quedó fijada en doscientos escudos y, por enmienda de 20 de Enero de 1869, en

cincuenta, con lo cual se incrementó el número de votantes. De acuerdo con estas disposiciones, se debían elegir cuatro diputados por las circunscripciones de San Juan, Naguabo y Guayama; tres por las de Arecibo y Aguadillo, y cuatro por las de Ponce y Mayagüez, pero, aun así, continuaron las restricciones, y buena prueba de ello era que se acordó que las facultades "omnímodas", sólo se suspendiesen en los periodos electorales y que la libertad de imprenta y de reunión se disfrutara más adelante (además, Puerto Rico no obtuvo el sufragio universal, que había pedido) (34).

Inauguradas las Cortes Constituyentes, no dejaron de tratarse en ellas las cuestiones ultramarinas y de manifestarse las distintas opciones, quedando muy clara desde el primer momento la posición de los republicanos, extensamente expuesta por don Emilio Castelar en la sesión de 25 de Mayo de 1869, en la que el ilustre orador abogó por las reformas democráticas y liberales y por la autonomía administrativa para las Antillas (35). Hecha la convocatoria para diputados por Puerto Rico, empezaron a prepararse las elecciones, que se celebraron el 30 de Mayo de 1869. Las tendencias políticas se organizaron en dos partidos: el Liberal Reformista, dirigido por Pedro Jerónimo Goycoo, y el Conservador o Incondicional, a cuyo frente estaba el Marqués de La Esperanza (36).

Triunfantes los reformistas (primeros representantes antillanos desde 1837), plantearon rápidamente la problemática colonial que su jefe, Román Baldorioty de Castro, concretó en los siguientes puntos: supresión de la intolerancia política, mayor descentralización económicoadministrativa y abolición de la esclavitud (37). Frente a ello, los conservadores pidieron que la isla mantuviese su condición de plaza sitiada, que los Gobernadores continuasen dirigiendo los asuntos isleños por decreto y que se conservase la esclavitud (38).

Por su parte, las Cortes ordenaron la creación de una comisión para estudiar las bases de las reformas antillanas, al tiempo que el Ministro de Ultramar, Manuel Becerra, preparaba planes reformistas bajo la inspiración de Prim (39). Sin embargo, las fuertes presiones que tuvo que soportar la comisión y las repercusiones de ciertos incidentes acaecidos por aquellas fechas (otoño de 1869) dieron al traste con tales proyectos con el consiguiente disgusto de los reformistas antillanos, que, no obstante, aun realizaron un nuevo intento antes de que se suspendiesen las reuniones parlamentarias con motivo de la terminación del año. A su vez, Labra hizo un resumen de la situación existente, en el que puso de manifiesto la concentración de esfuerzos y el interés suscitado entre la reacción por la cuestión ultramarina. Así, los partidarios del antiguo estado de cosas, aprovechándose de las dificultades por las que atravesaba Cuba, habían aconsejado la adopción de una política de prudencia, lo cual se traducía en la no adopción de reformas y en el mantenimiento y respeto de los intereses creados.

Posteriormente, los reaccionarios se habían amparado bajo el escudo del patriotismo y desde esta posición se habían dedicado a difundir calumnias y a sembrar de dificultades y de prevenciones el camino emprendido por los defensores de la libertad. Y, por último, habían estorbado en lo posible las actividades de los autonomistas en las Cortes Constituyentes, impidiendo que se discutiesen adecuadamente las cuestiones ultramarinas, ayudados por la general ignorancia que reinaba en España sobre los asuntos de Ultramar y apuntando la conveniencia de que hasta que no viniesen todos los representantes de las Antillas, no se debía resolver nada con respecto a los intereses de aquellas tierras (40). Por otra parte, también la oposición se encargó de contrarrestar los esfuerzos de los reformistas por

boca de Romero Robledo, el cual adujo que las reformas desmoralizarían a los españoles que luchaban allí y conducirían a la independencia de la isla (41).

Mientras tanto, la actividad de los revolucionarios no se quedó tan sólo en la acción bélica, ya que Céspedes, deseoso de dar a la insurrección una contextura política, reunió en Camagüey la Asamblea de Representantes del Centro; nombró una Junta Suprema de Gobierno; asumió la jefatura del ejército y recabó de Estados Unidos el reconocimiento de la beligerancia y de la independencia de Cuba (42). Poco después, se reunieron en asamblea en el pueblo de Guaimaro los representantes de las tres regiones sublevadas (Oriente, Camagüey y Las Villas) más una delegación de la zona oriental, que no se había alzado, al objeto de redactar una Constitución, que, establecida sobre la clásica división de poderes, fue aprobada el 10 de Abril de 1869. Al día siguiente, Céspedes fue elegido Presidente de la República en Armas y Manuel de Quesada General en Jefe del ejército insurrecto (43).

Entre tanto y prosiguiendo en su empeño, los diputados puertorriqueños se prepararon para la campaña parlamentaria de 1870. En este grupo figuraban los reformistas Román Baldorioty de Castro, Luis Ricardo Padial y Escorriaza, que constituyeron un grupo de defensores a ultranza de las reformas políticoadministrativas, por las que estaban dispuestos a luchar denodadamente. A su vez, Labra continuó fustigando a la opinión pública al denunciar el obstruccionismo de que eran objeto las reformas. De este modo, se reclamaba del Gobierno una gran energía para terminar con la insurrección de Cuba, pero a base de no remozar para nada las estructuras existentes. Al mismo tiempo, se vertían insinuaciones en contra de los partidarios de la autonomía colonial, acusándoles de colaboracionistas y de

enemigos de España, que con sus tácticas y propaganda pretendían acallar a los auténticos guardianes de los intereses y de los derechos patrios (44).

Pronto, los opositores volvieron a la carga y, así, a fines de Enero de 1870, en un intento de alargar la cuestión, Romero Robledo presentó un voto particular para que no se discutiese la Constitución de Puerto Rico hasta que no estuviesen presentes los diputados cubanos, y en su apoyo y avalado por firmas procedentes de Cuba, se manifestó Cánovas del Castillo el 21 de Febrero de ese mismo año. No obstante, a pesar de este ataque dentro del Parlamento y de las exposiciones que llegaron a las Cortes en aquellos días, procedentes de sectores industriales y comerciales, relacionados con el problema antillano, no se aceptó ningún aplazamiento en la cuestión relativa a las reformas (45).

Aunque no hacía mucho que se había autorizado la libertad de imprenta en Puerto Rico (el Decreto fue dado el 31 de Agosto de 1870 por el Gobernador Baldrich), si bien con ciertas restricciones, ya que quedó prohibido tratar de los temas relativos a la esclavitud o a la integridad nacional, pronto se notaron los efectos de esta apertura y al amparo de ella, José Julián Acosta fundó "El Progreso", órgano abolicionista defensor de la asimilación y de la extensión a Puerto Rico de la Constitución española de 1869. También fue abolido entonces (20 de Enero de 1870) el Expediente de Limpieza de Sangre, requerido hasta aquel momento a todo el que aspirase a ocupar cargos públicos, ingresar en ciertos cuerpos o ejercer determinadas profesiones (46).

El 26 de Marzo se empezó a discutir la Constitución para Puerto Rico y Romero Robledo volvió a intervenir,

esgrimiendo el consabido argumento de que las reformas alentaban a los revoltosos y que, por lo tanto, apoyarlas era tanto como atentar contra la patria. Los reformistas se defendieron, haciendo ver que Cuba y Puerto Rico eran dos cosas aparte y que las reformas puertorriqueñas no tenían por qué influir sobre la marcha de la insurrección en la Gran Antilla, pero con sus intervenciones, como la del propio Baldorioty del 23 de Mayo, presentando las quejas de la isla, los puertorriqueños no consiguieron más que granjearse las antipatías del Gobierno (47).

Por su parte, Labra, haciéndose eco del tema puertorriqueño y de su problemática, escribió durante este año 1870 un libro sobre el particular, desde el que defendió la postura de los reformistas. Ciertamente, tal como estaban las cosas era absolutamente contraproducente mantener en las Antillas una actitud de reservas y de suspicacias, ya que a medida que pasaba el tiempo, se marchitaban las esperanzas de una pronta solución y todo se trocaba en desilusión y en amargura.

Por otro lado, contribuía a mantener esta situación la ignorancia que en la Península se tenía de los asuntos de Ultramar, lo cual generaba desconfianza respecto de la política metropolitana. Tampoco mejoraba este panorama la existencia de la guerra de Cuba, dado que su presencia no favorecía el desarrollo de la vida política democrática y en estas circunstancias reforzaba, contra las reformas políticas de Puerto Rico, la idea del aplazamiento indefinido (48).

Tres eran los argumentos que se esgrimían para aplazar el debate sobre la reforma política de la Pequeña Antilla. El primero se basaba exclusivamente en tecnicismos legales. El segundo, que tenía un carácter más político, se refería a la conveniencia de oír a los diputados de Cuba antes de resolver

cualquier cosa relativa a Puerto Rico, ya que se suponía que lo que se hiciese allí repercutiría directamente en la Gran Antilla. El último valoraba la oportunidad o no de tener en cuenta las presiones que se ejercían sobre las Cortes en el sentido de detener las reformas de Ultramar, hasta que pudieran tomar asiento en el Congreso los representantes cubanos. En cualquier caso, ninguno de estos supuestos era lo suficientemente válido como para sostenerse por sí mismo. El criterio con que debían abordarse estas cuestiones era el criterio democrático, que, aparte de ser el más natural y el más fecundo en la vida de la colonización, era de todo punto ineludible, dado el momento histórico por el que se atravesaba en países que, como los de América, veían en la libertad la seguridad de su porvenir (49).

Había que evitar defraudar las esperanzas de las Antillas, luchando contra la indiferencia de una Cámara con respecto a los enviados insulares, puesto que esto incidiría decisivamente, no sólo en la tranquilidad de aquellas tierras, sino en la idea que dichos representantes se formarían acerca de la influencia que se les reservaría en la decisión de sus negocios, cuando allí fuesen proclamadas todas las libertades y los diputados antillanos entrasen en el Congreso en condiciones idénticas a los del resto de la nación. Así, pues, las reformas no se debían aplazar, so pena de crear entre los habitantes de aquellas tierras y la Madre Patria una sombra que jamás se desvanecería (50).

Por otra parte, existía en toda esta motivación, además de un interés de conciencia, un interés político, derivado del propio conflicto cubano, frente al cual no se podía estar tranquilo con las simples indicaciones, que la prensa y los comunicados oficiales hacían sobre una pronta finalización de aquél. Tanto el conflicto cubano como la situación antillana en

general debían solucionarse con la aplicación de las reformas, única manera de cortar de raíz los problemas y de romper el esquema adverso presentado por los enemigos de la metrópoli: "España representaba en América la dictadura, el monopolio y la esclavitud. España no cumpliría, jamás, sus reiteradas promesas de dar libertad a blancos y a negros. España, jamás, consideraría como verdaderos hijos a los hijos de sus Colonias". Semejantes medidas tenían, asimismo, que ser entendidas en el sentido de contrarrestar las presiones del mundo civilizado y de lograr, por contra, su apoyo (51).

Mientras tanto, frente a este cúmulo de dificultades, en las provincias ultramarinas no regía otra cosa que el empirismo, la dictadura y la explotación, agravada por la centralización administrativa, imperando el antiguo régimen colonial, falto ya de toda razón de ser y combatido por todas las influencias modernas. Por esta razón, se producía una falta de comprensión hacia las nuevas ideas, motivo por el cual para la mayoría de los políticos peninsulares la autonomía colonial equivalía a separatismo, máxime cuando no faltaba quien en la prensa y en los círculos privados contribuyese a que esta interpretación cobrase fuerza y a que los que otra cosa sostenían fuesen mirados como enemigos más o menos desinteresados de la integridad nacional y, por ende, de la honra y del porvenir de la patria.

Así, pues, la adopción del sistema autonómico se imponía como una cuestión ineludible, que se explicaba por la influencia que en la organización del poder y en el movimiento de la vida política tenían las condiciones físicas de las naciones, y entre ellas, especialmente, las grandes distancias; por los graves peligros que corrían las provincias de Ultramar, regidas por el asimilismo, en donde los partidos políticos, privados de

los recursos y del sentido que tenían los de la metrópoli, pretendían identificar unos su causa con la de la Madre Patria y presentarse otros como enemigos de la integridad nacional; por las ventajas, que a la misma metrópoli traía el permitir que ciertas comarcas, colocadas en condiciones especiales, recibiesen las influencias de los nuevos tiempos, y porque la emancipación de las provincias ultramarinas obedecía a una ley inexorable de la Historia y, en su virtud, era preciso preparar a los pueblos, para que, en su día y bajo la forma adecuada, entraran en la vida propia de las naciones libres (52).

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones las relaciones entre la Península y las Antillas eran desastrosas. Así, en el caso concreto de Puerto Rico, la metrópoli se presentaba como un pueblo dominador, que no sólo privaba al dominado de toda intervención en las cosas comunes, en aquellos intereses que afectaban, a la vez, a las provincias de Ultramar y a la Madre Patria, sino que hasta negaba a aquélla el derecho de arreglar libremente sus propios asuntos. Por otra parte, como fuerza centralizadora que era, impedía la pronta realización de los asuntos, llevaba a miles de leguas la resolución de los temas locales y ocasionaba todo género de gastos y de trastornos a los interesados en cuestiones que, de otra forma, podían resolverse con facilidad.

En última instancia, se mostraba como un poder intolerante hasta el punto de no permitir la libre comunicación de ideas entre los habitantes de Ultramar y los de la metrópoli, para lo que dificultaba o negaba la entrada en aquélla de los libros y periódicos que circulaban sin reparo en la segunda; diversificaba el plan de enseñanza oficial en una y otra tierra y se oponía con toda energía a que el pueblo del primero de estos países simpatizase con los partidos políticos del segundo. "En

una palabra, no había verdaderas relaciones morales y políticas entre Puerto Rico y la Península o al menos la legislación colonial en vigor había hecho todo lo posible, para que no las hubiera".

Ciertamente, la nacionalidad se hallaba gravemente amenazada en las Antillas, ya que carecía de base, dado que el interés económico de aquéllas estaba en un lugar distinto del de la Península sobre todo, si se tenía en cuenta el monopolio de los harineros castellanos y de los vinateros de Cataluña y la oposición de los malagueños y de otros provincianos a la declaración de cabotaje del comercio de Ultramar con la metrópoli. Por esta razón, España, tratándose de sus provincias ultramarinas, debía abreviar el tiempo de concesión de las reformas y llevar a aquellos territorios las instituciones, de todo orden, que había logrado establecer y consolidar en su propio seno a fin de evitar los peligros de las tentativas separatistas, los rigores de la confrontación armada y las peripecias de los ensayos precipitados (53).

Por el momento, el porvenir de las Antillas estaba a la sombra del pabellón español y la hora de la separación discreta y fecunda para ambas partes tardaría bastante en sonar. No obstante, lo cierto era que las relaciones entre aquellas tierras y la metrópoli se resentían de la falta de franqueza y de amistad sinceras y el hecho era tanto más de lamentar cuanto que el dominio de España en Ultramar tenía de su parte razones tan incontestables, que para su triunfo no necesitaba más que la ocasión de ponerlas en evidencia; entre ellas, la primera el propio bien de aquellas provincias, al que estaba obligado la nación española (54).

En resumen, pues, Labra abogaba por la urgencia de las reformas políticas, económicas y sociales para no defraudar una

vez más las esperanzas de los antillanos, y por la necesidad que España tenía de atraerse las simpatías del mundo civilizado, que miraba con repugnancia lo que pasaba en Cuba y al que debía demostrar la sinceridad de sus creencias liberales. Por último, comentaba el proyecto del Ministro Becerra, señalando sus méritos y sus defectos. Los primeros se reducían a la consagración de las facultades legislativas de la Diputación Insular; a la proclamación de la separación entre la Iglesia y el Estado; a la extensión a los libertos de los derechos de ciudadanía, y, sobre todo, a la voluntad enérgica de concluir inmediatamente con el "statu quo" ultramarino. Los segundos derivaban de las limitaciones puestas a la libertad de imprenta y de enseñanza en beneficio de la integridad del territorio; de la coartación del derecho al sufragio, sometiéndolo a la condición de saber leer y escribir, y de la extensión, concedida a las facultades discrecionales de la autoridad superior para suspender las garantías individuales y deportar y desterrar a los habitantes de Puerto Rico.

Posiblemente, la defensa de los supuestos autonómicos sería tildada de separatista, pero lo cierto era que entonces sólo con los principios en ellos sustentados se habían conservado las colonias para sus respectivas metrópolis. Además, la causa del progreso y de la Humanidad estaba interesada en que las Antillas se mantuvieran al abrigo del pabellón español, porque España tenía una gran misión que realizar en América sobre la base de aquellos territorios y porque sólo por la libertad se podía asegurar su dominio al otro lado del Atlántico (55).

Mientras tanto, continuaba la guerra en Cuba entre la presión patrioterica de la opinión pública, que quería ante todo el aplastamiento militar, y la ineficacia de las operaciones bélicas, enredadas en la guerra de guerrillas con incursiones en

las plantaciones y operaciones en la manigua, que acababan diezmado al ejército español por enfermedad. En relación con esta situación, durante 1870 había aumentado constantemente la necesidad del envío de tropas a las Antillas, y todavía quedó más comprometido el programa de la Revolución de Septiembre en Ultramar con la muerte de Prim, que había intentado por todos los medios, incluso mediante la venta de la isla a Estados Unidos, acabar con el problema de Cuba (56).

En el campo revolucionario empezaron a destacar tres grandes figuras desde el punto de vista militar (Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto García), al tiempo que los insurrectos intentaban desarrollar una labor diplomática en el extranjero, que pronto se vió minada por las luchas intestinas y las rivalidades. Dentro de esta tónica, se había creado con motivo de la guerra un comité en Estados Unidos para fomentar el crédito de la Revolución, a cuyo frente se colocó a José Valiente. Constituido el Gobierno de la República en Armas, se designó (31 de Mayo de 1869) a José Morales Lemus Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la República de Cuba en Estados Unidos (57). El primitivo comité fue sustituido a mediados de 1869 por la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico bajo la presidencia de José Morales Lemus y la secretaría de J. E. Basora. A su vez, José Manuel Mestre sucedió a Lemus a la muerte de éste, acaecida en Junio de 1870, pero, en todo caso, el escaso éxito de la Junta fue evidente. En Noviembre de aquel año, la Junta se transformó en Comisión, dirigida por Miguel Aldama, José Manuel Mestre y José Antonio Echevarría, con la misión de ser el elemento coordinador de los cubanos exiliados, y pudo contar con un órgano de publicidad en Nueva York, "La Revolución", periódico dirigido por Enrique Piñeyro y redactado por Rafael Merchán.

Depuesto Manuel de Quesada como General en Jefe del ejército libertador, Céspedes le nombró comisionado en Estados

Unidos para recaudar fondos, pero pronto chocó con Aldama. Fruto de este enfrentamiento fue la aparición de dos grupos rivales, "quesadistas" y "aldamistas", cada uno de los cuales contaba con sus respectivos apoyos (detrás de Aldama estaban los enemigos de Céspedes, los intelectuales y los propietarios de posición acomodada, casi todos antiguos anexionistas; mientras que Quesada contaba con sus admiradores personales y con el sector más modesto). El encono de la lucha determinó la renuncia de los comisionados y la dimisión de Aldama (Marzo de 1871), al tiempo que en Agosto llegaron a Estados Unidos el General Francisco Vicente Aguilera, Vicepresidente de la República, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Ramón Céspedes, que sustituyeron a Aldama y a Mestre, respectivamente. No obstante, la ineficacia de su gestión motivó una nueva división entre los emigrados.

A mediados de 1872, la comisión quedó suprimida y se creó la llamada Agencia Confidencial a cargo de Manuel de Quesada, Félix Govin y Carlos del Castillo. Al año siguiente (1873), Céspedes fue depuesto por la Cámara de Representantes creada por la Constitución y se nombró en su lugar a Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía, el cual destituyó a Quesada y cambió la Agencia Confidencial por la Agencia General, al frente de la cual puso a Aldama. Llegado más tarde Tomás Estrada Palma a la Presidencia de la República, ratificó a Aldama en su puesto, que desempeñó hasta la Paz del Zanjón, ya que el Gobierno Provisional de Baraguá no le mantuvo en el cargo (58).

Celebradas de nuevo las elecciones en Puerto Rico con motivo de la Legislatura de 1871, los reformistas obtuvieron una gran victoria, ocupando la mayoría de las representaciones enviadas por la isla a las Cortes, que recibieron de las anteriores el proyecto para extender la Constitución española a Puerto Rico, presentado por el Ministro de Ultramar Manuel

Becerra el 24 de Noviembre de 1869. En estas circunstancias, la misión de los diputados de Puerto Rico estaba revestida de una gran responsabilidad, teniendo en cuenta, además, que tendrían que hacer frente a un cúmulo de dificultades. Ciertamente, aprovechándose de la insurrección cubana y utilizando argumentos que la pasión sugería y la ignorancia consentía, los reaccionarios ultramarinos, dueños de grandes recursos y de abundantes medios de publicidad, sostenían uno y otro día que la opinión general de las Antillas sólo era favorable a reformas administrativas de acuerdo con un viejo y desacreditado programa político.

Según este criterio reaccionario-conservador, la concesión de grandes franquicias y de libertades políticas opuestas a la tradición, estado y cultura de Ultramar no podía producir otra cosa que lamentables perturbaciones e infinitos desastres, ya que el pensamiento secreto de los partidarios de esas reformas políticas no era otro que el de quebrantar la unidad nacional, adelantando la hora de la separación de las provincias ultramarinas del regazo de la metrópoli española. Pero, frente a este panorama, la situación había cambiado. La Pequeña Antilla gozaba de cierta libertad, que, sin ser toda la debida, permitía a los puertorriqueños el movimiento necesario para que una elecciones representasen exactamente su estado de cultura y sus aspiraciones políticas y sociales. No obstante, era necesario que en la metrópoli se pusiese de manifiesto de qué manera y hasta qué punto las frescas corrientes de América del Norte fertilizaban el espíritu de las Antillas, admirablemente predispuestas para los grandes progresos de la democracia, por el carácter enérgicamente igualitario de la raza latina y por los grandes esfuerzos de España, cuyo sentido fusionista había producido las sorprendentes sociedades de la América de habla hispana.

De acuerdo con ello, el país entero tenía derecho a saber lo que pensaba y quería la Pequeña Antilla. No podían existir vacilaciones, reservas ni complacencias, y, así, se precisaba un credo terminante y claro, de forma que no cabía acomodo entre los partidarios del estado de cosas reinante y los defensores de las reformas. Puerto Rico tenía, pues, en sus manos el secreto de su porvenir y la posibilidad de cooperar, directa y principalmente, a la rehabilitación de un pueblo de tan grande y esplendoroso pasado como el español, que debía afrontar la situación de Ultramar y asumir los compromisos que le había creado su historia de gran nación colonizadora, para poder, así, haciendo justicia e inspirándose en los ideales de los tiempos modernos, reanudar el hilo de sus brillantes tradiciones y acometer con la misma energía que antaño la realización de sus soberbios y manifiestos destinos (59).

Don Rafael María de Labra, electo en 1871 en esta su primera Legislatura por el distrito de Infiesto (Asturias), pronto hizo notar su presencia en la Cámara al contestar al Mensaje de la Corona en sesión de 21 de Junio de ese mismo año. Según el pensamiento de Labra, se presentaba de forma ineludible la necesidad de abordar las reformas en Ultramar. A tal fin, había presentado, conjuntamente con otros compañeros, una enmienda en aquel sentido, y ahora, aprovechando esta temática, expuso sus consideraciones al respecto. De acuerdo con ello, era necesario plantear una cuestión clave en la política colonial española y esto debía hacerse llevando al Parlamento español, seria y tranquilamente, pero a la vez con ánimo resuelto, todas las cuestiones referentes al problema ultramarino.

En este sentido, había llegado el momento de sostener con firmeza las soluciones más patrióticas, conducentes a dar a Ultramar la seguridad más absoluta de que en España no se pensaba

ni en la venta de Cuba, ni en la anexión de la isla a otras naciones, pero que al mismo tiempo se estaba resuelto a mantener con firmeza la autoridad de la metrópoli. Además, todos los partidos políticos tenían la obligación de extender a Ultramar el espíritu democrático de la Revolución de Septiembre, "porque continuar como hasta aquí con el sistema y con las leyes que habían dominado en aquellos países, no era mas que tener una cadena, sujeta a nuestros pies, que nos había de impedir a los liberales seguir por la anchurosa senda del porvenir". Estos supuestos, presentados por Labra, fueron contestados, a su vez, por el Ministro de Ultramar, a la sazón el señor López de Ayala (60). En este mismo sentido y para dar más fuerza a su postura, pocos días después anunció la presentación de una moción de censura al Ministro de Ultramar, cuestión que provocó la intervención de los Ministros de Estado, Martos, y de Ultramar, López de Ayala (61).

Pero, en realidad, las reformas políticas no avanzaban demasiado, tal como expuso Rafael María de Labra en su intervención de 6 de Julio de 1871, en la que presentó una petición, para que se pusiesen en práctica en Cuba las leyes y decretos dados desde 1870 para implantar allí los logros del 68. Labra se quejó de la inobservancia de las leyes y de los decretos dados por las Cortes, culpando de ello a los intransigentes, que formaban frente común en España y en las Antillas, y consideró que la cuestión estribaba en que la mayoría de los políticos veían el problema colonial como una empresa mercantil de dominación incondicional, prescindiendo del carácter internacional de la colonización y de la influencia que tenían las provincias de Ultramar en la vida de la metrópoli (62). A mayor abundamiento, el día 10 Labra volvió sobre el particular en una extensa intervención, en la que analizó la situación política de Ultramar y su necesidad de remediarla. De ordinario, los

políticos tomaban los asuntos ultramarinos con indiferencia, como si el empeño de la colonización se redujera a los fines secundarios de buscar "mercados para los productos, puertos para las naves, sitio para los emigrantes, empleos para los desocupados y sobrantes para el Tesoro".

Realmente, iban pasando las legislaturas sin que, a semejanza de lo que ocurría en Holanda y en Inglaterra, las dos naciones que podían rivalizar con España en materia colonial, se discutiesen los problemas ultramarinos, ni se hiciera mención de los países de Ultramar, que vivían bajo el pabellón español, más que para repetir la insustancial frase de que "continuaban prósperos y felices". En nada se parecía esta situación a la del siglo XVII, en el que grandes historiadores e insignes escritores se ocuparon de las cosas de América y a cuyos esfuerzos y consejos se debió un monumental cuerpo legal, que constituyó un timbre de gloria para la nación española. En la actualidad, si por algo pesaban las cosas de Ultramar, era por la cuestión de Cuba, reducida a un puro empeño de fuerza.

Desde el siglo XVI, los sucesos de América habían tenido una influencia constante en el desenvolvimiento de la Historia española, y de la misma forma, ahora nos estaba reservada una misión con respecto a esos pueblos del otro lado del Atlántico, que se desenvolvían con el carácter de naciones independientes. Allí vivían millares de españoles, iba la mayor parte de nuestros emigrantes y a pesar de las diferencias y a despecho de las convulsiones de los últimos tiempos, todo propendía a una inteligencia, tendente a reorganizar la gran familia hispana.

Sin embargo, era preciso reconocer que la existencia de la guerra en Cuba hacía dudar a muchos de la conveniencia de

tratar en España las cosas de Ultramar. En general, se ignoraba la situación en que se encontraba Cuba. Se creía que era un país desgarrado por la guerra, en donde la represión por la fuerza se imponía por la pura ley de la necesidad, pero se ignoraba que se había convertido en un feudo del absolutismo y de qué forma se había llegado a dicha situación. Muchos pensaban que esto podía explicarse por los antecedentes existentes, por la propia dinámica de los hechos y por la situación creada frente al orden establecido en España por la Revolución de Septiembre. En parte, esto era así, pero no bastaba para explicar la actitud hostil de los defensores de la integridad nacional con respecto al tratamiento de los temas ultramarinos. La razón de todo ello se hallaba en la incomprensión de la actitud y de los compromisos de los hombres de Septiembre en lo relativo a los asuntos de Ultramar, lo que llevaba a pensar en cosas tan peregrinas como la posibilidad de la venta de Cuba o la despreocupación por aquellos temas. De esta forma, fue pasando el tiempo sin que quedara clara la postura de los gobernantes españoles, sin que se echasen las bases de una política ultramarina y sin dar a los antillanos la seguridad de que en España se estaba resuelto, tanto a mantener la unidad nacional como a hacer plena justicia y a proclamar las libertades de las provincias de Ultramar.

De acuerdo con ello, las causas de la insurrección cubana se debían, según Labra, a la fatal tradición colonial española, iniciada en 1823 y jalonada por las decepciones de 1837 y 1854 y por el fracaso de la Junta de Información de 1866. Toda política colonial se estructuraba en torno a tres problemas: el de las razas, el del trabajo y el de la espontaneidad local. Sobre ellos, se daban casi todas las cuestiones políticas, económicas y sociales existentes, teniendo en cuenta que el problema de la espontaneidad local llevaba, en último término, a la autonomía colonial por el camino de la descentralización y al separatismo

por el camino de la sofocación y del aniquilamiento. Por eso, no debía extrañar nunca el carácter separatista de las rebeliones coloniales, ya que el germen de éstas existía en todas las colonias.

El juicio de Labra sobre la insurrección quedaba, por otra parte, clarificado: "He condenado esa insurrección y he hecho, cuánto me ha sido posible por evitar sus progresos". El panorama no era, desde luego, nada esperanzador según sus criterios, ya que de seguir como hasta el presente Cuba se perdería para España. Era obligado preguntarse qué se había hecho hasta el momento en relación, por ejemplo, con la Ley de Ayuntamientos o la Diputación Provincial, creada en Puerto Rico, o con respecto a la Ley Preparatoria de abolición de la esclavitud. Las respuestas eran negativas y ello revestía mayor indignación, si el caso se refería a la Pequeña Antilla. Ciertamente, si tantos olvidos y tantas malas interpretaciones eran siempre y, en general, lamentables lo eran mucho más tratándose de Puerto Rico, cuya actitud presente y cuya trayectoria eran dignas de admiración.

Se hablaba de la abolición de la esclavitud y de la integridad nacional, pero para Labra ambos conceptos se fundían en uno solo. La cuestión colonial no se podía resolver sin abordar el problema de la raza de color, con lo cual la insurrección cubana difícilmente concluiría si no se acababa antes con la esclavitud de los negros. Por otra parte, el conflicto cubano sólo parecía poder resolverse de tres formas distintas: la cesión, el abandono, o el mantenimiento de la soberanía y las dos primeras vías eran impensables. Debía, pues, optarse por el dominio de España sobre sus provincias ultramarinas, aunque matizando este supuesto con la apertura hacia la justicia y la libertad y la adopción de las reformas adecuadas (63).

La mencionada intervención fue rectificada por los señores Suárez Inclán y González Alegre, a quienes contestó Labra. Tras nuevas intervenciones de los señores Suárez Inclán, Jové y Hevia y González Alegre, replicadas de nuevo por Labra, intervino el Ministro de Ultramar, López de Ayala, a quien contestó con los mismos argumentos que a la rectificación del señor Cánovas del Castillo, con lo cual concluyó esta extensa discusión (64). Antes de terminar esta legislatura, en sesión de 21 de Octubre de 1871, Labra volvió a intervenir para hacer al Gobierno varias preguntas, relacionadas, entre otros temas, con los presupuestos de Ultramar, la esclavitud y la organización política antillana, cuestiones en las que fue contestado por los Ministros de Gracia y Justicia, Alonso Colmenares, y de Fomento, Montejo y Robledo (65).

En 1872 el grupo puertorriqueño adquirió todavía más influencia en el Parlamento, puesto que todos los diputados y senadores por Puerto Rico eran reformistas, excepto uno. Precisamente, el programa del reformismo puertorriqueño fue concretado por Labra en esas mismas Cortes de 1872 en los siguientes puntos: identidad de derechos políticos y civiles para peninsulares y antillanos; abolición inmediata de la esclavitud; ampliación de la vida municipal y de las facultades de las Diputaciones Provinciales; organización de los Tribunales de Justicia sobre la base de la autoridad del Supermo; supresión de las facultades "omnímodas" de los Capitanes Generales; supresión de la centralización administrativa, y anulación de las diferencias del derecho electoral, según que el elector fuese peninsular o criollo (66).

Inaugurada la Segunda Legislatura de 1872, Labra, electo por Sabana Grande (Puerto Rico), aprovechó la oportunidad que le brindaba la discusión del acta por Puerto Rico para hacer

patente la mediatización política de las elecciones a diputados por dicha isla. A tal respecto, recordó que en Puerto Rico persistían los poderes extraordinarios de que estaba revestido el Capitán General, según los cuales gozaba de unas facultades similares a las que tenían los Generales de plazas de guerra sitiadas.

De acuerdo con ello, la máxima autoridad ultramarina podía detener, encarcelar, perseguir, deportar y arruinar impunemente a cualquier ciudadano, mediante un expediente gubernativo secreto, sin oírle ni temer por sus reclamaciones; bastaba, simplemente, con considerarlo peligroso según su criterio personal. Precisamente, en estas condiciones era en las que debía moverse el elector puertorriqueño, que tan sólo veía suspendidas las mencionadas facultades durante el estricto periodo electoral. Todo ello suponía una evidente coacción sobre los electores según las simpatías o antipatías en pro o en contra de la autoridad superior, con respecto a determinadas candidaturas. Así, se hacía muy difícil, que en estas condiciones un elector votase en contra de un candidato ministerial, ya que se jugaba su tranquilidad, su fortuna, su honor e, incluso, su vida al adoptar tal actitud.

De la misma manera, se veía constreñida la libertad de prensa por medio de un fuerte control político: estaba prohibido discutir sobre la integridad nacional o la cuestión de la esclavitud, y todo cuanto se publicase debía someterse a la ley común y a los Tribunales Ordinarios. Y otro tanto podía decirse del derecho de reunión, reconocido sólo durante el periodo electoral y a los únicos efectos de las elecciones. Así, todos los medios legítimos de que podía valerse un partido para ir a las urnas se veían obstruídos o negados: se atacaba al Partido Radical, se hostigaba a determinadas candidaturas, se prohibía la

circulación de manifiestos y periódicos de este signo y se perseguía y encarcelaba a sus prohombres.

Además, todo este ambiente se veía intoxicado por los moteos de españolismo y de antiespañolismo con que se acusaban los partidarios de una u otra tendencia y que oscurecían las verdaderas posibilidades de hacer coexistir la presencia de España en las Antillas con el mantenimiento en éstas de la libertad, los derechos y el orden. La exposición de Labra fue contestada por el Ministro de Ultramar, señor Martín de Herrera, quién refutó los argumentos y expuso la peligrosa actitud del Partido Radical, considerando dichos alegatos una queja del partido por los resultados electorales obtenidos (67).

Elegido de nuevo por el distrito de Sabana Grande en la Legislatura de 1872-73, Labra concentró sus esfuerzos sobre el tema de la discriminación política antillana. Así, el 8 de Noviembre presentó una proposición de ley, pidiendo que se implantase en Ultramar el Código Penal vigente en la Península (68) y el 12 intervino con tal motivo en la Cámara. En dicha intervención abordó, en primer lugar, el problema de la inadecuación de las leyes vigentes en Ultramar. La vida política existente en las Antillas se mostraba rica y exuberante, mientras que los moldes que pretendían contenerla aparecían caducos y desfasados.

Realmente, la situación planteada respondía a tres causas: la falta de una verdadera política ultramarina; la consideración de dicha política como un obstáculo más que como un problema, y la propia organización y filosofía del Ministerio de Ultramar. Así, si se consideraba la idea de la integridad nacional, ésta se convertía en una frase vacía de sentido o bien provista de un sentido materialista e infecundo, siempre que no

fuera precedida de otra idea verdaderamente fundamental: la de la unidad nacional. La integridad aislada sólo suponía una mera aproximación de territorios, en tanto que la unidad nacional englobaba la intimidad de afectos, de deseos, de aspiraciones, de intereses, de costumbres, de leyes y de los hombres que, viviendo en comarcas más o menos próximas, proclamaban la solidaridad de su vida. Esta última, que había sido antes la idea madre de la colonización española, se había visto sustituida ahora por la anterior. Por otra parte, se carecía de rumbo fijo en la acción y, así, mientras un Ministro seguía una política determinada, el siguiente la revocaba e incluso la combatía.

Antes, las leyes que se hacían en la Península para los españoles tenían una aplicación inmediata en Ultramar, al tiempo que las materias especiales eran estudiadas y adaptadas por el Consejo de Indias, cuyas competencias, por otro lado, no había heredado cuerpo jurídico alguno de los existentes. Por el contrario, en la actualidad, no ocurría nada de esto. Las leyes que se votaban en España no transcendían más allá de Cádiz, "y, así, se daba el caso de que mientras en la Península se corría por los caminos de la Civilización, modificando nuestras instituciones, quedaban estacionadas y como petrificadas nuestras Antillas y Filipinas". A ello había que añadir la situación creada por la expulsión de los diputados americanos del Congreso español en 1837 y la subsiguiente prolongación por tiempo indefinido de las famosas "leyes especiales". Existía, además, en la presente circunstancia la creencia de que los pueblos sudamericanos permanecían en un estado de desorganización, miseria y atraso inimaginables.

Frente a esto último, Labra llamaba la atención sobre el progreso mercantil y material de aquellas Repúblicas, así como sobre su evolución en el orden político, de tal forma que ninguno

de esos aíses se hallaba en el estado de atraso de las Antillas hispanas. Se hacía necesario el desarrollo de una gran política nacional por medio de la reconciliación con las independientes naciones americanas, pero para esto se necesitaba poner a Cuba y a Puerto Rico a la altura de los tiempos modernos y para ello no hacía falta más que recoger el espíritu de la tradición colonial española.

Dicha argumentación fue contestada por el Ministro de Ultramar, Gasset y Artime, quien se limitó a mantener la posición gubernamental. Labra, ante algunas acusaciones de que fue objeto, rectificó al Ministro, contestando que nunca había sostenido "que podría constituirse una República independiente en Puerto Rico, ni siquiera en Cuba". Lo que tenía que hacer España era aprovechar todas las ocasiones y circunstancias para llevar a Ultramar el espíritu democrático, aclimatándolo en sus provincias ultramarinas, ya que le estaba reservado un gran porvenir en América, si aplicaba una política que recogiese "las ideas, los sentimientos y las aspiraciones de las sociedades latinas del Nuevo Mundo, nada antipáticas a nuestra Historia y a nuestro carácter". Esta política, por último, tenía que levantarse por encima de las estrecheces de los partidos y aglutinar fuerzas, en torno a un frente común. La cuestión quedó zanjada, tras las réplicas y contrarréplicas de los Ministros de Estado (Martos) y Ultramar y del propio Labra (69).

Antes de finalizar, el año Labra volvió a hablar exponiendo la postura de los representantes puertorriqueños, cuyo objetivo se había centrado en evitar las actitudes obstruccionistas y en mantener la unidad de acción. Indicaba Labra, a este respecto, que los diputados de la Pequeña Antilla se habían propuesto desde el primer momento no ser un obstáculo a la consolidación del Gobierno y contribuir con todas sus fuerzas al arraigo y sostenimiento del Partido Radical peninsular.

Por otra parte, los representantes de Puerto Rico no habían titubeado en sacrificar algo de sus respectivas opiniones para llegar a una solución común, que, a la vez, fuera práctica. Así, pues, dentro de este grupo parlamentario antillano, habían aunado criterios en pro de un frente común, tanto los partidarios de la asimilación, dentro del sistema democrático, como los de la autonomía colonial. Por último, señalaba Labra que desde el primer momento de su actividad parlamentaria había sostenido que la cuestión de Cuba no era ni podía ser una mera cuestión de fuerza, pese a lo cual ahora se pretendía llevar a Puerto Rico por el camino de Cuba y ampararse en la situación existente en la Gran Antilla para impedir las reformas en la Pequeña (70).

Pero la actividad de Labra no sólo se hizo patente en las Cortes, sino fuera del Parlamento a través de mítines y de reuniones, como la que tuvo lugar en 16 de Enero de 1873 en la Tertulia Radical de Madrid, en la que analizó el desarrollo de la política ultramarina llevada a cabo hasta el momento, destacando los puntos más relevantes sobre el particular. De acuerdo con ello, la tradición colonial española había consistido siempre en llevar a los países ultramarinos las mismas instituciones o, por lo menos, el mismo espíritu que había presidido el desenvolvimiento de la sociedad peninsular.

Esta idea quedó ya consagrada en los comienzos de la empresa colonizadora, tal como indicara el propio Felipe II al decir que, "siendo de una Corona los Reinos de Castilla y de las Indias, las Leyes y Orden de gobierno de los unos y de los otros debían ser lo más conformes y semejantes que se pudiera". Más adelante, esta formulación fue reconocida y sancionada de nuevo por la Junta Central en 1809, la cual proclamó que "los vastos y preciosos dominios que España poseía en las Indias, no eran propiamente Colonias o Factorías como las de otras Naciones, sino

una parte esencial e integral de la Monarquía española". No obstante, toda esta tradición, toda esta doctrina desapareció desde el momento en que quedó establecido definitivamente en España el régimen constitucional, dándose el caso de que mientras en la Península los progresos políticos y sociales se realizaban con una acentuación y una energía admirables, en las Antillas se robustecía el absolutismo y se negaban de la manera más completa, no sólo los adelantos, sino todo lo que constituía el carácter y la vida de la civilización moderna (71).

Así, los enemigos del progreso afirmaban que las cuestiones de Ultramar no eran cuestiones políticas, que admitiesen el juego de los partidos, por lo que no se trataba de aplicar sistemas de gobierno, ni regímenes administrativos que tolerasen diversidad de opiniones, sino de sostener el interés de la nación y de defender la causa de la patria frente a los enemigos de la integridad nacional. Dicha formulación resultaba disparatada, dado que siempre que se tratase de los intereses generales de un pueblo, se trataba de una cuestión de gobierno, que, por consiguiente, exigía la multiplicidad de apreciaciones, la diferencia de doctrinas y la existencia de partidos. En realidad, el problema era mucho más grave, ya que en el fondo de la cuestión no sólo se debatía el tema de Cuba o el de Puerto Rico, sino "la libertad de España" (72).

Poco después, se produjo en la Península la conmoción política provocada por el advenimiento de la I República, y los puertorriqueños, bajo la orientación de Labra, consiguieron tres objetivos fundamentales: la reforma del régimen municipal, la extensión a la Pequeña Antilla de principios liberales y la abolición de la esclavitud. Dentro de esta campaña de actuación, Labra, en sesión de 3 de Marzo de 1873, abordó una vez más el problema de la situación política ultramarina. Tal como estaban

las cosas, no era posible mantener por más tiempo la política desarrollada hasta el presente en Cuba. Por otro lado, el Partido Radical no era responsable de lo que allí sucedía, dado que no se había hecho nada de lo que había aconsejado con respecto a introducir una variación completa de conducta, inspirada en los principios, en el espíritu y en la economía de la Revolución de Septiembre. La guerra continuaba y, de seguir así, "Cuba se perdería, irremisiblemente, para España y para la Civilización".

No había más remedio que suprimir los embargos, otorgar la amnistía y abolir la esclavitud. De la misma forma, debía dejarse de lado el argumento, según el cual la situación política de Puerto Rico se presentaba como un motivo para recabar el aplazamiento de las reformas en Cuba, cuando realmente la mencionada situación auspiciaba la aplicación de una gran política reformista en dicha isla. En relación con todas estas circunstancias, Labra concluía que no conocía ningún pueblo que hubiera roto los vínculos que le unían a la Madre Patria, a cambio de obtener las libertades que solicitaba (73).

De acuerdo con esta tónica de preocupación por los asuntos coloniales, el mismo 3 de Marzo presentó una proposición de ley sobre la publicación de los motivos de suspensión de las leyes y decretos en Ultramar (74), seguido de una intervención sobre el mismo tema (75). El día 20, ante ciertos hechos acaecidos en Puerto Rico, Labra contestó al Ministro de Ultramar, señor Sorni, indicando que si se producía un levantamiento separatista, él lo condenaría "de una manera enérgica y terminante". Además, cabía apuntar que siempre que se había estado a punto de obtener una reforma o de llevarla a cabo, se habían producido agitaciones y éstas, precisamente, no podían imputarse a los liberales. Dicha intervención terminó con la réplica del señor Ardanaz y las contestaciones de los señores Sorni, Ministro de Ultramar, Soria y Gamazo (76).

Iniciadas las sesiones correspondientes a las Cortes Constituyentes de la República, Labra dejó oír, una vez más, su voz ante la Cámara para preguntar acerca de la imposición de contribuciones con motivo de la guerra de Cuba. En relación con ello, indicó que ya en 1868 había pedido reformas junto a la acción bélica, a diferencia de los que sólo pedían una cosa u otra. La aplicación de esta última tendencia en cualquiera de sus dos variantes se oponía a la sensatez y buena cordura política y había conducido a la catastrófica situación imperante en la actualidad (77). Todavía antes de que la I República tuviera un infausto final, intervino Labra para exigir la aplicación real en Puerto Rico del Título I de la Constitución (78), así como para pedir informes sobre la movilización de tropas en aquella isla, cuestión esta última que fue replicada por el señor Olave (79).

Al margen de la propia actuación parlamentaria, don Rafael Maria de Labra expresó también sus ideas por medio de publicaciones, como la que dirigió a sus electores por el distrito de Sabana Grande (Puerto Rico) en 1873, en la que hizo una exposición y defensa del credo autonómico del que era partidario. Ciertamente, la autonomía colonial no estaba todavía arraigada en la mayoría de los ciudadanos, que, por contra, profesaban más bien la doctrina de la asimilación, motivo por el cual y a modo de solución provisional podía aceptarse esta última idea, siempre y cuando no se confundiese con la uniformidad absoluta, pudiendo servir de base, de un lado, para realizar en la metrópoli una viva propaganda en favor de la reforma y, de otro, para que con el paso del tiempo sus mismos resultados patentizasen a los ojos de la Madre Patria la inconveniencia del sistema, mientras que en las provincias de Ultramar tomaban raíz y fuerza aquellas instituciones fundamentales que la asimilación había llevado al otro lado del Atlántico (80).

En todo caso, no era posible continuar con la política de la fuerza, por cuya causa se había producido la pérdida del continente americano y toda una serie de cruentas insurrecciones, tanto en las Antillas como en Filipinas. En aquel momento se necesitaba la realización de una política basada en dos puntos: consideración de las provincias ultramarinas como sociedades con destino propio, y valoración de la confianza, la libertad y el desinterés como medio de conservarlas en el seno de la Madre Patria (81). A su vez, a la mala conciencia del problema contribuía al desconocimiento de la verdadera situación de las provincias de Ultramar, a lo que se unía la diversidad de cuestiones planteadas en las Antillas y en la Península: la distancia que las separaba; la falta de rápidas y frecuentes comunicaciones entre ambas; toda una historia de abandonos y de torpezas; la propia situación de Cuba, y la propaganda adversa, desarrollada por los interesados en el mantenimiento del "statu quo" (82).

Ciertamente, durante la breve estancia en el poder de la I República se produjeron los siguientes progresos dentro del mundo ultramarino: abolición de la esclavitud en Puerto Rico; establecimiento en esta isla y en Cuba de la Sociedad Abolicionista Española; revisión de los censos de esclavos cubanos, con lo que se liberó a algunos millares de negros falsamente empadronados como siervos; extensión a Puerto Rico del Título I de la Constitución de 1869; supresión de las facultades "omnímodas" de los Capitanes Generales; concesión de una amnistía política para Puerto Rico; devolución de los bienes embargados a los procesados políticos de Cuba; planteamiento en la Pequeña Antilla de las Leyes Municipal y Provincial de 1870 en sentido descentralizador, instaurando en la isla el sufragio universal; creación de un reglamento de organización judicial y notarial para Ultramar, y envío al Ministro del ramo a las Antillas, para

que estudiaran directamente la situación y preparase las reformas pertinentes (83).

Sin embargo, el separatismo de los intransigentes era total y no admitía más que la independencia. Así, por ejemplo, por aquellas fechas José Martí, que estaba en España viviendo de forma directa la experiencia republicana, se expresó en los siguientes términos en el artículo Las Reformas, publicado en "La Cuestión Cubana" de Sevilla el 26 de Mayo de 1873: "Cuba quería antes las reformas, avisaba a España de su necesidad, marcaba a España la manera de conservarla todavía", pero "la España monárquica ahogó en sangre las peticiones de Cuba, como la España republicana las ahoga ahora y esto es vergüenza e indignidad para la República" (84).

Y, así, la República pasó fugazmente, mientras en Cuba proseguía la guerra con suerte varia y se acrecentaban las disidencias en el campo rebelde, de las que no se libró ni el propio Céspedes, que el 27 de Octubre de 1873 fue depuesto por la Cámara de Representantes, acusado de dictador. Paulatinamente, falta de auxilio y minada por las luchas intestinas, la revolución fue languideciendo hasta caer por su propio peso.

N O T A S.

- (1) Acerca de la evolución ocasionada por el paso del tiempo véanse, ABOJADOR Y BENGOCHEA, SEBASTIAN: Sobre la Isla de Cuba (Madrid 1878) y también Sobre Reformas Administrativas en la Isla de Cuba (s.l. 1878).
- (2) Sobre estos problemas véase, DIAZ CANEJA, IGNACIO: La Cuestión Ultramarina (San Juan 1885).
- (3) Sobre este planteamiento véase, NAVARRO Y RODRIGO, CARLOS: Las Antillas (Madrid 1872).
- (4) PORTELL VILA, HERMINIO: Céspedes el Padre de la Patria Cubana (Madrid 1931), págs. 67-84. Sobre la personalidad de Céspedes véase, además, GRIÑAN PERALTA, LEONARDO: Carlos Manuel de Céspedes. Análisis Caracteriológico (Santiago de Cuba 1954).
- (5) Para diversos aspectos relacionados con el levantamiento revolucionario véanse, FIGUEREDO Y SOCARRAS, JOSE M.: La Revolución de Yara (1868-1878) (La Habana 1902) y MORALES, VIDA: Iniciadores y Primeros Mártires de la Revolución Cubana (La Habana 1901).
- (6) Sobre la figura de Betances veanse, BONAFOUX, LUIS: Betances (San Juan 1970) y SUAREZ DIAZ, ADA: El Dr. Ramón Emeterio Betances: Su Vida y su Obra (San Juan 1968).
- (7) Algunas de las ideas de Betances pueden seguirse en BETANCES, RAMON EMETERIO: Las Antillas para los Antillanos (San Juan 1975).
- (8) Sobre la insurrección de Lares véanse, PEREZ MORIS Y CUETO, L.: Historia de la Insurrección de Lares (Barcelona 1872); GEIGEL POLANCO, VICENTE: El Grito de Lares: Gesta de Heroísmo y Sacrificio (San Juan 1976) y CRUZ MONCLOVA, LIDIO: El Grito de Lares (San Juan 1968).
- (9) CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol. I, pág. 707. Apéndice IX.

- (10) Una visión de conjunto de los acontecimientos relativos a este proceso puede seguirse en GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Guerra de los Diez Años, 1868-1878 (La Habana 1972); PONTE DOMINGUEZ, FRANCISCO J.: Historia de la Guerra de los Diez Años. (Desde la Asamblea de Gualaímaro hasta la Destitución de Céspedes) (La Habana 1958) y LEAL SPENGLER, EUSEBIO: La Guerra de los Diez Años en Cuba (La Habana 1976). Véase asimismo, COLLAZO, ENRIQUE: Desde Yara hasta El Zanjón. (Apuntaciones Históricas) (La Habana 1893) y Bibliografía de la Guerra de los Diez Años (Centenario 1868) (La Habana 1968).
- (11) Para estos planteamientos véase, DOMINGO ACEBRON, MARIA DOLORES: Los Hacendados Cubanos ante la Guerra de los Diez Años (1868-1878), "Revista de Indias" (Madrid), núm. 172 (1983), págs. 707-727.
- (12) GRÑAN PERALTA, LEONARDO: Martí, Líder Político (La Habana 1970), pág. 28 y BOSCH, JUAN: Cuba, La Isla Fascinante (Santiago de Chile 1955), págs. 105-106.
- (13) JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Los Chinos en las Luchas por la Liberación Cubana (1847-1930) (La Habana 1963), págs. 67-68.
- (14) GRÑAN PERALTA, LEONARDO: Martí, Líder Político (La Habana 1970), págs. 38-39.
- (15) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Abolición de la Esclavitud, "La América" (Madrid), XII, núm. 19 (13-X-1868), pág. 7.
- (16) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Representación de Ultramar, "La América" (Madrid), XII, núm. 20 (28-X-1868), pág. 8.
- (17) CARR, RAYMOND: España: 1808-1939 (Barcelona 1969), pág. 300.
- (18) Sobre el papel desempeñado por los Voluntarios puede verse RIBO, JOSE JOAQUIN: Historia de los Voluntarios Cubanos (Madrid 1872).
- (19) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión Colonial, "Las Cortes" (Madrid), I, núm. 13 (26-II-1869), págs. 3-4.
- (20) Ibid., I, núm. 16 (2-III-1869), págs. 2-3.
- (21) Ibid., I, núm. 19 (5-III-1869), pág. 3.
- (22) Ibid., I, núm. 23 (10-III-1869), págs. 1-2.
- (23) Ibid., I, núm. 30 (18-III-1869), págs. 2-3.

- (24) Ibid., I, núm. 39 (30-III-1869), pág. 3.
- (25) Ibid., I, núm. 39 (30-III-1869), pág. 4.
- (26) Ibid., I, núm. 45 (6-IV-1869), pág. 1.
- (27) Misma cita, Nota núm. 60.
- (28) Ibid., I, núm. 49 (10-IV-1869), pág. 3.
- (29) Ibid., I, núm. 50 (11-IV-1869), pág. 1.
- (30) Ibid., I, núm. 61 (24-IV-1869), págs. 2-3.
- (31) Ibid., I, núm. 70 (5-V-1869), pág. 3.
- (32) Misma cita, Nota núm. 51.
- (33) LABRA, RAFAEL MARIA DE: España y América, 1812-1912. (Estudios Políticos, Históricos y de Derecho Internacional) (Madrid 1913), págs. 455-456.
- (34) Ibid., págs. 456-457.
- (35) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), pág. 13 y MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: El Movimiento Abolicionista en España (1865-1873), (Barcelona 1968), pág. 34.
- (36) Sobre la historia de los partidos políticos puertorriqueños puede verse, PAGAN, BOLIVAR: Procesato Puertorriqueño del Siglo XIX. (Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños desde sus Orígenes hasta 1898) (San Juan 1971).
- (37) Para un planteamiento general de la situación existente en Puerto Rico y del problema de las reformas véase, HERNANDEZ ARBIZU, JUANA: Memoria sobre la Situación de la Isla de Puerto Rico y Reformas que Deben Introducirse en su Régimen (Madrid 1869).
- (38) DIAZ SOLER, LUIS M.: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (San Juan 1974), pág. 294.
- (39) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 5.
- (40) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión de Ultramar, "La América" (Madrid), XIII, núm. 23 (13-XII-1869), pág. 6.
- (41) MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: Ob. Cit., págs. 36-38 y 40-41.
- (42) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. I, pág. 94.

- (43) LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. 32.
- (44) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Política Negrera, "La América" (Madrid), XIV, núm. 1 (13-I-1870), pág. 4.
- (45) MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: Ob.cit., pág. 42.
- (46) DIAZ SOLER, LUIS M.: Ob. cit., pág. 300.
- (47) MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: Ob. cit., págs. 44-45.
- (48) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión de Puerto Rico. (Cuestiones de Ultramar) (Madrid 1870), págs. 9-10 y 12-13.
- (49) Ibid., págs. 15-20.
- (50) Ibid., págs. 33-34 y 36-37.
- (51) Ibid., págs. 38-41.
- (52) Ibid., págs. 46-47 y 49-52.
- (53) Ibid., págs. 83-84 y 87.
- (54) Ibid., págs. 101 y 105-106.
- (55) Ibid., págs. 111-113.
- (56) CARR, RAYMOND: Ob. cit., pág. 301.
- (57) Las actividades de Morales Lemus pueden seguirse en PIÑEYRO, ENRIQUE: Morales Lemus y La Revolución Cubana (Nueva York 1970).
- (58) GRIÑAN PERALTA, LEONARDO: Martí, Líder Político (La Habana 1970), págs. 24-26.
- (59) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Situación de Puerto Rico "El Progreso" (San Juan de Puerto Rico), II, núm. 28 (5-III-1871).
- (60) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 21 de Junio de 1871.
- (61) Ibid., 1 de Julio de 1871.
- (62) DAMIAN, MABEL MARIA: El Pensamiento Político de Rafael María de Labra, "Cuadernos Hispanoamericanos" (Madrid), LXXXII, núm 244 (1970), pág. 131.
- (63) Véase, Apéndice Documental I. Apéndice núm. 11.
- (64) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 10 de Julio de 1871.

- (65) Ibid., 21 de Octubre de 1871.
- (66) DAMIAN, MABEL MARIA: Ob. Cit., pág. 147.
- (67) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 7 de Mayo de 1872.
- (68) Ibid., 8 de Noviembre de 1872.
- (69) Ibid., 12 de Noviembre de 1872.
- (70) Ibid., 21 de Diciembre de 1872.
- (71) Una Sesión de la "Tertulia Radical" de Madrid (Madrid 1873), págs. 20-21.
- (72) Ibid., págs. 24 y 32.
- (73) Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 3 de Marzo de 1873.
- (74) Misma cita, Nota núm. 107.
- (75) Ibid., 11 de Marzo de 1873.
- (76) Ibid., 20 de Marzo de 1873.
- (77) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 23 de Julio de 1873.
- (78) Ibid., 6 de Agosto de 1873.
- (79) Ibid., 14 de Agosto de 1873.
- (80) LABRA, RAFAEL MARIA DE: A los Electores de Sabana Grande (Puerto Rico) su Diputado a Cortes (Madrid 1873), págs. 16-17.
- (81) Ibid., págs. 52-53.
- (82) Ibid., pág. 54.
- (83) MARTI, CARLOS: Los Catalanes en América. (Cuba) (Barcelona s.a.), págs. 227-228. La gestión del Ministro de Ultramar puede seguirse en PIELTAIN, CANDIDO: La Isla de Cuba desde Mediados de Abril a Fines de Octubre de 1873 (Madrid 1879).
- (84) MARTI, JOSE: Ideario Separatista (La Habana 1947), pág. 29. Sobre la experiencia de Martí en relación con la I República española véase, MARTI, JOSE: La República Española ante la Revolución Cubana (Madrid 1873).

2.2.2) LA PAZ DEL ZANJON (1878) Y SUS CONSECUENCIAS.

El 10 de Febrero de 1875 fue nombrado Capitán General de Cuba el Conde de Valmaseda, quien al igual que su antecesor don José Gutiérrez de la Concha, Marqués de La Habana (1), tuvo que afrontar una difícil situación, si bien las dificultades provenían más del marco y de las circunstancias en que se desarrollaba la guerra que de la eficacia de los rebeldes, minados por las intrigas. El clima, hostil al español, y la manigüa, propicia a las emboscadas, se habían convertido en el principal aliado del guerrillero cubano, pero en contraposición a estas ventajas, las luchas intestinas por las que atravesaba el bando separatista auguraban un fatal desenlace para los insurrectos.

Ciertamente, la rivalidad entre los jefes rebeldes y el choque de éstos con la política de la Cámara de Representantes, así como la falta de mando único constituyeron un grave lastre, que facilitó la solución de los acontecimientos. De esta forma y como consecuencia de estas desaveniencias, se produjo una serie de cambios en la Presidencia de la República en Armas, por las cuales al Presidente Cisneros le siguió el Coronel Spotorno y a éste Tomás Estrada Palma en un plazo de tiempo relativamente corto (2). Al mismo tiempo, decidido el Gobierno a poner fin a la guerra, replanteó la situación colocando al frente de la Capitanía General a don Joaquín Jovellar y nombrando General en Jefe del ejército de operaciones a don Arsenio Martínez Campos, que llegó a La Habana a fines de 1875.

Por aquella misma época, Rafael María de Labra, aprovechando, la oportunidad que le brindaban las publicaciones periódicas, expuso algunas de sus ideas sobre cuestiones ultramarinas en la revista-periódico "El Abolicionista", por él

fundada, y en relación con los temas de carácter económico mantuvo la necesidad de llevar a cabo en este ámbito como en otros una serie de reformas que actualizaran las estructuras existentes. Durante el período de gobierno español, todo el sentido de la legislación comercial había quedado consignado en los Libros 4º y 9º de la Recopilación de Indias, que reflejaban en este aspecto el espíritu monopolístico del Estado. Dicho espíritu de recelo e intolerancia había subsistido por mucho tiempo y, juntamente con ello, la forma de hacer el comercio no había sufrido demasiados cambios y modificaciones, motivo por el cual la reforma se hacía ahora imprescindible (3).

Con la Revolución de 1868 se había restablecido el derecho de exportación sobre determinados productos tales como azúcares, mieles, cafés y tabacos, si bien, según se dijo, con carácter de provisionalidad. Sin embargo, desde entonces no se había derogado el mencionado derecho, aunque se habían abierto los puertos de Cuba a toda clase de instrumentos mecánicos y de máquinas agrícolas, prometiendo al mismo tiempo a Puerto Rico el comercio de cabotaje, la supresión del derecho diferencial de bandera y la revisión y simplificación del arancel, en contra del monopolio de los harineros de Castilla, cuya postura provocaba de parte de Estados Unidos, mercado natural de los azúcares del Trópico, represalias dirigidas al corazón mismo de la producción ultramarina.

De todas formas, con ser muy necesaria la reforma del arancel y estar aconsejada por la Historia, todavía eran más urgentes otras que afectaban al régimen de la propiedad, a la constitución de la familia, a la vida interior económica y a la seguridad personal, de tal modo que su ausencia era, sin duda, la primera causa del marasmo en que se hallaban inmersos los territorios ultramarinos. Allí no regía la Ley Hipotecaria, ni

existía el Registro de la Propiedad; no estaba reconocido el matrimonio civil, a pesar de haber sido promulgada la libertad de cultos, con lo que una porción de derechos quedaban en el aire, ni se había proclamado la libre gestión bancaria, pero, en cambio, continuaban manteniéndose la penalidad de las Partidas y de la Novísima Recopilación, las facultades "omnímodas" de los Capitanes Generales y los artículos de las Ordenanzas Militares (4).

Pasado el primer período económico de la vida de Cuba, centrado en el oro, la mayor parte de los habitantes de la isla se dedicó a la ganadería, hasta que en el siglo XVII se inició el ciclo agrícola con el cultivo del tabaco y del azúcar. Por su parte, el tabaco proporcionó a los cubanos los medios necesarios para adquirir esclavos, gracias a lo cual se fue desarrollando paulatinamente todo lo relativo al mundo de las haciendas y de las fábricas de caña de azúcar (5).

El plan de colonización tolerado por el constitucionalismo español había permitido la esclavitud de los negros; la dictadura de los blancos; el monopolio del mercado colonial por los harineros, vinateros y navieros; la protección de los azúcares de la metrópoli contra los de las Antillas, y la exclusividad de los empleos para los peninsulares. Ciertamente, mientras los partidos liberales habían buscado y perseguido en la Península los últimos beneficios de la libertad y los más pequeños adelantos de la civilización en el orden político y social, habían dejado, por otro lado, entregadas las Antillas a la desatentada dirección de los Capitanes Generales y habían favorecido con su actitud el mantenimiento de la esclavitud, que en España se había proclamado incompatible con la libertad, con el progreso, con la civilización y con la honra misma de la nación (6).

Las cuestiones estrictamente políticas también fueron tratadas por Labra y recogidas en un número de "El Abolicionista" del mes de Julio de 1876. Para los pueblos de raza latina, la preocupación por la igualdad había llegado a sustituir el interés por la libertad, de tal modo que en el primero de estos dos principios se había dado por incluido el segundo. Esta confusión fue una de las principales causas de la serie de dictaduras, revoluciones, violencias y horrores que asolaban la variada historia de aquellas naciones de habla hispana. Por esta razón, cuando sonó la hora del triunfo de la idea liberal en las metrópolis latinas, estimaron éstas que la consecuencia obligada de aquel suceso era, pura y simplemente, la ordenación de los países y de las cosas coloniales bajo un pie de estricta igualdad con las de la Madre Patria. Sin embargo, ello no había impedido que por debajo de estas proclamas y tendencias igualatorias subsistiese siempre algo que se oponía profundamente a tales manifestaciones. Realmente, la igualdad no era la libertad; por eso, al crearse, derivadas de aquel planteamiento, situaciones absurdas, política y económicamente, siempre había sucedido que las provincias de Ultramar no se habían dado por satisfechas, con lo que se produjeron recelos, prevenciones y antagonismos, que habían sacado a criollos y metropolitanos del límite asignado por la prudencia.

Esta situación había concluido en la ingratitud de las provincias ultramarinas, en la pretensión de éstas de acelerar el momento de separarse de la metrópoli, cuya sombra causaba envidia, y en la necesidad de reducir las cuestiones coloniales a un problema de honor nacional, de imperio y de fuerza. Además, todo esto había sido hábilmente secundado y fomentado por aquellos a quienes interesaba directamente el mantenimiento de algún monopolio o de alguna injusticia. Por su parte, las provincias de Ultramar consideraban que la Madre Patria utilizaba

todos los pretextos y caminos para evitar que fueran libres y que como tales pusieran término a sus tradicionales expoliaciones.

Las provincias ultramarinas no podían aceptar esa falsa igualdad que por sus particulares condiciones, derivadas de la centralización, entrañaba un despotismo, un estancamiento y una inferioridad real de aquellas comarcas respecto de la metrópoli, cuya falta de sinceridad se demostraba por la misma conservación de algunos privilegios y de algunas situaciones. Por otro lado, las provincias de Ultramar eran excitadas y apoyadas en esta actitud por las ambiciones impacientes, por los rencores producidos por el absolutismo y por las demás naciones, interesadas en la ruptura del vínculo colonial para debilitar a la metrópoli o para aumentar los mercados para su industria y su comercio (7). Ante tal situación era preciso dejar a un lado preocupaciones y palabras. Era necesario ver si lo que se llamaba un privilegio era o no un derecho y si este derecho era una condición positiva para la vida entera de la metrópoli. En todo caso, no se debía olvidar que "un pueblo no podía ser mitad libre y mitad esclavo" y que los enemigos de la libertad de Ultramar no servían para asegurar la libertad en la metrópoli (8).

A su llegada a Cuba, Martínez Campos organizó militarmente la situación, distribuyendo sus tropas en ocho comandancias creadas por él, que más tarde (Marzo de 1876) redujo a cinco. Sin embargo, su principal esperanza estribaba en la política de atracción, favorecida por la superioridad de sus tropas y por el cansancio y la desorganización del bando insurrecto; política que quedó reflejada en diversas medidas dictadas por el General tendentes a normalizar las faenas agrícolas y la vida en campos y en ciudades. De esta forma, en Septiembre de 1877 se produjeron los primeros tanteos de paz por parte de los rebeldes. Poco después (Octubre de ese mismo año),

Estrada Palma caía prisionero y era conducido a la Península, al mismo tiempo que se producían otros graves incidentes (muerte del Presidente de la Cámara de Representantes y constitución en Holguín de un Gobierno contra el de Vicente García, que había sucedido a Estrada Palma). En estas circunstancias, a fines de 1877 se dieron los primeros pasos para llegar a un armisticio. Así, la Conferencia de El Chorrillo (7 de Febrero de 1878), celebrada entre Martínez Campos y Vicente García, constituyó el antecedente inmediato del Zanjón (9).

Votada la paz por los rebeldes, el Comité del Centro quedó encargado de la redacción y negociación de un documento relativo a ella, que debía ser entregado al General en Jefe del ejército español. A los tres días de la Conferencia de El Chorrillo, el Comité y Martínez Campos, reunidos en el campamento de San Agustín (provincia de Camagüey), firmaron la llamada Paz del Zanjón, que ponía fin a la lucha iniciada diez años antes.

Las condiciones estipuladas en el mencionado pacto se estructuraron en un articulado de ocho puntos: Cuba quedaba en las mismas condiciones que Puerto Rico; se otorgaba una amnistía política total; se liberaba a los colonos asiáticos y a los esclavos negros integrados en las filas insurrectas; se daban facilidades a los que reconociesen y quedasen bajo el control de las autoridades españolas; se hacía otro tanto con los que desearan marcharse fuera de la isla; se especificaban las condiciones, relativas a la entrega de armas y demás pertrechos bélicos, y se hacían extensivos los términos de la capitulación a los departamentos de la isla que lo aceptasen (10). A la semana de firmada la paz, el General Martínez Campos expuso, en comunicación oficial al Ministro de la Guerra, señor Ceballos, el panorama existente en Cuba (11) y las posibles medidas a adoptar. Si el panorama político no era del todo claro, en no mejores

condiciones estaba la situación económica, especialmente en la zona revolucionaria, inmersa en una grave depresión, como consecuencia de la guerra, y en la que apenas se habían trabajado los campos. La miseria y la emigración de los campesinos a las ciudades eran las notas dominantes.

A pesar de todo, la paz supuso la apertura de un nuevo cauce de solución para los políticos de la Restauración, aunque las cosas debían realizarse con sumo tacto si se quería obtener un feliz resultado, puesto que, en el fondo, el Zanjón era un aplazamiento de cuestiones, un pacto que no había satisfecho plenamente a ninguna de las partes. Si bien era verdad que se intentó montar la paz procurando anular las categorías de vencedores y de vencidos, basándola en el olvido del pasado y en la esperanza del porvenir, realmente el Zanjón no hizo desaparecer las causas por las que los cubanos habían empuñado las armas, y la aceptación del pacto mismo se debió más que nada al cansancio y a la imposibilidad de continuar la lucha por el momento.

Así, el Zanjón no había supuesto ni una derrota cubana total, ni una victoria española aplastante, sino una tregua, y en estas circunstancias la Restauración debía haber abordado los problemas pendientes de forma radical, ya que, aunque con limitaciones, ahora se le ofrecía una magnífica ocasión para ello, máxime si se tenía en cuenta, además, que en el caso cubano todo aplazamiento, toda pérdida de tiempo era fatal (12).

Pero, en líneas generales, España no cumplió los compromisos del Zanjón, y las reformas y mejoras prometidas en el pacto se fueron alargando sin que se diera una solución definitiva a la cuestión. De entrada, se creó una situación falsa en relación con el artículo 1º del citado pacto, ya que según

éste se otorgaban a Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que tenía Puerto Rico, si bien resultaba que desde 1874 el régimen liberal aplicado a la Pequeña Antilla había sido suspendido, excepción hecha de la ley que abolía la esclavitud y del derecho a la representación en Cortes, y que, además, la isla se encontraba, de hecho, en estado de sitio, al tiempo que el Gobernador don José Laureano Sanz gozaba de plenos poderes, amparado, como años atrás, en las facultades "omnímodas". Por lo tanto, extender a Cuba algo que no estaba vigente en Puerto Rico, isla a la que se aludía de modo explícito en el artículo 1º como el modelo a aplicar en el caso cubano, era un fraude, y a mayor abundamiento la confusa situación puertorriqueña fue ignorada por las partes que habían suscrito la paz, es decir, los insurrectos y Martínez Campos. Así, pues, según este planteamiento, Cuba quedó poco menos que en estado de sitio. (13).

Establecida la Paz del Zanjón, parecía, ciertamente, que con ello se corroboraba la idea, ya apuntada siete años antes en el Parlamento por el propio Labra, de que la cuestión de Cuba no era un mero problema de fuerza y de que no se llegaría a solución alguna por por este único medio. Por otra parte, las condiciones políticas orgánicas y administrativas de Puerto Rico, reflejadas en el artículo 1º del mencionado convenio, eran las establecidas por la República de 1873 y no fueron legalmente derogadas hasta después de hecha la paz con los insurrectos de Cuba.

Así, pues, la reforma del régimen provincial y municipal de 1870 y 1872 en Puerto Rico se efectuó con efectos de 21 de Junio de 1878. De 9 de Junio del mismo año era el Decreto que fijaba las facultades de los Gobernadores Generales, y de 28 de Diciembre la Ley que abolía el sufragio universal en la

Pequeña Antilla. En 7 de Enero de 1879 fue virtualmente suprimida la libertad de imprenta y por el artículo 6º del Real Decreto de 9 de Julio de ese mismo año se otorgó a los Alcaldes y a sus delegados la facultad de dar o de denegar el permiso (sin ulterior recurso) para las reuniones que hubieran de verificarse en sus respectivas localidades, pudiendo, asimismo, presidir dichas reuniones cuando lo estimasen oportuno. En todo caso, en la práctica, el Pacto del Zanjón se cumplió muy medianamente.

De las Leyes Municipal y Provincial de 1870, puestas en vigor en 1873, a los Decretos de 1878 mediaba un abismo, pero tampoco eran pequeñas las diferencias que separaban los citados Decretos de las Leyes Municipal y Provincial vigentes en la Península por aquellas mismas fechas y establecidas tras la Restauración. Este contraste se acentuó todavía más al reformarse en sentido expansivo la Ley Provincial de 1877, con lo cual se mantuvo en Ultramar un régimen de opresión, de tal forma que cuando, por ejemplo, se estableció en España el sufragio universal, continuó en las Antillas el escandaloso sistema electoral de los veinticinco pesos de contribución (14).

De hecho, era fácil detectar las diferencias existentes entre el régimen municipal y el provincial de la Península y el que regía en Ultramar en 1878, aunque en el Parlamento y en los documentos oficiales no se hiciese mención de aquéllas. Así, la ley peninsular autorizaba al Gobernador a suspender los acuerdos de la Diputación y de la Comisión Provincial, dando cuenta razonada al Gobierno de Madrid dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pero, en cambio, los Gobernadores de las Antillas estaban dispensados de esta obligación y, además, podían por su propia autoridad suspender en el ejercicio de su cargo a los diputados provinciales, Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Concejales en los casos y en la forma prevenidos por las Leyes Municipal y Provincial.

Por otra parte, también podían suplir por sí o por sus delegados la acción provincial y municipal, de dos maneras: nombrando la Diputación y el Ayuntamiento cuando no se reunieran o completando su número, cuando no lo hiciesen en el suficiente para tomar un acuerdo; o supliendo las funciones de las mismas corporaciones cuando se negaran a ejercerlas y dando cuenta, en todo caso, al Gobernador General de las Antillas. Por último, los Gobernadores antillanos estaban facultados para dirigir a las Diputaciones Provinciales las recomendaciones que les pareciese oportunas sobre las cuales estaban obligadas a tomar un acuerdo. Ni que decir tiene que nada de esto ocurría en la Península.

Asimismo, el artículo de la Ley Provincial peninsular que hacía responsable en cualquier momento ante el Tribunal Supremo a los Gobernadores de provincia por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, no aparecía en los decretos sobre Ultramar, con lo cual buena parte de los artículos del Código Penal de la Península extendido a las Antillas en 1879, relativos a las responsabilidades de los funcionarios públicos respecto de los derechos individuales sancionados por la Constitución, no tenían ninguna aplicación práctica en aquellos territorios.

El Gobernador de las Antillas elegía entre los individuos de la Diputación a los cinco que habían de constituir la Comisión Provincial, nombraba por sí al Vicepresidente y escogía al Presidente de la Diputación de entre una terna que aquélla le proponía. También el reglamento de la Diputación hecho por ésta, tenía que ser sometido a la aprobación del Gobernador General, el cual nombraba, a propuesta de la misma Diputación, al Secretario, al Contador y al Depositario. Dicha aprobación era necesaria para que la Diputación Provincial pudiera girar visitas de inspección a los Ayuntamientos, si bien sólo informaba en los expedientes sobre creación, segregación y supresión de municipios

y de términos. Si el Gobernador aprobaba el informe, éste pasaba a ser ley; en caso contrario, la cuestión iba al Ministerio de Ultramar. En última instancia, el Gobernador General, previa consulta del Consejo de Administración, podía destituir gubernativamente a los diputados provinciales, cosa que en la Península correspondía a los Tribunales de Justicia. Así, pues, todas estas atribuciones no aparecían en la ley peninsular, en donde las facultades atribuidas en Cuba al Gobernador, se le reconocían a la Diputación Provincial (15).

El Alcalde, que cobraba un sueldo concedido por el Gobernador previa propuesta de los Ayuntamientos respectivos, era nombrado por éste y podía ser o no vecino del término municipal, sin que la ley le exigiese condición administrativa alguna, y ser destituido también en cualquier momento. Otro tanto ocurría en cuanto a nombramiento y destitución con los Tenientes de Alcalde propuestos en terna por los Ayuntamientos. Oída la Diputación Provincial, el Gobernador aprobaba o no las Ordenanzas Municipales y nombraba el Secretario del Ayuntamiento a propuesta de esta corporación. Los Ayuntamientos, por su parte, podían asociarse siempre que recibieran la pertinente autorización. En el caso de que, faltando menos de medio año para las elecciones ordinarias, existiesen vacantes cuyo número ascendieran a la tercera parte del total de Concejales, el Gobernador podía nombrar como interinos a personas que en épocas anteriores hubieran pertenecido al Ayuntamiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento y la Junta Municipal votaban el presupuesto y acto seguido lo remitían al Gobernador, para que éste introdujese las correcciones que estimase oportunas. Las Juntas Municipales, no el Ayuntamiento, podían recurrir los acuerdos del Gobernador, quien debía resolver, oído el Consejo de Administración, por lo menos quince días antes de

iniciarse el ejercicio económico anual; de no ser así, regían los presupuestos previamente corregidos por el Gobernador. La creación de arbitrios municipales dependía de los Ayuntamientos y de la Junta de Asociados, pero los acuerdos no eran ejecutivos, si no llevaban la correspondiente aprobación del Gobernador General, unida al informe de la Diputación Provincial. Asimismo, los repartimientos se hacían a propuesta del Ayuntamiento con el dictamen de la propia Diputación Provincial, pero siempre que el Gobernador los aprobase; en todo caso, si existía algún disenso, resolvía el Gobernador y lo mismo sucedía con las tarifas de consumo. Por último, las multas impuestas por el Gobernador a los Concejales, no eran recurribles ante la autoridad judicial y sólo procedía el alzamiento ante el propio Gobernador, que las había impuesto (16).

De todo ello se deducía, pues, el deplorable estado moral y material en que se encontraban las Antillas, dado que tras los Decretos de 1878 y las leyes electorales que les siguieron, se impuso la adulteración de éstas y la corruptela como norma de actuación. Así, por ejemplo, el Decreto de 21 de Junio de 1878 sobre organización municipal de las Antillas, en su disposición transitoria segunda indicaba que en tanto no se publicase la correspondiente ley electoral serían electores los que designaba como tales la Ley Municipal peninsular.

Entre tanto, el 16 de Agosto de ese mismo año, se extendió a Cuba la Ley Electoral Municipal de 1870, con las modificaciones introducidas en ella en 16 de Diciembre de 1876, pero el Gobernador General de la isla resolvió que continuase rigiendo la excepción más arriba mencionada, opuesta al artículo 1º de la ley peninsular de 1870, modificada en 1876, que reconocía el derecho electoral municipal a todos lo que pagasen alguna cuota de contribución o tuvieran capacidad profesional u

oficial de cualquier género. De esta forma, fue excluida del derecho electoral municipal la mayoría de los que lo gozaban en Puerto Rico y, además, se consagró un privilegio a favor de los empleados civiles activos, cesantes y jubilados y de los retirados del Ejército y de la Armada, por cuanto a éstos les bastaba ese carácter para tener derecho a voto.

Por su parte, la Ley Electoral para diputados a Cortes de 28 de Diciembre de 1878 exigía al elector la cuota de ciento veinticinco pesetas de contribución territorial o por subsidio, industrial o de comercio, es decir, todo lo contrario a lo establecido en la ley peninsular y lo opuesto al criterio dominante en las leyes electorales, que exigían cuota de contribución para el disfrute de este derecho (en aquéllas siempre se exigía menos cuota al contribuyente territorial por suponer al comerciante e industrial de carácter más inestable o pasajero). Así, pues, en las Antillas se igualó a todos, beneficiando claramente a industriales y a comerciantes, en su inmensa mayoría peninsulares y de ideología conservadora.

Más tarde, todavía se adulteró en mayor medida este procepto legal a favor de los comerciantes peninsulares al determinarse que para incluir en las listas y en el censo electoral (lo mismo el municipal y provincial, que el de diputados a Cortes) a los socios de compañías mercantiles, éstos deberían ver acreditada su condición de electores, previa notificación del tanto por ciento que a cada socio correspondiese en las utilidades de la sociedad a que perteneciera, a fin de que con este dato y el de la contribución total, que la referida sociedad satisficiera, se hiciera el correspondiente prorrateo que demostrara si los socios debían estar comprendidos o no en las listas de electores y elegibles. En todo caso, no se exigía que el gerente presentara la escritura social, donde aparecían

los nombres de los socios y su participación en la sociedad, con lo cual podía hacer electores a su capricho.

De toda esta situación se derivó uno de los más escandalosos e irritantes abusos de las elecciones antillanas: el de los llamados "socios de ocasión", al que había que agregar el de las coacciones electorales y, sobre todo, el de las listas de "candidatos cuneros", que en Puerto Rico, por ejemplo, llegaron a ocupar las dos terceras partes de los puestos de la Diputación y de la Senaduría, aunque en los documentos oficiales continuó hablándose de que las Antillas estaban representadas en Cortes al igual que las demás provincias de la Península y de que era similar la estructura de Ayuntamientos y de Diputaciones Provinciales a ambas orillas del Atlántico, a pesar de que las leyes allí vigentes eran en todo opuestas a las de la metrópoli y negaban sustancialmente la vida local (17).

Ciertamente, la actitud adoptada por parte de los políticos peninsulares no fue nada afortunada; ahora, después de las dificultades de una guerra que había durado diez años y desprestigiado a los Gobiernos anteriores, se había llegado a una paz que, a pesar de su carácter transaccional, podía haber sido aprovechada, puesto que, dejando aparte a los separatistas, en el resto de la población isleña las actitudes no estaban todavía excesivamente radicalizadas; pero, aun a sabiendas de todo ello, se abrió el nuevo período con la desconcertante situación anteriormente descrita.

De momento, inadvertida la equívoca cláusula, reinó cierta confianza y optimismo entre los que deseaban llegar a una solución por la vía pacífica. Reflejo de esta atmósfera fue el discurso pronunciado por el cubano Pedro González Llorente en el banquete ofrecido al General Martínez Campos en La Habana a fines

de Julio de 1878. El discurso era una muestra de las posibilidades a explotar con respecto a la opinión política de un sector insular no despreciable, que pensaba, como antaño pensara el reformismo, que podían conseguirse soluciones satisfactorias sin apelar a la violencia y dentro del marco nacional.

Frente al separatismo, que había llevado adelante la guerra durante diez años (minoritario en líneas generales y ahora un tanto desprestigiado), estaba la antigua savia reformista, abierta al diálogo, a pesar de los fracasos anteriores, que deseaba disfrutar sus derechos, pero "en el seno de la unidad nacional" y "a través de los cauces legales", es decir, sin subversión alguna, desentendiéndose de la apelación a la fuerza, fórmula empleada por el separatismo. Así, pues, una vez más se ofreció el diálogo y la cooperación con la metrópoli en espera de un auténtico trato en pie de igualdad (18).

Por otra parte, la acción separatista no cesó del todo y aunque insignificante por su volumen e intensidad continuó presentando batalla. Una vez firmada la paz, se formaron unas comisiones hispano-cubanas para recabar de los demás departamentos la conformidad con ella, pero Antonio Maceo, en compañía de otros revolucionarios decidió no aceptarla. Por su parte, Martínez Campos, en un intento de llegar a un acuerdo, se entrevistó con Maceo, si bien éste, dispuesto a continuar la guerra, se negó a ceder (Protesta de Baraguá) (19).

Acto seguido, Maceo redactó una Constitución y formó un Gobierno Provisional bajo la presidencia del General Calvar. Según dicha Constitución, el Gobierno se reservaba las facultades pertinentes para concertar la paz bajo la base de la independencia de Cuba. En caso contrario, tendría que hacer conoedor de dicha paz al pueblo cubano a fin de obtener su

consentimiento. Por otra parte, el Poder Judicial era independiente, pero residía en un Consejo de Guerra. Realmente, esta Constitución estaba redactada en función de las circunstancias del momento, y de acuerdo con ello el Gobierno era el encargado de poner en vigor las leyes en la medida en que fueran compatibles con la situación existente (20). Sin embargo, las características mismas en que se había producido esta resistencia le daban muy pocas probabilidades de éxito. En el resto de la isla todos se habían rendido ya, las operaciones militares carecían de importancia y los soldados españoles, que querían la paz, devolvían a su casas a muchos rebeldes, cuando caían prisioneros.

Ante este panorama, Maceo intentó, en un último esfuerzo, buscar ayuda en el exterior, pero, fracasada su gestión, solicitó la neutralización y a los pocos días se presentó a Martínez Campos, con quien capituló el 28 de Mayo de 1878 sobre la base de la disolución del Gobierno Provisional de Oriente y la derogación de la Constitución de Baraguá. Martínez Campos, que fiel a su espíritu se proponía lograr para Cuba muchas ventajas en el orden político y el cese del absolutismo despótico existente, ordenó que no se fusilase a los prisioneros y que se tratase con miramiento a sus familiares; prácticamente, todos los cabecillas emigraron y el propio Maceo marchó a Jamaica (21).

A pesar de todo, esta quiebra de los afanes revolucionarios era sólo aparente y dado que la siempre delicada situación cubana no se contrapesaba suficientemente por parte del Gobierno de Madrid, con reformas radicales de carácter político y no simplemente administrativo (22), pronto volvieron las conspiraciones dentro y fuera de la isla. De nuevo, funcionó en Nueva York el Comité Revolucionario, dirigido ahora por Calixto

García, mientras que Maceo se convertía en el máximo organizador de las actividades separatistas desde Jamaica y en Cuba la dirección quedaba bajo la responsabilidad de Juan Gualberto Gómez, José Antonio Aguilera y José Martí.

Mientras tanto, en la Península se hacía hincapié, de vez en cuando, en el deseo de reformas, por parte de la mayoría del criollismo cubano, y en el carácter de expectación que existía en la isla a este respecto, por parte de aquel sector; pero la política metropolitana continuaba oscilando ostensiblemente más preocupada por los asuntos peninsulares, que por los antillanos y trasplantando al escenario ultramarino las oposiciones ideológicas y de partido sin llegar a desarrollar una acción clara y definida en materia de reformas, que era lo realmente importante y la única tabla de salvación existente, si se quería, por lo menos, tratar de encauzar la cuestión (23).

A fines de 1878, Martínez Campos, que había sido nombrado no hacía mucho Capitán General de Cuba en sustitución de Jovellar, fue llamado a Madrid con objeto de solventarle a Cánovas la papeleta política planteada con motivo de las nuevas elecciones generales. De esta forma, las aspiraciones reformistas cubanas perdieron a uno de sus principales valedores, y tras una breve situación de interinidad fue nombrado Capitán General de la isla don Ramón Blanco, que encontró un eficacísimo auxiliar en la persona del General don Camilo Polavieja.

Por su parte, el clima político cubano se fue enrareciendo, tanto por la demora en la implantación de reformas como por el siempre presente espíritu revolucionario. En su acción político-militar, el General Polavieja en una "operación de limpieza" efectuó una serie de deportaciones en Oriente, percatándose del rumbo que tomaban los acontecimientos, cosa que

izo patente al Capitán General, anunciándole que, según sus informes, se produciría un movimiento subversivo a fines de agosto de 1879 en Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Ya con anterioridad Polavieja había expuesto con gran claridad y visión de futuro, al Capitán General Ramón Blanco la problemática cubana y su única solución: "debemos, en mi opinión, en vez de querer impedir a todo trance y en todo tiempo la independencia de Cuba, que vano empeño sería, prepararnos para ello, permanecer en la isla sólo el tiempo que en ella racionalmente podamos estar" (24). Realmente, si se quería hacer algo positivo, se debía afrontar la cuestión cubana con rapidez y pensando que, aun así, era muy probable que a no tardar mucho se tuviese que abandonar la isla. Desde luego, los avisos de Polavieja con respecto a los movimientos insurreccionales pronto se vieron hechos realidad y, así, el 5 de Septiembre de 1879 Maceo lanzó desde Kingston una proclama al pueblo cubano, con la que se inició de nuevo la acción bélica, que, aunque breve en su desarrollo posterior era muestra inequívoca de que el problema de Cuba se hacía cada vez más insondable.

De esta forma, se inició la llamada "Guerra Chiquita", localizada en Oriente, que pronto empezó a evidenciar su falta de consistencia (25). El 17 de Septiembre Martí fue deportado a la Península, mientras Máximo Gómez se apartaba del movimiento por considerarlo inviable e inoportuno. En Mayo de 1880 llegó a Cuba Calixto García y se nombró Presidente del Comité Revolucionario de Nueva York a José Francisco Lamadriz, pero en Agosto Calixto García fue vencido, con lo que Maceo se vió imposibilitado de llegar a pisar tierra cubana. Paulatinamente, los cabecillas fueron capitulando y, así, a fines de Junio de 1880 se dió por terminada esta rebelión, antes de que cumpliese el año de existencia (26).

La revuelta había fracasado, pero el espíritu revolucionario no sólo no murió, sino que fue tomando cuerpo, haciéndose consistente y dejando constancia, de vez en cuando, de su permanencia (intentos de Ramón Leocadio Bonachea (1883), de Gómez y de Maceo (1884), de Carlos Agüero y de Limbano Sánchez (1885), etc.), mientras en la Península la mayoría de los políticos y de los partidos escogían la peor táctica que pudiese emplearse en el caso cubano: ir dando largas al asunto. Así, pues, poco a poco el Zanjón fue quedando lejos y cuando tuvo lugar un proyecto de reforma aceptable quince años después, aun se desató contra él una furiosísima campaña que lo llevó al fracaso.

N O T A S.

- (1) La gestión del Marqués de La Habana puede seguirse en GUTIERREZ DE LA CONCHA, JOSE: Memoria sobre la Guerra de la Isla de Cuba y sobre su Estado Político y Económico desde Abril de 1874 hasta Marzo de 1875 (Madrid 1877).
- (2) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. I, pág. 314.
- (3) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Económica Colonial de España, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 16 (15-XI-1875), pág. 250.
- (4) Ibid., pág. 252.
- (5) Ibid., VI, núm. 17 (15-XII-1875), págs. 259-260.
- (6) Ibid., VI, núm. 18 (31-XII-1875), págs. 276-277.
- (7) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Reformas Coloniales y los Partidos Liberales de las Metrópolis, "El Abolicionista" (Madrid), VII, núm. 13 (16-VII-1876), págs. 193-194.
- (8) Ibid., págs. 195-196.
- (9) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol I, págs. 318-324.
- (10) Véase Apéndice Documental II. Apéndice núm. 6. Sobre diversas cuestiones relacionadas con la Paz del Zanjón puede verse también, MENDEZ CAPOTE, LUIS: El Pacto del Zanjón (La Habana 1929).
- (11) Véase Apéndice Documental II. Apéndice núm. 7.
- (12) Sobre la política seguida en Cuba hasta el inicio de la segunda guerra de independencia puede consultarse ESTEVEZ Y ROMERO, LUIS: Desde el Zanjón hasta Baire. (Datos para la Historia Política de Cuba) (La Habana 1899).
- (13) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), pág. 15.
- (14) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 90-92.
- (15) Ibid., págs. 92-94.

- (16) Ibid., págs. 94-96.
- (17) Ibid., págs. 96-98.
- (18) AZCARATE, PABLO DE: Ob cit., págs. 15-16.
- (19) FIGUEREDO Y SOCARRAS, JOSE M.: La Recolución de Yara (1868-1878) (La Habana 1902), págs. 283-284.
- (20) LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), págs. 39-40.
- (21) Ibid., págs. 40-41.
- (22) Sobre estos aspectos véase, CARVAJAL, J. DE: Reformas en la Isla de Cuba (Madrid 1888).
- (23) Sobre estos temas véase, FONVIELLE, ERNESTO: Cuba y la Autonomía (Madrid 1879).
- (24) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. I, pág. 328. Este y otros puntos relativos a las apreciaciones de Polavieja pueden seguirse en GARCIA DE POLAVIEJA Y DEL CASTILLO, CAMILO: Relación Documentada de mi Política en Cuba: Lo que Vi, lo que Hice, lo que Anuncié (Madrid 1898).
- (25) Para una mayor documentación véase, Bibliografía de la Guerra Chiquita, 1879-1880 (La Habana 1975).
- (26) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. I, págs. 350-353. Una descripción más detallada de la propia "Guerra Chiquita" puede verse también en GALLEGO GARCIA, TESIFONTE: La Insurrección Cubana. Crónicas de la Campaña (Madrid 1897), págs. 85-125.

2.2.3) LOS AÑOS POSTERIORES AL ZANJON.

El 25 de Febrero de 1879, Martínez Campos llegó a España y el 3 de Marzo Cánovas planteó una crisis gubernamental, tras la cual el Rey encomendó al General la tarea de formar nuevo Gabinete, en el que provisionalmente figuró al frente del Ministerio de Ultramar el Conde de Toreno, hasta que a los pocos días (16 de Marzo) fue designado para ocupar el cargo, de forma definitiva, don Salvador Albacete.

Desde luego, estaba claro que el Zanjón ofrecía la posibilidad de modificar la política española en Cuba y de que Martínez Campos, pese a ser conservador, estaba inclinado a posiciones liberales muy de acuerdo con la paz firmada en la isla, todo lo cual le presentó como la persona idónea para dar cumplimiento desde el poder al pacto que él mismo había ajustado y del que era su más calificado intérprete. Pero la implantación de las reformas pronto se presentó como algo harto difícil de conseguir, como consecuencia de la resitencia de los intereses creados, tanto en lo político como en lo económico, y de la pugna en Madrid de los partidos gubernamentales, que tenían criterios opuestos acerca de las soluciones a adoptar en el caso antillano (mientras que los conservadores se ceñían al Zanjón, los liberales se aprestaban, más bien, a defender la autonomía) (1).

Por su parte, la vida política cubana se preparaba para desarrollar sus actividades, que necesariamente tendrían que desenvolverse sobre unas estructuras económicas y sociales sustancialmente modificadas por la pasada guerra. Ciertamente, el cambio de panorama a partir de 1878 fue evidente. En el orden económico, los campos de las tres provincias más orientales de la isla quedaron arrasados y buena parte de la propiedad rústica pasó por confiscación de manos de los terratenientes cubanos a

as de la burguesía española, que monopolizaba el comercio y era dueña de la mayor parte de la riqueza urbana. La industria quedó destruida e incapacitada de recuperarse ante la imposibilidad de encontrar créditos y, asimismo, se vió también afectado el comercio.

La población cubana tuvo que sufrir el hambre y la miseria, agravados por los crecientes impuestos, que nutrían el tesoro español y mantenían las tropas que ocupaban la isla, pero que, no obstante, no eran suficientes para cubrir los presupuestos ultramarinos en su totalidad, dada la precaria situación de la Hacienda peninsular. Todo ello supuso el rápido crecimiento de las inversiones de los capitales yanquis en la economía de la isla, lo que determinó que Cuba quedase como dependencia económica de Estados Unidos, mientras continuaba siendo provincia ultramarina de España.

En el orden social se pasó de la oligarquía terrateniente, arruinada y expropiada, a una nueva clase dirigente, formada por la pequeña burguesía criolla. Por su parte, la posterior industrialización y la total abolición de la esclavitud de los negros y de los contratos de los colonos chinos produjo un aumento en el sector del trabajo asalariado libre y la formación de una clase obrera mucho más cohesionada y compacta que antes. Sobre estas bases y mientras la metrópoli desatendía las experiencias políticas suministradas por el pasado, la alta burguesía rural criolla, muy reducida después de la guerra, decidió aceptar la transacción con España y se enroló en el autonomismo en compañía de un sector de la pequeña burguesía nativa, al tiempo que la masa popular de las ciudades y, en especial, del campo junto con una no despreciable porción de esa pequeña burguesía cubana fue acrecentando su antiespañolismo a medida que pasaba el tiempo (2).

En Puerto Rico, donde nunca fueron tan graves los problemas económicos y sociales y sin las consecuencias siempre perturbadoras de una guerra, la vida transcurrió por unos cauces mucho más tranquilos que los de la Gran Antilla, sobre todo una vez solucionada la cuestión de la abolición de la esclavitud de los negros; pero en materia política la actitud metropolitana no se apartó mucho de la adoptada con respecto a Cuba.

Madrid gobernó la isla a través del apoyo de los incondicionales o asimilistas, principales beneficiarios de la continuación del sistema imperante, y vetó los esfuerzos de los reformistas, consiguiendo con ello que buena parte de sus miembros se desilusionaran y mirasen con cierta simpatía las actividades de los revolucionarios e independentistas (3). Ciertamente, como dijo un escritor y político de la época: "La Paz del Zanjón nos brindó la ocasión única, que se ha presentado en la Historia Contemporánea de salir de América con gloria y con honor, pero las clases directoras y la opinión volviéronse de espaldas a ella por ignorancia, desidia y mala fe, cometiendo el error mas grave y trascendental del siglo XIX" (4).

En realidad, la Paz del Zanjón constituyó una coyuntura propicia para las medidas pacificadoras y constructivas, una vía para lograr la libertad de Cuba, aunque también es cierto que la cuestión desde el lado español no se presentaba tan fácil. Ya anteriormente, España envuelta en guerras civiles, lucha de clases y oposiciones de partido y lastrada por la pérdida del continente a principios de siglo, había tenido gran dificultad para conceder a las provincias de Ultramar un régimen más abierto. Con posterioridad, no fue mucho lo otorgado por el liberalismo español, fundamentalmente preocupado por consolidar los logros de la revolución burguesa (llegada con retraso a España, en 1868) frente al empuje de campesinos y obreros (5).

A pesar de todo, había posibilidades de solución, pero Cánovas desaprovechó la oportunidad que se le brindaba y conectando las fuerzas dominantes en Cuba con la oligarquía peninsular, limitó en buena parte su política antillana a reducir a un mínimo las reformas, que hubiese exigido una más completa aplicación del Zanjón, mediante dilaciones, demoras y subterfugios de mayor o menor entidad. Por otra parte, otro tanto podía decirse de los liberales, que no formularon una política ultramarina mucho más decidida hasta bastantes años después (6).

Si Cánovas quería conservar su obra, no podía defraudar a los elementos que integraban la maquinaria que él mismo había creado, muchos de los cuales tenían fuertes intereses en Cuba y que, posiblemente, de seguir otra política le hubieran retirado su apoyo. Tuvo, pues, cierta razón de ser que Cánovas, preocupado por integrar a la opinión nacional y polarizarla en los partidos turnantes, evitando las desintegraciones de antaño, pusiese, probablemente de buena fe, todo su empeño en consolidar sus esfuerzos políticos peninsulares y dejara, así, un poco de lado el problema de Cuba (7).

Sin embargo, a la larga, la cuestión antillana se convirtió, precisamente, en el gran elemento de crítica contra la Restauración, a la cual se culpó, a raíz del Desastre, de éste y de no haber sabido evitarlo. Una vez más, la política a desarrollar en la propia España enredó y entorpeció las soluciones para Ultramar; una vez más también, se puso de manifiesto que la historia, como protagonizada por hombres, era mucho más compleja de lo que a simple vista pudiera parecer. Y, de esta manera, la política de España en Ultramar empezó a deslizarse, esta vez de forma irreparable, por la pendiente que la condujo a su total descalabro por razones en última instancia, ya que no en anteriores, de índole extranjera.

Tampoco a los liberales y a su jefe Sagasta les importó excesivamente el problema ultramarino, por lo menos en estos primeros tiempos. La principal preocupación estribaba entonces en llevar al poder los logros del 68 y en integrar en el régimen, a través del Partido Liberal, a republicanos y sectores de izquierda. En todo caso, aunque en los postulados del Partido Liberal cuajaban mejor las soluciones para Ultramar de carácter más abierto, lo cierto es que, de momento, esas soluciones se quedaron en principios teóricos o, a lo sumo, en tímidos intentos (8).

Realmente, el estado en que se encontraba la administración ultramarina no era nada satisfactorio y urgía poner remedio a la situación existente. Imperaba, pese a todo, el régimen todopoderoso del Capitán General; la mayoría de los peninsulares se dedicaban a la explotación con el objeto de enriquecerse y de regresar luego a España; muchas autoridades se prestaban a colaborar en negocios poco claros y se dejaban llevar por el soborno; los criollos no tenían participación alguna en la Administración; los funcionarios que cumplían fielmente con su deber no eran mirados con excesiva simpatía por sus compañeros no tan escrupulosos, etc. Había, pues, muchas cosas pendientes, y la mejor manera de resolverlas era discutir las en las aulas parlamentarias, para lo cual se necesitaba la representación antillana en las Cortes y la formación de partidos políticos (9).

Respondiendo a estas necesidades y demostrando su deseo de colaborar con la metrópoli, las buenas intenciones del criollismo cubano se plasmaron en una fórmula política, mediante la cual el 3 de Agosto de 1878 se constituyó en La Habana el Partido Liberal Cubano, después de llamado Autonomista (10). El Partido Liberal concretó su programa en un Manifiesto al País, con el que podía considerarse iniciado el movimiento del

autonomismo. El programa, trasunto de las ideas de José Antonio Saco, pedía básicamente cierta descentralización administrativa bajo la unidad de España y a través de sus postulados no se vislumbraba aun la autonomía y, mucho menos, la separación (11).

Las peticiones, que reflejaban el sentir de la mayor parte de la opinión pública cubana, recogían las aspiraciones políticas y económicas del criollismo. En el orden político figuraban el reconocimiento de los derechos individuales, garantizados por el Título I de la Constitución de 1876; la libertad religiosa, científica y educativa; la aplicación de las Leyes Municipal, Provincial y Electoral con las adaptaciones necesarias; la separación de los poderes civil y militar; la aplicación de los Códigos Penal, Civil y Comercial de España y el cumplimiento del artículo 89 de la Constitución de 1876 en el sentido más descentralizador compatible con la unidad nacional. En el orden económico se pedía la supresión de las exportaciones e importaciones obligatorias y un Tratado Comercial ventajoso con Estados Unidos (12). El Partido Liberal, bajo cuya bandera se agruparon los cubanos que querían un gobierno propio, descentralizado administrativamente, aunque dentro de la unidad nacional, estaba formado y dirigido, fundamentalmente, por la pequeña burguesía y era mirado con simpatía por buena parte del campesinado (13).

Por su parte, los españoles replicaron a la formación política cubana con la creación del Partido de la Unión Constitucional, aliado del Partido Conservador peninsular y defensor apasionado de la política de la asimilación (14). Previamente a su definitiva constitución, llevada a cabo en La Habana el 20 de Noviembre de 1878, tuvo lugar una reunión, el 16 de Agosto de aquel año, en casa del hacendado don José Eugenio Moró, en la que se elaboró un manifiesto, que presentaba, frente

a las reivindicaciones del Partido Liberal, un programa basado en las ideas de Paz, Patria y Unión Constitucional (bajo estos supuestos, que sirvieron a muchos miembros del partido para ocultar sus egoístas fines, se boicotearon sistemáticamente las reformas, argumentando que el Partido Liberal atentaba o atentaría, tarde o temprano, contra la integridad de la patria). El Partido de la Unión Constitucional, formado por los peninsulares o españoles establecidos en Cuba bajo la protección de las autoridades metropolitanas, reunió en torno suyo a las familias españolas de latifundistas, negociantes y especuladores, secundados por las altas jerarquías administrativas, judiciales, eclesiásticas y militares (15).

Bajo unas actitudes ideológicas similares a las representadas por el Partido Liberal Cubano y por el Partido de la Unión Constitucional, se agruparon en Puerto Rico las fuerzas políticas. El Partido Liberal Reformista, llamado después, como en el caso cubano, Partido Autonomista, con sus ideas de descentralización reunió a la mayor parte de los profesionales, a los pequeños agricultores, a los ganaderos, a los industriales y a los comerciantes nativos, así como a una gran cantidad de representantes de la clase media y llana, que con los anteriores formaban el elemento demográfico de mayor importancia social en la isla.

Por su parte, el Partido Incondicional Español, con su ideología asimilista, basada en la continuación del sistema imperante y en la oposición a todo intento de alterar el "statu quo", agrupó a los que disfrutaban de las altas magistraturas civiles y militares; a los grandes almacenistas y comerciantes, generalmente españoles, que dominaban las relaciones con los exportadores de la Península y los medios para la compra de la producción insular, y a algunos terratenientes y profesionales (16).

Formados, pues, los partidos políticos de las Antillas se aprestaron a la lucha electoral con vistas a las Cortes de 1879, elegidas bajo el Gobierno Martínez Campos y las primeras a las que asistirían representantes cubanos desde 1837. En estas circunstancias tanto el autonomismo cubano como el puertorriqueño, que empalmaban con el reformismo de los años de la Junta de Información, se dispuso a dar la batalla en la metrópoli en pro de sus derechos con el apoyo más o menos firme del Partido Liberal peninsular(17). El programa atendía, fundamentalmente, a dos aspectos, que iban a constituir los dos ejes, sobre los que giraría toda su labor: la solución del problema social de los negros en Cuba y la concesión de las reformas políticas y económicas propiamente dichas.

Aunque los autonomistas siempre presentaron ambos aspectos como indisolubles, las circunstancias determinaron que se resolviesen por separado y que constituyeran dos etapas claramente diferenciadas. Primero, se logró solucionar el problema negro, como ya se ha visto; después, empezó la larga y mucho más prolongada lucha por las reformas. En las Antillas como en la Península el autonomismo batalló denodadamente, y junto a Rafael María de Labra (18) figuraron en su plana mayor los cubanos Bernardo Portuondo, José Ramón Betancourt, Calixto Bernal, Eliseo Giberga, Ricardo del Monte, Jose María Gálvez, Antonio Govín, Eduardo Dolz y Rafael Montoro (19) y los puertorriqueños Román Baldorioty de Castro, José de Celis y, posteriormente, José Celso Barbosa y Luis Muñoz Rivera (20).

Sin embargo, pronto quedó demostrado que el derecho a la representación en Cortes, otorgado a Cuba por el artículo 1º de la Paz del Zanjón, sólo serviría para que los partidos en pugna se enfrentasen en las elecciones y en los debates parlamentarios. Los políticos peninsulares no estaban dispuestos

a introducir cambios radicales en las Antillas, y si lo hacían, sería tras un largo proceso. De momento, la convocatoria a diputados fue objeto de diversas trampas y la Ley Electoral amañada de tal forma, que el Partido Liberal Cubano logró elegir solamente a siete diputados, mientras que los integristas incondicionales se aseguraron diecisiete escaños con la consiguiente discriminación fruto de la desproporción representativa (21).

Aunque el problema fundamental era entonces el de la abolición de la esclavitud, no por eso dejaron de abordarse otras cuestiones relativas al ámbito ultramarino, pero sin ningún éxito. Los autonomistas cubanos expusieron una y otra vez los males que venían soportando y denunciaron el secular desgobierno, las lacras administrativas y el estado de esclavitud política en que se encontraban los habitantes de la isla, mientras los peninsulares gozaban de todas las libertades. De esta forma, tras el Zanjón toda la isla estaba pendiente de lo que se debatiera en las aulas parlamentarias. Así, en Julio de 1879 Castelar ya había resaltado el carácter de expectación existente en Cuba con respecto a las reformas (22).

Por su parte, Labra, que había retornado junto con otros compañeros a la actividad parlamentaria tras un largo paréntesis, electo esta vez por La Habana (Cuba) para la Legislatura de 1879-80, pronto hizo oír su voz, abogando por la necesidad urgente de la aplicación de las reformas en Ultramar, cuestión esta que expuso en su Contestación al Mensaje de la Corona. Para él, uno de los mayores inconvenientes de la política que se practicaba con respecto a los asuntos ultramarinos consistía en que dichos temas eran tratados en la metrópoli como un puro detalle de su política general y no con un interés particular y especialísimo. De esta forma, estos temas se

convertían en un un puro pretexto para las luchas de los partidos metropolitanos, con lo cual rara vez los debates sobre aquellas cuestiones entrañaban algún verdadero interés y suponían un resultado eficaz y positivo para las provincias de Ultramar. En todo caso, la situación en las Antillas se presentaba con un aspecto de suma gravedad. En particular, Cuba, recién salida de una guerra, pugnaba por desembarazarse del monopolio, de la dictadura y de la esclavitud y ello reclamaba soluciones urgentes, precisas y definitivas.

No se mostraba Labra partidario del sistema asimilista, sino de una legislación especial que recogiera de un lado la más amplia "descentralización, política y administrativa bajo la unidad nacional y supuesta la integridad" y de otro "los principios económicos más expansivos, que por medio de la supresión de los derechos de exportación, la declaración del cabotaje y sobre todo los Tratados de Comercio condujese a la abolición gradual de las aduanas". Además, como complemento de ello exigía la estricta y rigurosa observancia, tanto por parte de los distintos Gobiernos metropolitanos como de las propias provincias ultramarinas, "de la letra y sobre todo del espíritu de la digna y felicísima Paz del Zanjón, punto de partida y término de referencia del Partido Liberal y democrático de Cuba".

Por otra parte, era preciso despejar la mala fama existente, según la cual España jamás cumpliría las promesas efectuadas desde hacía ya cincuenta años con respecto a introducir en Ultramar las reformas pertinentes. Dichas alegaciones fueron refutadas por el Presidente del Consejo de Ministros Martínez Campos y corroboradas por una intervención del señor Cancio Villaamil (23). Aquel mismo mes, el señor Baselga pidió que las reformas de Cuba fueran lo primero que se tratara en la inmediata legislatura, puesto que así lo exigían los

principios de humanidad, de justicia y de moralidad (el Ministro de Ultramar, don Salvador Albacete, remitiéndose al Mensaje de la Corona, indicó que el Gobierno daría toda su preferencia a solucionar el problema de la esclavitud, ahora pendiente) (24).

Por su parte, el Partido Autonomista Cubano en una circular emitida el 2 de Agosto de aquel mismo año, volvió a reiterar los supuestos constitutivos de su programa político. Así, en la cuestión social no cabía admitir más criterio que el de "la abolición inmediata y simultánea, sin indemnización pecuniaria alguna". En la cuestión política se pedía la ampliación de la esfera de acción de Ayuntamientos y de Diputaciones Provinciales junto con la íntegra aplicación de las leyes Municipal y Provincial que regían en la Península; la separación de los poderes civil y militar y el gobierno del país por el país, es decir, "el planteamiento del régimen autonómico" como única solución práctica, compatible con las condiciones especiales de Cuba y con las necesidades e intereses de ésta.

Por consiguiente, se abogaba resueltamente por la concesión a la Gran Antilla de "una Constitución propia, en la que se consagrara y organizara con respecto a su gobierno el principio de responsabilidad y con respecto a sus intereses generales el de la representación local", a fin de que quedaran resueltos definitivamente, con el concurso de sus habitantes, todos los asuntos relativos a los intereses comunes a las seis provincias cubanas.

Ciertamente, sin la existencia de un Gobierno responsable y de una Diputación Insular en que los mandatarios del país discutiesen y acordasen lo que importara al bien general de Cuba, se continuarían sufriendo los males inherentes a toda situación de centralización opresiva. Pero, además, era preciso

pedir el reintegro de los derechos individuales y de las libertades, ya que sin ellas no había dignidad, ni progreso, ni garantías para la vida de ningún pueblo; libertades y derechos que, por otra parte, se hallaban proclamados y reconocidos en el Título I de la Constitución del Reino y que, por tanto, correspondían a la condición de ciudadano español. Por último, en la cuestión económica se exigía la extinción de los monopolios y de los privilegios y se sostenía que entre las facultades de la Diputación Insular figurase la de votar libremente los presupuestos generales de la isla y la de acordar todo lo referente al régimen arancelario y al sistema de tributación interior (25).

En estas circunstancias, el 15 de Agosto el Gobierno designó una comisión para estudiar las reformas a introducir en el régimen administrativo, arancelario, tributario y comercial de Cuba de acuerdo con el espíritu del Zanjón (26). Todavía en el mes de Noviembre Labra interpeló al Gobierno, recabando información sobre los movimientos insurreccionales en Cuba fue contestado por el Ministro de Ultramar, señor Albacete (27).

Sin embargo, en las Cortes no sólo no se aceleró la aprobación de las reformas pendientes, sino que se suscitó una oposición general contra ellas, lo que obligó a Martínez Campos a dimitir, sin que mejorase la situación con los cambios acaecidos en el Ministerio de Ultramar (en Diciembre de 1879 al constituir Cánovas un nuevo Gobierno se hizo cargo de la cartera del ramo don José Elduayen, Marqués del Pazo de la Merced, que al poco tiempo y con motivo de ciertos reajustes fue sustituido por don Cayetano Sánchez Bustillo).

Reanudadas las sesiones parlamentarias tras el paréntesis navideño, Labra preguntó acerca de las libertades

políticas en Ultramar, lo que provocó una contestación del Ministro de Ultramar señor Sánchez Bustillo, seguida de una intervención del de Fomento, señor Lasala. Labra argumentó que de nada servía decir que se iban a hacer reformas, si luego éstas no se efectuaban. De esta forma, continuaría el sistema imperante, sin que tuviera lugar modificación alguna, manteniéndose "la dictadura y el absolutismo, mientras se proclamaba a toda voz, que se iba a realizar la política de asimilación" (28).

Por su parte, el señor Portuondo intervino para preguntarle al Ministro de Ultramar si se había estudiado ya la cuestión de las reformas, (29), a lo que el Marqués del Pazo de la Merced contestó que en materia política se había hecho lo más adecuado para aquellos momentos y que con respecto a los problemas económicos, cuando el Gobierno tuviese suficientes datos, plantearía las soluciones más convenientes, puesto que las reformas sólo se podían llevar a cabo con prudencia y cautela (30). Por otro lado, el señor Acosta, Diputado por Puerto Rico, tomó la palabra para exponer las diferencias existentes entre Cuba y la Pequeña Antilla y pedir al Gobierno que tuviese presentes estas distinciones (31). Por último, después de algunas intervenciones más, que se prolongaron a lo largo de varios días, una vez consumidos los turnos de reglamento, el 23 de Febrero se acordó pasar a otro asunto.

No obstante, al día siguiente, 24 de Febrero de 1880, se inició un largo debate al presentar Rafael María de Labra una proposición para que se declarase urgente la presentación por el Gobierno y la discusión por el Congreso de un proyecto de ley sobre las reformas políticas y económicas de Cuba. Resultaba equivocado sostener que la política ultramarina podía darse fuera de las corrientes generales de la política de la metrópoli. Eso suponía "quebrantar la unidad nacional" y "desconocer por

ompleto el concepto jurídico de la Colonia". "Esto entiendo que
s simplemente absurdo, sobre todo dentro del sistema asimilador
dado que toman asiento permanente en las Cámaras de la Madre
atria los diputados de los países transatlánticos".

Cuba había sido desgarrada por la guerra durante diez
ños, periodo durante el cual se habían visto comprometidos
valores tales como el interés de la nacionalidad y el interés de
ualquier sociedad civilizada (lo que implicaba la libertad, la
ida civil y las garantías elementales del progreso), al tiempo
ue se habían propiciado las situaciones derivadas del
antenimiento de la esclavitud, de la dictadura, del absolutismo,
el monopolio y, en último extremo, de la explotación en general.
n tal sentido, era absolutamente necesario aprovechar las
osibilidades ofrecias por la Paz del Zanjón, que en ningún caso
ebía convertirse en un mero paréntesis. Para eso se necesitaba
traer como bases indestructibles del nuevo orden de cosas a esos
lementos comprometidos por el desarrollo de la guerra, y sin
uya consolidación difícilmente se mantendría la existencia de
na Cuba española.

La autonomía colonial, sostenida por todos los países
coloniales y en especial por la gran nación colonizadora de los
tiempos modernos, Inglaterra, aparecía como la única solución
actible. Dicha doctrina acabaría por imponerse por su propia
uerza, incluso entre los conservadores, tanto de Cuba como de la
enínsula. Realmente, en España estaban más o menos resueltos los
problemas fundamentales de la existencia política, económica y
ocial, mientras que en las Antillas estas mismas cuestiones
estaban pendientes de solución. En última instancia toda la
uestión ultramarina giraba en torno a tres problemas
articulares (el de la esclavitud, el económico y el político), y
no general, que los englobaba: el relativo a la conducta y

espíritu general del Gobierno con respecto a dichos problemas (32).

Si bien la Paz del Zanjón no hablaba propiamente de las reformas económicas, se hacía absolutamente necesaria la adopción de medidas, tanto en este sentido como en el de la modificación del sistema tributario y arancelario. Desde el punto de vista político, se daba el caso de que las Leyes Provincial y Municipal de la metrópoli se hallaban en Ultramar reformadas, pero en sentido centralizador, cuando toda colonia por su propia naturaleza reclamaba la descentralización. Estas cuestiones relativas a la organización provincial y municipal, así como las derivadas del gobierno general eran las que prácticamente contenían toda la cuestión colonial.

Por este motivo, sobre estos supuestos tenían que desarrollarse principalmente los distintos sistemas de asimilación y autonómico, ya que constituían la plataforma a través de la cual se establecían las relaciones entre Ultramar y la Península. Sobre esta base se podían discutir los grados de descentralización y buscar un punto de acuerdo que supusiera la consagración de la vida antillana, "siempre bajo la unidad superior del Estado y dentro de la nacionalidad española" (33). En este debate intervinieron principalmente además de Labra, el Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas, y el Ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo.

Romero Robledo adujo que no era conveniente ir demasiado de prisa; primero había que llevar a la práctica la reciente ley de abolición, y después ya vendrían las reformas políticas (34). Cánovas, por su parte, a través de diversas intervenciones defendió, frente a la política autonómica de Labra, la teoría de la asimilación, y de acuerdo con ella indicó

que en su momento se tendría en cuenta lo expuesto por el diputado autonomista (35). Santos Guzmán apoyó a Cánovas y a Romero Robledo y fue contestado por el señor Ochando (36), al tiempo que el Ministro de Gracia y Justicia, Alvarez Bugallal, se levantó para defender la posición gubernamental frente a los ataques de Alonso Martínez (37). Posteriormente, hicieron uso de la palabra, sin que en el fondo se dijera nada nuevo, Becerra, Balaguer, el Ministro de Ultramar, el señor Acosta, el señor Gil Bergés, que se desvió de la cuestión, y Sagasta, que apoyó de forma moderada la tesis de Labra, el cual, por último, no tuvo más remedio que retirar la proposición (38). Aún así, un mes después se abordó nuevamente el tema de las cuestiones económicas al tratar de los presupuestos generales de Cuba. El presupuesto presentado por el Gobierno contrariaba los principios más avanzados de la colonización y chocaba abiertamente con la situación existente en la Gran Antilla. Cuba estaba necesitada de una alivio en las cargas públicas, de franquicias en el comercio, de fijeza y de claridad en la ley, de flexibilidad en la espontaneidad individual y en las fuerzas locales y, sobre todo, de una fuerte corriente de moralidad (39).

En el sistema de autonomía colonial se daban diversos grados y desarrollos, de tal forma que al principio las provincias ultramarinas participaban del régimen representativo para tener después un Gobierno responsable. Ciertamente, en Ultramar, aunque se dijese lo contrario, no se podía hablar de provincias, puesto que no se había llevado allí ninguna de las leyes, prerrogativas o facultades que caracterizaban a las provincias españolas. De todas formas, quedaba claro que el sistema autonómico era preferible para evitar cualquier tipo de separación frente al sistema de la asimilación. "Por el sistema de la asimilación se habían educado todas las Colonias que se habían separado de la Madre Patria; por el sistema autonómico no

conozco que se haya separado ninguna". La discusión quedó zanjada tras las intervenciones de Moret, Roda, Martínez Campos y Portuondo (40). Por último, intervino de nuevo Labra para defender las reformas políticas en Cuba y fue contestado por el Ministro de la Gobernación, Romero Robledo (41).

Así, pues, el tiempo iba pasando y no se llegaba a nada concreto, ni siquiera en Puerto Rico, donde no se daban las dificultades de Cuba, de tal forma que, por ejemplo, en Mayo de 1880, el señor Vivar se quejaba todavía de la total desconsideración gubernamental con respecto a aquella isla (42). Ciertamente, en 1880 el ordenamiento jurídico de las Antillas era aun muy discriminatorio: las facultades extraordinarias, otorgadas a los Gobernadores, confirmadas y ampliadas por Real Orden de 1825, que había establecido el estado de sitio permanente, no habían desaparecido del todo; había una censura previa para toda clase de publicaciones; el derecho de reunión estaba limitado a veinte personas como máximo; el derecho de asociación estaba reconocido tan sólo para fines civiles y mercantiles; en materia de lo criminal, se seguía un procedimiento secreto y no existía el juicio oral; la centralización era tal que hacía inexistente en la práctica la provincia y el municipio, y, además, la Constitución de 1876 no se había aplicado, sin tener en cuenta que su artículo 89 mantenía en el fondo el sistema de las "leyes especiales"(43).

No obstante, a partir de 1881 y en parte como consecuencia de la llegada de los liberales al poder, empezó a notarse algunas acciones de cierta importancia. Mientras tanto, un Real Decreto del 1 de Marzo de 1878 había otorgado a Cuba la representación en Cortes en los mismos términos que a Puerto Rico, especificando que los cubanos podían dirigirse al Gobierno de S.M., para que sucesivamente se fueran aplicando, con las

modificaciones convenientes, las demás leyes promulgadas o que se promulgasen para la provincia de acuerdo con lo estatuido por el artículo 89 de la Constitución de la Monarquía. Al mismo tiempo otro Real Decreto de la misma fecha hizo extensivas a la isla las Leyes Provincial y Municipal de la Península, del 2 de Octubre de 1877.

Los Reales Decretos de 9 y 21 de Junio de 1878 crearon, a su vez, las Diputaciones Provinciales, ampliaron los Ayuntamientos, dividieron la isla de Cuba en seis provincias y configuraron el cargo de Gobernador Provincial. El mismo 9 de Junio, dos Reales Decretos más establecieron la proporcionalidad de los habitantes cubanos para la elección de diputados y crearon una Junta de Autoridades, cuyas atribuciones y funciones eran reguladas; además, en dictamen había de ser oído por el Gobernador General en determinados casos. Por Real Decreto de 16 de Mayo de 1879 se promulgó con modificaciones la Ley Hipotecaria en vigor en la Península desde el 21 de Diciembre de 1869 y, por último, el Real Decreto de 23 de Mayo de 1879 extendió a la isla de Cuba el Código Penal reformado del 17 de Julio de 1870 (44). Todo esto se vió ampliado por la extensión a las Antillas de la Constitución de 1876, que creó un nuevo orden legal y político, completado por el Real Decreto de 27 de Noviembre de 1892. Al poco tiempo, fueron introducidas las libertades de imprenta y asociación, se estableció la seguridad individual y se reorganizó la enseñanza, aunque quedaron molestas restricciones en materia electoral y persistieron las graves deficiencias existentes en lo económico y en lo administrativo (45).

De esta forma, por Real Decreto de 7 de Abril de 1881 se ordenó a los Gobernadores Generales de Cuba y Puerto Rico que promulgasen en las "Gacetas Oficiales" de las provincias de su mando la Constitución de la Monarquía, sin perjuicio (artículo

2º) de lo dispuesto en la Ley de 13 de Febrero de 1880 (alusiva a las restricciones que suponía el estado de transición en Cuba de los antiguos esclavos mediante el régimen del Patronato) y de las demás especiales, como señalaba el artículo 89 de la propia Constitución. Además, la Ley de Imprenta del 7 de Enero de 1879 fue adaptada por los correspondientes Reales Decretos, a Puerto Rico en 27 de Agosto de 1880 y a Cuba en 7 de Abril de 1881, estableciéndose un nuevo texto para ambas Antillas, en virtud del Real Decreto de 11 de Noviembre de 1886. A su vez, los Reales Decretos de 1 de Noviembre de 1881 hicieron extensiva a Cuba y a Puerto Rico la Ley del 15 de Junio de 1880, relativa el derecho de reunión pacífica, establecido por el artículo 13 de la Constitución de 1876.

Mientras tenían lugar estas modificaciones legislativas, el Partido Autonomista Cubano continuó defendiendo su credo político, tal como quedó reflejado en un artículo publicado en el periódico "El Triunfo" el 22 de Mayo de 1881. Según el mencionado artículo, los elementos constitutivos del régimen autonómico, de acuerdo con el principio de "la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional", se apoyaban en dos supuestos: la representación directa de los intereses locales y la responsabilidad, también directa, de los que tenían a su cargo el ejercicio de las funciones públicas en lo referente a la administración interior y local.

La representación de los intereses locales debía residir en una Corporación de origen popular, con lo que se superaba, así, la centralización administrativa, por lo cual se pedía que quedasen resueltos en Cuba dichos asuntos y que el país se rigiese con el concurso de sus habitantes, tal y como se administraban los intereses municipales y provinciales. De ahí la necesidad de una Diputación Insular que sirviese de vínculo en el

régimen representativo a los intereses comunes a las seis provincias cubanas, teniendo en cuenta, además, que la unidad que tenía que representar dicha Diputación se encontraba trazada por la naturaleza y consagrada por la ley.

Por otro lado, la Diputación Insular debía tener la facultad de acordar en lo relativo a los asuntos puramente locales, nunca en los que tuvieran carácter nacional, de manera que compartiese con el Gobernador General las atribuciones que éste desempeñaba en la actualidad en la administración del país o que pudieran corresponderle por delegación del Ministro de Ultramar. Asimismo, la Diputación Insular debía poseer la facultad de votar los presupuestos generales de la isla, motivo por el cual era necesario que en esos presupuestos no figurase ninguna carga que por su fin y objeto tuviese el carácter de nacional, salvo la cuota proporcional, con que las provincias antillanas tenían que contribuir a los gastos generales de la nación.

De acuerdo con ello, era preciso introducir reformas en los presupuestos generales de Cuba y distinguir entre lo que era nacional y lo que era local, llevando lo primero a los presupuestos generales de la nación, cuyo voto incumbía a las Cortes, y reservando lo segundo, es decir, los gastos e ingresos puramente locales, por su naturaleza, objeto y fin, a los presupuestos de Cuba, que tenían que ser votados por la Diputación Insular, dado que a sus habitantes correspondía el pago de las contribuciones que en aquéllos se impusiera.

Por su parte, el Gobernador General era responsable, única y exclusivamente, ante el Gobierno de la metrópoli, a quien representaba, y jamás podía serlo ante la Diputación Insular, cuerpo subordinado a los altos poderes del Estado. De esta forma,

la Diputación Insular en nada menoscababa la centralización política, sino que daba forma a la descentralización administrativa y económica en beneficio de los intereses particulares de Cuba. Así, el principio de responsabilidad local se organizaba mediante un Consejo de Gobierno que administraría directamente los intereses comunes de las seis provincias cubanas bajo la autoridad del Gobernador General, dando cuenta de su conducta, tanto a éste como a la Diputación Insular.

De todo lo dicho se desprendía que todos estos elementos daban forma a la descentralización administrativa y económica, encomendando a instituciones propias el gobierno y la dirección de los intereses comunes a las seis provincias cubanas. De esta forma, el país tendría una intervención directa y eficaz en sus propios asuntos y ofrecería condiciones de orden, acierto y responsabilidad efectiva, sin que sufriesen lo más mínimo las instituciones fundamentales del Estado, ni la soberanía de la nación, base de la unidad de la patria (46).

Por otro lado, continuando con la labor legislativa antes mencionada, un Real Decreto de 20 de Marzo de 1882 autorizó al Ministro de Ultramar don Fernando de León y Castillo a presentar a las Cortes un proyecto de ley sobre el gobierno general de la isla de Cuba. Como consecuencia de toda esta actividad, dadas las reformas que se iban estableciendo y para mejor ocuparse de ellas, un Real Decreto de 22 de Abril de 1882 creó en la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar una Sección Política, "con el objeto de facilitar el estudio y la resolución del gran número de negocios políticos, que son consecuencia de las reformas hechas en la Administración y Gobierno de las provincias de Ultramar" (su competencia quedó precisada por una Real Orden de la misma fecha, en que se concretaban los asuntos que podían afectarla (47)).

Paralelamente a estos hechos, Labra cuestionó diversos aspectos de la política ultramarina al considerar que su existencia no autorizaba a mantener una postura excesivamente optimista sobre el particular. Así, por ejemplo, opinaba sobre el tema político ultramarino que se daban en la metrópoli las ideas más confusas y las opiniones más contradictorias, y a ello contribuían la propia nomenclatura de los partidos antillanos y la escasa propaganda que éstos habían hecho en la Península de sus compromisos y aspiraciones.

Dentro del mundo ultramarino, el Partido Incondicional Español pretendía conservar la bandera de la patria en aquellos territorios, pero manteniéndose aferrado a la tradición reaccionaria y esclavista que se había iniciado al otro lado del Atlántico a poco de producirse la emancipación de los reinos americanos. Por su parte, el Partido Liberal Cubano se hallaba identificado con la corrientes expansivas y democráticas de la época, pero estaba decidido por la separación de la Madre Patria. Ante esta situación, era de todo punto necesario encontrar una fórmula de equilibrio entre ambos términos y adecuar la política ultramarina a las fuerzas progresistas que habían levantado al Nuevo Mundo y transformado al Viejo; de no ser así, no se podría mantener la presencia de España en las Antillas por mucho tiempo.

Por otro lado, si se tomaba sólo en cuenta el problema ultramarino en lo que tenía de especial y de característico, no cabía más que la existencia de dos partidos en las Antillas: el Autonomista y el Asimilista. El Partido Autonomista pedía una excepción en el modo de constituir la vida provincial ultramarina, mientras que el Asimilista se limitaba a recabar la igualdad absoluta de todas las provincias de la nación. No existía un solo escrito de Derecho Colonial que no defendiera la autonomía ni una sola metrópoli en los tiempos modernos, que no

siguiere, de más cerca o de más lejos, su impulso. Seguramente, España la aceptaría en un plazo más o menos breve, pero en todo caso era indispensable simplificar y aclarar los términos de la política ultramarina, precisando las cuestiones que se debatían y señalando el carácter verdadero de los elementos que obraban al otro lado del Atlántico (48).

Caracterizaba a España en la historia de sus relaciones con los pueblos por ella gobernados la insistencia en el error y en el desprecio de las experiencias más positivas. La persistencia de los fracasos y la gravedad de los desastres aconsejaban la conveniencia de un cambio de conducta y el ensayo de una política que siguiera, aunque fuese de lejos, los ejemplos de las potencias que después de haber cosechado con España y por sus mismos medios, dolores y desgracias, habían variado de rumbo, aceptando y practicando métodos diversos e incluso opuestos.

Sin embargo, en España se daba una serie de situaciones que dificultaban altamente la adopción de otro tipo de política. El harinero peninsular, que tenía el monopolio de las Antillas para sus trigos y para los del extranjero que entraban en Santander; el poseedor de esclavos, que no encontraba ya en el mundo otros pabellones que los del Brasil y España para garantizar la explotación del hombre negro por el hombre blanco, lo cual implicaba necesariamente una política general de represión y de desconfianza; las clases ambiciosas, que se veían privadas de la explotación de la Península por medio de los empleos públicos, cuya provisión se iba dejando lentamente a la oposición y al concurso, pero que tenían delante de sí los sueldos suculentos y las subvenciones más o menos legítimas de la ancha burocracia ultramarina, para la que no había ascensos reglamentarios ni condiciones de ingreso; todos ellos entendían, lógicamente, que la menor variación en el sistema de vida

política, económica y social de las Antillas constituía un ataque directo a sus intereses, con tanto mayor motivo cuanto que dichos intereses por su propia naturaleza no eran duraderos, y su energía y sus esfuerzos estaban en razón inversa de su viabilidad.

No obstante, a pesar de todo esto, en España todavía alentaba la política que nos había hecho perder casi todo cuanto habíamos adquirido y poseído en el mundo. Muchas eran las causas de esta situación, pero las principales podían resumirse en las siguientes: ignorancia general sobre las personas y las cosas de Ultramar; deficiencia de la propaganda liberal ultramarina; susceptibilidad nacional; inexperiencia política de Cuba, e intrigas y falacias de los elementos reaccionarios transatlánticos (49).

Según sus adversarios políticos, el Partido Liberal Cubano obedecía a una tendencia separatista por sus afirmaciones favorables al régimen canadiense; por su oposición a toda identidad y a toda analogía con la política peninsular y por el carácter, sentido, antecedentes y compromisos de sus adeptos reclutados exclusivamente entre los hijos del país y en el campo de los antiguos insurrectos. Pero todos estos supuestos eran absolutamente falsos y respondían a una campaña de desprestigio por parte de sus opositores. En realidad, el Partido Liberal Cubano concretaba su credo político en los siguientes puntos: promulgación de una ley de emancipación indemnizada de la servidumbre (cuestión social); extensión de los derechos individuales garantizados por el Título I de la Constitución (cuestión política) y supresión del derecho de exportación sobre los productos de Cuba (cuestión económica) (50). Por otra parte, la teoría autonómica descansaba en el principio descentralizador, si bien admitía muchos grados en su desenvolvimiento y toda clase

de reservas y atenuaciones. Ciertamente, el término autonomista tenía en sí un pero valor científico, pro menos decía la asimilación, ya que ésta era tan sólo un procedimiento en tanto no se determinara su objetivo, sus grados y sus formas (51).

En este contexto, cada vez se hacía más necesaria la definición de las posiciones y la reafirmación de las posturas a adoptar, dada la situación existente. Así, la confusión de mandos en los Gobernadores; la artificiosa anulación de la vida municipal y provincial, reducida a una vana palabra; la monstruosa desigualdad en el derecho electoral, que ponía los comicios a merced de la burocracia y de una inteligente oligarquía; el monopolio del mercado antillano por las harinas castellanas, los hierros de Vizcaya y los vinos de Cataluña y, en última instancia, el mantenimiento, aunque fuese temporal, de la esclavitud disfrazada con el nombre de Patronato, eran hechos que aparte del presupuesto ultramarino, sobrecargado con gastos generales que la nación debía sufragar, probaban evidentemente la necesidad de adoptar reformas todavía más resueltas de las establecidas hasta ahora (52).

De esta forma, era preciso fijar bien los términos del problema, porque los asimilistas, con su poca precisión y con sus contradicciones, y los reaccionarios, con su hipocresía y con su malicia, trabajaban afanosamente para que la cuestión no se planteara en toda su sencillez y con la claridad deseable. Por ello, dada la confusión que reinaba sobre la materia en el ánimo de muchas gentes se hacía cuestionable la autonomía colonial. Así, unos creían que el problema se reducía a crear en Puerto Rico y en Cuba un pueblo bajo el protectorado de España; muchos entendían que se trataba de la independencia o de la separación de las Antillas; otros pensaban que el empeño consistía en establecer en aquellas islas Asambleas más o menos soberanas que

legislaran sobre toda clase de derechos y de intereses (derechos políticos y civiles lo mismo que asuntos administrativos y económicos); otros más opinaban que de lo que se trataba era de reproducir la organización colonial de otros países, y algunos, en fin, consideraban que la empresa autonomista era pura y simplemente la de los insurrectos cubanos, que con suavidad y buenos modales querían conseguir lo que no habían logrado con las armas en la mano.

Ciertamente, en materia de autonomía colonial era preciso distinguir lo que constituía la pura doctrina científica, de lo que estaba en el programa político de quienes defendían la idea con aplicación a Cuba y a Puerto Rico. Según esto, las bases del régimen autonómico defendido para las Antillas recogían los siguientes puntos: soberanía e imperio de la metrópoli, unidad del Estado y descentralización económica y administrativa en Ultramar. En cualquier caso, la autonomía colonial suponía la aplicación íntegra de la Constitución del Estado y conllevaba la creación de una Asamblea Insular para todo lo que revistiese un carácter especial, así como el dominio de la metrópoli en las provincias de Ultramar por la acción de las Cortes; la unidad de legislación política y civil y el autocontrol en la dirección del Ejército; la Administración de Justicia; la Administración General Superior y el Gobierno General de las islas (amén de los Gobiernos Civiles de cada una de las provincias) con sus funciones propias, su responsabilidad ante el Gobierno de la nación y su veto suspensivo y "ad referendum". De acuerdo con ello, la asimilación no suponía, pues, al menos de forma primordial, la no aceptación de la Asamblea Insular y de la descentralización económica y administrativa, sino la negación fundamental de los derechos del ciudadano a los españoles de las Antillas, lo cual representaba la consagración de su inferioridad legal y política (53).

Por su parte, el separatismo había encontrado entonces una serie de apoyos que facilitaban su extensión al propiciar un conjunto de circunstancias, a partir de las cuales le era más fácil maniobrar. Así, eran sus aliados los que pedían la continuación de los viejos monopolios; los que reclamaban la perpetuidad de los irritantes privilegios; los que abogaban por la continuación del Patronato, disfraz hipócrita de la esclavitud; los grandes contratistas, que se habían enriquecido con la guerra; los que durante la época revolucionaria se habían aprovechado de las dificultades de la Administración para imponerse al Gobierno; los que habían visto acrecentarse su prosperidad de manera fabulosa, y los que, por una razón o por otra, se habían hecho poderosos y omnipotentes.

Dentro de este contexto, la ideología separatista consideraba que estaban igualmente condenados al fracaso, tanto el Partido Democrático, que pedía la identidad absoluta entre las provincias insulares y las peninsulares, como el Autonomista, que solicitaba bajo la soberanía de la metrópoli el régimen especial que en otras colonias habían planteado con excelente resultado los pueblos colonizadores modernos más inteligentes. Pensaba, asimismo, el separatismo que el día en que los que estaban reclamando las reformas creyesen que la metrópoli no las había de llevar a cabo abandonarían el campo español para ingresar en sus filas, con lo cual podrían intentar nuevas perturbaciones contra España (54). Normalmente, era práctica generalizada, por parte de los defensores del esclavismo y del monopolio, el excitar a la opinión pública con invocaciones a la patria y al amor propio, siempre que veían amenazadas sus conveniencias y pretensiones. En realidad, lo que ocurría era que se vulneraban las más elementales nociones de la Moral y del Derecho, sometidas a un grosero y sórdido interés, y se despreciaban las leyes dictadas en la Península y todo lo que afectaba al principio de autoridad (55).

La cuestión política ultramarina entrañaba dos aspectos fundamentales, relativos el uno al ámbito del ciudadano y el otro al de la localidad. Pero, tanto el régimen autonómico como el asimilador se enfocaban más bien hacia el segundo, preguntándose por una serie de problemas relacionados con el tema de la organización colonial, tales como qué vida se debía garantizar a la localidad; qué intereses eran los puramente insulares; qué corporaciones debían atenderlos; de qué manera había de velar por ellos el poder central; qué relaciones debían existir entre la provincias de Ultramar y la metrópoli como entidades políticas, etc.; de modo que todo ello se orientaba al conjunto de relaciones del poder metropolitano con las provincias ultramarinas, consideradas en lo que tenían de propias y específicas.

Sin embargo, al lado de este problema y de mayor importancia que él había otro, que miraba al individuo al cuestionar qué clase de derechos y de garantías debía tener el ciudadano español residente en las Antillas, es decir, al plantearse si el español que vivía en Ultramar debía gozar o no de los mismos derechos que el residente en la Península (56).

Ciertamente, dado el concepto moderno de la nacionalidad y supuesta la privanza de los intereses morales y políticos sobre las circunstancias geográficas y los accidentes etnográficos en la sociedad contemporánea, apenas se comprendía el porvenir de las Antillas bajo la ley de las razas y el imperio de las preocupaciones de familia y de casta. No obstante, esto era lo que alentaba en aquel tipo de política, que quería dividir a los habitantes de Ultramar en criollos y peninsulares, manteniendo eternamente sobre aquella sociedad la amenaza de un conflicto entre dominadores y dominados. Por todo ello, no se podía asegurar la unidad nacional dentro del actual momento

histórico, si no era por la participación directa de los antillanos en la vida política general de la nación española. De acuerdo con ese planteamiento, los autonomistas pedían la identidad de derechos políticos entre las Antillas y la metrópoli y sostenían que al otro lado del Atlántico las divisiones debían producirse únicamente por problemas políticos, en cuya solución no entrase para nada la apelación a la patria, que tenía que estar por encima de todas esas contiendas y ser como el supuesto necesario de esa diversidad de manifestaciones.

Así, pues, los autonomistas y, con ellos, la mayoría de los habitantes de las Antillas querían poner fuera de toda discusión la cuestión de la patria, cosa que no se conseguiría con la disparatada propaganda que hacían algunos, identificando la suerte de España no solamente con un orden político particular, sino también con las ideas, intereses y soluciones que ya habían sido rechazadas en todas las colonias y en la vida interior de las metrópolis y tenidas como señal de atraso y de decadencia por los pueblos que pugnaban por conservarse en el círculo de las naciones civilizadas.

En realidad, sobre la base de una única ciudadanía en todo el territorio español, se daban importantes diferencias, de forma que unos querían una mayor descentralización, unida a más amplias facultades en la localidad, y otros ninguna, es decir, la igualdad absoluta con las provincias metropolitanas en lo administrativo y en lo económico. Además, se producía también diversidad de criterios por cuestiones puramente locales, por problemas apenas comprensibles en Europa o en la propia metrópoli, si bien por encima de todo ello se hallaba la condición general del español, el Derecho Común para cuantos identificaban su suerte con la de la patria, vinieran de donde viniesen o fuese su raza la que fuera, tal como había sucedido constantemente en España desde siempre (57).

Verdaderamente, hacía tiempo que se estaba atravesando un periodo crítico, tanto para el prestigio de España en América como para la suerte de su Imperio ultramarino. De esta forma, frente a las torpezas cometidas durante el segundo tercio del siglo, que habían sembrado grandes desconfianzas entre las provincias del golfo de México y la metrópoli, era preciso mantener una actitud que venciese esas reservas, esas frialdades y esos obstáculos. Precisamente, la política que arrancaba del Zanjón estaba revestida de un noble y generoso espíritu de reconciliación, de paz, de aproximación y de justicia y pretendía conseguir que la vida ultramarina fuese la misma que la de la nación entera sin desigualdades irritantes ni contradicciones disparatadas y que las Antillas pudiesen atender a sus necesidades urgentes y especialísimas, descargando a la metrópoli de responsabilidades, mediante una descentralización lo más acentuada posible.

Dos eran los obstáculos principales, contra los cuales tenía que luchar todo empeño hispanoultramarino, existente uno en España y proveniente el otro de las propias Antillas. En la Península se daba la duda, la reserva y la sospecha de que una gran política de expansión y de reformas, cuyos pormenores pocos entendían, sirviese sólo para el quebrantamiento del vínculo colonial y la pérdida de las Antillas con vergüenza inmensa de España y para desventura y ruina de todos los intereses morales y económicos de las comarcas americanas. En Ultramar existía la convicción de que la metrópoli jamás entraría en una política generosa de libertad y de expansión, al modo como lo había realizado Gran Bretaña y lo estaban haciendo Francia, Portugal y Holanda y, además, se pensaba, que las Antillas serían consideradas siempre tierras de explotación, para las cuales no habría aquella desinteresada preocupación que provocaban en la Península las necesidades y las desgracias de sus provincias.

Así, pues, lejos de ocultar estas dificultades, se debían dar a conocer a todo el mundo, para de este modo poderlas vencer con mayor facilidad. Esos prejuicios, esos errores eran lo que explotaban los enemigos de España, ayudados por la intransigencia de los partidos y por el egoísmo de los monopolizadores (58).

Lo cierto era que se daban muchas contradicciones dentro del mundo ultramarino; de forma que, por ejemplo, con respecto al derecho de sufragio se podía decir que era ilusoria la igualdad ante la ley, ya que resultaba muy distinto el criterio que se aplicaba, cuando se establecía el derecho electoral para los peninsulares y cuando se concedía a los habitantes de Cuba y de Puerto Rico, aunque unos y otros fueran igualmente españoles. Con ello se pretendía sostener a todo trance cierto predominio de los peninsulares sobre los isleños, situación que resultaba tanto más odiosa, cuanto que oficialmente se hacían manifestaciones en favor de la identidad que debía existir entre unos y otros (59).

En relación con las cuestiones derivadas de las relaciones comerciales entre la Península y las provincias ultramarinas, el remedio a estos problemas consistía en modificar el arancel de Cuba y de Puerto Rico. Esta modificación debía orientarse en el sentido de rebajar los aranceles de otros países, lo cual abriría nuevos y grandes mercados a los productos de las Antillas hispanas. La crisis económica padecida por Cuba y, en menor medida, por Puerto Rico era una crisis perfectamente conocida en los sistemas coloniales, que adoptaron ante ella una actitud similar a la que se pretendía en España: asegurar el mercado de la metrópoli a los productos coloniales.

Podían franquearse los puertos de la metrópoli a los productos coloniales, pero esto no debía suponer una despreocupación con respecto a la importancia que tenía la producción ultramarina y a la necesidad de abrir nuevos mercados para Cuba y Puerto Rico. Lo que importaba realmente era destruir el derecho diferencial de bandera, ya que facilitaría el desarrollo del tráfico, y reducir los aranceles ultramarinos, a fin de que el nivel de vida en las Antillas fuese similar al del mundo civilizado. Estos argumentos expuestos por Labra en el Parlamento fueron contestados por el señor Nieto y replicados nuevamente por el propio Labra (60).

Aunque era ciertamente importante el desarrollo de los intereses económicos, no por ello se debía olvidar que los intereses que más unían a los pueblos eran los morales; la comunidad de ideas; la igualdad de aspiraciones; la identidad de condiciones en todo lo que constituía una aspiración común, una gloria idéntica y una tradición análogas. Esto era lo verdaderamente importante, la médula de los pueblos, la base de su unidad moral, que era, a su vez, el fundamento indestructible de la unidad política y de todo Imperio colonial. Por último, debían apoyarse las reformas económicas, pero poniendo particular atención a todo lo referente al orden de las ideas y de las reformas políticas y sociales. El debate quedó concluido tras las puntualizaciones de Labra a las rectificaciones del señor Villanueva (61). Sin embargo, el tratamiento de las cuestiones económicas se alargó todavía un poco más, dando ocasión a Labra para intervenir de nuevo brevemente y ser contestado por el Ministro de Ultramar, León y Castillo (62).

Por su parte, el Partido Autonomista Cubano en circular de 21 de Junio de 1882 definió los supuestos de sus doctrina en lo relativo a la organización y atribuciones de los poderes

públicos ultramarinos, basándolos en tres puntos: la soberanía de la metrópoli, sin la cual no cabía la existencia de las provincias ultramarinas; la representación local, que daba forma en el terreno del Derecho y en la esfera de los intereses a la personalidad colonial, en lo que a su vida interna se refería, y la responsabilidad del Gobierno antillano, garantía de recta administración y de respeto a las leyes. De acuerdo con ello, cada uno de estos poderes se incardinaba en una institución: la soberanía de la metrópoli en el Gobierno General, la representación local en la Diputación Insular y la responsabilidad gubernamental en el Consejo de Gobierno.

El Gobernador General, como representante y delegado del Gobierno de la nación, tenía el mando de las Fuerzas de Mar y de Tierra; ejercía la prerrogativa de indulto y los derechos inherentes al Vice-Real Patronato; entendía en lo referente a las Relaciones Exteriores en los casos establecidos por la leyes; convocaba, suspendía y disolvía la Diputación Insular; aprobaba o desechara los acuerdos de ésta y nombraba y separaba libremente a los miembros del Consejo de Gobierno. La Diputación Insular, formada por los representantes elegidos por el país, deliberaba acerca de todos los asuntos de interés local y sus acuerdos necesitaban para ser ejecutivos, la aprobación del Gobernador General; asimismo, le correspondía el voto de los presupuestos generales de la isla en su carácter de locales.

Por último, el Consejo de Gobierno administraba directamente los intereses comunes a las seis provincias cubanas bajo la autoridad del Gobernador General, siendo responsable no sólo ante éste, sino también ante la Diputación Insular. Así, el país alcanzaría sólidas garantías para su buena y acertada administración interior, dejando a salvo las prerrogativas que al Gobernador General correspondían como representante y delegado del Gobierno supremo de la metrópoli.

Para el credo autonómico, las provincias ultramarinas no eran un centro de explotación, un mercado, una factoría, una mina o una presa para la burocracia, sino una sociedad, en cuyo seno debían coexistir todos los intereses legítimos tanto materiales como intelectuales y morales. De la misma forma, la misión de la metrópoli no podía cifrarse en oprimir o explotar a las provincias de Ultramar, sino en educarlas y dirigir las con prudencia y generosidad, para que, puestas en disposición de utilizar y desenvolver sus fuerzas naturales y sus peculiares facultades, alcanzasen con plena conciencia la posesión de su bienestar y felicidad y contribuyesen con su riqueza, poder y adelantos al verdadero engrandecimiento de la patria común (63).

Era preciso tener presente la existencia de tendencias en el seno de las dos grandes líneas políticas que regían en Cuba: la liberal y la absolutista. En la primera cohabitaban las reservas y los meticulosos tencismos de un sector del Partido de la Unión Constitucional, el espíritu fuertemente asimilador del Partido Liberal-Progresista, las reclamaciones igualitarias de los demócratas y el puro radicalismo del Partido Liberal o Autonomista. Sin embargo, en cualquier caso se buscaba la anulación del antiguo régimen y el planteamiento y la práctica de la Constitución española en las comarcas ultramarinas. En la segunda se daban el esclavismo rebelde, las resistencias de los criollos más recalcitrantes y las contradicciones de la mayor parte de la Unión Constitucional, siendo estas tendencias partidarias de la vieja política con sus desigualdades, su centralismo y sus arbitrariedades, disfrazadas de protestas de legalidad y de invocaciones a la integridad de la patria y al interés del orden público (64).

Establecidas estas distinciones, cabía analizar el programa político del Partido Autonomista. En lo social, se pedía

una ley de emancipación indemnizada; una reglamentación simultánea del trabajo de color y del libre; la educación moral e intelectual del liberto y la exclusiva inmigración blanca por iniciativa particular.

En el orden político, se pretendía la extensión de los derechos individuales, garantizados por el Título I de la Constitución; la libertad religiosa y de enseñanza; la admisión de los cubanos, a la par que los demás españoles, a todos los cargos y destinos públicos; la aplicación íntegra de las Leyes Municipal, Provincial y demás orgánicas de la Península sin más modificaciones que las exigidas por las necesidades e intereses locales; el cumplimiento del artículo 89 de la Constitución en el sentido de la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional; la separación e independencia de los poderes civil y militar; la formación de un Código Rural y la aplicación del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial, de la Ley Hipotecaria y de Comercio y de las demás reformas legislativas.

En lo económico, se solicitaba la supresión del derecho de exportación sobre todos los productos de Cuba; la reforma de los aranceles en el sentido de que los derechos de importación fuesen puramente fiscales, suprimiéndose los diferenciales específicos o de bandera; la rebaja de los derechos que en la Península pagaban los azúcares y mieles de Cuba hasta reducirlos a derechos fiscales; un Tratado de Comercio entre España y las naciones extranjeras y, muy particularmente, con Estados Unidos sobre la base de la más completa reciprocidad arancelaria; la conversión de la Deuda; la reparación del crédito público y la liquidación de la cuenta con el Banco Español de La Habana (65).

Pasadas las vacaciones parlamentarias e iniciada una nueva legislatura, Labra intervino para preguntar sobre el

sistema político a desarrollar por el Gobierno y fue contestado por Cánovas del Castillo (66). Reorganizado el Gobierno Sagasta, el 11 de Enero de 1883 accedió al Ministerio de Ultramar el poeta Gaspar Núñez de Arce, que el 2 de Marzo de aquel año presentó a las Cortes un proyecto de ley sobre las facultades y atribuciones de los Gobernadores Generales, original del anterior Ministro del ramo, que venía a completar la obra de aquél. Como ya se indicó anteriormente, uno de los puntos incompletos dentro de las reformas otorgadas lo constituía la cuestión de la Ley Electoral, aplicada con carácter restrictivo y que fue objeto de más de una intervención en las Cortes.

De acuerdo con esta situación, en Enero de 1883 Rafael María de Labra presentó una exposición de varios vecinos y residentes en Barcelona, pidiendo que se aplicara íntegra para Cuba y Puerto Rico la Ley Electoral peninsular (67). Al mes siguiente, Portuondo interpeló al Ministro de Ultramar, interesándose, entre otras cosas, por la reforma de las condiciones del derecho electoral en Cuba y en Puerto Rico, a lo que Núñez de Arce contestó que la reforma de tal derecho tendría lugar dentro de una política asimiladora, cuando lo aconsejasen las circunstancias (68).

Por aquellas mismas fechas, don Rafael María de Labra escribió un famoso artículo, publicado en el periódico "La Tribuna", en el que expuso el programa del autonomismo. Según su criterio, dos supuestos fundamentales debían conformar el régimen autonómico: primero, la identidad de los derechos civiles y políticos de los españoles de la Península y de las Antillas; segundo, la concesión de toda la descentralización económica y administrativa, compatible con la unidad nacional.

De acuerdo con estos supuestos, dentro del autonomismo no cabían ni el Patronato, ni los gobiernos militares, ni la dictadura, ni la irresponsabilidad de las autoridades civiles, ni el privilegio burocrático en las elecciones, ni la sumisión de las capacidades al censo, ni la arbitrariedad en relación con la seguridad personal, ni el "procedimiento inquisitorial" y secreto, ni el exclusivismo de los jueces, ni la publicación de los periódicos, sometida a la autorización de los Gobernadores, ni la comisión de los delitos de imprenta antes de haberse dado publicidad al artículo penable, ni la intolerancia religiosa, ni el matrimonio exclusivamente católico, ni la Diputación Provincial reducida a un mero cuerpo consultivo, ni los Ayuntamientos movibles a voluntad de los Gobernadores y anulados por la burocracia centralista.

Con respecto al primer punto arriba indicado, la identidad de derechos se debía entender en el sentido de que tanto en las Antillas como en España rigiesen la misma Constitución y demás leyes derivadas del desarrollo legislativo, tales como la Ley Electoral, la de Reunión, la de Representación en Cortes, la de Asociación, la de Imprenta, la de Procedimientos, la del Jurado, la del Matrimonio Civil, la del Orden Público, la Provincial y de Municipios, etc. En cuanto al segundo punto, es decir, a la descentralización económica y administrativa, debía interpretarse, de forma que las cuestiones de carácter exclusivamente local se resolviesen en Cuba y en Puerto Rico y no en la Península. Sin embargo, hasta entonces no había sido así, motivo por el cual los temas tratados lo eran tarde y mal, dada la distancia, la diferencia de latitudes y de costumbres y la incompetencia natural de quienes no habían visto ni estudiado problemas que no les interesaban directamente.

En estas condiciones, las cuestiones ultramarinas se resolvían, pues, por un lado, en el Ministerio de Ultramar, cuyos funcionarios en su casi totalidad no habían estado nunca en las Antillas y a quienes no se les exigía la menor condición facultativa, ni la mas mínima preparación para ocupar sus puestos, y, por otro, en sesiones de las Cortes, a las que asistían unos quince o veinte diputados en representación de las Antillas, casi todos oriundos de aquellas islas, pero empleados en el Ministerio y sólo conocedores de los problemas por los expedientes.

De acuerdo con ello, la metrópoli se ocupaba no sólo de lo general o nacional, sino también del ejercicio de la soberanía y de la práctica del mando. Así, España organizaba todo lo relativo al Ejército, la Marina, los Tribunales de Justicia, la Representación diplomática y la Administración general y señalaba el cupo que correspondía a Cuba y a Puerto Rico, de acuerdo con su población y su riqueza dentro del presupuesto general del Estado. Como soberana, la metrópoli velaba por la fiel observancia de los principios constitucionales en todas partes y resolvía los conflictos de corporaciones y de entidades, y como mantenedora del mando llevaba la dirección de la política general, sostenía la unidad de la nación y del Estado y no toleraba que las disposiciones de carácter local o de puro detalle saliesen de la Constitución o negasen, de algún modo, los principios de ésta. Pero, a pesar de todo este cuadro, se suscitaban conflictos y en su virtud se hacía preciso la creación de una Diputación o Asamblea Insular con su Pleno y su Comisión Ejecutiva, a la que quedaría sometido todo lo relativo a los asuntos económicos y administrativos que pudieran originarse.

Dicha Diputación debería formular sus acuerdos y nombrar sus empleados y dependientes con entera libertad, si bien

no podría resolver sobre aquellos derechos políticos y civiles sometidos exclusivamente a la generalidad de la nación. En todo caso, si la Diputación Insular se extralimitaba en el uso de sus atribuciones, debería rendir cuentas en este sentido al Gobernador General nombrado por la metrópoli y constituido en jefe de toda la administración ultramarina. Además, en última instancia, las resoluciones de gran importancia quedarían sometidas a la autoridad suprema de la nación, en cuyos grandes centros tenían participación las Antillas por medio de sus representantes en las Cortes. Tal era, en síntesis, la doctrina (69).

Por su parte en Marzo Labra volvió a presentar otra exposición, esta vez de varios vecinos de Oviedo, en la que se pedía la plenitud de los derechos ciudadanos españoles para los habitantes de Cuba y de Puerto Rico (70). En Mayo planteó nuevamente el tema político, basándose en las diferencias surgidas entre el Gobernador General y el Director de Hacienda de Cuba y fue contestado por el Ministro de Ultramar, Núñez de Arce, tras la intervención de los señores Villanueva y Portuondo (71).

Al tiempo que realizaba estas actividades parlamentarias, Labra continuó escribiendo en "La Tribuna", en la que expuso una vez más sus ideas en defensa del autonomismo. En relación con ello, se declaraba partidario fundamentalmente de dos soluciones políticas. Por una parte, de la democracia republicana en todo el Imperio español sin distinción de latitudes, climas, razas, ni distancias. Por otra, de la reforma sustancial del sistema ultramarino para lograr con la victoria de la autonomía colonial, una rectificación de las grandes torpezas e injusticias cometidas en las Antillas en lo que iba de siglo y asegurar, así, el prestigio y la fuerza de España en Europa y sus destinos en el Nuevo Mundo. La resistencia que las reformas

liberales ultramarinas encontraban en la metrópoli procedía de dos causas principales. Una, del profundo desconocimiento que había en España respecto a la historia de la cosas y de los hombres de las Antillas. Otra, de la susceptibilidad natural en una nación que, como la española, había poseído inmensas comarcas y que, habiéndolas perdido por la fuerza, se alarmaba ante la posibilidad de perder también lo que aun le quedaba.

En estas circunstancias, era preciso luchar contra una serie de ideas que imperaban en la mente de una gran mayoría de la población antillana. Así, no era justo pensar que Ultramar jamás obtendría de España el reconocimiento de sus derechos, la igualdad jurídica y la descentralización, ni asegurar que en la Península había una opinión de carácter general, fija, inaccesible al convencimiento e irreductible, que mantendría íntimamente unida la causa de España en América a la de la esclavitud, el monopolio, la dictadura militar y todo cuanto ya había desaparecido del cuadro de los pueblos cultos.

Los antillanos debían, pues, actuar legalmente a todo trance y desarrollar una propaganda viva, enérgica e incesante sobre la totalidad y el detalle de las cuestiones a discutir, tanto en Cuba y en Puerto Rico, al objeto de formar un ejército de adictos y de entusiastas, como en la metrópoli para lograr la reforma de las estructuras por la evidencia de las razones y por la seguridad del éxito, basada en el doble concepto de la justicia de la ley y de la integridad de la patria (72). Después, Labra se interesó por la aplicación de la Ley de Imprenta en Ultramar, lo que originó una fricción con el Ministro del ramo (73), y el 16 de Julio intervino con motivo de la discusión de los presupuestos de Cuba. Ciertamente las cuestiones ultramarinas se encontraban en una desventajosa situación, fruto de su propia naturaleza, de los temas que abarcaban, de las condiciones de la

historia misma, de los adelantos que se habían producido en aquellos países y del clima desfavorable creado por la guerra. Sin embargo, había que superar estas dificultades, ya que si no se podía desembocar en algo peor, y estaba claro que la pérdida de las provincias de Ultramar por abandono, por ruina de ellas o por un conflicto cualquiera, "produciría en la consideración europea y universal del país y en la representación política internacional un detrimento tal, que haría salir a España del círculo de las Naciones no ya de las de primero, sino hasta de las de segundo orden"(74).

Al día siguiente, continuaron las discusiones sobre el particular, indicando Labra que el dominio español en las Antillas estaría perdido en el momento en que se plantease el problema, entre los que pensaban que tenían que estar unidas a la metrópoli de un modo flexible, y los que creían que el sostenimiento de la integridad de la patria y los destinos de España en América dependían sólo de la fuerza y del Ejército. Los pueblos, europeos por sus condiciones sociales e históricas, pedían una gran concentración de fuerzas, pero, por el contrario, en los pueblos coloniales era necesario dejar en libertad la acción de sus habitantes y dar rienda suelta al desarrollo de la iniciativa individual; era necesario, en una palabra, "que la autoridad se dejase sentir poco y que constriñese todo lo menos posible". Las exposiciones de Labra fueron rebatidas por el Ministro de Ultramar, Núñez de Arce, provocando, a su vez, las intervenciones de los señores Alcalá del Olmo, Rodríguez Correa y Dabán y las réplicas de los señores Villanueva y Armiñán (75).

Estas discusiones se prolongaron todavía por espacio de dos días. En la intervención del día 19, Labra fue rectificado por el señor Fabié y contestado por el Ministro de Ultramar (76), y en la del 20 dejó en claro que las Antillas constituían un

punto de apoyo para la política española en América, si bien era preciso, para ejercer tal tipo de acción, realizar en aquellas posesiones "una política grande, fecunda, de confianza y de reforma". Dichas ideas fueron apoyadas por el señor Ruíz Capdepón y matizadas por el Ministro de Ultramar y por los señores Sanz y Peray y Vivar (77).

Con la llegada de Posada Herrera al poder en Octubre de 1883, la actividad del Ministerio de Ultramar tomó un nuevo auge en la persona de don Estanislao Suárez Inclán, que en el breve lapso que ostentó aquella cartera, estructuró un plan de reformas que afectaba a la organización del Registro Civil, al traslado de empleados, a las obras públicas, a los derechos de importación en Cuba de las mercancías procedentes de Estados Unidos, al régimen municipal, a la inmigración, a la Instrucción Pública en Puerto Rico, etc (78). Sin embargo, la cuestión del sufragio universal determinó una votación adversa para el Gobierno, y el 18 de Enero de 1884 Posada Herrera planteó la cuestión de confianza. Ante esto, Cánovas formó ese mismo día un nuevo Gabinete, en el que figuró como Ministro de Ultramar el conservador Manuel Aguirre de Tejada, Conde de Tejada de Valdosera.

Desde el punto de vista de las cuestiones de índole económica, durante los años 1880 a 1886 la situación de la economía colonial se fue agravando paulatinamente, de tal forma que el Gobierno ya no pudo emitir más obligaciones y el presupuesto se fue reduciendo cada vez más (en 1878 se fijó en cuarenta millones de pesos y en 1884 fue de treinta millones, llegando en 1886 a veinticuatro) (79). Como ya se indicó anteriormente, la guerra había producido una gradual desintegración de la economía cubana con un hundimiento del precio del azúcar, lo que contribuyó a ahondar la crisis. Las alteraciones en la producción azucarera se notaron principalmente

en las regiones de Cienfuegos y de Oriente; los precios sufrieron grandes brusquedades y ello afectó, tanto a Estados Unidos como a la propia España.

De todo esto surgió la necesidad de mecanizar la industria del azúcar y de obtener el capital preciso para la necesaria renovación tecnológica, lo que provocó el consecuente y decisivo influjo estadounidense, ya que se consiguió el apoyo financiero del país norteamericano, pero a costa de enajenar de hecho la isla a través de las inversiones del capital yanqui. Por otra parte, la industrialización de la economía del azúcar, como consecuencia del inversionismo norteamericano, elevó bastante pronto la producción y provocó un lógico descenso en la necesidad de mano de obra, al mismo tiempo que poco después se notaba un alza en la producción del tabaco (80).

Realmente, en el centro de todo el problema estaba la cuestión del régimen arancelario y comercial, y en este sentido Madrid intentó atender algunas demandas cubanas. Así, la Ley de 23 de Junio de 1883 estableció las bases de las relaciones comerciales entre España y las Antillas, acordándose una graduación de las obligadas tarifas (los productos irían pagando paulatinamente menos y desde el 1 de Agosto de 1891 muchas importaciones podrían efectuarse, libremente). Sin embargo, todo esto se quedó en la mayoría de los casos en pura teoría, lo que produjo las consiguientes protestas por parte de los afectados (81). Las negociaciones entabladas sobre esta materia con Estados Unidos fueron altamente laboriosas y, por último, fraguaron en un acuerdo, regulado por el Convenio Arancelario de 13 de Febrero de 1884 y por la Ley de Autorizaciones de 22 de Julio de aquel mismo año y completado por el canje de notas, celebrado en Washington los días 8 y 10 de Junio de 1891 (82).

Según este acuerdo, el Gobierno estadounidense prometió suprimir un diez por ciento sobre los productos importados de las Antillas españolas, a cambio de una reducción en las contrapartidas de varias mercancías norteamericanas. Esto provocó una viva protesta de los autonomistas cubanos, que alegaron que los comerciantes de Barcelona y de Santander efectuarían la reexportación de los productos norteamericanos, bajo la protección de los aranceles españoles, con lo cual ellos se verían obligados a pagar el doble de la tarifa establecida como resultado indirecto de este Tratado (la actitud de los cubanos fue resumida por Güell y Renté al decir que el sistema era monstruoso y que España quería vivir a costa de Cuba) (83).

Poco antes de abordar estos temas, Labra, elegido de nuevo por el distrito de Sabana Grande (Puerto Rico) para la Legislatura de 1884-85, hizo uso de la palabra para comentar la cuestión política del retraimiento. Ciertamente, el retraimiento, que se mostraba dispuesto a combatir totalmente, contaba ya con muchos partidarios y tendía a extenderse con gran rapidez. Esto era especialmente grave, ya que, si bien dicha actitud era un mal en todas partes, en las Antillas, mediando una crisis política y económica, era el comienzo de una catástrofe. Dichas apreciaciones fueron contestadas por el señor Santos Guzmán, con lo cual se dió por terminada la discusión (84).

Días después, la Contestación al Discurso de la Corona planteó el tema de la cuestión económica, tan en boga en aquellos momentos. En relación con ello, se hacía precisa la libertad arancelaria en su sentido más amplio, lo cual implicaba la elaboración de un Tratado Comercial con los pueblos americanos, en especial con Estados Unidos, que se había constituido en el mercado exclusivo de los azúcares antillanos. Dentro de estos supuestos, la cuestión de Cuba no se presentaba únicamente como

una cuestión meramente económica, sujeta a componendas y arreglos o a reformas parciales más o menos aisladas, sino que estaba revestida de un carácter de urgencia y su esencia era, fundamentalmente, política.

Por otro lado, la temática bélica hacía especialmente difícil la situación, dado que no sólo se había producido una destrucción material de riquezas, sino una huida de capitales y un freno en la inmigración extranjera, que tanto había influido en el desarrollo comercial de las Antillas. A todo ello se unía el atraso de la producción ultramarina, propio de los países donde todas las fuerzas se ponían al servicio de una sólo explotación y de la producción y venta de artículos especiales. En esos países se olvidaba cualquier otro modo de producción, con el consiguiente abandono de los procedimientos y descuido de los adelantos industriales, fruto del monopolio y de la falta de competencia.

Entrando en el tema del arancel, Cuba entera era sacrificada para proteger la producción peninsular de caña, de harina y de textil. La discriminación se hacía todavía más ostensible, si se consideraba el desigual trato de las provincias ultramarinas, respecto de la metrópoli en virtud de consideraciones históricas, de intereses, de compromisos y hasta de necesidades de orden físico y material, incomprensibles en el mundo americano. Por eso, era de todo punto necesario llegar a la identidad de los derechos políticos "en el sentido de que los mismos derechos, las mismas garantías, del mismo modo, en las mismas condiciones, con el mismo alcance, que existían en la Península, existiesen al otro lado de los mares, donde flotaba la bandera española".

Era, pues, un error plantear la integridad nacional como la conservación pura y simple de las Antillas para España.

No se trataba, simplemente, de afirmar un derecho de la metrópoli sobre aquellas tierras. La verdadera nota patriótica debía suponer "el explícito reconocimiento del perfecto derecho que tenían aquellos insulares a vivir de la vida de la Gran Patria, a participar de la gestión de la cosa pública, que a todos por igual interesaba, a moverse dentro de leyes de perfecta igualdad, a enorgullecerse como de cosa propia de los homéricos empeños y de las gloriosas tradiciones de aquella tierra peninsular, donde habían nacido sus padres y donde estaban las raíces de sus familias, a compartir con todas las provincias y las comarcas todas, que constituían la Nación, las cargas, las responsabilidades, los derechos, el porvenir".

A todas estas consideraciones era preciso añadir el despertar de la política ultramarinas y el movimiento de simpatía que con respecto a la Madre Patria se advertía en los últimos años en los pueblos sudamericanos. Todo sería inútil, si se insistía en mantener en las Antillas una nota discordante del sentido liberal americano y del tono general de la colonización contemporánea. La única solución estaba en las reformas, que debían introducir la flexibilidad necesaria para tratar de aclarar el panorama político existente (85). Estas reflexiones fueron contestadas al día siguiente por el Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, con lo cual se dió por terminada la discusión (86).

Al mes siguiente, se plantearon nuevamente los debates en torno a las cuestiones de índole económica. Dada la situación existente, las Antillas y, en especial, Cuba atravesaban un periodo de extraordinaria angustia, ya que su producción capital, el azúcar, se encontraba estancada y sin salida. A ello debía añadirse el caos creado por sus leyes económicas, por sus aranceles, por su sistema de tributación y por su orden

administrativo. Por último, envolviéndolo todo, estaba el problema general de la colonización, que alcanzaba allí particulares connotaciones.

Frente a todo esto, el Partido Autonomista tenía un programa, que afirmaba dos puntos: identidad de derechos políticos y descentralización económica y administrativa. Según estos supuestos, la vida política ultramarina en sus funciones fundamentales debía traerse a la Península y canalizarse a través del Parlamento. No obstante, ello conllevaba una radical descentralización para todo lo que constituía el orden puramente administrativo y económico, a fin de que las atenciones que por su naturaleza eran de interés estrictamente local se gestionasen dentro de este ámbito.

Inserta en este marco, la existencia de un elemento separatista, que era necesario tener en cuenta, venía a ser como el estímulo que invitaba a una actitud reflexiva, frente "a esa eventualidad de la separación, que hemos de combatir antes que con protestas y amenazas, antes que con excomuniones, antes que con la represión y la fuerza, por el poder de las ideas y por la eficacia de las instituciones, por medios morales y políticos, por la dignificación del antillano, por esa identidad de afectos y por ese ideal, que persigo de todas las maneras imaginables". Esta exposición de Labra se dió por terminada tras las intervenciones de Santos Guzmán, del Ministro de Ultramar, Conde de Tejada de Valdosera, y de Portuondo (87).

Durante la primavera y el verano de 1885, Labra aprovechó para incidir sobre los temas económicos y políticos, a través de varias intervenciones. Así, el 14 de Marzo hizo una pregunta al Gobierno, relativa a la admisión, libre de todo derecho de aranceles, del café y de los azúcares procedentes de

Cuba, y Puerto Rico y Filipinas. Fue contestado por el Ministro de Hacienda, Cos-Gayón, lo que motivó también la intervención de Alcalá del Olmo (88) Poco después, inquirió sobre las elecciones en Cuba y en Puerto Rico, cuestión que fue respondida por el Ministro de Ultramar, Conde de Tejada de Valdosera, quien mantuvo la consabida postura gubernamental (89). Similar respuesta tuvo su pregunta sobre los presupuestos generales de Puerto Rico (90), que le llevó a abordar el tema del separatismo. En relación con ello, dentro de la política nacional había que partir del supuesto de que en todas las colonias existía un germen separatista y de que esta era una cuestión que no se podía pasar por alto.

Así, pues, este punto concreto de la negación absoluta del dominio de la metrópoli, bien fuese por error, por interés o por cualquier otro motivo, era un dato que el gobernante debía tener en cuenta para mover los intereses sociales y procurar destruir de una manera clara y positiva esta postura, que ciertamente no se desarraigaba con la fuerza de las armas y de la represión política, "sino con la verdad, con la eficacia de las leyes, con la persecución viva de los delitos y con el desarrollo de las conquistas de la Civilización en aquellos remotos mares" (91). Esta discusión se continuó durante los dos días siguientes, en que Labra fue rectificado por el señor Suárez y contestado por el Ministro de Ultramar (92). A fin de mes, la discusión de los presupuestos de Cuba motivó la consideración del valor que la Gran Antilla podía suponer como puente con el resto de la América hispana. Realmente, Cuba, donde estaban representadas las ideas españolas, podía convertirse en el centro de donde vinieran "las nuevas manifestaciones del pensamiento y del genio español". Dicha visión fue contestada por el Ministro de Ultramar y rectificada por Sagasta (93).

Durante este periodo, tres fueron las doctrinas políticas que agruparon los afanes e intereses de antillanos y de peninsulares: el asimilismo, el autonomismo y, una de ellas, el separatismo, al margen de la legalidad (el reformismo, surgido en 1894 como un desgaje de la Unión Constitucional en su ala liberal, tenía como base la asimilación). El asimilismo, representado en Cuba por el partido de la Unión Constitucional bajo la jefatura del Conde de Casa Moré y en la política peninsular por Francisco Romero Robledo, cuyo núcleo intransigente y a la vez brazo armado estaba constituido por el "Cuerpo de Voluntarios", agrupó a los elementos conservadores, que tenían como objetivo el mantenimiento del "statu quo".

Los asimilistas, que buscaban la equiparación de la metrópoli y de sus provincias ultramarinas, basaron su posición, caracterizada por un acentuado españolismo, en el convencimiento de que nunca ocurriría nada especial que llevase a la pérdida de las Antillas y de que la política a seguir consistía en no dañar los intereses creados, manteniendo las relaciones normales con los partidos turnantes.

El Partido de la Unión Constitucional, representación genuina del Gobierno metropolitano, quería evitar por todos los medios la relajación de los lazos que unían la metrópoli con las Antillas, a base de identificar la administración y las relaciones todas de la isla con la Península, considerando a aquella como una provincia (dentro de este orden de cosas, la Península y las Antillas debían tener el mismo Ejército y la misma Marina; la misma organización local, provincial y judicial; idénticas leyes políticas, civiles y administrativas, etc., es decir, las provincias de Ultramar debían ser una región más, parte integrante de la nación).

De acuerdo con ello, la reforma política y administrativa debía otorgar las necesarias concesiones, siempre y cuando no atentasen a la unidad (lo que ocurrió es que bajo este supuesto muchas cosas que no atentaban contra esa unidad fueron presentadas como tales). Así, pues, el asimilismo, aunque admitía ciertas diferencias, supuso realmente la vieja tesis centralista, ya combatida por Saco. La Unión Constitucional, el partido peninsular, que mantenía la tesis de la unión bajo el lema de la igualdad política, se vió muy favorecido por los censos y contó con el apoyo oficial, pero no tuvo ningún arraigo, y sus triunfos electorales, carentes de representatividad, fueron más aparentes que reales.

Fuese sincera o no su actitud, lo cierto es que los asimilistas entorpecieron visiblemente la labor del autonomismo, única solución posible durante varios años. Los asimilistas veían revolucionarios por todas partes y acusaban a los autonomistas de separatistas disfrazados; deban la voz de alarma por conspiraciones, supuestas o reales, contra el orden público; apoyaban a la Guardia Civil y al "Cuerpo de Voluntarios", e insistían en la amenaza que suponía la libre difusión de las ideas. Enemigos acérrimos de cualquier liberalización, los asimilistas caracterizaron su política por la perenne desconfianza hacia lo antillano, por la hostilidad hacia las reformas, sociales y políticas y por la actitud alarmista e insidiosa (94).

El autonomismo cubano, organizado en torno al Partido Liberal, dirigido por don José Mmaría Gálvez, llamado después Autonomista, lo mismo que el puertorriqueño, denominado así a partir de la Asamblea de Ponce de 1887, pretendía lograr las bases para una política nacional, mediante la consecución de las reformas adecuadas a ese fin, alcanzando también sus objetivos a

la labor de atracción de los insurrectos, separatistas y emigrados (95). El principio de la nacionalidad cubana, definido ya por Saco, fue el hecho previo y básico sobre el que se organizó la actividad del autonomismo, al que se incorporaron los insurrectos sometidos en el Zanjón y reconciliados con España sinceramente, y la juventud, adversa en líneas generales al centralismo reinante.

Así, pues, el autonomismo supuso una línea evolutiva con antecedentes en Saco, que quería obtener la libertad de Cuba, pero no de manera violenta, sino de forma armónica y gradual, y en ese sentido constituyó una obra de crítica contra el régimen español al resaltar los vicios gubernamentales peninsulares en su labor de recabación de medidas beneficiosas para la isla. Se trataba, pues, de reformar el sistema colonial imperante desde dentro, de lograr determinados cambios más cuantitativos que cualitativos, dirigidos a obtener mejoras en la relación metrópoli-provincias de Ultramar, que redundasen en una mayor dosis de gobierno propio para la parte supeditada del binomio, sin que se alterase fundamentalmente la mencionada relación.

Planteadas así las cosas, era preciso conseguir los supuestos necesarios sin separarse, de momento, de España, para poder desembocar algún día, en lógico proceso, en la independencia, que, de esta forma, se obtendría sin brusquedades y en su momento adecuado. El ideario autonomista, definido por Rafael Montoro, establecía su fundamento doctrinal en las diferencias existentes en las condiciones políticas, sociales y económicas de Cuba y de España.

La base legal de la doctrina se apoyaba en la Constitución española de 1876, y de acuerdo con ello el sistema de gobierno insular debería moverse en el ámbito de la mayor

descentralización posible, dentro de la unidad nacional, y mantener una representación directa de los intereses locales. Los elementos del Gobierno autonómico estarían constituidos por el Gobernador General, la Diputación Insular y el régimen provincial y municipal. La Diputación Insular atendería a los asuntos puramente locales, a la Instrucción y a las Obras Públicas, y se ocuparía de los conflictos entre las Diputaciones Provinciales y las Corporaciones Municipales y de fijar y aprobar los presupuestos generales de la isla, así como las tributaciones. Los acuerdos legislativos que se tomaran no serían leyes en el sentido estricto de la palabra, sino resoluciones de alcance y fin estrictamente local, puesto que no tendrían su origen en el ejercicio de la soberanía. Los acuerdos de la Diputación Insular estarían sujetos, en última instancia, a la aprobación del Gobernador, a quién correspondería el veto absoluto en su carácter de representante del Gobierno metropolitano y, por último, las relaciones de Cuba con España deberían basarse en la identidad de ciudadanía, de tal forma que la esencia de la nacionalidad fuese la misma en Europa y en América.

A todas estas exigencias fundamentales se unieron otras peticiones más, derivadas de la situación existente, tales como: la reforma arancelaria, la libertad de comercio, tributos equitativos, etc (96). Así, pues, la autonomía tenía que montarse sobre las bases del espíritu y de las tradiciones coloniales españolas, incluyendo la identidad de derechos, el sufragio universal y un gobierno responsable ante las Corporaciones Insulares, todo ello bajo la soberanía superior de España. Este sistema político era perfectamente compatible con la integridad del territorio español y, por ende, con la unidad nacional, porque suponía el libre desenvolvimiento de los poderes locales, pero en su órbita (por encima estaba la acción total de la nación, que tenía la iniciativa y unía los exclusivismos locales).

De esta forma, el logro de la compaginación de la libertad cubana con la nacionalidad española, adquiriendo esa libertad por medios legales era del todo necesario a fin de encauzar las cosas de modo eficaz y de evitar una popularización de la idea separatista. La asimilación no era admisible ya, puesto que con el paso del tiempo, al no incluir en sí misma una autonomía ya exigida antes de forma más sutil y menos perentoria, pero ineludible ahora, por la radicalización de posiciones, se había hecho, de manera definitiva, algo totalmente inaceptable.

Las reformas ya no podían estar abiertas a una simple extensión de las libertades, sino a un gobierno propio, conseguido, eso sí, de forma legal. Sin embargo, ello suponía la alteración de grandes intereses, y, por otra, parte la persistencia del separatismo mantenía viva la posibilidad de esgrimir el mito, tras el que escudaban los interesados en mantener el viejo sistema: la autonomía provocaría el separatismo (97). Mientras tanto, el Partido Autonomista se esforzó en demostrar todo lo contrario: la autonomía anularía las ansias separatistas. Realmente, la posición en que tuvieron que moverse los autonomistas, acusados de insurrectos por el Gobierno y tachados de malos patriotas por los separatistas, fue ciertamente difícil. Por otra parte, el área de influencia del autonomismo fue muy reducida, sin prensa en Madrid y sin una maquinaria partidista eficaz en el Congreso.

El grupo parlamentario cubano pesó poco en España y las agrupaciones en pugna se ignoraron mutuamente, lo que provocó, en más de una ocasión, el desaliento y la desmoralización, sin que faltasen, a veces, desuniones y divergencias entre los propios antillanos, dado que Cuba y Puerto Rico veían por separado sus respectivos problemas. No obstante, a pesar de las dificultades, los autonomistas fueron presentando un plan tras otro de mayor libertad política hasta ver coronados sus esfuerzos en 1897 (98).

Por último, el separatismo cubano, línea revolucionaria con precedentes en Félix Varela y en José de la Luz y Caballero, pretendía también, como el autonomismo, construir el Estado nacional, pero rechazando de plano cualquier tipo de relación con la metrópoli. Representaba el radicalismo político y, como tal, su posición era totalmente extremista; la única vía, el único camino era la subversión, ya que el Gobierno español, considerando por otra parte la postura de los que no aceptaron el Zanjón, como ilegal, no permitió la constitución oficial de un Partido Separatista, con lo que quedó anulada la posibilidad de un enfrentamiento por el cauce político. Absolutamente convencidos de que los esfuerzos del autonomismo eran del todo inútiles, los separatistas, con sus postulados maximalistas y con la carga de experiencia que les había dado la Guerra de los Diez Años, se dispusieron a dar la batalla final. Tan sólo les faltaba un jefe calificado, y la fortuna quiso que lo encontraran en la persona de José Martí, que supo infundirles de manera admirable fe en sus destinos y esperanza en la consecución de sus objetivos.

N O T A S.

- (1) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. I, págs. 332-333.
- (2) JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Los Chinos en las Luchas por la Liberación Cubana (1847-1930) (La Habana 1963), págs. 93-94 y RODRIGUEZ SAMPEDRO, CARLOS: Reflexiones sobre Varios Episodios Históricos Españoles ante el Actual Conflicto (Madrid 1915), pág. 73.
- (3) Sobre la política llevada a cabo en Puerto Rico véase, SENDRAS BURIN, ANTONIO: Cómo se Gobierna en Puerto Rico (Madrid 1886) y también GARCIA OCHOA, MARIA ASUNCION: La Política Española en Puerto Rico durante el Siglo XIX (Madrid 1975).
- (4) FABIE ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 125.
- (5) Sobre las oscilaciones políticas características del liberalismo español véase, BRENAN, GERALD: El Laberinto Español. (Antecedentes Sociales y Políticos de la Guerra Civil) (Barcelona 1977) págs. 21-282.
- (6) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), págs. 18-19.
- (7) El perfil personal de Cánovas y y de sus connotaciones políticas puede seguirse en las siguientes obras: BENOIST, CHARLES: Cánovas del Castillo, la Restauración Renovadora (Madrid 1931); FABIE, ANTONIO MARIA: Ob. cit.; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Cánovas: Su Vida y su Política (Madrid 1972); PONS Y UMBERT, ADOLFO: Cánovas del Castillo (Madrid 1901) y MELENDEZ MELENDEZ, LEONOR: Cánovas y la Política Exterior Española (Madrid 1944).
- (8) Sobre la política desarrollada por los distintos partidos durante la Restauración véase, LAMBERT, FRANCIS J.D.: The Cuban Question in Spanish Restoration Politics, 1878-1898 (Oxford 1968).
- (9) Misma cita, Nota núm. 148.
- (10) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 8.
- (11) Las aspiraciones del Partido Liberal y sus actuaciones pueden seguirse en CONTE, F.A.: Las Aspiraciones del Partido Liberal de Cuba (La Habana 1892) y en LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política en las Antillas. (El Partido Liberal de Cuba) (Madrid 1882).

- (12) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Colonial en España. (En las Antillas) (Madrid 1896), págs. 68-69. Véase también Apéndice Documental II. Apéndice núm. 9. y LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 190-192.
- (13) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 16 y 18 y CORWIN, ARTHUR, F. Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886 (Austin 1967), pág. 297.
- (14) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 10.
- (15) Para estos y otros aspectos véase, ARMAS Y CESPEDES, FRANCISCO DE: Régimen Político de las Antillas Españolas (Palma de Mallorca 1882).
- (16) CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol. I, págs. 42-43. Sobre los partidos políticos puertorriqueños véase también, QUINONES, JOSE MARCIAL: Historia de los Partidos Reformista y Conservador (Mayagüez 1889).
- (17) Los programas e idearios de los partidos pueden seguirse en ALFAU Y BARALT, ANTONIO: Los Partidos Antillanos (San Juan 1886).
- (18) Una panorámica de la labor de Labra en el Parlamento puede verse en OLIVAR BULNES, JUANA H.: Labra en las Cortes Españolas, "Revista Bimestre Cubana" (La Habana), LXV, núm. 1-3 (1950), págs. 190-262.
- (19) Sobre la figura y el pensamiento político de Montoro véanse, HERRERA DE LA SERNA, NILDA: Montoro, su Vida y su Obra (La Habana 1952) y MONTORO, RAFAEL: Ideario Autonomista (La Habana 1941).
- (20) Sobre Baldorioty véase, CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Baldorioty de Castro. (Su Vida y sus Ideas) (San Juan 1973).
- (21) MERINO BRITO, ELOY G.: José Antonio Saco: Su Influencia en la Cultura y en las Ideas Políticas de Cuba (La Habana 1950), pág. 119.
- (22) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 8 de Julio de 1879.
- (23) Ibid., 12 de Julio de 1879.
- (24) Ibid., 17 de Julio de 1879.
- (25) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 193-195.

- (26) Sobre esto véanse, CRESPO DE LA SERNA, LEON: Informe sobre las Reformas Políticas, Sociales y Económicas que Deben Introducirse en la Isla de Cuba. Presentado por la Comisión de Reformas de 1879 (París 1879) y Ministerio de Ultramar: Documentos de la Comisión Creada por Real Decreto del 15 de Agosto de 1879 sobre Reformas en la Isla de Cuba (Madrid 1879).
- (27) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 14 de Noviembre de 1879.
- (28) Ibid., 3 de Febrero de 1880.
- (29) Ibid., 4 y 5 de Febrero de 1880.
- (30) Ibid., 5 de Febrero de 1880.
- (31) Ibid., 5 de Febrero de 1880.
- (32) Ibid., 24 de Febrero de 1880.
- (33) Ibid., 25 de Febrero de 1880.
- (34) Ibid., 25 y 27 de Febrero de 1880.
- (35) Ibid., 28 de Febrero y 2, 5 y 6 de Marzo de 1880.
- (36) Ibid., 2 de Marzo de 1880.
- (37) Ibid., 3 de Marzo de 1880.
- (38) Ibid., 5 y 6 de Marzo de 1880.
- (39) Ibid., 15 de Abril de 1880.
- (40) Ibid., 16 de Abril de 1880.
- (41) Ibid., 19 de Abril de 1880.
- (42) Ibid., 12 de Mayo de 1880.
- (43) Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág XIX.
- (44) LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Ob. Cit., págs. 38-39 y 44.
- (45) Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Ob. cit., pág XIX-XX.
- (46) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 196-202.

- (47) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico (Madrid 1953), págs. 20-21.
- (48) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Los Partidos en Ultramar, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 1 (2-V-1882).
- (49) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Vieja Política Colonial "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 4 (5-V-1882).
- (50) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Partido Liberal de Cuba "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 19 (23-V-1882).
- (51) Ibid., I, núm. 22 (26-V-1882).
- (52) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Lo Conquistado, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 82 (4-VIII-1882).
- (53) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 98 (23-VIII-1882).
- (54) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Los Aliados de los Separatistas "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 109 (5-IX-1882).
- (55) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Atrocidades de Cuba, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 124 (22-IX-1882).
- (56) LABRA, RAFAEL MARIA DE: ¿Qué Quieren los Asimilistas?, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 132 (1-X-1882).
- (57) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Un Banquete, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 160 (3-XI-1882).
- (58) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Suscripción Nacional, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 164 (8-XI-1882).
- (59) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Derecho Electoral en las Antillas, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 182 (29-XI-1882).
- (60) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 29 de Mayo de 1882.
- (61) Ibid., 30 de Mayo de 1882.
- (62) Ibid., 20 de Junio de 1882.
- (63) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 206-208 y 216-217.
- (64) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política en las Antillas. (El Partido Liberal de Cuba) (Madrid 1882), págs. 1-2.
- (65) Ibid., págs. 6-8.

- (66) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 23 de Diciembre de 1882.
- (67) Ibid., 25 de Enero de 1883.
- (68) Ibid., 8 de Febrero de 1883.
- (69) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial, "La Tribuna" (Madrid), II, núm. 243 (8-II-1883).
- (70) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 6 de Marzo de 1883.
- (71) Ibid., 21 de Mayo de 1883.
- (72) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Primer Aniversario, "La Tribuna" (Madrid), II, núm. 314 (2-V-1883).
- (73) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Julio de 1883.
- (74) Ibid., 16 de Julio de 1883.
- (75) Ibid., 17 de Julio de 1883.
- (76) Ibid., 19 de Julio de 1883.
- (77) Ibid., 20 de Julio de 1883.
- (78) Las reformas proyectadas por el Ministro Suárez Inclán pueden seguirse en SUAREZ INCLAN, ESTANISLAO: El Gobierno del Ministerio Presidido por el Sr. Posada Herrera con Respecto a la Administración de las Provincias de Ultramar (Madrid 1884).
- (79) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., pág. 310.
- (80) Sobre estas cuestiones relacionadas con la crisis en la producción agrícola, fruto de las destrucciones provocadas por la Guerra de los Diez Años, y con la subsiguiente influencia del inversionismo yanqui véase, THOMAS, HUGH: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970) (Barcelona-México 1973), Vol. I, págs. 359-371 y 381-386.
- (81) CORWIN, ARTHUR F.: Ob. cit., pág. 311.
- (82) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Ob. cit., pág. 23.
- (83) Diario de Sesiones del Senado, 16 de Junio de 1884.
- (84) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 31 de Mayo de 1884.

- (85) Ibid., 20 de Junio de 1884.
- (86) Ibid., 21 de Junio de 1884.
- (87) Ibid., 17 de Julio de 1884.
- (88) Ibid., 14 de Marzo de 1885.
- (89) Ibid., 28 de Marzo de 1885.
- (90) Ibid., 30 de Mayo de 1885.
- (91) Ibid., 1 de Junio de 1885.
- (92) Ibid., 2 y 3 de Junio de 1885.
- (93) Ibid., 23, 27 y 30 de Junio de 1885.
- (94) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, pág. 90; RODRIGUEZ SAMPEDRO, CARLOS: Ob. cit., págs. 74-75; Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Ob. cit., págs. XVII y XXI y MALDONADO DENIS, MANUEL: Puerto Rico: Una Interpretación Histórico-Social (México 1971), págs 27-28.
- (95) Sobre la organización del autonomismo en Puerto Rico véase, SENDRAS BURIN, ANTONIO: El Partido Autonomista Puertorriqueño (Madrid 1888).
- (96) MERINO BRITO, ELOY G.: Ob. cit., págs. 236-238.
- (97) Sobre estas cuestiones véase, DIAZ CANEJA, IGNACIO: La Autonomía en las Antillas (San Juan 1887).
- (98) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Colonial y la Revolución Española de 1868, (Madrid 1915), págs. 154 y 170-171 y también La Reforma Colonial en España. (En las Antillas) (Madrid 1896), pág. 67.

2.2.4) LA LARGA ESPERA DE LAS REFORMAS.

El 25 de Noviembre de 1885 falleció Alfonso XII. Cánovas presentó su dimisión y Sagasta se hizo cargo del poder. Se inauguraba, así, un nuevo periodo en la Historia de la Restauración, la Regencia, correspondiendo a los liberales dar en ella sus primeros pasos. La presencia de los liberales en el poder siempre constituía una mayor garantía de éxito para las aspiraciones autonomistas, y en ese sentido no era un mal augurio el nombramiento de Germán Gamazo para la cartera de Ultramar.

Hasta entonces, los autonomistas cubanos habían clamado insistentemente, y no con demasiado éxito, por las reformas profundas y radicales, que se las debían después del Zanjón "como carga de justicia y elemental deber de lealtad" (1), y confiados una vez más, fueron a las urnas con motivo de las elecciones de 1886, en las que resultó elegido, entre otros, el Diputado por Puerto Príncipe Rafael Montoro, que se convirtió en portavoz de sus aspiraciones.

Poco tiempo antes, el 22 de Marzo de 1886, la Junta Central del Partido Autonomista Cubano había dirigido un Manifiesto al País, en el que volvió a reafirmar los principios en que se sustentaba su ideología política. En la cuestión social se abogaba por la abolición del Patronato y por la libertad inmediata y completa de los patrocinados, ya que así lo exigían los sentimiento de humanidad y de justicia y, además, razones de interés económico y social. Ciertamente, el Patronato resultaba ser una organización del trabajo, artificial y viciosa, que no daba satisfacción a ningún interés permanente al divorciar la vida económica de los principios de la Moral y del Derecho; además, incidía en la producción negativamente y afectaba también; en este sentido, al interés social.

En la cuestión económica, se pedía que los presupuestos de Cuba dejaran de ser presupuestos del Estado para serlo tan sólo de las provincias de Ultramar, separándose al efecto los gastos puramente locales de los que eran por su naturaleza y destino nacionales, puesto que éstos no habían de pesar exclusivamente sobre una de las partes integrantes de la Monarquía, sino que tenían que constituir una carga general, por lo cual al reclamar la separación entre lo nacional y lo local se afirmaba la necesidad de que las seis provincias cubanas contribuyesen proporcionalmente con las demás de la nación a los gastos del Estado. Como fuentes de ingresos tenían que subsistir la tributación directa y la indirecta, destinada la primera, en su mayor parte, a cubrir las atenciones del presupuesto general de la isla y la segunda a facilitar los recursos necesarios para la administración provincial y municipal, pero debiendo estar ambas clases de contribuciones en relación proporcional con los elementos que formaban la riqueza del país, a fin de que el Gobierno contase con medios seguros para satisfacer con regularidad las obligaciones que los servicios públicos imponían, sin que los contribuyentes se viesen privados, como hasta el presente, de toda clase de estímulos para el trabajo y de posibilidades para el ahorro, con el consiguiente detrimento de las fuerzas productivas.

En lo tocante a las relaciones comerciales, se sostenía que de existir impuestos de aduanas, éstos debían afectar únicamente a la importación, ya que los derechos de exportación carecían de base de proporcionalidad, cuestión ésta necesaria en todo impuesto para ser justo. Era asimismo, preciso reformar el régimen arancelario vigente en el sentido de la libertad de comercio. Por otro lado, el cabotaje con la Península, lejos de mejorar el estado comercial, lo empeoraría al cerrar los mercados extranjeros a los productos antillanos a causa de las represalias

que se tomarían como consecuencia de las ventajas fiscales otorgadas a los productos de procedencia peninsular, en perjuicio de los similares de procedencia extranjera. En estas circunstancias, Cuba tendría que sufrir las consecuencias de la privilegiada situación, creada en la industria peninsular por el cabotaje, viéndose obligada a adquirir artículos de mediana calidad a precios caros y sin la compensación de ganar en la Madre Patria un mercado amplio y seguro para sus frutos. En cualquier caso, no cabía restringir la extensión del comercio de las provincias de Ultramar a los estrechos límites de las relaciones entre la metrópoli y sus posesiones de Ultramar, ya que sería necesario que la Madre Patria produjera cuanto necesitase la provincia y que ésta, a su vez, produjese lo que necesitara aquélla. En este sentido, la metrópoli política de las Antillas era España, pero su metrópoli mercantil estaba constituida por Estados Unidos.

Por último, en el aspecto político se abogaba por la autonomía, por tratarse de un orden determinado de gobierno y de administración, destinado a proteger los intereses generales de las Antillas, a favorecer ampliamente el desarrollo de sus fuerzas y a conciliar el orden y la paz con la libertad y con la justicia. De esta forma, la autonomía era entendida como un régimen local derivado de la existencia de intereses peculiares y de necesidades especiales, que hacían de las provincias ultramarinas una sociedad aparte, distinta de la metrópoli, aunque subordinada a ella por razón de la soberanía y unida por vínculos que debían tener su fuerza y su consistencia en la mútua consideración, en el interés recíproco y en el respecto a la ley.

Por esta razón, para que la autonomía colonial se convirtiera en una realidad, debía cumplir una doble condición: la responsabilidad efectiva del gobierno local y la posibilidad

de votar el impuesto, por parte de los representantes del país, reunidos en una Diputación Insular con facultades, asimismo, de tomar decisiones en todo lo concerniente a la organización de los servicios públicos de carácter local y a la gestión de los intereses de la provincia ultramarina, sin perjuicio de la intervención que incumbía al Gobernador General como delegado del Gobierno de la nación, con lo cual quedaba a salvo la soberanía política de la metrópoli y su libre personalidad en lo relativo a las relaciones internacionales. Con tal planteamiento debía cesar la opresiva centralización que aniquilaba toda espontaneidad e iniciativa y que dejaba a aquellas tierras en manos de quienes no tenían, ni podían tener, dada la distancia, un conocimiento inmediato ni una clara inteligencia de sus males y de sus necesidades. En última instancia, todo ello tenía que pivotar sobre la identidad de los derechos políticos y civiles entre todos los ciudadanos españoles, fuera cual fuese su origen (2).

El 10 de Mayo de 1886 se celebró la apertura de Cortes, y Sagasta leyó, en nombre de la Reina Regente, el Mensaje de la Corona, en el que se prometía la reforma de la administración ultramarina. En contestación al Mensaje, don Rafael Montoro solicitó que se aplicasen a Cuba en toda su integridad las Leyes Electoral, Provincial y Municipal a fin de establecer la justa igualdad de los españoles de una y otra orilla del Atlántico. En su discurso, Montoro aseguró que Cuba necesitaba gozar de libertad absoluta en su vida local, "limitada, únicamente, por la soberanía nacional".

Por su parte, el Diputado por Puerto rico don Rafael María de Labra se expresó en su intervención en parecidos términos. De acuerdo con ello, Labra se mostraba firme en la idea de defender sus ideales por encima de todo, para lo cual pensaba llevar a la Cámara sus soluciones y sus aspiraciones en forma de

proposiciones de ley. Así, ofrecía como alternativa política la doctrina de la autonomía colonial, cuya idea motriz consistía en la consecución de toda la descentralización compatible con la unidad nacional, lo cual suponía el espíritu descentralizador llevado a la plenitud de sus manifestaciones. Dicha autonomía se presentaba como una autonomía española, es decir, fundada en las tradiciones patrias, en el espíritu de las Leyes de Indias y en las tesis de los más representativos colonistas hispanos. En la actualidad, en lugar de esto, todavía subsistían muchas de las viejas lacras que habían asolado sistemáticamente al mundo antillano y, en especial, la centralización, a la cual se le atribuían todos los males. Era, pues, necesario combatir esta situación, buscando la identidad de los derechos políticos, a fin de que el español fuera uno mismo en la metrópoli y en las Antillas y que éstas gozasen de plenitud en la vida local, cimentando la necesaria unidad en la variedad de las manifestaciones (3).

El señor Villanueva, encargado por la comisión parlamentaria de responder, rebatió los supuestos de Montoro, defendiendo los intereses del Partido Español de Cuba. Por otro lado, el Ministro de Ultramar, Gamazo, mantuvo la posición ministerial en la forma en que demandaban las circunstancias, asegurando que el Gobierno era propicio a todo género de transacciones en beneficio de Cuba, pero que tomaría toda clase de medidas, si se pretendía pasar del régimen autonómico a la independencia. Montoro terminó su intervención sometiendo a votación su enmienda en la que solicitaba la concesión de la "autonomía colonial en toda su pureza"; pero la propuesta fue rechazada por doscientos diecisiete votos de los diputados monárquicos, contra diecisiete de los republicanos y autonomistas (4). De esta forma, "se continuó escatimando derechos a los antillanos, recelando de todo movimiento liberal y empleando, cuando la situación se agravaba, procedimientos de fuerza" (5).

No obstante, antes de terminar las tareas parlamentarias, los autonomistas volvieron a insistir sobre diversos puntos, relacionados con las reformas. Así, Labra presentó una exposición de varios vecinos de Vieques (Puerto Rico), solicitando la abolición de la Ley Electoral, vigente en la isla (6). Poco después, con motivo de la discusión de los presupuestos de Puerto Rico, volvió a pedir para las Antillas la autonomía, basada en la tradición de la Historia colonial española (7), y al día siguiente continuó esta exposición, clarificando ideas con respecto a este punto (8).

Estos conceptos fueron rebatidos por el Marqués de Valdeterrazo, el Ministro de Ultramar, Gamazo, y el señor Lastres. Por último, antes de finalizar la legislatura, Labra presentó una proposición de ley sobre identidad de derechos políticos de los españoles de Europa y América (9) y entró en un turno de réplicas y de contrarréplicas, en el que intervinieron los señores Villanueva, Calbetón, Rodríguez Sampedro y Ministro de Ultramar (10). Por su parte, Montoro presentó un proyecto de Ley sobre organización del Gobierno General de la isla de Cuba, Portuondo dos proyectos de ley para las islas de Cuba y Puerto Rico sobre la reforma del régimen provincial y municipal y de la Ley Electoral, respectivamente, y Ortíz otro sobre la separación de la autoridad civil y militar en ambas Antillas (11).

Poco antes de la muerte del Rey, una Real Orden de 28 de septiembre de 1885 había aprobado la extensión de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada para Cuba y Puerto Rico y completada por otra Real Orden de 27 de Octubre de aquel mismo año. Al parecer, el Ministro de Ultramar estaba empeñado en llevar adelante una tarea reformadora, y de acuerdo con el plan que se había trazado, envió a Cuba al General don Emilio Calleja, favorable a las soluciones de concordia y con sincera confianza

en los naturales, que se convirtió en su brazo ejecutor en la isla.

Durante su estancia en el Ministerio, Gamazo indultó a los cubanos deportados en la Península; extendió a las Antillas el Código de Comercio; con algunas modificaciones y el Régimen de Bolsas y de Cámaras de Comercio, rebajó en un quince por ciento los derechos de importación de las harinas y de los trigos de España; arregló la Deuda cubana mediante la emisión y conversión de bonos; reformó para Cuba la exacción y administración de la venta de sellos y timbres del Estado, y suprimió, como es sabido, el último vestigio de la esclavitud aboliendo el Patronato (12).

Ciertos movimientos republicanos provocaron una crisis ministerial (7 de Octubre de 1886), con motivo de la cual la Reina Regente ratificó en su confianza a Sagasta, que dos días después formó un nuevo Gobierno, en el que figuraba como Ministro de Ultramar don Víctor Balaguer (13). El 17 de Enero de 1887 se iniciaron las sesiones parlamentarias de la Segunda Legislatura, si bien hasta el mes de Abril no hubo discusiones importantes por lo que respecta a las cuestiones ultramarinas.

Aunque se produjeron algunas interpelaciones, como la de Montoro, que preguntó al Ministro de Ultramar sobre las reformas de las Leyes Provincial y Municipal para Cuba y aprovechó su intervención para criticar al Gobierno acusándole de consentir impunemente trampas en la legislación (14), la mayor parte de los debates del mes de Abril giraron en torno al proyecto de ley presentado por Balaguer, por el que se establecía un servicio de comunicaciones marítimas con las provincias de Ultramar a cargo de la Compañía Transatlántica Española, detrás de lo cual, había en juego, como puede suponerse cuantiosas sumas de dinero.

Algunos diputados estimaron que las condiciones estipuladas eran onerosas para el Estado y que la aprobación del proyecto entrañaba serias responsabilidades, pero Camacho, de quien había sido la iniciativa en su anterior etapa de gestión ministerial como titular de la cartera de Hacienda, recabó para sí todas las responsabilidades, al tiempo que Sagasta hizo cuestión de Gabinete la aprobación del proyecto, que tuvo lugar aquel mismo mes de Abril (15). Tampoco fue para Labra una legislatura especialmente intensa esta de 1887 y sus intervenciones, más bien cortas, estuvieron dirigidas a hacer al Gobierno algunas preguntas sobre la política seguida en Cuba (16), la rebaja de los derechos de importación a la Pequeña Antilla (17) y los nuevos presupuestos de Cuba y Puerto Rico (18).

Ya hacía tiempo que corrían graves rumores acerca de la inmoralidad administrativa existente en Cuba, y haciéndose eco de ellos el Diputado Fernández de Castro interpeló al Gobierno sobre este particular (19), siendo tal la cantidad e importancia de los cargos, que Sagasta se vió obligado a suspender las sesiones de ambas Cámaras. Ciertamente, la inmoralidad administrativa cubana era evidente y a ello se unía la insolvencia del Gobierno, que no sólo no otorgaba las reformas en la forma, en que lo pedían los autonomistas, única solución posible, sino que no parecía que fuese a modificar su línea de conducta.

En estas circunstancias, vino a caldear el ambiente el escándalo producido con motivo de ciertas declaraciones hechas por el General don Manuel Salamanca, nombrado para sustituir en la Capitanía General de Cuba a don Emilio Calleja, que había puesto todo su empeño en la realización de una campaña moralizadora de la Administración, pero que al considerarse poco asistido por el Gobierno, había presentado su dimisión (Julio de

1887). A los pocos días de su nombramiento, Salamanca anunció su propósito de terminar con la inmoralidad administrativa en Cuba, afirmando que determinados políticos de Madrid estaban relacionados con ciertos empleados ultramarinos, sospechosos de malversaciones y de otras irregularidades y hablando en términos poco adecuados del Ministro de Ultramar Balaguer (la cosa terminó, posteriormente, con la anulación del nombramiento de Salamanca el 23 de Agosto, que fue reemplazado por el General Sabas Marín) (20).

Por otra parte, en Puerto Rico se habían producido algunas tensiones entre los peninsulares y los liberales puertorriqueños, quienes, dispuestos a reorganizar sus filas y a actualizar su programa, se reunieron en la Asamblea de Ponce, que culminó con la Resolución del 10 de Marzo de 1887, por la que se creó el Partido Autonomista Puertorriqueño, muy inspirado por Labra desde Madrid (21). Sin embargo, aunque las intenciones eran buenas, el Gobernador de la isla, Romualdo Palacios, malinterpretó el sentido de este movimiento, desencadenando una dura represión contra los autonomistas. Por otro lado, el Gobierno, considerando exageradas estas medidas, llamó a Palacios a Madrid, para que explicara su posición y poco después (5 de Enero de 1888) le relevó de su cargo (22).

Otro tema objeto de discusión en las Cortes durante este año de 1887 fue el denominado "asunto Mora", que hacía referencia al pago de indemnización al súbdito norteamericano Antonio Máximo Mora por los daños que había causado en sus haciendas la anterior guerra de Cuba. La cuestión se prolongó durante bastante tiempo, distrayendo la atención de los parlamentarios, y en ella intervinieron, principalmente, el señor Lastres, que se oponía al pago de la mencionada indemnización, y Moret, que por el contrario defendió el derecho de Mora a percibirla (23).

Realmente, la tan traída y llevada inmoralidad administrativa en Cuba pronto pudo ser comprobada, de forma oficial, por el Gobierno de Madrid a través de los partes del General Sabas Marín. En sus comunicaciones al Ministro de Ultramar, Marín hablaba de toda clase de falsificaciones en bonos, nóminas, libramientos, efectos timbrados, billetes de Banco, expedientes, actas, certificaciones, Títulos universitarios, firmas, billetes de lotería, etc. y, además, los expedientes y causas criminales eran confusos y la mayoría de los culpables sufrían una pena menor, de la que les correspondía. Por otra parte, la opinión pública continuaba señalando nombres y apellidos de personas involucradas en estos turbios manejos y muchos de los destinos de Ultramar seguían siendo ocupados por elementos no demasiado escrupulosos. Sobre esta situación administrativa, el panorama sociopolítico no era más esperanzador: el libre desenvolvimiento económico se veía constreñido por el arancel vigente, las deudas abrumaban a la Hacienda, el separatismo era siempre una amenaza a tener en cuenta y el bandololerismo, conectado con aquél, consituía la ruina del propietario rural y el temor del urbano (24).

Este estado de cosas repercutió en el Partido de la Unión Constitucional y se plasmó en una honda crisis en el seno de aquél, que, si bien se refería más a motivos de conducta que a supuestos ideológicos, no por eso dejaba de tener importancia. Así, ante el radicalismo y la intransigencia de buena parte de los miembros del partido, un sector de sus afiliados lanzó un Manifiesto (31 de Marzo de 1888), firmado por importantes personalidades políticas insulares, tales como Ramón Herrera y Arturo Amblard, en el que se pedía que se introdujeran las reformas políticas, económicas y administrativas antes rechazadas por ellos mismos. El Manifiesto centraba el descontento de este grupo en dos razones: una de carácter doctrinal, que reflejaba la

divergencia de pareceres entre el sector conservador y el recientemente desviado gérmen del posterior Partido Reformista, que dentro de la misma línea del asimilismo era más aperturista, y otra de índole práctica, relacionada con las actitudes y con los procedimientos.

Las principales peticiones hacían referencia a los siguientes puntos: aplicación íntegra a Cuba de la Constitución de la Monarquía española y de las Leyes Orgánicas que desarrollaron sus principios; definitiva organización provincial y municipal; modificación de la Ley Electoral vigente; aplicación de la moderna codificación civil, mercantil y procesal; planteamiento del juicio oral y público; especial atención a la Instrucción Pública; sincera formación del anteproyecto de ley de presupuestos; extinción del déficit; reforma arancelaria; recogida de los billetes de la emisión de guerra; alivio de las cargas tributarias, y establecimiento sobre sólidas bases de las instituciones de crédito agrícola (25).

Mientras tanto, los autonomistas, que al objeto de estimular al Gobierno habían declarado que confiaban en que el Partido Liberal cumpliera sus promesas, se dispusieron de nuevo a continuar su batalla en las Cortes. Así, en Febrero de 1888 el señor Giberga preguntó al Ministro de Ultramar sobre la política que pensaba seguir el Gobierno con respecto a Cuba y a Puerto Rico, criticó el proceder de las autoridades y pidió, que se extendiesen a Cuba las libertades de que disfrutaba la metrópoli. En su respuesta Balaguer se limitó a hacer una apología de la política asimilista (26).

Días después, Vergés presentó un proyecto de ley orgánica del Gobierno General de Cuba (27) y en Abril, con motivo de la discusión de los proyectos de ley presentados en la

anterior legislatura por el Ministro de Ultramar, Montoro inquirió igualmente sobre la política gubernamental en las provincias ultramarinas, recalcando que a pesar de las solemnes declaraciones efectuadas, nada se había hecho sobre el particular. El Ministro de Ultramar se defendió como pudo y desmintió a Montoro diciendo que el Gobierno había cumplido lo prometido (28).

Por su parte, Labra, tratando el tema de los presupuestos de Cuba, abordó la cuestión de la autonomía. Según su criterio, el proyecto ultramarino entrañaba tres aspectos: el problema de la esclavitud, el problema político relativo a las libertades públicas, y el problema propiamente autonomista. Este último suponía un planteamiento de organización local, que afectaba a la vida municipal, provincial e insular y determinaba las relaciones de las provincias de Ultramar con la metrópoli.

Previo a todo ello, había sido el problema de la abolición, próximo ya a resolverse en sus últimos extremos. Las cuestiones de las libertades públicas, que entrañaban el problema de la dignificación de los ciudadanos antillanos, era preciso asentarlas sobre bases sólidas, a fin de que pudieran ponerse de manifiesto las necesidades de aquellos pueblos. Y, por último, estaba el tema de la autonomía, que recogía toda la problemática de las relaciones de la metrópoli con sus provincias ultramarinas y que incluía todo lo relativo a los servicios, a su modo de constitución y a su grado de abandono. En todo caso, era ineludible un sentido de radical descentralización, si es que se quería el desarrollo y la prosperidad de las Antillas. El separatismo no constituía en aquellos momentos un peligro serio. Ciertamente, existían separatistas, como los había en todas las colonias, pero no era verdad que formasen parte del Partido Autonomista. Dicho partido sostenía una tesis contraria y no era

lícito dudar de su sinceridad ni desorientar a la oponión con equívocos ni sorpresas. El Partido Autonomista jamás ampararía ideas e intereses incompatibles con su sentimiento de la integridad nacional. Realmente, se había dado en los últimos tiempos un avance en el orden político, pero no era menos cierto que ese avance no era completo y que se necesitaban más reformas, sin las cuales las conquistas realizadas no serían más que una causa de perturbación. Por esta razón era urgente la supresión del gobierno militar, la realización de una reforma electoral amplia y la potenciación de la vida provincial y municipal (29).

Dentro del autonomismo se contemplaban los problemas de la organización colonial, que incluían los aspectos relativos a la organización municipal y provincial, ámbitos estos que debían ser considerados elementos separados, pero incluídos en la totalidad de la nación (30). No se podía dar libertades a las provincias de Ultramar y negarlas al resto de la nación. Así, la idea de la autonomía como afirmación de la competencia individual, peculiar al sujeto que actúa en su círculo propio, había que aplicarla a todas las esferas de la actividad, por lo cual a dicha autonomía individual era preciso añadir la autonomía municipal, regional y colonial. Dentro de este contexto, convenía aclarar el significado de la palabra colonia. Este término, aplicado a una región determinada, indicaba un modo de vivir y de constituirse distinto del modo de vivir y de constituirse de la sociedad metropolitana.

Con el sistema autonomista se lograba, pues, descargar a la metrópoli de responsabilidades innecesarias y atribuir a las provincias ultramarinas la satisfacción oportuna, eficaz y urgente de sus necesidades. Ello suponía, además, sacar del Parlamento lo que constituían intereses, verdaderamente locales, con lo que se regulizaban las funciones de aquél. De esta forma,

se debía mantener como competencia de dicho Parlamento lo que era de interés general, aceptando la intervención de las Antillas por medio de la representación insular, para que se pudiera exigir la responsabilidad, tanto allí como aquí, por medio de la discusión política (31). Antes de terminar la legislatura, todavía planteó Labra dos cuestiones más, relativas a la extensión del bandolerismo en Cuba, que fueron contestadas por el Ministro de Ultramar, señor Ruíz Capdepón (32).

En Junio, Montoro volvió a interpelar al Gobierno, insistiendo en que continuaba sin cumplirse lo relacionado con la reforma electoral, la reforma arancelaria, el juicio oral y público, la reforma administrativa, etc. El encargado de responderle, don Trinitario Ruíz Capdepón (que con motivo de una reorganización ministerial efectuada por Sagasta a mediados de Junio, había sustituido a Balaguer como Ministro de Ultramar) le contestó con evasivas, y escudándose en tecnicismos legales indicó que en unos casos los asuntos estaban en estudio y que en otros no se habían reunido aun las comisiones pertinentes (33).

No trajo mejor suerte para los autonomistas el inicio de la Cuarta Legislatura (30 de Noviembre de 1888), que coincidió con un nuevo cambio ministerial que puso la cartera de Ultramar en manos del ya experimentado Manuel Becerra. A los pocos días de iniciadas las sesiones, el señor Lastres presentó una serie de exposiciones de varios pueblos de Puerto Rico, solicitando que se fijase, de una vez, el sentido del artículo 89 de la constitución con objeto de aplicar a aquellas provincias las leyes dictadas para el resto de la nación (34). El señor Giberga, por su parte, intervino para interesarse por la división territorial de Cuba y aprovechó la ocasión para echar en cara al Gobierno las incumplidas promesas, alegando que los Ayuntamientos y las Diputaciones, lejos de ser democráticos, eran utilizados por las

se debía mantener como competencia de dicho Parlamento lo que era de interés general, aceptando la intervención de las Antillas por medio de la representación insular, para que se pudiera exigir la responsabilidad, tanto allí como aquí, por medio de la discusión política (31). Antes de terminar la legislatura, todavía planteó Labra dos cuestiones más, relativas a la extensión del bandolerismo en Cuba, que fueron contestadas por el Ministro de Ultramar, señor Ruíz Capdepón (32).

En Junio, Montoro volvió a interpelar al Gobierno, insistiendo en que continuaba sin cumplirse lo relacionado con la reforma electoral, la reforma arancelaria, el juicio oral y público, la reforma administrativa, etc. El encargado de responderle, don Trinitario Ruíz Capdepón (que con motivo de una reorganización ministerial efectuada por Sagasta a mediados de Junio, había sustituido a Balaguer como Ministro de Ultramar) le contestó con evasivas, y escudándose en tecnicismos legales indicó que en unos casos los asuntos estaban en estudio y que en otros no se habían reunido aun las comisiones pertinentes (33).

No trajo mejor suerte para los autonomistas el inicio de la Cuarta Legislatura (30 de Noviembre de 1888), que coincidió con un nuevo cambio ministerial que puso la cartera de Ultramar en manos del ya experimentado Manuel Becerra. A los pocos días de iniciadas las sesiones, el señor Lastres presentó una serie de exposiciones de varios pueblos de Puerto Rico, solicitando que se fijase, de una vez, el sentido del artículo 89 de la constitución con objeto de aplicar a aquellas provincias las leyes dictadas para el resto de la nación (34). El señor Giberga, por su parte, intervino para interesarse por la división territorial de Cuba y aprovechó la ocasión para echar en cara al Gobierno las incumplidas promesas, alegando que los Ayuntamientos y las Diputaciones, lejos de ser democráticos, eran utilizados por las

mismo sentido, por Real Decreto de 23 de Noviembre de 1888, se publicó para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con ligeras modificaciones, la Ley de 13 de Septiembre de ese año sobre el ejercicio de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, disposición que se vió completada por una Real Orden del 17 de Agosto de 1889. Por su parte, el Real Decreto de 31 de Julio de 1889 extendió a las Antillas sin restricciones el Código Civil, y el Real Decreto de 7 de Enero de 1891 aplicó a Cuba la Ley de Organización Judicial, por la que la isla quedó dividida en tres Audiencias Territoriales, tres de lo Criminal y treinta y siete Juzgados de Instrucción, aunque continuó en vigor hasta 1894, y algunas incluso después, una serie de anticuadas disposiciones tales como el Reglamento Orgánico de Empleados, del 3 de Junio de 1860, el Real Decreto Provisional del 9 de Junio de 1878 sobre los Gobiernos Superiores de las islas, el Real Decreto del 7 de Julio de 1861 sobre Consejos de Administración, etc (37).

Así, pues, no era que el Gobierno no diese disposiciones ni tomase medidas; lo que ocurrió es que éstas fueron más teóricas que otra cosa, no pasando muchas veces del papel; que, cuando se aplicaron, en muchos casos ya era tarde; que no siempre se pusieron en práctica con absoluta sinceridad y que, en definitiva, constituyeron, en todo caso, reformas administrativas que poco podían contentar ya a los autonomistas, para quienes, en realidad, la única solución estaba en una reforma política profunda y sincera. Fiel reflejo de este pensamiento fueron las palabras de Labra, quien en los años 90 dijo al respecto: " casi todas las Leyes y los Decretos se informan no sólo en el principio de la especialidad, sino en el error de la inferioridad política y administrativa. Lo que se sostiene todavía en Cuba y en Puerto Rico es ya una antigüalla o una monstruosidad, que debiera avergonzarnos" (38).

No obstante, a pesar de todos los problemas y de todas las dificultades, proseguía la lucha de los autonomistas en las Cortes, aunque ya se iban vislumbrando la desilusión y el desánimo. Así, en Enero de 1889 Labra preguntó sobre la labor de la comisión creada para proponer las reformas que debían hacerse en Cuba, y sobre la recta aplicación de la Ley de Asociaciones en Puerto Rico (39), a lo que se le contestó con evasivas; y en Febrero, inquiriendo sobre el régimen municipal seguido en Cuba, criticó la situación general antillana, que calificó de mala (40). En este mismo sentido volvió a reiterar su pregunta sobre el régimen municipal seguido en Cuba y en Puerto Rico (41) y, asimismo, intervino para interesarse sobre la reforma de la Ley Electoral para ambas Antillas (42).

Por su parte, con motivo de la discusión del proyecto de Ley Electoral para Cuba y Puerto Rico, presentado por el Ministro de Ultramar en la legislatura anterior, Montoro interpeló a dicho titular sobre este asunto, manifestando que el ejercicio electoral estaba siendo boicoteado y que esto, como otras muchas cosas, resultaba intolerable (43). En Julio, Labra mantuvo una discusión con el Ministro del ramo sobre la necesidad de tratar los presupuestos de Ultramar, lo que provocó, además, la intervención de los señores Romero Robledo y Conde de Toreno en apoyo del Gobierno (44), y todavía en Noviembre hizo una pregunta relativa a la situación de los municipios de Puerto Rico (45).

Nuevas disidencias y contraposiciones personalistas pusieron otra vez en situación crítica al Gobierno de Sagasta, que, por fin, consiguió obtener de nuevo la confianza regia, tras lo cual rehizo el Gabinete (15 de Enero de 1890), en el que Becerra quedó confirmado en su puesto. Las Cortes se acercaban ya a su término, pero antes de acabar sus sesiones volvió a surgir

el tema de la inmoralidad administrativa en Cuba, del que se hizo eco el autonomista señor Vergés, que interpeló al Gobierno sobre el particular (46).

Por su parte, Labra interpeló de nuevo al Gobierno sobre diversas cuestiones: situación de los municipios de Puerto Rico (47); reforma de ciertos artículos del Código Penal en ambas Antillas (48), y comisiones relativas a proyectos o proposiciones de ley para la organización del Gobierno en Cuba y en Puerto Rico (49). Unos días después, el propio Labra volvió a intervenir, solicitando el sufragio universal para las Antillas. Realmente, el progreso y el desarrollo de Ultramar estaba intimamente relacionado con la realización de una gran política internacional, destinada a arraigar y a extender la influencia que España debía tener en América y, por su conducto, en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la administración interior de las Antillas, sumida en un anacrónico sistema de gobierno militar, dejaba mucho que desear. En relación con esta cuestión, destacaba el tema de la legislación electoral antillana, que constituía una gran discriminación, tanto por las condiciones que exigía al elector, cuanto por lo que se refería a la propia economía de la participación, que allí descansaba en el principio de a mayor arraigo, mayor representación, contra todo lo conocido en la materia (50).

Dentro del marco de la política colonial, el autonomismo siempre había tenido en cuenta tres puntos. Primero, la identidad de los derechos políticos y de las condiciones de la ciudadanía en las Antillas y en la Península, no sólo en el sentido de asegurar a los antillanos el mayor número de franquicias, sino para interesarlos directamente en la política general de la nación. Segundo, la exclusividad fuera de la competencia de la burocracia, de las corporaciones populares en

todos los negocios locales, como medio de asegurar la adecuada atención hacia las necesidades especiales. Tercero, la cesión por parte del Gobierno de la Península de un grupo de responsabilidades respecto de cosas que desconocía o cuya atención le era imposible. También tenía una gran importancia la ampliación del número de diputados ultramarinos, para que ninguna opinión, elemento político o grupo de cierto carácter quedase excluido, a fin de que todos ellos se sintieran identificados con "la política general de la Madre Patria y con todo lo que constituía el verdadero interés nacional" (51).

En tal sentido, "el excluir en estos momentos a las Antillas españolas, es decir, a aquellas siete provincias (como la Constitución y las Leyes Orgánicas decían), del goce del sufragio universal, con que ahora aquí se obsequiaba al resto de las provincias, que constituían el Imperio de España, implicaba un verdadero agravio, porque de no atribuir esta diferencia a un propósito estrecho de dominación artificial y de unos elementos españoles por otros sin más títulos, que el de la procedencia, resultaba el supuesto de la inferioridad moral, intelectual y social de los habitantes de Cuba y de Puerto Rico" (52).

En Abril, Labra planteó el tema de la reforma de la Ley Electoral, lo que le llevó a entrar en un amplio debate, prolongado a lo largo de todo el mes. Ciertamente, tenía una gran fuerza, desde el punto de vista pedagógico, el ejercicio del sufragio y la práctica regular de los derechos cívicos. En ese sentido, en Ultramar muchas gentes seguían una dirección de distanciamiento y de crítica, distraídos por intereses materiales o influidos por la duda derivada de la decepción, del pesimismo o de otras causas. De acuerdo con ello, era necesario hacer entrar a todas estas personas en la corriente de las ideas y de los intereses de la auténtica política, imponiéndoles una mayor

responsabilidad por la participación en la resolución de todas las cuestiones inherentes al ámbito colonial. La gente, en general, tenía que darse cuenta de que muchas reformas no eran posibles; que otras no eran tan acertadas como se pudiera creer; que algunas, que en el terreno de la ciencia y de la crítica se estimaban como buenas, podían traer perjudiciales resultados en la práctica, y que para adelantar en el orden político había que contar con muchos elementos e intereses que embarazaban la marcha del proceso.

Por otra parte, constituía un elemento importantísimo el que llegase el mayor número de diputados, representando las opiniones más extremas y más radicales, tanto de la derecha como de la izquierda, por la apertura de posibilidades que ello suponía. Por eso, se debía dilatar y ensanchar el colegio electoral ultramarino por todos los medios necesarios, a fin de que se reunieran las representaciones más encontradas y tuviesen garantía todas las manifestaciones de la opinión, motivo por el cual se necesitaba extender el sufragio universal, tanto a Cuba como a Puerto Rico (53).

Al día siguiente, Labra puntualizó algunos aspectos relativos al autonomismo. El principio de la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional suponía la aceptación de todos los datos y de todos los antecedentes de la Historia Colonial. Sin embargo, era preciso distinguir lo que correspondía a las exigencias de los tiempos, de lo que respondía a los principios constantes del Derecho, que habían de tenerse en cuenta en vista del movimiento y de las experiencias de todos los países coloniales. Por eso se afirmaba la unidad de los derechos políticos, la unidad parlamentaria y la descentralización sin más límite que lo que pudiera contrariar a la unidad del Estado. Esta exposición fue contestada por Calbetón y rectificada por Villanueva (54).

Dos días más tarde, Labra continuó perfilando sus ideas en relación con el tema. Según el credo autonomista, la colonización moderna mantenía la representación de los países coloniales en el Parlamento Nacional en las condiciones generales de todas las comarcas, provincias y regiones de la metrópoli, ya que el derecho al sufragio había dejado de ser una franquicia local para entrar en el grupo del derecho común y de las libertades necesarias (55).

Para solucionar las cuestiones políticas coloniales se podían seguir dos caminos: uno, moderno (la solución autonomista absoluta o británica) y otro, trasnochado (la solución unificadora y centralizadora de España, Francia y Portugal). Evidentemente, un sistema representaba el porvenir, el otro suponía el más estrepitoso fracaso. Estas afirmaciones fueron contestadas por el señor Lastres y rectificadas por Labra, tras la intervención del señor Rodríguez Sampedro (56). Por último, la discusión se prolongó a lo largo de unos cuantos días más, provocando la intervención de varios diputados (Rodríguez Sampedro, Villalba Hervás, Celis Aguilera, Calbetón, Becerra Ministro de Ultramar, Alcalá del Olmo, Soto y Cassola), tras lo cual se dió por concluido el debate (57).

En Marzo de 1889, olvidado ya el incidente que le había inhabilitado dos años antes, el General Salamanca fue nombrado para suceder en la Capitanía General de Cubal al General Marín. Salamanca intentó buscar el apoyo de los naturales para lo que tomó contacto con ellos, visitando las poblaciones de la isla, hablando con las gentes y haciéndose cargo de sus necesidades, lo que le hizo bastante popular, máxime cuando a esto unió la corrección de algunos abusos.

En líneas generales, el mando de Salamanca no fue malo

y la situación hasta su muerte, acaecida en Febrero de 1890, aunque un tanto enrarecida, se mantuvo dentro de unos límites aceptables. Mientras tanto, en la Península parecía que se acercaba el momento de la vuelta de los conservadores al poder, lo que ocurrió poco después (5 de Julio de 1890). Con la llegada de Cánovas a la Presidencia de Consejo, accedió al Ministerio de Ultramar Antonio María Fabié (58), al tiempo que en Cuba el General Chinchilla, que en Marzo había cubierto la vacante dejada por Salamanca, presentaba su dimisión ante el cambio político peninsular y era nombrado en su lugar don Camilo Polavieja.

A la llegada de Polavieja a Cuba se perfilaba ya un futuro descorazonador: crecía el separatismo, el desánimo iba invadiendo a los autonomistas y se desarrollaba la división en el seno de la Unión Constitucional, uniéndose a todo ello el aumento del bandolerismo y una deficiente situación económica, de la que formaban parte las cada vez más corrientes consolidaciones de la Deuda y los recién implantados aranceles proteccionistas de algunos países europeos y de Estados Unidos, que dificultaban la exportación del tabaco y del azúcar cubanos e intervenían directamente en la crisis agraria que padecía la isla (59).

En el tiempo transcurrido desde el Zanjón, la mentalidad política de Cánovas con respecto a Ultramar no había variado demasiado. El jefe del Partido Conservador seguía pensando que los criollos tanto tiempo pendientes de la resolución de los poderes públicos metropolitanos, no poseían la capacidad suficiente para el gobierno propio y que la unidad política podía preservarse con la sólo fuerza de los medios coercitivos. Si el separatismo volvía a hacer acto de presencia, sería reducido por la fuerza, con lo cual se apoyaba a los intransigentes de la Unión Constitucional, lo que redundaba en provecho de los intereses partidistas conservadores (60). Ante

esta situación, los autonomistas cubanos, desilusionados por completo, decidieron expresar su protesta mediante el retraimiento electoral, lo que en cierta manera daba la razón a los separatistas, quinenes siempre habían pensado que la única solución era la lucha armada.

Así, pues, de acuerdo con la decisión tomada sobre las elecciones generales que debían celebrarse a primeros de Febrero de 1891, el Partido Autonomista hizo público un Manifiesto (7 de Enero de 1891), en el que anunció su retraimiento, de conformidad con lo acordado por su Junta Directiva, presidida por el abogado don Jose María Gálvez. Por su parte, el Partido de la Unión Constitucional, que, desde el fallecimiento del Conde de Casa-Moré en Octubre de 1890, estaba presidido por el Conde de Galarza, libre de la oposición autonomista, se dispuso a ocupar todos los puestos representativos.

De cara a las elecciones, el Conde de Galarza, en circular de 20 de Diciembre, concretó las aspiraciones de la Unión Constitucional en los siguientes puntos: rebaja de los derechos que venía satisfaciendo el tabaco en su importación a Estados Unidos; adquisición de nuevos mercados para los frutos cubanos, mediante Tratados Comerciales con las Repúblicas hispanoamericanas; facilidades para el consumo de tabaco de Cuba en la Península; reforma del arancel, y supresión y rebaja de los derechos que satisfacían en España los azúcares y aguardientes cubanos.

A su vez, los autonomistas, en Manifiesto de 1 de Abril de 1891, volvieron a hacer patentes sus deseos de autonomía, solicitando "la identidad de derechos civiles y políticos para los españoles de uno y otro Hemisferio" (61). Por su parte, los autonomistas puertorriqueños redefinieron sus supuestos

ideológicos, concretándolos en las enmiendas aprobadas en la Asamblea de Mayagüez, en Mayo de 1891, que modificaban en algunos de sus puntos el primitivo Programa de Ponce, de Marzo de 1887 (62).

Al mismo tiempo, Labra, en la Introducción a una publicación sobre la reforma electoral en las Antillas, en la que recogía una serie de discursos pronunciados en el Congreso de los Diputados en 1890, realizó un estudio relativo a la política antillana llevada a cabo por la metrópoli. Según la opinión general, las cuestiones relacionadas con Ultramar no se desarrollaban de forma adecuada, por lo que se hacía necesario que todos los implicados en estos asuntos contribuyesen, en la medida de sus recursos y desde sus respectivas posiciones, al planteamiento del problema en términos de una pronta y satisfactoria solución, y a la formación de una opinión pública fuerte, cuyas determinaciones se impusiesen a los egoísmos locales, armonizando definitivamente la política colonial española con el sentido del nuevo Derecho Internacional, con los compromisos del mundo contemporáneo y con las exigencias del medio americano, donde radicaban las Antillas y donde vivían millares de españoles (63).

En realidad, los males de Ultramar no eran mayores que los soportados por otros países análogos, aunque sí suficientes para producir la ruina de Cuba y de Puerto Rico y con ello un gravísimo quebranto material para la Península, así como un daño incomparable en el orden del prestigio, de la representación y el honor de la patria. No obstante, todavía existían muchos medios de vencer las dificultades presentes, si bien era preciso entender adecuadamente qué influencias dominaban las cuestiones antillanas, qué intereses las afectaban, qué personas las estudiaban, qué partidos las consideraban y qué corrientes las

favorecían o contradecían, unido todo ello a otros dos factores decisivos en la materia: las necesidades de las propias Antillas y la voluntad de sus habitantes para hacer los sacrificios precisos para el logro de aquellos deseos dentro de las consideraciones de prudencia exigidas por las condiciones del terreno en que se operaba (64).

De acuerdo con ello, el problema colonial no era ni podía ser una cuestión aislada o un asunto puramente local. Por eso, la autonomía suponía la aceptación de la nacionalidad española e implicaba la unidad del Estado, ya que en el orden constitucional era imposible sacar por completo la vida política antillana de las bases y de las condiciones de la vida total de España. Por eso afirmaba la identidad de los derechos políticos, la representación parlamentaria y la participación de las provincias ultramarinas en la responsabilidad del presupuesto general en proporción a sus fuerzas.

Asimismo, la autonomía pedía una descentralización mayor que la de los municipios y provincias de la Península, tanto en el orden administrativo y económico como incluso en el político, aunque también se aceptaban mayores cargas, teniendo en cuenta la necesidad de no perjudicar la Hacienda metropolitana y reconociendo las diferencias que resultaban de la lejanía y de la interrupción de los territorios. A su vez, como ya se había indicado en muchas otras ocasiones, la citada descentralización debía ser lo más amplia posible en tanto en cuanto fuera compatible con la unidad nacional, entendiendo por ésta la unidad política.

Para el logro de estos supuestos, los autonomistas, como hombres prácticos, tenían que colocarse en el terreno y moverse dentro de la política nacional, utilizando sus medios y

sometiéndose a sus condiciones, hasta donde consintiesen la situación particular de las Antillas y la graduación y el valor relativo de sus pretensiones y de sus derechos. En este contexto, aparecían como medios eficaces para la consecución de estos propósitos, la prensa propia, sin menoscabo de otros medios de divulgación, y la representación de las provincias de Ultramar en las Cortes, siendo este último el recurso más poderoso de que podían disponer las Antillas para influir en la metrópoli (65).

Dentro ya del ámbito concreto de la representación parlamentaria, Labra estimaba de capital importancia el afianzamiento de tres puntos. Primero, lograr una posición perfectamente definida, prescindiendo por completo tanto en la palabra como en la conducta, de cualquier clase de equívocos y manteniendo, en oposición a todo aparato doctrinal y a toda preocupación retórica, el carácter gubernamental en el sentido de obtener soluciones inmediatas y prácticas. Segundo, insistir en la acción con perseverancia, dirigiendo los mejores esfuerzos a la vigilancia del exacto cumplimiento de las leyes, a la determinación de sus elementos complementarios, invocando la lógica de los principios, y a la facilitación de la reforma por medio de inteligencias y de transacciones, siempre que no comprometiesen el objetivo final. Tercero, dedicarse en especial a los problemas de la vida interior antillana, sobreponiéndolos a las cuestiones genéricas (66).

Precisamente, uno de los puntos que adolecía de menor adelanto lo constituía el relativo a la vida económica y, sobre todo, administrativa de Ultramar. En este sentido, podía actuarse reduciendo el carácter exclusivamente político y de generalidad económica que hasta entonces había tenido la campaña autonomista; dedicando la mayor parte de la atención y del esfuerzo al problema interior administrativo y financiero de las Antillas;

destacando los fallos que aquejaban a la vida municipal; evidenciando las deficiencias de la Administración en lo referente a los servicios locales e insulares, y poniendo a los Ministros de Ultramar, por medio de una fiscalización diaria y de una reclamación constante, en la obligación de tener que reconocer publicamente la imposibilidad de dirigir desde Madrid los asuntos ultramarinos, lastrados, por otra parte, por el peso de una burocracia inoperante.

Sin embargo, la tarea se presentaba ingente, dado el estado material y económico de las Antillas, el abandono de sus caminos y de sus ciudades, el descrédito de los municipios, el arraigo del caciquismo, la extensión de la miseria, el predominio de la incuria, etc. Frente a todo esto, se hacía preciso resaltar la impotencia en que se hallaban no sólo los centros administrativos peninsulares, sino también los antillanos para luchar con eficacia contra esta situación, que contrastaba cada vez más con la existente en los países vecinos (67).

No obstante, todo esto se debía discutir con método, con prudencia y con voluntad de llegar a resultados concretos, huyendo de las rivalidades y de la exageración de las pretensiones y teniendo presente que las cosas no se solucionaban bien y a tiempo, desde lejos; que nada era posible ya sin la cooperación de los ciudadanos y sin la extensión de la libertad, y que tanto en Cuba como en Puerto Rico no se perseguía otra cosa sino que allí se reconociese, dentro de las condiciones especiales de la comarca, el derecho de atender por sí mismos sus propios asuntos (68).

Mientras tanto, en las Cortes y a pesar del retraimiento autonomista, no dejaron de discutirse los problemas ultramarinos. El propio Labra intervino para poner de relieve

nuevamente la problemática ultramarina. Siempre las colonias habían llegado al mundo de la cultura y al goce pleno de los derechos, gracias a la dirección y al amparo de sus metrópolis, que habían llevado a aquellos países sus instituciones, progresos y adelantos. Por eso mismo, debía extenderse a Ultramar la corrección más exquisita en la práctica electoral, a fin de que no se produjese el desaliento en favor de las tentativas y de los ensayos, acompañada de una pronta solución del problema económico y en especial arancelario por las implicaciones internacionales que este último comportaba.

Estas afirmaciones fueron contestadas defendiendo el punto de vista gubernamental, por el Ministro de Ultramar, Fabié, tras una intervención del señor Lastres (69). En cualquier caso, lo más grave para la política ultramarina en aquel momento era el retraimiento unido al peligro del separatismo, (70), ideas que volvieron a ser expuestas un mes después, en su Contestación al Discurso de la Corona (71). Por su parte, en Abril Calbetón pidió al Ministro de Ultramar que se remitiesen al Parlamento los documentos necesarios para aclarar las cuestiones relativas a la política económica y administrativa del Gobierno en Cuba y en Puerto Rico (72) y repitió su petición al mes siguiente (73); por su parte, en Junio Labra presentó un proyecto de ley sobre la reforma del Código Penal vigente en las Antillas (74).

Cerrando este periodo, se desarrolló, durante los últimos días de Junio y primeros de Julio, un interesante debate con motivo del Acuerdo Comercial que se venía negociando con Estados Unidos, que puso de manifiesto los problemas existentes al volver a tratar el tema de la gestión gubernamental en Ultramar. El señor Moya interpeló al Gobierno, indicando que los periódicos no daban ninguna noticia de los debates parlamentarios, la mayoría de los cuales no servían absolutamente

para nada, mientras que en Ultramar la situación era desastrosa, puesto que no se cumplían las promesas, y cuando ello tenía lugar se tergiversaba el planteamiento primitivo de tal forma que se le daba un sentido distinto al inicial.

El Ministro de Ultramar contestó que el Gobierno había hecho lo que había podido. El señor Lastres replicó al señor Moya en nombre del Partido Incondicional de Puerto Rico, y el señor Perez Castañeda exigió que se llevasen a cabo de una vez las reformas (75). Al día siguiente, Figueroa atacó al Ministro de Ultramar, al que tachó de moverse dentro de los convencionalismos y le exigió que expusiese la realidad sin deformaciones. En su intervención, González Olivares dijo que había que abandonar el miedo y afrontar los problemas, cuya falta de solución había provocado, entre otras cosas, el retraimiento del autonomismo cubano y, casi, el del puertorriqueño (76).

En otra sesión se discutió la cuestión del autonomismo, interviniendo los señores Martín Sánchez, que defendió al Partido Incondicional de Puerto Rico y a su política asimilista; Rodrigáñez, que indicó que lo importante era hacer cumplir las leyes; Alfau, que recalcó que las doctrinas autonomistas no comprometían, en modo alguno, la integridad de la patria, y Alvarez Prida, que dijo que era preciso que se diesen menos oposiciones de partido y que se estudiasen más y mejor las cuestiones (77). Continuando con el mismo tema, Galbis expuso que la autonomía significaba separación y que eso era lo que lastraba al Partido Autonomista (78). Por su parte, Villanueva adujo que el retraimiento autonomista era fatal y que la culpa de todo la tenía el Gobierno, que había torpedeado la acción parlamentaria de los representantes antillanos (79).

Ya dentro del mes de Julio y prosiguiendo las

discusiones, Vicenti echó en cara al Ministro de Ultramar los fallos de su gestión; el Conde de Torrependo defendió al Partido Incondicional de Puerto Rico; Becerra dijo que los problemas eran muchos y complejos; Bosch y Labrús intervino para apoyar al Ministro de Ultramar y defender, de paso, los intereses catalanes en Cuba, y en igual sentido se manifestó el señor Sard y de Roselló (80). Volviendo al tema de las reformas, Carvajal indicó que la vida insular propia era un peligro. Labra, por su parte, manifestó que no era posible contrarrestar la marcha de los acontecimientos y que las reformas se imponían. Ciertamente, las circunstancias actuales exigían todavía una mayor preocupación por los problemas ultramarinos, dada la importancia que éstos habían adquirido ultimamente.

Desde el punto de vista de los tratadistas, el Derecho Colonial no se incluía dentro del Derecho Privado, sino que formaba una materia aparte entre dicho Derecho y el Internacional, y en este sentido los principales problemas españoles se suscitaban en el golfo de México, donde se encontraban las islas de Cuba y Puerto Rico. Por último, se estaba verificando un fenómeno de concentración de los pueblos hispanoamericanos frente a la influencia avasalladora de Estados Unidos, con el correspondiente movimiento de reincorporación, atracción o aproximación de los antiguos reinos independientes hacia el centro de la Madre Patria. Por todo ello, las cuestiones de la política ultramarina no podían quedar relegadas al olvido, ya que afectaban a la propia representación, "a todo nuestro fastuoso pasado y a todo nuestro espléndido porvenir" (81). Asimismo, constituía también un grave peligro el hecho de resolver las cuestiones ultramarinas de acuerdo con dos criterios equivocados: uno, el de una consideración puramente mercantil; el otro, el de una valoración exclusivamente local (82).

En otro género de cosas, pensaba Labra que la política colonial suponía uno de los aspectos más importantes y de mayor alcance para los pueblos que habían desarrollado una labor colonizadora, motivo por el cual debían ser considerados pilares fundamentales de la acción política universal. Por esta razón, se oponía a la política particularista, que tan extendida estaba en las Antillas y que perjudicaba a todos en general y, en especial, a los autonomistas por las circunstancias y condiciones particulares allí existentes.

Por otra parte, se suscitaba una serie de problemas en torno a la postura de los partidos, que podían articularse alrededor de tres principales supuestos: posibilidad o no, por parte de los partidos peninsulares, de extender su propio criterio a las cuestiones ultramarinas; flexibilidad de acción de los partidos antillanos de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos, y absorción o no, de esto últimos en la política peninsular. A su vez, dentro de esta dinámica se contemplaban dos soluciones: una, de sentido acentuadamente conservador dentro de la doctrina general, representada por la fórmula defendida por la Unión Constitucional, y otra, que suponía una relativa anticipación de las ideas y de las soluciones liberales y descentralizadoras, si bien ambas se oponían, de manera más o menos radical, a la autonomía.

Respecto del credo autonómico, éste defendía que el poder soberano residía íntegramente en la nación sin posibilidad de compartirlo con cualquier otra entidad o de delegarlo en ninguna clase de centro político o de corporación local. Sin embargo, por debajo de esto se tenía que considerar las diferentes esferas de la vida social y los varios modos de gobierno del pueblo, por lo cual se imponía la necesidad de reconocer los diversos círculos de actividad y de intereses y sus

modos de atenderlos. Precisamente, uno de estos círculos era el colonial, caracterizado por razones, circunstancias y condiciones que no eran las de la nación en su totalidad, aunque se dieran dentro de ésta y bajo sus poderes, ni las que distinguían y caracterizaban a la región o a la provincia, por más que tuvieran grandes analogías con ellas.

Provincias y colonias eran cosas distintas para los autonomistas, según los cuales unas y otras debían regirse interiormente de distinto modo dentro de la unidad nacional y de acuerdo con una serie de principios comunes. No obstante, dicha unidad se veía atacada no sólo mediante prácticas que comprometían las fuerzas del poder central, sino también por la adulteración en las provincias de Ultramar de las libertades públicas y de los derechos de la ciudadanía española.

Por otro lado, a la diversidad de intereses y de atenciones correspondían instituciones adecuadas, que tenían que determinarse conforme a la fórmula, acuñada por el autonomismo, según la cual la "descentralización debía ser compatible con la unidad de la Patria", y dentro de estas instituciones, que debían garantizar la vida local, figuraba en lugar destacado la Cámara Insular o Asamblea Colonial, que constituía la consagración explícita de la competencia local para la atención de los negocios de Ultramar. Por último, la política ultramarina debía afirmarse en dos ideas: la primera, en el mayor ensanchamiento de la vida local; la segunda, en la identidad de derechos y en la plenitud de la ciudadanía, de tal forma que "el español de aquí fuese en toda su plenitud y en todas sus condiciones el mismo español en las Antillas" (83).

En otro momento, León y Castillo insistió en que el gobierno autónomo era una solución peligrosa, y Cánovas,

rebatendo a Labra, contestó que la falta de paz material y la desconfianza constantes entorpecían toda labor, que ante todo era precisa una completa pacificación y que antes de pedir nada los autonomistas debían convencer a todos los españoles, de que en ellos no quedaba ninguna sombra de separatismo (84). Días después, Romero Robledo atacó claramente el autonomismo (85), al contestar al señor Muro, quien insistió en que dicho movimiento no quebrantaba la unidad nacional.

En su intervención del día 7 de Julio, Labra criticó la, a su juicio, evidente descomposición del Partido Conservador ultramarino, a la que se unía la profunda desconfianza respecto del Partido Liberal Autonomista antillano. Según la postura gubernamental, el problema planteado en las Antillas era de índole esencialmente económica, aunque no exclusivamente mercantil, mientras que según su criterio la cuestión revelaba una grave crisis política y social, dentro de cuyo ámbito era preciso tener en cuenta el valor del separatismo, fenómeno que había existido siempre en todas las colonias como exageración de la propia personalidad y que podía constituir un factor político o, simplemente, un elemento de crítica y de protesta. En cualquier caso, el Partido Autonomista antillano había prestado grandes servicios a la patria, tratando de llevar con su palabra la reflexión al ánimo de aquéllos que creían, erróneamente, que era imposible la libertad en Ultramar con su adhesión a España (86).

Al día siguiente, Labra continuó con su exposición en un intento de aclarar posturas con respecto al autonomismo. De acuerdo con ello, opinaba que la autonomía colonial afirmaba dos cosas: de una parte, la existencia de la autonomía misma, y de otra, la aplicación de esta noción a la colonia. La autonomía significaba vida propia, al tiempo que la colonia implicaba una

sociedad secundaria y subalterna dentro de otra superior, a la cual se refería la soberanía. De esta forma, si bien había que afirmar la vida propia de aquellos países a que se refería el concepto, había que hacerlo relacionándola con otra más vigorosa y comprensiva, dentro de la cual se movía la colonia. Esta idea, que admitía diversos grados y tendencias, se concretaba de manera explícita en la fórmula: "toda la descentralización compatible con la unidad del Estado y con la integridad nacional".

Dentro de este contexto, las Antillas españolas no sólo tenían una especialísima situación geográfica y una historia bastante distinta de la generalidad de las colonias, sino que, por muy diversas circunstancias, ofrecían originales caracteres sociológicos y constituían supuestos muy concretos en la vida internacional, ya que representaban los últimos vestigios del poder europeo en América y eran el punto de confluencia de las directrices sajona y latina de la civilización occidental.

Así, pues, mientras la descentralización era simplemente un procedimiento, la autonomía era un principio, el principio, que afirmaba la vida propia y la personalidad del ser, o del círculo a que se refería. "Autonomía individual quería decir derecho del hombre, que además de persona era miembro de la familia humana o del grupo nacional. Del mismo modo, autonomía colonial quería decir vida propia y sustantiva de aquel círculo de intereses, que constituían una Colonia y que a la vez eran parte del todo nacional".

La dificultad, pues, consistía en determinar lo que era una colonia, lo que era una nación y el modo y manera con que se debían transferir por parte de la metrópoli las facultades indispensables, para que las colonias viviesen conforme a las exigencias de los nuevos tiempos. Además, era preciso garantizar

los derechos de los individuos, por encima de cualquier diversidad de raza, color, religión, clase o procedencia, contra los posibles agravios del poder metropolitano y de las mismas autoridades coloniales. De acuerdo con ello, no había más solución que la autonomía. Lo contrario, el mantenimiento del "statu quo", era la garantía segura de la pérdida de las provincias de Ultramar. Por eso, Labra pedía que se oyese a los autonomistas con el mismo respeto que ellos tenían para los demas, adoptando el camino de las reformas para llegar, por imposición de las ideas, de los intereses y de los tiempos, a la autonomía colonial como término obligado de la evolución.

En todo caso, el problema no podía reducirse a términos puramente económicos, tales como la manera de vender el azúcar, el tabaco o el café de Ultramar. En el fondo de la cuestión subyacía algo más profundo: el derecho de los antillanos a fijar de una manera clara las condiciones de su vida, la forma de su contribución, el modo de cumplir los deberes que obligaban a todos los españoles de acuerdo con las facultades y con los medios reconocidos en las leyes y en la práctica a los habitantes de otras provincias de España. En aquel momento, los antillanos de toda clase, procedencia, oficio y posición pretendían que terminasen los presupuestos de Ultramar; que concluyera el viejo sistema, y que se asegurase la intervención de las Antillas en la cosa pública, de una manera positiva y eficaz, sin que a nadie le convenciera la idea de que Cuba y Puerto Rico estaban regidas por las mismas leyes y los mismos principios que las provincias de la Península.

Los autonomistas creían que la nación, representada en Cortes, debía distinguir entre el presupuesto insular y el general y que en consideración a dicho presupuesto y teniendo en cuenta la riqueza, la población y las demás circunstancias

propias de las provincias ultramarinas, tenía que señalar a éstas la parte con que debían contribuir a la atención nacional. Por otra parte, pensaban que era preciso dejar que la Asamblea Colonial estableciese libremente el sistema de impuestos necesarios para cubrir la mencionada participación. Dentro, pues, de la concepción autonomista, aparecía en lugar preferente la separación de las responsabilidades, tanto para estimular la atención de las necesidades locales como para entender correctamente la posición de la metrópoli, que representaba los principios generales, las condiciones genéricas de vida, la garantía más alta y desinteresada de los derechos y, por último, la suprema inspección de cuanto se realizase en las provincias de Ultramar (87).

Por su parte, el señor Celleruelo dijo que ante todo estaba la unidad de la patria, y Santos Ezcay, que la autonomía era una forma atenuada de separatismo. Finalizando ya las discusiones, tomó la palabra López Domínguez, quien resaltó que mientras se consumían los días entre tanto debate, Cuba estaba atravesando una honda crisis económica, sin que se hiciera nada para remediarla y similar opinión emitió Moret al afirmar que en Ultramar todo el que atacaba un interés era tachado de separatista y que en las aulas parlamentarias no hacía más que perderse el tiempo, mientras los insulares estaban pendientes de lo que allí se decía, de tal forma que lo verdaderamente peligroso era la impresión que se les daría con aquella actitud (88).

Desde la llegada de Cánovas al poder, en Julio de 1890, buena parte de la atención de su Gabinete empezó a centrarse en la cuestión económica antillana, espinoso tema que enfrentaba a los productores cubanos y a los librecambistas, con los proteccionistas de la Castilla agraria y de la Cataluña fabril, y

planteaba la divergencia de intereses entre los cosecheros de la isla y los industriales de la metrópoli. Se trataba del viejo problema de la economía cubana, sojuzgada, sin libertad para comerciar con su principal adquirente, Estados Unidos. En este sentido, los autonomistas cubanos hicieron gestiones ante el Gobierno conservador, pero Cánovas, que quería captarse los votos catalanes, se negó a satisfacer sus deseos (89).

En estas circunstancias, la problemática se vió agudizada por la adopción, por parte de Estados Unidos, de la Ley McKinley, que cerraba el mercado yanqui al tabaco y al azúcar cubanos y que, por tanto, hacía necesario un Tratado Comercial con aquel país. La medida estadounidense iba encaminada a controlar la economía cubana, puesto que la base del Tratado Comercial a convenir estaba en la reciprocidad en virtud de la cual, si bien el azúcar cubano tendría asegurado el mercado norteamericano, se abriría, a cambio, el arancel español a todos los productos de Estados Unidos, con lo que los ingresos presupuestarios de la isla se verían seriamente quebrantados (90).

Con objeto de sondear el terreno en relación con el citado Tratado, Estados Unidos destacó a La Habana a dos agentes del Secretario de Estado, Mr. Blaine, al tiempo que una comisión de representantes de los intereses económicos cubanos llegaba a Madrid en Diciembre de 1890 con similar fin y celebraba sesiones durante aquel mes y el siguiente. Tras estos tanteos previos, en Abril de 1891 llegó a Madrid el diplomático norteamericano señor Foster para negociar el Tratado de Comercio sobre la base antes citada, lo que provocó la consiguiente alarma en Cataluña, que movilizó rápidamente al Fomento del Trabajo Nacional en la persona de su representante en Madrid, señor Brunet (91).

No obstante, al final, el Gobierno, presionado por las circunstancias, firmó el citado convenio económico, regulado por el Real Decreto de 28 de Julio de 1891, que, tal como quería Estados Unidos, daba especiales facilidades para la importación de las mercancías norteamericanas a las Antillas españolas, en reciprocidad a las que se otorgaban al azúcar y a otros productos de Cuba y Puerto Rico (92).

Poco después, ciertos problemas internos obligaron a Cánovas a plantear a la Corona la cuestión de confianza, y tras obtener la ratificación de poderes, el jefe del Partido Conservador reorganizó su Gabinete (23 de Noviembre de 1891), colocando en el Ministerio de Ultramar a Romero Robledo. Con el fin más que nada de prestigiarse personalmente, el nuevo Ministro de Ultramar decidió llevar a cabo una serie de medidas tendentes a introducir economías.

Fruto de esta decisión fueron varias disposiciones tales como: reducción de la autoridad del Capitán General de Cuba en cuanto Gobernador General (determinadas facultades del Gobernador General pasarían a los Gobernadores Regionales, que se entenderían directamente con el Ministro de Ultramar); división de la isla de Cuba en tres regiones (Occidental, Central y Oriental) con capitales en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, respectivamente; supresión de las Direcciones Generales de Administración Civil y de Hacienda; supresión de la Audiencia de Puerto Príncipe; fijación de nuevos aranceles e impuestos; introducción de algunas modificaciones en el ramo de Hacienda, etc. Todo ello se vió completado por el proyecto de ley, aprobado por el Congreso en 5 de Enero de 1892, por el que se revisaban los sueldos de los funcionarios de Ultramar con lo que se desgravaba bastante el presupuesto colonial (93).

Por su parte, ante esta actitud gubernamental el Partido Autonomista Puertorriqueño se creyó obligado una vez más a puntualizar las líneas generales sobre las que se apoyaba su ideología. En esta dirección se hacía hincapié en la identidad política y jurídica con la Península y en la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional. Dichas aspiraciones se concretaban en el régimen autonómico administrativo, fundado en la representación directa de los intereses peculiares de las Antillas por las respectivas corporaciones locales de elección popular, y en la responsabilidad, también directa, de los que tuviesen a su cargo el ejercicio de las funciones públicas en lo tocante a la administración interior o local.

El partido no pretendía el gobierno, sino la administración del país por el país, motivo por el cual pedía que dentro de él se resolvieran definitivamente por la autoridad competente los asuntos administrativos locales y que esas resoluciones se dictasen con el concurso no de un grupo de favoritos, sino de los habitantes de aquellas regiones, fuese cual fuera su procedencia y su matíz político. De hecho, los partidos políticos antillanos, lejos de tender al quebrantamiento de la unidad nacional y a la pretensión de privilegios para sí, aspiraban a que cesaran éstos y a que se estrechase y robusteciese dicha unidad, destruyendo la desigualdad y la injusticia, generadoras de revoluciones. Por esta razón, se pedía la identidad política y jurídica, dentro de la cual debían regir, en la España americana y en la europea, la misma Constitución, la misma Ley Electoral y las mismas leyes que en la Península regulaban, afirmaban y garantizaban el pleno ejercicio de los derechos consagrados en el Código fundamental.

Por otro lado, al pretender la descentralización

administrativa se perseguía reservar a las corporaciones provinciales las cuestiones de interés local, que afectaban exclusivamente a aquellos territorios y que sólo debían y podían ser resueltas con acierto y justicia por los propios interesados. Dentro de este contexto, se inscribían la formación del presupuesto local, sin perjuicio de las atribuciones de las Cortes en lo referente al presupuesto nacional, y todos los asuntos relativos a la Instrucción Pública, la Sanidad, la Beneficencia, las Obras Públicas, la Agricultura, los Bancos, la formación y policía de las poblaciones, la inmigración, los puertos, las aguas, el correo, los impuestos, los aranceles, y los Tratados de Comercio subordinados a la aprobación del Gobierno supremo.

Por último, se reconocía la soberanía de la nación española y su imperio sobre las Antillas, en cuya virtud era de su competencia la resolución de todo lo relacionado con el Ejército, la Marina, los Tribunales de Justicia, la representación diplomática y la administración general del país, para lo cual debía señalar a estas comarcas el cupo con que tenían que contribuir a cubrir los gastos del presupuesto general del Estado; llevar la dirección de la política general; velar por la observancia de las leyes; resolver todos los conflictos entre corporaciones y entidades; nombrar y separar con arreglo a las leyes generales de la nación a sus representantes en las diversas esferas de los poderes públicos y conservar la facultad de suspender y de anular los acuerdos de la Diputación Insular, cuando llevasen el vicio de incompetencia o fuesen contrarios a los intereses nacionales (94).

No obstante, como puede verse todas las soluciones adoptadas eran meramente económicas. En lo político, las reformas seguían difiriéndose y las promesas continuaban incumplidas,

mientras el panorama cubano se ensombrecía cada vez más. En Marzo, Labra preguntó al Gobierno sobre la reforma del Código Penal en Ultramar y fue contestado con evasivas por el Ministro del ramo (95). Pero fue en Junio cuando arremetió con dureza contra la política gubernamental, con motivo de la discusión de los presupuestos de Cuba. Según su criterio, se debía evitar a toda costa que Cuba y Puerto Rico volvieran los ojos al régimen personal, haciendo entender a aquellos países que el sistema parlamentario era un sistema serio, con energía y con fuerza, en el que se discutirían todos y cada uno de los problemas ultramarinos. Además, en las Cortes se podía desarrollar otra importantísima labor, cual era la de difundir el conocimiento de los asuntos de Ultramar, por lo general bastante abandonados, lo cual, por otra parte, era un defecto común a la mayor parte de las metrópolis.

El problema ultramarino español era grave, no sólo por su naturaleza, por el carácter trascendental e internacional que todo sistema colonial implicaba, sino por la manera cómo se desarrollaba la política, "que hacía incomprensibles a primera vista los hombres y las direcciones de los partidos, las condiciones de las personas, los problemas más o menos urgentes, que allí se iban desarrollando". No se debía concentrar y menos monopolizar la responsabilidad de las resoluciones coloniales en el Gobierno. Constituía un error el atribuir todo a la metrópoli; había que evitar el maniqueísmo de presentar, de un lado las aspiraciones de las Antillas (aspiraciones locales y por locales vivas y muy exigentes y algunas veces equivocadas) y de otro la nación, representada por el Gobierno, que no era más que una entidad, y por los Ministerios, que no eran más que elementos transitorios. Por encima de los Ministerios estaba la nación, y de acuerdo con ello era necesario repartir las responsabilidades, de forma que se supiera y se conociera que se discutían y

resolvían los negocios ultramarinos a la luz pública, "poniendo todos los conocimientos, aceptando todas las fuentes de información y mostrando, así, la rectitud de nuestros propósitos y de nuestra voluntad de hacer el bien de aquellas comarcas". Dentro de este contexto, la descentralización no suponía sacar de un centro superior atribuciones para dárselas a otro, sino llevar medios, condiciones y facultades del centro superior a otros centros, pero con competencia para realizar la obra que se les encomendaba y con vida propia y sustantividad (96).

Por otra parte, la descentralización era un movimiento dentro de una evolución, que sólo podía desembocar en la autonomía, es decir, en la afirmación de la personalidad de los centros que recibían las facultades, en su capacidad para resolver ciertas cuestiones que por razón de la materia les debían ser entregadas y en la libertad e independencia que necesitaban esos centros para realizar dicha obra. Tampoco parecía lo más conveniente para las Antillas la existencia de un arancel proteccionista, ya que esto se encontraba fuera de toda tradición colonial y, en especial, de las necesidades y aspiraciones cubanas. Como había sucedido en todas las colonias, en cumplimiento de una ley de evolución histórica, Cuba estaba en el momento último del régimen colonial, por lo cual no se resignaba ya a vivir dentro del estrecho marco de la centralización y de la omnipotencia ministerial. Si realmente no se resolvían estas contradicciones, podría decirse que se caminaba "con paso presuroso a un gran desastre" (97).

En este ámbito era incuestionable la identidad de los derechos políticos, de tal forma que debían existir, tanto en las Antillas como en la metrópoli los mismos derechos políticos, en las mismas condiciones y en el mismo grado. Por lo que se refería a la estructuración de las provincias de Ultramar, éstas tenían

que diferir notablemente en lo relativo a la organización de las provincias peninsulares, ya que eran cosas completamente distintas según el punto de vista desde el que se considerasen. En consecuencia, se hacía necesaria "toda la descentralización compatible con la unidad nacional", pudiéndose llegar de acuerdo con las tradiciones españolas" a la plenitud de la autonomía" (98). Por último, acorde con el ejemplo de toda la Europa moderna, por el procedimiento autonomista se desarrollaban mejor las colonias y se afirmaba más que por ningún otro procedimiento el poder de las naciones colonizadoras (99).

Antes de finalizar el mes Labra intervino de nuevo con motivo de los presupuestos de Puerto Rico, dedicando sus esfuerzos a poner de relieve las diferencias existentes entre esta isla y Cuba. Por una serie de cuestiones se daba una gran analogía entre ambas Antillas, pero en las condiciones íntimas y en los caracteres y términos de algunos problemas existía una distinción, una diversidad bastante acusada. Por eso se debían aplicar a Cuba y Puerto Rico los principios generales que a la situación de una y otra isla correspondiesen, pero distinguiendo entre ese concepto general y los intereses diversos, y aun contrarios, que en especial tenían una y otra. La postura gubernamental se hizo patente en la contestación del Ministro de Ultramar, Romero Robledo (100).

Reflejo del mal ambiente existente era la situación en que se encontraban los partidos políticos. La Unión Constitucional había mantenido durante algún tiempo su precaria unidad, pero su nuevo jefe, el Conde de Galarza, no acertó, en definitiva, a reducir las fisuras existentes y, por último, tras chocar con el Capitan General dimitió, lo que hizo irremediable el cisma del partido con motivo de la elección de su sucesor. A cubrir la vacante dejada por Galarza, se presentaron el Marqués

de Apezteguía, que gracias al apoyo del ala derecha del partido logró triunfar, aunque por muy escasos votos de diferencia, y don Ramón Herrera, quien contrariado por el resultado adverso decidió acaudillar a los firmantes del Manifiesto de 1888, a los que se unieron otros elementos nuevos, que sin llegar al autonomismo deseaban reformas.

Por su parte, el Partido Autonomista, en Manifiesto de 2 de Febrero de 1892, además de quejarse de las restricciones económicas efectuadas por el Minsitro de Ultramar, que dañaban a la isla, insistió en la necesidad de excitar el sentimiento público y de dar forma a la acción, mediante la protesta y la propaganda, si no se quería que el partido "marchara en derechura a la disolución" (101). Así, de acuerdo con ello, el partido resaltaba la desigualdad existente en el régimen de representación parlamentaria vigente a uno y otro lado del Atlántico, de forma que los miembros de la sociedad antillana se encontraban, en el orden político, supeditados por culpa de los privilegios a elementos faltos de arraigo y de estabilidad. Por esta razón, se pedía la amplitud del sufragio, a fin de que fuese realmente popular y no un privilegio de casta ni un atributo de clase.

Por otra parte, las reformas administrativas realizadas hasta entonces estaban alejadas de las necesidades, intereses y condiciones de las Antillas, pues mantenían viva la tendencia a considerar el gobierno de las provincias de Ultramar una "regalía de la Corona", una materia reservada al Poder Ejecutivo, sin intervención del Legislativo, sino con carácter subsidiario y en determinados momentos para salvar las formas o para sancionar ciegamente los decretos de un Ministro o de sus delegados. De esta manera, la centralización; el sostenimiento de la alta y baja burocracia del Ejército, de la Marina y de las clases

pasivas; el pago de la Deuda Pública; los privilegios de clase por razón de procedencia; los monopolios; las ventajas comerciales; la libre provisión de los empleos públicos, etc. se habían convertido en formas más o menos disimuladas de la explotación ultramarina en el orden social, político y económico (102).

Así, pues, las cosas en Ultramar se complicaron bastante. La Unión Constitucional, el elemento de que se valía el Gobierno para influir sobre la política cubana, estaba dividida. Había grandes dificultades para atraer a las masas populares; el autonomismo se mantenía en el retraimiento; las reformas de Romero Robledo disgustaron a Polavieja, que contrariado por las medidas acabó dimitiendo en Junio de 1892, y por si esto fuera poco, el separatismo estaba reforzando sus filas, y en 10 de Abril de 1892 proclamó la constitución definitiva del Partido Revolucionario Cubano. Se llegó a tal extremo, que el propio Romero Robledo, que venía preparando un proyecto de reorganización administrativa, introdujo en él ciertas disposiciones de carácter descentralizador, y en estas circunstancias llegaron de nuevo al poder los liberales y con ellos un hombre que estaba dispuesto a adoptar con mayor resolución ese mismo rumbo y a afrontar claramente los problemas pendientes: don Antonio Maura (103).

Desde la época de Félix Varela un sector, aunque no mayoritario, de la población cubana quedó convencido de que la libertad de la isla sólo podía conseguirse por medio de la revolución. Sin embargo, hubo de pasar mucho tiempo aun, hasta que se creó un movimiento político conjuntado para la obtención de aquel fin y, lo que es más importante, hasta que ese movimiento tuvo un caudillo, un verdadero mentor de visión amplia y global; en una palabra, un prócer que cerrara el ciclo de la

independencia política de la América española. Ese guía lo encontró Cuba en la persona de José Martí, buen poeta, vibrante orador y periodista y gran político, que legó a su patria un ideario, que constituía todo un programa político y económico a seguir y en el que, con profética visión, se señalaban los peligros por los que tendría que atravesar la futura República (104).

Poco a poco, se fueron perfilando las ideas en la mente de Martí, quien entendía que en la vida de los pueblos había momentos en que sólo mediante un choque súbito se superaban los factores opuestos, y que se necesitaba la violencia para culminar el movimiento evolutivo. No obstante, aunque parezca lo contrario, Martí no fue un revolucionario *sín más*, fue un evolucionista, que creía que la revolución era una forma de evolución y en los momentos de mayor actividad política la única factible (105).

Tras la creación del Partido Revolucionario Cubano, el objetivo fundamental consistió en terminar la obra empezada en Yara y en Guáimaro, desplazando violentamente al Gobierno español y sustituyéndolo por un Gobierno cubano de corte republicano, y en crear la conciencia necesaria para que la futura República se moviese en un ambiente de justicia y de imparcialidad. La meta a conseguir no podía lograrse a través del autonomismo, porque este movimiento carecía de la fuerza suficiente para afrontar el panorama de realidades que Cuba necesitaba superar para seguir el proceso natural que había de conducirlo a la vivencia plena de su personalidad. Del autonomismo, tal y como estaban planteadas las cosas, no se derivaría ningún beneficio para Cuba, porque reclamaba soluciones falsas por inoportunas e inútiles, olvidando la primera guerra y su irreversible proceso.

Para llevar a buen término el ideal político propuesto, se precisaba superar una serie de peligros externos e internos. Entre los primeros, figuraba, en primer lugar, el imperialismo yanqui y el de las potencias europeas, y entre los segundos, una serie de factores tales como las divisiones intestinas (recuérdese la oposición entre "quesadistas" y "aldamistas", que fue una de las causas del escaso apoyo que encontró la primera guerra en el extranjero); las discriminaciones raciales; el autonomismo; el anexionismo a alguna nación; la impaciencia, causa del desorden y de la inoportunidad; el recelo entre los patriotas que luchaban en la isla y los emigrados; la posibilidad de incurrir en errores pasados (regionalismos, rivalidades, utopías); el militarismo; el despotismo de la plutocracia; los compromisos geográficos e históricos que podían estorbar un libre desenvolvimiento, etc (106).

A fin de contrarrestar todas estas amenazas, Martí ideó unas líneas directrices, que podían resumirse en los siguientes puntos: atraer y unir a los separatistas emigrados entre sí y con los residentes en Cuba; conseguir la neutralidad de los "españoles buenos"; establecer relaciones con pueblos amigos (ligar a los puertorriqueños a la causa cubana y procurar el respeto de Estados Unidos); recaudar fondos; organizar un partido político para alcanzar los objetivos revolucionarios y fundar su órgano propagandístico; formar el futuro ejército libertador y dotarlo de la dirección militar precisa; preparar la guerra, y disponer el alzamiento en el momento adecuado (107).

Arma fundamental de lucha en este sentido era la propaganda, a la que las dotes de orador y de gran estilista literario de Martí auguraban un feliz porvenir y que debía dirigirse a justificar la guerra, mostrando su necesidad, a inspirar confianza en las aptitudes de Cuba para su autogobierno,

a hacer desaparecer el temor a una revuelta negra y a despertar la simpatía por la causa cubana en los países del mundo. A ello había que unir también la labor de sumar prosélitos y de cultivar el espíritu de partido.

En 1884 pareció presentarse una nueva posibilidad revolucionaria, de la que había sido portador meses antes Flor Crombet (se trataba de un nuevo plan de invasión a coordinar entre Máximo Gómez y Antonio Maceo, cuyo concepto de la guerra era distinto al de Martí, a quién le asustaba el espíritu dictatorial de Gómez). La posición de Martí era clara: la revolución era semilla de la República y ésta tenía que nacer libre del caudillismo; la revolución debía tener por base el espíritu democrático y de afirmación popular.

De acuerdo, pues, con su concepción, Martí negó su apoyo al plan Gómez-Maceo y exployó sus razones en la carta que escribió el 20 de Octubre de 1884 al General cubano, en la que consideraba que no se debía llevar adelante una guerra que sólo supusiera un mero cambio de despostismo. Las órdenes emanadas de un campamento no eran la forma más apropiada para fundar una República, cuyo espíritu debía buscarse en la independencia y en la conciliación de voluntades. En modo alguno cabía admitir la sustitución del despotismo político imperante por un despotismo personal, que al parecer pensaba ejercer Gómez: si se luchaba era por afirmar las libertades públicas, no para establecer en el país un militarismo, porque la patria no era de nadie en particular, sino de todos (108).

Perfilada la quiebra del autonomismo, se hacía evidente que el terreno para el desarrollo del separatismo era cada vez más propicio, aunque para llevar adelante la obra política propuesta por dicha tendencia debía obrarse sin apresuramientos.

Era preciso aprovechar al máximo las posibilidades y evitar los trabajos sin preparación y a deshora (109). De esta forma, desde el punto de vista separatista, la guerra ya no podía concebirse como una simple campaña militar, sino como un complicado problema político de más vasto alcance, que exigía una gran preparación. Se precisaba, pues, claridad de fines y una sistematización adecuada, y para ello había que mantener un programa digno, que atrajese la atención del pueblo y acabase con las dudas de los indecisos (110).

De acuerdo con esta evolución, a fines de 1887 la normativa de la acción política separatista quedó concretada en los siguientes puntos: acreditar ante el país la solución revolucionaria; proceder a organizar sin demora la parte militar de la revolución; unir con espíritu democrático a todos los emigrados; impedir que las simpatías revolucionarias se ligasen a algún grupo, clase, raza o tendencia, y evitar el debilitamiento de la revolución por el anexionismo (111).

Al iniciarse la década de los noventa, el separatismo cubano tomó un extraordinario auge como consecuencia de la conjunción de diversas causas, entre las que se encontraban: el impulso adquirido por la conciencia emancipadora cubana de la primera guerra, no obstante el Zanjón, y cuya verdadera raíz estaba en el proceso emancipador hispanoamericano de principios de siglo; la persistencia de la inmoralidad administrativa, exagerada por los emigrados del extranjero y por los conspiradores de la isla, pero que respondía a una realidad; el predominio en las entidades de mayor ascendiente en la vida económica de la isla de los autonomistas, cada vez más decantados hacia el separatismo; la poca atención prestada por el Gobierno español a las peticiones formuladas en las Cortes por los parlamentarios antillanos, etc (112).

Desde 1891 empezaron a precipitarse los acontecimientos, y respondiendo a este ambiente, el 28 de Noviembre de aquel mismo año se dió lectura en Tampa (Florida) a unas resoluciones redactadas por Martí y aprobadas por un grupo de patriotas, anticipación de las Bases del Partido Revolucionario Cubano, que poco después se plasmaron en Cayo Hueso. Cuatro fueron los puntos principales de las resoluciones tomadas en Tampa: reunir a todos los revolucionarios; acomodar la acción revolucionaria a las realidades y al espíritu democrático del país; organizar la revolución de tal forma que se tuviesen en cuenta las necesidades prácticas de la nación y se trabajase por la agrupación y la hermandad de los cubanos residentes en el extranjero y por un República justa, y, por último, respetar en la organización revolucionaria las emigraciones locales (113).

Desde este momento, todo transcurrió muy deprisa, y el 25 de Diciembre quedaron redactadas las Bases y Estatutos Secretos del Partido Revolucionario Cubano, cuya aprobación definitiva se hizo el 5 de Enero de 1892 en Cayo Hueso. Dos meses después, Martí fundó el periódico "Patria", cuyo primer número vió la luz el 14 de Marzo. En el artículo inicial, titulado Nuestras Ideas, tras hacer una exposición de los motivos que le habían inducido a fundar el periódico, Martí explicaba sus propósitos y aclaraba que la guerra se mostraba como algo necesario e inevitable, como un procedimiento político conveniente para resolver definitivamente la problemática cubana y como el único medio para obtener unos logros democráticos y nobles para el país en el mas amplio sentido (114).

Pronto los diversos "clubs patrióticos" aceptaron el partido y su organización. El 8 de Enero lo hizo la "Liga Patriótica Cubana"; el 9, el "club" "Ignacio Agramonte"; el 21 de Febrero, los "clubs" "José Martí" y "Pinos Nuevos", y a fines de

Marzo podía decirse que el partido contaba ya con la mayoría de los "clubs" de emigrados. El 3 de Abril apareció en el periódico "Patria" un artículo sobre el Partido Revolucionario, en el que Martí puntualizaba los caracteres de la agrupación política, que no era sinónimo de sector o bandería, sino que pretendía unir y agrupar (El partido no había surgido de la improvisación, sino como consecuencia de la respuesta a unos planteamientos insoslayables) (115).

Por fin, el 10 de Abril de 1892 quedó proclamada la constitución definitiva del partido, que el 23 contaba ya con treinta y cuatro asociaciones, distribuidas de la siguiente forma: trece en Cayo Hueso, siete en Nueva York, cinco en Kingston, cinco en Tampa y una en Filadelfia, Boston, Ocala y Nueva Orleáns. En Agosto se dejó organizado el sistema militar, que correría a cargo de Máximo Gómez, nombrado General en Jefe, y de sus lugartenientes, Antonio Maceo y Calixto García.

A su vez, en el Manifiesto El Partido Revolucionario a Cuba, publicado en "Patria" el 2 de Mayo de 1893, se ampliaron y precisaron los ideales y propósitos de la guerra y de la República. Martí aumentó insospechadamente sus actividades, y en Junio se entrevistó con Gómez en Montecristi y visitó a Maceo en Costa Rica. Poco después, el partido quedó organizado en la propia isla, distribuyéndose en delegaciones provinciales, al frente de las cuales se encontraban Juan Gualberto Gómez en La Habana, Matanzas y Pinar del Río; Francisco Carrillo en Las Villas; Salvador Cisneros Betancourt en Camagüey, y Guillermo Moncada y Bartolomé Masó en Oriente. De aquí al movimiento armado del 24 de Febrero de 1895, que inició la segunda guerra de independencia cubana, no había más que un paso.

Por su parte, Martí alcanzó la suprema dirección del movimiento, tras doce años de trabajos y de fatigas, de prudencia

y de tenacidad, y dejó en el Manifiesto de Montecristi (25 de Marzo de 1895) un testamento político, compendio de su ideario, que constituía, tanto una exposición de su pensamiento como una justificación de todos y cada uno de sus puntos y en el que se mostró sereno y fiel a sí mismo, dispuesto, si fuera necesario, al sacrificio, tal como lo indicara en la carta que escribió a Federico Manríquez y Carvajal el mismo día de la redacción del Manifiesto de Montecristi: "Pero mi único deseo sería pegarme, allí, al último tronco, al último peleador: morir callado" (116). La muerte le encontró poco después en Dos Ríos, pero sus esfuerzos no se vieron compensados, porque la guerra no terminó con una victoria completa de las armas mambisas, de forma que hubieran sido los cubanos quienes hubiesen dictado las condiciones de paz, y no llegó tampoco a instaurarse la tan soñada República, sino una República intervenida por Estados Unidos (Enmienda Platt) y previamente gobernada de forma militar durante cuatro años.

N O T A S.

- (1) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 32.
- (2) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 223-230.
- (3) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 21 de Junio de 1886.
- (4) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Se Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 165 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, pág. 31.
- (5) TUÑOS DE LARA, MANUEL: La España del Siglo XIX (París 1968), pág. 290.
- (6) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 10 de Julio de 1886.
- (7) Ibid., 19 de Julio de 1886.
- (8) Véase, Apéndice Documental I. Apéndice núm. 12.
- (9) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 26 de Julio de 1886.
- (10) Ibid., 27 de Julio de 1886.
- (11) Ibid., 26 de Julio de 1886.
- (12) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 26 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 48.
- (13) Sobre la política ministerial desarrollada por Balaguer véase, BALAGUER, VICTOR: Memoria Redactada por el Ministro de Ultramar acerca de su Gestión en el Departamento de su Cargo (Madrid 1888).
- (14) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 15 de Abril de 1887.
- (15) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 51-52.
- (16) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 14 de Marzo de 1887.

- (17) Ibid., 30 de Marzo de 1887.
- (18) Ibid., 23 de Mayo y 24 y 25 de Junio de 1887.
- (19) Ibid., 1 de Julio de 1887.
- (20) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 91-92 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 70.
- (21) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 11.
- (22) Sobre la acción represiva del Gobernador Palacios véase, PEDREIRA, ANTONIO S.: El Año Terrible del 87 (San Juan 1935) y CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia del Año 87 (San Juan 1970).
- (23) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 57.
- (24) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, págs. 70-71.
- (25) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 95.
- (26) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 1 de Febrero de 1888.
- (27) Ibid., 20 de Febrero de 1888.
- (28) Ibid., 6 de Abril de 1888.
- (29) Ibid., 21 de Mayo de 1888.
- (30) Ibid., 25 de Mayo de 1888.
- (31) Ibid., 26 y 28 de Mayo de 1888.
- (32) Ibid., 30 de Mayo y 3 de Julio de 1888.
- (33) Ibid., 25 de Junio de 1888.
- (34) Ibid., 7 de Diciembre de 1888.
- (35) Ibid., 11 de Diciembre de 1888.
- (36) Ibid., 12 de Diciembre de 1888.
- (37) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico (Madrid 1953), pág. 22 y en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. XX.
- (38) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Colonial en España. (En las Antillas) (Madrid 1896), pág. 93.

- (39) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 26 de Enero de 1889.
- (40) Ibid., 23 de Febrero de 1889.
- (41) Ibid., 22 de Marzo y 5 de Abril de 1889.
- (42) Ibid., 1 de Abril de 1889.
- (43) Ibid., 18 de Junio de 1889.
- (44) Ibid., 12 de Julio de 1889.
- (45) Ibid., 15 de Noviembre de 1889.
- (46) Ibid., 24 de Enero y 15 de Febrero de 1890.
- (47) Ibid., 30 de Enero de 1890.
- (48) Ibid., 6 de Febrero de 1890.
- (49) Ibid., 15 de Marzo de 1890.
- (50) Ibid., 29 de Marzo de 1890.
- (51) Misma cita, Nota núm. 292.
- (52) Misma cita, Nota núm. 292.
- (53) Ibid., 8 de Abril de 1890.
- (54) Ibid., 9 de Abril de 1890.
- (55) Ibid., 11 de Abril de 1890.
- (56) Ibid., 17 de Abril de 1890.
- (57) Ibid., 18, 21, 22, 24 y 25 de Abril de 1890.
- (58) Sobre la gestión del Ministro Fabié véase, FABIE, ANTONIO MARIA: Mi Gestión Ministerial Respecto a la Isla de Cuba (Madrid 1898).
- (59) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 114.
- (60) Ibid., Vol. I, págs. 115-116.
- (61) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 134-135.
- (62) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 12.
- (63) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Electoral en las Antillas Españolas (Madrid 1891), págs. II-III.

- (64) Ibid., págs. VII-VIII y X-XI.
- (65) Ibid., págs. XXV-XXVIII; XXX; XLVIII; LI y LIII.
- (66) Ibid., pág. LXXXVIII.
- (67) Ibid., págs. XCIII-XCV.
- (68) Ibid., págs. XCVIII-XCIX.
- (69) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 2 de Abril de 1891.
- (70) Ibid., 9 de Abril de 1891.
- (71) Ibid., 8 de Mayo de 1891.
- (72) Ibid., 30 de Abril de 1891.
- (73) Ibid., 12 de Mayo de 1891.
- (74) Ibid., 6 de Junio de 1891.
- (75) Ibid., 23 de Junio de 1891.
- (76) Ibid., 24 de Junio de 1891.
- (77) Ibid., 25 de Junio de 1891.
- (78) Ibid., 26 de Junio de 1891.
- (79) Ibid., 30 de Junio de 1891.
- (80) Ibid., 2 de Julio de 1891.
- (81) Ibid., 3 de Julio de 1891.
- (82) Véase, Apéndice Documental I. Apéndice núm. 13.
- (83) Misma cita, Nota núm. 323.
- (84) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Julio de 1891.
- (85) Ibid., 7 de Julio de 1891.
- (86) Misma cita, Nota núm. 327.
- (87) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 8 y 9 de Julio de 1891.
- (88) Ibid., 11 de Julio de 1891.

- (89) SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional, "Cuadernos de Historia de España" (Buenos Aires), XLI-XLII, (1965). pág. 300.
- (90) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 147-148.
- (91) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág 260.
- (92) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Ob. cit., pág. 23.
- (93) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 166-167.
- (94) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 305-307.
- (95) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 12 de Marzo de 1892.
- (96) Ibid., 4 de Junio de 1892.
- (97) Ibid., 6 de Junio de 1892.
- (98) Ibid., 7 de Junio de 1892.
- (99) Ibid., 9 de Junio de 1892.
- (100) Ibid., 23 de Junio de 1892.
- (101) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob cit., Vol. I, págs. 147-148.
- (102) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 236-237 y 242-245.
- (103) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob cit., Vol. I, pág. 192.
- (104) Sobre el pensamiento político de Martí puede verse INFIESTA RAMON: El Pensamiento Político de Martí (La Habana 1953) y MARTÍ, JOSÉ: Pensamiento Político (La Habana 1960).
- (105) GRIÑAN PERALTA, LEONARDO: Martí, Líder Político (La Habana 1970), págs. 18-19.
- (106) Ibid., págs. 40-42.
- (107) Ibid., págs. 47-48.
- (108) MARTÍ, JOSE: Ideario Separatista (La Habana 1947), págs. 83-88.

- (109) Ibid., págs. 89-96.
- (110) Ibid., págs. 97-101.
- (111) Ibid., págs. 102-111.
- (112) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 144.
- (113) MARTI, JOSE: Ideario Separatista (La Habana 1947), págs. 128-130.
- (114) Ibid., págs. 139-150.
- (115) Ibid., págs. 151-157.
- (116) Ibid., pág. 171.

2.2.5) LOS INTENTOS REFORMISTAS DE MAURA (1893).

El 9 de Diciembre de 1892 Sagasta volvió de nuevo al poder, y el 11 juraron sus cargos los miembros del llamado "Gabinete de Altura", entre los cuales se encontraba como Ministro de Ultramar don Antonio Maura. Maura, no atado al "statu quo" reinante por ligaduras doctrinales ni partidistas, estaba francamente decidido por la reorganización administrativa de las provincias de Ultramar. De este modo, las pretensiones de reforma iban a encontrar eco en la Península en la persona de este Ministro, que estructuró las bases para la modificación de la administración local de Cuba y Puerto Rico (1).

La principal preocupación de Maura estribaba en sacar del retraimiento al autonomismo, de cara a las próximas elecciones. Con tal motivo y como primer paso modificó el sistema electoral, en virtud de un Real Decreto del 27 de Diciembre de 1892. Según este Decreto se reformaba el sistema para la elección de diputados a Cortes por Cuba y Puerto Rico, recogiendo las líneas generales de un proyecto de ley de 1890, que había quedado detenido.

El censo de veinticinco pesos quedó suprimido y en su lugar se reconoció el derecho electoral de los cubanos que pagasen cinco pesos de contribución directa al Estado y de los puertorriqueños que lo hiciesen por valor de diez, de acuerdo con las correspondientes diferencias de régimen tributario existentes en ambas islas. Quedaban exentos totalmente, entre otros, los funcionarios que disfrutasen de un sueldo superior a cien pesos anuales, completado todo ello por una minuciosa regulación de los procedimientos censal y electoral. A pesar de esto, la discriminación continuó siendo importante, ya que España sobre un censo de dieciocho millones de habitantes tenía cuatro millones

de electores, mientras que Cuba, por ejemplo, con un millón y medio no rebasaba los cincuenta mil (2). Otro Real Decreto de la misma fecha (27 de Diciembre de 1892) determinó la división territorial de Cuba y Puerto Rico con el mismo fin, es decir, la elección de diputados a Cortes (la aludida regulación de los procedimientos censal y electoral venía establecida por otro Real Decreto de igual fecha, por el que quedaban organizadas las medidas y señaladas las operaciones concretas a realizar en Cuba y Puerto Rico para llevar a cabo las elecciones conforme al sistema electoral reformado) (3).

Maura triunfó en este primer intento, ya que logró que los hasta entonces retraídos autonomistas cubanos interviniesen en las elecciones generales de Marzo de 1893. Sin embargo, el autonomismo mantenía firmes sus posiciones, y, así, el candidato autonomista Eliseo Giberga en un mítin de propaganda electoral, celebrado en La Habana el 12 de Enero de 1893 señaló que no había más que dos soluciones en el problema antillano: independencia o autonomía. Por su parte, Fernández de Castro, refiriéndose al mismo tema, dijo que tan inútil era, con referencia a las Antillas, la política conservadora como la liberal, "porque todos los partidos de Gobierno de la Metrópoli eran, en lo que a nosotros se refería, esencialmente los mismos" (4).

Con vistas a las proyectadas reformas, Maura realizó también una labor de captación y de agrupamiento de los miembros de la Unión Constitucional, para lo cual escribió una serie de cartas a don Ramón Herrera, prohombre del partido (8 de Enero de 1893), al Conde de Galarza (10 de Enero del mismo año) y al Marqués de Apezteguía. Realmente, la Unión Constitucional ante las directrices de Maura vió complicado su panorama al tener que luchar contra los autonomistas en un marco nuevo sin el apoyo del Gobierno de Madrid, tal como lo expresó el Marqués de Apezteguía

en su Manifiesto electoral del 17 de Febrero de 1893, en el que resaltó las dificultades del partido ante el ensanchamiento del censo electoral (5).

Por otra parte, la actividad de Maura no se detuvo. Así, un Real Decreto del 10 de Febrero de 1893 estableció una serie de reglas para que los Gobernadores Generales de Cuba y Puerto Rico hiciesen los nombramientos de Alcaldes, aclarando dudas sobre la Ley Municipal en vigor desde el 18 de Junio de 1878 con las modificaciones de 24 de Mayo del mismo año (esta disposición apuntaba a limitar los abusos en el nombramiento de Alcaldes, fuera de las ternas elevadas por los municipios) (6).

Aunque el Mensaje de la Corona, leído en la apertura de las Cortes (5 de Abril de 1893), se distinguió por su moderación, limitándose a anunciar proyectos viables (entre otros, los referentes al crédito territorial de Ultramar, al régimen arancelario de las Antillas y a la crisis en que se hallaba el presupuesto de Cuba), Maura siguió perfilando sus ideas (7).

De acuerdo con ello y fiel a sus propósitos, Maura continuó adelante, y el 22 de Mayo de 1893 se publicaron siete Reales Decretos, en virtud de los cuales se reorganizaba la administración municipal de las islas Filipinas, con vistas a la atracción de los naturales del archipiélago. Tal reorganización se basaba en la igualdad de derechos con la raza blanca y tenía la intención de privar a los rebeldes de su principal argumento, a saber: la intolerable desigualdad ante la ley de indígenas y de españoles. Estos decretos empezaron ya a preocupar seriamente a los propios liberales, de tal forma que a la abierta oposición de los conservadores vino a sumarse la resistencia pasiva del propio Sagasta. Por otra parte, la situación en las Antillas continuaba siendo poco halagüeña: se daban abusos y corruptelas en la

práctica de las leyes; existía un malestar evidente en la población cubana y puertorriqueña; era casi constante la oposición de los partidos políticos y de las fuerzas sociales, que se enfrentaban en fuertes campañas de prensa, y cada vez iban más en auge el separatismo y el autonomismo desviacionista, simpatizante con aquél (8).

A pesar de esto y con la idea esperanzada de terminar con dicho panorama, el 5 de Junio de 1893 don Antonio Maura presentó a las Cortes un proyecto de ley sobre reforma del Gobierno y de la Administración Civil en las islas de Cuba y Puerto Rico. En la exposición de motivos se hacía un bosquejo general de los quince últimos años (restablecimiento de la paz al terminar la guerra con el convenio del Zanjón; normalización de la vida social con la abolición definitiva de la esclavitud (1880); progreso de la economía, etc.) y se reconocía que la administración pública seguía dando "constante ocasión de quejas y de amargos reproches", ya que era "vicioso el régimen administrativo de nuestras Antillas", no obstante ser menos malo el de Puerto Rico, que el de Cuba (9).

El Proyecto se estructuraba de la siguiente forma: 1) Las competencias de la Administración en Cuba y Puerto Rico se distribuían entre el Estado o poder central y los respectivos Gobiernos Insulares, asignando al poder central los asuntos de Guerra y de Marina, Relaciones Exteriores, Justicia y Orden Público y Política Financiera, y a los Gobiernos de las islas lo relacionado con las comunicaciones, la Sanidad, la Beneficencia, la Instrucción y las Obras Públicas. Por su parte, los Gobiernos insulares podrían proponer a las Cortes cuantas reformas legislativas estimasen útiles. 2) Las seis provincias de Cuba con sus respectivas Diputaciones se fundían en una sola, al frente de la cual estaba una Diputación única. Existía un Gobernador

General, que no actuaba dictatorialmente, aunque podía suspender los acuerdos de la Diputación por infracción de las leyes o por perjuicio nacional, y a los propios diputados provinciales que se extralimitasen en el ejercicio de sus funciones o delinquieran. Sin embargo, en los asuntos graves y en la elaboración del proyecto de presupuestos, que anualmente se elevaría a las Cortes, se le ordenaba asesorarse de un Consejo de Administración. 3) El citado Consejo de Administración estaba presidido por el Gobernador General y formado por altas autoridades eclesiásticas, militares, judiciales y de Marina; por la mitad más antigua de los diputados provinciales; por el Coronel Decano del Cuerpo de Voluntarios; por nueve vocales, nombrados por el Gobierno, entre los que figuraban los Presidentes del Casino Español de La Habana, de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Económica de Amigos del país y del Círculo de Hacendados; por los Alcaldes-Presidentes de determinados municipios, inamovibles gubernativamente, y por un Secretario. 4) Los Ayuntamientos de las islas no seguían tampoco bajo los desafueros del poder central, ya que en lo administrativo dependían de las Diputaciones Insulares respectivas y en lo judicial, de los Tribunales Ordinarios; elegían sus Alcaldes, y el Gobernador General no podía destituirlos sino después de oído el Consejo de Administración, ni reemplazarlos por quienes no perteneciesen al Consejo. Estos puntos y algunos otros de menor importancia se distribuían a lo largo de siete Bases. El mencionado régimen era semejante para Puerto Rico, con las modificaciones propias del caso (10).

Se trataba, pues, de un amplio programa descentralizador, que no mermaba esencialmente la soberanía de la metrópoli y que respondía perfectamente al espíritu transaccional de su autor. No obstante, se desencadenó una fuerte oposición y el proyecto no pasó de ser eso, un proyecto. En realidad, con

esta actitud se desaprovechó la última gran oportunidad de resolver el problema ultramarino de una forma adecuada, ya que el proyecto de Maura aun era viable, a pesar de la influencia creciente en Cuba de José Martí y de su obra.

La opinión pública cubana estaba dividida entre la autonomía y la independencia, pero cabía presumir que la implantación de las reformas y la aplicación de medidas depuradoras en el sistema político decantarían a la mayoría hacia la nueva política (11). Mas, como se dijo antes, la reacción fue violentísima. Ciertamente, los cubanos pedían cada vez más, pero esto estaba provocado por la propia actitud de los opositores, lo que determinó una lógica evolución, en la que, a medida que pasaba el tiempo, se fueron aumentando las exigencias mínimas iniciales.

El plan fue calificado de peligroso, no por reparos de índole técnica, sino por alarmas patrióticas, que confundían autonomía, es decir, reclamación por parte de la región de las funciones políticas propias del poder central, con descentralización administrativa, que es propiamente lo que era. Los peninsulares se enfrentaron entre sí en las discusiones a que dieron lugar los proyectos de Maura, quien estaba convencido de que la única solución capaz de conjurar la guerra y la posterior pérdida de las provincias de Ultramar era requerir la prudente colaboración de los naturales en el gobierno de ellas. Las discrepancias políticas, o simplemente personalistas, salieron a relucir y se extendieron, tanto a las islas y a Madrid como a los círculos políticos de todo el país, utilizando el argumento del patriotismo y calificando al Ministro y a sus partidarios de malos españoles y de filibusteros (12).

En Cuba, los separatistas atacaron, lógicamente, el proyecto, ya que en gran parte desmantelaba su posición. Así,

José Martí, desde el periódico "Patria", y Juan Gualberto Gómez, en la "Revista Cubana", fundada por Enrique Varona, en la que publicó su famoso artículo, ¿Por qué Somos Separatistas? (13). Por su parte, Antonio Govin, Secretario del Partido Autonomista, también se pronunció en contra en su artículo Decentralizar, Descentralizando, publicado en el diario habanero "El País", aunque la Junta Central de dicho partido se mostró favorable al proyecto (14).

Por otro lado, los ortodoxos de la Unión Constitucional se mostraron vivamente irritados, ya que emancipar los Ayuntamientos del yugo caciquil, hacer incoercible el único gran colegio provincial, exaltar la relevancia de la Diputación dándole una personalidad que nunca habían alcanzado las seis existentes, "suponía arrebatarse el feudo político a los oligarcas centralistas". De esta forma, aun antes de que directamente la comisión del Congreso diera al asunto carácter parlamentario, los opositores desataron una furiosa campaña, mostrando que sólo abandonarían su actitud si se producía el repudio del proyecto y la subsiguiente dimisión del Ministro. Mientras tanto, los disidentes de la Unión Constitucional se apartaron totalmente del partido, y apoyando plenamente las reformas, adoptaron el nombre de reformistas (15).

En Madrid, los miembros de la Unión Constitucional, capitaneados por Romero Robledo, consiguieron de Cánovas que se prestase a la campaña antirreformista con el apoyo de su autoridad personal y la fuerza de su partido. Don Francisco Silvela, deseoso por entonces de reducir al mínimo los puntos de discrepancia con su antiguo jefe, adoptó una actitud similar a la de aquél. Los carlistas y los republicanos (excepto Pi y Margall, que desde el periódico "El Nuevo Régimen" no sólo no apoyó a Maura, sino que fué más lejos, defendiendo la independencia de

Cuba), asustados ante la etiqueta de separatismo que se había puesto a los planes reformadores, o los atacaron o se callaron, salvo Labra, que se declaró conforme al espíritu general del proyecto. Las reformas contaron también con fervorosas adhesiones, pero como casi todas radicaban en Cuba y no procedían en su mayoría de comités políticos, sino de elementos sociales, no sirvieron para dominar la resistencia parlamentaria, azuzada por la prensa de Madrid (16).

Un año después, en 1894, el propio Labra escribió un artículo sobre la reforma de Maura, publicado en el folleto titulado "El Partido Centralista" bajo el epígrafe, La Política Colonial en 1893. En él declaraba que durante aquel año los autonomistas cubanos habían abandonado el retraimiento electoral, mediante el cual habían protestado contra la insistencia de los Gobiernos metropolitanos en mantener una política de desigualdad, de abuso y de desconfianza, "cuya fórmula más descarada había sido la ley de privilegio electoral de 1878, hecha, según confesión explícita de un Ministro conservador, en pleno Parlamento, para mantener el predominio de los elementos conservadores ultramarinos".

Ciertamente, la salida de dicho retraimiento debía contemplarse como un inmenso servicio prestado por el autonomismo a la tranquilidad y al progreso de Cuba y a la causa de España en América, gracias al cual se restauró la normalidad política cubana y se produjo un considerable adelanto en ella al quedar bloqueado el carácter reaccionario de la Unión Constitucional. Además, esta actitud hizo disminuir la confianza de los enemigos de España, muy envalentonados en los últimos tiempos como consecuencia de la confusión que se había producido en Cuba con motivo del desbarajuste administrativo y de la notoria irresponsabilidad de los funcionarios públicos.

Por otra parte, los autonomistas pusieron de manifiesto su postura en relación con los movimientos insurreccionales, consignando su propósito de moverse dentro de la ley y de contribuir al mantenimiento de la paz, tan deseada por todos, al tiempo que respecto de los revolucionarios residentes en Estados Unidos dicha postura produjo la división en el seno de aquel grupo, a pesar de que otro sector más radical mantuviera una determinación distinta, celebrando mítines y anunciando próximas expediciones contra Cuba (17).

En relación con el proyecto de Maura, opinaba Labra que tenía un positivo valor, no obstante sus deficiencias, tal y como lo demostraba la oposición que había encontrado en el Parlamento y fuera de él. Sin embargo, de las contradicciones que le aquejaban, no era la menor la derivada del diferente tratamiento dado a Cuba y a Puerto Rico, merecedor de todo género de consideraciones por su cultura política, por el éxito de todas sus experiencias, por su organización social y por su patriotismo. Así, pues, dentro de este contexto, la reforma pacífica, progresiva y fecunda que requerían las necesidades de las Antillas y que imponía el prestigio de la metrópoli exigía una vigorosa campaña permanente y bien inspirada en el seno de la Madre Patria y dirigida a los que tenían que resolver el problema ultramarino, que se convertía, de esta forma, en una de las mas importantes cuestiones a tener en cuenta. Lo contrario equivalía a mantener sobre aquellos territorios antillanos la vieja marca del colonialismo.

Por esa razón, la única solución decorosa y justa para España en relación con América, donde vivían millares de españoles y donde renacía una gran sentimiento de amor hacia la antigua Madre Patria, era la autonomía colonial, teniendo presente, además, que con esta solución no se atendía solamente a

un interés particular o regional, sino a un problema tan general y decisivo para la nación como el de la organización de la Hacienda, el del régimen del Ejército o el de la reforma de la enseñanza. "Después había que recordar con igual insistencia, que el derecho, con que los españoles de Castilla y de Cataluña pensaban e influían en la dirección política de la Nación y por lo tanto sobre la suerte de nuestras vibrantes Antillas, no era superior, ni de distinto alcance al derecho, con que los españoles de Puerto Rico y de Cuba podían y debían influir en la marcha general de la Península y en el total y definitivo destino de la Patria común" (18).

A pesar de todas las circunstancias adversas, el dictamen de la comisión del Congreso fue favorable al Proyecto de Maura, aunque introducía algunas modificaciones: aumento del número de diputados provinciales de dieciocho a veinticuatro, que, así, representarían mejor a la población de las regiones; cambio de criterio en el sentido de no considerar iguales a dichas regiones en el momento de la elección de sus administradores; creación de unas delegaciones que fuesen el punto de encuentro entre los diputados y las regiones que administrasen, y aclaración de todo lo que fuese confuso con respecto a las reformas de las leyes, dejando bien sentado que no se modificarían los censos electorales ni en Cuba ni en Puerto Rico (19).

Iniciados los debates en el Congreso, la oposición se hizo más virulenta. Rodríguez Sampedro, Diputado conservador, que fue el primero en impugnar el proyecto, interpeló al Gobierno acerca del desasosiego levantado en Cuba por el anuncio de las reformas (20). Villanueva, liberal, y por tanto, correligionario de Maura, incluso abandonó su puesto de Subsecretario de la Presidencia del Consejo con objeto de combatirlos, desarrollando un ataque personal contra el Ministro de Ultramar (21).

Becerra mantuvo una posición ecléctica. Santos Ezcay consumió su turno en cuestiones personales. El Diputado puertorriqueño Balbás apoyó a Maura, y en contraposición García Gámez, hablando en nombre del Partido Incondicional de Puerto Rico, se mostró disconforme con el proyecto Maura, por su parte, resueltamente en contra del criterio según el cual todo lo que no fuese asimilismo era sospechoso y alarmante, en contestación a Villanueva y a Rodríguez Sampedro se opuso tajantemente al sistema del autoritarismo dictatorial y defendió la necesidad de dar paso a la libre concurrencia de partidos, a fin de que ninguno pudiese estar fuera de la legalidad (22). Los señores Conde de Lersundi y Soler Casajuana se mostraron de acuerdo con el proyecto y defendieron el credo autonomista, aduciendo que no atentaba a la integridad de la patria, mientras que Alfau, Lastres y Gullón tomaron la palabra para contradecirles (23).

Por su parte, Cánovas, haciendo profesión de su asimilismo, en una profusa intervención dijo entre otras cosas: "No autonomía, que es palabra inexacta, sino descentralización. Creo yo que pueden otorgarse en grandísima manera a aquellas provincias, libertades prácticas, libertades económicas, libertades corporativas, sin nada de autonomía, pero para eso, ¡ah!, para eso, señores, se necesita una condición previa, que no haya equívocos sobre la adhesión y la lealtad a la Patria; necesitase que en la vida privada como en la vida pública se sepa y conste que todo el mundo es allí español, porque los que sean españoles merecen todo género de libertades, tantas cuantas tenga el ciudadano en la Península y pueden merecer consideración y hasta independencia española, pero mientras esta cuestión suprema, mientras esta cuestión de la adhesión y de la lealtad a la Patria no esté resulta, no os equivoqueis, es imposible dar ya más pasos adelante de los que se han dado" (24).

Romero Robledo, portavoz de la Unión Constitucional, representación del españolismo cubano y recalcitrante opositorista, se manifestó totalmente en contra del proyecto> Frente a él, Maura adujo que en los asuntos pecuallares de Cuba debía prevalecer la opinión mayoritaria isleña y que no importaba que en la Diputación se encontrasen la Unión Constitucional, los autonomistas y aun los separatistas. Ante semejantes manifestaciones, las protestas llegaron a su punto culminante y los señores Fernández Villaverde, Santos Ezcay, Sanchís, Rodríguez Sampedro y otros más demostraron a gritos su disconformidad en pleno Congreso. Frente a estos violentísimos ataques personales, Maura conservó su serenidad e hizo una meditada defensa de sus reformas, insistiendo en la Diputación Provincial única, que a los ojos de sus adversarios podía convertirse en facciosa Cámara Legislativa, sin que el Gobernador General pudiera refrenarla y menos disolverla sin grave escándalo (25).

Labra, aunque consideró insuficiente el proyecto, ya que Cuba deseaba la autonomía, habló en su favor y lo apoyó por juzgar que de todas formas constituía un paso hacia adelante. En primer lugar, se declaró contrario a los que negaban la unidad de la patria y luego pasó a considerar los principales supuestos del autonomismo, tratando de mostrarse flexible y contempORIZADOR. Respecto de la identidad de los derechos políticos de españoles y antillanos, afirmó ese principio con carácter absoluto, pero sometiendo las condiciones de aquellos derechos a las condiciones que tuviesen en la Península, de tal forma que si en España, por especiales circunstancias, no se llegara a un grado completo de libertad, no se exigiese un mayor nivel para las Antillas, sino que se aceptasen las limitaciones allí existentes.

Por lo que hacía referencia a la organización política, pedía "toda la descentralización compatible con la unidad del

Estado y con la integridad nacional", pero, al mismo tiempo que formulaba esta doctrina, se mostraba dispuesto a todo género de inteligencias y a satisfacer toda clase de susceptibilidades. Ciertamente, fuera de las corrientes autonomistas y dado el estado en que se encontraba la colonización contemporánea, no podía darse ningún paso en sentido descentralizador. Así, pues, se podía discutir con respecto a la procedencia de tal o cual reforma o de tal o cual garantía sin pretender mantener un espíritu de intransigencia, pero dentro de la autonomía que se imponía de forma inexorable y a la que conducía todo progreso, dado que estaba en la esencia de todas las cosas y en el espíritu del Derecho. En relación con todo ello, dentro de las doctrinas autonomistas siempre había que distinguir dos cosas: una, qué podía significar la fórmula, la doctrina científica; otra, constituida por todo aquello que se venía sustentando durante un larguísimo período de tiempo y que estaba caracterizado por una multitud de reformas parciales, que podían perfectamente ser admitidas por el resto de los partidos (26).

La intervención de Labra fue contestada por Cánovas en los siguientes términos: "Más allá de la libertad más amplia y de la descentralización más completa en los asuntos locales que a las colectividades y a las corporaciones provinciales y locales pueda confiarse, no se puede ir. Más allá, no, señor Labra. Más allá, no se ha de ir, porque mermar en un sólo ápice la soberanía de la Nación sobre aquellas provincias, desequilibrar la soberanía de España, eso nunca, jamás, podrá hacerse, señor Labra" (27).

Por otra parte, la intervención del Presidente del Consejo no profundizó mucho en el examen del plan, pues se limitó a afirmar, que por encima de todo la soberanía de la nación quedaría intangible (28). En realidad, no quería hacer de la

aprobación del proyecto cuestión de Gabinete, y además la "reforma habría debilitado en Cuba la influencia electoral de los antiguos partidos y Sagasta no estaba dispuesto a correr semejante riesgo político, amén de las consecuencias que acarrearía a su propio partido" (29). De esta forma, los debates se fueron espaciando y en estas circunstancias "la discusión en las Cortes del Proyecto de Maura no avanzaba, perdiéndose con tantos discursos, rectificaciones, nuevos discursos... en la manigüa del Diario de Sesiones o en el vacío de una dilatada clausura de Cortes" (30).

El proyecto volvió a discutirse por última vez el 2 de Agosto de 1893, y dado que Maura se opuso tenazmente a toda formula transaccional, deseada por Sagasta, y que pasaba el tiempo y nada se resolvía, el Ministro de Ultramar no tuvo más remedio que dimitir, circunstancia que fue aprovechada por el Presidente del Consejo de Ministros para reorganizar el Gabinete.

Así, se echó por la borda una gran oportunidad, a pesar de que el plan no otorgase más que una amplia descentralización, que podía haberse convertido en la autonomía a no tardar mucho. No obstante, el camino quedó abierto y, así, las reformas de Maura desembocaron, de hecho, en la Ley de Bases de Abárzuza, aunque tarde, ya que el tiempo no pasaba en balde. Como era lógico, el resultado creó el descontento y la desmoralización entre los autonomistas y contribuyó a que se preparasen con más ardor y efectividad los planes que acabaron en el "Grito de Baire", que abrió la segunda y última guerra de los cubanos contra España (31).

N O T A S.

- (1) Sobre la figura y las actividades políticas de Maura véase, PEREZ DELGADO, REFAEL: Antonio Maura (Madrid 1974).
- (2) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico (Madrid 1953), pág. 24 y Prólogo a LAZCANO Y MAZÓN, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. XX.
- (3) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Ob. cit., pág. 24.
- (4) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, pág. 185.
- (5) Ibid., Vol. II, págs. 185-186.
- (6) Misma cita, Nota núm. 361.
- (7) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 186-187.
- (8) Ibid., Vol. II, pág. 192.
- (9) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Ob. cit., pág. 25.
- (10) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 13.
- (11) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), pág. 21.
- (12) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 195-196.
- (13) HORREGO ESTRUCH, LEOPOLDO: Juan Gualberto Gómez (La Habana 1954), pág. 99.
- (14) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 196, Nota núm. 8.
- (15) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 193.
- (16) Ibid., Vol. I, pág. 195.
- (17) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Colonial en España. (En las Antillas) (Madrid 1896), págs. 75-79.
- (18) Ibid., págs. 79-80 y 83-84.

- (19) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 196.
- (20) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 15 y 16 de Junio de 1893.
- (21) Ibid., 17 de Junio de 1893.
- (22) Ibid., 17 de Junio de 1893.
- (23) Ibid., 19 de Junio de 1893.
- (24) Ibid., 13 de Julio de 1893.
- (25) Ibid., 13 de Julio de 1893.
- (26) Ibid., 13 y 14 de Julio de 1893.
- (27) Ibid., 14 de Julio de 1893.
- (28) Ibid., 15 de Julio de 1893.
- (29) CARR, RAYMOND: España: 1808-1939 (Barcelona 1969), pág. 367.
- (30) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Cánovas: Su Vida y su Política (Madrid 1951), pág. 544, citado por FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Ob. cit., pág. 25.
- (31) ESTEVEZ Y ROMERO, LUIS: Desde el Zanjón hasta Baire (Datos para la Historia Política de Cuba) (La Habana 1899), pág. 143 y GUERRA SANCHEZ, RAMIRO; PEREZ CABRERA, JOSE MARIA; REMOS, JUAN J. y SANTOVENIA, EMETERIO S.: Historia de la Nación Cubana (La Habana 1952), Vol. VIII, pág. 96.

2.2.6) ESPAÑA SE DECIDE POR LAS REFORMAS: LA LEY ABARZUZA (1895).

Anulados por la reacción los esfuerzos de Maura, todo tomó ya un cariz cada vez más complejo y, desde luego, totalmente adverso, por razones internas y exteriores, a soluciones eficaces. Se abrió de nuevo el ciclo bélico cubano, enmascarando, así, con la necesidad de terminar la guerra, la implantación de reformas, y en el plano exterior Estados Unidos perfiló sus propósitos hasta el punto de truncar bruscamente el proceso. Un factor estaba en la base del problema y éste era el paso del tiempo, que ahondó las dificultades y distanció a las personas y a los grupos: las exigencias aumentaron, porque la evolución así lo demandaba. Había pasado ya mucho tiempo desde el Zanjón y de hecho no se habían llevado a cabo las reformas de una manera sistemática y completa; reformas que, por otra parte, habían sido pedidas con insistencia a lo largo de estos años.

En relación con estas cuestiones, Labra analizó los errores cometidos, a su juicio, por el Gobierno metropolitano, valorando la política llevada a cabo por éste. Según su criterio, las torpezas del Gobierno conservador en materia de Administración y de Hacienda habían producido, especialmente en Cuba, una gran desorganización, que amenazaba gravemente la estabilidad del edificio colonial. Una de las consecuencias de esta desacertada política era la debilidad de los partidos e incluso su desaparición a corto plazo, de donde se seguiría la quiebra del sistema, dado que éste no podía funcionar sin la existencia de aquéllos. Frente a este panorama se alzaba la voz de los reformistas, que tenían que contrarrestar los injustos ataques de que eran víctimas, haciendo pública manifestación de su sinceridad y de su patriotismo y exponiendo sus soluciones políticas y económicas. En última instancia, estos esfuerzos habían cristalizado en el Proyecto de Maura, que, si bien suponía

un avance, estaba todavía lastrado por bastantes incertidumbres y contradicciones.

Dentro de ese contexto, debía evitarse la reducción más o menos absoluta del empeño antillano a los límites de Cuba y Puerto Rico. La reforma pacífica, progresiva y fecunda que requerían las necesidades de aquellos países e imponía el prestigio de la metrópoli española exigía una campaña vigorosa, bien inspirada y permanente en el seno de la Madre Patria y sobre aquellos elementos nacionales que tenían que resolver el problema ultramarino como uno de los varios importantes de España. Insistir en el esfuerzo aislado en Ultramar equivalía a mantener sobre aquellos insulares la antigua marca del colonialismo, aunque la forma y el pretexto parecieran distintos. Por eso, había que repetir a todas horas que la única solución decorosa, justa y de porvenir para España en relación con las Antillas y con la Nueva América, donde vivían millares de españoles y donde renacía un gran sentimiento de amor a la antigua Madre Patria, era la autonomía colonial, entendiéndose que con esta política no se atendía sólo a un interés particular o regional, sino a un problema general y decisivo para la nación (1). De esta forma, cuando se quiso hacer lo que se debía haber hecho antes fue demasiado tarde, aunque, no obstante, tuvo lugar un proceso reformador.

Puestas así las cosas y dimitido Maura, Sagasta formó nuevo Gobierno el 12 de Marzo de 1894, en el que tomó posesión de la cartera de Ultramar don Manuel Becerra. En Cuba, desde la fundación del Partido Revolucionario, las cosas habían empezado a complicarse, repercutiendo los resultados de la gestión de Maura y produciéndose levantamientos insurreccionales en Holguín, Lajas, Rodas (1893) y Ranchuelo (1894), que, aunque sofocados pronto, eran síntoma de un estallido revolucionario más amplio.

Poco después, se confirmó la existencia de activos focos en Veracruz, Haití, Tampa, Cayo Hueso, Costa Rica y Nueva York (los separatistas, que esperaban el desahucio del autonomismo y el desaliento reformista, desataron una intensa campaña a través de los periódicos y por medio de reuniones y conciliábulos).

Durante el verano de 1894, el prestigioso autonomista don Rafael Montoro, en una serie de discursos pronunciados en Cuba, ratificó la resolución del partido de "mantener la paz material y la quietud de los espíritus", pero apremió al Gobierno, para que cumpliera al fin el compromiso solemnemente contraído y evitase "que la desgraciada tierra cubana fuera víctima de un nuevo engaño" (2). Mientras tanto, en Madrid continuaron los debates sobre las cuestiones ultramarinas. En el Senado, el señor Pando preguntó sobre el cumplimiento de las leyes dictadas para las Antillas, y don José Fernando González inició, al inquirir sobre las reformas de Ultramar, un pequeño debate, en el que intervinieron, además del mencionado Senador, el Ministro de Ultramar, el señor Estaban Collantes, el Vicepresidente del Senado y el Conde de Tejada de Valdosera (3). En el Congreso, el señor Calbetón, en busca de soluciones que favoreciesen los intereses cubanos y los peninsulares, presentó, en nombre del Partido Reformista, una exposición, cuyos puntos fueron aceptados, en líneas generales, por el constitucionalista Carvajal y Domínguez (4).

En el mes de Julio y con motivo de la discusión sobre la cuestión presupuestaria, se celebró un debate acerca de la credibilidad de las ideas autonomistas. El señor Sanchís indicó que todo asunto autonomista, por su proximidad al separatismo, debía ser tratado con cautela. Carvajal y Domínguez demostró su hostilidad hacia el autonomismo, y Becerra defendió, como era lógico, la posición del Gobierno (5). Por su parte, Maura,

apoyado por el señor Dolz, delimitó con gran claridad las características de la doctrina autonomista y su buena ley política, enfrentándose a Romero Robledo, quien, defendido por el señor Borés y Romero, hizo una apología de la ideología asimilista (6), mientras que Labra señaló la desastrosa situación económica antillana, fruto de la deficiente administración de la metrópoli.

Con respecto a la cuestión política, Labra manifestó que la doctrina autonomista, lejos de ser una derivación del separatismo, suponía una rectificación de éste. El asimilismo y la centralización como ideología no sólo eran deplorables en el orden teórico, sino que conducirían directamente "a la pérdida de nuestro Imperio colonial", tal como se derivaba de la experiencia histórica, según la cual ninguna colonia se había mantenido mediante semejante sistema (7). Por otro lado, Cánovas, haciéndose eco de los acontecimientos cubanos, habló meses después a las minorías de su partido, llamando la atención acerca del peligro que corría la soberanía española en Cuba (8).

En estas condiciones y dada la agitación provocada por el separatismo, se volvió a pensar de nuevo y más seriamente en las reformas, y ya que la Unión Constitucional se mostraba más propicia a transigir y ante la posición de Castelar en relación con la entrada de un posibilista en el Gobierno, Sagasta efectuó un nuevo reajuste, en virtud del cual el 5 de Noviembre de 1894 juró el cargo de Ministro de Ultramar don Buenaventura Abárzuza, persona adecuada para negociar la transacción que se buscaba en el asunto cubano. A los pocos días, recogiendo el ambiente existente, don José Fernando González formuló en el Senado una petición referente a las reformas, preguntando sobre qué base se montaría la ya esperada transacción (9).

A pesar de todo, la atmósfera en Cuba se iba cargando de forma paulatina. Martí estaba fraguando el plan de invasión de "Fernandina", los ánimos estaban tensos y a fines de 1894 muchas personas de la isla estaban convencidas de que se acercaba una insurrección de gran importancia. Esta agitación repercutió en el Parlamento, en donde Romero Robledo desató una campaña, a principios de Diciembre, en la que los miembros de la Unión Constitucional atacaron a los reformistas, acusándoles de ser con sus proyectos los verdaderos causantes de la exacerbación separatista. En el transcurso de la polémica, Salmerón acusó a los conservadores de haber sido, hacia 1868, partidarios de la enajenación de Cuba, al leer párrafos de un artículo, inserto en 1869 en el "Diario de Barcelona", obra de Juan Mañé y Flaquer. Cánovas defendió la posición de sus correligionarios, negando tal aseveración, en tanto en cuanto significase toma de postura de partido y no simple opinión personal, para concluir, utilizando las palabras del Marqués de Pidal en 1849: "ningún Ministro ni de estos bancos, ni de los de enfrente podrá entrar jamás en esas negociaciones, ni habrá Cortes que las sancionen, porque España podrá perder la Isla de Cuba, si la fatalidad así lo ordena, pero cederla, jamás, nunca, a nadie" (10).

El 14 de Diciembre, Abárzuza presentó en el Congreso un Proyecto de Ley sobre Reforma del Gobierno y Administración Civil de Cuba y Puerto Rico, y poco después arribaron las primeras exposiciones, presentadas por los señores Montoro y Amblard, en nombre de las Diputaciones Provinciales de Puerto Príncipe y de La Habana, respectivamente (11). Un día antes, Labra interpeló al Gobierno en relación con la supresión de los derechos de carga y del impuesto industrial establecido sobre los azúcares y las mieles de Cuba, cuestión que fue contestada por el Ministro de Ultramar (12). El 10 de Enero de 1895, las Cortes reanudaron sus tareas tras el paréntesis navideño prosiguió también la llegada

de exposiciones, como la entregada por Amblard en representación de las Diputaciones Provinciales de Matanzas y Santa Clara y del Ayuntamiento de Puerto Príncipe (13). Aquel mismo día se publicó la reforma del régimen arancelario de Cuba y Puerto Rico, que suponía la denuncia del Tratado firmado con Estados Unidos en 1891, y el 14 del mismo mes, Abárzuza envió al Congreso un proyecto acomodaticio en materia de relaciones comerciales con Norteamérica, tendente a consolidar las relaciones económicas de las Antillas con la Unión.

Por otra parte, continuaban sobre el tapete las reformas de Cuba y Puerto Rico presentadas por Maura, de las que Sagasta no quiso ahora prescindir. Se produjeron activas negociaciones, llevadas en primer término por Romero Robledo en busca de una base transaccional y, por fin, el 17 de Enero se hizo pública una fórmula de solución, a la que, mediante recíprocas concesiones, acababan de llegar con el Gobierno los representantes de los partidos cubanos. La idea consistía en sustituir la Diputación única del proyecto de Maura por un Consejo de Administración dotado de amplias facultades.

En efecto, el proyecto repartía entre las Diputaciones Provinciales, que se mantenían, y los Consejos Insulares de Administración Local las facultades autonómicas, que Maura concentraba en la Diputación Insular. En realidad, esta fórmula, a la que se habían opuesto los conservadores y que ahora aceptaban por considerarla, como dijo Cánovas, "organización regional, que es cosa distinta, de que sea autonómica", al establecer las nuevas bases para la reforma del régimen administrativo de Cuba y Puerto Rico sobre el principio de la descentralización administrativa, no hacía más que seguir los pasos de Maura. En verdad, se trataba de un sucedáneo de su proyecto, sólo que más moderado y con la diferencia de que el de Abárzuza alcanzó rango de ley y aquél no.

El proyecto se configuraba de la siguiente manera. Persistían las seis antiguas Diputaciones Provinciales ya existentes, pero las facultades de aquella otra Diputación única, ideada por Maura, se repartían entre aquéllas y un Consejo de Administración, que veía, así, aumentadas sus atribuciones. Dicho Consejo de Administración se ampliaba en el número de sus miembros, que ahora se componía de treinta, nombrados la mitad por la Corona y elegidos los otros quince, con un mandato de cuatro años, entre organismos insulares y por el mismo censo que las Diputaciones Provinciales; el Gobernador General presidía este Consejo, al que se encomendaba, lo mismo que antes, la misión de formar anualmente los presupuestos y de elevarlos a las Cortes; los Vocales natos del antiguo proyecto integraban una Junta de Autoridades, a que se la asignaban funciones propias, auxiliares de las del Consejo de Administración, ante el cual podían alzarse los Ayuntamientos de la isla en relación con los acuerdos emanados de las Diputaciones respectivas, emancipándose, así, del poder central.

Iniciados en el Congreso los debates previos, se pasó, después de presentadas diversas enmiendas, a la discusión del dictamen. Los señores Rodríguez Sampedro y Carvajal y Hué se pronunciaron en contra de la totalidad (14), mientras que Rodrigáñez y Morales lo hicieron en pro (15), al tiempo que Montoro, Amblard y Romero Robledo hicieron unas extensas declaraciones, mostrándose favorables al proyecto, de manera total, los dos primeros y con reservas el segundo (16). Don Francisco Silvela afirmó que la fórmula contaba con su aprobación y el señor Martín Sánchez aprovechó la ocasión para atacar a los autonomistas, en lo que fue apoyado por Laserna y replicado por Morales y Gutiérrez Abascal. Cerró las intervenciones de aquel día el Ministro de Ultramar, Abárzuza, que hizo una exposición y defensa de su plan (17).

Por su parte, Maura indicó que la obra reformista se convertiría en una fuerza de pacificación, y Cánovas, que aceptó las reformas a título transaccional, dijo: "¿Quién puede negar que la Isla de Cuba necesita una organización regional, que es cosa distinta, de que sea autonómica...? La Isla de Cuba obedece, necesariamente, a un principio regional y esto lo demuestra su manera de existir ahora mismo, aun antes de que se establezcan las reformas. Porque el Gobierno General y la Capitanía General de la Isla no son asimilables, en realidad, a otros órganos del Estado en la Metrópoli". En otro momento de su discurso y contestando a Labra, que se mostró de acuerdo en líneas generales con el proyecto, el jefe del Partido Conservador declaró: "Sabe el señor Labra que al tratar sobre estas materias he partido yo, siempre, de dos principios capitales. Era el primero, que los partidos españoles no podían transigir ni en poco ni en mucho con la aspiración separatista y que enfrente de ella nosotros teníamos que oponer una resistencia que nos llevara, con harto dolor del alma de todos los españoles, a las consecuencias de la guerra. Era la segunda, que nosotros estamos dispuestos a dar a la Isla de Cuba, en orden a libertades públicas y a descentralización, cuanto pudiera apetecer" (18).

Por su parte, Labra aprovechó la ocasión para puntualizar algunas cuestiones. La autonomía colonial no se resolvía, pura y simplemente, por el hecho de obtener del poder central facultades y atribuciones para llevarlas al otro lado del Atlántico y confiarlas a instituciones o centros de carácter más o menos burocrático o privilegiado. La autonomía no podía limitarse a una derogación de facultades del poder central, sino que consistía en delegar aquellas facultades, que no implicasen en lo más mínimo mengua de derechos, correspondientes a la soberanía nacional, a centros populares e instituciones similares a las de la metrópoli. En este sentido, era indispensable separar

el presupuesto nacional del local. En el presupuesto nacional se concentraban las necesidades de la nación en la forma y en la cuantía determinada por la voluntad de las Cortes y a esos gastos generales tenían que contribuir las colonias o provincias de Ultramar con la cuota que les correspondiese en condiciones análogas a las de las provincias de la Península. Pero, por otro lado, bajo la autoridad suprema del Gobierno, con la intervención en su caso de las Cortes y manteniendo íntegro el "derecho imperial", las Antillas debían tener la facultad de determinar sus presupuestos locales y de fijar, no sólo sus gastos, sino sus ingresos para satisfacer aquéllos y para pagar la cuota que les correspondiera en vista de las necesidades generales o nacionales que las Cortes señalasen, si bien la fijación de la mencionada cuota debía ser competencia de la representación nacional y no de las Asambleas Insulares. En el orden doctrinal, la autonomía era un principio aplicable, tanto al individuo como al municipio, a la región, a las provincias de Ultramar o a la nación, cuyos círculos se condicionaban de manera orgánica. Por ello, constituía un absurdo pensar que los autonomistas quebrantaban la idea de la unidad del Estado y comprometían la vida nacional, ya que todos esos conceptos eran absolutamente incuestionables dentro de la doctrina del autonomismo. Del mismo modo, era preciso que se entendiera que el Partido Autonomista antillano era, por declaración expresa de su propio programa un partido, radicalme, un partido radicalmente democrático y que todo cuanto se decía en él era de realización urgente sin distingos, reservas ni equívocos.

Así, pues, se hacía completamente necesaria la adopción del principio de identidad de los derechos de los ciudadanos, así como del procedimiento de la descentralización con vistas a la autonomía y en orden a la realización de dos objetivos: la mayor atención posible a los asuntos locales en las Antillas y el

descargo de responsabilidades en la metrópoli. Ciertamente, el mantenimiento de este tipo de preocupaciones desde el punto de vista del poder central era la principal causa de las quejas, recelos, críticas, perturbaciones y desastres propios de las colonias contemporáneas, a las cuales había puesto término la solución autonomista. Por otra parte, estaba el problema de Puerto Rico, cuya situación era de todos conocida y ante la cual se hacía necesario acabar con el retraimiento político y restaurar la paz moral, al objeto de hacer la reforma electoral y otorgar a la Pequeña Antilla la plenitud de derechos en condiciones tales que no fuera posible situarla en pie de inferioridad respecto de Cuba o de la Península (19).

El 13 de Febrero de 1895 se pasó a la discusión del proyecto por Bases. El artículo 1º, que constaba de cinco, quedó aprobado entre los días 13 y 14 (la Base 1a. lo fue sin discusión, lo mismo que la 3a. y la 5a., la 2a. con dos enmiendas, presentadas por los señores Calbetón y Vergés y la 4a. con una parte aceptada de la enmienda del señor Auñón); el artículo 2º, con otras cinco Bases más, quedó, totalmente, dilucidado el día 15 (la 1a. Base con una enmienda de Soler, la 2a. con una de García Malinas, la 3a. con dos de Soler y Casajuana y una corrección de Spottorno, la 4a. con varias de Auñón y Gullón y la 5a. con una corrección, propuesta por la propia comisión), y el mismo día 15 quedó aprobado el resto del articulado (el artículo 3º con enmiendas de Labra y Giberga y una nueva redacción, propuesta por Rodrigáñez; el artículo adicional con varias enmiendas más de Santos y Fernández Laza y la disposición transitoria sin discusión, añadiéndose una más presentada por el señor Giberga), llegándose el día 18 a la votación definitiva, tras la cual el proyecto quedó totalmente aprobado por el Congreso con la aquiescencia de todos los partidos.

Cuando la noticia llegó a La Habana produjo general entusiasmo. El Partido Autonomista, que ya se había mostrado de acuerdo, tal como lo había expuesto don Eliseo Giberga, uno de sus representantes, y el Partido Reformista, aliados en los últimos tiempos contra la resistencia de los constitucionales, confraternizaron ahora con éstos en la común alegría. Así, pues, los insulares en general festejaron el advenimiento de unas reformas que franqueaban su intervención en los asuntos isleños, regidos hasta entonces por la burocracia metropolitana. Los productores y los comerciantes pensaron, por su parte, que el cambio político pondría término también a la discriminación económica, ya que hasta entonces, como españoles, habían sido excluidos de algunos mercados extranjeros y como coloniales apenas habían hallado entreabierto el de la Península (20).

El día 20 de Febrero, la fórmula de Abárzuza pasó a la Cámara Alta, donde tan sólo se produjeron algunas pequeñas discusiones. Los señores Ortíz Pinedo y Marqués Trives se manifestaron en contra (21), el señor González Olivares, el Marqués de Villasegura (22), don José Fernando González (23) y Becerra (24), entre otros, lo hicieron a favor y el Conde de Tejada de Valdosera mantuvo una postura ecléctica (25). Todos los artículos, con sus correspondientes Bases, fueron aprobados el día 2 de Marzo, prácticamente sin debate alguno y tan sólo con las respectivas oposiciones de Pando y del Conde de Tejada de Valdosera a las Bases 1a. y 3a. del artículo 1º, pasándose a la votación definitiva dos días después. De esta forma, el 13 de Marzo de 1895 el plan de Abárzuza fue definitivamente sancionado para convertirse dos días más tarde en la Ley de Bases para el Régimen del Gobierno y la Administración Civil de las Islas de Cuba y Puerto Rico. La Ley quedó distribuida en tres artículos más dos disposiciones transitorias (los dos primeros contenían cinco Bases cada uno y el texto legal era similar para ambas

islas, respondiendo las diferencias entre ellas a las naturales peculiaridades de aquéllas (26).

Poco después de que se aprobase en el Congreso el proyecto de ley, concretamente, el 24 de Febrero de 1895, las intentonas separatistas fraguaron en el llamado "Grito de Baire", con el que se abrió la segunda guerra de la independencia cubana. Desde entonces, el empleo de la fuerza se impuso a las reformas y la ley no llegó a aplicarse en Cuba, aunque Abárzuza declarase en el Senado que las reformas se implantarían inmediatamente, a pesar de los sucesos acaecidos (27). A este respecto, Labra recordaría, poco después, que la insurrección, que a su juicio se podía haber evitado, no tenía, precisamente, otro origen más que el aplazamiento de la discusión y del planteamiento de las reformas y el soslayo de la ampliación del derecho de sufragio a las Antillas. Además, el movimiento insurreccional no parecía que tuviese visos de concluir, si se insistía en la política exclusivamente militar y en la enorme injusticia de no plantear en Puerto Rico la ley reformista, votada por las Cortes (28). De esta forma, cada vez se agotaban más las posibilidades de solución, puesto que los elementos oligárquicos durante los diez años transcurridos desde la muerte de Alfonso XII no habían acertado a resolver el conflicto de Cuba, "que al morir el Rey se hallaba positivamente, en vías de pacífico desenlace". Sin embargo, la actitud adoptada en el sentido de posponer las reformas al fin de la guerra tenía su razón de ser y, hasta cierto punto, era comprensible (29).

A todas estas complicaciones vino a sumarse un ambiente político cubano totalmente enrarecido y lleno de disidencias y de enfrentamientos, en especial desde la época de Maura, aunque eventualmente se hubiera producido un acuerdo con motivo de la Ley Abárzuza. En efecto, el Capitán General Calleja, enviado a

Cuba para implantar las reformas que Maura pensaba llevar adelante, intentó cumplir con su deber lo mejor que pudo, pero tropezó con grandes obstáculos, aunque procuró ser equitativo con todos los partidos políticos sin caer, como sus antecesores, en el error de proteger exclusivamente a la Unión Constitucional. Entre otras cosas, aplicó el espíritu de las reformas, en lo que estuvo en su mano, se abstuvo de intervenir en las luchas de los partidos e hizo posible que los reformistas y los autonomistas contendiesen en pie de igualdad con los constitucionales, colocados hasta entonces en situación de privilegio.

No obstante, existía una gran desigualdad entre las fuerzas sociales de cada partido y el número y la calidad de las posiciones políticas respectivamente ocupadas (30). En estas circunstancias, aun complicó más las cosas la disidencia que se produjo al formarse bajo la presidencia de don Ramón Herrera, Conde de la Mortera, el 30 de Julio de 1893, el Partido Reformista, que surgió como un desgaje de la Unión Constitucional al apoyar un sector de ésta los proyectos de Maura. Al tener lugar esta separación, los asimilistas de la Unión Constitucional cerraron filas y se mostraron más intransigentes, con lo que quedó entorpecida toda labor, fue difícil llegar a acuerdos y se obstruyó el proceso de evolución política, polarizándose las fuerzas prepotentes, de una parte, en la intransigencia y de otra, en el separatismo, lo que supuso que los partidos intermedios quedasen desplazados y peligrosamente inclinados hacia la insurrección. En última instancia, Calleja se vió desbordado por los asimilistas y por el autonomismo extremista, con lo que se desarrolló una intensa campaña en su contra, dirigida sobre todo por la Unión Constitucional y destinada a provocar su relevo (31).

Puestas así las cosas, se produjo la aprobación de la

fórmula de Abárzuza, que borraba las luchas partidistas, ya que todos estaban llamados a realizar una labor común, integrando un frente único para gestionar los propios intereses insulares, fuera del cual toda acción se convertía en separatista. Sin embargo, al producirse el alzamiento insurreccional, los avenidos circunstancialmente en Febrero volvieron a la intransigencia doctrinal y a resucitar pasados agravios. Todo el que abogó por las reformas fue tachado de mal español, ya que con su actitud daba alientos a los enemigos de la patria, y los autonomistas y los reformistas, considerados separatistas falsamente convertidos, fueron acusados de haber influido sobre el Capitán General, impidiéndole atajar a tiempo la insurrección, que, aunque sofocada en las provincias centrales, subsistía y aumentaba en Oriente (32). De esta forma, los cubanos, que aguardaban impacientes, aunque confiados, la implantación de las reformas prometidas y aprobadas por las Cortes, quedaron relegados una vez más al olvido.

N O T A S.

- (1) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Colonial en 1893, "La Justicia" (Madrid), VII, núm. 2.156 (Suplemento) (2-1-1894).
- (2) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 203, Nota núm. 1.
- (3) Diario de Sesiones del Senado, 6 de Junio de 1894.
- (4) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 11 de Junio de 1894.
- (5) Ibid., 9 de Julio de 1894.
- (6) Ibid., 10 de Julio de 1894.
- (7) Ibid., 11 de Julio de 1894.
- (8) Ibid., 7 de Octubre de 1894.
- (9) Diario de Sesiones del Senado, 13 de Noviembre de 1894.
- (10) Ibid., 10 de Diciembre de 1894.
- (11) Ibid., 22 de Diciembre de 1894.
- (12) Ibid., 21 de Diciembre de 1894.
- (13) Ibid., 10 de Enero de 1895.
- (14) Ibid., 7 y 9 de Febrero de 1895.
- (15) Ibid., 8 y 9 de Febrero de 1895.
- (16) Ibid., 9 de Febrero de 1895.
- (17) Ibid., 12 de Febrero de 1895.
- (18) Ibid., 13 de Febrero de 1895.
- (19) Ibid., 13 de Febrero de 1895.
- (20) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 204.
- (21) Diario de Sesiones del Senado, 20 y 28 de Febrero de 1895.
- (22) Ibid., 28 de Febrero de 1895.

- (23) Ibid., 1 de Marzo de 1895.
- (24) Ibid., 2 de Marzo de 1895.
- (25) Ibid., 1 de Marzo de 1895.
- (26) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 14.
- (27) Diario de Sesiones del Senado, 2 de Marzo de 1895.
- (28) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Colonial en España. (En las Antillas) (Madrid 1896), págs. XI-XII.
- (29) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 214.
- (30) Ibid., Vol. I, pág. 221.
- (31) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, pág. 205.
- (32) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 222.

2.2.7) NUEVOS DERROTEROS POLITICOS.

Ante la marcha de los acontecimientos, Sagasta presentó su dimisión irrevocable, y el 23 de Marzo de 1895, Cánovas, tras volver al poder, constituyó un nuevo Gobierno, en el que figuraba como Ministro del Ultramar don Tomás Castellano. Desde este momento, la guerra fue el centro de todas las preocupaciones (el 28 de Marzo de aquel mismo año, Calleja fue relevado del mando y sustituido por el pacificador del Zanjón, don Arsenio Martínez Campos y, posteriormente, fallido el intento contemporizador de éste, se optó, con la idea de terminar la guerra, por el recrudecimiento de la política de fuerza, para lo cual se envió a la Capitanía General (20 de Enero de 1896) a don Valeriano Weyler).

A pesar del ambiente creado por el movimiento insurreccional, claramente hostil a la adopción de medidas de concordia, Labra continuó propugnando una vía de solución política, según la cual el camino para abordar la insurrección pasaba por las reformas, como principal y más eficaz medio de pacificación. Ciertamente, la insurrección de Cuba necesitaba ser reprimida enérgicamente con recursos materiales y de fuerza, pero al lado de esos medios materiales hacían falta los recursos morales. Dentro de esa situación, debían plantearse inmediatamente las reformas en Puerto Rico, donde constituirían un éxito, lo cual reforzaría la adopción de medidas semejantes en Cuba. Aunque aparentemente en la Gran Antilla se hiciese muy difícil plantear este tipo de cuestiones, dado el estado bélico allí existente, no por eso debía abandonarse dicho camino, que, en último término, constituía la fuente de solución del conflicto. La postura del Gobierno, influída por el ambiente belicista, se reflejó en las respuestas del Ministro de Ultramar, señor Castellano (1).

En las cuestiones relacionadas con los problemas ultramarinos debían tenerse en cuenta tres órdenes de problemas. Uno era aquel que afectaba en general a la política española, en cuyo contexto el problema ultramarino era sólo una determinación, que no debía oponerse al orden general establecido para toda la nación. Luego venía un orden puramente colonial, que afectaba a Cuba y a Puerto Rico. Y, por último, había un orden concreto, que afectaba a los intereses particulares de cada una de las provincias con circunstancias propias y características, lo cual determinaba que, siendo los principios comunes en su modo de aplicación, variasen en cada una de ellas, según la representación de cada uno de estos principios. En relación con la situación reinante en Cuba, si bien era delicada, no por ello dejaba de perfilarse una voluntad decidida de concluir la insurrección, acompañada de los correspondientes medios y recursos para vencerla. Esta discusión determinó la intervención de los señores Alvarado, Castellano, Ministro de Ultramar, y Pedregal, precedida de una contestación del señor Laserna (2). Poco después, Labra preguntó al Gobierno sobre la rectificación del censo electoral y sobre el aplazamiento de las Elecciones provinciales y municipales en Cuba y en Puerto Rico, siendo contestado por el a lo que le contestó el Ministro del ramo (3).

Al día siguiente, al plantearse la discusión sobre los presupuestos de Cuba, Labra aprovechó la ocasión para cuestionar la política ultramarina. Como autonomista, se mostraba cada vez más radical en sus convicciones, aunque dentro de las tradiciones españolas. Mantenía la necesidad de dar toda la vida posible a las corporaciones insulares y la plenitud política dentro de la integridad de la patria, reconociendo a dichas corporaciones el derecho de hacer el arancel bajo la protección y con la garantía de la soberanía nacional. No obstante, debía conservarse incólume todo lo que representase la unidad y la soberanía, todo lo que

constituyese la fuerza política de la patria española, que se presentaba como el resultado positivo de la voluntad de los representantes de España. En consecuencia, solicitaba la extensión de la Ley Electoral, en las mismas condiciones que había en la Península, a Cuba y Puerto Rico, dotadas de valores culturales similares a los de la Madre Patria, para que pudiesen venir a España los diputados antillanos en condiciones análogas a los del resto de la nación y se diese aquí "la unidad de espíritu y de todas las aspiraciones". Por otra parte, había que respetar la ley y no bastaba con decir que se estaba inmerso en las circunstancias extraordinarias, determinadas por la guerra; ésta jamás debía justificar el abandono de las condiciones del orden representativo y parlamentario. Era preciso no caer en la tentación de pensar que, mientras durase la acción bélica, no se tenía que discutir en el Parlamento ni el presupuesto de Cuba ni ninguna otra cuestión política o económica de la Gran Antilla.

Concretamente, desde el punto de vista económico se necesitaba abrir por completo las puertas de las aduanas peninsulares a los azúcares y a los alcoholes de las Antillas, romper el monopolio del tabaco por el Estado y destruir la barrera de condiciones que sometía a los barcos españoles a una ley contraria al cabotaje, si bien había que reconocer la extraordinaria dificultad de luchar contra los intereses creados en esa materia. Asimismo, dentro del ámbito económico había en las Antillas dos tipos de problemas. En primer lugar, uno actual, quizá pasajero, pero al mismo tiempo urgente, derivado de la denuncia del Tratado con Estados Unidos, al que se unían la crisis bancaria y mercantil de Cuba, el resultado de la última zafra y la guerra existente en la Gran Antilla, lo cual suponía una perturbación total para la sociedad cubana y un dispendio extraordinario en hombres y en dinero para el Estado. Después, otro problema más fundamental, extenso y duradero, que entrañaba

la suerte definitiva de Cuba como país productor y en virtud del cual debía cambiar necesariamente su vida económica y, en particular, el carácter y el orden de su producción.

Ciertamente, se necesitaba libertad y tranquilidad, auspiciadas por unas instituciones democráticas y progresivas y por un Gobierno vigoroso, pero esto debía ir acompañado de las medidas precisas para que en un plazo más o menos largo se pudieran verificar los cambios necesarios dentro de las fuerzas productoras, que condujeran a un nuevo orden económico "en armonía con las novísimas exigencias de la producción y del consumo del Mundo contemporáneo". La discusión provocó una contestación del señor Villanueva y una intervención por parte del Ministro de Ultramar, señor Castellano, rectificada por Labra (4), para concluir con otra intervención de Rodríguez y Dolz (5).

En estas circunstancias, a fines de 1895 la "Revue Internationale" de París envió a Madrid a su redactor jefe, para que celebrase algunas conferencias con destacadas personalidades de la política española sobre la situación política y económica de España. Fruto de este trabajo fue la publicación, en el número correspondiente al mes de Diciembre de 1895 de la aludida revista, de las conversaciones de Henri Charriant con Castelar, Cánovas del Castillo, Sagasta, Pi y Margall, Silvela, Pidal, López Domínguez, Salmerón, Maura y otros, con la cuestión de Cuba como tema central. Uno de los entrevistados fue también Rafael María de Labra, cuyas opiniones reflejaban su pensamiento sobre el particular. Según Labra, la situación de la Gran Antilla era grave y peligrosa y todos sus habitantes estaban justamente alarmados. La guerra devastaba las provincias de Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Santa Clara y Matanzas, y como solía suceder en estos casos, junto a las bandas de insurrectos pululaban otras de

bandidos (cuatreros, salteadores y secuestradores), más o menos independientes de la masa formal de la insurrección.

Sin mercado para los azúcares, el tabaco y los aguardientes, Cuba no podía obtener una cantidad suficiente para cubrir sus gastos de producción, con lo cual se verían muy comprometidas sus posibilidades agrícolas, máxime con la inquietud que reinaba en los campos y la falta de recursos, de propietarios y colonos. A todo ello debía unirse los peligros propios del monocultivo, ya que Cuba sólo producía los citados artículos coloniales, cuyo monopolio constituía la principal razón de su enorme riqueza. Precisamente, ahí radicaba la mayor parte de sus dificultades y de sus peligros, aunque no hubiera existido la insurrección. Así, pues, era absolutamente necesario facilitar la transformación de la producción cubana frente a la miopía con que contemplaban dicha cuestión, tanto el Gobierno como los comerciantes catalanes. Mientras tanto, el panorama se mostraba desolador: los obreros, sin trabajo, no tenían siquiera para comer en muchas localidades y hacían oír alarmantes clamores; el crédito se perdía en el exterior y en el interior; el comercio estaba en suspenso; los negocios, paralizados; en una palabra, era imposible que pudiera continuar esta situación, sin que pronto sobreviniera la más espantosa bancarrota, la miseria, el hambre y la despoblación (6).

Hasta entonces la Gran Antilla había sido administrada de modo deplorable. Así, por ejemplo, en el orden electoral, Cuba tenía solamente un elector por cada cinco habitantes y Puerto Rico uno por cada doscientos veintiuno. La Pequeña Antilla, con ochocientos mil habitantes, sólo tenía cincuenta y dos mil con derecho a voto, ya que era preciso, para ser elector, pagar una cuota de cincuenta pesetas, mientras que Cuba, con millón y medio de habitantes, contaba únicamente con ochenta y cuatro mil

electores, que pagaban por serlo una contribución mínima de veinticinco pesetas. Esta contradicción entre las islas redundaba en perjuicio de Puerto Rico, donde la contribución del Estado era más baja y, por tanto, mayor la dificultad de una cuota electoral semejante a la de Cuba. De esta forma, las provincias españolas estaban más favorecidas que las ultramarinas. Así, las Antillas sumaban cincuenta diputados, treinta y cinco por Cuba y quince por Puerto Rico, para defender sus intereses, contra cuatrocientos de la Península, que hacían las leyes sin escuchar consejo alguno. En España imperaba el sufragio universal, pero no así en Ultramar, a pesar de que las comarcas peninsulares no superaban en riqueza, cultura, ni lealtad a las Antillas.

En España, el grupo de partidarios de la explotación colonial era, realmente muy reducido. Estaba formado por los interesados en los empleos públicos de Ultramar y por los comerciantes de ciertas regiones del litoral, que se aprovechaban de la insignificancia de las tarifas aduaneras para introducir en Cuba, bajo bandera española, productos extranjeros, nacionalizados al pasar por cualquier puerto de la metrópoli. En todo caso, era primordial el mantenimiento de la paz, aunque parecía que se mantendría la guerra como cuestión de honor. A ese respecto, los asturianos, los gallegos y los catalanes, que constituían la base de la emigración peninsular a Cuba, necesitaban del orden y de la prosperidad de la isla, que era para ellos una fuente de ingresos, y de la que sacaban grandes recursos para sus familias de la metrópoli, enriquecidas con este comercio. Por esta razón, resultaba indispensable hacer una propaganda vigorosa en favor de la paz y de la autonomía colonial, única solución que podía restablecer el orden. Ciertamente, sólo una campaña política muy enérgica podía por sus resultados terminar la guerra, ya que estaba probado que la insurrección había aumentado extraordinariamente en los últimos

años. Frente a ello, se promulgaban unos decretos de carácter marcadamente reaccionario y se completaban estas disposiciones con recompensas a los servidores del poder, caracterizados por sus opiniones ultraconservadoras.

Respecto de la manera política de encauzar la guerra, la opinión pública y el Gobierno estaban completamente preocupados por la cuestión municipal peninsular, con lo cual el Partido Autonomista se encontraba, de un lado, en la imposibilidad de obrar ante los ataques de los separatistas y ante la prevención de los conservadores, de otro. Por su parte, los elementos más arraigados del antiguo Partido Conservador se mantenían en cierta reserva, ya que juzgaban que el momento no estaba para intransigencias, pues Cuba no toleraría la idea de una nueva reconquista. Por esta razón, parecía posible hacerles comprender el interés de un acuerdo, dejando a un lado a los exaltados, que no tenían ningún prestigio en la isla. Por otro lado, el Partido Reformista estaba más indeciso y su actitud sorprendía si se recordaba la energía con que no hacía mucho había combatido a los conservadores. Por todos estos motivos, el único partido que tenía en Cuba auténtica fuerza e innegable vitalidad era el Autonomista que había vivido siempre sin el apoyo del Gobierno y cuya sinceridad y patriotismo, ahora más que nunca, debían ser aprovechados, dada la gravedad de la crisis existente, si bien era preciso reconocer que esta agrupación se hallaba muy quebrantada por la propaganda revolucionaria y por la actitud desdeñosa del Gobierno conservador (7).

De todas formas, era previsible que la guerra tomara aun mayores proporciones de las que había tomado hasta entonces, y, en todo caso, parecía bastante claro que el conflicto no se resolvería sólo con el empleo de la fuerza. Además, aunque la lucha terminara por la acción de las armas, presumiblemente

volvería a empezar al cabo de cuatro o de cinco años. Mientras tanto, Cuba quedaría arruinada y la metrópoli no podría mantener allí un ejército de ocupación, ni hacer frente a las necesidades de aquel territorio devastado. Por otra parte, Europa entera se mostraba favorable al establecimiento de la autonomía colonial en las Antillas, al tiempo que los insurrectos intentarían hacer un llamamiento a los Estados americanos para reforzar su postura. Puestas así las cosas, parecía que lo más aconsejable era establecer inmediatamente las reformas en Puerto Rico y en algunas regiones de Cuba, ya que las circunstancias se imponían y era preciso evitar a toda costa que la isla de Cuba se sublevara contra el Gobierno, confundiendo a éste con el Estado y con la nación.

Si bien era cierto que se habían acometido proyectos de reforma, lo cierto era que faltaba la voluntad política de realizarlos, con lo cual los largos debates y aplazamientos más aun que la insuficiencia positiva de tales proyectos produjeron en Cuba una inmensa decepción, aprovechada en beneficio propio por los separatistas. Dentro de ese contexto, era preciso poner de manifiesto que el dinero con que se había empezado y sostenido la insurrección procedía de los tabaqueros cubanos, establecidos en las islas y en las costas del golfo de México como consecuencia de las arbitrarias leyes fiscales peninsulares y de los Tratados de Comercio que combatían la libre exportación de los tabacos de Cuba. Frente a ello, se posponía la reforma arancelaria, reclamada en sentido liberal por todos los partidos políticos antillanos (8).

Desde el comienzo de la insurrección, quedaron suspendidas las garantías constitucionales en Cuba y paralizado el proceso reformista, como ya se ha visto, pero, bien fuera por convencimiento o por oposición política, el Partido Liberal,

pasados los primeros momentos, empezó a declararse cada vez más insistentemente en favor de las reformas. De esta forma, el 15 de Febrero de 1896 Sagasta reunió en su domicilio a una comisión de la mayoría de las dos Cámaras y les dijo que sin una verdadera representación de Cuba, las Cortes no podían ocuparse de los asuntos de aquella isla. En cualquier caso, si bien de momento las elecciones no podían celebrarse allí, si de alguna manera se llevaban a cabo, lo primero sería el planteamiento de las reformas. Sagasta terminó esta reunión con las siguientes palabras: "Nosotros hemos dicho, y lo ha dicho el Gobierno cien veces, que no se pueden plantear las reformas, porque el estado de guerra no permite hacer las elecciones que llevan consigo. Y si no se pueden hacer para plantear las reformas, ¿cómo se pueden hacer para Senadores y Diputados?. Eso sería un verdadero sarcasmo, una burla para aquel afligido país y un argumento irrefutable para los enemigos de España" (9).

Poco antes de verificarse las elecciones de diputados y senadores para las Cortes de 1896, Rafael María de Labra presidió unos Juegos Florales, que se celebraron en Sevilla en la primavera de aquel mismo año. Con tal motivo, fue obsequiado por sus correligionarios políticos sevillanos con un banquete, en el cual hizo unas declaraciones sobre la urgencia de la reforma autonomista; conceptos estos, que expuso de nuevo en un mitin celebrado en Cádiz a los pocos días, y que fueron, a su vez, publicados en el diario de aquella capital el 8 de Mayo de 1896.

Según general opinión de la prensa peninsular, la autonomía no podía ponerse en práctica en las Antillas por haber sido recomendada por el extranjero, cuando realmente lo que debía tenerse en cuenta era si dicha política estaba respaldada o no por la justicia y por la razón. En realidad, la solución autonómica había sido defendida desde hacía tiempo por un sector

de la sociedad y si lograba imponerse, sería gracias a los esfuerzos de este grupo y no a que así lo quisieran Gran Bretaña o Estados Unidos. No obstante, dentro de esta línea de actuación parecía conveniente seguir el ejemplo de las grandes naciones coloniales, que aleccionadas por sus propias experiencias, al objeto de conservar su soberanía, habían sabido elevar al mismo grado de libertad que la metrópoli a lejanos territorios, que, de esta manera, habían quedado no explotados, sino protegidos y amparados por el poder metropolitano.

Por otra parte, se hacía absolutamente necesario hablar de la cuestión de Cuba, rompiendo el llamado silencio patriótico, de tal modo que todos los partidos políticos presentaran sus fórmulas de solución, para que el país eligiese la forma más adecuada. En cualquier caso, la guerra cubana determinaba en primer término, un hecho positivo: la vitalidad de la patria, que había sido capaz de organizar, en medio de desgracias y de angustias, un ejército, destinado a defender los derechos legítimamente conquistados. En este sentido, debía acabarse con la costumbre de eximir a clases enteras del deber de entregar su sangre por la nación, por lo cual se imponía, con carácter de urgencia, la organización definitiva del servicio militar obligatorio sin redención pecuniaria.

En el ámbito internacional era preciso admitir que España se encontraba sola en Europa frente a Estados Unidos y ello por haber seguido una política equivocada al respecto. Ciertamente, la administración colonial española estaba reñida con las ideas y con los sentimientos vigentes en Europa; por eso, todos reconocían los derechos de España, pero aconsejaban que se llevase a las Antillas la autonomía como fórmula acorde con la marcha de los tiempos. Así, pues, no se debía escatimar el esfuerzo militar, pero para realizar después la libertad, la

moralidad y la equidad por medio de la autonomía. De esta forma, al planteamiento bélico tenía que añadirse la acción política, de manera que la presencia de España se mantuviera no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de todos y por una aspiración general de justicia.

En estas circunstancias, el esfuerzo de carácter político se hacía más necesario, si se consideraba que de entre los grupos que formaban parte de la insurrección, un importante núcleo estaba constituido por los despechados y por los desengañados de falsas promesas, que ni siquiera se habían realizado en Puerto Rico, que en pago de su abnegación sufría el yugo del caciquismo y la falta de libertades. Tal como estaban las cosas, la única solución viable para el problema más grave de cuantos aquejaban a la nación, es decir, para el problema ultramarino, consistía en la autonomía, la cual avivaría las fuerzas locales, reduciendo las responsabilidades de la metrópoli y poniendo una nota de armonía en las ya enrarecidas relaciones de la Península con las provincias de Ultramar. Unicamente así se anularía la burocracia y perdería su prestigio la política de la fuerza, elementos ambos que tanto habían contribuido a crear la situación existente (10).

Por su parte, las elecciones en la Península se efectuaron el 12 de Abril de 1896, y el 9 de Mayo Cánovas, a pesar de estar aferrado a la "política guerrera", manifestó ante los diputados y senadores electos que, no obstante, la importancia que habían adquirido los problemas de Cuba y la necesidad de hacer un frente común entre ellos, había que prepararse en el sentido de no pensar únicamente en la guerra, sino en las concesiones, aunque no perdiendo tampoco de vista que las solas concesiones no contentarían a los separatistas (11). Así, pues, la guerra no era incompatible ya con posteriores

concesiones, aunque las campañas periodísticas seguían abogando por la política de la guerra y algunos diarios incluso acusaban de blando a Weyler. Dentro de esta línea de actuación, el 10 de Mayo, víspera de la apertura de Cortes, Sagasta reunió en su casa a los prohombres del Partido Liberal para deliberar sobre el tema de las reformas: Núñez de Arce, Canalejas y Becerra se decantaron por un aplazamiento; Gamazo, León y Castillo y Maura por una aplicación inmediata y Moret propuso un voto de confianza al Gobierno (12).

Al día siguiente, las Cortes inauguraron sus tareas parlamentarias, iniciándose la sesión con el Mensaje de la Corona, que, si bien prometía reformas, las proponía para cuando reinase la paz: "Fácilmente, será admisible la asimilación, en cuanto sea posible, aunque nada resolvería esto solo de por sí en el estado, en que por necesidad dejará la Isla la insurrección después, que tenga fin. Cuando tal caso llegue, preciso ha de ser, para que la paz se consolide en ellas el dotar a entrambas Antillas de una personalidad administrativa y económica de carácter, exclusivamente local, pero que haga expedita la intervención del país en sus negocios peculiares, bien que manteniendo intactos los derechos de la soberanía e intactas las condiciones indispensables para su subsistencia" (13).

Aquel mismo día, Sagasta dijo en el Senado que el Partido Liberal "procuraría, que las reformas se planteasen" (14). El Mensaje puntualizaba también entre otros términos, que las reformas aprobadas por las Cortes eran ventajosas para Cuba, por lo que "los revolucionarios habían precipitado el movimiento a fin de evitar que perjudicaran sus aspiraciones", y que la Ley Abárzuza no se aplicaba, porque los autonomistas y los reformistas la consideraban ya insuficiente y por la propia guerra que, por otra parte, no lo permitía. Por último, se daba a

entender que era preciso modificar la ley y que sería otra más avanzada la que se implantaría tras lograr la pacificación, ya que el Gobierno "no había abandonado, ni abandonaría un instante el estudio de la futura legislación de las Antillas, para cuando tras nueva intervención de las Cortes y llegada su oportunidad, hubiera de establecerse definitivamente" (15).

Las discusiones del Mensaje de la Corona fueron abundantes. En el Senado, Labra, quien como autonomista exigía soluciones más drásticas, consideró las reformas del todo insuficientes. La solución de todos los conflictos estaba en la fórmula, proclamada por el autonomismo, según la cual se conseguiría la fortificación de los derechos de la localidad y la integridad de la patria. Interesaba igualmente no sólo en orden a la consagración de un derecho político, sino también en relación con los intereses de la vida económica, dinamizar todos los esfuerzos para lograr, que se sostuviera enhiesta en las Antillas "la bandera de España, rodeada de todos los prestigios y de todas las energías de nuestra raza gigante". Por otra parte, constituiría un descrédito, tanto en España como en Cuba que el Partido Autonomista no aprovechara la ocasión para hacer constar en el Parlamento que los autonomistas estaban dispuestos a cooperar de todas las formas posibles "al mantenimiento de la integridad de la Patria y a la conquista de las libertades". Las soluciones que, de momento, parecían necesarias en el doble concepto de satisfacción de los problemas ultramarinos y de remedio de los conflictos presentes debían orientarse en el sentido de discutir, precisar y comprender todo el fondo y la transcendencia del problema cubano.

En función de ello, era conveniente discutir en el Parlamento español estos asuntos. Incluso en la situación creada por la guerra, no era lícito mantener lo que algunos llamaban un

"silencio patriótico", antes al contrario, era absolutamente necesario dar solución a los problemas planteados en las Antillas, ya que si no se produciría "la muerte de nuestra representación colonial", lo cual conllevaría "nuestro descrédito y nuestra ruina". Así, pues, se hacía absolutamente necesario plantear una fórmula definitiva, que resolviera los problemas ultramarinos mediante la creación de una personalidad administrativa y económica, que sin menoscabo de la soberanía de la nación diera capacidad y medios al país cubano y a las Antillas en general para atender a sus propias obligaciones. Además, dadas las circunstancias existentes, las soluciones no podían quedarse en las reformas de 1895; se debía ir a la plenitud de las facultades y de las exigencias de la localidad dentro de la soberanía española, tanto en Cuba como en Puerto Rico. En función de todo ello, no cabía más remedio que exigir la aplicación de la autonomía colonial en las Antillas (16).

Realmente, había que levantar el espíritu de las provincias de Ultramar, contar con su pueblo e identificarlo con el metropolitano por medio de una política de confianza, de expansión y de libertad. Por otro lado, tampoco podía olvidarse dentro del problema cubano el aspecto internacional, es decir, todo lo relativo al aislamiento en relación con los Gobiernos extranjeros y con la opinión del mundo contemporáneo. En este sentido, se precisaba romper con la política de circunspección exagerada, que en el orden externo caracterizaba a España, habida cuenta de la relación e influencia que en este aspecto tenía la presencia de Estados Unidos y de la predisposición de Europa, que desde 1820 se había mostrado propicia a considerar el punto de la soberanía española en las Antillas como un interés de la política general del mundo (17).

Dentro de este contexto, constituía una dificultad

añadida el problema económico, que giraba en torno al Tratado Comercial con Norteamérica y a la reforma arancelaria. El arancel vigente en Cuba llevaba fecha de 29 de Abril de 1892 y se había hecho con vistas al convenio comercial firmado con Estados Unidos en 28 de Julio de 1894. Dicho arancel había sancionado tipos bastantes altos, sobre los cuales se tenía que aplicar una rebaja del veinticinco al cincuenta por ciento, concedida a Norteamérica, y había permitido, asimismo, la realización de varias irregularidades, con respecto a la importación de algunos efectos, como la maquinaria, absolutamente precisos para la industria cubana, en donde era primordial no tanto producir en abundancia, como hacerlo de forma económica y competitiva. En última instancia, el arancel de 1892, concebido como interino y provisional, había asegurado el monopolio del mercado antillano a la industria peninsular (18).

En estas circunstancias, parecía conveniente aclarar que la fórmula de la asimilación, propugnada ahora por los gobernantes metropolitanos, estaba muy alejada del sistema tradicional seguido por la colonización española. Nunca los legisladores de Indias ni los tratadistas de Derecho Colonial habían proclamado la asimilación de los españoles de Ultramar, sino la identidad de sus derechos políticos y civiles. Así, durante la época española había funcionado en América una autonomía condicionada por las características de aquellos tiempos y dentro del orden político de los siglos XVI y XVII. Pero olvidando todo esto, se había establecido en los últimos cincuenta años un régimen de desigualdad, de centralización y de desconfianza, que había hecho de los españoles ultramarinos españoles de segunda y de tercera clase y había traído "sobre el Gobierno de la Metrópoli atenciones, compromisos y responsabilidades verdaderamente irracionales e imposibles". Frente a esta situación, se alzaba la autonomía colonial, que

suponía la soberanía de la nación, la cual era la única capacitada para reformar la situación política, económica y administrativa de Cuba y Puerto Rico (19).

Sin embargo, los proyectos de Maura habían dado forma y precisión, en alguna medida, a las inquietudes antillanas, convirtiéndolas en un movimiento político de positiva orientación y de resultados perfectamente compatibles con el orden público. Además, habían contribuido a romper la resistencia de la Unión Constitucional cubana, muchos de cuyos elementos al formar el Partido Reformista se habían apartado de la vieja intransigencia, fecunda en todo género de desastres e inductora de la división en que vivía la sociedad política de Cuba. Otro tanto podía decirse de la Ley Abárzuza, a pesar de sancionar buena parte de los errores del anterior proyecto. Ciertamente, la Ley de 1895, que recogía, aunque con modificaciones importantes de carácter restrictivo, la reforma de Maura, había introducido considerables cambios y, en todo caso, hubiera podido producir apreciables efectos en Cuba e impedir la actual insurrección, a no ser por la acción en contra de los sectores opositores. De haberse aplicado adecuadamente, la Ley Abárzuza hubiese sido efectiva en su más amplio sentido, a pesar de prescindir de la reforma electoral, olvido imperdonable, trantándose de pueblos latinos y de provincias de la entidad de Cuba y Puerto Rico. De todas formas, se imponía el autogobierno, "planteado en todas partes al terminar las guerras coloniales contemporáneas como un medio de fortificar los quebrantados vínculos de las Colonias y de sus Metrópolis" (20).

La intervención de Labra contestando al Discurso de la Corona puso de manifiesto que en los asuntos de Cuba estaba dispuesto a cooperar activamente a que se restableciera la paz de modo definitivo. Para ello se debía propiciar, de una manera

clara y terminante, una situación despejada y decidida, en cuya virtud el dominio de España fuese en hecho real y positivo, no sujeto a los vaivenes bélicos, los cuales, por otra parte, no conllevaban más que sacrificios para la patria y la ruina para todos. En el esfuerzo por restaurar la paz, Labra ofrecía su adhesión y buena voluntad, pero al mismo tiempo insistía en que no se obtendrían resultados positivos, dada la actual situación y las condiciones internacionales del problema, si no se variaba radicalmente el sistema vigente, fortificando, además, esta medida con las declaraciones y los procedimientos recomendados por los autonomistas. Dicha postura fue contestada por el Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, quien refutó los argumentos de Labra, exponiendo el punto de vista del Gobierno. Esta intervención se vió acompañada de la del General Martínez Campos y ambas rectificadas por el propio Labra (21). Asimismo, se produjeron, en relación con el tema de la política ultramarina, las intervenciones de los señores Pando, Abárzuza y Batanero, a las que igualmente contestó Labra (22). Por último, los Generales Martínez Campos, Calleja y Pando se limitaron a un planteamiento militar de la cuestión (23).

El propio Labra comentó también en la prensa algunos pormenores relativos a la política ultramarina, de donde podían deducirse varios de los errores cometidos por la metrópoli en este aspecto. Así, muchos creían que el puro dato local debía ser, aunque no el único, sí el principal y determinante de la política en Ultramar y no pocos pensaban, si no precisamente que correspondía sólo a los elementos insulares o locales la dirección absoluta de la política, que se tenía que hacer en España, por cuantos se interesaban por la suerte de las Antillas, sí, al menos, que los problemas ultramarinos se debían plantear y tratar en la metrópoli de la misma manera que los concebían los que vivían allí. Sin embargo, la política ultramarina no podía

encomendarse únicamente a un grupo de personas de aquí o de allí; pedía el consenso eficaz, consciente y entusiasta de muchos elementos, cuya colaboración franca y sistemática resultaba imprescindible. De esta forma, no era tolerable la mera hipótesis de que Cuba y Puerto Rico fuesen propiedad de los españoles que vivían en la Península, aunque tampoco era admisible la idea de que el problema ultramarino constituyese un interés poco menos que exclusivo de las Antillas. Por encima de estos exclusivismos, había que poner la voz de la justicia y el derecho de la patria común, recordando que tal como había afirmado la Junta Central en 1809, "los vastos y preciosos dominios, que España que España poseía en las Indias no eran propiamente Colonias o Factorías como las de otras Naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española" (24).

En el Congreso, Silvela formuló un voto particular y atacó personalmente a Cánovas, lamentando que no se hubiese implantado la Ley Abárzuza, a lo que el Presidente del Consejo de Ministros replicó haciendo una defensa de su ideología (25). Vázquez de Mella pronunció un florido discurso sin llegar a nada concreto (26); León y Castillo presentó la cuestión como un problema de índole diplomática, dotado de una amplia implicación internacional (27), y los Diputados constitucionales González López y Santos Guzmán consideraron excesivas las muy menguadas reformas canovistas (28). Por su parte, Moret planteó el hecho, recordando la siempre importante sombra norteamericana y el carácter oscilante de la opinión pública de aquel país, así como la incertidumbre ante la política del sucesor del Presidente Cleveland (29). Maura, acusado por los constitucionales de haber contribuido de alguna manera a la insurrección con sus proyectos de reforma, se defendió aclarando la significación de los términos asimilismo y autonomismo y aduciendo que las reformas no debían ser demoradas ni, mucho menos, eludidas (30). Romero

Robledo, por último, como Presidente de la Comisión del Mensaje hizo un resumen de los debates, manteniendo en el fondo su criterio asimilista (31).

A todo esto, continuaba la conexión entre las esferas gubernamentales y los industriales catalanes y demás sectores interesados en el comercio con Cuba. En relación con ello, el Cónsul General de Francia en Barcelona, en despacho (27 de Marzo de 1896) al Ministro de Asuntos Exteriores de su país, recogió la mala acogida que habían tenido en Cataluña unas declaraciones de Sagasta, según las cuales era necesario aplicar las reformas en Cuba a fin de restar motivos de intervención a Estados Unidos; mala acogida explicable, ya que esta región, amparada en las tarifas aduaneras, acaparaba el mercado colonial (en 1893, sobre ciento cuarenta y un millones de productos Barcelona había enviado a Cuba ciento veintinueve, y en 1894 sobre ciento veinticuatro, ciento ocho). De forma evidente, la burguesía catalana se movía dentro de una contradicción, ya que, aunque admitiese teóricamente las reformas político-administrativas (para mostrarse patriótica, frente a la ingerencia estadounidense), no podía hacer concordar este punto con el que se relacionaba íntimamente con aquél, es decir, la reforma económica, que provocaría la revisión de las tarifas aduaneras. De ahí que desencadenase su antipatía contra el librecambista Moret, que pretendía cierta autonomía política, la descentralización administrativa y el libre cambio.

Por su parte, el nuevo Embajador de Francia en España, Reverseaux, dió una nueva llamada de atención sobre el asunto al precisar, en comunicado al Ministro de Asuntos Exteriores, Hanotaux (15 de Mayo de 1896), los vínculos que existían entre los industriales peninsulares y los altos funcionarios y caciques de la isla. En este sentido, era cabeza visible de tal

vinculación un miembro del propio Gobierno canovista, Francisco Romero Robledo, antiguo Ministro de Ultramar en 1891. El comunicado hacía una exposición del papel preponderante de Romero Robledo, como consecuencia de la disidencia silvelista (lo que obligaba a Cánovas a apoyarse en aquél) y, en general, de la mentalidad conservadora, frente a las cuestiones ultramarinas. Asimismo, el Embajador inglés en España, Sir Henry Drumond Wolff, detectó la prepotente posición de Romero Robledo en el Gabinete de Cánovas. El Cónsul francés en Barcelona recogió igualmente la visión que del problema cubano tenía el sector obrero catalán (Agosto de 1896), reflejada en las manifestaciones contra los embarques de tropas, en las deserciones de jóvenes reclutas al Mediodía de Francia y en la propaganda anarquista, circulante por la Ciudad Condal. En el Manifiesto popular contra los embarques de tropas a Cuba, distribuido en Barcelona en Agosto de 1896, quedaba expuesta la apelación al movimiento revolucionario para evitar los envíos de contingentes militares a Cuba y el hondo problema social que subyacía en la posibilidad de redimirse del servicio militar mediante el pago de una suma, con la consiguiente discriminación entre pobres y ricos (32).

No sólo en las Cortes, sino también fuera de ellas se manifestaron las diversas opiniones sobre el problema de la guerra y de las reformas. Moret pronunció un discurso (19 de Octubre de 1896) en el Círculo Liberal de Zaragoza, en cuyo texto abogaba por la implantación de las reformas políticas. Los carlistas apoyaron el belicismo, no admitiendo ninguna negociación con los rebeldes. Salmerón, por su parte, en un mítin celebrado el 30 de Diciembre de aquel año, condenó la guerra y pidió reformas a fin de restar fuerza a los separatistas, considerando que mediante la autonomía se llegaría, sin intervenciones extranjeras, a la pacificación en Cuba; y Pi y Margall, además de repudiar la guerra, defendió un autonomismo rayado con la independencia (33).

Como se recordará, la Ley Abárzuza había sido otorgada conjuntamente para Cuba y Puerto Rico. La insurrección cubana supuso, pues, la suspensión de las garantías constitucionales para la Gran Antilla, pero en Puerto Rico nada había ocurrido; y, así, tras una breve vacilación. Provocada por los acontecimientos de Cuba, las reformas continuaron su curso en la Pequeña Antilla. El 31 de Diciembre de 1896 y de acuerdo con esta tendencia, fue promulgada una serie de Reales Decretos, cuyo objeto era la paulatina aplicación de la Ley Abárzuza: R. don sobre atribuciones del Gobernador General de Puerto Rico, que, no obstante mantener el cargo unido al mando militar, suponía un paso importante en la regulación de un poder hasta entonces indefinido; R.D. que desarrollaba las Bases 3a. y 4a. del artículo 2º de la Ley de 15 de Marzo de 1895 sobre organización y funciones del Consejo de Administración de la isla de Puerto Rico; R. D. desarrollando la Base 5a. del artículo 2º de la Ley antes mencionada, que regulaba las facultades de alta inspección y el recurso de queja en la isla; R.D. sobre la organización de la administración civil y económica insular; R.D. por el que se aprobaba la Ley Municipal, también aplicada a Puerto Rico como consecuencia de la Ley Abárzuza; R.D. por el que se extendía la Ley Provincial peninsular, dividiendo la isla de Puerto Rico en dos regiones (San Juan y Ponce) y estableciendo en cada una un delegado del Gobernador General con funciones equivalentes a las de los Gobernadores Civiles (fueron nombrados los puertorriqueños don Cayetano Coll y Tosté para la zona Norte, San Juan, y don José Méndez de Arcaya para la del Sur, Ponce); y tres RR. DD. más, aprobando la Ley Electoral para la elección de Concejales y de Diputados provinciales en la isla de Puerto Rico, la división electoral para elecciones provinciales y la convocatoria de las elecciones de dichos Concejales y Diputados provinciales. Todo ello vino completado por un R. D. de 23 de Abril de 1897, en el que se disponía que a partir del 1 de Junio del mismo año se

constituyeran la Diputación Provincial y el Consejo de Administración de Puerto Rico, así como los demás organismos administrativos previstos en la Ley de Bases de 1895 y disposiciones complementarias (34).

Mientras tanto, crecía el convencimiento de que algo debía hacerse en Cuba, y cuanto antes mejor. En relación con estas preocupaciones, Pi y Margall efectuó, el 24 de Enero de 1897, unas declaraciones en el periódico parisino "La Patrie", en las que abogaba decididamente por la concesión de una amplia autonomía política a Cuba, primer paso para el reconocimiento de su independencia integral. Ciertamente, con ser muy lúcida la visión del político republicano, era de muy difícil asimilación para el Gobierno y para el país en general, por lo que no resulta extraño que la Unión Republicana, que el 26 de Marzo del año anterior había suscrito un breve Manifiesto proclamando el mantenimiento intangible de la integridad de la patria, separase a Pi y Margall de dicho partido en virtud de sus declaraciones (35).

Dado este panorama y aunque las clases implicadas se oponían a las reformas cubanas por temor a perder el comercio con la isla y el monopolio detentando allí por la metrópoli, Cánovas, ante el retraso de la pacificación de Cuba, la elección de McKinley y el Mensaje de Cleveland de 7 de Diciembre de 1896, resolvió otorgar a las Antillas, no el régimen autonómico preconizado por el Presidente Cleveland, pero sí reformas descentralizadoras más amplias que la Ley Abárzuza y que el Proyecto Maura de 1893. En virtud de este propósito de Cánovas, el Consejo de Ministros de 3 de Febrero de 1897 aprobó un proyecto de reformas que seguía muy de cerca la Ley Abárzuza, ampliando en éste las facultades otorgadas al Consejo de Administración y concediendo mayor intervención a la soberanía

popular en la vida de las corporaciones. Al día siguiente, 4 de Febrero, el proyecto fue sometido a la firma de la Reina Regente y se convirtió en el Real Decreto de esa misma fecha, que disponía se pasase a informe del Consejo de Estado en pleno dicho plan de ampliación de las reformas acordadas por la Ley de 15 de Marzo de 1895 para las islas de Cuba y Puerto Rico.

Las innovaciones más destacables eran las siguientes. Las Diputaciones y los Ayuntamientos tenían amplias facultades y no dependían de los Gobernadores Civiles ni del Gobernador General más que en lo estrictamente indispensable; el Consejo de Administración mantenía un predominio de los vocales electivos, que lo serían por medio del sufragio directo o del de segundo grado, sobre los natos; existía una clara distinción entre los gastos obligatorios, propios de la soberanía, y los de carácter exclusivamente local; los presupuestos y el arancel serían acordados y fijados sin apenas limitaciones por los naturales; los cargos públicos quedaban provistos por indígenas, inclusive los judiciales, sin otras excepciones que los de las más altas autoridades ultramarinas, cargos, cuyos nombramientos y ceses correrían a cargo del Gobernador General, salvo los Gobernadores Civiles y los jefes de determinados servicios. De momento, la fecha de implantación de las reformas quedó sin fijar, pero, según el propio Cánovas, no se tendría que esperar demasiado.

Por aquel entonces, Labra analizó la actitud histórica del Partido Republicano con respecto a la política ultramarina, considerando que la actuación de los partidos monárquicos españoles había sido de auténtico fracaso. Dicho fracaso se relacionaba con el temor de una posible imposición del extranjero en los asuntos antillanos y con la propia actitud moral y política de los partidos peninsulares. Como consecuencia de esto, se seguía que los únicos políticos cualificados para llevar

adelante las instituciones autonómicas eran los republicanos, los cuales habían proclamado desde siempre la solución autonomista como la única capaz de organizar definitivamente el gobierno de las provincias ultramarinas. Además, estos políticos habían demostrado que muchos españoles, independientemente de lo que pensara y dijera el extranjero, creían que la mejor política para Ultramar era la de la paz y la confianza en los cubanos y puertorriqueños, seguida de la autonomía colonial como solución positiva de los problemas (36).

Dentro de este contexto, se tenía que contemplar la íntima relación que debía existir entre la política de la metrópoli y la de las provincias de Ultramar, quedando excluida tanto la postura de los que pensaban que la política ultramarina era una excepción sin trascendencia en la vida total de la nación, como la de los que opinaban que en las provincias de Ultramar se podía prescindir de la política nacional. Además, los problemas coloniales estaban a la vista de todo el mundo culto y de todos los Gobiernos que publicaban los informes de sus Cónsules y que en determinados momentos pretendían intervenir en esos mismos problemas en nombre de los últimos adelantos del Derecho Internacional. Si se consideraban todos estos supuestos, era preciso decir que "la Restauración no había procedido con la sinceridad y con la energía convenientes, inmediatamente después de la Paz del Zanjón", aunque justo era reconocer que en los últimos años se habían realizado progresos considerables en la vida política y económica de las Antillas, si bien debían haberse hecho más deprisa y más a tiempo. En cualquier caso, los avances realizados en la política colonial española lo habían sido izados en la política ultramarina española lo habían sido por obra y gracia de los partidarios de la reforma colonial y no por la actitud de los partidos monárquicos (37).

En el desarrollo de los acontecimientos, el Partido Autonomista Cubano había adoptado una actitud un tanto particularista, cosa, por otra parte, muy difícil de ver con claridad en las Antillas como consecuencia de la oposición de la Unión Constitucional, de la postura de las autoridades de Cuba y de la política del Gobierno de Madrid. Sin embargo, el Partido Autonomista era un partido patriota, si bien ponía los asuntos e intereses de la Gran Antilla por encima de los de la Península, lo cual era bastante lógico. Realmente, este problema no revestía importancia en los periodos iniciales de la vida de las colonias, pero adquiriría suma gravedad con el paso del tiempo, máxime si a ello se unía el empeño del Gobierno metropolitano en sostener por medios artificiales la inferioridad de los criollos (38).

La cuestión estribaba en poner por encima de los exclusivismos de la Península y de las Antillas a la patria, cuyo interés supremo constituía, a su vez, un interés del mundo político contemporáneo. Esta solución la contemplaba a la perfección el autonomismo, que, sin embargo, tenía que enfrentarse con la preocupación, muy generalizada en los círculos políticos y literarios de Madrid y de algunas provincias, con respecto a la propensión separatista de todos los antillanos, basada en el efecto producido por la pérdida de los reinos americanos. Parte del problema residía en la falta de profundización del asunto, lo que llevaba a no estudiar con calma la vida íntima de las provincias de Ultramar, caracterizada por sus espontaneidades, por sus exaltaciones, por sus tendencias, por las aspiraciones de sus clases cultas, por las relaciones de estas con los inmigrantes, etc. Además, en esta cuestión era preciso tener en cuenta otras tres cosas: las dificultades anejas a la novedad de la doctrina autonomista; la resistencia característica del espíritu castellano a todo empeño de determinación y de vida particular, y el profundo, pero

generalizado error de que toda campaña expansiva tenía por único fin el beneficio de las provincias ultramarinas, cuando, en realidad, interesaba a toda la nación, de la cual esas provincias formaban parte integrante y no precisamente como factorías (39).

Ciertamente, el programa autonomista antillano afirmaba los principios de la democracia, sostenía la identidad de los derechos políticos de peninsulares y ultramarinos y pedía para aquellas provincias una descentralización mayor que la propia de las provincias o regiones de la metrópoli. Por eso, las reformas afectaban a la vida total de la nación y al interés político general. Y esto por tres razones: Primera, porque uno de los fundamentos del prestigio y de la representación de España consistía en el valor y en la prosperidad de sus provincias ultramarinas, cuya situación geográfica y cuyas condiciones físicas, económicas y sociales eran de excepcional importancia. Segundo, porque la vida de esas provincias influía, poderosa y directamente, en las más adelantadas comarcas de la Península. Tercero, porque era un hecho evidente la importancia que la reactivación ultramarina había tenido a lo largo del siglo XIX en la pujanza del desarrollo peninsular (40).

En realidad, todas las dificultades y todas las confusiones que pudieran surgir en materia colonial dependían de la manera de establecer las diferencias que separaban los negocios locales o coloniales de los generales o de la nación. En tal supuesto, era indispensable que la reforma de la organización de las Antillas coincidiese con una amplísima reforma electoral y que las nuevas instituciones se planteasen en sentido democrático. Para llevar a cabo todo este empeño, se hacía necesaria la intervención directa de los autonomistas y el abandono de la protección que los partidos monárquicos habían dado a la Unión Constitucional de Cuba y al Partido Incondicional

de Puerto Rico. Asimismo, el Partido Republicano Español aparecía excepcionalmente capacitado para apoyar esta acción, avalado como estaba por lo que había hecho en favor de las provincias de Ultramar y, especialmente, de los derechos y de las libertades de Cuba y Puerto Rico (41).

Por su parte, Cánovas declaró que la flexibilidad de su proyecto abría el camino hacia la autonomía, pero la inmensa mayoría de los partidos consideró insuficientes las reformas por ser tan sólo administrativas y no políticas, y sobre todo si se tenía en cuenta que estas últimas resultaban ya tardías. Labra estimó que las concesiones eran escasas y que respondían más a las circunstancias que al convencimiento, tal como expuso en "La Correspondencia de España" del 6 de Febrero de aquel año. Según él la obra de Cánovas había tenido siempre una gran importancia, pero más en aquellos momentos. Sin embargo, no era de esperar que prosperara solución alguna en las Antillas, si no iba acompañada de una amplia reforma electoral. Así, pues, era necesario el sufragio universal para aquellas islas, dada la historia de las oligarquías americanas, la idiosincrasia de los pueblos latinos y el ejemplo que sobre ellos ejercía la democracia estadounidense. Además, no se podía olvidar la actitud política y el valor económico de aquellos territorios, en especial de Cuba, y el papel que desempeñaba la guerra, por todo lo cual se debía llamar, resuelta y francamente, a todo el pueblo cubano a la inteligencia y dirección de sus peculiares y singularísimos negocios sin vaguedades, reservas ni cautelas.

De este modo, junto a las reformas en sí era necesaria la sinceridad en su aplicación, cuestión ésta que, si bien había sido decisiva en todas las reformas coloniales del mundo, lo era tanto más en el caso español, a fin de que concluyera pronto la guerra y de que la paz subsiguiente no se convirtiese en una

simple tregua. A pesar de todo, no se podía esperar que la sola promulgación de las reformas produjese el resultado apetecido. De momento, se debían seguir empleando los medios militares, aunque modificando el tipo de política llevado a cabo hasta entonces. De acuerdo con ello, el Gobierno tenía que plantear cuanto antes en Puerto Rico las nuevas reformas, rectificando con hechos prácticos el deplorable efecto que habían causado en las Antillas, en el extranjero y aun en la misma Península, las anteriores directrices políticas. De todas formas, se reconocían como de positiva transcendencia las últimas medidas, aunque necesitasen de aclaraciones y de determinaciones para evitar rozamientos y conflictos. En cualquier caso, la autonomía colonial se presentaba como la mejor garantía del honor, de la fuerza y de la integridad de la patria (42).

Romero Robledo, por su parte, declaró que las medidas reformistas no terminarían con la guerra. Los republicanos insistieron en la integridad de la patria. Pi y Margall continuó defendiendo la independencia de Cuba. Los carlistas mantuvieron su intransigente españolismo nacionalista. Reformistas y autonomistas, aunque no hicieron excesivos alardes, aceptaron el punto de partida. Los constitucionalistas acogieron con gran frialdad las medidas, especialmente el Marqués de Apezteguía, jefe del partido. Weyler indicó que sólo serviría para desengañar a los que aun creían en las reformas o para facilitar rendiciones de cabecillas; y los separatistas, por supuesto, no las aceptaron (43).

En realidad, para que las reformas fuesen eficaces se precisaba un sustrato de bienestar político, administrativo y económico, del que se distaba mucho como consecuencia de la guerra (ruinas por devastación o paralización de las industrias insulares; trastornos de la población "concentrada" sin medios

para sustentarse en las ciudades, insuficientes a su número; multiplicación de la mortalidad, provocada por el hambre y por las epidemias, etc.) (44). A pesar de todo, las reformas siguieron adelante, y aunque no pasaron nunca del papel, fueron aprobadas para Puerto Rico y para la parte pacificada de Cuba por un Real Decreto de 29 de Abril de 1897 (45).

N O T A S.

- (1) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 30 de Abril de 1895.
- (2) Ibid., 7 de Junio de 1895.
- (3) Ibid., 18 de Junio de 1895.
- (4) Ibid., 19 de Junio de 1895.
- (5) Ibid., 20 de Junio de 1895.
- (6) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 245-247.
- (7) Ibid., págs. 247-249.
- (8) Ibid., págs. 249-250.
- (9) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs. 260-261.
- (10) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 263-266.
- (11) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 15.
- (12) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 284.
- (13) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 11 de Mayo de 1896.
- (14) Diario de Sesiones del Senado, 11 de Mayo de 1896.
- (15) Misma cita, Nota núm. 434.
- (16) Diario de Sesiones del Senado, 30 de Junio de 1896. Véase también Apéndice Documental I. Apéndice núm. 14.
- (17) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 190 y 191-192.
- (18) Ibid., págs. 208-209.
- (19) Ibid., págs. 217-218 y 220.
- (20) Ibid., págs. 227-228 y 230.
- (21) Diario de Sesiones del Senado, 1 de Julio de 1896.

- (22) Ibid., 4 de Julio de 1896.
- (23) Ibid., 1, 4 y 6 de Julio de 1896.
- (24) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Colonial, "La Justicia" (Madrid), IX, núm. 2984 (27-VI-1896).
- (25) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 7 de Julio de 1896.
- (26) Ibid., 8 de Julio de 1896.
- (27) Ibid., 9 de Julio de 1896.
- (28) Ibid., 9 y 13 de Julio de 1896.
- (29) Ibid., 11 de Julio de 1896.
- (30) Ibid., 13 de Julio de 1896.
- (31) Ibid., 14 de Julio de 1896.
- (32) SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional, "Cuadernos de Histotria de España" (Buenos Aires), XLI-XLII, (1965), págs. 301-302.
- (33) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, pág. 380 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 302.
- (34) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico (Madrid 1953), págs. 27-28.
- (35) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 344 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR Ob. cit., Vol. II, pág. 388, Nota núm. 11.
- (36) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Política de Ultramar (1868-1900) (Madrid 1902), págs. 44-46.
- (37) Ibid., págs. 159; 167 y 178-181.
- (38) Ibid., págs. 192-194.
- (39) Ibid., págs. 233-236.
- (40) Ibid., págs. 307 y 313-314.
- (41) Ibid., págs. 316-317 y 319.

- (42) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 252-255.
- (43) FABIE, ANTONIO MARIA: Ob. cit., pág. 345; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR Ob. cit., Vol. II, pág. 385-388; Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. XII y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 315.
- (44) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 314.
- (45) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 16.

2.2.8) EL DESAFIO BELICO CUBANO.

Mientras España y Cuba se agitaban ante las reformas de Maura y mientras se acrecentaban las oposiciones entre los partidos, la política de la isla se fue enrareciendo bajo la influencia del separatismo, que desde 1892 había encontrado definitivamente un guía y un organizador en la persona de José Martí. Desde aquel momento y una vez obtenido el poder, gracias a los votos de los emigrados constituidos en partido político, Martí empezó a preparar lo que sería la segunda guerra por la independencia cubana. Fueron momentos difíciles y llenos de actividad, en los que se sucedieron los viajes, las cartas, los artículos periodísticos, las visitas y los discursos, y en los que plantearon no pocas cuestiones y problemas, que dificultaron el desenvolvimiento de los programas y que determinaron, más de una vez, la posposición de la fecha del alzamiento.

Máximo Gómez y Antonio Maceo habían sido elegidos jefes militares, pero la conexión con Martí no siempre resultaba factible, y así durante 1894 se aplazó por dos veces (Febrero y Octubre) el momento de la insurrección. Por fin, en Diciembre de aquel año se aceleraron los preparativos y Martí aprestó tres barcos en el puerto de Fernandina (Florida). La expedición, mandada por Antonio Maceo y Flor Crombet, debía conectar con los hombres de Gómez, Serafín Sánchez y Roloff, en tanto que Julio Sanguily y José M. Aguirre tenían que atizar los permanentes focos insurreccionales. Sin embargo, descubierto el plan, Estados Unidos, bajo presión española, apresó la expedición, abortando así el plan de invasión llamado de "Fernandina", que había sido firmado en Nueva York el 8 de Diciembre de 1894 y redactado por el propio Martí con la autorización de las firmas de José M. Rodríguez en nombre de Máximo Gómez y de Enrique Collazo en el de la Junta de La Habana (1).

Era un momento grave, propicio para la desesperanza. Los conspiradores residentes en Cuba, acosados, no podían resistir más, pero se superaron las dificultades, y Martí reaccionó con ánimo y con tenacidad, expidiendo desde Nueva York (29 de Enero de 1895) una orden de levantamiento, dirigida a Juan Gualberto Gómez, que fijaba la fecha de la sublevación para la segunda quincena de Febrero y la hacía extensiva a toda la isla (2). Esta vez, las esperanzas se cumplieron. La orden le fue entregada a Gonzalo de Quesada, que en Key West la pasó a Juan de Dios Barrios, quien la hizo llegar a Juan Gualberto Gómez, que a su vez la remitió a Las Villas, Camagüey y Oriente por conducto de Manuel de la Cruz (3). Por su parte, las circunstancias de la isla se encargaron de propiciar la acción martiana, ya que no sólo repercutían en Cuba las discusiones parlamentarias peninsulares, sino también una serie de problemas de carácter ideológico y económico.

Dentro de este último ámbito, desde 1893 había una depresión mundial en la industria azucarera, que no pudo por menos de dejarse sentir en las Antillas. La Ley Wilson Gorman, que prohibía la entrada de azúcar libre de derechos en Norteamérica (1894), al terminar con el trato de preferencia existente con anterioridad, agravó la situación, y ello se comprende fácilmente si se tiene en cuenta el volumen de las transacciones comerciales entre Estados Unidos y las Antillas en aquel mismo año (sobre una producción de un millón cincuenta y cuatro mil doscientas catorce toneladas se exportaron un millón veintidos mil setecientas diecinueve y de ellas novecientas cincuenta y seis mil quinientas veinticuatro, es decir, alrededor de un noventa y cuatro por ciento, a Estados Unidos; y otro tanto podía decirse del tabaco). Por otro lado, tampoco fueron muy satisfactorias, desde el punto de vista cubano, las relaciones económicas entre la isla y la metrópoli en 1894, pues mientras

las importaciones de Cuba (por un valor de noventa y dos millones de francos, frente a los ochenta y uno 81 de Estados Unidos) basadas en el azúcar, el cacao, el café, el chocolate y el aguardiente eran gravadas por España, las exportaciones españolas, principalmente calzados, tejidos y harina de trigo, entraban allí con las consiguientes protecciones arancelarias (4).

Por su parte, los separatistas veían reforzada su posición por los reiterados fracasos del autonomismo al tratar de conseguir alguna concesión del Gobierno español, y estaban animados por un espíritu de superación, cuya base residía en la consecución de una República cubana independiente (la oposición al autonomismo era total, de hecho, ya que era considerado una política de "radical y demostrada nulidad") (5). Mientras tanto, en Puerto Rico, a los esfuerzos de Betances se sumó la acción de Eugenio María de Hostos, que abrazó decididamente la causa revolucionaria (6). Hostos ayudó a los conspiradores cubanos, y fruto de ello fue la declaración (dentro de las Bases del Partido Revolucionario Cubano), según la cual el propósito de dicho partido era lograr la independencia de Cuba y "fomentar y auxiliar la de Puerto Rico", a cuyo fin se creó en Nueva York la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano (7) y se hicieron preparativos en 1895 para enviar una expedición a Puerto Rico; expedición que, por una serie de causas estructurales, no llegó a feliz término.

Fiel a su propósito, Martí embarcó para Santo Domingo el 31 de Enero de 1895 con el fin de reunirse con Máximo Gómez, mientras en La Habana se celebraba una reunión bajo la presidencia de Juan Gualberto Gómez, que acordó la fecha del 24 de Febrero como adecuada para la iniciación del movimiento. Y así, con el llamado "Grito de Baire", se abrió de nuevo la

apelación a las armas. De esta forma, aparecieron partidas armadas no sólo en Baire, Holguín y Guantánamo, sino en Occidente, en la provincia de La Habana y en la de Matanzas, aunque en esta área los revolucionarios fueron copados muy pronto y obligados a acogerse a indultos en el espacio de pocos días (8). Por su parte, las fuerzas con que contaba el Capitán General don Emilio Calleja eran a todas luces reducidas, pero el problema no estribaba tanto en las tropas terrestres, cuanto en la escasa e ineficaz vigilancia marítima, que permitía los desembarcos y el contrabando. Iniciada la insurrección, los tres partidos políticos cubanos, Autonomista, Reformista y Unión Constitucional, se pusieron del lado del Gobierno. La importante, por su número, masa neutra estaba vacilante, ya que, si bien era hostil al poder central, tampoco acababa de simpatizar con la insurrección. Sin embargo, en general, los indecisos acogieron con sincero entusiasmo el anuncio de la implantación de las reformas de Abárzuza (9).

Desde luego, el problema de Cuba era una grave cuestión para el Gobierno Sagasta, culpable de la situación, en muchos aspectos, con que se tuvo que enfrentar: reducción de las fuerzas militares de la isla, deficiencias en la formación técnica y en el armamento de la tropa y, sobre todo, fracaso de las reformas de Maura, que, aunque atacadas por algunos elementos ministeriales, habían sido aceptadas por grandes sectores de la opinión insular (Partido Reformista y una parte del Autonomista). No obstante, la reforma no consistía, en el fondo, en la aplicación de la fórmula de Abárzuza, sino en la práctica de un nuevo régimen que enmendase o, por lo menos, atenuase las torpezas políticas, el desbarajuste administrativo y los vejámenes económicos padecidos desde hacía mucho tiempo por los insulares. "Desde el Zanjón se imponía el aludido cambio de régimen y retrasar la mudanza, porque en las cercanías de

Santiago unos centenares de rebeldes se habían alzado, demorarla después de tantos anuncios y solemnes promesas, era proveer a los filibusteros de la único, de que carecían: argumentos de índole moral, capaces de influir en el ánimo de todo criollo" (10).

Pero la reacción inmediata de la opinión pública española fue el optimismo en el triunfo y la fácil solución del problema, con lo cual se filtró pronto el virus de la guerra a todo trance, que hasta cierto punto era comprensible. Desde que se conoció la existencia de los primeros brotes insurreccionales, el asunto se planteó en el Congreso, donde el Ministro Abárzuza contestó, como era lógico, en un sentido tranquilizador, diciendo que la nueva política gubernamental hacía perder adeptos al separatismo en favor del autonomismo, lo que explicaba la exasperación de los partidarios de áquel, plasmada en su apelación a la lucha (11). Posteriormente, en cuanto llegaron las noticias del levantamiento, se suspendieron las garantías constitucionales en Cuba y se inició un apasionado debate sobre el tema.

Poco después, el 28 de Febrero de 1895, Cánovas, dejando entreabierto el camino de las reformas, hizo en "El Liberal" unas declaraciones relacionadas con el tema (12). En el Senado, Fabié interpeló al Presidente del Consejo de Ministros sobre los acontecimientos, ante lo cual Sagasta, capeando el temporal como pudo, procuró dar una nota de relativo optimismo, contestando en los siguientes términos: "La tentativa ha sido una loca intentona, que perecerá asfixiada por falta de ambiente en la opinión y sus autores castigados, rigurosamente, pues la ley debe ser inflexible contra todo aquél, que pretenda atacar la integridad de nuestra querida Patria" (13). Por otro lado, en el Parlamento el estallido de la insurrección levantó una verdadera lluvia de improperios, que se dirigieron entre sí las

personalidades que más directamente habían interviendo años antes en los asuntos de la isla. Los delegados en Madrid de la Unión Constitucional echaron la culpa de todo a Maura, y Romero Robledo, su cabeza visible, manifestándose en contra de las reformas, pidió que se dotase al Ejército de los medios necesarios para el triunfo; a lo cual el Ministro de Ultramar, Abárzuza, contestó que las reformas irían adelante, aunque se tomasen medidas contra la insurrección. Don Francisco Silvela se decantó también por la guerra y contra las reformas. El señor Calbetón defendió al Partido Reformista, que había sido tachado por Silvela de revolucionario; Montes Sierra dijo que lo que se debía hacer era atender a la concentración de fuerzas, y Villanueva indicó que, a pesar de todo, se debía confiar en la efectividad de la acción moral (14).

Por su parte, Labra indicó que no estaba nada convencido de que la solución fuese la política de la guerra, ya que eran necesarios no sólo los medios de fuerza, sino ante todo los medios "de carácter esencialmente moral y de acentuado sentido político". La Ley Abárzuza constituía un cierto progreso en la tendencia de las aspiraciones autonomistas, y, por lo tanto, su adopción no suponía una merma ni en la potencia ni en las energías ni en los medios del autonomismo. Además, el Partido Autonomista se ponía como siempre a disposición de las autoridades, afirmando que había un supuesto absolutamente inexcusable e indiscutible: "la integridad nacional y la unidad del Estado". Por otro lado, la conspiración separatista se había fraguado mucho antes de haberse votado las reformas y, además, había estallado cuando aquéllas iban a plantearse y con la esperanza de que el Gobierno retrocediera ante tal situación. De acuerdo con ello, se valoraba, tanto el elemento de fuerza como el elemento político, ya que se necesitaban medios enérgicos y poderosos para sofocar la insurrección, pero junto a la adopción

de reformas y de libertades que demostrasen la fortaleza del Gobierno y la fe que la nación tenía en la virtualidad de las ideas renovadoras y en las tendencias democráticas. Dichas aseveraciones fueron contestadas por el Ministro de Ultramar y provocaron también las intervenciones de Calbetón, Silvela, Montes Sierra y Villanueva (15).

Realmente, la influencia de la opinión pública sobre la élite política se dejó sentir abrumadoramente. Se tachó de separatista a cualquier cubano sin distinción y se reclamó insistentemente las soluciones de fuerza. A tal punto llegó este influjo, que en estos primeros momentos, incluso Pi y Margall se mantuvo dentro de cierta pasividad en relación con su posterior y decidida posición en pro de la independencia cubana. De esta forma, entre unos (de buena fe) y otros (enemigos de las reformas) el archisabido argumento del restablecimiento del orden por encima de toda reforma se convirtió en tópico de uso diario, cuando en el fondo la solución era, precisamente, todo lo contrario: las reformas constituían la fórmula para restablecer el orden, porque la ruptura de éste venía provocada por la no concesión de aquéllas. Así, pues, los opositores mantuvieron una actitud egoísta en pro de sus propios intereses, y su posición resultó ahora mucho más fácil de explotar bajo la presión de la lucha. Se podía aludir de forma más natural a la unidad de la patria y al esforzado tributo de sangre y de dinero; todo tenía más mordiente e inclusive era factible, como de hecho ocurrió, arrastrar a sectores que anteriormente habían defendido el reformismo. Ciertamente, la responsabilidad de la campaña ultramarina correspondía a todos, tanto a los directores de la sociedad española, que olvidaron el significado de la Paz del Zanjón y mantuvieron la Gran Antilla en un régimen incompatible con los sentimientos de los naturales, cuanto al propio pueblo, ignorante del verdadero problema; y tampoco podía excluirse de

tal responsabilidad a la prensa, que había ocultado la verdad, ni al Ejército, que no había sido capaz de dar una solución al problema por la vía de las armas (16).

Durante el mes de Marzo, aunque se produjeron algunas acciones favorables a España junto con capturas, como la de Juan Gualberto Gómez, y alguna que otra rendición, aceptada por Calleja, lo cierto es que, en líneas generales, la insurrección dominaba en Oriente y amenazaba con extenderse a las provincias occidentales de La Habana y Pinar del Río, mientras numerosas bandas operaban en Las Villas y Camagüey. En la Península, Silvela y Romero Robledo consideraron que el levantamiento era grave, y el último pidió el envío de veinte mil hombres, indicando que no se podía permitir que se atentase contra la unidad nacional, a lo que los Ministros de Ultramar y de la Guerra le contestaron que podía estar seguro de que se cortarían los focos insurreccionales (17). Días después, mientras Fabié interpelaba en el Senado al Gobierno (18), Romero Robledo volvió a intervenir, preguntando la opinión gubernamental sobre la importancia de los sucesos de Cuba (19). Le contestó el Ministro de Ultramar, Abárzuza, quien intentó presentar las cosas con optimismo (20), y el de la Guerra, López Domínguez, quien principalmente dedicó su intervención a defender la actuación del Ejército (21).

Por su parte, el Consejo de Ministros del 3 de Marzo acordó mandar tropas de refresco a Cuba, y poco después, caído ya el Gobierno Sagasta, Cánovas, al hacer la presentación a las Cortes del nuevo Gabinete, manifestó el decidido propósito del Gobierno de actuar con gran vigor y celo frente a la insurrección (22), para lo cual decidió relevar al General Calleja y mandar en su lugar a Martínez Campos al frente de más tropas (23). Se pensó que el prestigio de Martínez Campos tendría un efecto positivo,

aunque el General no estaba muy convencido de ello. El 26 de Marzo, el Ex-Ministro de Ultramar Fabié había hablado con Martínez Campos, a quien expuso sinceramente la situación de Cuba (24). En realidad, el nombramiento de Martínez Campos constituía una baza política para los conservadores. De momento, se retrasaba la meditación de un plan serio para las Antillas, y, por otra parte, si el nuevo Capitán General acertaba en su gestión, el Gobierno quedaría en inmejorables condiciones, mientras que si fracasaba, todas las culpas caerían sobre el militar. Así, al exponerle Martínez Campos, próximo a partir para Cuba, sus planes a Fabié, éste le contestó: "Va a ser imposible conseguirlo; ojalá acierte usted, pero, a mi juicio, el obstáculo de primera magnitud con que se chocará, se llama Cánovas del Castillo, el cual no puede transigir con ninguna transición autonómica" (25).

Entre tanto, Martí y Máximo Gómez, que se habían reunido en Santo Domingo, llegaron a un completo acuerdo y lanzaron el Manifiesto de El Partido Revolucionario Cubano a Cuba, llamado de Montecristi por haberse redactado en esta ciudad dominicana (25 de Marzo de 1895). El Manifiesto, exaltado y vehemente, prometía una guerra "culto, sin espíritu de venganza", y una posterior República libre de los defectos que aquejaban al resto de las de Hispanoamérica. Atribuía a Cuba una distinta situación y la posesión de unas cualidades específicas, lo que le auguraba un feliz autogobierno, e insistía en que nada había que temer en relación con posibles revueltas negras (26). Ante esto, la Junta Central del Partido Autonomista respondió al Manifiesto de Montecristi con otro, fechado en La Habana el 4 de Abril de 1895, en el que se aludía al inmenso daño sufrido por la economía y por el crédito cubanos y a la inoportunidad de haber promovido aquel levantamiento "en vísperas de inaugurarse un nuevo régimen, a cuya creación cooperaron los representantes parlamentarios del

autonomismo en medio de una atmósfera de benevolencia y de concordia, que ellos no habían encontrado jamás en la Metrópoli" (27).

Mientras tanto, el problema bélico aumentaba, acrecentando la magnitud del político y radicalizando las posiciones. A fines de Marzo o primeros de Abril, desembarcaron en Baracoa (Oriente) varios emigrados procedentes de Costa Rica, y a mediados de aquel mismo mes lo hicieron Martí y Máximo Gómez, con lo que la intentona se convirtió en una verdadera guerra civil. El 28 de Abril, Cánovas manifestó a dos redactores del "New York Herald", llegados a Madrid en busca de impresiones sobre el problema cubano, que España restablecería el orden antes del inmediato invierno y que una vez arreglada la situación por completo y eliminado el separatismo, Cuba tendría todas las libertades posibles, "pero jamás la autonomía" (28).

En general, la mayoría de los políticos madrileños centraron el problema de Cuba en la guerra, olvidando que, con ser importante, no era el único; y de acuerdo con esta manera de pensar, se reforzó la escuadra de las Antillas y se envió material y tropas, para lo cual se llamó a filas a los excedentes de cupo, aunque no se abolió la "redención a metálico", con lo que la juventud española pobre continuó nutriendo el ejército de Cuba, ya que los acomodados rescataban con dinero la obligación del servicio militar (por mil quinientas o dos mil pesetas, si el destino era a Ultramar, se liberaba una persona de sus obligaciones militares, y "desde el 1 de Marzo de 1895 al 1 de Marzo de 1897 las familias españolas pagaron más de setenta y ocho millones para librar del servicio a unos cuarenta y cinco mil reclutas") (29).

Respecto de la temática bélica, Labra consideraba, por su parte, que la guerra de Cuba había venido a demostrar que en

los momentos en que se hablaba de debilidad, en que se ponderaba por todas partes la decadencia de España, en que se creía que no existía en el mundo ultramarino más que las componendas y las corruptelas y que no había ideas ni rumbos ni esperanzas, todo había puesto de manifiesto, por el contrario, que estaban presentes el capital, la fuerza, los medios y el espíritu, y que lo único que se necesitaba eran rumbos claros, políticos que dirigieran adecuadamente e ideas que levantaran la voluntad del pueblo, dispuesto siempre al sacrificio. A mayor abundamiento, a España le asistía el derecho de conservar Cuba como parte integrante de la nación, al modo que habían indicado las Cortes de Cádiz; pero, por otro lado, tenía el deber de dominar pronto y bien la insurrección separatista en beneficio de la complicada sociedad antillana, por interés del Derecho Internacional contemporáneo, en cumplimiento de los trascendentales y prestigiosos compromisos de los grandes pueblos colonizadores y para tranquilidad del resto del mundo, seriamente amenazado por las complicaciones que surgían y podían surgir en América (30).

Ciertamente, el fin de la presencia española en las Antillas llevaría tras de sí el descrédito y, muy posiblemente, la inmediata ruina de España como potencia histórica y europea. Por todo ello, era preciso valorar esta cuestión con cuidado, escuchar todas las opiniones y todas las aspiraciones y resolver después, no por el interés político, que dividía los negocios en cuestiones de mayoría y de minoría, ni aun siquiera por considerar el tema la preocupación de un Gobierno conservador, liberal o republicano, sino por estimarlo como un asunto de importancia fundamental para la patria y hasta como un positivo deber de conciencia, necesario cuando se arrancaban hombres al país para llevarlos a una despiadada e interminable guerra, cuando se exigían esfuerzos y cuando se destruían esperanzas, que podían llegar a sacrificarse, pero al menos con la casi seguridad

de que todo esto había de tener un término próximo y satisfactorio (31).

Por otro lado, el planteamiento de la guerra traía de la mano otras dos cuestiones: el problema del ejército ultramarino y el de la reforma de la Ley del Servicio Militar. En cuanto al ejército, era absolutamente necesario contar con él, si bien dicho ejército pedía otras condiciones y otras reformas y exigía dedicación y amor a las provincias de Ultramar y una voluntad incontrastable de servir incondicionalmente a la bandera de la patria. El otro problema, el del servicio militar, planteaba la cuestión de poner la defensa de la patria solamente en manos de las clases desheredadas como consecuencia de la organización del sistema existente, y esto era preciso reformarlo, dado que "la redención a metálico hacía que sólo el pobre se encontrase en el caso de cumplir con el deber de entregar su sangre por el honor y por la defensa de la Patria" (32).

Días después de desembarcar en Cuba, Martí, Gómez y Maceo se reunieron en el ingenio "La Mejorana" (5 de Mayo de 1895) a fin de tratar sobre el futuro Gobierno de la República, aunque no se llegó a un acuerdo, pues mientras Maceo quería un Gobierno formado por representantes de los Generales con mando y un Secretario General, Gómez deseaba un General en Jefe sin institución civil alguna, hasta que terminase la guerra, y Martí mantenía un criterio mucho más civilista. Tras la muerte de Martí, acaecida pocos días después (19 de Mayo), se iniciaron los trabajos preparatorios para adoptar una forma de Gobierno, que corrieron a cargo de Maceo y que se celebraron en Bijarú. Asistieron, entre otros, José Miró, Rafael Mauduley, Luis de Feria, Mariano Sánchez, Mariano Corona, Diego Palacios, Juan Maspons y Rafaelito Portuondo, quienes acordaron otorgar a la

dirección militar la mayor cantidad de facultades compatibles con las instituciones republicanas (33).

Desde el punto de vista español, las cosas no iban nada bien en Cuba, a pesar de la superioridad numérica de las tropas. La insurrección triunfaba en Oriente y la estación de las lluvias facilitaba la reorganización de los rebeldes. Los mambises seguían la táctica de la guerra de guerrillas y huían del combate formal en campo abierto, practicando la estrategia que les era más conveniente y que estaba más de acuerdo con sus recursos en hombres y en armas y con las modalidades del terreno (34). También pesaba la experiencia de la primera guerra, que había sido para los insurrectos un verdadero laboratorio de pruebas. De la misma forma, constituía un elemento auxiliar el clima del Trópico, al que ellos estaban acostumbrados, y sus consecuencias: la fiebre amarilla, el paludismo, la disentería, el vómito negro y otras enfermedades, que causaban más bajas que las propias balas (35). De esta forma, el ejército español, compuesto en su mayoría de adolescentes de diecinueve a veintiún años, se consumía víctima del desconocimiento del terreno y de la inadaptación al clima.

Martínez Campos, por su parte, estructuró su plan estratégico de acuerdo con tres puntos: declarar el estado de sitio en Oriente, foco de la rebelión; prometer el perdón para cuantos se acogieran a un indulto, y dar una serie de ordenanzas de tipo táctico, encaminadas a no dispersar las fuerzas y a mantener una coordinación efectiva al máximo. Pero los insurrectos, conocedores de los itinerarios y de la importancia de los puntos estratégicos, presentaban o eludían batalla a conveniencia, y de esta forma las columnas centrales se paseaban de un lado para otro, mientras que los pequeños destacamentos eran sorprendidos por las partidas. Además, la insurrección se

extendió paulatinamente de Oriente a Occidente, tal como había planeado Máximo Gómez (36), que intentaba enlazar con Maceo (37) y dirigía sus esfuerzos a aniquilar las fuentes de producción y de riqueza y la vida agrícola, industrial y comercial de la isla, en especial, la producción azucarera (38).

Así, pues, a los dos meses de su llegada, Martínez Campos se encontró fracasado, y la opinión pública y los periódicos madrileños, en especial "El Heraldó", empezaron a combatir al Capitán General y a pensar en la política "de mano dura", para la que se presentaba como apropiado el General Weyler, conocido por su fama de enérgico, autoritario y hombre duro. Por su parte, Cánovas mantenía su posición de contestar a la guerra con la guerra. Así, cuando en Junio de 1895 Martínez Campos se manifestó en el sentido de tener que otorgar, posiblemente, la autonomía a Cuba, dada la situación existente, el Presidente del Consejo de Ministros, enterado de estas manifestaciones, declaró que no se podría contar con él para la solución autonómica. Por otro lado, Weyler consideró impropio el perdón otorgado por Martínez Campos a los que se presentaban. Becerra propugnó también la fuerza y el no ocuparse de otra cosa hasta alcanzar una victoria final, e idéntica actitud mantuvo Francisco Romero Robledo. Ello repercutió en la Unión Constitucional, que se volvió más intransigente: sus miembros consideraron que el envalentonamiento separatista y la posterior rebelión se debían a la labor de reformistas y autonomistas, considerados sospechosos en su totalidad.

En estas circunstancias, las reformas no se aplicaron, y ante la necesidad de renovar los Ayuntamientos cubanos y en previsión de cualquier intento de boicot electoral, se procedió a su remozamiento por orden gubernativa, de lo cual resultó que como en Oriente y Camagüey no se podían celebrar elecciones, los

Concejales nombrados por la autoridad fueron escogidos entre los miembros de la Unión Constitucional. Puestas así las cosas, Martínez Campos, reducido por este partido en lo político y fracasado en lo militar, presentó su dimisión, aunque, de momento, el Gobierno no la aceptó (39). Las cosas se agravaron con el desembarco que los insurrectos efectuaron el 24 de Julio de 1895 en Sancti Spiritus, con lo que la rebelión se extendió a Las Villas. Por otro lado, los "patriotas peninsulares" continuaron reduciendo el problema de Cuba al binomio insurrectos-Partido Incondicional Español, dentro del cual la fórmula consistía en exterminar a los primeros por la guerra y en proteger ilimitadamente al segundo.

No obstante, no todos opinaban así, entre otros Pi y Margall, que pidió para Cuba la más amplia autonomía, si era tiempo aun, y, si no, el reconocimiento de la independencia, aunque gentes de todos los partidos y en particular del republicano le tacharon de mal patriota, y Maura, que se ratificó en su posición, según la cual importaba más hacerse querer por los cubanos que dominarlos por las armas. Y de este modo, la reforma quedó pendiente de la victoria aplastante, que los partidos madrileños consideraban, por lo demás, segura. La ignorancia de la situación y la posición eufórica peninsular fueron la tónica diaria, mientras, en realidad, los rebeldes devastaban Oriente y amenazaban con extenderse a las provincias de Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Y no se trataba tan sólo de perseguir a los mambises en la manigüa, sino de impedir los alijos de armas y de municiones y los desembarcos de emigrados, para lo cual no se contaba con medios suficientes (40).

Realmente, los insurrectos recibían múltiples ayudas, al margen de la puramente militar. Así, los simpatizantes de los rebeldes nutrieron las fuerzas libertadoras y cooperaron en los

servicios auxiliares, todo ello sin contar con la ayuda de los emigrados cubanos, principalmente de los establecidos en Estados Unidos, entre los que cabía destacar a los tabaqueros de Florida, que tan directamente habían conocido la propaganda de José Martí (41). El esfuerzo de los insurrectos se notó también desde el punto de vista político, ya que reunidos en Asamblea Constituyente de la República Cubana en Jimaguayú (Puerto Príncipe), desde el 11 de Septiembre al 10 de Octubre de 1895, aprobaron un Código fundamental (16 de Septiembre), que distribuía los altos cargos y acordaba la reorganización administrativa, militar y hacendística del futuro Estado independiente. En este sentido, los separatistas redactaron la citada Constitución con miras a reforzar legalmente su posición en el extranjero y a otorgar a la insurrección una personalidad, que determinara el reconocimiento de la beligerancia. El 18 de Septiembre quedó constituido el Consejo de Gobierno, bajo la presidencia de Salvador Cisneros Batancourt, Marqués de Santa Lucía. Máximo Gómez fue nombrado General en Jefe; Antonio Maceo su lugarteniente general y Tomás Estrada Palma agente diplomático en el extranjero, con centro en Nueva York y con la misión de arbitrar fondos, organizar la emigración y enviar hombres y pertrechos a Cuba. En relación con ello, el Consejo de Gobierno desarrolló una labor legislativa y trazó el plan estratégico a seguir (42).

Entre tanto, ni las tropas de Las Villas ni las de Oriente lograban controlar a Gómez y a Maceo. Así, el 30 de Noviembre ambos jefes consiguieron enlazar sus respectivos ejércitos, mientras que sus operaciones se hacían cada vez más peligrosas: con bastante frecuencia castigaban a los propietarios rurales que no colaboraban con ellos, volaban puentes para destruir las vías férreas, empleaban dinamita contra los trenes en marcha y destruían quemándolos los cañaverales. La culpa de

todo recayó sobre Martínez Campos, duramente atacado por los periódicos de Madrid, que le acusaron de excesivamente benevolente. Puestas así las cosas, a mediados de Diciembre el Capitán General se decidió a jugar su última baza, buscando la batalla en campo abierto, pero el intento terminó en un rotundo fracaso: la insurrección estaba extendida por toda la isla, se nutría de caballos en los potreros de la región central y obtenía el dinero que precisaba del hacendado, a cambio de respetar su cafetal, su ingenio o su vega (43). Por otra parte, las circunstancias militares y sociales diferían mucho respecto de la Guerra de los Diez Años. Mientras en la primera confrontación los rebeldes no pasaron de Oriente, ahora pululaban por la isla entera y su consideración social estaba revestida de un carácter mucho más democrático. Desaparecieron paulatinamente los aristócratas, los terratenientes y los burgueses en general, y la dirección pasó a la pequeña clase media, a los pequeños propietarios, a los profesionales de clientela pobre y a los burócratas. En suma, se notó un mayor arraigo del proceso, lo que le dió más fuerza y la hizo más difícil de extirpar.

Fracasado Martínez Campos en su plan, inmediatamente tuvo que soportar la hostilidad de la opinión habanera, que vitoreó a Polavieja y a Weyler, caracterizados por su política de severidad. A mediados de Enero de 1896, los insurrectos estaban cerca de La Habana, con lo que el nerviosismo creció subitamente. Los autonomistas seguían proclamando como salvadores sus ideales, en la creencia de que sería posible un acuerdo con el enemigo, y en razón de su credo apoyaron a Martínez Campos, pero el resto de los partidos, tanto en Cuba como en España, querían la guerra a todo trance y, por lo mismo, la destitución del Capitán General. Como reflejo de toda esta situación, el 16 de Enero Martínez Campos telegrafió al Ministro de Ultramar, don Tomás Castellano, explicándole la problemática planteada (44). En vista de estas

circunstancias, fiel a su espíritu contemporizador, que le impedía tomar medidas distintas de las ya adoptadas y falto de la confianza necesaria, Martínez Campos volvió a reiterar su dimisión, que esta vez le fue aceptada. Así, el 20 de Enero el hasta entonces Capitán General de Cuba entregó el mando, con carácter provisional, al General don Sabas Marín, al tiempo que en Madrid era nombrado para sucederle don Valeriano Weyler.

La política llevada a cabo había consistido en demostrar la implantación de las reformas, dando un trato de preferencia a la Unión Constitucional con el consiguiente detrimento de las fuerzas moderadas. De ahí se siguió una argumentación muy simple: si la rebeldía se propagaba, ello se debía a que la represión no era lo bastante enérgica. Sin embargo, era difícil dilucidar las responsabilidades, ya que la actitud guerrera también tenía su lógica, aunque esta fuese equivocada. Si existía una rebelión en Cuba, lo natural era que se quisiese sofocarla, si bien se podía haber pensado en simultanear esto con las reformas. Respecto de estos temas, Labra consideraba que el Partido Conservador tenía una profunda desconfianza hacia las medidas morales y políticas como medios eficaces para resolver las grandes cuestiones que se ventilaban en aquellos momentos. En relación con la guerra, no era cierta la idea según la cual todo el país cubano estaba en contra de España. Lo que ocurría era que se mantenía una postura temerosa ante la actitud del Gobierno, por no ver en ella lo que pudiera tener de bueno, pero la inmensa mayoría no estaba con la insurrección, que no podía traer más que la ruina y la miseria, tal como había sucedido en Santo Domingo.

La táctica empleada por la insurrección era clara: prolongar la guerra, concluir con la riqueza del país y evitar choques directos con el ejército español. Frente a esto, España

debía concluir la guerra cuanto antes, con los recursos militares necesarios, pero, sobre todo, con el concurso decidido de la inmensa mayoría del pueblo cubano, a fin de lograr un éxito definitivo. En segundo lugar, tenía que robustecer la riqueza del país, defenderla de la crisis reinante, afianzarla frente al insurrecto y a la concurrencia extranjera y estimularla y desarrollarla, tanto para el presente como para el futuro. Por último, debía llevar adelante un doble empeño: contestar con la guerra al que guerrease y ofrecer la paz al que se mantuviera pacífico. Sin embargo, el Partido Conservador propugnaba únicamente la acción bélica con olvido de las reformas de 1895, que no pensaba aplicar de momento ni en Cuba, donde había guerra, ni en Puerto Rico, donde no la había (45).

En realidad, Cánovas mantuvo un concepto erróneo del problema planteado en la Gran Antilla, y ello le llevó a vincular su política a la respuesta bélica, influido por los sentimientos patrióticos orquestados por las redacciones de los periódicos y por las opiniones de las tertulias. Por otra parte, mientras se delineaba esta postura oficial, la actitud social se movió en una evidente paradoja, y así: "El pueblo español dió, prodigamente, su sangre y su dinero para mantener la bandera de la Patria, allí, en Cuba, pero no se interesó jamás, aunque parezca mentira, por lo que ocurría al otro lado del Atlántico con los restos de los dominios que conquistaron nuestros antepasados" (46).

La situación a la llegada de Weyler era bastante comprometida, como pudo comprobar él mismo (47). El plan de Weyler consistía en dividir Cuba en tres zonas, incomunicadas por las trochas militares (líneas compuestas de fortines distantes entre sí solamente mil metros). Desde Pinar del Río se pacificarían La Habana y Matanzas, empujando a los insurrectos hacia Oriente, y desde Santiago de Cuba se haría otro tanto con

el otro sector rebelde, que se vería constreñido hacia Occidente, para todo lo cual el Capitán General pensaba emplear dos años. Por otro lado, se protegería los poblados importantes para privar a los insurrectos de su posesión y las fuerzas quedarían concentradas en guarniciones y trochas. A todo esto, Maceo se había unido con Gómez y juntos permanecieron casi un mes entre La Habana y Matanzas. Decidido Gómez a volver a Oriente, se le planteó a Weyler la alternativa de perseguirle o de cercar a Maceo en Occidente para terminar con él, y ante tal disyuntiva se decantó por este último camino. Mientras tanto, el número de tropas fue aumentando progresivamente, ya que, aparte de las fuerzas inmovilizadas en la defensa de las trochas y de los núcleos importantes, se necesitaban más hombres para operar y reemplazar a los que caían enfermos, que eran bastantes. Pronto empezaron los reproches contra Weyler por sus medidas, pero lo cierto era que Gómez estaba incomunicado en Oriente y Maceo acorralado en Occidente, expuesto a tener que operar sin excesiva protección, o a perecer, lo que ocurrió en uno de los múltiples encuentros que tuvieron lugar por aquellas fechas (7 de Diciembre de 1896).

Aunque era injusto, pues, culpar a Weyler desde un punto de vista estrictamente militar, lo cierto es que su "política de guerra" lastimaba grandes intereses, ya que prohibió la exportación de tabaco a Tampa y a Cayo Hueso (focos separatistas) para evitar daños a las fábricas habaneras, lo que produjo las protestas de los vequeros perjudicados y obligó a todo extranjero a inscribirse en su respectivo Consulado en el plazo de un mes, con las consiguientes reclamaciones por parte de los interesados. Además, prohibió que se efectuase la próxima zafra, al objeto de evitar que los insurrectos encontrasen fuentes de ingreso en las centrales de La Habana, Matanzas y Pinar del Río. Con esta medida quedaron más de setenta y cinco

mil obreros en paro y se produjeron quejas por parte de los propietarios de ingenios, como el Marqués de Apezteguía, jefe de la Unión Constitucional. Por otro lado, a todas estas protestas se unió la del Cónsul estadounidense en La Habana, Mr. Lee, que canalizó hábilmente, mediante reclamaciones de carácter oficial, el malestar existente, sin decir nada de la propaganda de la prensa yanqui, que presentaba al Gobierno español y a Weyler como los aniquiladores de la riqueza cubana (48).

No solamente era el factor militar, sin embargo, el que jugaba en el problema de Cuba. Capital importancia tenía también la cuestión económica: agotamiento del Tesoro de Ultramar, forzada circulación fiduciaria con sus secuelas de perturbación en las transacciones y del descontento entre las clases productoras y mercantiles afectas a España, necesidad de obtener créditos, etc. Ante la disyuntiva de concluir la guerra o de verse abocado a una muy probable lucha exterior, el Gobierno empezó a evolucionar en el sentido de las reformas, mientras los belicosos e irreductibles, con Romero Robledo a la cabeza, protestaban airadamente por la adopción de este nuevo rumbo. Por su parte, Weyler proseguía su plan pacificador en busca del segundo objetivo: acabar con el sector oriental de Gómez.

Pero aparte de esto, era preciso solucionar el problema representado por el apoyo que los insurrectos encontraban en la población rural, que les proporcionaba alojamiento, comida, indicaciones, noticias, etc. A este fin, Weyler dictó las llamadas "ordenes de concentración de pacíficos", que obligaban a la población rural a concentrarse en las ciudades más próximas y a labrar los terrenos anejos que se les indicasen. Ciertamente, era verdad que los campesinos, desde sus bohíos en el monte y en la sabana, prestaban ayuda a los rebeldes de las más variadas formas y que, por tanto, se debía terminar con este auxilio;

pero, indudablemente, la medida provocó muchos sufrimientos a la población, obligada a concentrarse y en la que la enfermedad y el hambre se cebaron de manera particular. De todas formas, también es evidente que se exageró mucho sobre la "crueldad" de Weyler, al amparo de la parcial e interesada campaña de prensa desatada por Estados Unidos.

La opinión española no comprendía cómo Weyler, con un ejército más numeroso que el enviado a Filipinas para sofocar la rebelión allí acaecida, no concluía la campaña, y al hilo de este pensamiento fue aumentando la impopularidad del General. Aparentemente, las medidas de Weyler no resultaban muy eficaces, ya que tanto Máximo Gómez como Quintín Banderas se habían movido con cierta facilidad entre las líneas fortificadas. Sin embargo, en la primavera de 1897 se logró capturar al puertorriqueño Juan Rius Rivera, que había sucedido en el mando de las tropas de Occidente a Maceo, al tiempo que los españoles dominaban en el Centro y en buena parte de la región occidental, con lo que quedó reducido de hecho el foco insurrecto a la provincia de Oriente, lo cual no quería decir que la guerra se hubiese terminado ni que el control de la isla fuese completo. Además, por aquellas fechas, aunque sin consecuencias, se produjo en Puerto Rico la llamada "intentona de Yauco" (24 de Marzo de 1897), lo que determinó cierta alarma entre las Autoridades españolas (49).

Para el verano podía decirse que, en líneas generales, gran parte de Cuba estaba pacificada: Quintín Banderas había muerto el 5 de Julio y Máximo Gómez estaba acorralado, aunque los adversarios de Cánovas y de Weyler se encargaron de impugnar estos aspectos. En realidad, desde un punto de vista militar, Cuba estaba pacificada casi por completo, aunque también era cierto que la normalidad no era total y que Cánovas había esperado más de la acción bélica. En un caso o en otro, el

asesinato del Presidente del Consejo de Ministros hizo inminente la destitución del Capitán General, quien, sin embargo, de momento continuó las operaciones militares de acuerdo con su plan, consiguiendo contener a Gómez, que intentó romper el cerco en que se encontraba, y hacer frente a la acometida de Calixto García en Victoria de las Tunas (50).

Mientras tanto (Octubre de 1897), en su afán de conseguir la beligerancia y de acuerdo con el plazo de dos años establecido por la Constitución de Jimaguayú, los insurrectos procedieron a la elección de una nueva Asamblea, de la que tenía que salir el nuevo Consejo. De estas reuniones surgió la Constitución de La Yaya, redactada en forma democrática y que constaba de cuarenta y ocho artículos, cinco Títulos y cinco secciones que fue aprobada el 29 de Octubre de 1897 (51). Poco después, pese a que el 6 de Octubre se produjo en La Habana una manifestación en favor de Weyler, el Gobierno, decidido a destituirle y fiel a su posición autonomista, ultimamente muy reiterada desde la oposición, emitió el día 9 los decretos correspondientes, por los que cesaba en el cargo el hasta entonces Capitán General y se mandaba para sustituirle a don Ramón Blanco. De esta forma, se habían relegado una vez más las reformas y se optaba por la guerra en sus dos vertientes, la conciliatoria de Martínez Campos y la dura de Weyler, sin llegar hasta última hora, cuando ya era demasiado tarde, a una solución positiva.

N O T A S.

- (1) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, pág. 203
- (2) Sobre la figura de Juan Gualberto Gómez véanse, CARBONELL Y RIVERO, MIGUEL ANGEL: Juan Gualberto Gómez (La Habana 1938) y HORREGO ESTRUCH, LEOPOLDO: Juan Gualberto Gómez (La Habana 1954).
- (3) GRIÑAN PERALTA, LEONARDO: Martí, Líder Político (La Habana 1970), págs. 97-99.
- (4) TUÑON DE LARA, MANUEL: La España del Siglo XIX (París 1968), pág. 291.
- (5) Para comparar los alegatos de los bandos de nuevo en pugna, a partir de la apertura de la segunda guerra de independencia cubana, véanse, MESTRE AMABILE, V.: La Question Cubaine et le Conflict Hispanoaméricaine (París 1896) (Propaganda de los insurrectos frente a la opinión mundial) y CASAS, A. DE LAS: Cartas al Pueblo Americano sobre Cuba y las Repúblicas Latinoamericanas (Buenos Aires 1897) (Defensa desde el punto de vista español).
- (6) Sobre Hostos véanse, PEDREIRA ANTONIO S.: Hostos, Ciudadano de América (San Juan 1964) y ELIAS DE TEJADA, FRANCISCO: Las Doctrinas Políticas de Eugenio María de Hostos (Madrid 1949).
- (7) La labor realizada por la Sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano puede seguirse en Memoria de los Trabajos Realizados por la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, 1895-1898 (Nueva York 1898).
- (8) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 233-237. Para una información general del conflicto bélico véase, Bibliografía de la Guerra de Independencia (1895-1898) (La Habana 1976).
- (9) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 207-208.
- (10) Ibid., Vol. I, pág. 209.
- (11) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 17 de Enero de 1895.
- (12) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm.17.

- (13) Diario de Sesiones del Senado, 28 de Febrero de 1895.
- (14) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 28 de Febrero de 1895.
- (15) Misma cita, Nota anterior.
- (16) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 313.
- (17) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 2 de Marzo de 1895.
- (18) Diario de Sesiones del Senado, 4 y 8 de Marzo de 1895.
- (19) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 11 y 12 de Marzo de 1895.
- (20) Ibid., 11 de Marzo de 1895.
- (21) Ibid., 13 de Marzo de 1895.
- (22) Ibid., 27 de Marzo de 1895.
- (23) La política desarrollada por el Gobierno a partir de este momento puede seguirse en Apuntes del Ex-Ministro de Estado Duque de Tetuán para la Defensa de la Política Internacional y Gestión Diplomática del Gobierno Liberal-Conservador desde el 28 de Marzo de 1895 al 29 de Septiembre de 1897 (Madrid 1902).
- (24) Véase Apéndice Documental II. Apéndice núm. 18.
- (25) FABIE, ANTONIO MARIA: Ob. cit., pág. 320.
- (26) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 244.
- (27) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 226.
- (28) FABIE, ANTONIO MARIA: Ob. cit., pág. 323.
- (29) TUÑÓN DE LARA, MANUEL: Ob. cit., pág. 294.
- (30) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 168.
- (31) Ibid., págs. 186-187.
- (32) Diario de Sesiones del Senado, 30 de Junio de 1896.
- (33) GRIÑAN PERALTA, LEONARDO: Martí, Líder Político (La Habana 1970), págs. 107-108.

- (34) SOUZA, BENIGNO: Biografía de un Regimiento Mambí: El Regimiento de Calixto García (La Habana 1938), págs. 9-10. Sobre los mambises y su mundo puede verse IBARRA, JORGE: Ideología Mambisa (La Habana 1972).
- (35) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: Sagasta o el Político (Madrid 1934), págs. 191-194 y SOUZA, BENIGNO: Máximo Gómez el Generalísimo (La Habana 1936), págs. 235-238 (Contiene porcentajes de los hombres atacados por las enfermedades, en especial, por la malaria y la fiebre amarilla).
- (36) Sobre la figura de Gómez y sobre sus campañas militares además del ya citado SOUZA, BENIGNO: Máximo Gómez el Generalísimo (La Habana 1936) pueden verse FERRARA, ORESTES: Mis Relaciones con Máximo Gómez (La Habana 1942); SOUZA, BENIGNO: Máximo Gómez y las Invasiones del 75 y del 95 (La Habana 1932) y GOMEZ, MAXIMO: Diario de Campaña (La Habana 1940).
- (37) Sobre Maceo véanse, CARBONELL Y RIVERO, MIGUEL ANGEL: Antonio Maceo (La Habana 1935); FRANCO, JOSE LUCIANO: Antonio Maceo. Apuntes para una Historia de su Vida (La Habana 1973) y MACEO Y GRAJALES, ANTONIO: Papeles de Maceo (La Habana 1948).
- (38) ELY, ROLAND T.: Cuando Reinaba su Majestad el Azúcar (Buenos Aires 1963), pág. 691 y SOUZA, BENIGNO: Máximo Gómez y las Invasiones del 75 y del 95 (La Habana 1932), pág. 13.
- (39) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 238.
- (40) Ibid., Vol. I, págs. 240-243.
- (41) Sobre el papel desempeñado por los emigrados véase, MENDEZ CAPOTE, LUIS: El Pacto del Zanjón (La Habana 1929), pág. 47.
- (42) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 254-259 y LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), págs. 48-52.
- (43) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, págs. 250-253.
- (44) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 19.
- (45) Diario de Sesiones del Senado, 30 de Junio de 1896.
- (46) FABIE, ANTONIO MARIA: Ob. cit., págs. 329-330.

- (47) Sobre la política de Weyler véase, WEYLER Y NICOLAU, VALERIANO: Mi Mando en Cuba (10 de Febrero de 1896 a 31 de Octubre de 1897. Historia Militar y Política de la Última Guerra Separatista durante Dicho Mando) (Madrid 1910-1911).
- (48) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 301.
- (49) CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol. III, pág. 47 y sigs.
- (50) Sobre la figura de Calixto García véase, PEREZ CABRERA, JOSE M.: Calixto García (La Habana 1949).
- (51) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 20 y LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Ob. cit., págs. 52-55.

2.2.9) LOS DECRETOS AUTONOMICOS (1897).

Desde la época de Maura, las reformas habían tenido un carácter más o menos amplio, pero siempre en un sentido puramente administrativo. Ahora, sin embargo, se produjo un cambio de índole política, aunque la renovación vino demasiado tarde. Aun así, la concesión de la autonomía quedó como un ejemplo histórico a considerar. A pesar de las reformas auspiciadas por Cánovas y de la acción militar de Weyler, lo cierto era que la guerra no se terminaba y que el problema de Cuba se precipitaba hacia la peligrosa vertiente de la intervención extranjera. Anunciada para el 20 de Mayo de 1897 la apertura de Cortes con objeto de continuar la legislatura, cuyas sesiones habían sido suspendidas el 7 de Septiembre del año anterior, el 19 por la tarde reunió Sagasta en el Senado a las minorías de su partido y pronunció un discurso, en el que criticó la ineficacia de la acción militar en Cuba, resaltó la desastrosa situación económica y consideró estériles las reformas ultimamente publicadas. Aquel mismo día, convocó Cánovas en la Presidencia a las mayorías del Congreso y del Senado y contestó a Sagasta rebatiendo sus imputaciones (1).

Poco después, el 24 de Mayo, pronunció Cánovas su último discurso en el Congreso, en el que dijo que no era exacto que se hubiese concedido una súbita influencia a las reformas. Estas, mientras fuera necesario, se simultanearían con la acción militar (2). Un incidente acaecido en el Senado motivó al poco tiempo una crisis gubernamental, planteada el 2 de Junio y que supuso la ratificación de la confianza regia a Cánovas (6 de Junio), quien no introdujo cambios en su Gabinete, a la vez que confirmó a Weyler en su puesto de la Capitanía General de Cuba. Dado este panorama, el Partido Liberal pasó a ser el portaestandarte de la autonomía. El 12 de Junio, don Francisco Silvela organizó, en el madrileño Teatro de la Alhambra, un mítin

en el que combatió las reformas de Cánovas, las cuales, según él, suponían la dimisión del derecho de España a gobernar en las Antillas. Sólo el esfuerzo militar acabaría con la guerra, pero cambiando de procedimiento, lo que dejaba entrever la idea del relevo de Weyler y de la vuelta a la política contemporizadora de Martínez Campos (3).

El 19, Sagasta habló a los Ex-Ministros de su partido indicándoles que sólo los liberales podían modificar el Estatuto antillano, y eso sería mediante la autonomía. El 22, los Ex-Ministros volvieron a reunirse en casa de Sagasta y acordaron dirigir un Manifiesto al País, que apareció el 24 y en el que se ofrecía la solución autonómica como término de la guerra de Cuba. Según el manifiesto, el Partido Liberal no estaba dispuesto a consentir que se le desacreditase. De acuerdo con ello, la política reformista debía ser aplicada por autoridades dignas de confianza y con un espíritu de rectitud sin preferencias de partido; de lo contrario, las consecuencias podían ser irremediables. Para el Partido Liberal la política a seguir se estructuraba en torno a los siguientes puntos: llevar adelante el programa mantenido sin vacilar; tener mayor moderación en los procedimientos militares; imprimir mayor energía a la acción diplomática; enviar un General más flexible a los cambios y separar las tareas militares, propias del Capitán General, de las reformas, que se debían encomendar a políticos experimentados. Con esta manera de actuar, entendía el Partido Liberal que se produciría una acomodación de las reformas a las necesidades del momento, cuya tendencia se orientaba a la consecución de la autonomía, por parte de las provincias de Ultramar. Dicha política debía resolver, al mismo tiempo, los problemas del presupuesto, la distribución de la Deuda y el tema del arancel, de tal forma que quedasen afianzadas todas las cuestiones relativas a las relaciones económicas, sobre la base de un interés mútuo, libre de presiones extranjeras (4).

Establecidos estos supuestos por parte del Partido Liberal, Labra fue consultado sobre el particular por el director de "La Correspondencia de España". En aquellas circunstancias, se hacía necesario solicitar la intervención de la opinión pública española sobre los tremendos problemas que amenazaban a la patria. Era preciso hablar claro sobre Cuba, dado que en la Península se estaba muy mal informado con respecto a lo que pasaba en la Gran Antilla, y aplicar con resolución y sinceramente las reformas propuestas. Por otra parte, no parecía existir un peligro inmediato de guerra con Estados Unidos, ya que los políticos estadounidenses no la querían por muchas razones y el Gobierno de aquel país, que tenía una política muy orientada sobre el tema, evitaba toda clase de conflictos para ganar tiempo y para reducir su acción a las reclamaciones de indemnización. Realmente, ahí estaba el verdadero problema, porque con esas reclamaciones norteamericanas podían combinarse las de Francia, Gran Bretaña y, quizá, las de Alemania, y aumentar así prodigiosamente, si no se modificaba el modo de hacer la guerra en Cuba y si no se conseguía que la insurrección separatista tuviese enfrente la acción entusiasta y resuelta de la mayoría del pueblo cubano.

Ciertamente, el Partido Liberal había prestado hasta entonces importantes servicios a las libertades de Ultramar y parecía que la solución de los problemas estaba ahora en sus manos. No obstante, era absolutamente necesario no quedarse en vaguedades, equívocos ni reservas, ya que no era suficiente con hablar de la acción política que había de acompañar a la militar, sino que era preciso decir en qué consistían una y otra; ni bastaba con indicar que se iba a la autonomía, sino que se tenía que precisar de qué clase de autonomía se trataba. Así, pues, no podía permitirse por más tiempo lo que estaba ocurriendo en los círculos políticos españoles, en donde a cada instante se hablaba

en términos vagos de autonomía política, de autonomía administrativa, de autogobierno y de personalidad insular, puesto que todo esto tendía a confundir a las gentes sencillas y a hacer perder la paciencia a los hombres juiciosos, que habían entendido que, cuando se hablaba de autonomía colonial, se hacía referencia a lo que por ello se entendía en todo el mundo contemporáneo y, más concretamente, a lo que habían propuesto como tal los autonomistas de Cuba y Puerto Rico. Todos los partidos políticos tenían la obligación ineludible de presentar soluciones detalladas al problema antillano. Sin embargo, no debía entenderse por autonomía colonial cualquier cosa, ni intentar la solución autonomista fuera de su contexto, ya que, si fracasaba el empeño, cabía el peligro de atribuir dicho fracaso no a la práctica empleada, sino al error fundamental de la doctrina, cuando realmente ésta se presentaba como un medio de favorecer a las Antillas, de fortificar el vínculo colonial, de descargar a la metrópoli de atenciones imposibles y de terminar bien y con relativa prontitud la guerra existente (5).

Ciertamente, estaba de por medio el espinoso problema del vigente arancel, que era altamente lesivo para la riqueza cubana y que se había convertido en un compromiso para los Gobiernos metropolitanos. De hecho, se había ratificado su modificación en la Ley Abárzuza y en las últimas reformas, pero como esa Ley no se había implantado en Cuba, las reformas tampoco habían llegado a aplicarse jamás, sin que hubiese llegado a elaborarse el arancel interino prometido por los conservadores. De esta forma, la vida mercantil y la economía cubanas continuaban en inalterable situación, mientras los núcleos económicos tradicionales (Cataluña, con sus textiles y manufacturas, y Castilla (Santander) con sus harinas) se mantenían reacios a las reformas económicas y a las políticas que les eran anejas.

En una de sus últimas conversaciones políticas (18 de Julio de 1897), Cánovas, hablando con el Ex-Ministro de Ultramar Antonio María Fabié, le expuso su convencimiento de que las cosas no iban bien en Cuba, ya que los militares no sólo no acertaban a solucionar el problema, sino que abusaban de su situación sin darse cuenta de que el país no podía soportar la carga que suponía la guerra, amén de la amenaza que representaba la presencia de Estados Unidos, siempre vigilante, a la espera de la ocasión propicia. De acuerdo con estas ideas, daba a los militares unos meses de plazo, hasta fin de año, para terminar la guerra con la intención de reorganizar el Gabinete y de convocar las Cortes para exponerles su plan a su regreso del veraneo. Si, a pesar de todo, la insurrección cubana no terminaba al finalizar el año, daría paso al Partido Liberal, para que resolviese el problema con una solución autonómica (6).

Al día siguiente (19 de Julio de 1897), Moret ratificó la posición autonómica de los liberales en un mítin celebrado en un teatro de Zaragoza, en el que puntualizó que la autonomía consistía en la concesión a Cuba de derechos y libertades, pero no en la independencia. Por su parte, los republicanos, en una asamblea celebrada a primeros de Junio, habían tomado, entre otros acuerdos, el de aceptar la autonomía de Cuba y Puerto Rico, rechazando toda intervención foránea. Pi y Margall continuó aferrado a su idea de la independencia, y los carlistas se pronunciaron en contra de lo que atentase a la soberanía nacional (7). En estas circunstancias, el 8 de Agosto Cánovas fue asesinado en Santa Agueda por Angiolillo y se hizo cargo del poder interinamente el General Azcárraga. El 28 de Septiembre volvió la Corte de su veraneo en San Sebastián, el 29 se hizo pública la crisis gubernamental y el 2 de Octubre la Reina confió a Sagasta el encargo de formar Gabinete.

El 4 de Octubre, Sagasta formó Gobierno, encomendando la cartera de Ultramar a don Segismundo Moret, calificado como ningún otro para ostentar este puesto. Así, en el primer Consejo de Ministros del 6 de Octubre, cuarenta y ocho horas después de la jura, quedaron ratificados los compromisos contraídos en la oposición respecto del problema cubano, entre los que figuraban, en primer término, el relevo de Weyler y la concesión de la autonomía. Fiel a su programa, el 9 de Octubre de 1897 el Gobierno, que ya había expresado poco antes sus opiniones en una nota oficiosa, sustituyó a Weyler en la Capitanía General de Cuba por don Ramón Blanco, que tomó posesión de su cargo el 31 del mismo mes (8).

Además de las dos resoluciones tomadas (retiro de Weyler y concesión de la autonomía), el Gobierno liberal tuvo que hacer frente a un tercer problema de no menor importancia, el arreglo de la Deuda cubana, para el cual Moret ideó un plan singular, basado en los recursos que ofrecían las tierras incultas de la isla. Le había proporcionado la idea una conversación del Embajador norteamericano, Mr. Woodford, con el representante en Madrid del Gobierno de su Majestad británica, en la que Woodford solicitaba capitales ingleses para explotar las riquezas del suelo y del subsuelo de Cuba. No obstante, dado que este plan comportaba ciertos riesgos en relación con tener que aceptar algún tipo de enajenación, el Ministro de Ultramar pensó en adaptar a los intereses nacionales la idea, lanzada por el representante estadounidense, pasando del primitivo proyecto, basado en la constitución de unos Bancos agrícolas, a un intento de enfrentamiento de los intereses de Estados Unidos con los de Europa. No se trataba de vender, sino de hipotecar y de obtener, así, una doble solución: liquidar la Deuda e internacionalizar el problema, restando fuerza, de esta forma, a Norteamérica al hacer intervenir a los países europeos. La forma concreta del plan

consistía en ceder ocho millones de hectáreas a Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos y, mediante su explotación, liquidar la Deuda cubana. De momento, se perdían ciertas ventajas, que, por otra parte, no se habían tocado de forma tangible, pero se lograba internacionalizar, "europeizar" (según el Ministro francés Hanotaux), la cuestión, y al establecer, de alguna manera, un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos, aunque fuese en ese sentido económico, restarle fuerza a éstos mismos. De esta forma, no se vendía, se lograba amortizar la Deuda, importante problema, y se contrapesaba la creciente influencia de Norteamérica o, en todo caso, un monopolio económico, que se hubiese visto acrecentado si la cesión se hubiera hecho exclusivamente en su favor. Realmente, el pensamiento de Moret era bueno, pero los países europeos, en especial Francia, titubearon, y al fin decidieron desechar la idea, porque les resultaba muy comprometido enfrentarse con el gran coloso estadounidense (9).

Por aquel entonces (verano-otoño de 1897), Rafael María de Labra realizó un viaje de propaganda por el Norte de España en virtud de un acuerdo del directorio de Fusión Republicana y pronunció una serie de discursos, en uno de los cuales, celebrado el 25 de Julio en León y cuyo resumen fue publicado al día siguiente en "El Liberal" de Madrid, abordó el tema de la autonomía colonial. Según su criterio, la única solución del problema ultramarino estaba en la autonomía, tanto en Cuba como en Puerto Rico; en un caso, por exigencias de la guerra, en otro, por decoro nacional, y siempre, por la propia virtud del principio autonomista, cuya aplicación había evitado que fructificara la idea separatista en las provincias de Ultramar y que prosperase la rebelión contra la metrópoli, al contrario de lo que había logrado el sistema asimilista. Sin embargo, no bastaba con aclamar la autonomía; era imprescindible definirla y

precisarla y, después, encomendar su planteamiento y desarrollo a los auténticos autonomistas, los cuales se encargarían de aplicarla de la forma más adecuada. En este sentido, parecía que conservadores y liberales se inclinaban por una política autonomista, pero era necesario que se precisaran las fórmulas y la aplicación de dicha doctrina y que se dijese con claridad lo que se iba a hacer con los partidos autonomistas antillanos, sin cuyo consenso activo y entusiasta no era posible ningún tipo de progreso. Además, la autonomía tampoco podía plantearse, mientras subsistiesen las deportaciones gubernativas y estuviesen entregadas por decreto las corporaciones populares y los empleos políticos y administrativos a los enemigos de dicha ideología (10).

Comprometido, pues, el Gobierno español con la autonomía, el 22 de Noviembre de 1897 Moret dió lectura en Consejo de Ministros al proyecto de los Reales Decretos por los que se dictaba la nueva Constitución Autonómica. Aprobada la reforma por el Gobierno y firmada por la Reina Regente, el 25 de ese mismo mes y año aparecieron los decretos que otorgaban el nuevo Estatuto, intento sincero, pero, como el anterior, tardío de solucionar el problema. Las reformas se hallaban comprendidas en tres Reales Decretos. El primero disponía la plenitud de la vigencia constitucional al extender, sin limitación de ninguna clase, los derechos políticos a los cubanos y puertorriqueños, suprimiendo las restricciones del Decreto de 27 de Abril de 1881 y, en particular, el artículo 29 del Código Militar, y aclaraba que el Título I de la Constitución de 1876 se aplicaría sin restricciones a las Antillas, con lo que la declaración de derechos y garantías tomada de la Constitución de 1869 y de la de 1876 se aplicaba íntegramente, lo mismo que la totalidad de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal, Orden Público, Expropiación Forzosa, Instrucción Pública, Imprenta, Reunión y Asociación, así

como el Código de Justicia Militar, ordenándose la pertinente revisión de la legislación y de los bandos vigentes, en cuanto se opusieran a lo expresado. El segundo extendía en todas sus formas la Ley Electoral de 26 de Junio de 1890, estableciendo el sufragio universal y dictando normas que reprimían los más importantes abusos en esta materia. Por último, el tercero regulaba, de acuerdo con las más avanzadas peticiones, el gobierno y la administración de las Antillas. El Decreto que establecía la Constitución Autonómica de las islas de Cuba y Puerto Rico fue especialmente adaptado para esta última en otro texto de la misma fecha, por lo que pueden considerarse uno solo, ya que las distinciones afectaban únicamente a cuestiones de detalle, que recogían las características propias de cada una de ellas (11).

Tal como queda indicado, la reforma fue conjunta para ambas Antillas, y aunque el Decreto se dió atendiendo en primer lugar a Cuba, su artículo tercero consignaba: "las disposiciones del presente Decreto se aplicarán íntegramente a la Isla de Puerto Rico, pero a fin de acomodarlas a su población y a su nomenclatura se publicarán en Decreto especial para dicha Isla". En realidad, las diferencias eran muy pequeñas y afectaban tan sólo al consejo de administración, que en Cuba era más numeroso, treinta y cinco miembros en lugar de los quince de Puerto Rico, y a las condiciones de elegibilidad de sus miembros.

La Constitución, distribuida en nueve Títulos más unos artículos adicionales y otros transitorios, encomendaba el gobierno y la administración de las islas a un Gobernador General, representante de la metrópoli, y a un Parlamento isleño, integrado, sobre base bicameral, por una Cámara de Representantes y un Consejo de Administración (artº. 2º). Ambos, Parlamento y Gobernador, compartían el Poder Legislativo (artº. 3º), y tenían

las dos Cámaras insulares (artº. 4º) igualdad de facultades (la facultad de legislar alcanzaba a los asuntos ultramarinos en la forma preceptuada por las leyes).

El Consejo de Administración, regulado por el Título III, se componía de treinta y cinco miembros, dieciocho elegidos en la forma indicada por la Ley Electoral y los otros diecisiete designados por el Rey, y en su nombre, por el Gobernador General (artº. 5º) (quince, ocho electivos y siete designados, para Puerto Rico). Para ser Consejero se requería tener treinta y cinco años, ser natural de la isla o residir en ella más de cuatro años, etc. (artº. 6º) y ciertas condiciones especiales de elegibilidad (artº. 7º). Los Consejeros designados lo serían de por vida y los electivos por cinco años en su mitad y en la totalidad cuando el Gobernador disolviese el Consejo (artº. 8º).

La Cámara, regida por el Título IV, establecía que sus miembros serían designados por las Juntas Electorales a razón de uno por cada veinticinco mil habitantes (artº. 11). Para ser candidato se requería la mayoría de edad y la naturaleza o residencia de cuatro años (artº. 12); el mandato sería por cinco años (artº. 13). El Gobernador podía disolver una o las dos Cámaras "con la obligación de convocarlas de nuevo, o de renovarlas dentro de tres meses" (artº. 15). Cada una de las Cámaras formaría su respectivo reglamento y examinaría las cualidades de sus componentes y la legalidad de su elección (artº. 16) y nombraría a su Presidente, Vicepresidente y Secretarios (artº. 17); las Cámaras debían reunirse a la vez (artº. 18), pero no podían deliberar juntas ni en presencia del Gobernador (artº. 19). Los cuerpos colegisladores tenían perfectamente especificados todos los privilegios parlamentarios normales: designación de la mesa, aprobación del reglamento, decisión sobre incompatibilidades, iniciativa legislativa,

inviolabilidad, inmunidad, etc. y ejercían "la potestad legislativa colonial", de la que resultaban los "Estatutos Coloniales", que cubrían ampliamente todas las materias locales (artºs. 20 a 28). Por otra parte, las Cámaras recibían el juramento del Gobernador, acusaban y juzgaban a los Secretarios del Despacho y podían dirigirse al Gobierno central por medio del Gobernador para la derogación o modificación de las leyes del Reino vigentes o para pedir la adopción de nuevas disposiciones legales o de resoluciones ejecutivas (artº. 29). Los proyectos que pudiesen afectar a los intereses nacionales, si eran de iniciativa del Gobernador debían ser comunicados al Gobierno central y si lo eran de procedencia parlamentaria debía reclamarse el "aplazamiento de la discusión" (artº. 30). Se sometían a los Tribunales de Justicia todos los conflictos de jurisdicción, "que por su índole no fueran referidos al Gobierno central" (artº. 31).

Según el Título VI, las Cámaras insulares tenían facultades para entender en cuantos asuntos y materias competieran a Gracia y Justicia; Gobernación; Hacienda y Fomento en sus tres aspectos de Obras Públicas, Instrucción y Agricultura; a organización administrativa; división territorial y provincial, municipal o judicial; Sanidad, marítima o terrestre; crédito público; Bancos; sistema monetario y, en definitiva, a todos aquellos asuntos de índole puramente local, que afectasen principalmente al territorio ultramarino, sin perjuicio todo ello de las facultades que sobre las mismas materias correspondiesen según las leyes al Poder Ejecutivo de Ultramar (artº. 32). Era de la competencia de las Cámaras formar los reglamentos de las leyes, votadas por las Cortes del Reino, cuando se lo confiasen; estatuir en materia electoral; formar el censo; calificar a los electores y establecer la manera de ejercitar el sufragio, "pero sin que sus disposiciones puedan

afectar al derecho del ciudadano según le esta reconocido por la Ley Electoral" (artº. 33). Las leyes relativas a la Administración de Justicia y a la organización de los Tribunales eran de carácter general y obligatorias y, de acuerdo con ello, el Parlamento ultramarino podía dictar las reglas y proponer al Gobierno central las medidas pertinentes para el acceso a los Tribunales locales de los naturales o de los que fuesen abogados. Correspondían al Gobernador General, en consejo, las facultades relativas a los nombramientos de funcionarios subalternos y auxiliares del orden judicial y demás asuntos de la Administración de Justicia ejercidos por el Ministerio de Ultramar en relación con Cuba o Puerto Rico (artº. 34). El Parlamento formaría el presupuesto local de gastos y de ingresos y el de ingresos necesarios para cubrir la parte que le correspondiese a las islas dentro del presupuesto de la metrópoli (artº. 35). Se distinguían los gastos de la soberanía, de los propios de la administración ultramarina (artº. 36). Los Tratados de Comercio relativos a las islas los negociaría el Gobierno central con el auxilio de delegados especiales que los representasen, cuya conformidad o no al proyecto debía hacerse constar al someterlo a las Cortes (artº. 37). Los que no afectasen directamente a las islas debían comunicarse, para que el Gobierno insular decidiese si deseaba o no adherirse (artº. 38). Las Cámaras tenían facultades para aprobar la formación del arancel (artº. 39), prohibiéndose los derechos diferenciados entre las islas y la metrópoli y viceversa, mientras eran de rigor los preferenciales frente a otros Estados (artº. 40).

El Título VII se ocupaba del Gobernador General. Este ejercería el mando supremo de las provincias ultramarinas, sería nombrado por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros. Sería Vicepatrono de Indias y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, delegado de los Ministerios de Estado, Guerra, Marina y

Ultramar, y conservador del orden y de la seguridad (artº. 41). Como autoridad superior de las provincias ultramarinas tenía las facultades propias de su cargo de representante de la metrópoli: podía suspender las resoluciones del Gobierno central; ejercía la gracia del indulto; le correspondía, en casos de emergencia, la suspensión de las garantías constitucionales, previa audiencia del Consejo de Secretarios; comunicaba directamente con los representantes diplomáticos y consulares de España en América, etc. (artº. 42). Como autoridad superior de las provincias ultramarinas y jefe de la Administración, le correspondía, entre otras cosas, mencionar y publicar los acuerdos del Parlamento insular, los cuales le serían sometidos por el Presidente y por los Secretarios de las Cámaras respectivas. Por otra parte, cuando el Gobernador General entendiera que un acuerdo del Parlamento extransgredía sus facultades, atentaba a los derechos de los ciudadanos o comprometía los intereses, tanto de las provincias de ultramar como del Estado, debía remitir dicho acuerdo al Consejo de Ministros, el cual, en un plazo no superior a dos meses, lo aprobaría o lo devolvería al Gobernador General, acompañado de un informe motivado. A la vista de estas razones, el Parlamento insular podía volver a deliberar sobre el asunto y modificarlo, si lo estimaba conveniente, sin necesidad de una proposición especial. Si el Gobierno no respondía dentro de dos meses, debería procederse a la promulgación (artº. 43). Todos los actos del Gobernador requerían el refrendo de un Secretario del Despacho, quien de esta forma se hacía responsable (artº. 44). El gobierno sería ejercido por los cinco Secretarios del Despacho recogidos en la Constitución: Gracia y Justicia y Gobernación; Hacienda; Instrucción Pública; Obras Públicas y Comunicaciones y Agricultura, Industria y Comercio. Dichas Secretarías podían ser aumentadas a juicio del Parlamento insular (artº. 45). Los Secretarios del Despacho podían ser miembros de la Cámara de Representantes o del Consejo de Administración (Artº 46) y eran

"responsables de sus actos ante las Cámaras insulares" (artº. 47). El Gobernador no podía modificar o revocar sus órdenes, cuando hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, declarasen derechos, hubieran sido apoyatura de sentencia jurídica o hiciesen referencia a sus propias facultades (artº. 48). El Gobernador no podía ausentarse sin previa autorización del Gobierno (artº. 49). El Tribunal Supremo conocía en lo penal de las responsabilidades que se le achacasen al Gobernador (artº. 50). En determinados casos especiales, el Gobernador podía obrar bajo su responsabilidad (artº. 51).

El Título VIII hacía referencia al régimen provincial y municipal. En toda ciudad superior a mil habitantes, el régimen municipal era obligatorio (artº. 52). Al frente de cada provincia habría una Diputación elegida en la forma determinada por las leyes e integrada por un número proporcionado de individuos (artº. 53). Dentro de su ámbito, las Diputaciones eran autónomas (artº. 54). Municipios y provincias establecían sus propios presupuestos (artº. 55). Los Concejales nutrían los cargos de Alcaldes y de Tenientes de Alcalde (artº. 56). Los Alcaldes ejercían como ejecutores de los acuerdos municipales y representaban a los Ayuntamientos (artº. 57). Concejales y Diputados eran responsables civilmente (artº. 58). Las Diputaciones nombrarían a sus Presidentes (artº. 59). Las elecciones de Concejales y de Diputados se efectuarían de forma que las minorías quedasen representadas (artº. 60). Seguían rigiendo las Leyes Provincial y Municipal existentes, en tanto no se opusieran a la Constitución y se legislase de nuevo sobre estas materias (artº. 61). Las facultades reconocidas a municipios y Diputaciones quedaban aseguradas (artº. 62).

Finalmente, el Título IX establecía una serie de amplias garantías para el cumplimiento de la Constitución (artºs.

63 a 70), la principal de las cuales estribaba en la misma irrevocabilidad que le confería el artº. 2º de los adicionales a la Carta Autonómica: "una vez aprobada por las Cortes del Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico no podrá modificarse, sino en virtud de una ley, a petición del Parlamento insular". Por último, dos artículos transitorios arbitaban sobre el paso al nuevo sistema y hacían referencia a cuestiones económicas, respectivamente (12).

Establecidas así las cosas, la nueva política, a través de la cual se estructuraba la acción gubernamental peninsular, vino esbozada en la exposición de motivos que acompañaba a los Reales Decretos, por los cuales se instauraba en las Antillas el régimen autonómico. Ante todo, se trataba de asentar claramente el principio de la autonomía, deselvolverlo en toda su integridad y rodearlo de las mayores garantías de éxito posibles. Ciertamente, si se tenía que confiar la dirección de sus negocios a pueblos que habían llegado a su mayoría de edad, o no debía hablárseles de autonomía o era preciso dársela completa, con la convicción de que se les colocaba en el camino del bien, sin limitaciones o trabas, fruto de la desconfianza y del recelo. De este modo, o se ponía la defensa de la nacionalidad en manos de la represión y de la fuerza, o se la orientaba de acuerdo con las modernas directrices, fortificadas, a medida que se desarrollaban, por las ventajas de un sistema de gobierno que enseñaba a las provincias de Ultramar que no existía otro camino para alcanzar un grado mayor de bienestar, de seguridad y de importancia.

Así, pues, era condición indispensable para lograr un feliz resultado que el principio político por el que el pueblo había de gobernarse se hiciese intiligible para aquél; y, en este sentido, parecía que tales propósitos se encarnaban en el

programa del partido insular, cuyas predicaciones habían familiarizado a Cuba, desde hacía ya bastante tiempo, con el espíritu, los procedimientos y la transcendencia de la profunda innovación que se pretendía introducir en la vida política y social de aquel país. Por tales motivos, dicho proyecto político no tenía nada de teórico, ni era imitación o copia de otras Constituciones coloniales miradas como modelo en la materia, ya que, aun cuando el Gobierno había tenido muy presentes sus enseñanzas, entendía que las instituciones que de aquéllas se derivaban, tanto por su historia como por sus características, al diferir de las existentes en las Antillas, no podían arraigar allí, supuesto que carecían de los precedentes, de la atmósfera y de la preparación que aquellas tierras exigían.

Planteado de esta forma el problema y tratándose de dar una Constitución autonómica a un territorio español poblado por la raza hispana y civilizado por España, la autonomía debía desenvolverse dentro de las ideas y con arreglo al programa que llevaba ese nombre en las Antillas, sin eliminar nada de su contenido ni alterar su espíritu, sino completándolo, armonizándolo y dándole mayores garantías de estabilidad. Esta actitud correspondía al Gobierno de una metrópoli que se sentía atraída a implantarlo por la convicción de sus ventajas, por el deseo de llevar la paz y el sosiego a aquellos territorios y por la conciencia de sus responsabilidades no sólo ante las provincias de Ultramar, sino también ante sus propios intereses, que el tiempo se había encargado de entrelazar en una tupida red. De esta manera, la Constitución Autonómica que el Gobierno proponía para las islas de Cuba y Puerto Rico no era exótica ni copiada ni imitada; era una organización propia concebida por los españoles antillanos y predicada por el Partido Liberal, que se caracterizaba por un rasgo que ningún otro régimen colonial había ofrecido hasta entonces: el de que las Antillas pudieran ser

completamente autónomas en el sentido más amplio de la palabra y, al mismo, tiempo tener representación y formar parte del Parlamento español. Así, mientras los representantes del pueblo insular gobernaban desde sus Cámaras locales los intereses propios y especiales de su país, otros elegidos por el mismo pueblo asistirían y cooperarían en las Cortes a la formación de las leyes, en cuyo molde se debían formar y compenetrar los diferentes elementos de la nacionalidad española.

Respecto de las cuestiones de índole económica, la exposición gubernamental se ocupaba de los problemas suscitados por el arancel de Aduanas y por la Deuda insular. En relación con ello, se admitía que el comercio de exportación de la Península a Cuba, que se cifraba en unos treinta millones de pesos anuales y que, además, daba lugar a combinaciones de importancia para la navegación de altura, había estado sometido hasta entonces a un régimen de excepción incompatible en absoluto con el principio de la autonomía colonial, que recogía la facultad de regular las condiciones de comercio de importación y exportación y la libre administración de las aduanas. Dentro de este contexto, se hacía necesario, tras reconocer el principio en toda su integridad, procurar que la transición se hiciese sin brusquedades ni perjuicio de los intereses desarrollados a la sombra del antiguo sistema, para lo cual se tenía que preparar adecuadamente el entendimiento con los Gobiernos antillanos. En materia económica las quejas existentes provenían de la falta de reciprocidad y de la exageración de los derechos diferenciales, lo que impedía a las Antillas asegurarse los mercados que necesitaban para sus ricos y abundantes productos. Pero, en cualquier caso, no debían alarmarse los industriales ni los navieros de la Península, ya que la autonomía, aunque modificase las condiciones en que se fundaba el arancel, no alteraría los fundamentos esenciales de las relaciones económicas entre España y las Antillas. Por lo que

respecta a la Deuda cubana, ésta se repartiría equitativamente entre la Península y Ultramar, en cuanto la terminación de la guerra permitiera fijar su importe definitivo. De todos modos, lo importante era pensar en la manera de satisfacerla y, si fuera posible, de extinguirla, aplicando los procedimientos económicos de la época a las grandes riquezas que el suelo y el subsuelo cubanos brindaban a agricultores y mineros y aprovechando las extraordinarias facilidades que ofrecía al comercio universal la forma insular y la situación geográfica de aquella tierra (13).

Promulgada la Constitución por Real Decreto de 25 de Noviembre de 1897, al día siguiente se hizo pública en la "Gaceta". Realmente, suponía un autocontrol, ya que salvo la política internacional y la defensa del territorio, atributos inalienables del poder soberano, en todo lo demás, incluso en el espinoso problema del arancel, la autonomía era total. Cubanos y puertorriqueños iban a ser, en lo sucesivo, dueños de sus destinos, pues no subsistía ya ninguna de las lacras económicas y administrativas que habían persistido en las Antillas por más de medio siglo. El Gobierno establecido por la Constitución era de carácter descentralizado y representativo y constituía un notable intento de encauzar la convivencia política entre España y sus provincias de Ultramar.

En una tentativa de llevar hacia adelante y cuanto antes el programa que la nación se había propuesto, al poco tiempo juraron sus cargos los miembros de los respectivos Gobiernos insulares. El cubano, que lo hizo el 1 de Enero de 1898 ante el Capitán General don Ramón Blanco, estaba constituido por las siguientes personas: Presidente, don José María Gálvez, jefe del Partido Autonomista; Gracia y Justicia y Gobernación, don Antonio Govín, autonomista; Hacienda, don Rafael Montoro, también prestigioso representante de aquel partido; Instrucción Pública,

don Francisco Zayas, miembro del autonomismo y afamado médico; Obras Públicas y Comunicaciones, don Eduardo Dolz, Ex-Diputado reformista, y Agricultura, Industria y Comercio, don Laureano Rodríguez, Secretario del Partido Reformista. Por su parte, el Gobierno insular de Puerto Rico estaba integrado por don Francisco Mariano Quiñones, Presidente; don Luis Muñoz Rivera, Gracia y Justicia y Gobernación; don Manuel Hernández Junco, Hacienda; don Manuel F. Rossey, Instrucción Pública; don Manuel Hernández López, Obras Públicas y Comunicaciones, y don José S. Quiñones, Agricultura, Industria y Comercio (14).

Ciertamente, las reformas que ahora se planteaban tenían una gran importancia y rompían con la tradición burocrática, mantenida hasta entonces de forma más o menos resuelta por todos los partidos monárquicos y de gobierno de España. Asimismo, correspondían en lo esencial a la propaganda hecha por los autonomistas antillanos desde 1879 y, por último, podía decirse que en ciertos extremos superaban lo que regía en esta materia en las colonias inglesas. Así, pues, en el orden de las ideas, lo efectuado por el Gobierno español a fines de 1897 revestía un carácter excepcional en relación con las experiencias colonizadoras del momento, a pesar de que pudieran rastrearse algunas equivocaciones y contradicciones en la formulación de los principios y en los planteamientos de su aplicación práctica, de tal forma que la nueva conducta gubernamental acrecentó las esperanzas de la mayor parte de la sociedad antillana, ansiosa de libertades y de paz.

Por su parte, el Gobierno insular se había constituido con prestigiosos personajes tomados de los antiguos Partidos Autonomista y Reformista, mientras que el Partido Conservador había aceptado la situación creada y se disponía a cooperar en la normalización del orden político y social de Ultramar. Como

consecuencia de ello, renació la fe en el país, terminaron las deportaciones gubernativas, los fusilamientos y las redadas políticas y comenzaron a volver los emigrados y las gentes temerosas, que desde 1896 a mediados de 1897 se habían refugiado principalmente en México y en Estados Unidos. Hasta en la guerra de Cuba se notaron los efectos del cambio de dirección, de manera que las acciones militares de aquellos días fueron favorables a las tropas del Gobierno, las cuales salieron de la inacción en que aparecían durante el segundo semestre de 1897, momento en el que los insurrectos llegaron a dominar completamente todo el campo del departamento oriental. Luego, los rebeldes del resto de la isla evitaron cualquier clase de choque con las tropas gubernamentales. Varios cabecillas acataron la nueva legalidad y algunos caracterizados simpatizantes del movimiento insurreccional publicaron en Nueva York su opinión favorable a la paz garantizada por el nuevo régimen. Por otro lado, esta situación determinó que los jefes de la insurrección tomaran una serie de medidas contra la tendencia, cada vez más acentuada entre los revolucionarios, a transigir con el Gobierno insular, al tiempo que la directiva separatista de Nueva York comenzó una vigorosa propaganda sobre el tema de la falta de contenido de las reformas, única manera de crear un clima de oposición, ante la imposibilidad de negar el carácter autonomista de aquéllas (15).

No obstante, el momento histórico no fue propicio y la agresión extranjera acabó truncando el proceso. La autonomía se encontró, de entrada, con una serie de dificultades, provinientes, unas, de las mismas vicisitudes por las que había atravesado anteriormente el continente americano; existentes, otras, en la propia isla de Cuba desde la Guerra de los Diez Años y complicadas por el "Grito de Baire", que multiplicó y fomentó los gérmenes de odio. Aunque la Constitución Autonómica contentaba a un sector de la opinión pública cubana, lo cierto es

que una parte importante de los insurrectos no la aceptaron y que, por otra parte, llegó demasiado tarde. No obstante, es muy posible que sin la ingerencia norteamericana, la autonomía hubiese fructificado, puesto que el nuevo régimen era un escalón previo para la independencia, en la que tarde o temprano hubiese desembocado en lógico proceso.

En este sentido, el Gobierno cubano dirigió un Manifiesto al País en 22 de Enero de 1898, en el que hacía una apología de la autonomía. De acuerdo con ello, la nueva ordenación suponía el pleno reconocimiento de la personalidad política de las provincias de Ultramar, de tal forma que de ahora en adelante aquéllas serían dueñas de sus destinos y, por ende, responsables de sus actuaciones, pudiendo deliberar y resolver todos los asuntos propios de la vida local, mediante el Poder Legislativo, asiento de la voluntad popular. Por su parte, el Poder Ejecutivo, solícito guardián de los derechos y de las libertades de las provincias ultramarinas y genuíno representante de las tendencias y de las aspiraciones dominantes en el Parlamento insular, en su carácter de Gobierno responsable, cuidaría estrechamente de llevar a la práctica con entera fidelidad las determinaciones que adoptara el Legislativo, haciendo que la fuerza obligatoria que le correspondía, la conservara intacta en toda su eficacia. Así, pues, el nuevo régimen descansaba exclusivamente en la confianza que inspiraron a los ciudadanos los depositarios del poder público, mediante la emisión del voto. En este sentido, el establecimiento de la autonomía no era únicamente la victoria de un partido, sino el triunfo del buen sentido, de la experiencia y de la previsión, conducentes a poner término a los males públicos. Por eso, la autonomía no excluía a nadie; era un régimen abierto a todos y a todos ofrecía los medios de cooperar honradamente en la consecución del bienestar general, utilizando el pasado a modo de

provechosa enseñanza sin odios ni recriminaciones, como un elemento superador de suspicacias y de reticencias, en cuyo seno antillanos y peninsulares se dieran la mano para asegurar, así, los dos bienes por excelencia de toda sociedad culta: el orden y la libertad (16).

Promulgada por Blanco la Constitución, los insurrectos se negaron a tratar con las autoridades españolas, manteniendo la guerra y sosteniendo que ya era demasiado tarde para aceptar la autonomía, al tiempo que Estados Unidos dejó ver claramente (Mensaje de McKinley al Congreso del 6 de Diciembre de 1897) su hostilidad hacia las fórmulas intermedias: o inmediato término a la guerra o intervención norteamericana. Por otro lado, no toda la opinión pública española se mostró conforme con las nuevas directrices. Aparte de la Unión Constitucional con su asimilismo a ultranza, manifestaron su disconformidad los conservadores y las derechas, en general, así como las zonas económicamente interesadas en el comercio antillano (17).

Aunque el amplísimo régimen autonómico que se acababa de otorgar de hecho no llegó a tener, desgraciadamente, verdadera vigencia, se intentó su puesta en marcha, cosa evidenciada no sólo por la designación de personas de prestigio de los viejos Partidos Autonomista y Reformista para la formación de los Gobiernos insulares, sino por la adopción de toda una serie de medidas, que debían ser complemento de la autonomía. De esta forma, cesó la "reconcentración", por lo menos parcialmente; se concedieron indultos y se sobreseyeron los procesos por delitos políticos; se puso en libertad a los detenidos por estas causas; volvieron algunos emigrantes de México y de Norteamérica; la Banca europea ofreció un empréstito para financiar la reconstrucción, y se enviaron dos representantes a Washington para negociar un nuevo Tratado de Comercio.

En estas circunstancias, lo natural era esperar que la nueva política ultramarina produjera su efecto. Así lo reconocieron y proclamaron todos los periódicos europeos y una gran parte de los norteamericanos y en idéntico sentido se expresaron los representantes de los Gobiernos de Europa cerca del de Madrid. Buena prueba de la firmeza y del alcance de esta benévola disposición de todo el mundo contemporáneo fue, como se ha indicado, la resolución de los banqueros europeos de hacer al Gobierno español un considerable empréstito para la unificación y pago de la Deuda de Cuba. Para este empréstito se pensó en un capital de cien millones de libras esterlinas, de los cuales ochenta se emplearían en la compra de toda la Deuda cubana consolidada al tres por ciento y garantizada con las rentas de la Gran Antilla y con los beneficios de algunas concesiones mineras y de ferrocarriles y de varias explotaciones agrícolas. Los veinte millones restantes se dedicarían a la explotación de las riquezas naturales de Cuba por una empresa privada bajo la supervisión del Gobierno español. Todo esto estaría complementado por otros dos empréstitos más, de ocho millones de libras cada uno, sobre las minas de Almadén y sobre la garantía del impuesto de tráfico y navegación y por la creación en Madrid de un Banco hispanobritánico con un capital de cuatro millones de libras, cuyo objeto principal sería colocar en el mercado inglés los pagarés y la Deuda flotante del Gobierno español.

Por otra parte, ante este planteamiento, los sostenedores y simpatizantes de la insurrección hicieron todo lo posible por destruir las nacientes esperanzas del pueblo cubano y por hacer fracasar, tanto los Decretos Autonómicos de Noviembre de 1897 como los esfuerzos del Gobierno insular, para lo cual propiciaron toda una serie de acciones dirigidas a provocar perturbaciones del orden público en las principales ciudades de Cuba. Ciertamente, se produjeron alteraciones en La Habana, y

aunque rápidamente se restableció el orden, uno de sus efectos fue el fracaso de las gestiones que se hacían en Europa para sufragar económicamente la política emprendida, a lo que tampoco fue ajena la evidencia del apoyo que la insurrección separatista continuaba teniendo por parte de Estados Unidos. No obstante, a pesar de estos acontecimientos, el Gobierno insular funcionó regularmente, comenzando la transformación del régimen administrativo cubano, al tiempo que la insurrección no hizo el menor avance. De esta forma, todo se dispuso para la constitución de las Cámaras insulares y para la elección de los representantes que en las Cortes españolas debían discutir, ratificar y votar definitivamente los Decretos Autonómicos (18).

Era evidente, pues, que esta vez el Gobierno español no se quedaba en la pura teoría, de forma que junto a estas medidas se tomaron algunas otras disposiciones jurídicas que completaron las anteriores. Un R. D. de 3 de Marzo de 1898 aprobó el reglamento provisional para la adaptación de la Ley Electoral de 26 de Junio de 1890 a Cuba y Puerto Rico, a fin de facilitar la constitución de los nuevos organismos "hasta que los Parlamentos insulares aprueben el definitivo". La R. O. de 22 de Marzo dispuso la aplicación sin restricciones de la Ley de Imprenta peninsular, aboliendo expresamente las limitaciones que a alguna de sus partes había puesto el R. D. de 11 de Noviembre de 1886, y otra R. O. de la misma fecha ordenó la aplicación, también sin restricciones, de las Leyes de Reunión y de Asociación peninsulares, hechas extensivas, respectivamente, por los RR. DD. de 1 de Noviembre de 1881 y de 12 de Junio de 1888 (19). Y con referencia a la propia Constitución Autonómica de 1897, los artículos 6º y 7º, que determinaban las condiciones para el cargo de Consejero de Administración, fueron modificados por un R. D. de 8 de Marzo de 1898 (20), mientras que una Ley de 17 de Mayo de ese mismo año declaró exento al Gobierno de la responsabilidad

por haber otorgado sin previo acuerdo legislativo las trascendentales reformas, adoptadas en vista de las circunstancias. Así, pues, implantada la autonomía en momentos en que la guerra de independencia cubana estaba en todo su vigor, España realizó, aunque tarde e inútilmente, un serio y respetable intento por detener el destino y estar a la altura de la responsabilidad que le marcaban los tiempos.

En relación con estos acontecimientos, Rafael María de Labra expresó sus opiniones en el Congreso, indicando que los Decretos Autonómicos suponían la consagración de las libertades ultramarinas, mediante las cuales Cuba y Puerto Rico aparecían en condiciones de emitir su voto, de determinar su sentido y de afirmar sus deseos, en el momento en que Estados Unidos pretendía "negar la soberanía española sobre aquellas tierras, que por su historia, por sus intereses, por su posición geográfica y por sus compromisos internacionales sólo podían ser consideradas como parte esencialísima de la vieja y prestigiosa España". Realmente, esta situación permitiría a España asegurar la eficacia de las condiciones, gracias a las cuales las Antillas podrían manifestar claramente su voluntad, entroncando, de esta forma, con las modernas direcciones del Derecho Colonial (21). Precisamente, lo que afirmaba la autonomía era la gradación en el modo y en la manera de administrar a los pueblos que habían llegado a la plenitud de la riqueza, del esplendor y de la conciencia de sus propias fuerzas. A estos pueblos había que darles garantías de expansión, de la misma manera que los que estaban en una situación más atrasada debían recibir la libertad, de forma proporcionada hasta llegar a la plenitud de sus facultades (22).

N O T A S.

- (1) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madrura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 348; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, págs. 397 y 400-401 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 317.
- (2) FABIE, ANTONIO MARIA: Ibid., pág. 350.
- (3) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 20.
- (4) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 403 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, págs. 323-324.
- (5) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 256-259.
- (6) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 21.
- (7) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, págs. 404-405.
- (8) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 22.
- (9) SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional, "Cuadernos de Historia de España" (Buenos Aires), XLI-XLII (1965), págs. 308-309.
- (10) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 270-271.
- (11) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 31-32 y FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico (Madrid 1953), pág. 29 y en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. XXIV.
- (12) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 23.
- (13) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 567-570.
- (14) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 36 y 47, Nota núm. 1.

- (15) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 573 y 576-577.
- (16) Ibid., págs. 577-578.
- (17) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 36.
- (18) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 579-581.
- (19) FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Ob. cit., pág. 30.
- (20) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 24.
- (21) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 11 de Mayo de 1898.
- (22) Ibid., 3 de Junio de 1898.

2.3) LA CUESTION ESTRATEGICA: PRESENCIA DE ESTADOS UNIDOS.

Casi desde los primeros momentos de la formación de su personalidad nacional, Estados Unidos ambicionó la isla de Cuba y, en menor grado, aunque sin perderla de vista, la de Puerto Rico. Razones estratégicas y comerciales se conjugaron en este deseo, y unido todo ello a una voluntad política de expansión territorial, convirtió el propósito en una meta a conseguir a cualquier precio. Sin embargo, las circunstancias históricas prolongaron a lo largo de todo el siglo XIX la realización de esta ambición, y de esta forma Estados Unidos se vió obligado a poner en práctica, mediante la Doctrina Monroe, los principios jeffersonianos de la "espera paciente" y de la "retención de la prenda en manos del más débil". Convencido de la necesidad ineluctable de poseer la isla de Cuba, Estados Unidos tanteó la posibilidad de la anexión, ofreció repetidas veces a España la compra de la isla y, por último, tras alentar moral y materialmente las dos grandes insurrecciones isleñas, obstruyendo sistemáticamente las soluciones de concordia, decidió, que el tan esperado momento había llegado y se lanzó, pura y simplemente, a la intervención armada (1).

Las relaciones comerciales de los cubanos con Estados Unidos se iniciaron a fines del siglo XVIII y, aunque suprimidas poco después, tuvieron que reanudarse de nuevo ante las protestas de los naturales y ante la evidencia de que la prohibición era perjudicial para la isla, con lo cual Cuba entró para siempre dentro de la órbita de los intereses estadounidenses. Una serie de razones pronto hicieron de la isla un lugar condiciado por la naciente nación norteamericana, confluyendo en dicho proceso su situación geográfica, la riqueza y la feracidad extraordinarias de su suelo y un conjunto de circunstancias históricas, económicas y sociales (2).

Nada más empezar el siglo XIX, Estados Unidos inició sus tanteos sobre Cuba, pues no estaba lejos de su pensamiento la idea de apoderarse de ella. Así, en Octubre de 1805, el Presidente Thomas Jefferson notificó, al respecto, al Ministro inglés en Washington, que en caso de guerra con España por motivo de la pendiente cuestión de la Florida Occidental, los norteamericanos tomarían la isla. En el mismo sentido volvió a insistir sobre el particular en 1807 y 1808, indicando que Cuba debía permanecer en manos de España hasta que Estados Unidos pudiera tomarla. De esta forma y de acuerdo con estos supuestos, poco después, Jefferson mandó a La Habana al General Wilkinson, amigo y hombre de confianza suyo, a fin de que sondease la opinión cubana en relación con una incorporación a Estados Unidos (3).

Por su parte, Madison, sucesor de Jefferson, se mantuvo informado de la situación existente en la isla, prestando especial atención a los grupos anexionistas cubanos que por aquel entonces realizaban gestiones para incorporarse a la Unión. Evidentemente, estas aspiraciones tenían que ser miradas con simpatía por Estados Unidos, tanto por razones estratégicas ("función continental " de Cuba) como económicas (Cuba, mercado exportado de azúcar) y, así, se acogió favorablemente la propuesta cubana de anexión, efectuada por aquellas fechas (1822) por un tal Mr. Sánchez, que realizó un viaje a Washington con tal motivo. No obstante, la postura inglesa bajo la dirección de Canning fue contraria a que Estados Unidos adquiriese Cuba, y ante ello los norteamericanos se abstuvieron de seguir adelante (4). Así, pues, las circunstancias determinaron que de momento los designios anexionistas de Estados Unidos no pudieran cumplirse y ello por dos motivos fundamentales que actuaron en ese sentido: el peligro de un levantamiento negro, semejante al de Haití, y el equilibrio político internacional, ejercido por

Gran Bretaña y Francia en el Caribe, en relación con las apetencias norteamericanas sobre Cuba.

Ciertamente, la rivalidad con Inglaterra jugó un papel decisivo en el mantenimiento de Cuba bajo la soberanía española, ya que Estados Unidos temía seriamente que Gran Bretaña se apoderase de la isla por conquista o por cesión, y en estas circunstancias era preferible que continuase bajo el dominio de España hasta que pudiera apoderarse de ella; ya llegaría el momento, en que, por un medio u otro, Cuba ingresase en la Unión (5). Ello explica, de forma clara, la actitud, aparentemente paradójica, adoptada por Norteamérica. Así, mientras en el resto del continente la ayuda de los estadounidenses a los independentistas hispanoamericanos era evidente, en Cuba los norteamericanos apoyaron a España contra posibles sublevaciones, porque Estados Unidos no quería la independencia de Cuba, sino la isla para sí, y si se hacía independiente ahora, podía ser dominada por Inglaterra y el poderío inglés era temible, mientras que el español resultaba insignificante. Además, subsistía el posible peligro de una revuelta negra y no convenía mover las cosas ahora que estaba tan reciente la cuestión de Haití; tiempo habría para apoderarse de Cuba por la fuerza o mediante la compra al Gobierno español, cuando la situación general estuviese más sosegada.

Por otra parte, Inglaterra mantuvo una actitud similar a la de Estados Unidos, contribuyendo a ello a que la isla permaneciese en poder de España (antes de que Cuba fuese independiente y pasase a ser anexionada a la Unión americana, era mejor que permaneciese como colonia española) (6). Se trataba, pues, de aplicar la llamada "política de la fruta madura", tal como lo enunciara John Quincy Adams, Secretario de Estado del Presidente Monroe, en la famosa nota que le envió el 28 de Abril

de 1823 a Mr. Hugo Nelson, Ministro norteamericano en Madrid, y en la que se ratificaban y aclaraban los propósitos anexionistas de Jefferson. Por otro lado, las manifestaciones de Adams eran expresión oficial de la actitud y de las intenciones del Gobierno estadounidense ante los temores de la pérdida de Cuba y Puerto Rico, por parte de España (7).

Es estas circunstancias y dentro de la política internacional del momento, surgió la Doctrina Monroe intimamente relacionada con los sucesos de la Independencia hispanoamericana (8). Ciertamente, Fernando VII, imbuido de un concepto absolutista, a su llegada al poder, ante los movimientos independentistas hispanoamericanos, además de llevar a cabo un frente de acción en América inició una serie de negociaciones diplomáticas con las potencias de la Santa Alianza (Francia, Austria, Rusia y Prusia), vencedoras de Napoleón en Viena, para conseguir de éstas un apoyo moral y material, dado que dichas potencias se habían constituido en una liga o agrupación destinada a proteger a las dinastías legítimas de los peligros representados por los movimientos liberales.

No obstante, dichas negociaciones terminaron en un rotundo fracaso dada la ambivalencia de la postura británica, cuyo principal objetivo estribaba en conseguir a cualquier precio una posición económica ventajosa en América, lo cual determinó que las potencias europeas rehusaran intervenir en los asuntos de España con sus reinos americanos. Así, pues, ante la falta de ayuda efectiva por parte de las potencias de la Santa Alianza, la política española optó por confiar en sus propias fuerzas, si bien sin resultados prácticos de cara a una solución pacificadora en América, dado que los acontecimientos se encauzaron por otros derroteros como consecuencia del triunfo liberal de 1820. Restablecido el régimen absolutista en España, se reanudó, a su

vez, la política reconquistadora con respecto a América y se volvió a pensar en el auxilio de las potencias europeas, auxilio que por otra parte resultó totalmente infructuoso.

Dentro de este contexto, el Primer Ministro inglés Canning, deseoso de obtener para su país ventajas comerciales con las presumiblemente nuevas Repúblicas hispanoamericanas, incitó al Presidente estadounidense James Monroe, antiguo Embajador en Londres, a proclamar la doctrina que lleva su nombre, lo que supuso la neutralización de las potencias de la Santa Alianza que se vieron así en la imposibilidad de ayudar a España en su lucha contra sus revueltos reinos americanos. Consecuencia de esta actitud británica, fue pues la llamada Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el Presidente de Estados Unidos en el sentido de no consentir la ingerencia de potencias extranjeras (europeas) en América, so pena de considerar la intervención como "casus belli", lo que por otra parte supuso para España la conservación de Cuba. Aparte de esto, poco después, Gran Bretaña, tal como venía anunciando, reconoció la independencia de los Estados hispanoamericanos (9).

Ante los planes conspiratorios de México y Colombia (1825) para sacar a Cuba de la soberanía española no se hizo esperar la respuesta norteamericana y, así, el Secretario de Estado, Mr. Henry Clay, siendo ya Presidente Adams, dió seguridades a España (27 de Abril de 1825), indicando que "los Estados Unidos preferían que Cuba y Puerto Rico permaneciesen dependientes de España... y que estaban satisfechos con la condición actual de estas Islas como pertenecientes al poder español y con sus puertos abiertos a nuestro comercio, como lo estaban al presente. Este Gobierno no deseaba, pues, ningún cambio político en su sistema de administración" (10). Así, pues, era evidente que siempre que hubiera algún tipo de ingerencia en

los asuntos antillanos, Estados Unidos pondría el veto. Idéntica actitud se mantuvo al año siguiente, cuando Bolívar intentó liberar a Cuba y Puerto Rico y convocó el Congreso de Panamá (11). En el Senado norteamericano, John Holmes, Senador por Maine, expresó la oponión del Congreso y del Ejecutivo sobre el particular: "¿Podemos permitir que las Islas de Cuba y Puerto Rico pasen a manos de esos hombres embriagados con la libertad, que acaban de adquirir?. ¿Cuál tiene que ser nuestra política?. Cuba y Puerto Rico deben quedar como están" (12).

Por su parte, el Presidente Adams, en su Mensaje al Congreso de 15 de Marzo de 1826, indicó: "la totalidad de nuestros esfuerzos habrán de encaminarse en el sentido de conservar el estado actual de cosas, la tranquilidad de las dos Islas y la paz y la seguridad de sus habitantes" (13). A su vez, Clay, en 1827, volvió a ratificar estos puntos de vista no sólo con respecto a México y Colombia, sino en relación con los revolucionarios cubanos: "No entra en la política o en las miras del Gobierno de los Estados Unidos dar ningún estímulo o apoyo a los movimientos revolucionarios de Cuba, si tal cosa pretende alguna parte de sus habitantes" (14).

De esta forma, a pesar de los intentos independentistas hispanoamericanos e incluso en relación con posibles revueltas internas en la propia isla, "España podía tener un punto de tranquilidad, respecto de la posesión de Cuba, porque no convenía a los Estados Unidos una revolución en aquella isla, por temor a que cayera, como Santo Domingo, en poder de los negros. Este era, precisamente, uno de los argumentos que exhibían en el Congreso norteamericano los partidarios de enviar representantes al Congreso de Panamá para disuadir a los hispanoamericanos de enviar la expedición que proyectaban contra Cuba o dirigirla, al menos, de modo que los negros no adquiriesen gran potencia. Por

otra parte, a los mismos Estados Unidos convenía que Cuba continuase en manos de España, ya que, así, se evitaba su paso a dominio francés o británico y el consiguiente conflicto con estas potencias europeas" (15).

Descubierta una intriga inglesa para promover una revuelta en Canarias y en Cuba, el Secretario de Estado, Van Buren, se apresuró a comunicar (9 de Octubre de 1829) a Van Ness, su Ministro en Madrid, para que lo hiciese saber al Gobierno español, que así como "se había evitado antes, que cayese sobre las Islas el golpe, que estaba preparado, podía evitarse otra vez" (16). Y para más claridad, al año siguiente Estados Unidos comunicó por el mismo conducto al Gobierno español: "Nosotros estamos contentos, con que Cuba permanezca en la situación en que se encuentra y no consentiremos en que se la transfiera a ninguna potencia europea" (17). Dentro de este mismo contexto, diez años más tarde, Forsyth, Secretario de Estado del Presidente Van Buren, indicó a Aaron Vais, Encargado de Negocios en Madrid, lo siguiente: "Está usted autorizado a asegurar al Gobierno español que en caso de que se efectue cualquier iniciativa, de donde quiera que proceda, para arrancar a España esta posesión de su territorio, puede él contar con los recursos militares y navales de los Estados Unidos para ayudar a su Nación, tanto para recuperar la Isla como para mantenerla en su poder" (18). Por su parte, durante las presidencias de Andrew Jackson, Martin Van Buren, W.M. Henry Harrison, John Tyler y parte de la de James K. Polk continuaron los contactos entre los anexionistas de Cuba y los de Estados Unidos, de forma que la isla siguió siendo pieza importante en las relaciones internacionales y objeto de algún que otro manejo diplomáticos (19).

N O T A S.

- (1) Para un seguimiento general del proceso pueden verse RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Estudio Histórico sobre el Origen, Desenvolvimiento y Manifestaciones Prácticas de la Idea de la Anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de América (La Habana 1900) y CORTADA JAMES W.: Two Nations over Time. Spain and the United States, 1776-1977 (Westport 1978).
- (2) LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. 87.
- (3) ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), págs. 81-82 y GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), pág. 134.
- (4) LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Ob. cit., pág. 87; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 139-142; PABON, JESUS: El 98, Acontecimiento Internacional, en "Días de Ayer (Historias e Historiadores Contemporáneos)" (Barcelona 1963), pág. 160 y PORTELL VILA, HERMINIO: Historia de Cuba en sus Relaciones con los Estados Unidos y España (La Habana 1938), Vol. I, págs. 210; 215-216 y 223.
- (5) Sobre este y otros problemas derivados de las relaciones hispanoamericanas con respecto a Cuba pueden consultarse Cuba her Past, Present and Future in Connection with Spain and the United States (Washington 1897); Cuba and the United States (Atlanta 1897); FONER, PHILIP SHELDEN: Historia de Cuba y de sus Relaciones con Estados Unidos (La Habana 1973); ROIG LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba y los Estados Unidos, 1805-1898 (La Habana 1949) y FABELA ISIDRO: Los Estados Unidos contra la Libertad. (Estudio de Historia Diplomática Americana) (Barcelona 1923), pág. 24.
- (6) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 143 y HUBERMAN, LEO y SWEEZY, PAUL MARIA: Cuba. Anatomía de una Revolución (Buenos Aires- Montevideo 1961), pág. 320.
- (7) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 25.
- (8) Sobre la Doctrina Monroe véase, PERKINS, DEXTER: Historia de la Doctrina Monroe (Buenos Aires 1964) y MERK, FREDERICK: La Doctrina Monroe y el Expansionismo Norteamericano, 1843-1849 (Buenos Aires 1968).

- (9) Sobre el desarrollo de la política americanista en relación con la política internacional española durante el periodo 1812-1825 véase, DELGADO, JAIME: España y México en el Siglo XIX (Madrid 1950-1953), Vol. I, págs. 1-35; 91-142; 243-307 y 393-428.
- (10) Citado por CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol. I, pág. 273.
- (11) En relación con esto véase, SANTOVENIA Y ECHAIDE, EMETERIO S.: Bolívar y Las Antillas Hispanas (Madrid 1935).
- (12) RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Ob. cit., págs. 80-81.
- (13) ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), pág. 90.
- (14) Ibid., pág. 89. Para un seguimiento de los avatares políticos relativos a esta zona véanse, FRANCO, JOSE LUCIANO: La Batalla por el Dominio del Caribe y el Golfo de México (La Habana 1964) y también Política Continental Americana de España en Cuba: 1812-1830 (La Habana 1947).
- (15) DELGADO, JAIME: Ob. cit., Vol. I, págs. 268-269. Sobre esta cuestión véase también, LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 658.
- (16) RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Ob. cit., págs. 85-89.
- (17) Citado por RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Ob. cit., págs. 85-89.
- (18) ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), págs. 92-93.
- (19) Como ejemplo de un asunto diplomático acaecido en torno a Cuba en los años cuarenta del siglo XIX véase, SECO SERRANO, CARLOS: Espartero y Cuba: Entre Inglaterra y Norteamérica, "Revista de Indias" (Madrid), XX IX, núm. 115-118 (1969), págs. 581-605.

2.3.1.) ESTADOS UNIDOS Y EL PROBLEMA DE CUBA.

A mediados de siglo una nueva coyuntura histórica permitió presentar otra faceta de la siempre versátil Doctrina Monroe y, así, al tiempo que se realizaban las primera tentativas para la independencia de Cuba (expediciones de López), Estados Unidos decidió abandonar, por primera vez y momentáneamente, la política de la "fruta madura", respecto de Cuba (espera paciente de los acontecimientos, que pusieran en sus manos la isla) por la táctica de la adquisición mediante la compra. De esta forma y en relación con las nuevas perspectivas, el "Club" de La Habana, fundado en 1847, que tenía por objeto la anexión, realizó gestiones en ese sentido, poniendo a disposición del General William J. Worth tres millones de pesos para que invadiese Cuba con soldados recién licenciados de la guerra contra México, mientras que una comisión formada por Gaspar Betancourt Cisneros, José Aniceto Iznaga y Alonso Betancourt visitaba al Presidente Polk y le comunicaba que se proponían luchar contra España para obtener la anexión a Estados Unidos. Entonces, el Presidente James Knox Polk y su Secretario de Estado, James Buchanan, animados, además, por el éxito logrado en la realización de sus planes contra México, decidieron apoderarse de Cuba mediante la compra y plantearon la idea al Gobierno español por conducto diplomático, dando las oportunas instrucciones al Ministro norteamericano en Madrid, Sanders.

No obstante, la respuesta española fue totalmente negativa, como lo sería las sucesivas veces que Estados Unidos reiterase la oferta. La mayor parte de la opinión pública española fue contraria a la idea de la venta, porque Cuba era sentida como parte integrante del territorio nacional, como una provincia más, de la misma forma que pudiera serlo cualquier otra de la propia Península. Se trataba, en última instancia, del

mantenimiento de algo sentido como patrimonial. Así, pues, el Presidente del Consejo de Ministros, General Narváez, y el Ministro de Estado, Pedro J. Pidal, hicieron saber a Sanders que España no quería desprenderse de la isla y que no temía los peligros de futuras revoluciones, que, en todo caso, sofocaría. Ante esto, Estados Unidos no insistió, volviendo a su antigua línea de conducta (1).

En 1849, Narciso López realizó una expedición a Cuba, inaugurando de esta forma la serie de empresas filibusteras que a partir de entonces se organizaron contra la isla. Sin embargo, aunque hombres influyentes del Sur en conexión con anexionistas y separatistas de Cuba patrocinaron esta empresa, no obtuvieron del Presidente Zacarías Taylor, ni de su sucesor Millard Fillmore el respaldo oficial (la oposición de ambos Presidentes se debió al temor a provocar una crisis internacional con Gran Bretaña). En todo caso, se trataba, pues, de una oposición simplemente circunstancial, motivada por el desarrollo de los acontecimientos. De acuerdo con ello, el mismo año de 1849 Taylor desautorizó públicamente la expedición de López: "Una empresa que tiene por objeto invadir los territorios de una Nación amiga, iniciada y preparada dentro de los límites de los Estados Unidos, es una cosa en alto grado criminal, pues pone en peligro la paz del país y compromete el honor nacional" (2). En el mismo sentido se manifestó en 1851 Fillmore, cuando López llevó a cabo un nuevo intento contra Cuba, en una Proclama de 25 de Abril, en la que calificó las empresas del venezolano de "criminales y hostiles preparaciones contra una potencia amiga", que no merecían más que la "reprobación del mundo civilizado" (3).

Por su parte, a fin de evitar estos movimientos separatistas, iniciados entonces, el Gobierno español intentó, con la ayuda de Francia e Inglaterra, obtener de Estados Unidos,

en aquel momento y para el futuro, el reconocimiento de la soberanía española sobre la isla y el respeto a aquélla. Para ello los Ministros de Francia e Inglaterra presentaron, por separado, al Presidente Fillmore (23 de Abril de 1852) un proyecto de convención, mediante el cual las tres naciones (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) negaban abrigar cualquier intento de obtener la posesión de la isla de Cuba, comprometiéndose, al mismo tiempo, a reprimir toda tentativa libertadora. Como era lógico suponer, la respuesta del Secretario de Estado, Edward Everett, a la proposición del Tratado de Garantías fue negativa: Cuba era un enclave estratégico para la Unión y ninguna Administración podría resistir el odio que se crearía, si se estipulaba semejante acuerdo con las potencias europeas. Así, pues, el Presidente declinó, respetuosamente, la invitación de Francia e Inglaterra para suscribir el citado convenio. Estaba claro que no interesaba la concertación de ningún compromiso, al objeto de mantener las manos libres y poder actuar, según las conveniencias y necesidades (4).

En 1854 se llevó a cabo otro intento de compra de la isla de Cuba (5), para lo cual el nuevo Presidente, Franklin Pierce, envió a Madrid al Ex-Senador por Luisiana Pierre Soulé. No obstante, esta tentativa no tuvo mejor éxito que la anterior, realizada por Polk (6). Prosiguiendo con esta línea de actuación, el Secretario de Estado William R. Marcy hizo reunir a los Ministros norteamericanos en Inglaterra, Francia y España, en las llamadas Conferencias de Ostende (9, 10 y 11 de Octubre de 1854), celebradas en esta ciudad y continuadas los días 12 al 18 en Aix-La Chapelle. En el informe que emitieron el mismo día 18, los Ministros indicaron a Pierce: "Si después de haber ofrecido a España por la Isla un precio superior a lo que ella vale, resulta que nuestra oferta es rechazada, habrá llegado el momento de considerar si Cuba española expone o no nuestra paz interior y la

existencia de nuestra amada Unión. Si la respuesta es afirmativa, estaremos justificados, dentro de toda consideración de derecho divino y humano, en arrancarla del poder de España, si tenemos modo de hacerlo". Sin embargo, la gestión terminó con una nueva negativa española (7).

Pero Estados Unidos no se dió por vencido, y bajo la presidencia de James Buchanan se realizaron nuevos intentos de compra. De acuerdo con ello, el Presidente hizo una exposición oficial del asunto en sus Mensajes de 1857 y 1858 y presentó a la Cámara y al Senado sendos informes, recomendando la aprobación de una ley que sancionara el proyecto de compra y proporcionase al Ejecutivo los recursos necesarios para la realización de las negociaciones (8). La respuesta española fue la consabida, y tres años después la Guerra de Secesión dejó de lado el problema, al tiempo que su desenlace anulaba la posibilidad anexionista, que, con la abolición decretada por el Presidente Abraham Lincoln, perdió su razón de ser (9). Sin embargo, incluso dentro de la situación creada por la inmediata posguerra y por el obligado acceso a la Presidencia (asesinato de Lincoln) del hasta entonces Vicepresidente Andrew Johnson, Estados Unidos no dejó de tener presente la cuestión de Cuba. Así, en 1867 el Secretario de Estado, William H. Seward, dijo al respecto: "Estados Unidos ha alimentado, constantemente, la creencia de que algún día pueda adquirir estas Islas por medios justos y legales y mediante el consentimiento de España" (10).

Iniciada el 10 de Octubre de 1868 la primera guerra de la independencia cubana, Céspedes se apresuró a solicitar de Johnson el apoyo oficial norteamericano, pero el asunto pasó ya a la Administración inaugurada por Ulises S. Grant. De esta forma, la cuestión de Cuba volvió a plantearse otra vez con esta sublevación en gran escala, y Céspedes y los jefes

revolucionarios se decidieron a solicitar de Grant ayuda para luchar contra España y ofrecerle la anexión. No obstante, las promesas del Presidente al enviado especial revolucionario José Morales Lemus no fueron todo lo firmes que los cubanos hubieran deseado y, aunque el Secretario de la Guerra, John A. Rawlins, era favorable a los independentistas, el reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos quedó aplazado por motivos internacionales.

En estas circunstancias, el Presidente Grant aceptó el plan que le presentó Paul S. Forbes, ciudadano norteamericano amigo de Prim, a la sazón Regente de España, para llegar a un acuerdo sobre la isla. En Junio de 1869, el plan se convirtió en un proyecto oficial de mediación estadounidense, que debía llevar a cabo el General Daniel E. Sickles, nombrado a este efecto Ministro en Madrid, ayudado, de forma oficiosa, por el agente privado Forbes. Al poco tiempo, la mediación pasó a ser un proyecto formal de compra: España reconocería la independencia de Cuba, mediante el pago de una cantidad, la esclavitud sería abolida y durante las negociaciones un armisticio suspendería la lucha. Como medio de presión se advirtió que la negativa española supondría el reconocimiento de la beligerancia de los revolucionarios y, por último, se indicó que España podía expresar su deseo de desprenderse de Puerto Rico que Estados Unidos estaría dispuesto a tomar.

Prim, dándose cuenta de la necesidad que tenía el Gobierno de terminar la guerra, consideró la cuestión y presentó, a su vez, al Ministro norteamericano una serie de puntos. Sin embargo, en parte por la calidad de éstos (alguno de ellos inaceptable para Estados Unidos) y, en parte también y de forma muy particular por el temor a lo que diría la opinión pública española, las negociaciones con Sickles terminaron en un fracaso.

Puestas así las cosas, el Secretario de Estado Hamilton Fish, que entendía, que la guerra con España no era conveniente, comunicó a Sickles (23 de Septiembre de 1869) que retirase su oferta de mediación (11). A pesar de todo, Prim, deseoso de llegar de una forma u otra a una solución, se puso en contacto con dos personajes de gran influencia en Cuba, Nicolás Azcárate y Miguel Jorro, y autorizó (1870) a este último a trasladarse a Estados Unidos, para que tratase con los representantes de la República cubana de las condiciones en que podía establecerse la emancipación de la isla. Sin embargo, en este caso el asesinato del estadista español se encargó de frustrar estos intentos (12).

Posteriormente, Fish, ante la insistencia de personas que abogaban por el reconocimiento de la beligerancia y considerando que no había llegado el momento adecuado, indujo al Presidente a que lanzase una Proclama, cosa que hizo el 12 de Octubre de 1871. En esta proclama, Grant se mostró mucho más duro en sus ataques contra los revolucionarios, de lo que lo habían sido Taylor y Fillmore años atrás, calificando a los insurrectos cubanos de "personas inclinadas al mal" y de "delincuentes infractores de la leyes", e indicó que el Ejecutivo perseguiría con todo rigor a toda persona que se viera implicada en este tipo de actividades (13). En esas circunstancias, Washington volvió a la práctica de la política de "la fruta madura", en espera de que el desarrollo de los acontecimientos precipitase la isla en sus manos. Mientras tanto, se fue cerrando el cerco, mediante el apoyo oficial a un proyecto de empréstito ofrecido por un sindicato estadounidense a España, tendente a acrecentar el poder y la influencia yanquis en Cuba por medio de la penetración oficial del capital norteamericano, con lo que el Gobierno español se vió cada vez más atado por los empréstitos extranjeros y por la subsiguiente dependencia económica.

Poco más tarde, con el Zanjón llegó la paz y se reanudaron normalmente las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, sin que faltasen por ello en la prensa norteamericana rumores relativos a la anexión. De esta forma, España logró mantenerse en las Antillas "más que por su propia fuerza, en virtud de que las ambiciones de norteamericanos y británicos se habían neutralizado en el Caribe y en la América Central, durante tres cuartos de siglo y de que la guerra civil entre el Norte y el Sur detuvo durante algunos años la expansión de los Estados Unidos en las Indias Occidentales" (14).

Precisamente, en relación con los problemas derivados del progresivo influjo económico ejercido sobre las Antillas por parte de Estados Unidos, Labra, en intervención parlamentaria relativa a la discusión sobre los presupuestos generales de Cuba, indicó la necesidad de abolir el régimen aduanero entonces imperante: "Porque no habreis de prescindir, que el peligro real y efectivo de Cuba está en la atracción norteamericana, y harto sabeis que la base del régimen financiero de la Gran República es la aduana, que allí habrá de subsistir, mientras no varien, fundamentalmente, las condiciones de su existencia política y social" (15). En realidad, el mencionado influjo económico se dejó sentir en cualquier aspecto, como, por ejemplo, en el relativo a la proporción existente entre los derechos que pagaban los azúcares fino y medio en Norteamérica, proporción que quedó rota tiempo después, lo que produjo una completa perturbación en la producción del azúcar cubano, pues "sabido era que el mercado de los Estados Unidos era el mercado de Cuba" (16).

De esta forma, se fue perfilando cada vez más y con mayor nitidez la importancia que Estados Unidos tenía para las Antillas en el ámbito económico y, por su conducto, en el político. En este sentido, la nación norteamericana se convirtió,

pues, desde el punto de vista del mercado antillano, no sólo en el medio de colocar sus azúcares y una buena parte de su café y su tabaco, sino en el catalizador de cualquier cambio de carácter económico, relacionado con aquellas tierras (17). Fruto de la preocupación por estos temas, fue la proposición del propio Labra, solicitando del Ministro de Estado, Marqués del Pazo de la Merced, la remisión al Congreso de todo tipo de información sobre las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos (18).

N O T A S.

- (1) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 226-228 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 659.
- (2) ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), pág. 96.
- (3) Ibid., pág. 97 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 659-661.
- (4) RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Estudio Histórico sobre el Origen, Desenvolvimiento y Manifestaciones Prácticas de la Idea de la Anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de América (La Habana 1900), pág. 171; LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 661-663 y RODRIGUEZ SAMPEDRO, CARLOS: Reflexiones sobre Varios Episodios Históricos Españoles ante el Actual Conflicto (Madrid 1915), págs. 63-65.
- (5) Para un seguimiento de la política estadounidense durante esta época puede consultarse RAUCH, BASIL: American Interest in Cuba, 1848-1855 (New York 1948). Desde el punto de vista español véase, TORRENTE, MARIANO: Política Ultramarina que Abraza todos los Puntos Referentes a las Relaciones de España con los Estados Unidos, con la Inglaterra y las Antillas y señaladamente la Isla de Santo Domingo (Madrid 1854).
- (6) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 264-272. Para conocer con más detalle la gestión realizada por Soulé véase, ETTINGER, AMOS ASCHBACH: The Mission to Spain of Pierre Soulé, 1853-1855. (A Study in the Cuban Diplomacy of the United States) (New Haven 1932).
- (7) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 272-275; ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Ob. cit., pág. 99 y Apéndice Documental II. Apéndice núm. 26.
- (8) Una recopilación de los Mensajes presidenciales puede seguirse en RICHARDSON, JAMES D.: A Compilation of the Messages and Papers of Presidents, 1789-1897 (Washington 1898).
- (9) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 275-280; y ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Ob. cit., pág. 101.

- (10) MALDONADO DENIS, MANUEL: Puerto Rico: Una Interpretación Historico-Social (México 1971), pág. 53.
- (11) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 298 y 300-302.
- (12) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. I. págs. 96-98.
- (13) RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Ob. cit., pág. 239 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 663-665.
- (14) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 360 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 665-668.
- (15) ~~Diario de Sesiones del Congreso de Diputados~~, 15 de Abril de 1880.
- (16) Ibid., 16 de Julio de 1883.
- (17) Ibid., 17 de Julio de 1883.
- (18) Ibid., 2 de Enero de 1885.

2.3.2) LA ACTITUD ESTADOUNIDENSE A FINES DE SIGLO.

Como es sabido, desde siempre Estados Unidos se había interesado por Cuba, pero a partir de los años 90 este interés se fue acrecentando de forma constante, para terminar en una acción militar directa. En este sentido, el propio Labra denunció el peligro que suponía el mantenimiento de una administración inadecuada en las islas de Cuba y Puerto Rico, dado que dicha situación favorecía sobre manera la permanencia de una idea siempre presente en el ámbito antillano: el anexionismo. Por todo ello, se precisaba una política enérgica y una administración regular y honrada, a fin de que las grandes reformas interesasen al mayor número de gentes, despertasen las máximas simpatías posibles e hiciesen contraer responsabilidades a todos los ciudadanos, cualquiera que fuera su situación (1).

De acuerdo, pues, con este planteamiento y respetando las tendencias características de la colonización moderna, se hacía necesario combatir el anexionismo, que perduraba y se desarrollaba como consecuencia de dos factores interconexionados: la situación interna de Cuba y la presencia, siempre vigilante, de Estados Unidos. Precisamente, frente a esta problemática se debía afirmar una política ultramarina seria, basada en una organización firme y sólida, en un gran caudal de libertades y en el propósito, tanto de los Gobiernos como de los políticos españoles, de no aceptar como propias más que las responsabilidades que les correspondiesen (2). En realidad, el verdadero peligro no residía para Labra, con ser mucho, en las expediciones organizadas en Estados Unidos contra Cuba y Puerto Rico, sino en que se produjese un desaliento en el espíritu de las gentes que vivían en las Antillas, alentado y promovido por la realización de una política conscientemente dirigida a tal fin desde Norteamérica (3).

Dentro de este marco, la iniciación de la segunda guerra de la independencia cubana constituyó de nuevo un pretexto fundamental para azuzar a los revolucionarios, crear un estado de inseguridad e ir estrechando el cerco, de acuerdo con una política tradicional, que había encontrado su estructuración y encauzamiento en la Doctrina Monroe. Siempre se habían mirado con simpatía, aunque oficialmente se declarase lo contrario, las actividades de los separatistas, que tenían en Nueva York su centro de acción. Muchas veces el Gobierno norteamericano había censurado estas maniobras, pero, al margen de su actitud oficial, no hizo nada por impedir las múltiples ayudas que los cubanos emigrados recibieron de los ciudadanos estadounidenses. En Estados Unidos se prepararon y de allí salieron muchas expediciones con destino a Cuba; en aquella nación desarrolló gran parte de su labor y de su propaganda José Martí (4), y allí también funcionaron los "clubs", que tanto ayudaron con sus aportaciones de todo tipo a la insurrección. Por su parte, la opinión pública y la prensa norteamericanas se vieron alentadas o, por lo menos, no frenadas en sus alardes y manifestaciones en contra de España, de la guerra y de los métodos empleados por Weyler. Por ello, la nota redactada por el Secretario de Estado, Richard Olney, que pudo haber sido sincera, no se lo pareció a Cánovas, que tenía motivos suficientes para pensar lo contrario.

Ciertamente, todos los movimientos revolucionarios cubanos lograron siempre un sinfín de simpatías en Norteamérica, y ello se debió a una serie de causas, entre las que se encontraban la vecindad de los propios Estados Unidos y de Cuba; la circunstancia de pertenecer ambos al continente americano; el hecho ejemplarizante de que la personalidad e independencia de la República norteamericana arrancasen de una revolución contra una metrópoli europea, y todo un conjunto de motivos de carácter eminentemente político, que llegaron al subconsciente del pueblo

estadounidense y le predispusieron en una determinada dirección. En todo caso, parecía evidente que para contrarrestar esta situación España tenía que conceder un amplio régimen liberal y autonómico, que neutralizase la agitación de los simpatizantes del separatismo y una extensa y radical reforma arancelaria, que permitiera, tanto la explotación del mercado antillano por el comercio de Estados Unidos como la fortificación del Tesoro americano con los ingresos provenientes de la entrada de los productos ultramarinos españoles en las aduanas de Norteamérica (5). De esta forma, cuando España, por fin, concedió la autonomía a las Antillas, Estados Unidos mantuvo su actitud intransigente, y jalonando con sucesivas exigencias las concesiones españolas, se lanzó a la lucha armada, invocando injustificables motivos. Todo ello estuvo dirigido, desde los inicios, a la consecución de un fin largamente meditado: la obtención de la isla, para lo cual continuó utilizando otro de los caminos seguidos también desde el primer momento: las proposiciones de compra (6).

El desarrollo industrial, agrícola, financiero y mercantil acaecido en Norteamérica desde la terminación de la Guerra Civil había sido enorme. Estados Unidos experimentó entonces un periodo de consolidación, tanto en el orden económico como en el demográfico y, en general, en todos los aspectos de la vida nacional. Aunque el consumo del país se había visto incrementado, fue insuficiente para absorber toda la producción industrial y agrícola, lo que acrecentó la necesidad de nuevos mercados extranjeros. Así, pues, agotados los márgenes gananciales amplios dentro del marco nacional, el capital y los hombres más emprendedores empezaron a buscar nuevos campos para sus actividades. Al conjuro de esta dinamización, revivieron los proyectos de compra y los planes de anexión, y al servicio de ésta surgió una constelación de políticos dispuestos a alentarla y a darle "sus mejores días de gloria". Fue el momento de Marcus

Hanna, de McKinley, de Root, de Hay, de Alger, de Whitelaw Reid, de Cabot Lodge, de Wood y, poco después, de Roosevelt. Una poderosa maquinaria hizo también, por aquel entonces, sus primeras armas: la "yellow press" (7).

Por otro lado, por aquellos años Cuba entró definitivamente dentro de una situación que podía calificarse de semicolonial, debido al encauzamiento del comercio del azúcar cubano hacia el mercado estadounidense y al control de la industria azucarera de la isla por parte de la Unión, lo que determinó que España quedase desplazada por Estados Unidos como metrópoli económica de Cuba. En relación con esta cuestión, Labra opinaba que para paliar la creciente influencia estadounidense en los asuntos ultramarinos, se necesitaba la adopción de reformas, ya que si no quedarían comprometidos los intereses políticos de España, puesto que no bastaba con un simple acuerdo económico, tendente a presentar en libre concurrencia en el mercado norteamericano los azúcares y los tabacos cubanos. Así, pues, si se reducía el tema a una cuestión puramente comercial difícilmente se tendrían la energía y los medios necesarios para reclamar de los productores y comerciantes de la Península los sacrificios que se precisaban, motivo por el cual las relaciones de carácter mercantil tenían que ser compensadas con una actitud moral y con un trato profundo, que evitasen la ruptura de los vínculos que ligaban a España con las Antillas (8). Por todo ello, parecía conveniente, tanto desde el punto de vista económico como del político, "no presentar como única solución para el progreso y para el desarrollo económico de las Antillas el mercado de los Estados Unidos" (9).

Toda una serie de hechos se coaligó para determinar tal situación de dependencia, y de esta forma la Gran Antilla quedó fatalmente colocada dentro de la órbita de Washington por su

situación geográfica (vecindad con los territorios de la Unión); por la riqueza de su suelo (invasión de capitales, dominio de la tierra, de las centrales azucareras y de la banca); por el expansionismo imperialista yanqui, en franca aceleración por aquella época; por los propósitos de Estados Unidos de poseer Cuba, ya manifiestados desde 1805; por azares de la política mundial, y por errores y torpezas de los Gobiernos españoles. En cualquier caso, tal como señaló Labra refiriéndose a Estados Unidos, "la idea de la anexión y de la aproximación de Cuba corría, siempre, por aquella prensa" (10). Dentro de este orden de cosas, ya en 1891 Blaine había anunciado que "los Estados Unidos debían anexionarse las Islas de Cuba y Puerto Rico" (11), y era evidente que habían trabajado con rapidez en ese sentido, porque en 1895, con Cuba convertida en una colonia económica yanqui, únicamente les restaba adueñarse del poder político (12).

Como es sabido, el 24 de Febrero de 1895 había estallado en Cuba la insurrección con que se abrió la segunda guerra de la independencia cubana, que se convirtió en un motivo ideal para presionar sobre España en la cuestión de Cuba. Los separatistas encontraron rápidamente simpatías en gran parte de la opinión estadounidense, en el fondo de la cual palpitaba un sentimiento de afirmación norteamericano. La prensa y los emigrados cubanos realizaron, por su parte, una extensa propaganda, que acentuó la decidida inclinación de las masas estadounidense hacia los revolucionarios, inclinación que venía a corroborar sus deseos de anexarse Cuba y de colocarse enfrente de España. Por otro lado, el Congreso comenzó a reflejar el espíritu popular y a hacerse eco de las campañas de prensa. Senadores y Representantes pronunciaron discursos a favor de Cuba, y muchos presentaron propuestas encaminadas al reconocimiento de la beligerancia y de la independencia de la isla, al tiempo que la Administración procedía con más comedimiento en pos del interés

norteamericano y de acuerdo con los precedentes y los principios tradicionales de Estados Unidos con respecto a Cuba (13).

En relación con ello, en su primer "memorándum" a Cleveland (Septiembre de 1895), su Secretario de Estado, Richard Olney, apuntaba la idea de que la rebeldía de Cuba podía brindar una oportunidad para la compra de la isla. Olney llegó a la conclusión de que España no podría dominar a los rebeldes y de que éstos no estaban capacitados para constituir un Gobierno capaz de mantener la paz y el orden y de cumplir con sus deberes internacionales. De acuerdo con este criterio, Estados Unidos debía resolver el problema con arreglo a sus necesidades y conveniencias (14). Por su parte, el Presidente Cleveland, en su Mensaje al Congreso de 2 de Diciembre de 1895, dijo que la actual revolución tenía una mayor pujanza, que era "más activa que la que le había precedido de 1868 a 1878", que el pueblo cubano luchaba por su libertad y que la guerra causaba horror por sus crueldades. A pesar de ello, era firme "la determinación del Gobierno de cumplir honradamente con todas sus obligaciones internacionales" (15), lo que no era óbice para que con el beneplácito oficial funcionase en Nueva York una Junta Cubana, célula vital en la organización del movimiento separatista, y para que numerosos y poderosos elementos estadounidenses organizaran, apoyasen y abasteciesen con dinero, material de guerra y hombres a los insurrectos (16).

Así, pues, el 10 de Febrero de 1896 empezó a funcionar el Departamento de Expediciones, fundado por la Delegación de Cuba en Nueva York, que de ahora en adelante tuvo a su cargo la preparación y la coordinación de cuantas operaciones se efectuaron relacionadas con estos temas. También por aquellos días (25 de Febrero de 1896) fue presentada en el Senado norteamericano una importante propuesta dirigida a reconocer la

beligereancia de los insurrectos cubanos, que, aunque no fue atendida por Cleveland, provocó violentos discursos, como el de Sherman, atacando los métodos de Weyler, y que era altamente significativa del caríz que iba tomando el interés de Estados Unidos por Cuba. La propuesta, aprobada con muy pocos votos en contra el 28 de Febrero, decía, entre otras cosas: "El Senado contempla con solicitud y con profunda pena los estragos y los sufrimientos causados por la guerra civil en Cuba y espera con confianza que el Poder Ejecutivo reconozca la beligerancia de los que están en armas contra España, tan luego como los hechos le den fundamento para ello, y ejercite los buenos oficios de los Estados Unidos prudentes y pacíficos, con el fin de que la Isla de Cuba pueda establecer permanentemente el gobierno que ella misma elija" (17). En realidad, Cleveland consideraba que era una inconveniencia el reconocimiento de la beligerancia de los cubanos, entre otras cosas, porque confería a España el derecho de visita en alta mar, introduciendo, así, el concepto de contrabando de guerra, con lo cual los Tribunales norteamericanos no podrían seguir absolviendo, como hasta entonces, a los organizadores de expediciones filibusteras, alegando que los envíos se hacían en virtud de contratos comerciales privados. Por eso, el Presidente, de acuerdo con los banqueros, industriales e inversionistas, desestimó la propuesta (18).

Cuando se hizo evidente que la guerra se prolongaría por tiempo indefinido, a menos que Estados Unidos le pusiese término, se le planteó al Gobierno estadounidense la disyuntiva de abstenerse (cosa imposible por múltiples razones) o intervenir para imponer la paz. Muchas de las quejas de los cubanos eran justas, de forma que, si se satisfacían, no habría motivo para seguir la lucha. Así, pues, estaba claro que la paz podría obtenerse con amplias reformas en el régimen administrativo y político de Cuba. De acuerdo con este propósito, el Secretario de

Estado norteamericano, Richard Olney, se decidió a proponer la intervención de su país, estableciendo ciertas compensaciones por ello, consistentes en concesiones comerciales y en la extensión de un mayor campo de negocios en la isla, para lo cual el 4 de Abril de 1896 puso su plan en conocimiento del Ministro español en Washington, Enrique Dupuy de Lome, a través de una extensa nota. En dicho escrito, Olney indicaba que faltaría a sus deberes "si difiriera por más tiempo el manifestar la ansiedad con que el presidente contemplaba la situación de Cuba y su vehemente deseo de que se llegase a una pronta y permanente pacificación de la Isla" (19).

Ciertamente, se había fracasado en el esfuerzo por dominar la insurrección, y el panorama no era nada satisfactorio, ya que, fuera de las ciudades adictas a España, imperaba el terrorismo; se habían destruido las cosechas, las fábricas y la maquinaria, y ello hacía disminuir los recursos españoles y empujaba a los trabajadores, que quedaban sin empleo, a las filas de los rebeldes. Al paso que iba, la lucha se prolongaría como en la revolución de 1868 y Estados Unidos no podía contemplar "con complacencia la posibilidad de otros diez años de insurrección". La marcha de la guerra y el éxito final no podían ser indiferentes a Estados Unidos, interesado en todas las luchas por la libertad, pero mucho más por aquélla, que se debatía en sus costas, dada, además, la dureza de la lucha, la interrupción de las relaciones comerciales y la destrucción de la propiedad privada, que estaban arruinando a capitales e individuos de Estados Unidos. España tenía la palabra, pero cuánto más se prolongase la lucha, más difícil sería después llegar a un arreglo, pareciendo éste, en todo caso, más una debilidad, que un acto de justicia (20).

En conversaciones posteriores a la entrega de la nota, Olney explicó a Dupuy de Lome la forma en que Estados Unidos

garantizaría las reformas cubanas. Ambos países concertarían un Tratado Comercial sobre Cuba, en cuyo preámbulo se haría mención de las reformas, para dejar bien sentado que la aprobación de éstas era el motivo primario de tal convenio. De esta forma, la autonomía de Cuba quedaría garantizada por el prestigio norteamericano. Ante esta nota, el Gobierno y, más aun, el pueblo español vieron, sobre todo, una ingerencia en algo que era, según su criterio, estrictamente interno. En este sentido, poco antes de la recepción de la nota, los republicanos, en un Manifiesto de 27 de Marzo, firmado por hombres como Salmerón, Azcárate, Labra, Vallés, Ribot, Pedregal, Esquerdo, Menéndez Pallarés, etc., hicieron pública su protesta contra la más leve intromisión extranjera, afirmando, una vez más, la integridad de la patria (21).

Posiblemente, se dejó escapar una buena posibilidad de llegar a una solución del conflicto al no otorgar unas concesiones generosas y justas, menos amplias y completas que las tardías y, por lo mismo, inútiles que, sucesivamente, concedieron conservadores y liberales, facilitando ahora a la Cancillería de Washington la interposición de sus buenos oficios. Estados Unidos deseaba concesiones económicas, compatibles con la soberanía española, y, en todo caso, era un medio de apaciguar Cuba, ya que, tal como iban las cosas, no parecía que esto pudiera lograrse por la guerra; y era, además, posible, que se rompiese el diálogo con Norteamérica, con el consiguiente abocamiento a una situación más conflictiva.

No obstante, aunque la nota podía parecer sincera, había motivos (anterior actitud estadounidense) para creer que era sospechosa y, además, ¿por qué no iba a terminar con la guerra el recién enviado Weyler? España pudo haber otorgado las prometidas (desde el Zanjón) y nunca realizadas reformas, pero en

las circunstancias existentes corría el riesgo de dar la sensación de relajamiento (22). Así, pues, fiel a este pensamiento, influido por la desconfianza hacia la actitud oficial yanqui y por la opinión pública española, y entendiendo que el problema estaba entre España y los insurrectos cubanos, Cánovas rechazó la mediación de Estados Unidos, dando una respuesta negativa a la nota de Olney, mediante las instrucciones comunicadas el 22 de Mayo de 1896 al Ministro de España en Washington. De esta forma, Estados Unidos esperó, a que llegase el momento adecuado para una intervención de otro tipo, mientras los cubanos y los españoles se enzarzaban todavía más en la lucha (23). Según la idea española, cuando terminase la insurrección, el Gobierno ya aplicaría las reformas que estimase pertinentes, y muestra de este propósito suyo fue la declaración al respecto, efectuada en el Mensaje de la Corona, redactado los mismos días de la respuesta a la nota norteamericana. Mientras tanto, no se aceptarían presiones de ningún tipo, por parte de nadie.

De acuerdo con esta determinación, el Ministro de Estado español, Duque de Tetuán, respondió a la nota de Olney, poniendo de manifiesto la inoperancia de la mediación estadounidense, rechazada por los propios insurrectos (24). Al mismo tiempo, acusaba al Gobierno norteamericano, puesto que parecía claro que la mejor manera de contribuir a la pacificación de la isla era perseguir con más rigor que el usado hasta entonces las expediciones organizadas en Estados Unidos contra Cuba. Por otro lado, el Gobierno español no dudaba de que el alto sentido moral del Gobierno de Washington le sugeriría a éste otros medios más efectivos para terminar una lucha "que se prolongaba, exclusivamente, por la poderosa ayuda que la rebelión encontraba en el territorio de la gran República, en contra de los deseos de todos los amantes del orden y de la ley" (25).

Por estas mismas fechas, el Duque de Tetuán realizó gestiones cerca de las potencias europeas, para que éstas hiciesen cesar el apoyo yanqui a la insurrección cubana, a cuyo fin redactó un "memorándum" con la intención de enviarlo a dichos Gobiernos. Enterado el Ministro norteamericano en Madrid, Mr. Taylor, Estados Unidos expresó su alarma, apresurándose a indicar que si España provocaba la cooperación de Europa en favor de la cuestión cubana, la actitud estadounidense cambiaría por completo. Se hacía constar también que la suspicacia de España era injustificada y que toda intervención europea en las asuntos americanos ofendía a Estados Unidos. Tal actitud, vivo reflejo de la Doctrina Monroe, supuso el fracaso del proyecto, puesto que, planteadas así las cosas, la ayuda europea en vez de evitar el conflicto podía precipitarlo. Además, ante la reacción norteamericana, Europa rehusó inmediatamente atender toda cuestión que le llevase a comprometerse con Estados Unidos (26).

Sin embargo, Estados Unidos no había agotado todas las posibilidades existentes; quedaba todavía un camino ya utilizado otras veces: la compra de Cuba. En relación con estos propósitos, Cleveland y Olney quisieron explorar la opinión del Gobierno inglés y encomendaron a Henry White, de la Embajada norteamericana en Londres, que sondeara (mediados de Junio de 1896) la opinión de lord Salisbury. En realidad, dicho tanteo fue satisfactorio, ya que quedó muy claro que Gran Bretaña se desentendía por completo de la cuestión cubana, dejando con ello las manos libres a Estados Unidos (27).

Mientras tanto, en España Labra, elegido Senador por la Universidad de La Habana, en intervención del 30 de Junio contestando al Discurso de la Corona, puso sobre el tapete el problema de las implicaciones internacionales en la cuestión antillana. En este sentido, opinaba que constituían una

importante dificultad para abordar el tema los aspectos relacionados con el aislamiento español en el mundo, es decir, con respecto a los Gobiernos extranjeros y a la opinión internacional. Por ello, se hacía necesario romper con la política de circunspección exagerada que caracterizaba a España en el orden internacional, sobre todo, si se hacía referencia a Cuba, en donde no era posible sustraerse a la relación e influencia que tenía no sólo la política de Estados Unidos, sino la actitud y disposición de su propia opinión pública.

Estos hechos pesaban en el Derecho Internacional y se relacionaban con el nuevo sentido y con la nueva interpretación que se daba entonces, por parte de la opinión pública y de cierto grupo de políticos norteamericanos, a la Doctrina Monroe. Ciertamente, no todos los tratadistas en Estados Unidos interpretaban la Doctrina Monroe en un sentido agresivo, pero la tendencia absorbente, la tendencia dominante, la que constituía el sentimiento general del país era la del imperialismo. Así, pues, la opinión general estadounidense había dado un mayor alcance a este último planteamiento en un intento de sustraer América de la relación política y económica con Europa, sometiéndola a una especie de protectorado, ante lo cual se imponía la más viva protesta de la comunidad internacional, lo que, a su vez, exigía la cooperación en esta materia de la opinión pública y de los Gabinetes extranjeros. En este orden de cosas, la propia comunidad internacional censuraba los procedimientos norteamericanos y sus exageraciones, pero, por contraposición, no apoyaba a España en el mantenimiento del régimen imperante en las Antillas, sino que pedía la adopción de la autonomía colonial, aunque convenía en la necesidad de terminar la lucha en Cuba e imponer la paz en la isla (28).

Con respecto a las relaciones concretas de España con

Estados Unidos, se daban ciertas ingerencias en la administración de las Antillas por parte del Gobierno norteamericano, que podían llegar a extremos peligrosos. En este sentido, toda una serie de causas contribuía a provocar estas fricciones, entre las cuales se encontraban los atropellos propios de los periodos de guerra; las indemnizaciones derivadas de las multas, impuestas por las aduanas españolas a barcos y comerciantes estadounidenses; la intervención de norteamericanos de origen y de adopción en los asuntos de Cuba; la naturalización estadounidense de muchos cubanos; la cuestión del reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos; las implicaciones internacionales del proceso mismo; la protección y ayuda a los rebeldes, etc. Sin embargo, todas estas cuestiones no podían resolverse satisfactoriamente por la sola relación bilateral de España con Estados Unidos, pues precisaban de la colaboración de los Gabinetes de otras naciones y de la opinión pública del mundo civilizado, que debía y podía considerar estos problemas como algo más que un interés particular y exclusivo de España (29).

Por otro lado, en un Manifiesto de 27 de Julio, el Presidente Cleveland reiteró su posición neutralista y condenó a los que ayudasen a hacer la guerra a España, país con el que Norteamérica estaba en paz. Asimismo, indicó que siempre que fuese sometido a conocimiento de los Tribunales de Justicia, serían castigadas las contravenciones de las leyes, pidiendo para ello la cooperación de las personas honradas, a fin de que denunciasen cuánto supieran en relación con la organización de empresas militares y de conspiraciones políticas (30). No obstante y a pesar de estas declaraciones, a primeros del mes anterior, el Cónsul General en La Habana, Williams, considerado transigente, había sido relevado de su cargo y fue nombrado en su lugar el General Lee, conocido por sus simpatías hacia los insurrectos, que iba a desempeñar un importante papel con su

actitud de protección a los rebeldes y de hostilidad hacia España, mediante constantes reclamaciones diplomáticas ante las autoridades españolas.

En estas circunstancias, el 4 de Noviembre de 1896 fue elegido Presidente de Estados Unidos el republicano William McKinley, que debía hacerse cargo del poder el 4 de Marzo del año siguiente (la aplastante victoria sobre su oponente había tenido lugar en el ámbito de unas elecciones, en las que jugó de modo decisivo la cuestión económica, relativa a la acuñación monetaria). Ciertamente, dicha cuestión aleteó sobre las campañas electorales, forzando a los políticos a asumir determinadas actitudes, y ello pudo estar relacionado con los motivos de intervención estadounidense en Cuba, dada la presión de los populistas y de los partidarios del patrón plata de los Estados del Oeste, que creían que la guerra provocaría una inflación que hundiría la política monetaria de los republicanos (31). Dentro de este orden de cosas, en su programa electoral de 18 de Julio de 1896 McKinley había expresado ya su opinión favorable a la independencia de Cuba ante los líderes y la masa de su partido (32).

Por su parte, Cleveland trató oficialmente, por última vez, la cuestión de Cuba en su Mensaje, al Congreso de 7 de Diciembre de 1896. En los primeros párrafos del Mensaje, repetía la nota de Olney del 4 de Abril y seguidamente pasaba a considerar la situación de la isla, que, según se indicaba, no se había alterado lo más mínimo, ya que la mayor parte de aquélla era presa de la anarquía o estaba ocupada militarmente por uno u otro bando, con lo que se perjudicaba altamente la producción y los varios intereses económicos norteamericanos allí existentes. A continuación, Cleveland presentaba las posibles soluciones. Una era la proposición de compra, que, aunque de manera indirecta, se

hacía con toda claridad: "Se sugiere, ahora, que los Estados Unidos podrían comprar la Isla. Esta sugestión sería muy digna de consideración posiblemente, si hubiera una evidencia cualquiera de un deseo o una inclinación, por parte de España, a aceptar semejante proposición". La oferta quedaba hecha; a la menor indicación de España al respecto, Estados Unidos compraría. Sin embargo, se perfilaba un segundo camino, ya que "todo parecía indicar que si España ofrecía a Cuba una verdadera autonomía, esto es, una manera de gobierno propio, que dejando a salvo la soberanía de la Metrópoli, satisficiese todas las exigencias racionales de sus súbditos, habría motivo justificado para creer que la pacificación de la Isla podía realizarse sobre esta base, y su resultado sería satisfactorio para cuantos se hallasen verdaderamente interesados en el asunto". Además, Estados Unidos disponía de una tercera solución, la intervención directa, con el empleo de los medios y de los métodos que se determinaran, llegado el momento: "Cuando todos los otros métodos hubieran fracasado, la actual contienda interna de Cuba podría terminarse mediante nuestra intervención, aun al costo de un guerra entre los Estados Unidos y España, guerra, que, según sus defensores profetizaban confiadamente, no sería larga en su duración, ni dudosa en sus resultados". No obstante, "los Estados Unidos, como Nación, tenían que informar sus actos en el Derecho y no en la fuerza", por lo que se daba algún tiempo a España, para que reflexionara, si bien "no era razonable esperar, que la actitud expectante de los Estados Unidos se mantuviera indefinidamente". Estos estaban deseosos de otorgar el debido respeto a la soberanía de España, pero no podían dejar de considerar el problema cubano en todos sus aspectos. En estas circunstancias, podía llegar un momento en que los acontecimientos "fijaran un límite a la paciente espera de que España resolviera el conflicto sola y de su propia manera o con la amistosa cooperación de los Estados Unidos". De esta forma, España quedó emplazada para la

guerra al extenderse la convicción, de que no podría vencer a los revolucionarios cubanos (33). A mayor abundamiento, por aquellos días se presentó en el Congreso norteamericano la proposición Cameron, solicitando la inmediata intervención de la Unión Americana en el litigio cubano. Ante esto, Cánovas juzgó que lo más conveniente era otorgar concesiones y se decidió por las reformas, tanto más cuanto que cabía esperar mayores exigencias de McKinley. A parte de esto, prevalecía la idea de la compra, tal como podía deducirse de ciertas declaraciones del propio Cleveland, efectuadas días después de leído su Mensaje ante un grupo de senadores, que vino a notificarle su decisión de declarar la guerra a España, porque, a su juicio, la situación era ya intolerable: "No habrá guerra con España, mientras yo ocupe la Presidencia... Sé que podremos comprarle la Isla a España en cien millones de pesos. La guerra nos costaría mucho más y traería otra larga lista de pensiones. Sería un ultraje declararla". Esa seguridad de Cleveland tenía su razón de ser, aparte de la convicción de que España no podría resistir la presión norteamericana. Ciertamente, la operación de compra, en la que había participado el Senador Call, la había iniciado un grupo de banqueros ingleses negociando con España la cesión de la isla por veinte millones de libras esterlinas. De momento, las negociaciones quedaron interrumpidas, pero Mr. Plasson, mediador en Londres, afirmaba que podrían reanudarse y que estaba en condiciones de poder reunir a los banqueros en el momento en que fuera necesario. Con esta idea en la cabeza, Cleveland llegó a escoger a la persona que debía encargarse de reanudar las citadas negociaciones, el abogado de Nueva York Frederick R. Condert. Así, a fines de Febrero de 1897, Cleveland llamó a Condert y le pidió que aceptase la misión que había decidido confiarle. Sin embargo, éste se excusó, alegando, entre otras razones, la proximidad de la fecha en que Cleveland debía entregar la Presidencia a McKinley, a pesar de lo cual el Presidente le

expresó su confianza en que la idea sería acogida favorablemente por el nuevo jefe del Ejecutivo (34).

Por otro lado, de momento las cosas no iban tan mal para España, según los comunicados de Dupuy de Lome a Cánovas. Así, por ejemplo, el 13 de Febrero de 1897 y en relación con las reformas, nuestro Embajador en Washington indicaba: "La opinión del Secretario de Estado, que es también la del Presidente de la República, sobre las reformas, es que son cuanto se pueda pedir y más de lo que ellos esperaban. Esa es también la opinión de los principales hombres políticos, que no nos han sido abiertamente hostiles, incluso de muchos que tendrán gran influencia en la nueva Administración, y del propio McKinley. La prensa, que empezó a atacarnos sin conocerlas, ha hecho el silencio a su alrededor" (35).

El 4 de Marzo tomó posesión de la Presidencia, sucediendo a Cleveland, William McKinley. Como se dijo anteriormente, el programa electoral de su partido contenía declaraciones favorables a la revolución cubana, pero el nuevo Presidente no alteró en ningún sentido la política de su antecesor durante los primeros meses de su estancia en el poder. El Gobierno no dió paso alguno para reconocer la beligerancia de los revolucionarios cubanos o favorecer la independencia de la isla, a pesar de la presión de la prensa y del Congreso, limitándose a mantener en pie, sin modificarla, la exigencia de Cleveland a España sobre la pronta pacificación de Cuba: "Nuestra diplomacia no pedirá nada más, ni aceptará nada menos que lo que nos es debido. No queremos la guerra de conquista y resistiremos a toda tentación de agresión territorial. Nunca emprenderán los Estados Unidos una guerra hasta agotar todos los medios que puedan evitarla". Asimismo, la conciliadora actitud del Gobierno estadounidense fue corroborada por el Ministro norteamericano en Madrid, Mr. Taylor (36).

Por su parte, Cánovas intensificó sus gestiones cerca del Gobierno norteamericano, de cara a impedir las expediciones filibusteras. Sin embargo, las palabras de Sagasta del 19 de Mayo, en la víspera de la apertura de Cortes, criticando las reformas de Cánovas, repercutieron rápidamente en Estados Unidos en los días en que se discutía en el Senado estadounidense la proposición Morgan, relativa a la beligerancia de los insurrectos cubanos, que fue aprobada con sólo catorce votos en contra, mientras que, poco después, era sancionada la presentada por Gallinger, que concedía un auxilio económico a los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Cuba, que se encontrasen afectados por la guerra (37). En el mes de Junio, McKinley salió de su inacción y dió pasos, secretos unos, públicos los otros, en relación con la cuestión cubana. Mientras tanto, los métodos de guerra de Weyler (la "reconcentración" de los campesinos, decretada en Febrero, y la orden de incendiar casas y destruir ganados y cosechas) habían acrecentado las protestas, tanto en la prensa como en el Congreso norteamericanos.

Bajo esta presión, McKinley dirigió una protesta a España (26 de Junio de 1897) contra los métodos de Weyler y contra la "reconcentración" de los campesinos, a través de su Secretario de Estado, Mr. Sherman: "El Presidente se considera obligado, en virtud de los altos deberes de su cargo, a protestar contra la incivilizada e inhumana dirección de la campaña de Cuba. Posee el derecho, a su juicio, de demandar que una guerra casi a la vista de nuestras costas, que afecta penosamente a los ciudadanos norteamericanos y a sus intereses en toda la extensión de la Isla, sea conducida de acuerdo con los códigos militares de la Civilización" (38). Logicamente, al decidirse a tratar de resolver el problema de Cuba, McKinley también pensó en la compra. Y así ese mismo mes de Junio, el enviado especial para representar a Estados Unidos en el jubileo de la Reina Victoria

en Londres, Whitelaw Reid, recibió instrucciones de sondear a los miembros de la delegación española a las mismas ceremonias, en relación con unas posibles negociaciones relativas a la venta de Cuba. La respuesta fue negativa, pero McKinley se propuso insistir más adelante sobre el asunto. En relación con ello, y como se vislumbraba que se iba a entrar en un complejo periodo de negociaciones, el Gobierno de Washington decidió enviar a Madrid como representante suyo a un hombre de toda su confianza. De esta forma, el 17 de Junio fue nombrado nuevo Ministro de Estados Unidos en Madrid, en sustitución de Taylor, el General Stewart L. Woodford (39).

El 4 de Agosto, el Ministro de Estado español, Duque de Tetuán, contestó a la nota de Sherman del 26 de Junio, refutando los cargos que se hacían en ella contra los métodos de Weyler; se insistía en el carácter que siempre tenían las guerras civiles, se realizasen donde se realizaran, y para ello se ponía como ejemplo las barbaries cometidas por los yanquis contra los sudistas en la Guerra de Secesión. La nota recordaba, además, que España, lejos de imponerse a Cuba por las armas, se preocupaba por otorgar a la isla un régimen descentralizador y exhortaba, por último, al Gobierno de Washington a que se opusiera a la ayuda que los insurrectos recibían desde territorio norteamericano (40). A los cuatro días de este comunicado, Cánovas cayó asesinado y se hizo cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros el General Azcárraga. El día 1 de Septiembre llegó a España el Ministro Woodford con unas instrucciones que demostraban que el Gobierno de McKinley se había decidido a proceder con energía en el tema relativo a la cuestión de Cuba: "A juicio del Presidente, ha llegado el momento de que el Gobierno de los Estados Unidos considere de la manera más seria y declare con toda claridad la naturaleza de su deber y los métodos de cumplirlo, respecto de sus vecinos y de sí mismo".

Por otro lado, el 8 de Septiembre Woodford se entrevistó, con carácter privado, con el Embajador inglés, a quien comunicó que la lucha en Cuba, según el criterio del Presidente McKinley, debía cesar antes de la reunión del Congreso norteamericano a primeros de Diciembre. El día 13, el Embajador estadounidense entregó sus cartas credenciales a la Reina María Cristina en San Sebastián, el 18 tuvo su primera entrevista oficial con el Ministro de Estado y el 23 hizo entrega al Gobierno español de una nota, en la que hacía una detallada historia del asunto cubano. En dicha nota se expresaba la convicción de que había llegado la hora de que España pusiese término a la lucha, ya que había tenido tiempo de terminar la guerra y no lo había logrado, a pesar de los muchos medios y métodos empleados: "Todo lo que se pide y espera es que se suministre algún medio seguro, para que la acción de los Estados Unidos pueda ejercerse con justicia y dignidad y para que la solución sea duradera, honrosa y ventajosa para España y Cuba y equitativa para los Estados Unidos". Para realizar este propósito, el Gobierno norteamericano ofrecía "sus más amistosos oficios" y fijaba un plazo, hasta el 31 de Octubre, para que el Gobierno español "formulara alguna proposición, bajo la cual la oferta de buenos oficios de los Estados Unidos pudiera hacerse efectiva o para dar a éstos seguridades satisfactorias de la pronta pacificación de la Isla". Dado lo prolongado de la situación "España no podría esperar seguramente que los Estados Unidos se limitaran a mantenerse en actitud pasiva, mientras vastos intereses norteamericanos sufrían graves daños, se perturbaban sus elementos políticos y el país permanecía en perpetua agitación, sin que se adelantara un paso en el arreglo de la cuestión cubana" (41).

Planteada la crisis gubernamental, el 4 de Octubre de 1897 se puso fin al Gobierno puente del General Azcárraga,

haciéndose cargo del poder un Gabinete liberal, presidido por Sagasta, en el que don Pío Gullón fue nombrado Ministro de Estado. Por otro lado, el día 8, Weyler fue relevado por Decreto como Capitán General de Cuba y sustituido por don Ramón Blanco, anunciándose, al mismo tiempo, que la guerra se continuaría por métodos más humanos y que pronto se suprimiría la "reconcentración" de los campesinos, a los que se les permitiría volver a sus tierras a reanudar sus labores (42). A los pocos días, el 23 de ese mismo mes de Octubre, don Pío Gullón contestó a la nota del Embajador norteamericano del mes anterior. En ella se indicaba que se llevaría a la práctica el programa del Partido Liberal, expuesto en el Manifiesto que su jefe, Sagasta, había dirigido a la nación el 24 de Junio pasado, en el que se pensaba conceder a Cuba una verdadera autonomía, sin que la isla dejase de formar parte de España. Por otro lado, se protestaba contra las insinuaciones norteamericanas sobre los sufrimientos, desórdenes y amenazas causados por la guerra y se indicaba, una vez más, que lo que debía hacer Estados Unidos era mantener la más estricta neutralidad, impidiendo las ayudas que los insurrectos encontraban en su territorio, así como el funcionamiento de la Junta Cubana de Nueva York (43).

España cumplió lo prometido y otorgó los Decretos Autonómicos el 25 de Noviembre de 1897. Al día siguiente, tan revolucionaria medida fue comunicada por el Embajador norteamericano al Departamento de Estado. Ante este hecho, Estados Unidos tuvo que reconocer que España, aun sin aceptar la mediación, había atendido rápidamente sus demandas en lo fundamental: relevo de Weyler, humanización de la guerra, supresión de la "reconcentración" y concesión del gobierno local a las Antillas. Precisamente, por aquellos días, Canalejas, que había hecho un viaje a Cuba, se detuvo en Norteamérica y fue recibido por McKinley, que le manifestó su esperanza en el

inmediato retorno a la normalidad antillana. Por su parte, el Embajador Dupuy de Lome comunicó al Ministro de Estado (2 de Diciembre de 1897) sus impresiones, en las que se reflejaba su optimismo al reseñar que habían desaparecido los motivos de irritación contra España. No obstante, era preciso aguardar algún tiempo hasta poder apreciar los resultados de la nueva política emprendida por España. En relación con ello, la respuesta oficial estadounidense llegó con el Mensaje de McKinley al Congreso (6 de Diciembre de 1897), en el que, bajo la apariencia de un lenguaje conciliador, se mantenía en pie la posibilidad de la intervención. Realmente, el Mensaje de McKinley, amistoso en la forma, no lo era en el fondo, ya que dejaba suspendida sobre España la amenaza de hacer uso de la intervención, si la paz no se producía prontamente (44). Así, pues, si Estados Unidos quería alcanzar sus objetivos, debía hacer fracasar las reformas e impedir que la paz pudiera obtenerse sin su mediación (45).

Por su parte, el 20 de Diciembre, Woodford entregó a Gullón, en contestación a la nota española del 23 de Octubre, otra, en la cual se repetían básicamente las declaraciones del Mensaje de McKinley: Estados Unidos se congratulaba de la política de los liberales, pero se reservaba la posibilidad de la intervención, si las cosas no se desarrollaban a su gusto; se defendía de los cargos relativos a la organización de expediciones filibusteras y a la financiación de éstas, por parte de la Junta Cubana de Nueva York, pero sin poder negar ambos términos, y lanzaba violentas críticas contra los Gobiernos españoles anteriores y acusaciones indiscriminadas contra las tropas españolas y contra los insurrectos, por los crueles métodos de guerra (46). Mientras tanto, España, sin abandonar la acción militar, echó sobre la mesa la carta de las reformas políticas. Así, el 1 de Enero de 1898 se puso en vigor la

autonomia colonial en la Gran Antilla, aspiración largamente acariciada por una parte muy importante de la población cubana, y el 8 de Febrero se adoptó similar disposición en Puerto Rico. Sin embargo, todos estos buenos propósitos no sirvieron de nada por voluntad de Estados Unidos, que, al considerar llegado el momento de obtener Cuba, no repararó en medios para llevar a cabo su propósito.

N O T A S.

- (1) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 8 de Abril de 1890.
- (2) Ibid., 11 de Abril de 1890.
- (3) Ibid., 29 de Abril de 1890.
- (4) Sobre Martí y los Estados Unidos véase, MARTI, JOSE: Cuba, Nuestra América, los Estados Unidos (México 1973) y también En los Estados Unidos (Madrid 1968).
- (5) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Política de Ultramar (1868-1900) (Madrid 1902), págs. 151-153.
- (6) Para el desarrollo de estas y otras cuestiones véase, BENJAMIN, JULES ROBERT: The United States and Cuba. Hegemony and Dependent Development, 1880-1934 (Pittsburgh 1977).
- (7) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 307-309.
- (8) ~~Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Julio de 1891.~~
- (9) Ibid., 4 de Junio de 1892.
- (10) Ibid., 6 de Junio de 1892.
- (11) CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol. III, pág. 224.
- (12) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 669-673.
- (13) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 317-318.
- (14) Ibid., pág. 320.
- (15) ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), págs. 109-110.
- (16) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 673-675.
- (17) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez (Barcelona 1928), pág. 334 y FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol II, págs. 292-293.

- (18) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), págs. 37-38.
- (19) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 544-545 y 675-677.
- (20) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 27.
- (21) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 294.
- (22) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 282.
- (23) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 677-681.
- (24) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 286.
- (25) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 324.
- (26) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 296 y PABON, JESUS: Eel 98, Acontecimiento Internacional, en "Días de Ayer (Historias e Historiadores Contemporáneos)" (Barcelona 1963), págs. 158-159.
- (27) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 323-325.
- (28) Diario de Sesiones del Senado, 30 de Junio de 1896.
- (29) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 192-194 y 197.
- (30) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 297.
- (31) SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional, Cuadernos de Historia de España (Buenos Aires), XLI-XLII (1965), pág. 305 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 390.
- (32) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 28.
- (33) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 29.
- (34) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 329-330 y PABON, JESUS: Ob. cit., pág. 148.

- (35) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 394 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 545.
- (36) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. II, pág. 395.
- (37) Ibid., Vol. II, págs. 397-398.
- (38) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 682.
- (39) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 12-13; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 332-333 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, págs. 325-326.
- (40) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 13-14 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 683.
- (41) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 30; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 333-334; MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 334 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 683.
- (42) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 334-335.
- (43) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 49-50 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 684-685. Véase también, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 30.
- (44) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 429 y 547-548. Véase también, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 31.
- (45) Ibid., págs. 685-688.
- (46) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 51.

2.3.3) LA INGERENCIA NORTEAMERICANA.

España, ciertamente había cometido errores y torpezas, en parte justificables, alargando excesivamente la concesión de unas reformas insistentemente pedidas por los naturales de las Antillas y por algunos españoles, entre los que ocupó un lugar destacadísimo el propio Rafael María de Labra. No obstante, ello no es obstáculo para reconocer que la autonomía, fase de transición hacia el proceso emancipador, fue alterada por la intervención extranjera, intervención tanto más desconsiderada cuanto que existían menos que nunca motivos para realizarla. Las reformas se habían llevado a cabo; la guerra, aunque no solucionada del todo en Cuba, tendía a remitir y era inexistente en Puerto Rico, y el grado de aceptación del nuevo estado de cosas por parte de la población isleña era amplio. Naturalmente, el nuevo régimen no cumplía todas las aspiraciones, pero, en todo caso, constituía el tan esperado primer paso para soluciones de más alto estilo, que, indudablemente, se hubieran producido a no tardar mucho por la fuerza de las circunstancias. Pero frente a todo esto, se alzó la voluntad de expansión de un país que, por otra parte, había apetecido, casi desde su etapa de formación nacional, las tierras objeto del problema. De esta forma, se impuso, salvando cualquier otra consideración, ya que no la fuerza de la razón, sí la razón de la fuerza.

Precisamente, los hechos relacionados con la intervención norteamericana suscitaron en Rafael María de Labra un proceso de reflexión, del cual extrajo una serie de conclusiones. En relación con ello, cabía afirmar que no hubo en Cuba, a mediados de 1898, motivos suficientes para provocar una intervención extranjera. Y esto podía decirse no sólo de acuerdo con las teorías más radicales y más nuevas del Derecho Internacional, sino también teniendo en cuenta las prácticas

internacionales más corrientes de la época, los argumentos más sutiles en favor de una actitud agresiva por parte de Estados Unidos, las tradiciones más prestigiosas y los compromisos más notorios de la República norteamericana. Aun en el supuesto de que la insurrección cubana no pudiera ser vencida por España a mediados o a fines de 1897 y que dicha insurrección produjera a Estados Unidos graves perjuicios, a los cuales era preciso poner término, tanto para el buen orden político y económico de Norteamérica como para evitar a su Gobierno gastos considerables y posibles conflictos diplomáticos, la guerra de Cuba no había supuesto, ni antes ni después, más daños que los corrientes y propios de la vecindad, lo cual jamás había sido motivo para el enfrentamiento bélico entre dos naciones contiguas o próximas. Por otra parte, la guerra de Cuba llevaba poco más de dos años de duración, aparecía claramente en decadencia a principios de 1898 y no podía negarse, además, el hecho de que Estados Unidos había sido el centro de acción, el lugar de abastecimiento y la base de operaciones de la insurrección separatista cubana. En última instancia, lo cierto fue que la actitud del Gobierno norteamericano al iniciarse 1898; el movimiento de sus barcos de guerra; la conducta de sus agentes consulares en La Habana; las notas y las reclamaciones que dirigió al Gobierno de Madrid; sus exigencias con respecto a la aplicación del Protocolo de 1871, que amplió el Convenio de 1795 y supuso una amplia protección para los norteamericanos, comprometidos en la rebelión cubana, y las solemnes declaraciones del Congreso de la República fortificaron la insurrección separatista, que estaba en descenso, desprestigiaron al Gobierno español y dificultaron el planteamiento, arraigo y desarrollo de las reformas autonómicas decretadas a fines de Noviembre de 1897 (1).

En este sentido, no había, pues, ningún principio de Derecho, precedente de carácter internacional, argumento de

equidad o consideración de moral pública, que pudiera apoyar la pretensión del Gobierno de Estados Unidos, cooperador más o menos indirecto de la insurrección cubana, de encontrar fundamento en ésta para formular exigencias contra España, imputándole la exclusiva responsabilidad de lo que pasaba en la Gran Antilla. Nada le respaldaba tampoco para decidirse a intervenir, solo y por su exclusiva cuenta y con las condiciones libremente fijadas por él mismo, en el conflicto de una provincia ultramarina contra su metrópoli, impedida, así, por la acción del interventor, para dominar y reducir al insurrecto. Ni siquiera podía invocarse como atenuante la nota entregada al Gobierno español por el Secretario de Estado norteamericano, Mr. Olney, en Abril de 1896, en la que el Gobierno de Washington había ofrecido sus buenos oficios en condiciones honorables para poner feliz término a la agitación cubana.

Ciertamente, cuando Olney escribió su nota, el problema cubano se presentaba sin solución y estaban suspendidas indefinidamente las reformas votadas por el Parlamento español en 1895; pero cuando se decretó en Washington la intervención en Cuba fue mucho después de aquel escrito y a los cuatro meses escasos de haberse empezado a plantear en las Antillas el régimen autonomista. En el fondo, lo fundamental de las recomendaciones de la nota Olney fueron un hecho a principios de 1898, y lo único que entonces habría necesitado España para terminar la guerra cubana hubiese sido que Estados Unidos se hubiera abstenido verdaderamente de fomentar esa guerra, cumpliendo a rajatabla las reglas generales de la neutralidad internacional. Además, aun apreciando la gestión diplomática norteamericana como un acto bien intencionado para llevar la paz a Cuba, aquélla no otorgaba a Estados Unidos un derecho más o menos eficaz de que careciese la víspera, ni le respaldaba totalmente, en tanto no fuera acompañada de una rectificación absoluta en el apoyo que la

insurrección cubana había estado recibiendo, tanto del pueblo como de las autoridades estadounidenses (2).

Por otra parte, la segunda vez que el Gobierno de Washington repitió el ofrecimiento de sus buenos oficios fue a fines de Septiembre de 1897, la víspera misma de la subida al poder de un Gabinete liberal, cuyo programa reformista y expansivo hacía inoperante la gestión extranjera, y la tercera en Marzo de 1898, lo que demostraba su inoportunidad y una gran desconsideración con el Gobierno español, que, seguramente, habría logrado la paz entonces, si con esta y otras coacciones no se le hubieran puesto trabas morales y materiales a su acción. En todo caso, la aceptación de los buenos oficios de Estados Unidos en 1898 hubiese equivalido a admitir un protectorado en condiciones tan deprimente, que la pérdida de Cuba por España hubiera sido cosa de poco tiempo. Posiblemente, además, la reiteración de los ofrecimientos de intervención oficiosa no había tenido otra intención que la de mostrar al mundo que el Gobierno norteamericano había apelado a todos los recursos antes del material y violento que ya estaba entonces en la mente de los dirigentes de Washington. Si realmente las declaraciones de Estados Unidos hubiesen sido sinceras, no debían haber concentrado y apostado sus buques de guerra cerca de Cuba bajo el supuesto de que España podía declararles la guerra, ni haber desarrollado la campaña de socorro en favor de los "reconcentrados" en la forma en que lo había hecho, ni haber enviado el "Maine" a La Habana, ni auspiciado y respaldado la actitud del Consul General, Mr. Lee, sino, más bien, haber procurado la inteligencia y la cooperación de las demás grandes naciones del mundo político moderno. En su lugar, se dió la Resolución del Congreso de 18 de Abril y la intervención material de los soldados y de los marinos norteamericanos tras haber desdeñado la gestión diplomática de las grandes potencias europeas para evitar la ruptura de Estados Unidos con España (3).

España intentó por todos los medios consolidar el nuevo régimen que acababa de instaurar y evitar el enfrentamiento armado con Estados Unidos mediante un forcejeo diplomático, digno del mayor encomio (4). Lo que ocurrió fue lo de menos: la euforia de una posible victoria ante el enemigo, la guerra misma, el desastre final. Lo cierto es que, aunque tarde, España hizo lo que debía y que si su obra no fructificó, fue esta vez por la acción directa de un poder extraño. En última instancia, como dijo Sagasta tras el Desastre, "fuimos a la guerra, porque no teníamos otro remedio. Estábamos frente a un terrible dilema: o la guerra, con todas sus consecuencias, o el deshonor, y el deshonor habría concluido con todo y con todos" (5).

De momento, no se había alterado básicamente la situación militar y la relajación de la censura había provocado varios comentarios adversos al nuevo Estatuto. Por supuesto, no todos, dejando aparte a los insurrectos, estaban de acuerdo con el régimen autonómico, y muestra de ello fueron algunos incidentes ocurridos en La Habana en los primeros días de Enero de 1898, obra, fundamentalmente, del Partido Incondicional Español, hasta entonces usufructuario, casi perpetuo, de los favores oficiales. De esta forma, irritado un sector extremista contra los métodos políticos recientemente instaurados en las Antillas, decidió utilizar a los intransigentes "Voluntarios" como brazo armado y promovió unos disturbios (12 de Enero de 1898) contra las redacciones de los periódicos habaneros "El Reconcentrado" y "La Discusión" (cubanos y de simpatías separatistas) y el "Diario de la Marina" (español, partidario de reformas en la administración de Cuba y, en aquellos momentos, del régimen autonómico). También se lanzaron gritos a favor de Weyler y en contra de Blanco y de la autonomía, y, aunque el orden fue prontamente restablecido, el Cónsul norteamericano en La Habana, Fitzburgh Lee, se apresuró a cablegrafiar a Washington

dando por fracasada la reforma autonómica (6). Similar actitud adoptó la prensa estadounidense, que aprovechó estos acontecimientos para argumentar la quiebra del nuevo régimen, cuando en realidad este motín no era en absoluto representativo. Poco después, la escuadra norteamericana, reunida en los puertos del Sur del país, fue enviada rápidamente a la isla "Dry Tortugas", a sólo seis horas de La Habana (7).

En los días siguientes, nuestro representante en Washington, Dupuy de Lome, se hizo eco de las repercusiones acaecidas en Estados Unidos con motivo de los citados acontecimientos, en una serie de comunicados enviados al Ministerio de Estado (8). Evidentemente, la actitud de Estados Unidos era exagerada, si se tenía en cuenta que había sido adoptada con demasiada rapidez, cuando acababa de ponerse en vigor la autonomía, cuando no se había pacificado totalmente la isla y cuando los incidentes habaneros no eran, ni mucho menos, representativos como para tachar de fracaso el régimen autonómico. No obstante, las perspectivas de solución de los problemas existentes disgustaron profundamente a los partidarios de la insurrección separatista. De ahí, su desesperado esfuerzo por crear un clima de agitación, sobre todo en algunas ciudades de Norteamérica, y por presionar al Gobierno de Washington en sentido intervencionista. De esta forma, la presión popular subió de punto y los periódicos de mayor circulación, como el "World" el "Sun" y el "Herald", se cubrieron de grabados y de anuncios sensacionalistas, mientras que un grupo de senadores, comprometidos desde muy atrás en favor del movimiento insurrecto, redobló sus esfuerzos dentro y fuera de las Cámaras, realizando mítines no sólo en aquellas localidades donde, como en las principales poblaciones de Florida, el elemento cubano era considerable, sino en otras hasta entonces extrañas a las simpatías separatistas. Asimismo, se discutió acaloradamente

sobre si procedía tan sólo el reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos o la proclamación de la República de Cuba, a pesar de ser evidente que aquéllos no habían podido establecer un comité directivo en la isla, ni siquiera en el departamento oriental, donde disfrutaban de mayor ayuda por parte de campesinos, guajiros o negros, ya que el campo de la insurrección se había reducido considerablemente al asegurarse las comunicaciones y los cultivos en todo Occidente y dejar a las fuerzas separatistas en el fondo de la manigüa sin atreverse a salir de sus defensas naturales (9).

Por otro lado, las cosas se complicaron al pronunciar el 19 de Enero, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes un belicoso discurso, que se interpretó como sinónimo de intervención. Además, el 25 de aquel mismo mes llegó a La Habana, en visita "amistosa", el crucero acorazado "Maine", justo a las tres semanas y media de haber entrado en funciones el Gobierno autónomo cubano y a los tres días de haber publicado su primer Manifiesto al País, al tiempo que se habían apostado otras unidades navales norteamericanas a menos de cuatro horas de navegación del litoral cubano. Tal como se desprendía de la correspondencia cambiada entre el Departamento de Estado y el Cónsul General en la isla, el envío del "Maine" pretendía estacionar el buque permanentemente (cuando estalló llevaba ya tres semanas en La Habana), con la intención de alentar la intransigencia de los insurrectos, irritar a los enemigos de las reformas y desmoralizar a los elementos moderados del Gobierno autónomo, a fin de hacer fracasar el nuevo régimen, que, aunque tardío, satisfacía a un sector no despreciable de la opinión pública cubana (10).

Al parecer, los expansionistas de 1898, seguidores del Destino Manifiesto (slogan del periodista y diplomático John

Lewis O'Sullivan, enarbolado en la época de la expansión contra México), consideraron que había llegado el momento oportuno de intervenir. No podía tener otro sentido el envío del "Maine", aunque se hiciese bajo la etiqueta de la cortesía. Se trataba pues de radicalizar los polos (separatistas y patriotas peninsulares) y hundir, así, el punto de conexión de ambos, el término medio moderador, representado por el Gobierno autónomo. Así, pues, la flexible Doctrina Monroe halló su momento adecuado, en aras de un brillante imperialismo, que alcanzaría, a partir de entonces, sus etapas más representativas (11). Por el contrario, no cabía aplicar el término imperialismo a las relaciones existentes entre España y las Antillas, a pesar de la gravitación de tipo comercial a que estaban sujetas ambas entidades, por lo menos en el sentido en que las concebían las potencias imperialistas de la etapa finisecular decimonónica. La conservación y posesión de Cuba se entendía en el caso español, entre otras cosas, como el mantenimiento de un patrimonio, engarzado en el ámbito institucional del país. Se trataba, pues, si se quiere utilizar este término de un imperialismo conservador no expansivo.

Por otra parte, el imperialismo de las grandes potencias y, concretamente, el de Estados Unidos, concebido sobre bases bien distintas a las del caso español, se vió empujado por una serie de factores que coadyuvaron a su desarrollo. El factor económico supuso la búsqueda de mercados exteriores para expandirse. A este respecto, decía Albert J. Beveridge, el 27 de Abril de 1898: "Las fábricas americanas producen más de lo que puede usar el pueblo americano. El destino ha trazado nuestra política: el comercio del Mundo ha de ser nuestro ... Y la ley de América, el orden americano, la civilización americana y nuestra bandera serán plantadas en costas hasta ahora sangrientas y tenebrosas" (12). En el mismo sentido se expresó el Senador

Thurston: "La guerra con España aumentará los negocios y las ganancias de cada ferrocarril americano, aumentará la producción de cada fábrica americana, estimulará cada rama de la industria y del comercio doméstico" (13).

También actuaron los factores de la motivación humanitaria, el de la exacerbación emocional, provocada por la prensa sensacionalista ("yellow press") (14) y el de la mística mesiánica de impulso vital cargado de "vocación de imperio", tal como lo señaló el Senador Beveridge: "No renunciaremos a nuestra parte en la misión de nuestra raza, custodios bajo Dios de la Civilización del Mundo; Dios no ha estado preparando a los pueblos teutónicos y anglófonos por mil años para nada, sino para la vana y ociosa autocontemplación y admiración. ¡No!, El nos ha hechos los maestros, organizadores del Mundo para establecer el sistema donde reina el caos. El nos ha hecho aptos en gobierno para que podamos administrar dicho gobierno, entre pueblos seniles y salvajes" (15). De la misma forma, contaron la exaltación de la opinión pública con respecto a Cuba, como consecuencia de la sensibilización de las capas bajas de la población, motivada por una depresión económica existente en Norteamérica desde 1893; la cuestión del patrón a emplear en la acuñación monetaria y la actuación consciente y deliberada del "business" en la formulación de la política del momento (16).

Por otra parte, las apetencias anexionistas no sólo alcanzaron a Cuba, sino también a Puerto Rico, mercado y centro estratégico y militar, y dichas miras todavía fueron más inmorales, teniendo en cuenta que en esta isla no había ninguna guerra ni había ocurrido ninguna convulsión que autorizase a intervenir. Si injustificable fue la intromisión en Cuba, más lo fue en Puerto Rico, con respecto a la que el Senador Henry Cabot Lodge afirmó en 1898: "La Isla de Puerto Rico, la más hacia

Oriente y la más bella de las Antillas con su población y ventajosa posición estratégica, ha estado de continuo en la mente del Ejército y de la Marina, desde el mismo instante en que comenzó la guerra, que constituirá el último paso del inexorable movimiento, iniciado por Estados Unidos hace un siglo para expulsar a España de las Antillas" (17).

Realmente, la presencia norteamericana en Cuba, de una forma o de otra, databa de mucho tiempo y había sido fundamental para no llegar a una solución adecuada, ya que al atizar los extremismos y al reforzar las posiciones encontradas por medio de la ayuda a los rebeldes, anuló las posibles fórmulas conciliatorias e incrementó, así, el descontento por muchos años. Sin la presencia estadounidense, las insurrecciones se hubieran sofocado con mayor facilidad y el sistema de fuerzas políticas en España y en Cuba hubiera tomado otro rumbo. Las concesiones autonómicas otorgadas, por fin, por España podían hacer peligrar de alguna manera los planes de Estados Unidos. Los métodos indirectos empleados hasta entonces, con ser muy importantes, no habían podido impedir que España empezara a rectificar, y tal situación sólo se podía salvar con la intransigencia diplomática y con la utilización de "métodos especiales" que condujesen a una guerra que, con toda seguridad, le sería favorable (18).

Así, pues, Estados Unidos, perfectamente decidido a intervenir de cualquier modo en la cuestión hispanocubana, adoptó tal determinación ante la evidencia de que el planteamiento del régimen autonómico en Cuba terminaría en breve plazo con la guerra separatista y de que con esta terminación se acabaría la posibilidad de influir e intervenir en los asuntos de aquella isla y ante la seguridad de que ninguna potencia europea se opondría a que realizase los propósitos que tenía pensados. Por esta razón, la República norteamericana no consintió que

prosperase el arbitraje propuesto varias veces por España y no se preocupó para nada de las leyes de neutralidad, de los principios corrientes relativos a la soberanía de las naciones, ni del concierto internacional. De acuerdo con ello, negó, por su absoluta y personal autoridad, la soberanía de una nación que, como la española, disfrutaba de la plenitud de su carácter internacional y que no la había ofendido de ninguna manera, y ensanchó por su exclusivo criterio y con sus propios medios el círculo de las naciones independientes, reconociendo la personalidad de tal a la antigua provincia de Cuba. En este sentido, no consideró siquiera conveniente para aquella declaración trascendental la aprobación ni aun el conocimiento de los demás pueblos soberanos, a cuyo trato, de igual a igual, era elevada la Gran Antilla. De esta forma, en la Resolución Conjunta de 18 de Abril se apeló al sentido moral del pueblo norteamericano, herido por lo que pasaba en Cuba o por lo que el Gobierno estadounidense, por su propia cuenta y con sus exclusivos datos, decía que pasaba en Cuba, para invadir las aguas y las tierras de España con el fin concreto de expulsarla de sus dominios de América. Así, Estados Unidos se declaró vengador y defensor único de la civilización en las Antillas frente a otro pueblo culto y cristiano, respetado por todas las potencias del mundo moderno y respaldado por éstas en su intento de transformar el antiguo régimen colonial de Cuba y Puerto Rico (19).

A todo esto, el 1 de Febrero de 1898 don Pío Gullón contestó a la nota del Embajador Woodford, del 20 de Diciembre del año anterior, por medio de otra, en la que protestaba contra la presionante actitud de Estados Unidos y contra las críticas y acusaciones que se hacían al ejército español. España negaba que Estados Unidos poseyera el derecho de fijar plazos para la pacificación, puesto que eso era pretender intervenir en los

asuntos internos españoles, cosa que no era tolerable. El Gobierno español había concedido honradamente la autonomía a las Antillas y en aquellos momentos la estaba aplicando con la mejor voluntad, por lo que el Gobierno de Washington no tenía derecho ni a intervenir, ni a fijar plazos, antes al contrario, lo que debía hacer era cumplir fielmente las leyes internacionales y privar a los revolucionarios del apoyo ilícito que recibían de Norteamérica, única razón por la cual la paz no se había establecido todavía (20).

La atmósfera de tirantez ya existente fue aumentada bruscamente por el incidente de la publicación (9 de Febrero) en un periódico de gran tirada, el "New York Journal", de una carta privada (escrita en Diciembre de 1897) de nuestro representante en Washington, Dupuy de Lome, a don José Canalejas, que no llegó a manos de éste por ser interceptada por los servicios de espionaje norteamericanos y en la que se hablaba de McKinley en términos despectivos. Dupuy de Lome dimitió rápidamente y fue reemplazado en la Legación española por don Luis Polo de Bernabé, aunque, no obstante, se armó un gran revuelo entre la opinión pública, que fue habilmente explotado por la prensa estadounidense (21). Sin embargo, había que dar un golpe de fuerza para obtener un éxito más efectivo; era preciso echar mano de algo más contundente e impresionante. Precisamente, con respecto a esto, el 31 de Enero de 1898 el Senador Cabot Lodge había escrito al diplomático Henry White: "Cualquier día puede ocurrir una explosión en Cuba, que resolverá una gran cantidad de cosas". Y fuera cual fuese la clase de explosión aludida por Lodge, el 15 de Febrero el buque de guerra norteamericano "Maine", estacionado en el puerto de La Habana, voló por los aires hecho pedazos (22).

Como puede suponerse la pasión antiespañola creció desmesuradamente con este hecho y el Gobierno estadounidense

aprovechó la oportunidad para utilizar habilmente el encono y estrechar el cerco diplomático sobre Madrid (23). La divergencia de opiniones sobre las causas de la explosión fue total, pero justo era reconocer que a España no le beneficiaba en modo alguno la voladura y sí a Estados Unidos, que estaba buscando un pretexto para romper con nuestro país (24). En todo caso, Estados Unidos hubiese terminado interviniendo, y en ese sentido la suerte estaba echada tanto militar como diplomáticamente (aislamiento, bien que no imputable a España, sino a las coordenadas históricas de la época, que así lo impusieron, determinando que el problema de Cuba no entrase dentro de las motivaciones de la Europa del momento, esencialmente preocupada por las pugnas de los Imperios Centrales sobre Turquía y Marruecos) (25). De momento, no se llegó a aclarar las circunstancias, pero con el paso del tiempo "pudo comprobarse que la explosión había tenido su origen en el interior del navío". "Hoy en día a nadie se le ocurre discutir el caso. Pero en 1898 el agresor había encontrado o buscado su pretexto" (26).

El Gobierno español expresó sus sentimientos por el hecho y colaboró al salvamento de las víctimas, según hizo constar el Cónsul norteamericano en La Habana, proponiendo poco después la elaboración de una encuesta conjunta, a fin de esclarecer lo acaecido. No obstante, Estados Unidos rechazó tajantemente esta proposición y realizó una encuesta por su cuenta, cuyos resultados, por otra parte, no establecieron pruebas fehacientes de la responsabilidad española (27). Además, "el Gobierno de la República no sólo hizo hincapié en que los técnicos de cada país inquiriesen y dictaminasen por separado, sino que prohibió a sus buzos bajar en compañía de los nuestros, invocó la extraterritorialidad para negar a los españoles el permiso de reconocer el interior del buque sumergido y aun pretendió hacer volar con dinamita lo que de él quedaba,

imposibilitando así todo contraste ulterior de las aseveraciones contenidas en el informe que al cabo se emitiese" (28). Evidentemente, Estados Unidos pensaba firmemente en la guerra a realizar en un corto plazo tal como se desprendía de lo escrito por el Embajador Woodford a McKinley en fecha 2 de Marzo: "Si los Estados Unidos para la protección de nuestras costas en el próximo verano y de nuestros grandes intereses financieros deben intervenir, prácticamente, para el 1º de Abril, ¿puede considerarse la declaración contenida en nuestro Mensaje de 6 de Diciembre, repetida en la nota norteamericana del 20, suficientemente clara y definida para justificar una acción efectiva en 1º de Abril o inmediatamente a dicho día? (29).

Por otra parte, por aquellos días del mes de Febrero el Gobierno norteamericano intentó, una vez más, obtener Cuba por la vía de la compra, y a este fin realizó una serie de negociaciones de carácter secreto con el objeto de obligar a España a vender, sometiendo a la Reina Doña María Cristina una proposición privada de compra con la alternativa de la guerra. La proposición, ofrecida por un enviado extraoficial del Presidente McKinley, concretaba el precio de la operación a realizar por la venta de Cuba en trescientos millones de dólares, con los que se indemnizaría del traspaso de la isla al Tesoro español, prometiéndose un millón más para los mediadores oficiales hispanos. El planteamiento de la compra se efectuó sobre el tradicional enfoque estadounidense, que consideraba a Cuba vital para Estados Unidos y ruinosa para España. Realmente, el concepto que se tenía del objeto a tratar entre ambos países era muy distinto, lo que creaba una incompatibilidad de posiciones: para España, la isla era un pedazo del territorio nacional, un terreno patrio, una herencia sagrada, una provincia española, y el Gobierno no veía por qué una negociación mercantil era la única solución pacífica, y en ello coincidían tanto conservadores como

liberales, mientras que para Estados Unidos Cuba suponía una posición clave en el Nuevo Mundo, una colonia a adquirir, un objeto de compraventa, por lo cual el Gobierno norteamericano no entendió nunca la reiterada negativa de España, negativa que se remontaba a la primera proposición que se hizo y que se repitió siempre (30).

Conocidos los términos de la proposición, la Reina procedió a informar a liberales y conservadores y, en general, a políticos más relevantes e incluso a los situados fuera del régimen, y recabó de ellos su parecer sobre el particular. Entre la guerra y la venta, y fieles al concepto de que no había pacto posible sobre lo que era parte integrante de la patria, nadie optó por lo segundo. La Reina, por su parte, además de consultar a los prohombres políticos españoles hizo gestiones cerca de Woodford al objeto de que el representante norteamericano intercediese, haciendo más suaves las instrucciones que recibiera de su Gobierno y limando las asperezas en los comunicados que enviase desde España (31).

Por otro lado, la prensa norteamericana estaba bien informada sobre las negociaciones de compra, tal como se desprendía de las alusiones al asunto efectuadas por aquellas fechas en los periódicos. Mientras tanto, la propuesta de McKinley continuaba pendiente de una respuesta concreta, que el 26 de Febrero aun no era conocida por Woodford, al tiempo que la belicosidad crecía en el Congreso cada día que pasaba, aunque el Secretario de Estado, Mr. Sherman, continuó negociando al objeto de arreglar los asuntos desde la vertiente económica. El 1º de Marzo, Sherman comunicó a Woodford que Estados Unidos consideraba fracasadas las medidas puestas en práctica por España para lograr la paz, y el 3 el Subsecretario de Estado, W. R. Day, hizo saber lo siguiente al Embajador norteamericano: "Hay muchas cosas que

no pueden escribirse, pero todos nos damos cuenta de lo difícil de la situación de usted... Desearía poder tener una larga conversación con usted. Puede ser que las cosas tomen tal aspecto que el Presidente decida enviarle un mensaje especial con amplia información para usted". A partir de este momento y en un nuevo intento, Woodford quedó encargado de las negociaciones para la compra de la isla (32).

Puestas así las cosas, el Gobierno español se vió en la obligación de dar una respuesta a la propuesta de compra y escogió para ello, como mediador para comunicarse con Woodford, a un rico hombre de negocios español con importantes intereses en Cuba. Dicho personaje habló confidencialmente con Woodford (7 de Marzo) y le transmitió la negativa de venta expresándole la manera de pensar del Gobierno y del pueblo español sobre el asunto (33). Woodford le contestó, puntualizando que los horrores de la guerra y la situación de la isla eran de la exclusiva responsabilidad de España; que Estados Unidos no podía permanecer indiferente ni pasivo y que tal situación debía terminar "inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente, porque ningún norteamericano reflexivo podía decir hasta qué momento podrían ser contenidas la conciencia y la humanidad del pueblo de los Estados Unidos". El 9 de Marzo, los términos de esta conversación le fueron comunicados por Woodford a McKinley, y para que quedase bien claro a los ojos del Presidente el carácter de la respuesta dada por el mediador español, el representante norteamericano recalcó que la entrevista se había desarrollado en una atmósfera de absoluta calma y que su interlocutor se había expresado sin apasionamiento, reposada y reflexivamente, reconociendo "que en una guerra con los Estados Unidos, España sería derrotada", pero que, no obstante, "él y todos los buenos españoles la aceptarían sin vacilación".

En otro orden de cosas, el panorama se fue complicando paulatinamente, y aquel mismo día 9 el Senado norteamericano aprobó por unanimidad un crédito de cincuenta millones de dólares con destino al incremento de armamento. Al día siguiente se posesionó de la Representación diplomática española en Washington el señor Polo de Bernabé, quien comunicó que había sido recibido cordialmente por el Subsecretario Mr. Day, el cual le había dicho que el Presidente no quería la guerra, idea confirmada al representante español por el propio McKinley dos días después (34). Sin embargo, quedó claro que Polo de Bernabé no se fió de esta actitud, ya que en su comunicación a Madrid añadió al respecto: "Temo, no obstante, que las obras no correspondan a las palabras" (35). El día 12, el mediador privado español se entrevistó de nuevo con Woodford y le reiteró la negativa anterior. De esta forma, los términos de la entrevista reflejaron, una vez más, los contrapuestos punto de vista: Cuba, tierra patria; Cuba, posición estratégica, objeto de comercio.

Por otra parte, aunque los informes sobre la voladura del "Maine" no habían adquirido todavía carácter oficial, era evidente que la opinión norteamericana estaba predispuesta contra España, motivo por el cual Gullón se dirigió (12 de Marzo) a Polo de Bernabé al objeto de que pidiese al Gobierno estadounidense que terminara con aquella tensión, al tiempo que cursaba un telegrama a nuestros representantes en las principales naciones europeas, para que hiciesen saber a sus Gobiernos respectivos, aunque de forma oficiosa, la peligrosa parcialidad de la prensa y de influyentes personalidades norteamericanas en el caso del "Maine" (36). Mientras tanto, a pesar de la negativa del día 12, Woodford no se sintió desalentado y el 17 escribió a McKinley, indicándole que tenía más fe que nunca en la posibilidad de la paz y que creía que la autonomía llegaría a feliz término. Por otro lado, mantenía una actitud de espera, pero no exenta de confianza, con respecto al tema de la venta (37).

El mismo día que Woodford escribió esta carta a McKinley, el Consejo de Ministros español celebró una extensa y agitada sesión, en la que los Ministros de la Guerra y de Marina se expresaron a favor de una acción inmediata, en tanto que Moret y Sagasta defendieron la paz, "si podía mantenerse en términos, compatibles con el honor", y fue esta última opinión la que se impuso mayoritariamente. El 18, Woodford informó a McKinley de esta reunión ministerial y de sus resoluciones. Inmediatamente después del Consejo, Moret se entrevistó con Woodford, ya que deseaba conocer el propósito final de Estados Unidos y saber si había alguna salida digna para España. Moret preguntó a Woodford si podía y quería pedir a McKinley que solicitase de los insurrectos la aceptación del régimen autonómico. Woodford respondió negativamente. Dado que el Gobierno español no había aceptado los buenos oficios ofrecidos por Estados Unidos en el otoño anterior, el decoro del Gobierno norteamericano le impedía reiterar la oferta. En estas circunstancias, España podía solicitarlo, si lo deseaba, pero, si se determinaba a hacerlo, tendría que dejar las manos libres a Estados Unidos.

Decidido Moret a llegar al fondo de la cuestión y lamentando la postura norteamericana, ya que una sola palabra de Estados Unidos a los revolucionarios cubanos hubiese garantizado el éxito del régimen autonómico, habló claramente a Woodford, quien le respondió que no creía que la autonomía proporcionase la paz a Cuba bajo la bandera española, ni que los insurrectos fuesen capaces de asegurarla bajo un gobierno libre e independiente, tan sólo existía un poder y una bandera con la suficiente energía para imponerla y asegurarla y esta era la de Estados Unidos. Para Woodford la única solución estribaba en la venta, y a este fin formuló una proposición de compra, según la cual el Gobierno norteamericano estaría dispuesto a pagar la suma que se fijara, reteniéndose una parte del precio para las

reclamaciones de Estados Unidos a España o a los ciudadanos españoles o de España a Estados Unidos o a los ciudadanos norteamericanos, que serían controladas por una comisión mixta que se crearía al respecto. Por último, el acuerdo de venta se redactaría en un "memorándum" público y los términos específicos de éste en uno secreto (38).

A pesar de todo, Woodford continuó mostrándose optimista y así se lo comunicó a McKinley (19 de Marzo) en cable cifrado, en el que le pedía facultades para actuar y expresaba su convicción de que el Gobierno español aceptaría una solución. En Washington, también se concibieron esperanzas en este sentido, si bien el Subsecretario Day proporcionó una nueva arma a Woodford, para que presionase a los Ministros españoles sobre la base del informe que muy pronto emitiría sobre el "Maine" la comisión naval estadounidense, la cual expresaría, por unanimidad, que el buque había hecho explosión por una causa externa. Aunque la excitación de Estados Unidos era muy aguda, se pensaba que si España cedía en lo esencial, todo podía arreglarse pacíficamente (39). Pero del lado español las cosas no eran tan fáciles como las veía Woodford. Así, en nueva entrevista (19 de Marzo), Moret le expresó que "Su Majestad deseaba transmitir a su hijo, cuando éste llegase a la mayor edad, todo su Patrimonio sin menoscabo alguno. Prefería abdicar su Regencia y retornar a su hogar de Austria antes de ser el instrumento, mediante el cual se enajenara o cediera cualquiera de las Colonias españolas" (40).

Fracasada, pues, una vez más, la posibilidad basada en la venta de la isla, al Gobierno Sagasta se le hizo patente la inminencia de la intervención armada de Estados Unidos, que había intentado evitar, buscando la total pacificación de la Gran Antilla. En vista de estas circunstancias, se enviaron más hombres a Cuba y se ordenó al Ministerio de Marina que organizara

escuadras para las Antillas y el Océano Pacífico. Por su parte, Blanco siguió el plan de Weyler, consistente en moverse de Oeste a Este para reducir los núcleos rebeldes orientales, combatir a Calixto García y, una vez pacificada la comarca de Santiago de Cuba, penetrar en Camagüey y batir a Gómez. Realmente, el plan era idóneo, y si no se hubiese producido la intervención norteamericana, antes de empezar la estación de las lluvias de aquel año hubiera sido dominada la insurrección (41).

El 20 de Marzo, la comisión española emitió su informe acerca de las causas de la voladura del "Maine", según el cual el origen había sido interno, si bien este extremo no se había podido probar con absoluta certeza, debido a la actitud mantenida por las autoridades norteamericanas. Moralmente, la verdad era esa (42). El día 21 hubo un cruce de notas entre la Embajada norteamericana en Madrid y la Subsecretaría de Estado: Woodford indicó a Day que la situación era muy delicada y que había decidido entrevistarse con Moret el 22. Por su parte, Day comunicó a Woodford que la comisión norteamericana había atribuido la explosión del "Maine" a una mina y que la noticia, al ser conocida, había excitado a la opinión pública. Asimismo, le indicaba que si en breves días no se llegaba a un acuerdo pacífico, el Presidente sometería el informe de la comisión al Congreso, lo que de hecho equivalía a una declaración de guerra.

En la entrevista del 22 entre Woodford y Moret, que tenía como objeto utilizar el informe sobre el "Maine" como un nuevo medio de presionar al Gobierno español, el representante norteamericano dijo al Ministro de Ultramar que el informe estaba en poder del Presidente y que éste sometería al Congreso la cuestión relativa a las relaciones de Estados Unidos con España, incluido el caso del "Maine", a menos que en breves días se llegara a un arreglo honroso y satisfactorio, que asegurase la

paz en Cuba (43). Tras esto, Woodford solicitó para el día siguiente 23 una entrevista con Gullón, y después informó a McKinley de su actuación. A las pocas horas recibió, una respuesta de Day, en la que se aprobaba su gestión y se le pedía que informase inmediatamente del resultado de su entrevista con el Ministro español (44).

Puestas así las cosas, la entrevista del 23 no condujo a solución alguna: Gullón, convencido de que el Gobierno autonómico antillano acordaría un arreglo con los insurrectos antes de la estación de las lluvias, pidió un plazo hasta el 4 de Mayo, fecha en que debía reunirse el Parlamento insular cubano. Woodford, por su parte, mantuvo su posición y defendió a su país lo mejor que pudo ante la extrañeza de Gullón, determinada por la nueva y perentoria actitud adoptada por Estados Unidos (45).

El mismo día 23, el Gobierno español, reunido en Consejo de Ministros, mantuvo su postura, sobre cuya base Gullón contestó dos días después a la nota de Woodford en un "memorándum", en el que se consideraba que los medios adoptados (por otra parte, indicados por Estados Unidos mismo) traerían rápidamente la paz tan deseada por todos. Asimismo, se ponía de manifiesto que cualquier tentativa que se llevase a cabo fuera de este contexto debía contar con la participación del Parlamento insular, que se reuniría el próximo 4 de Mayo para prestar especial atención a las medidas encaminadas a llevar una paz duradera a Cuba. Al mismo tiempo, se consideraba inadmisibles la utilización del tema del "Maine" e injustificable la comunicación del informe sobre aquél al Congreso, sobre todo al no ir acompañado del correspondiente informe español, que hubiera permitido el necesario cotejo (46).

Tras entregar a Woodford el mencionado "memorándum", el Gobierno español, viendo la marcha de los acontecimientos, puso

los hechos en conocimiento de las grandes potencias europeas, solicitándoles su consejo y, en caso necesario, su arbitraje. En realidad, la Europa del momento, montada sobre la base de la Triple y de la Dúplice Alianza y con Gran Bretaña ajena a este equilibrio de poderes, ante el problema de Cuba, un asunto lejano y no afectado por el sistema de alianzas vigente, tendía a buscar un acuerdo transitorio, mediante el concierto de todas o de varias de las potencias europeas. En última instancia, y teniendo en cuenta las divergencias existentes, las potencias se avendrían a una intervención mediadora, más que nada por defender sus propios intereses económicos, que se verían afectados en caso de guerra, procurando no disgustar a Estados Unidos (47).

El 26 de Marzo, Day comunicó a Woodford la respuesta que debía dar a Gullón: Estados Unidos no quería Cuba (negación en el terreno oficial, sin mencionarla, de la proposición de compra del 17 de Marzo, motivada por la alusión hecha por Gullón en su nota del 25), la fuerza de los motivos humanitarios se imponía, y la continuación de la guerra era por lo mismo, intolerable. Por otra parte, debían derogarse totalmente las ordenes de "reconcentrados", se tenía que mantener a la población hasta que pudiera valerse económicamente por sí y no quedaba más remedio que otorgar a los cubanos un "pleno gobierno propio", que en aclaración a la consulta de Woodford sobre su significado era entendido (comunicado del 28 de Marzo) por el Gobierno norteamericano como independencia (48).

Así, pues, la intransigencia de Estados Unidos era manifiesta. En un principio (nota Olney, Mensaje de Cleveland, inicio de la gestión diplomática de Woodford), se había deseado la autonomía, después las peticiones se habían hecho más apremiantes hasta llegar a exigir lo que se sabía: que España no podía otorgar, la independencia. El cambio acaecido en la actitud

estadounidense, entre Octubre del 97, cuando la situación en Cuba era mucho peor, y Marzo del 98, con la autonomía por delante y la posibilidad de terminar la guerra, era, pues, evidente (49). Desde el punto de vista de Estados Unidos, el planteamiento era claro: eliminada la posibilidad de obtener concesiones económicas especiales bajo el régimen autonómico español, agotada la vía de la compra, no quedaba otra postura que expulsar a España de Cuba. Más tarde, Estados Unidos ya se entendería de una forma o de otra con los cubanos. Por su parte, Woodford, que iba comprendiendo el sentir español y sus razones de ser y para quien la guerra suponía el fracaso de su gestión diplomática, intentó evitarla hasta el último momento, convencido, además, de que España acabaría rindiéndose a la fatalidad de las cosas y, por último, accedería a la independencia de Cuba (50).

El mismo día de la notificación de Day, 26 de Marzo, Moret, en un esfuerzo por evitar lo que se venía encima, lanzó la idea de un armisticio, que según la opinión del propio Woodford en comunicación a Washington, supondría la paz. El 29 de Marzo, Woodford entregó a Sagasta, en presencia de Moret y de Gullón, un documento, en el que presentaba las exigencias de McKinley: no se quería Cuba, pero se debía llegar a una pacificación inmediata de la isla, para lo cual se sugería la concesión de un armisticio también inmediato hasta el 1º de Octubre, periodo durante el cual se negociaría la paz con los insurrectos bajo los amistosos oficios del propio Presidente. Además, debía acabarse con la "reconcentración de pacíficos" y socorrerse a los necesitados con alimentos y recursos (51). En realidad, el punto espinoso estaba en el armisticio. Los españoles respondieron que por dificultades internas España no podía tomar la iniciativa, pero que si los que lo solicitaban eran los insurrectos, el Gobierno lo concedería en seguida. Al tiempo, se presentaba una fórmula acomodaticia, consistente en que tomase la iniciativa el Parlamento insular,

que debía reunirse, como se sabe, el 4 de Mayo. La respuesta de Woodford consistió en negarse a aceptar cualquier aplazamiento y en exigir una respuesta definitiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, cuando era evidente que el paréntesis hasta el 4 de Mayo o la influencia sobre los insurrectos por parte de Estados Unidos, para pedir el armisticio, hubiesen dado satisfacción a las exigencias (52).

En un nuevo intento de solucionar la cuestión, la Reina realizó por aquellos días gestiones personales cerca de la Santa Sede y de Austria-Hungría, tendentes a tratar de reforzar la posición internacional de España. Mientras tanto, el último día del mes de Marzo tuvo lugar la contestación española a Woodford: España, que ya había propuesto anteriormente a Estados Unidos someter la cuestión del "Maine" a jueces imparciales, volvía a renovar su oferta; se ratificaba la idea anterior, basada en el supuesto de que las Cámaras convocadas para principios de Mayo eran el único órgano idóneo para negociar la paz, pero se indicaba que se otorgaría el armisticio, si los rebeldes lo pedían; se hacía saber que se habían revocado las órdenes de "reconcentración" en las provincias occidentales, y, por último, se manifestaba que se ponía a disposición del Capitán General de Cuba tres millones de pesetas para sostener a la población hasta que llegase la completa normalidad (53).

El 3 de Abril, Woodford escribió a McKinley sobre una conversación que aquél había tenido con Gullón, en la que el Ministro español le había hablado de una mediación por parte del Papa acerca del armisticio, sugerida por el propio Presidente: España aceptaba la mediación papal y deseaba que Estados Unidos, en un gesto de buena voluntad, retirase sus buques de guerra de las aguas cubanas en cuanto se firmase el armisticio. Woodford esperaba que su país cediese a estas peticiones, considerando

que, si se le daba un mínimo de tiempo para maniobrar, obtendría la paz antes de Octubre. Realmente, si Estados Unidos hubiera deseado llegar a una solución, podía haberle dado a Woodford el tiempo que pedía, haber interpuesto su influencia sobre los insurrectos o haber aceptado la mediación papal (54).

La respuesta norteamericana no se hizo esperar, ya que tuvo lugar el mismo día 3. Por otra parte, los términos en que se expresaba eran altamente conminatorios: se negaba el tiempo solicitado por Woodford, se desmentía la idea según la cual McKinley había sugerido la mediación papal, y el armisticio sólo era posible entre España y los insurrectos sin mediación de ninguna clase (como, así, ni los insurrectos lo pedirían ni España lo concedería, se cerraba la puerta a toda posible solución). La decisión de retirar los buques quedaba, por otra parte, al libre albedrío de Estados Unidos. La paz no significaba, en todo caso, la exigencia norteamericana de la independencia; si algo se hacía, debía ser inmediato y, por último, McKinley sometería al Congreso su Mensaje, en el que se incluía todo el asunto de la cuestión cubana.

El martes (la nota era del domingo), Woodford continuó trabajando con denuedo, y aquel día tan movido diplomáticamente volvió a comunicarse con Washinton, preguntándole al Presidente si apoyaría a la Reina Regente y evitaría una declaración adversa del Congreso, si se proclamaba una suspensión de hostilidades antes del 6. Esta vez, el Departamento de Estado no fue tan rápido y contestó el 5 por la noche (por si acaso no era suficiente el margen de tiempo), diciendo que el Presidente no podía influir en el Congreso y que se limitaría a transmitir el Mensaje (55).

Mientras tanto, la diplomacia del Vaticano se esforzaba por evitar el inminente enfrentamiento armado. Así, el Arzobispo

de Nueva York, monseñor Ireland, por orden expresa del Secretario de Estado, Cardenal Rampolla, había sugerido a McKinley la posibilidad de que España aceptase el armisticio a instancias de Su Santidad León XIII. El día 7, los representantes de las seis grandes potencias europeas (Alemania, Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia) visitaron personalmente al Presidente y pidieron la continuación de las negociaciones, apelando a los sentimientos de humanidad y de moderación de McKinley, que por entonces había retrasado la presentación del Mensaje al Congreso hasta el día 11, aunque con el único objeto de evacuar a los norteamericanos residentes en Cuba (56). El 9, los representantes europeos en Madrid se entrevistaron con Gullón y le ofrecieron la hábil fórmula diplomática del Cardenal Rampolla: España no concedería el armisticio, si los insurrectos no lo solicitaban; éstos por sí no lo pedirían y McKinley se negaba a interponer su influencia. Sin embargo, si el Papa hacía suya la mediación, resultaba que alguien con suficiente dignidad moral pedía el armisticio en favor de los rebeldes, haciéndose, diplomáticamente hablando, su portavoz, sin que ninguna de las dos partes, España y Estados Unidos, hubiese cedido, salvando, así, su honor (además, España ya había indicado, que, si el armisticio lo solicitaba el Sumo Pontífice, lo concedería, y, a mayor abundamiento, la gestión del Vaticano era respaldada por las potencias europeas).

En vista de estas circunstancias, aquel mismo día la mediación papal fue aceptada y el armisticio concedido. Por su parte, el Ministro de Estado telegrafió inmediatamente a Merry del Val, Embajador español ante la Santa Sede, para que comunicase la aceptación al Cardenal Rampolla y éste, a su vez, lo hiciese saber a León XIII: "Sírvasse expresar, sin pérdida de momento, a S.E. el Cardenal Rampolla, para que éste lo comuniqué a S.S., que el Gobierno español ante la viva noble y

desinteresada solicitud de S.S. ha resuelto prevenir al General en Jefe del Ejército de Cuba, que conceda, inmediatamente, una suspensión de hostilidades por el tiempo que estime prudencial para preparar y facilitar la paz ansiada". Evidentemente, España no podía hacer más (57). Woodford, por su parte, comunicó estos pormenores, sin pérdida de tiempo, y el 10 de Abril nuestro representante, Polo de Bernabé, hizo saber oficialmente al Departamento de Estado que el armisticio había sido promulgado ya en la isla, a la vez que renovó la proposición de someter la cuestión del "Maine" a jueces neutrales. Ese día, Day, en comunicación a Woodford, se mostró indiferente, limitándose a decir que el Presidente ya informaría al día siguiente al Congreso de aquellas medidas (58). De hecho, la suerte hacía ya tiempo que estaba echada, puesto que McKinley se había decidido por la guerra, negándose a presionar sobre los insurrectos, que bajo su influjo hubiesen aceptado el armisticio, y a aplazar la presentación del Mensaje al Congreso, cosas ambas que hubiera podido hacer, si hubiese querido.

Por otro lado, también jugó un importante papel la fatal actitud adoptada por Gran Bretaña, fruto de las circunstancias históricas del momento, que le llevaron a negarse a realizar un arbitraje, en el caso cubano, pese a los deseos de revancha del Representante inglés en Washington, sir Julian Pauncefote (que veía en ello la posibilidad de devolver a Estados Unidos la afrenta recibida en 1896, con motivo del asunto Venezuela-Guayana), lo que hubiera supuesto una condena moral de la conducta yanqui y la consiguiente ruptura entre Estados Unidos e Inglaterra (59).

Así, pues, tal como estaba previsto, el día 11 de Abril de 1898 el Presidente McKinley presentó su Mensaje al Congreso, cuyos principales puntos eran los siguientes: presentación

parcial e interesada de la política española hasta fines de 1897 y del panorama creado por la guerra; explicación de por qué el Presidente no había reconocido la beligerancia de los insurrectos; exposición de los motivos de intervención; explicación de la cuestión del "Maine" (60); petición, por parte del Ejecutivo, de la autorización para intervenir y establecer un Gobierno estable que mantuviese la paz y la seguridad sobre la base de que la única posibilidad era pacificar Cuba por la fuerza, y, por último, comunicación de la proclamación española de suspensión de hostilidades, pero en términos altamente tendenciosos (61). El Mensaje era inexacto y nada favorecedor respecto de las últimas concesiones españolas; parcial en sus referencias al "Maine" y en su silencio sobre la derogación de las órdenes de "reconcentración", y falso el indicar que la pacificación sólo se podía alcanzar por la fuerza, cuando España había concedido un armisticio que hubiese producido la pacificación inmediata, si lo hubieran aceptado los insurrectos, dependiendo esto último de Estados Unidos (62).

De esta forma, respaldados por el Mensaje presidencial, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron el 18 de Abril una Resolución Conjunta ("Joint Resolution"), que equivalía, de hecho, a una declaración de guerra al otorgar al Ejecutivo plenos poderes para intervenir y al exigir la renuncia inmediata de España a la soberanía sobre Cuba (63). Mientras tanto, en España un Real Decreto de 14 de Abril adelantó en cinco días la reunión de Cortes, al tiempo que la opinión pública, embarcada en la euforia del patriotismo, alentado por la prensa, consideraba las posibilidades de la guerra de forma desproporcionada. Por último, en coincidencia de fechas, el 20 de Abril de 1898, McKinley sancionó la Resolución del Congreso, en tanto que la Reina leía ante las Cámaras el Mensaje de la Corona, para concluir que el único amparo existente

ya era "el valor de los españoles". Aquel mismo día, el Departamento de Estado comunicó a Woodford, para que a su vez lo hiciese saber al Gobierno español, que España debía abandonar su autoridad sobre Cuba en el plazo de tres días. El proceso de evolución había sido bruscamente cortado (64).

N O T A S.

- (1) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 692-693.
- (2) Ibid., págs. 694-696.
- (3) Ibid., págs. 696-698.
- (4) Sobre las relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos durante este período véase, Documentos Presentados a las Cortes en la Legislatura de 1898 por el Ministro de Estado Duque de Almodovar del Río. Negociaciones Generales con los Estados Unidos desde el 10 de Abril de 1898 hasta la Declaración de Guerra (Madrid 1899).
- (5) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: Sagasta o el Político (Madrid 1934), pág. 202.
- (6) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., pág. 554.
- (7) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. III, págs. 37 y 47-48; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), pág. 339 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, pág. 355.
- (8) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 32.
- (9) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 582-583.
- (10) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), págs. 25-26.
- (11) Sobre el imperialismo estadounidense véanse, MAY, ERNEST R.: Imperial Democracy. The Emergency of America as Great Power (New York 1961); PRATT, JULIUS W.: Expansionists of 1898. The Acquisition of Hawai and the Spanish Islands (Chicago 1964) y TORTELLA, GABRIEL: Reflexiones en torno al Imperialismo Norteamericano en 1898, "Boletín del Seminario de Derecho Político" (Salamanca), núm. 13 (1964), págs. 191-200.
- (12) Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), pág. XXVI.
- (13) Ibid., pág. XXVI.
- (14) Sobre la prensa sensacionalista norteamericana véanse, WILKERSON, M.M.: Public Opinion and the Spanish-

- American War. A Study in War Propaganda (Baton Rouge 1932); WISAN, J.E.: The Cuban Crisis as Reflected in the New York Press (1895-1898) (New York 1965) y BERMEOSOLO, FRANCISCO: La Opinión Pública Norteamericana y la Guerra de los Estados Unidos contra España. "Revista de Estudios Políticos" (Madrid), núm. 123 (1962), págs. 219-233.
- (15) HOFSTADTER, RICHARD: The Paranoid Style in American Politics and other Essays (New York 1965), pág. 176, citado por MALDONADO DENIS, MANUEL: Puerto Rico: Una Interpretación Histórico-Social (México 1971) pág. 54. Sobre este aspecto del mesianismo que caracterizaba al "Manifest Destiny" véanse también, LA FEBER, WALTER: The New Empire. An Interpretation of American Expansion, 1860-1898 (Ithaca 1963) y WINBERG, A.K.: Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History (Baltimore 1935).
- (16) Sobre los distintos factores que coadyuvaron en la intervención véase, SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional "Cuadernos de Historia de España" (Buenos Aires), XLI-XLII, (1965), págs. 304-306.
- (17) CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX (San Juan 1952-1957), Vol, III, pág. 224.
- (18) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 36-37.
- (19) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 698-700.
- (20) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 52 y GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 339-340.
- (21) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 51, Nota núm. 17; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 51, Nota núm. 3; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 340 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 584-585.
- (22) Manuel Fraga Iribarne en Prólogo a LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Ob. cit., pág. XXVI.
- (23) Sobre esta y otras cuestiones relacionadas con el tema véanse, CASTAÑEDA, TIBURCIO P.: La Explosión del "Maine" y la Guerra de los Estados Unidos con España (La Habana 1925) y SIGSBEE, CHARLES D.: The Maine. An Account of her Destruction in Havana Harbour (London 1899).
- (24) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 552-553.
- (25) Sobre las circunstancias históricas de la Europa del último cuarto del siglo XIX en las que se vió inmersa España puede consultarse SALOM, JULIO: España en la Europa de Bismarck. La Política Exterior de Cánovas (1871-1881) (Madrid 1967).

- (26) TUÑÓN DE LARA, MANUEL: La España del Siglo XIX (París 1968), pág. 327.
- (27) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 39-40.
- (28) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, págs. 364-365.
- (29) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 341.
- (30) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, págs. 359-360 y PABON, JESUS: El 98, Acontecimiento Internacional, en "Días de Ayer (Historias e Historiadores Contemporáneos)" (Barcelona 1963), págs. 150-151 y 172.
- (31) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 55-57.
- (32) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 343.
- (33) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 33.
- (34) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 555-556.
- (35) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 53 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 365.
- (36) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 64 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 556.
- (37) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 346.
- (38) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 58; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 347-350 y PABON, JESUS: Ob. cit., págs. ~~176-177~~.
- (39) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 350.
- (40) Ibid., pág. 351 y PABON, JESUS: Ob. cit., pág. 177.
- (41) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 362.
- (42) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 59.
- (43) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 559-560.
- (44) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., pág. 352.
- (45) MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 365.
- (46) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 352-353 y PABON, JESUS: Ob. cit., págs. 180-181.
- (47) PABON, JESUS: Ob. cit., págs. 183-184.
- (48) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., pág. 560.

- (49) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 53; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 60-61; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 353-355 y PABON, JESUS: Ob. cit., págs. 181-182.
- (50) GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Ob. cit., págs. 359-360.
- (51) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 54; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 61; MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 367 y PABON, JESUS: Ob. cit., pág. 182.
- (52) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 560-561.
- (53) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 55; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, pág. 62 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 367.
- (54) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 56-57.
- (55) Ibid., págs. 57-59 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., pág. 562.
- (56) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 561-562.
- (57) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 60; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 65-66; MAURA GAMAZO, GABRIEL: Ob. cit., Vol. I, pág. 368; PABON, JESUS: Ob. cit., págs. 184-185 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., pág. 564.
- (58) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 61 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 67 y 69.
- (59) PABON, JESUS: Ob. cit., págs. 185-190. En relación a la postura adoptada por Gran Bretaña puede verse: TORRE DEL RIO, MARIA ROSARIO DE LA: La Neutralidad Británica en la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 (Madrid 1985).
- (60) Sobre este particular véase, Message from the President of the United States Transmitting the Report of the Naval Court of Inquiry upon the Destruction of the United States Battle Ship Maine in Havana Harbour, February 15, 1898, together with the Testimony Taken before the Court (Washington 1898).
- (61) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 62-64; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 67-68 y LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 428-429 y 608-612.
- (62) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 64.
- (63) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 430-431 y 615-616.
- (64) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., pág. 67 y PABON, JESUS: Ob. cit., pág. 191.

2.3.4) LA INTERVENCION ARMADA Y EL DESENLACE DEL PROCESO.

A partir de estos momentos, los hechos se desarrollaron con extraordinaria rapidez, así como la guerra misma, que fue su consecuencia, dada la desigualdad de fuerzas existente (1). En estas circunstancias, Labra analizó en una serie de escritos la moralidad o inmoralidad de la intervención misma. De acuerdo con ello, la intervención llevada a cabo por Estados Unidos y realizada en su forma más acentuada y violenta se alejaba de una pura cuestión particular entre España y Norteamérica para meterse de lleno en el terreno del Derecho Internacional. En todo caso, cualquier tipo de intervención tenía que ser considerada, por una parte, a la luz de los principios y prescindiendo de los intereses particulares y de las simpatías que pudiera inspirar cada uno de los pueblos interesados en el conflicto, y, por otra, en relación el tema de la soberanía y del concepto de la independencia de las naciones (2).

En este sentido, y según los últimos progresos del Derecho Público contemporáneo, se presentaban tres grandes tendencias en el ámbito del Derecho Internacional. De ellas, la primera era la que tenía por fin determinar el concepto de nación, que no era un hecho arbitrario y pasajero, sino que exigía condiciones de regularidad, de permanencia, de suficiencia, de responsabilidad y de personalidad dentro del cuadro general de los pueblos cultos que constituían la forma superior positiva de la sociedad humana. La segunda tendencia se determinaba en el sentido de favorecer y de acelerar la constitución de un ente superior a la nacionalidad moderna, lo cual suponía un progreso extraordinario sobre el concepto que de ello tenía la Antigüedad y sobre el exclusivismo local de la Edad Media en esta materia. La tercera tenía por fin consagrar los

intereses esenciales y fundamentales de la civilización contemporánea, en especial, los derechos naturales e inalienables de la personalidad humana y de la regularidad y permanencia de la entidad nacional, poniéndolos fuera de los compromisos y de las estrecheces de las fronteras, de las razas, de las religiones y de las familias, para darles por garantía la sanción colectiva de todas las naciones cultas. Según estos supuestos, la intervención se había realizado en el siglo XIX de diversas maneras. En un caso, mediante una gestión más o menos decidida de carácter diplomático del Gobierno interventor sobre el Gobierno de la nación intervenida, secundada, a lo sumo, por una demostración militar; en otro, por medio de la fuerza armada, de modo sistemático y amplio, pero con carácter pasajero. A su vez, esta última intervención podía verificarse por demanda y en apoyo del Gobierno del país intervenido, por solicitud y en apoyo de elementos contrarios a aquel Gobierno o por iniciativa del Gobierno interventor en consideración a sus nacionales y protegidos y sin cuidarse de los elementos del país intervenido (3).

Dentro de este contexto, podían ser posibles y lícitas las intervenciones, aun en el supuesto de que la conducta de las naciones intervenidas no perjudicase, directa y exclusivamente, los intereses y los derechos de los interventores. En todo caso, para que una intervención fuese legítima o, por lo menos, mereciese la consideración y el respeto de las gentes cultas, era indispensable la justa adecuación de los medios empleados por el interventor al fin general que éste perseguía. Asimismo, era preciso que la intervención no se resolviese en provecho particular del interventor, que su determinación no fuese el efecto del capricho, de la pasión o de la preocupación del que intervenía, y que, en último término, la intervención y sus efectos resultasen garantizados por el voto o por la acción de

los demás pueblos directores del mundo civilizado, es decir, de las grandes entidades y de los factores responsables de la gran sociedad de las naciones. De no darse estas condiciones, la intervención se convertiría en un modo más o menos disfrazado de la antigua conquista, con lo cual las naciones pequeñas o débiles estaban completamente a merced de las conveniencias o de las ambiciones de los Estados poderosos. En cualquier caso, resultaba indispensable no consentir que la violencia se explicase por el Derecho y que, confundiéndose los motivos de ciertos actos de fuerza, medrase el espíritu de conquista al amparo de los prestigios de la civilización y mediante protestas de generosidad o cultura. Por ello, no podía ser aplaudida la intervención que contribuyese a aumentar las perturbaciones de la nación intervenida o que utilizase para su éxito las violencias de tribus incultas, lanzadas sobre Gobiernos comprometidos por la rebelión de sus súbditos. Del mismo modo, no era admisible la intervención violenta y armada, sin que antes se agurasen todos los medios pacíficos. Así, se imponía cada vez más el hecho de que las intervenciones no se realizasen por un sólo Gobierno y por las propias y exclusivas declaraciones y gestiones de éste y de que una vez realizada la intervención sus resultados definitivos no quedasen a merced del interventor, por grande que pareciese su desinterés, su cultura y su poder.

Todavía las condiciones y las reservas de la intervención y las exigencias a que había de responder el interventor eran mayores en determinados casos, como, por ejemplo, cuando la intervención tenía por fin público, mediante declaraciones más o menos terminantes o sinceras, hacer entrar en el círculo de los pueblos independientes y con el carácter de nación soberana a un pueblo o a una comarca que hasta entonces figuraban como parte de la nación intervenida. Y otro tanto podía decirse, si la integridad territorial de la nación acometida

estaba más o menos explícitamente garantizada por otras naciones y singularmente por el interés general internacional de la época. En tales casos, era imposible reconocer a un pueblo, por grandes que fuesen sus medios, el derecho de modificar a su antojo, por sus conveniencias o por sus ideas, el mapa de las naciones contemporáneas, dando carta de ciudadanía internacional a una región, poniéndola a la altura y con las responsabilidades de los demás pueblos independientes y ensanchando o reduciendo a su manera el derecho de éstos. En cuanto a rectificar o destruir las garantías dadas por otras naciones al "statu quo" de la nación intervenida, podía hacerse, pero nunca por el uso de la fuerza, aunque se utilizasen pretextos para explicar el atropello como legítima defensa o como consecuencia de las irregularidades o de las exigencias de lo inesperado (4).

Como es sabido, la escuadra española de Filipinas, al mando del Almirante Montojo, fue destruida en la bahía de Manila por la del Comodoro Dewey el 1 de Mayo de 1898, a lo cual siguió la rendición de Cavite. Tal hecho provocó rápidamente una reacción en la calle y en el Parlamento, de la que se hizo eco Rafael María de Labra en intervención del 10 de Mayo, en la que preguntó por las condiciones en que se había producido el desastre de Cavite. Para Labra, los asuntos ultramarinos comportaban un aspecto internacional ineludible, que exigía la aplicación de medidas de carácter político y diplomático.

Al plantear estas cuestiones, afloraba el tema de la incompatibilidad de la doctrina autonómica con el principio de la soberanía nacional, lo cual era negar el concepto de soberanía misma y desconocer que el fundamento del poder soberano consistía en no tener por encima de sí ningún otro poder que resolviese, ni en apelación ni por propia iniciativa, los diversos problemas que pudieran surgir. Así, pues, en el sistema de la autonomía

colonial el supuesto, absolutamente indispensable, debía afirmar que por debajo de cualquier idea del concepto de soberanía y por encima de lo que constituía la especialidad y la competencia de los poderes locales, estaba la soberanía nacional con el doble derecho de la iniciativa y de la representación, en cuya virtud las provincias de Ultramar tenían una presencia en el Parlamento nacional; presencia que era necesario garantizar, de modo que fuese eficaz y no perturbase la marcha de la metrópoli.

Por otra parte, la doctrina autonómica comprendía tres aspectos: suponía una solución de gobierno como medio de resolver todos y cada uno de los problemas ultramarinos en relación con los peninsulares, implicaba la adopción de una gran política internacional necesaria, para que España pudiera adquirir una personalidad en el concierto europeo, y era una manera eficaz de resolver dentro de los conflictos particulares el especial en que se había visto envuelta Cuba. En cualquier caso, el fracaso, si así se le podía calificar, de la autonomía se debía a la intervención armada de Estados Unidos y en este sentido era evidente que la acción coercitiva de ese país y su política de agresión se habían precipitado en el momento en que había tenido "la conciencia, de que con la autonomía venía la paz". Tal realidad se hallaba confirmada y demostrada por toda clase de documentos públicos y privados y por el testimonio de los más ilustres políticos, diplomáticos y estadistas de todo el mundo. De esta forma, cuando la insurrección cubana se había considerado completamente vencida, "entonces fue cuando vino la Escuadra norteamericana a las Tortugas, entonces cuando de los Estados Unidos empezaron a enviarse auxilios para los reconcentrados y cuando se alzó su voz, diciendo a las fuerzas insurrectas: resistid, no perdais la esperanza, que en último término vendrá a plantearse en favor vuestro el conflicto internacional".

Dentro de este contexto, Labra distinguía dos tipos de tendencias: de un lado, la política presidencial contraria a la guerra, al menos en apariencia, y de otro, la corriente popular exaltada e impaciente, "que excitaba al Presidente de la República, porque veía que el término de la guerra civil y la imposibilidad de intervenir en Cuba estaban en la consagración y en el funcionamiento de la autonomía colonial". Realmente, desde el primer momento, Cuba y Puerto Rico habían tenido un interés de carácter internacional y ello por la posición misma de Cuba, por el tipo de política seguida al respecto, por las relaciones de América del Norte con América del Sur y por los principios consignados desde entonces por los tratadistas de Derecho Internacional. Por fin, España había proclamado la libertad completa de Cuba, lo cual suponía un auténtico avance en el marco del Derecho Colonial, que constituía un modelo desde el punto de vista de la consagración de las libertades de los pueblos coloniales, y en esta situación, Estados Unidos había intervenido, proclamando que lo hacía en defensa de la libertad. Ante esto, no cabía otra actitud que hacer una solemne declaración, apostillada por la contestación del Ministro de Ultramar, Moret, y por las intervenciones de Vázquez de Mella, Silvela y Canalejas: "En el instante en que corre un gravísimo peligro la suerte de nuestra tierra, en el momento mismo en que las Escuadras amenazan a La Habana y quizá han comenzado los cañonazos en la Isla de Puerto Rico, nosotros declaramos y queremos que se entienda que juramos por nuestro honor que estamos de una manera definitiva, irrevocable, incontestable, para siempre unidos con la suerte de España" (5).

Ciertamente, todo lo relacionado con las cuestiones relativas a la unidad de la patria se sobreponía al concepto de la integridad territorial, y, en este sentido, donde había triunfado la doctrina autonómica, se había mantenido la presencia

de la metrópoli, mientras que las emancipaciones realizadas de forma violenta habían tenido lugar en las colonias regidas por los sistemas asimilistas. Por otro lado, parecía imposible que España, con sus condiciones geográficas, con sus compromisos coloniales y con sus relaciones comerciales a escala mundial, pudiese vivir en un aislamiento que le desacreditaba ante el mundo civilizado (6).

En todo caso, estaba claro que dado el número y la cantidad de sus provincias ultramarinas, España no tenía medios propios suficientes para acudir en su defensa, por lo menos en la medida necesaria como para obtener un cierto éxito. Por ello, constituía un importante esfuerzo el intento por su parte, con una exigua población y en difíciles condiciones de carácter económico y hacendístico, de sostener una doble guerra colonial y, al mismo tiempo, otra tercera con un pueblo como el norteamericano, joven y lleno de recursos, a lo que había que añadir la lejanía del teatro de la lucha y el quebranto que necesariamente había producido en la metrópoli la duración y la crudeza de la insurrección cubana, reforzada por la acción del Gobierno de Estados Unidos.

Por esta razón, en el momento en que la insurrección se consideró completamente vencida, como consecuencia del efecto moral y directo del cambio de política del Gobierno español y de la subsiguiente instauración del régimen autonomista, se intensificaron los esfuerzos de Estados Unidos para hacer fracasar dicho régimen, difundiendo la idea de su escaso éxito, promoviendo algaradas y utilizando la amenaza de la intervención militar y el bloqueo, en una operación destinada a sufragar financieramente la autonomía, unido todo esto al alboroto de los periódicos norteamericanos y al lenguaje insultante de algunos de sus políticos. De todos modos, tras el ofrecimiento del apoyo

moral a la autonomía cubana, la acción de Estados Unidos se aceleró, porque se supo "que dentro de muy poco iban a reunirse en Madrid los Diputados de la Nación y en La Habana las Cámaras antillanas y que las Antillas iban a dar el más solemne testimonio de adhesión a la Patria" (7).

Además, para mantener un mínimo de fuerza moral en la intervención, hubiera sido necesario justificar que Estados Unidos no había tenido hasta entonces participación alguna en la guerra de Cuba, cosa que no podía sostenerse, dado que en aquella nación habían actuado libremente los Comités y las Agencias separatistas cubanas, y que de sus puertos habían salido absolutamente todas las expediciones armadas. Por otra parte, por debajo de las protestas desinteresadas y humanitarias del Gobierno norteamericano estaba "la aspiración fortísima de aumentar el territorio de la República con las Islas de Cuba y Puerto Rico, constantemente deseadas por aquel Gobierno desde la época de Jefferson y de Monroe, y cuyo porvenir señaló de modo bien manifiesto el Ministro Everett en 1852 al excusarse de cooperar a la acción de Inglaterra y Francia para garantizar la soberanía de España en aquellas Antillas" (8).

Con respecto a la promulgación de los Decretos Autonómicos en Noviembre de 1897, Labra recapituló las necesidades que habían conducido a su concesión y que supusieron un cambio en el modo de plantearse la cuestión ultramarina, tanto en las propias Antillas como en Estados Unidos y en algunas potencias europeas. En este sentido, se impuso el sufragio universal como base de la reforma autonómica, unido todo ello a la no ingerencia del Gobierno de la metrópoli en el nombramiento de los Ministros de los Gobiernos insulares y en la organización y disposición de los partidos antillanos junto con la dirección, por parte de los elementos históricos del autonomismo de Cuba y

Puerto Rico, de la política local ultramarina y del adelanto, lo más rápido posible, de las reformas. De este modo, dichas reformas constituían la consagración más palpable de las libertades ultramarinas, mediante las cuales las Antillas se habían colocado en condiciones de emitir su voto, de determinar su sentido y de afirmar sus deseos, y precisamente en ese momento, poderes extraños pretendían negar la soberanía española sobre aquellas tierras, "que por su historia, por sus intereses, por su posición geográfica y por sus compromisos internacionales sólo podían ser consideradas como parte esencialísima de la vieja y prestigiosa España". Ciertamente, esta situación contrastaba con la actitud de Norteamérica, que atentaba contra uno de los principios del Derecho Público contemporáneo, "al imponer por las armas su voluntad a otro Gobierno soberano, despreciando las calurosas protestas, que le había dirigido el Gobierno insular de Cuba, prescindiendo por completo del plebiscito cubano y reservándose el derecho definitivo de hacer la pacificación de la Isla y de declarar cuándo esta pacificación estaba hecha" (9).

Por otra parte, la escuadra del Atlántico, originariamente dirigida a Puerto Rico, se vió obligada, para hacer provisión de carbón, a entrar en Santiago de Cuba, en donde quedó atrapada como consecuencia del bloqueo establecido por las fuerzas navales norteamericanas. Días después se produjo el desembarco norteamericano (14-24 de Junio), que dió lugar a duros enfrentamientos en El Caney y en La Loma de San Juan (1 de Julio), puntos estratégicos para la defensa de Santiago. Tomadas estas posiciones por las fuerzas invasoras, se le planteó el mando español el dilema de salir a entablar combate naval contra fuerzas considerablemente superiores o exponerse a tener que dejar Santiago y la propia escuadra en manos del enemigo. Así, la heroica decisión del Almirante Cervera no pudo evitar el desastre (3 de Julio), mediante el cual la escuadra española fue

virtualmente aniquilada por la norteamericana del Almirante Sampson, en lo que se ha dado en llamar combate naval de Santiago, calificado por algunos de auténtico "tiro al blanco" (10). Poco después, capituló la plaza, y a fines de ese mismo mes de Julio fue ocupado Puerto Rico (11).

Por lo que respecta al comportamiento de los contendientes, puede decirse que constituyó un ejemplo de caballeridad, tanto por la disciplina y el heroísmo de los marinos y soldados españoles como por la postura del bando contrario. Ello contrastó vivamente con la actitud de la opinión pública española, que dió muestras de una gran ignorancia sobre la situación real de la guerra y de sus posibilidades de victoria, alentada en sus quiméricas ilusiones por una prensa irresponsable, que no concebía más disyuntiva que el deshonor o la acción bélica. Por otro lado, la clase política, presionada, quizá, por aquel ambiente, vaciló y no supo estar totalmente a la altura que las circunstancias requerían (12). Por último, el Tratado de París (10 de Diciembre de 1898) se encargó de consagrar, en lenguaje jurídico, la desmembración de los últimos jirones del Imperio Español en Ultramar, reconociendo la independencia de Cuba y cediendo a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en las Marianas (13).

Desde el primer momento, fue evidente la superioridad de las fuerzas navales estadounidenses sobre las españolas, y ello tanto desde el punto de vista del número y del tonelaje de sus unidades como del blindaje, artillería, velocidad y entrenamiento de las tripulaciones. Por otra parte, los barcos españoles estaban, en general, en malas condiciones de navegación y, en especial, los estacionados en Cuba. Puestas así las cosas, la primera operación naval de Estados Unidos fue el bloqueo de la isla de Cuba, seguida de las maniobras conducentes a cerrar el

paso y destruir la escuadra que, presumiblemente, España enviaría a las Antillas para proteger Cuba y Puerto Rico. Determinado el Gobierno español sobre el particular, se tomó la decisión de enviar la escuadra a Puerto Rico, con lo cual ese mismo día (7 de Abril) el Ministro de Marina ordenó al Almirante Cervera que partiera al día siguiente con rumbo a San Vicente, en las islas de Cabo Verde, lugar al que llegó el 14 de ese mes y en el que permaneció cerca de tres semanas en espera de las órdenes oportunas.

Por fin, el 29 de Abril la escuadra española se hizo a la mar con rumbo a las Antillas y llegó el 11 de Mayo frente a Port France, en la Martinica, donde Cervera pensaba abastecerse de carbón y de provisiones para poder llegar a Cuba o Puerto Rico. Sin embargo, las autoridades francesas le negaron el permiso para carbonear, ante lo cual el Almirante decidió dirigirse a Curacao, a donde llegó tres días después (14 de Mayo). Realizadas las operaciones de carboneo y de aprovisionamiento, en la noche del 15 la escuadra reanudó su marcha con destino a Santiago de Cuba, a donde arribó al amanecer del día 19 tras burlar la vigilancia de las fuerzas navales norteamericanas. Por su parte, el 11 de Mayo buques estadounidenses habían atacado Cienfuegos y Cárdenas al objeto de proteger un desembarco de ayuda a los insurrectos, y el 12 había sido bombardeado San Juan de Puerto Rico (14).

A su llegada al puerto cubano Cervera se encontró con que no contaba con el carbón y las provisiones necesarias, con lo cual la escuadra quedó totalmente paralizada y en la disyuntiva de salir para Puerto Rico con el fin de abastecerse adecuadamente o mantenerse en la bahía de Santiago para contribuir a la defensa de la ciudad. En cualquier caso, ello implicaba, o ser destruida por las fuerzas navales norteamericanas que bloqueaban el puerto,

o caer en manos de Estados Unidos, cuando la plaza se rindiese a las fuerzas terrestres estadounidenses. Así, pues, tras la llegada de Schley el 25 de Mayo, reforzada por la aparición ante Santiago de Cuba de la escuadra del Almirante Sampson, el bloqueo quedó establecido de forma definitiva el día 26. Además, la situación se agravó poco más tarde, al provocar los norteamericanos (3 de Junio) el hundimiento del carbonero "Merrimac" en el canal del puerto, con el fin de cegarlo, medida que fue acompañada de la orden de Sampson de iluminar todas las noches la entrada de aquél, con lo cual desapareció cualquier esperanza de sacar la escuadra sin ser vista (15).

Al mismo tiempo, en España proseguía la actividad política parlamentaria, y en una intervención de 3 de Junio, Labra puso de manifiesto el tema de la internacionalización del problema cubano. En este aspecto, la cuestión internacional era fundamental, tanto en las Antillas como en Filipinas, y, por otra parte, las circunstancias contemporáneas le habían venido a dar una excepcional importancia y un relieve extraordinario. En cualquier caso, en esta materia se debía tener en cuenta la voz y el sentido de los pueblos implicados en el asunto y, en especial, de Inglaterra, Francia y Estados Unidos (16).

Por otro lado, los preparativos militares norteamericanos para la invasión y conquista de Cuba se habían iniciado a fines del mes de Abril, con el nombramiento del General Shafter como Comandante en Jefe de las fuerzas terrestres que debían desembarcar en la costa meridional de la isla y tratar de unirse a las insurrectas, mandadas por Máximo Gómez. La situación militar en el interior de Cuba no ofrecía, por contraposición, la misma correlación de fuerzas a favor de Estados Unidos que en el mar, por lo que las tropas norteamericanas estaban a la expectativa de que se consolidase el

bloqueo establecido por la Marina. Además, la presencia en la escuadra española en Santiago reforzaba la defensa de la plaza, pieza clave en la estrategia norteamericana, al tiempo que la concentración naval estadounidense ante dicha ciudad redundaba en perjuicio del bloqueo mismo al producir una evidente distracción de fuerzas. Ello motivó una anticipación del previsto desembarco, por parte de Estados Unidos, y así, tras varias órdenes y contraórdenes y ante la llegada de la escuadra española a Santiago, Shafter recibió instrucciones (31 de Mayo) para desembarcar en las proximidades de la ciudad y tomar dicha guarnición. Después de algunos conatos de desembarco en Punta Cabrera y en Aguadores, el 6 de Junio fuerzas norteamericanas tomaron posesión de la bahía exterior de Guantánamo, y puestos de acuerdo Shafter, el Almirante Sampson y Calixto García, que mandaba las fuerzas insurrectas de la zona, el día 22 se inició la operación definitiva, ultimada entre los días 24 y 26 con la toma de la pequeña aldea de Daiquiri, a unas dieciseis millas al Este de Santiago.

A mayor abundamiento, la cuestión de la internacionalización del problema ultramarino volvió a ser planteada por Labra en el Parlamento, extremo este que fue contestado con la correspondiente argumentación por el Presidente del Consejo de Ministros, Sagasta. En relación con ello, aparte de la actitud, verdaderamente encomiable, del propio pueblo español y del heroísmo de sus soldados, no se podía perder de vista que el secreto del compromiso mantenido al otro lado del Atlántico se encontraba en las relaciones internacionales, que marcaban la pauta, a través de la cual debían organizarse las normas de actuación al respecto (17).

Envueltas en graves problemas de suministro y comunicaciones y con importantes dificultades en el despliegue de

los movimientos estratégicos, debidas a la estructura y disposición del terreno y de la vegetación, por fin, el 30 de Junio, Shafter desembarcó en Siboney y estableció su puesto de mando cerca de El Caney (18). Las operaciones militares contra la plaza de Santiago, dada la inesperada resistencia ofrecida por las tropas españolas, tuvieron un sangriento prólogo (1 de Julio) en el ataque y defensa del fuerte de El Caney y de la colina de San Juan, en el primero de cuyos lugares halló heroica muerte el jefe de la posición, Coronel Vara del Rey. Al final del día, todas las defensas españolas exteriores a la ciudad estaban en poder de los norteamericanos, que establecieron sobre Santiago un severo bloqueo marítimo y terrestre, lo que aceleró el momento final de los buques de Cervera, quien tras crispadas discusiones con sus colegas militares optó por la salida de la escuadra, lo que tuvo lugar a las nueve de la mañana del 3 de Julio: cuatro horas después, estaba totalmente destruida (19).

A pesar de ello, entre los días 2 y 3 de Julio, Shafter, atacado por la malaria y por el calor, dudó entre dirigir un ataque final o retirarse a Siboney, al tiempo que le llegaba la noticia de la destrucción de la escuadra de Cervera, lo que le decidió a mantener el sitio. De esta forma, tras la victoria de Sampson en aguas de Santiago, Shafter quedó con las manos libres para tomar la plaza por tierra. Las dos semanas siguientes se pasaron en consultas entre los jefes militares y las autoridades políticas de uno y otro bando, encaminadas a poner término a la situación de la mejor manera posible, y así se estableció el 14 de Julio las bases sobre la capitulación de la plaza de Santiago y de las tropas españolas de la provincia, capitulación que fue firmada dos días después (20).

En ese mismo mes de Julio de 1898, Rafael María de Labra escribió una serie de artículos en el diario barcelonés "La

Publicidad", en los que analizó una serie de aspectos relativos a la internacionalización del problema cubano. Para Labra, toda cuestión colonial tenía, en principio, implicaciones de carácter internacional, de tal forma que se hacía absolutamente imposible considerar y resolver los problemas antillanos como una mera cuestión de gobierno interior de España. Sin embargo, era preciso reconocer la predisposición española a vivir fuera del mundo internacional, de cuyos intereses y tendencias no se había preocupado casi ningún político ni publicista. Por eso, las circunstancias por las que atravesaba España se debían al aislamiento internacional en que había vivido, a la falta de acercamiento político y económico, respecto de los grandes pueblos europeos y americanos, a lo tardía, que había sido la puesta en marcha de las reformas ultramarinas y a la no normalización, a tiempo, de las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en puntos tales como la naturalización estadounidense de los cubanos y los expedientes de indemnización a ciudadanos norteamericanos, como consecuencia de la aplicación del arancel aduanero de Cuba o de los accidentes provocados por la guerra misma (21).

Por su parte, en su aspecto militar el caso de Puerto Rico revistió un interés mucho más limitado. Como ya se indicó anteriormente, el puerto de San Juan fue bombardeado el 12 de Mayo al creerse que se encontraba allí la escuadra de Cervera, y desestimado por difundido un primer proyecto de desembarco en las cercanías de la capital, éste tuvo lugar, finalmente, el 25 de Julio en la costa de Guánica, cercana a Ponce, al mando del General Nelson A. Miles, quién tomó esta ciudad el 27, ayudado por el Almirante Higgison (22).

Así, pues, ante el desarrollo de los acontecimientos, el Gobierno español, considerando que la guerra estaba perdida,

solicitó (18 de Julio) la mediación del Gobierno francés, a fin de obtener una suspensión de hostilidades, previa a las negociaciones de paz. A tal efecto, el 26 de Julio el Embajador francés en Washington, Mr. Jules Cambon, se entrevistó con el Secretario de Estado norteamericano, Day, quien a su vez lo hizo con el Presidente McKinley. Las bases sobre las cuales se asentaba el Mensaje entregado a McKinley se concretaban en una aceptación de la solución que los norteamericanos quisieran dar para Cuba (independencia, protectorado estadounidense o anexión a Estados Unidos) con exclusión de cualquier referencia a Puerto Rico y las Filipinas.

Cuatro días después (30 de Julio), se produjo la respuesta norteamericana, por la cual el Gobierno de Estados Unidos expuso las condiciones leoninas, bajo las cuales se podía acordar la paz. La citada respuesta, entregada a Mr. Cambon, tras explicar la conducta del Gobierno norteamericano durante el periodo anterior a la guerra, enumeraba las tres condiciones siguientes: renuncia por España a toda pretensión de su soberanía o de sus derechos sobre Cuba con inmediata evacuación de la isla; reserva de Estados Unidos sobre una eventual petición de indemnización pecuniaria en relación con las pérdidas y gastos ocasionados por la guerra y con las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses, motivadas por la última insurrección cubana, con compensación territorial a base de Puerto Rico y de alguna isla española del Océano Pacífico, y ocupación de Manila en espera de un Tratado de Paz que determinara la situación de las islas Filipinas.

Los esfuerzos del representante francés por atenuar las exigencias estadounidenses relativas a Puerto Rico y Filipinas resultaron infructuosos, a pesar de lo cual el Gobierno español no se resignó al respecto e intentó obtener condiciones menos

duras (entrevista del Embajador Cambon con McKinley y con su Secretario de Estado, Mr. Day, de 4 de Agosto). Días después (10 de Agosto), Mr. Cambon entregó al Presidente estadounidense una nota del Gobierno español, por la cual éste aceptaba las condiciones exigidas por el Gobierno de Estados Unidos. Tras esto se decidió la firma inmediata (la firma tuvo lugar el día 14) de un protocolo, que debía reproducir las condiciones propuestas a España, con fijación de los plazos en que se nombrarían los plenipotenciarios encargados de negociar la paz en París y de las comisiones que tenían que determinar los detalles de la evacuación de Cuba y Puerto Rico.

De esta forma, aprovechándose de su situación de fuerza, Estados Unidos se negó a aceptar la suspensión de hostilidades, mientras que España no admitiera las dos terceras partes de las proposiciones que el Gobierno norteamericano se proponía presentar en la Conferencia de Paz, motivo por el cual tuvo que firmarse el Protocolo de Washington cuando aun no había capitulado Manila, cuando la bandera española todavía ondeaba en el resto del archipiélago, así como en Puerto Rico, y cuando la isla de Cuba seguía, en su mayor parte, guarnecida por tropas españolas.

Autorizado el Gobierno por las Cortes para negociar la paz, fue nombrada la comisión pertinente encargada de consumar el proceso, que se inició en la capital francesa el 1 de Octubre de 1898 y cuyas deliberaciones se prolongaron hasta los primeros días del mes de Diciembre para terminar el 10 con la firma del Tratado de Paz, llamado de París. La delegación española estuvo presidida por don Eugenio Montero Ríos y compuesta por el Ex-Ministro don Buenaventura de Abárzuza, por el Diputado a Cortes y Magistrado del Tribunal Supremo don José de Garnica, por el Ministro de España en Bruselas don Wenceslao Ramírez de

Villaurrutia, por el General de División don Rafael Cerero y como Secretario por el Ministro Plenipotenciario don Emilio de Ojeda.

Por su parte, la comisión norteamericana, bajo la presidencia del Ex-Secretario de Estado, William R. Day, quedó compuesta por Cushman K. Davis, ferviente imperialista, Senador por Minnesota y Presidente del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores; William P. Frye, de acusada tendencia expansionista, Senador por Maine y miembro del mismo Comité; George Gray, experto abogado, Senador por Delaware y único demócrata de postura opuesta a la expansión, y por Mr. Whitelaw Reid, destacado portavoz del imperialismo, Ex-Ministro de Estados Unidos en París y director y propietario del "The New York Tribune" (23), actuando como Secretario el diplomático John Basset Moore. Evidentemente, el peso de la comisión estadounidense se inclinaba, de manera bastante clara, en favor del creciente imperialismo norteamericano.

En realidad, la paz que ahora se iba a firmar venía precedida y fuertemente condicionada por la capitulación político-militar y por la firma del preliminar Protocolo de Washington, que obligó a España a cargar con la Deuda de Cuba y a ceder las islas Filipinas, previa compensación de veinte millones de dólares. A lo largo del mes de Octubre, se forcejeó en torno a la redacción de los artículos relativos a Cuba y Puerto Rico, en el sentido de la renuncia por España a su soberanía sobre dichos territorios, discusión en la cual Estados Unidos mantuvo una postura caracterizada por la intransigencia.

El 31 de Octubre la delegación norteamericana presentó, con gran sorpresa de la española, una proposición, en la que pedía la cesión a Estados Unidos de todo el archipiélago filipino, lo que produjo ciertas divergencias entre sus propios

miembros. La cuestión se prolongó a lo largo del mes de Noviembre y terminó el día 21 con un auténtico "ultimatum" sobre el particular, por parte norteamericana. Tres días más después, se produjo la respuesta española, que intentó introducir algunas alternativas. Sin embargo, dada la inflexibilidad estadounidense, se impuso implacablemente la fuerza del vencedor y con ello los términos mismos del "ultimatum" ante la disyuntiva de aceptarlo o de tener que romper las negociaciones. Así, pues, tras estas azarosas eventualidades se llegó a la firma del Tratado de Paz (10 de Diciembre de 1898), por el cual España renunciaba a todo derecho sobre Cuba y cedía a Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam en las Marianas y el archipiélago filipino, contra el pago de veinte millones de dólares (24). Firmada la paz, el 1 de Enero de 1899 celebró en La Habana la correspondiente transmisión de poderes en presencia de los Generales Adolfo Jiménez Castellanos, por parte española, y Brooke, por parte norteamericana (25).

Y tras el Desastre, la hora de las reflexiones en torno a los hechos acaecidos (26). Ciertamente, la marcha de los acontecimientos en el mundo ultramarino se vió alterada por completo con motivo de la guerra de Estados Unidos contra España. Por otra parte, el verdadero fundamento de ésta, independientemente del propósito del Gobierno norteamericano de apoderarse o no de Cuba, fue la expulsión de España del Nuevo Mundo y la afirmación de la hegemonía estadounidense en toda América frente a Europa. En este orden de cosas, se enmarcó el interés norteamericano sobre Cuba, presente desde los tiempos de Jefferson y Adams, interés proclamado por el Gobierno de Washington, al mismo tiempo que su firme propósito de adquirir la isla, puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, mediante sucesivos ofrecimientos de compra. Esta actitud de Estados Unidos arrancó fundamentalmente de la época de las presidencias de Polk,

Taylor, Fillmore y Buchanan, a partir de cuyo momento el expansionismo norteamericano fue desarrollándose paulatinamente desde la nota de Everett (1852) con motivo de la propuesta de Inglaterra y Francia para garantizar la soberanía española en las Antillas, hasta la exposición de Blaine al inaugurar las sesiones del Congreso Panamericano (1889), pasando por la nota de Olney (1895) provocada por la discusión del conflicto anglovenezolano.

En realidad, los pretextos aducidos por el Gobierno estadounidense para intervenir en Cuba estuvieron completamente fuera de las prácticas internacionales de los últimos tiempos, de tal forma que, aun teniendo en cuenta la protesta humanitaria y conviniendo en que el Derecho Internacional contemporáneo autorizase la intervención por causa del Derecho de Gentes y de la civilización universal, había que advertir que ni el estado político y social de Cuba, después de los Decretos Autonómicos de 28 de Noviembre de 1897, era tal, que permitiera decir que las Antillas no disfrutaban de la plenitud de las libertades modernas, ni el modo y manera de haberse decretado la intervención por del Congreso de Estados Unidos, por su propia y exclusiva cuenta, sin mediar la opinión de las grandes naciones, era compatible con el vigente Derecho Internacional Público.

En cualquier caso, la arrogancia y prepotencia con que actuó el Gabinete de Washington quedaron comprobadas por hechos tales como el Protocolo de Agosto de 1898, que precedió al Tratado de Paz de París de 10 de Diciembre de aquel mismo año; la ocupación y posesión de Puerto Rico, prescindiendo del plebiscito y de toda otra forma jurídica como consecuencia natural de la guerra; la adquisición de Filipinas por derecho de conquista y contra el Protocolo antes aludido, y los Decretos de organización política de Cuba y Puerto Rico, dictados por el Gobierno de Estados Unidos. No obstante, esas situaciones no se hubieran

producido a no ser por la insurrección separatista y por la especial postura de Europa, que llevó a ésta a no ocuparse de los asuntos antillanos y a favorecer el aislamiento inglés bajo el beneplácito de Estados Unidos.

De todas formas, la promulgación de los Decretos de reforma colonial hubiera producido la terminación de la guerra separatista cubana, reanimada como consecuencia de la actitud del Gobierno norteamericano, que poco antes había expresado su creencia en que con la reforma autonomista se produciría la paz. Además, Estados Unidos no quiso o no pudo impedir que en su propio territorio se organizara y protegiese, públicamente, la rebelión de la Gran Antilla, unido todo ello a la aprobación que obtuvo de Europa para intervenir en los asuntos de Cuba, motivada, en buena parte, por la resistencia de Gran Bretaña contra cualquier gestión que coartase la libertad de acción de Norteamérica (27).

En relación con el Tratado de Paz de París, éste supuso para España una verdadera expoliación, patente en la evidente falsedad aducida por Estados Unidos como motivo de la guerra, en su resistencia a aceptar un arbitraje sobre el "Maine" y en el rechazo a asumir la Deuda hispanocubana. Con respecto a Filipinas, fue la afirmación pura y simple del derecho de conquista. En el caso de Puerto Rico estableció la resurrección de la teoría, según la cual el vencedor compensaba la indemnización que quería cobrar al vencido, con el dominio sobre territorios de su pertenencia. Para Cuba constituyó la negación del fin declarado en la guerra, ya que el Tratado de Paz consignó el abandono de la isla por España y su ocupación sin fin por Estados Unidos (28). En última instancia, la pérdida del Imperio ultramarino en 1898 tuvo para España una gran importancia material y económica, ya que dicho Imperio todavía era muy

extenso y valioso, aun después de realizarse la emancipación de los antiguos reinos españoles de América.

Sin embargo, en 1898 causó más impresión la manera de verificarse aquella pérdida que la pérdida misma, cuyo alcance aun no se había apreciado suficientemente. Además, a ello había que añadir dos importantes agravantes desde el punto de vista del Derecho Internacional, contenidos en el articulado del Tratado de Paz de París. Por una parte, únicamente los peninsulares que residían en las antiguas provincias de Ultramar tenían derecho a optar entre la nacionalidad española y la nueva que se creara en ellas, lo cual con ser relativamente sencillo en el caso de Puerto Rico y Filipinas, que entraban en el dominio de Estados Unidos, no lo era tanto en el de Cuba, que quedaba indeterminada al no constituirse en Estado independiente, ni entrar a formar parte de Norteamérica, cuyo Gobierno solamente afirmaba la posesión momentánea del territorio cubano sin comprometerse a otra cosa que a garantizar allí, mientras durase la ocupación, la vida y las haciendas de las personas, conforme a las reglas generales del Derecho de Gentes. Por otro lado, debía consignarse la resistencia absoluta de Estados Unidos a aceptar la más mínima responsabilidad de las deudas y obligaciones de España por causa de sus provincias ultramarinas, con lo cual aquélla tuvo que tomar sobre sí, de un modo total, las cargas de la guerra y las deudas anteriores de Cuba y Filipinas (29).

Respecto de los ámbitos políticos, en general, y de los gubernamentales, en particular, se extendió un cierto grado de remordimiento, causado por la conciencia de que buena parte de las últimas desgracias se debían a errores fundamentales, a la negligencia o a la parsimonia que en relación con la política ultramarina y con la internacional se habían evidenciado en los últimos años en las esferas superiores y en la alta dirección de

la sociedad española, sin decir nada de la responsabilidad de la prensa política especialmente de la madrileña y de la barcelonesa.

En otro orden de cosas, los territorios de Ultramar no sólo habían reportado ventajas materiales a la metrópoli, sino que habían supuesto un trasvase demográfico considerable procedente de la Península, contrarrestado por el influjo que, sobre todo, ciertas regiones de España habían ejercido sobre la vida económica de aquellas lejanas tierras. Además, en toda la América hispana independiente, el elemento español, a pesar del peso de las emigraciones italiana y francesa, tuvo una importancia de primer orden, tanto en el aspecto económico como en el político, y esta masa había estimado que la posesión de Cuba y Puerto Rico por España constituía la demostración más visible y concluyente de los títulos de la vieja nación descubridora y colonizadora del Nuevo Mundo. No obstante, en relación con esta cuestión, no se tuvo la suficiente visión como para no retrasar, por parte del Gobierno español, el reconocimiento oficial de la independencia de las Repúblicas hispanoamericanas y desarrollar con toda energía una política expansiva y radical en las Antillas, que por analogía con el sentido dominante en la América española después de la Emancipación habría asegurado no sólo la aproximación de la metrópoli a sus antiguos reinos bajo el influjo de las nuevas ideas y de las nuevas tendencias, sino un predominio de orden moral sobre aquellos (30).

En otro orden de cosas, perjudicó ostensiblemente las posibilidades de solución de los problemas la resistencia de algunos sectores (Asturias y Cataluña) a la introducción de reformas en Ultramar, especialmente en los últimos tiempos de la presencia española en aquellas tierras. Dichos sectores,

aferrados al antiguo sistema colonial e identificados con sus errores y con sus intransigencias, habían puesto de manifiesto la incompatibilidad del progreso y de la existencia de las libertades contemporáneas con su presencia y con su labor en las Antillas. Frente a ello, los autonomistas, fieles a sus compromisos y a sus declaraciones, perdieron posiciones políticas y representación social además de haber soportado la amenaza y la calumnia de ser considerados "traidores y filibusteros".

Por otra parte, la opinión pública española había tratado, en general, con bastante indiferencia el hecho de la pérdida de las provincias ultramarinas, y esto contrastaba ciertamente con el patriotismo de los últimos años y con la intransigencia que habían mostrado los elementos influyentes del país con las opiniones expansivas en materia colonial, unido a la protesta de sacrificar "hasta el último hombre y la última peseta" para la conservación de las Antillas (31).

Además, la cuestión de Cuba debió haberse sometido al concierto internacional, ya que aun en el caso de que la solución no hubiese satisfecho enteramente el derecho de España y las conveniencias de la Gran Antilla, lo más seguro era que el problema se hubiera resuelto, bien por medio de la concesión de la autonomía cubana, garantizada por el arbitraje internacional, sobre todo en el supuesto de que el fin de la guerra con Estados Unidos no hubiera permitido recabar el simple mantenimiento de la situación política creada por los Decretos de Noviembre de 1897, o por la neutralización de la isla bajo el patronato de las grandes potencias europeas, de España, de Estados Unidos y de las Repúblicas hispanoamericanas. Por esta razón, si se hubiesen tomado las medidas adecuadas, "España todavía hubiera podido mantener en el Nuevo Mundo, con el apoyo universal, la gloriosa bandera de los descubridores de América, arraigando en el Mar de

las Antillas las instituciones de 1897 con el sentido evolutivo de la gran Colonización española bajo la influencia internacional y dentro de las corrientes novísimas colonizadoras".

En relación con ello, era necesario advertir que no se podía valorar la colonización española por las desviaciones de los siglos XVII y XVIII o por la reacción acaecida entre 1825 y la última etapa de las reformas. Antes al contrario, la empresa colonizadora debía contemplarse a la luz de la Recopilación de Indias, principalmente, en lo relativo al fin de la colonización misma, a la relación jurídica de los reinos de Castilla y América y a la organización económica de ésta. "España entonces puso hasta donde era posible, por cima del interés material, el interés moral del empeño colonizador; consagró la acción directa del Estado para la civilización del Nuevo Mundo; afirmó mediante leyes la identidad de los derechos civiles y políticos de los españoles de uno y otro Hemisferio; proclamó la asimilación progresiva de los indios y reconoció la nota local por medio de las ordenanzas y de la compilación de las leyes originarias, por la extensión de los Ayuntamientos y en fin por la consagración de los Concilios provinciales y regionales". Así, pues, la principal labor de España tenía que haber consistido en armonizar la obra de los tiempos pasados con las exigencias del presente y en determinar con energía la reforma de todo lo anticuado y anacrónico "con la convicción de que la mayor grandeza de España en el curso de su brillante Historia había correspondido a la identificación de este país con las ideas madres de la época, en la cual aquella grandeza se había manifestado" (32).

Por otra parte, la presencia de España en las Antillas no estribó únicamente en su derecho ni en su fuerza y poderío, sino en la serie de negociaciones que la garantizaron por voluntad de Francia y Gran Bretaña y aun del propio Estados

Unidos. De acuerdo con ello, España debía haber aprovechado esta oportunidad para reforzar su acción en el mundo, "que descubrieron sus asombrosos navegantes y que con gran sentido prepararon para espléndida vida sus grandes colonizadores". No obstante, todo esto pasaba por la identificación de Europa con España y por la convicción, por parte europea, de que su interés en América estaba representado por la bandera española, pero en 1898 Europa se desinteresó de la cuestión antillana y España sucumbió. Realmente, el hecho tenía una importancia mucho mayor que el de un simple incidente histórico, de tal forma que España en la guerra de 1898, más que sus intereses privativos representó la causa de Europa y los altos principios del Derecho Internacional. Sin embargo, Estados Unidos, que se había opuesto a que Europa pudiera adquirir territorios en América o influir políticamente de alguna manera en ella, pretendió una especie de Derecho Internacional especial para su uso y estableció su derecho a impedir todo tipo de intervenciones extrañas por su propia decisión, como si se tratara de algo que le afectase específicamente y exclusivamente. En cualquier caso, la pérdida de las provincias ultramarinas a fines del siglo XIX no se debió tan sólo al orden puramente colonial, sino a un conjunto de causas morales y políticas, que radicaron en la Península y que contribuyeron a crear un malestar profundo en la metrópoli, y ante esto se imponía una rectificación, a fin de que España se reorganizase, apartándose de la actitud de conmiseración con que la consideraba Europa (33).

Cuestión aparte fue la de la general ignorancia con que se abordó la guerra con Estados Unidos, a pesar de que se alzara alguna que otra voz para denunciar lo inverosímil de la empresa. Sin embargo, la protesta pasó inadvertida y quedó acallada "por la ignorancia general y sofocada por la vulgaridad pretenciosa y por la patriotería resonante, que a todas horas hablaba de la

superioridad de nuestra pobre y renaciente Escuadra y del valor que monopolizaban nuestros soldados". En este contexto, casi nadie valoró adecuadamente la complicación internacional de la guerra y la evidencia de que el enfrentamiento bélico tendría que realizarse a miles de leguas de la Península, a muy poca distancia de las costas norteamericanas y frente a un país que ocupaba una extensión territorial análoga a la de Europa y que se encontraba lleno de entusiasmo y de ambiciones.

Por lo que respecta al aislamiento, éste supuso una falta de atención a las recomendaciones del mundo contemporáneo sobre la adopción de medidas conducentes a introducir en la vida política y social interior y en la organización colonial las reformas necesarias. Además, estas recomendaciones tenían tanto más valor, por cuanto se basaban en la marcha general de la civilización y en la experiencia de naciones que ya se habían enfrentado anteriormente con este tipo de problemas. Por otro lado, el citado aislamiento se mantuvo también sobre la base de la desatención de los intereses españoles fuera del territorio peninsular, lo que produjo una situación de indefensión en caso de guerra, que no podía dominarse con los escasos recursos con que contaba España, con la invocación de sus pasadas glorias, con el supuesto de monopolizar el valor y el heroísmo "o con la candorosa creencia, de que todos los demás pueblos por admiración a nuestro pasado o por consideración a lo desigual de la lucha habrían de comprometerse en ella en beneficio de las ideas e instituciones, que España por su libérrima y absoluta voluntad se había dado" (34).

En cualquier caso, el problema internacional del aislamiento se convirtió en uno de los ejes fundamentales de la cuestión antillana en su triple configuración de aislamiento en el mundo, de aislamiento en relación con los Gobiernos

extranjeros y de aislamiento con respecto a la opinión pública internacional, máxime si se tenía en cuenta la influencia que tuvo en este tema la política de Estados Unidos y la postura europea, que desde el primer tercio del siglo XIX se había mostrado propicia a considerar la cuestión de la soberanía de España en las Antillas como algo de interés para la política mundial (35).

Así, pues, la falta de una política internacional y el aislamiento en que había vivido España durante los últimos años coadyuvaron al Desastre, respecto del cual la cuestión colonial fue solo un dato, aunque muy importante. En todo caso, para calibrar adecuadamente el alcance de la guerra sostenida entre España y Estados Unidos y su resultado, era preciso considerar los supuestos equivocados, sobre los que se había basado la posición española. Dichos supuestos fueron fundamentalmente cuatro: 1º) Estados Unidos carecía de medios políticos y militares para sostener una guerra a pocas horas de sus propia casa; 2º) El dominio de España en sus provincias de Ultramar y, señaladamente, en las Antillas se sostenía por los exclusivos medios españoles; 3º) En caso de un conflicto, los Gobiernos europeos apoyarían la causa de España, combatiendo las arrogancias, ambiciones e injusticias de Estados Unidos, y 4º) La terminación de la guerra, si por casualidad no intervenían en ella las demás potencias, se debería negociar mediante el trato directo y exclusivo entre España y la República norteamericana.

De cualquier forma, estos cuatro errores se habrían evitado si el Gobierno español hubiera desarrollado una vida política internacional más intensa, si no se hubiesen desdeñado los estudios de esta índole y si no hubiera abundado en escuelas, prensa, libros e informaciones una gran exageración patriótica, que trataba de explicar la Historia, el carácter y el poder de

España con un valor de exclusivismo (36). Por otra parte, era preciso señalar que los motivos alegados por el Gobierno norteamericano para justificar su guerra con España eran falsos, así como su interpretación y aplicación del principio de intervención internacional. Así, según las tendencias del Derecho Internacional contemporáneo, tres eran los puntos que debían considerarse en este aspecto: 1º) La definición del concepto de nación; 2º) La afirmación de la sociedad de las naciones, y 3º) La colocación "bajo la garantía del concierto general del Mundo culto y por encima de las soberanías particulares y de las diferencias de religión, lengua, forma de gobierno e Historia, de los intereses fundamentales de la Civilización y de los derechos primarios y naturales del hombre" (37).

De acuerdo con ello, la causa de la reciente guerra de Estados Unidos con España residió en el "expansionismo americano", por eso, frente a lo que los norteamericanos habían propagado, era necesario afirmar una y otra vez, que no existió un motivo racional, ni jurídico y menos amparado por las prácticas contemporáneas, que justificase la intervención estadounidense en Cuba sobre todo después de los Decretos Autonómicos de Noviembre de 1897, máxime, al ser realizada con las pretensiones exclusivistas y arrogantes de Estados Unidos y con su desdén con respecto al concurso de los Gobiernos europeos (38).

N O T A S.

- (1) Para un análisis de los motivos invocados por el Gobierno norteamericano para justificar su intervención en Cuba y su declaración de guerra a España véase, FLACK, HORACE EDGARD: Spanish American Diplomatic Relations Preceding the War of 1898 (Baltimore 1906). El desarrollo de los acontecimientos desde un punto de vista oficial puede seguirse respectivamente en Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1898 (Washington 1901) y en Libro Rojo Español (Negociaciones Diplomáticas desde el Principio de la Guerra con los Estados Unidos hasta la Firma del Protocolo de Washington) (Madrid 1898). Véase también Disposiciones de España y de los Estados Unidos Referentes a la Guerra y Declaraciones de Neutralidad (España, Ministerio de Estado) (Madrid 1898).
- (2) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), pág. 640.
- (3) Ibid., págs. 642-644.
- (4) Ibid., págs. 646-648.
- (5) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 10 de Mayo de 1898.
- (6) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 396-397; 400 y 403.
- (7) Ibid., págs. 405-410; 413 y 415.
- (8) Ibid., págs. 424-425 y 427.
- (9) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 11 de Mayo de 1898.
- (10) Varias fueron las obras que se escribieron acerca de los acontecimientos bélicos, unas desde el punto de vista americano, otras desde el lado español, tales como TITHERINGTON, R.H.: A History of the Spanish-American War (New York 1900); ALGER, R.A.: The Spanish American War (New York 1900); LODGE, H.C.: The War with Spain (New York-London s.a.); WILCOX, M.: A Short History of the War with Spain (New York 1898); BRIDE, CHARLES: La Guerre Hispano-Américaine de 1898 (Paris 1899); EUR, L.: Etude sur la Guerre Hispano-Américaine de 1898 (Paris 1899); MORRIS, CHARLES: The War with Spain (Philadelphia 1899); BLACK ATKINS, JOHN: The War in Cuba (London 1899); FERRARA ORESTES: The Last Spanish War (London 1897) o ALVAREZ INSUA, WALDO: Finis: Ultimos Dias de España en Cuba (Madrid 1901); LLANOS, ADOLFO: La Guerra con los Estados Unidos (La Habana 1897) y FUENTE Y MONDEJAR, MANUEL DE LA: España y los Estados Unidos (Madrid 1896). De la extensa bibliografía sobre el tema pueden tomarse como ejemplo CHADWICK, FRENCH ENSOR: The Relations of the United States and Spain: The Spanish-American War (New York 1968), importante fuente documental dotada de objetividad y de ponderación de

juicios, y CONCAS, VICTOR: La Escuadra del Almirante Cervera (La Habana 1916).

- (11) Acerca de la intervención en Puerto Rico véase, RIVERO MENDEZ, ANGEL: Crónica de la Guerra Hispano-Americana en Puerto Rico (Madrid 1932).
- (12) Sobre estas cuestiones véase, DELGADO, JAIME: España ante el 98, "Boletín Americanista" (Barcelona), VII-XI, núm. 19-27 (1965-1969), págs. 47-58.
- (13) Para una visión del desarrollo de las negociaciones véase, MONTERO RIOS, EUGENIO: El Tratado de París (Madrid 1904).
- (14) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 622-623.
- (15) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), págs. 93-114 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. III, págs. 108-112.
- (16) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Junio de 1898.
- (17) Ibid., 21 de Junio de 1898.
- (18) Para una visión de las operaciones militares del ejército norteamericano puede consultarse COSMAS GRAHAM, A.: An Army for Empire. The United States Army in the Spanish-American War (Columbia 1971).
- (19) Las operaciones navales, así como los avatares que las rodearon y otros pormenores relacionados con estos hechos pueden seguirse en CERVERA Y TOPETE, PASCUAL: Guerra Hispano-Americana. Colección de Documentos Referentes a la Escuadra de Operaciones de las Antillas (Madrid 1904).
- (20) Para el desarrollo de los acontecimientos y desde un punto de vista actual pueden consultarse las siguientes obras: MARTINEZ ARANGO, FELIPE: Cronología Crítica de la Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana (La Habana 1958); CHIDSEY, DONALD BARR: La Guerra Hispano-Americana, 1896-1898 (Barcelona 1973); TRASK, DAVID F.: The War with Spain in 1898 (New York 1981) y O'TOOLE, GEORGE: The Spanish War: An American Epic, 1898 (New York 1984). Véase también, SERRANO, CARLOS: Final del Imperio: España, 1895-1898 (Madrid 1984) y VALADES, JOSE C.: Breve Historia de la Guerra con los Estados Unidos (México 1980).
- (21) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 541-543.
- (22) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 129-139 y 147 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 114-122 y 130-137.
- (23) El desarrollo de los acontecimientos desde el punto de vista de Reid puede seguirse en REID, WAITELAW: Marking Peace with Spain. The Diary of Whitelaw Reid. September-December, 1898 (Austin 1965).

- (24) Véase, Apéndice Documental II. Apéndice núm. 34.
- (25) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Ob. cit., págs. 724-726 y El Tratado de París de 1898 entre España y los Estados Unidos (Madrid 1899), págs. 2-12; AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 149; 159-170 y 188-190 y FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ob. cit., Vol. III, págs. 150-156; 167-171 y 174. Asimismo, tanto para el desarrollo de los acontecimientos bélicos, como para el de las negociaciones conducentes a la firma del Tratado de Paz véanse, FORNER, PHILIP SHELDEN: La Guerra Hispano-Cubano-Americana y el Nacimiento del Imperialismo Norteamericano, 1895-1902 (Madrid 1975), Vol. II, págs. 7-163 y THOMAS, HUGH: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970) (Barcelona-México 1973), Vol. I, págs. 497-528.
- (26) Un análisis del Desastre puede seguirse en PEREZ DELGADO, RAFAEL: El 98: Año del Desastre (Madrid 1976). Para una repercusión de los acontecimientos desde el lado americano véase, ALLENDESALAZAR, JOSE MANUEL: El 98 de los Americanos (Madrid 1974).
- (27) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898, Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900), págs. 41-45.
- (28) Ibid., págs. 46-47.
- (29) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 729-730.
- (30) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898, Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900), págs. 51 y 53-58.
- (31) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Problemas del Día: El Partido Republicano en España (Madrid 1900), págs. 15-16 y 24.
- (32) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 736-738.
- (33) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Derecho Internacional en España (Madrid 1905), págs. 12-17 y 20.
- (34) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Pesimismo de Ultima Hora (Madrid 1899), págs. 19-20 y 37.
- (35) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Política de Ultramar (1868-1900) (Madrid 1902), pág. 518.
- (36) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Exterior de España (Madrid 1910), págs. 13-15.
- (37) Ibid., pág. 28.
- (38) Ibid., págs. 34-35.

3) ESPAÑA Y AMERICA TRAS EL 98.

A partir de 1880, momento en que se pasó de un capitalismo de tipo industrial a otro de carácter financiero, Estados Unidos, una vez superadas las dificultades de la Guerra de Secesión, se encontró abocado a un proceso de expansión, en el que desarrolló una gran actividad política, acompañada de una intensa acción económica al objeto de lograr la apertura de nuevos mercados para sus productos. De acuerdo con ello, Norteamérica decidió englobar a las naciones hispanoamericanas en el marco de su órbita económica para constituir, así, una poderosa entidad continental frente a Europa (1).

Así, pues, el Secretario de Estado norteamericano, James G. Blaine, concibió la idea de unir el continente americano para promover el intercambio comercial dentro de éste, por lo que en 1881 invitó a los Estados americanos para asistir a un congreso, si bien el propósito quedó aplazado, por una serie de problemas, hasta fines de la década de los ochenta, en que el Presidente Cleveland decidió reavivar la mencionada idea. En realidad, se trataba de una nueva manifestación de la Doctrina Monroe, que adquirió su máximo desenvolvimiento con el imperialismo finisecular estadounidense y que ahora se presentaba bajo el nombre de panamericanismo, con el fin teórico de desarrollar una mayor unión comercial y cultural entre las Repúblicas americanas (2). De esta forma, Blaine, de nuevo Secretario de Estado, esta vez bajo la Presidencia de Harrison, logró reunir en Washington, entre Octubre de 1889 y Abril de 1890, a los delegados de todas las naciones del continente, excepto Canadá y la República Dominicana, en lo que fue la I Conferencia Panamericana, de la que salió la Oficina Internacional de las Repúblicas americanas y su Secretaría.

No obstante, el proyecto de Blaine de crear una unión aduanera no prosperó, ya que Hispanoamérica estaba todavía orientada hacia Europa y la penetración comercial norteamericana se consideraba algo temido, más bien que otra cosa. En realidad, el resultado concreto de mayor entidad consistió en la creación de un Centro de Información, que con el tiempo llegó a ser la Unión Panamericana. En estas condiciones, se fueron produciendo sucesivas conferencias, a medida que se pasaba de los iniciales presupuestos económicos a los asuntos políticos y diplomáticos (3). Así, aunque al principio el panamericanismo se ocupó únicamente de asuntos comerciales, jurídicos y culturales, a partir de la I Guerra Mundial se decantó hacia el campo de la acción política, convirtiéndose en una nueva fase del imperialismo, basada en la idea de la supremacía de la raza anglosajona y de la obligación, por Estados Unidos, de asumir una parte de la misión de la raza blanca frente a pueblos inferiores, como se consideraba a los de Hispanoamérica. En este sentido, la Conferencia convocada por Blaine supuso una clara muestra de los verdaderos objetivos que perseguía Estados Unidos, puestos de manifiesto en el enfrentamiento entre el espíritu hispanoamericano y las tendencias comerciales estadounidenses, lo cual agudizó la contraposición de dos modelos histórico-culturales de distinto signo: frente a la visión expansionista y mercantil norteamericana, la herencia de la acción de España en América (4).

Ciertamente, durante gran parte del siglo XIX las relaciones entre España y las Repúblicas hispanoamericanas no fueron todo lo fluídas que hubiese sido de desear y hasta un determinado momento carecieron de contactos diplomáticos y comerciales regulares, a escala general. Por este motivo, por ejemplo, la emigración transoceánica fue poco importante, dado que no existió una política de inmigración organizada en las

Repúblicas hispanas y que el sistema político español tampoco fue muy propicio a este tipo de movimientos demográficos bajo la consideración de que no facilitaban el desarrollo interno. Sin embargo, a partir de 1850 hubo una inversión de signo, evidenciada por la disarmonía interna peninsular entre incremento demográfico y crecimiento económico y por el cambio de política migratoria por parte de las Repúblicas hispanoamericanas, lo que condujo a la libertad de emigración en 1873 y, por último, a la gran explosión migratoria, desarrollada principalmente entre 1882 y 1895 y prolongada, tras un breve paréntesis de 1896 a 1900, protagonizado por las repercusiones de las guerras coloniales de Ultramar, hasta 1915 (5).

En realidad, pasados los momentos iniciales de la emancipación hispanoamericana, bien pronto estuvo presente la apertura hacia un horizonte compartido entre España y los pueblos surgidos de aquel movimiento histórico. Dicha orientación puede incluso rastrearse a partir de 1836 en que empezó a reconocerse la existencia jurídica de los nuevos Estados hispanoamericanos y que supuso la concreción de una idea compartida por personalidades españolas y americanas, cuyo punto central giró en torno a la posibilidad de constituir algún tipo de confederación cultural o política. En este sentido, en 1845, y bajo la jefatura gubernamental de Narváez, España inició un intento de intervención en la política interna de algunos países hispanoamericanos (apoyo al General Flores en Ecuador e intervención en la sublevación mexicana del General Paredes y Arrillaga), continuado más tarde en la época de O'Donnell y Prim (6).

De esta forma, a pesar de los sucesos acaecidos en el primer tercio del siglo XIX, que concluyeron con la independencia de los reinos españoles de América, se produjo un paralelismo

entre los procesos históricos de España e Hispanoamérica durante toda la centuria, ya que "si la Emancipación rompió la unidad política, no alteró para nada la cultura ni la fisonomía de la sociedad, e incluso los rasgos y modos del desarrollo político fueron absolutamente similares en las dos orillas atlánticas, como demuestran el constitucionalismo a ultranza, la sistemática falsificación del voto, el caciquismo y los pronunciamientos militares, aparte de la evidente influencia ejercida por la legislación liberal española en las Constituciones y en muchas otras leyes de cada una de los países hispanoamericanos" (7).

Por un aparte, una vez iniciado el siglo XX, la característica general de la conciencia española fue de pesimismo sobre el futuro de España y en estas circunstancias se tendió a responsabilizar de tal situación al pasado. Por ello, tras el Desastre, la pregunta que obsesionó a pensadores y políticos del momento se formuló en términos de preguntarse si España podría continuar existiendo como entidad histórica. "Quedó, en definitiva, la actitud crítica, de inquietud, de renovación de los valores, aunque, en muchos casos, con olvido de la esencia de España, a la que se quería vaciar en nuevos, pero ajenos moldes, considerados panacea de todos los males y, a la vez ungüento maravilloso para hacer a los españoles mejores, más fuertes y, sobre todo europeos. En cualquier caso, para todos, de un lado y de otro, el impacto del 98 fue un revulsivo que le expuso cara a cara con una realidad que exigía nuevas actitudes" (8).

En cualquier caso, surgió una actitud hispanoamericanista propiciada por una serie de estructuras, creadas por un conjunto de procesos provenientes de la propia sociedad. En este sentido, entre 1880 y 1900 tuvo lugar una actividad conmemorativa, "que supuso, en coincidencia con el final del largo proceso de reconocimiento diplomático, el

comienzo de una mutua e importante aproximación entre españoles e hispanoamericanos". Dentro de esta actividad se produjeron actos tales como el IV Congreso Internacional de Americanistas (1881); el I Centenario de Andrés Bello (1881); el IV Centenario del Descubrimiento de América (1892) y el Congreso Social y Económico Hispano-Americano (1900), así como el importante esfuerzo llevado a cabo por la Real Academia Española en el sentido de fundar en territorio americano Academias Correspondientes, completado por la labor de la asociación La Unión Ibero-Americana y por la fundación en 1888 del Museo y Biblioteca de Ultramar. Realmente, de todos estos acontecimientos, el que dió mayores frutos, en orden a la elevación del nivel del hispanoamericanismo español, fue el mencionado Congreso Social y Económico Hispano-Americano, que tuvo lugar en Madrid del 10 al 18 de Noviembre de 1900 y que supuso un claro exponente del interés social por el mundo hispanoamericano, reflejado en muchos de los temas tratados en sus sesiones. Por otra parte, la importancia de este Congreso se acrecentó al concretar en su espíritu y en su desarrollo la opción entre iberismo y sajonismo, presente en la pugna establecida entre el Congreso de Madrid y el Congreso Panamericano, que por aquellas fechas pretendía organizar Norteamérica (9).

En otro orden de cosas, la guerra entre Estados Unidos y España creó un conflicto emocional en Hispanoamérica, suscitando un conjunto de sentimientos contradictorios. Ciertamente, la hispanofobia era todavía muy fuerte, a pesar de los esfuerzos de reconciliación llevados a cabo, y estuvo presente, en última instancia, en las simpatías por la lucha que Cuba había realizado en pro de su libertad. No obstante, la victoria norteamericana sobre España desató los sentimientos de amistad para con la Madre Patria, creando un clima de condena moral contra Estados Unidos, en el que se contrapuso la

superioridad materialista anglosajona a la civilización y la cultura latinas (10).

En realidad, después de la I Guerra Mundial quedó totalmente establecida la hegemonía de Estados Unidos en el continente, afirmándose Norteamérica, de manera definitiva, como gran potencia dotada de una cohesión interna que superó por completo las diferencias creadas por la Guerra Civil. Así, con la tutela y anexión de Puerto Rico, con la práctica absorción de Cuba, con el nacimiento de Panamá y con la creación del Canal, el Caribe se convirtió para Estados Unidos en un "mar interior", en el que gracias a una serie de contratiempos políticos y económicos Norteamérica pudo intervenir, tanto comercial como militarmente.

De esta forma, ante el protectorado yanqui sobre Cuba y la anexión de Puerto Rico y Filipinas, empezó a surgir un movimiento panhispánico, que reunió a los antiguos miembros del Imperio español en una solidaridad cultural, que se opuso a las pretensiones norteamericanas, según las cuales y mediante el llamado "corolario Roosevelt" a la Doctrina Monroe, Estados Unidos, consciente de su fuerza y en un momento de exaltación mental y material, se creyó en el deber de obligar a mejorar a las atrasadas naciones vecinas y de protegerlas de las asechanzas de un mundo entregado a la vorágine militarista (11).

Dentro de este contexto, mientras en el continente americano Estados Unidos practicaba el imperialismo en su más amplio sentido, España se enfrentó con los problemas subsiguientes al Desastre, fruto final de un proceso de debilidad interna y de aislamiento exterior y último hito de la liquidación, iniciada a principios de siglo con la pérdida de la América continental. En este sentido, la nación toda se conmovió

tras el 98, dejando a España dividida entre un antes y un después de esa fecha y creando toda una conciencia de revisionismo y de reflexión: se exigieron responsabilidades; se desarrolló la postura "anti", tanto en el plano militar como en el clerical y en el político; surgió el criticismo literario, presente en la Generación del 98, y se abogó por la regeneración y el cambio, desde el europeísmo o desde el españolismo, según la orientación ideológica. Por otro lado, tras los acontecimientos de 1898, se produjo una aceleración de las corrientes de aproximación de los españoles hacia Hispanoamérica, de tal forma que dicha fecha marcó el inicio de un reencuentro entre las dos orillas del Atlántico y facilitó el diálogo de las Repúblicas hispanoamericanas con España, ahora que ésta ya no tenía una presencia física en América que dificultara, como antes había ocurrido con su permanencia en las Antillas, la comprensión entre la antigua metrópoli y sus territorios de Ultramar (12).

Así, pues, se produjo una aproximación cultural entre España e Hispanoamérica que tuvo su origen en la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento, aunque no empezó a plasmarse en realidades concretas hasta después del Desastre, si bien es preciso indicar que los temas americanos no preocuparon al común de los españoles, que se mantuvo alejado en general de la problemática relacionada con aquéllas cuestiones.

Precisamente, en esta línea de restablecimiento de relaciones entre españoles e hispanoamericanos podía situarse un conjunto de publicaciones, cuya aparición tuvo lugar por aquella época: "Revista de Unión Iberoamericana", cuyo objetivo principal era "facilitar la aproximación entre nuestros hermanos de América y los peninsulares"; "La España Moderna" con una sección dedicada permanentemente a Hispanoamérica; "Revista Nueva"; "El Mundo Latino", etc. Así, pues, en el horizonte mental de la época

surgió la idea del fomento del conocimiento mútuo y de la formación de una confederación de países hispánicos, constituida en fuerza política capaz de oponerse a las ambiciones imperialistas de Estados Unidos y de formar un valladar espiritual frente a la creciente opresión de la raza anglosajona. En última instancia, "fueron varios los factores que confluyeron a finales del siglo XIX para conseguir una aproximación entre España y los antiguos reinos de Ultramar: el imperialismo amenazador de los Estados Unidos, del cual España había sido la primera víctima de importancia; las tentativas de confederación de las Repúblicas hispanoamericanas, y el descubrimiento de la concomitancia cultural entre las naciones de una misma lengua" (13).

Ciertamente, a partir de 1898 las relaciones entre España y las Repúblicas hispanoamericanas se orientaron hacia el establecimiento de unas bases relativamente nuevas. Así, tras la guerra con Estados Unidos, España quedó eliminada definitivamente del escenario americano, lo cual alejó toda suspicacia, por parte de los países hispánicos y creó hacia nuestra patria una corriente de simpatía, ligada a la posición del vencido. De esta forma, por parte hispanoamericana fue apareciendo una creciente conciencia de diferenciación de la América hispana en relación con la América anglosajona y más concretamente con Estados Unidos.

Dentro de este contexto, el mundo iberoamericano desarrolló una actitud defensiva frente al empuje imperialista de Norteamérica, presente en la retención de Puerto Rico, tras la derrota española; en la Enmienda Platt, impuesta a la Constitución cubana, por la cual el Gobierno estadounidense se reservaba el derecho de intervenir en Cuba y, en general, en la actitud de fuerza que marcó las posteriores acciones llevadas a

cabo en el área del Caribe. En este sentido, frente al mito anglosajón, basado en el desarrollo de la libertad y la democracia, se opuso la valoración moral de los pueblos de habla hispana, creadores de civilización y generadores de nuevas etnias, nacidas de la fusión de razas (14). Por otra parte, el afianzamiento de los lazos entre España y los países hispanoamericanos vino propiciado por la Gran Guerra y por la subsiguiente neutralidad española, que convirtió a la Península en intermediaria entre Europa y América. Al hilo de estas circunstancias, fraguó, al mismo tiempo, una capacidad receptiva, por parte de España, para con todo lo hispanoamericano, tanto desde el punto de vista cultural como del de la sensibilidad colectiva (15).

Muy probablemente, la pérdida de la mayor parte del Imperio americano a principios de siglo no produjo el impacto creado en la conciencia española por el Desastre de 1898. En esta ocasión, Cuba fue arrancada a España por la fuerza, a manos de una potencia extranjera, que actuó con pocos escrúpulos y empleó toda una serie de medios nada usuales. Por ello "la destrucción pública de la imagen de España como gran potencia convirtió la derrota en un desastre moral. La derrota acabó con la confianza, ya minada por la depresión económica y por la confusión política y fue atribuida al sistema político que había presidido el Desastre" (16). En cualquier caso, tuvo lugar una profunda pérdida de identidad nacional, consecuencia de la falta de comunicación entre gobernantes y gobernados. De la mano de este proceso vino, además, el planteamiento de una serie de reflexiones sobre el particular, por parte de un grupo de intelectuales de la época, que reforzaron la idea de constituir una comunidad intelectual y cultural, en pie de igualdad con los países hispanicos. La idea pretendía dar a conocer los valores literarios de aquellos países a la mayor parte de la opinión

pública española y sustituir la influencia del pensamiento extranjero sobre la América hispana por la impronta ibérica. Aparte de esto, quedó patente que dicha acción debía estar exenta de cualquier tipo de pretensión o hegemonía, desde el punto de vista español (17).

Realmente, uno de los puntales sobre los que se asentó el revulsivo creado en la conciencia española por el Desastre, fue el regeneracionismo de Joaquín Costa, quien en Oligarquía y Caciquismo como la Forma de Gobierno Actual en España. Urgencia y Modo de Cambiarla (1901) analizó la situación política del momento, canalizando las aspiraciones de las clases productoras y de las masas neutras en su deseo de conseguir la realización de una acción política de carácter práctico. En la misma línea se situó Macías Picavea, que en su obra El Problema Nacional: Hechos, Causas, Remedios (1898-1899) dibujó un panorama desolador del escenario español, característico del torrente de protesta radical liberado por el Desastre de 1898. También Ramiro de Maeztu con Hacia otra España (1899), Damián Isern con Del Desastre Nacional y sus Causas, y Luis Morote con La Moral de la Derrota (1900), entre otros, se plantearon la problemática existente y sus posibles soluciones. Por su parte, Miguel de Unamuno, con En torno al Casticismo (1897), y Angel Gavinet, con Idearium Español (1897) realizaron, asimismo, cada uno desde sus respectivos puntos de vista, una reflexión sobre la esencia del alma española y de su historia al objeto de profundizar en su más delicada fibra vital (18).

Ciertamente, tras el 98 el regeneracionismo supuso un movimiento generalizado del pensamiento, de la política y de la cultura españolas, que cuestionó la situación en que se encontraba el país. Sin embargo, esta protesta no la creó el Desastre propiamente dicho, sino que este acontecimiento aceleró

e intensificó el caudal de críticas acerca de la realidad nacional, transformando las protestas tradicionales en una formulación específica y urgente de ellas. En este contexto, el otro polo alrededor del cual giró la actitud reflexiva anteriormente descrita, fue la Generación del 98, que con su visión literaria de la situación pensó el problema de España al margen del planteamiento puramente político, cuestionándose diversos aspectos de la realidad española "a través de nuevas interpretaciones del paisaje, de los clásicos, de los monumentos históricos y de las realidades menudas, cotidianas, ofrecidas por la vida en el campo, en el pueblo, en la capital de provincia" (19).

Dentro de este panorama, ya desde época tan temprana como 1865, Rafael María de Labra puso de manifiesto la necesidad de conectar con Hispanoamérica, rompiendo el hielo de la incomprensión existente desde los tiempos de la Emancipación. Ciertamente, España debía realizar una política de mediación en su trato con Hispanoamérica, a pesar de las dificultades inherentes a la inestabilidad de aquellos territorios. Por esta razón, la agitación de aquellas Repúblicas; la poca fortaleza de sus Gobiernos; las dificultades en el ejercicio de la autoridad, debidas a las condiciones de población y de territorio, exigían, por parte de España, la realización de una labor conciliadora, guiada, eso sí, por una conducta franca y generosa, que evitara cualquier clase de desconfianza, proclamando el respeto que le inspiraba la independencia de aquellos pueblos y demostrando que España tan sólo se acordaba de sus días de metrópoli para ayudar "en la obra de fraternidad, de paz y de progreso, que debían acometer los pueblos sudamericanos". En todo caso, esta postura venía impuesta por la propia Historia, que obligaba a preparar y educar a los pueblos que se habían formado a la sombra de la Madre Patria. No obstante, había que reconocer que en este empeño

fundamental de la colonización, España se había descuidado bastante, extremando las inconveniencias del régimen colonial, cuando más incompatible era con las exigencias de los países hispanoamericanos y con las condiciones de vida y de progreso de la propia metrópoli. Sin embargo, ahora era cuando España, apelando a su alto deber de nación colonizadora, debía ayudar a aquellos pueblos, pero sin ningún ánimo de intervención, respetando su autonomía en nombre de la civilización y fomentando la alianza e inteligencia de ellos para resaltar ante Europa sus cualidades y sus progresos (20). En este sentido, la labor de los políticos debía tener presente los sentimientos del pueblo español, siempre dirigidos hacia "la intimidad de relaciones de la Patria de los descubridores del Nuevo Mundo y de la América Latina, libre, independiente, progresiva" (21).

Realmente, respetando de modo incondicional la independencia de las Repúblicas hispanoamericanas, quedaba por delante un gran campo de acción, continuador de la obra española en aquel continente, "traído a la vida moderna por el esfuerzo de nuestros descubridores y de nuestros colonizadores y adonde iban en busca de fortuna y de gloria millares de compatriotas, que a cada instante recordaban con su trabajo, con su entusiasmo y con sus cantares la cuna común de las sociedades española y transatlántica". No obstante, había que reconocer que esta acción se había visto muy dificultada por toda la problemática ultramarina decimonónica, ya que era impensable llevar adelante aquel empeño, presente en el pensamiento de todos los españoles y abonado por las condiciones geográficas e históricas de las Antillas, "mientras perdurasen en aquellas tierras la esclavitud, el monopolio y la tiranía" (22).

Así, pues, en vista de las circunstancias existentes, se debía llevar a cabo una política de paz y de progreso de

alcance internacional, que hiciese posible, partiendo siempre de la conservación de la independencia y del valor propio de las Repúblicas ibéricas, la reconstrucción bajo una nueva forma "de aquel gran Imperio hispanoamericano, que el siglo XVIII había entregado a los embates afortunados de la Revolución Contemporánea". Precisamente, en este sentido era beneficiosa la superación de las dificultades que se habían producido tras la emancipación, como consecuencia de la rutina y de la desconfianza subsiguientes a aquellos acontecimientos. Por ello, todo acercamiento debía basarse en el respeto mutuo "para conseguir, así, una profunda y positiva intimidad de afectos y de intereses entre los hijos de una misma familia no agotada, felizmente, en la ruda labor de la Civilización Moderna" (23). Ciertamente, España había sido, desde un punto de vista histórico, una de las primeras naciones colonizadoras del mundo moderno, gracias a cuya acción y empeño habían surgido las Repúblicas hispanoamericanas, cuyas tradiciones y costumbres continuaban siendo las de la Madre patria y en donde persistía la aproximación de ideas y sentimientos, por parte de la mayoría de los españoles que allí iban. Por esta razón, las relaciones con aquellas naciones tenían un alto valor, tanto para la vida interna de España como para su representación internacional (24).

Parecía, pues, llegado el momento de superar las diferencias creadas por las pasadas guerras de Independencia y pasadas en el desdén hacia aquellos países, "obligados a la doble obra de su transformación social y de la instauración de un nuevo orden económico". Al mismo tiempo, era preciso tener presente que las posibilidades de relación entre España y aquellas tierras se habían visto enturbiadas también por el régimen que había imperado en las Antillas, lo cual había constituido una razón de desprestigio dentro del mundo americano, que, precisamente, representaba todo lo contrario. Por esta razón, se imponía el

hecho de pasar de las aspiraciones vagas a la acción directa, tanto desde la iniciativa particular como desde la gestión de los Gobiernos implicados en el tema (25). En este sentido, la oportunidad presente era de un valor extraordinario, tanto para la afirmación con efectos prácticos de las relaciones con América como para contribuir al desarrollo del Derecho Internacional, redefiniendo dentro de éste la política exterior española, que debía caracterizarse por el espíritu liberal y por la tendencia democrática "conforme con nuestros compromisos generales históricos y en vista de nuestra especial situación geográfica" (26).

La marcha general de los acontecimientos hacía imposible que una nación viviese aislada o que se dejase sorprender, pensando que los sucesos no le afectaban, por su lejanía o por su carácter aparentemente extraño, y, concretamente, en el caso de España esto era todavía más inaceptable, dada su posición geográfica y el valor internacional de la propia colonización. En cualquier caso, debía evitarse el abatimiento y el subsiguiente pesimismo, totalmente infundado, porque España todavía contaba con fuerzas y tenía un papel importante "en el concierto de los Grandes Pueblos, que habían hecho y que estaban haciendo la Historia Moderna" (27).

De todas formas, era urgente crear en la opinión pública una orientación internacional que afirmase la necesidad de vivir moral, política y socialmente en relación con el resto del mundo y en especial con los pueblos directores de la sociedad contemporánea; la conveniencia de precisar un objetivo de tendencias, de aspiraciones y de esfuerzos, y la necesidad de armonizar las pretensiones con los medios de que España pudiera disponer. En este sentido, no bastaba solamente con hablar de la unidad de la raza, de los vínculos de familia o de la necesidad

de restaurar las antiguas relaciones morales, políticas, económicas y sociales de España con América; era preciso demostrar la sinceridad de aquel deseo con hechos concretos, con sentido práctico, con decisión y con perseverancia, mantenida por la idea de que "con la empresa, que se intentaba, no se iba a hacer algo así como un favor a los pueblos de la América Latina, de los cuales se pensaba y aun se decía, que no tenían rumbo, ni habían realizado progresos, desde que se habían emancipado del Gobierno español". Por otra parte, ello debía ir acompañado de la más absoluta renuncia a cuanto pudiera servir de pretexto para que en América se dijese que España pretendía "llevar la dirección del concierto hispanoamericano" y restablecer "su antiguo carácter de Metrópoli" (28).

En general, podía decirse que se había prestado poca atención a la obra diplomática realizada en el Tratado de París, aunque ello podía explicarse por la deficiente preparación de la generalidad de los políticos españoles; por la súbita e inverosímil terminación de la guerra hispanoamericana; por lo rudo del golpe recibido por España, alentada hasta el último momento por su leyenda militar y caballeresca y por una cierta confianza en las buenas disposiciones de los Gobiernos europeos; por la falsa dirección de la educación nacional, y por la preocupación absorbente de los intereses próximos de la política interior. No obstante, no parecía probable que dicha situación se prolongara por mucho tiempo, dada su incompatibilidad con el carácter y el temple de la raza española, con su razón y representación históricas y con los destinos que a España le señalaban la Historia Universal, su situación geográfica y las transformaciones políticas del momento (29).

Ciertamente, en orden a la reorganización de las directrices políticas internacionales, contaba muy

particularmente la existencia en el Centro y el Sur de América de toda una masa de emigrantes españoles, absolutamente identificados con la representación, el desarrollo y el esplendor de las Repúblicas hispanoamericanas salidas del seno de la metrópoli y con ella reconciliadas de un modo cada vez más visible y satisfactorio. Además, el valor de ese considerable número de españoles y de esa aproximación hispanoamericana había aumentado sensiblemente como consecuencia de la reacción contra las pretensiones estadounidenses en el Nuevo Mundo. En realidad, los expansionistas norteamericanos se habían ocupado de expulsar moral y materialmente a España de toda América, con lo cual el golpe que se había dado había sido un golpe contra la raza española, contra la raza latina y contra toda Europa, con la pretensión de hacer desaparecer a España del círculo de las naciones colonizadoras y de colocarla en la categoría de nación de cuarto o quinto orden, tanto más pobre y desconsiderada cuanto más habían sido su poder y su prestigio (30).

Dadas, pues, estas circunstancias, no cabía más actitud que una enérgica política internacional que superase la lección de 1898 y que corrigiese los errores cometidos a lo largo del último tercio del siglo XIX. Por tanto, España tenía que decidirse entre la afirmación enérgica de su personalidad internacional y de su competencia para la resolución de los problemas planteados, o reducirse a ser la víctima propiciatoria de la codicia, de los antagonismos y de la fuerza de las grandes potencias europeas. En este sentido, parecía que se advertían indicios alentadores, por lo menos en la vida general de la nación y, sobre todo, en el orden económico, donde se había iniciado un importante movimiento industrial y de reorganización de la economía y del trabajo, que daban pie para pensar que los adelantos realizados en este ámbito pronto producirían una renovación en el orden político español. Por ello, si España no

quería verse reducida a la insignificancia dentro del concierto de los pueblos cultos e independientes, su Gobierno y las clases directoras de la sociedad debían darse cuenta de que tenían que arbitrase medios seguros y eficaces para afirmar la personalidad internacional antes aludida, y esto por la propia naturaleza del tema, por su relación con la vida histórica española y por las excepcionales circunstancias del momento relativas a la acción española en el continente americano (31).

En orden al trato con las Repúblicas hispanoamericanas, era preciso indicar que existía una propensión a ponderar las excelencias de la aproximación de la vieja metrópoli española a las Repúblicas del Centro y Sur de América, sin que estas pomposas declaraciones trascendiesen en algo práctico y sin que perdiesen un cierto aire de arrogante superioridad, que no era aceptable por parte de aquellas naciones. No obstante, se había producido un satisfactorio influjo de correspondencia entre ambas partes, como consecuencia de la actitud de Estados Unidos y de otras potencias europeas, que era preciso aprovechar. Además, como es sabido, tanto en Cuba como en Puerto Rico subsistía el espíritu español presente en sus insulares, que de ninguna manera renunciaban a su lengua, a sus relaciones y a sus hábitos; en sus leyes civiles y penales y en el elemento peninsular, que continuaba teniendo una importancia de primer orden por su número, carácter, laboriosidad y riqueza. Por otra parte, era impensable que el Gobierno español no reaccionara de alguna manera, en vista de las irregularidades relativas a la opción de la nacionalidad, al rechazo de las deudas coloniales y al anómalo estado político e internacional de Cuba. En este sentido, también exigía cierta toma de posición la existencia de hombres que en aquellas tierras recordaban su origen, así como las relaciones mercantiles establecidas a lo largo de muchos años entre los productores peninsulares y el mercado antillano. Por todas estas

razones, adquiriría una extraordinaria importancia el futuro trato de España con la América hispánica, motivo por el cual se debía despejar el pesimismo reinante tras el 98, dados los elementos positivos que abonaban la fortificación española desde el doble punto de vista de la colonización y de la vida internacional (32).

Precisamente, cuando todavía estaban recientes los resultados del 98 y cuando el pesimismo parecía haber impuesto a la sociedad española la idea de que una de las soluciones más lógicas a dicha crisis era la de renunciar a todo empeño de exteriorización, resurgía en España el movimiento de aproximación a los demás pueblos ibéricos, iniciado poco tiempo atrás. Ese movimiento respondía al instinto popular, que no podía resignarse a la anulación de la personalidad hispana, en el momento de la consagración de las nacionalidades y cuando los progresos geográficos y políticos de fines de siglo hacían del territorio peninsular una nación, en donde se planteaban y resolvían los problemas de la civilización moderna. Ahora se volvía a hablar en España de la aproximación a Hispanoamérica y a afirmar, con la unidad fundamental de la raza, la similitud de objetivos y de destinos de la gran familia hispánica en contraposición a los éxitos de la raza anglosajona, que se imponía por todas partes en el dominio del mundo (33). En cualquier caso, era imposible realizar esa obra de aproximación a Hispanoamérica fuera del supuesto de la Independencia, del criterio que imperaba en el orden político de los antiguos reinos de Ultramar y de las soluciones expansivas que caracterizaban la vida actual en el Nuevo Mundo.

Asimismo, también constituía un obstáculo el considerar la cuestión colonial, particularmente la de Cuba y de Puerto Rico, como un problema de la política interior, aspecto éste

contestado por la naturaleza del Derecho Colonial; por la condición especial de las Antillas, por efecto de su naturaleza geográfica y de la consideración de las potencias europeas al respecto, y por la íntima relación que tenían las posesiones de Ultramar con la importancia política y social del elemento español en América (34). En estas circunstancias, se trataba de identificar a España con la corriente política y social contemporánea, de provocar la aproximación a las Repúblicas hispánicas y de fortificar la causa y los medios de aquélla, para que pudiera escapar del naufragio de las naciones desmembradas y decadentes, afirmando por procedimientos progresivos una gran personalidad ibérica sobre la base de la voluntad de todos y cada uno de los pueblos interesados en la formación de dicha personalidad. Todo ello demostraba que la empresa de la aproximación a Hispanoamérica exigía una atención, un estudio, un plan y una perseverancia y el abandono de posturas retóricas y resonantes, ligadas a empresas pasadas (35).

Realmente, la idea de la aproximación hispanoamericana había ido tomando cuerpo desde el Congreso celebrado en Madrid en 1900, pero los esfuerzos por lograr dicha aproximación entre España y los países hispánicos databan de mucho tiempo atrás y ni siquiera estaban determinados por el Desastre de 1898. Sin embargo, había dificultado mucho esta labor la separación política de España y de las Repúblicas del Nuevo Mundo tras la Independencia y los posteriores roces con varias de aquellas naciones, con motivo de las reclamaciones pecuniarias de los españoles residentes en América y de la cuestión de las naturalizaciones de los hijos de españoles nacidos en Ultramar. En contrapartida, había resultado de extraordinaria importancia para afianzar los lazos de unión entre ambas partes la acción de algunos periódicos e Institutos Científicos, tales como la Real Academia Española de la Lengua, la Academia Matritense de

Jurisprudencia y Legislación, que establecieron Sociedades correspondientes en toda América, o la Sociedad Unión Iberoamericana, fundada en 1885 "para fomentar las relaciones intelectuales y materiales entre España y los pueblos latinoamericanos" (36).

Ciertamente, los españoles más favorables al establecimiento de relaciones con América fueron los más proclives a la introducción de reformas en las provincias ultramarinas, mientras que la tendencia general, por lo menos hasta 1866, fue contraria a ambas orientaciones. En realidad, el recuerdo de la Emancipación perjudicó la reforma ultramarina ante el miedo de que en Cuba y Puerto Rico encontrasen eco las aspiraciones de la América independiente, y asimismo influyó en la escasez y frialdad de relaciones entre España y América. Por su parte, los autonomistas sostuvieron frente a esta tónica la política contraria, basada en cinco puntos: 1º) Identidad de los derechos políticos y civiles de los españoles de uno y otro lado del Atlántico; 2º) Representación en Cortes de los antillanos en idénticas condiciones a las de los peninsulares; 3º) autonomía colonial; 4º) Un Tratado de Comercio con Estados Unidos, que asegurase la producción antillana sin quebranto de la peninsular y que preparase la transformación de aquélla, reducida al azúcar y a las producciones meramente coloniales, y 5º) Creación de un Centro Universitario en La Habana, que fuese núcleo de atracción para toda la América hispana (37).

En cualquier caso, el empeño en pro de la aproximación entre España y América se vió muy reforzado por la celebración del IV Centenario del Descubrimiento y de cinco Congresos Iberoamericanos: el Jurídico presidido por don Antonio Cánovas del Castillo; el Literario, por don Gaspar Núñez de Arce; el Mercantil, por don Mariano Sabas Muniesa; el Geográfico, por el

General don Juan Arroquía, y el Pedagógico, por el propio Labra. Estos actos avivaron el interés de los españoles por los asuntos americanos, al tiempo que aumentó la emigración hacia América. No obstante, no era cierto que la inteligencia con los pueblos ibéricos fuese más fácil tras el 98, pero había que reconocer que dichos acontecimientos supusieron el abandono de las posturas arrogantes e intransigentes y que la aproximación a Portugal y a la América hispana eran dos ideas que palpitaban, cada vez con más fuerza, en la conciencia del pueblo español. Por otra parte, el Congreso Hispanoamericano de 1900, acogido al principio con cierta reserva por algunos políticos hispanoamericanos y que a la postre constituyó un verdadero desbordamiento de cordialidad fue una auténtica base para la realización de una gran política, que saturada del espíritu contemporáneo podía lograr la reconstrucción de la familia que vivía a uno y otro lado del Atlántico (38).

Parecía, pues, cuestión fundamental para reflexionar sobre el proceso colonial tras el 98, centrarse en el tema de la internacionalización de aquél, y en su virtud Rafael María de Labra se planteó dicho supuesto en el verano de 1901 en su Contestación al Discurso de la Corona. Ciertamente, la mayor eficacia de la presencia española en las Antillas hubiera exigido una política internacional más intensa, ya que toda cuestión colonial entrañaba una cuestión internacional. Por lo que respecta al tema de las responsabilidades, éstas no podían considerarse individualmente, puesto que todo lo relativo al proceso bélico constituía actos de Gobierno y como tales debían ser valorados. Ante la situación creada por el Desastre, se imponía la reacción. Era necesario enfrentarse a la consideración exterior, fundamentalmente europea, según la cual España estaba desprestigiada y moralmente hundida, y también había que contestar la especie que atribuía a los norteamericanos la

solución de todos los problemas que habían padecido las Antillas. Estaba claro que debían aprovecharse las lecciones brindadas por la Historia en relación con los problemas planteados después del 98. Y para extraer una lección positiva era absolutamente necesario tener presente que no era posible vivir fuera del círculo internacional. En este sentido, para la solución de los problemas antillanos no sólo se hubiesen precisado los propios esfuerzos, sino la intervención en diversas formas de las potencias europeas.

No obstante, y a pesar de este tipo de consideraciones, por encima de cualquier otro planteamiento estuvieron las apetencias estadounidenses sobre las Antillas, entendidas como un proceso de expansión natural y como una consecuencia lógica del desarrollo de la Doctrina Monroe, culminada en el Tratado de París de 1898, última expresión de la hegemonía norteamericana, cuyos supuestos habían sido expuestos ya en el Congreso Panamericano de 1889. Frente a esto, podía afirmarse que los Decretos Autonómicos de 1897 habían constituido un título de honor para España, mediante el cual ésta podía presentarse ante Europa y ante todo el mundo como consolidadora de las libertades. En cualquier caso, el fracaso de España se había basado en la determinación de Estados Unidos de intervenir en los asuntos antillanos, una vez que éstos tuvieron la seguridad de que era una verdad la implantación del régimen autonomista, que hubiese implicado la terminación de la guerra en Cuba, unido todo ello a la firme convicción de que Europa no se inmiscuiría en esta cuestión. Así, pues, parte de la derrota estuvo en el abandono de Europa y éste fue consecuencia de la falta de una adecuada política internacional (39).

No obstante, salvadas estas reflexiones, el tema de las relaciones con América se había convertido en una de las

cuest
acon
aprox
histó
era
inde
esta
del p
que
desar
de a
Améri
a unc

as más importantes a tener en cuenta tras los
tientos de 1898. En este sentido, Labra pensaba que la
ción de España a América se fundaba no sólo en un interés
, sino también en un orden moral, según el cual "España
era Madre de todas esas Naciones, que hoy vivían
entes y que eran sus hermanas en la actualidad". Por
ción, dichas relaciones eran tan propias del pasado como
ente, dado el flujo de españoles hacia aquellas tierras,
tribuían a engrandecer con su esfuerzo. De esta forma, el
lo de las Repúblicas hispanoamericanas respondía, además
consideración histórica, a un presente esperanzador para
y "para las condiciones vitales de nuestra raza repartida
otro lado del Atlántico" (40).

Iberc
relat
probl
aquel
grand
de l
antec
allí,
inter
mano
la in
en An
que
order

Desde el punto de vista de las relaciones con
rica, se hacía necesario examinar varias cuestiones
al tema. En este sentido, existía, ante todo, un
de raza, de Historia, que afectaba al mundo, influido en
momentos por las reconstituciones y unificaciones de las
familias europeas y americanas y que pasaba por el asunto
financiación económica. Por otro lado, dados los
tes de España en América y su representación histórica
ría preguntarse qué podía hacer respecto de su posición
y de su representación en el foro internacional. De la
esta pregunta se infería toda una formulación basada en
cancia que tenía para la España del momento la existencia
ca de un número extraordinario de españoles, que vivían,
abajaban y que eran un factor de primera importancia en el
nómico, social y moral de aquellos países.

comer
con

Además, estaba el tema relativo a la cuestión
l, que implicaba el ordenamiento del mercado con América
as a la reconstitución de la industria y de la riqueza

españolas. Por todas estas razones, España debía tener un interés extraordinario en el progreso de las jóvenes Repúblicas hispanoamericanas, países que tenían que ser considerados con exquisita delicadeza, porque en ellos estaba comprometida también una parte considerable de la población española, que luchaba allí por adquirir fuerza y medios de riqueza y cuyos resultados positivos se palpaban luego en la vida peninsular. Aparte de esto, la América española era un mercado abierto y hasta fácil para los productores españoles en un momento en que se abrían nuevas perspectivas para la industria peninsular, facilitadas, además, por la comunidad de lengua y por la analogía de las costumbres.

En este orden de cosas, algunos opinaban que la situación creada después del Tratado de París era más favorable a la aproximación a las Repúblicas ibéricas que la existente en la época de la presencia española en las Antillas. No era esta, sin embargo, exactamente, la opinión de Labra, para quien la reforma colonial en Cuba y Puerto Rico no sólo hubiera supuesto la implantación de un gran principio de justicia, sino la base de la regeneración política general de España y, con ello de la extensión de su imperio moral en el mundo americano. Aun así, no estaba todo perdido, y dada la idiosincrasia de la América hispana todavía había tiempo, aunque sin aplazar los esfuerzos necesarios para ello, para consolidar definitivamente las simpatías y el apoyo de aquellos países (41).

Las discusiones planteadas en el Senado por estos temas se prolongaron a lo largo del mes de Diciembre, generando toda una serie de réplicas y contrarréplicas, por parte del propio Labra y de los señores Martín Sánchez (42); Salvador (43); Conde de Romanones, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; Allendésalazar (44); Marqués de Aguilar de Campóo; Ministro de

ado, Duque de Tetuán, y señor Campa (45). En esas circunstancias, se hacía necesario formar en España una opinión pública capaz de conocer los problemas que implicaba el mantenimiento de la personalidad española en el círculo de los grandes factores de la civilización moderna, dado que no era posible vivir fuera del trato internacional. Esta opinión debía formarse, en primer lugar, en los círculos políticos y entre las clases directoras de la sociedad española; después había que llevarla a la masa general del país, cuyo influjo pesaba más que nunca, supuesto el carácter democrático de la vida política y social de la España contemporánea. Con ello, no sólo se servía un interés particular de España, sino que se contribuía a la cultura y al progreso universales, puesto que el Derecho Internacional presentaba uno de los puntos más importantes de la vida de los pueblos y garantizaba nuevos adelantos en el orden de la libertad (46).

No obstante, en estos temas había que luchar contra el ciego patriotismo, contra la preocupación de los intereses materiales, contra los exclusivismos tradicionales y contra la propaganda efectista de los círculos políticos y de los ámbitos gubernamentales. En el tema de las relaciones con Hispanoamérica, era suficiente con hablar de la unidad de la raza, de los vínculos de familia y de la necesidad de restaurar las antiguas conexiones morales, políticas, económicas y sociales de España con aquellas tierras, supuesto el respeto a las respectivas soberanías nacionales, se hacía indispensable indicar cómo se debía hacer aquella restauración. Además, cualquier decisión que se tomase debía hacerse de acuerdo con el moderno criterio y con las soluciones que caracterizaban la vida del Nuevo Mundo en aquellos momentos, cuya representación frente a Europa y para facilitar el empeño de los pueblos hispanoamericanos, pretendía Estados Unidos (47).

Dentro de este contexto, la aproximación y la concentración ibéricas se presentaban como un elemento de la más amplia unidad latina, que en contraste con otras grandes agrupaciones debía contribuir al concierto internacional, caracterizado como el ideal a conseguir bajo el supuesto jurídico de la igualdad, y el intelectual, económico y social de la fraternidad. Por ello, la identidad de raza y de familia y la comunidad de fines perseguida por España exigían su desarrollo dentro de las corrientes expansivas y renovadoras del mundo moderno (50).

Precisamente, lo que más interesaba en el complejo problema de la compenetración hispanoamericana era la aproximación moral, que en cualquier caso estaba por encima del interés puramente material y mercantil. En este sentido, España se presentaba como la más caracterizada para intentar realizar un empeño de concentración y de armonía de los sentimientos y de los intereses de las naciones procedentes de un mismo hogar, a fin de conseguir establecer un concierto entre ellas, tal como recomendaban, cada vez con más energía, las directrices del moderno Derecho de Gentes. Por otra parte, la cooperación hispanoamericana en la obra de aproximación familiar y de reconstrucción de la unidad ibérica contaba con importantes precedentes, presentes desde los días de la Emancipación, en que se había pensado ya en la inteligencia con aquellas nuevas naciones para afirmar, "tanto la independencia de éstas como la personalidad particular y colectiva en frecuente trato y fervorosa cooperación para el progreso común". Además, ya se había evidenciado también la colaboración del espíritu español con el americano, dentro de la propia empresa colonizadora, en cuestiones de trascendencia general existentes en la organización política y social de América. De esta forma, parecía que ningún otro pueblo más que España podía representar en América la tradición y la misión de Europa, dado que tenía los mayores

títulos de respeto y la gratitud del continente y que no podía inspirar temores de ninguna clase y mucho menos sospechas de intentar alguna acción material concreta, absolutamente incompatible con sus medios y con sus verdaderos intereses (51).

La preocupación de Labra por los problemas relativos a la orientación internacional de España y a la aproximación a Hispanoamérica se hizo palpable a través de varias intervenciones en el Senado durante el año 1902. En ellas interpeló al Gobierno sobre las relaciones de España con otras naciones (52), sobre la situación de los españoles que habían permanecido en las Antillas tras los sucesos de 1898 (53) y sobre los contactos con las Repúblicas iberoamericanas (54).

En orden a alcanzar los objetivos propuestos, parecía conveniente promocionar los estudios de Derecho Internacional con el fin de reanudar la brillante trayectoria que España tenía sobre el particular, bastante descuidada y oscurecida, por otra parte, durante el siglo XIX. Con ello también se pretendía preparar al país para afrontar los conflictos exteriores sin falsas improvisaciones y contribuir así a rectificar el aislamiento y la desorientación en que vivía el pueblo español respecto de los demás pueblos contemporáneos; aislamiento que era, especialmente, moral y social más que político y en cuya labor debían intervenir, tanto los Gobiernos como los particulares. En este sentido, se iba generalizando la idea de que el apartamiento del mundo contemporáneo había sido considerable y de que esto, por la fuerza de los acontecimientos, influía sobre manera en el quehacer político español, dado que no se podía prescindir de las cuestiones relacionadas con el ámbito exterior. Ciertamente, el estado general de las cosas, el porvenir que se vislumbraba, la actual situación política y geográfica de España y la experiencia de 1898 obligaban a

cualquier ciudadano, y sobre todo, a los elementos políticos y a las clases directoras a fijarse en las cuestiones internacionales. De todas formas, había que reconocer que, lamentablemente, la política gubernamental española se había empeñado en reducir la cuestión de Cuba a un negocio exclusivamente español y de pura política interior, dando al tema de la aproximación hispanoamericana un valor retórico. No obstante, también era cierto que alentaba en España, en los últimos tiempos, una disposición intelectual favorable a la realización de la aproximación de la sociedad española a la corriente dominante en el mundo contemporáneo (55).

En vista de estas circunstancias y en relación con la política a desarrollar respecto de Hispanoamérica, aquélla se centraba en torno a cinco ideas: 1a.) El valor y la representación definitivas de la revolución americana, que había consagrado la vida independiente de las Repúblicas del Nuevo Mundo; 2a.) Las relaciones del mundo americano con Estados Unidos y con las grandes potencias europeas, los cuales procuraban ensanchar allí su influencia; 3a.) La tradición española en el nuevo continente, donde las bases de su organización civil y de su economía social eran, por lo general, las mismas en que se asentaba la vida de su antigua metrópoli y donde el uso corriente de la lengua castellana facilitaba la influencia de España o, por lo menos, de su espíritu, sus gustos y sus costumbres; 4a.) El número de los españoles allí establecidos, apartados de las luchas políticas internas, creadores de intereses y contribuyentes de la prosperidad de aquellos países, y 5a.) La reactivación de las viejas simpatías y del sentimiento de la raza de la población americana, en favor de su antigua metrópoli como protesta por la violenta expansión de la raza anglosajona (56).

La lección de 1898 había sido tremenda y de acuerdo con ello, era absolutamente imposible continuar fuera de la órbita

del mundo culto y carecer de una política internacional fija, orientada por el Gobierno, relacionada con la opinión del país y controlada por elementos públicos, ya que en este punto el Derecho Colonial era una parte del Derecho Internacional. Precisamente, dentro de este supuesto se contemplaba el papel de la representación de España en el mundo, que en relación con América se estructuraba en torno a tres puntos: 1º) El interés de la personalidad ibérica, 2º) El valor del comercio con aquella zona, que pedía Tratados, fácilmente explicables en razón del idioma, de la sangre y del número de españoles que vivían allí, y 3º) El hecho mismo de la existencia de esos españoles, que contribuían con su acción al desarrollo económico peninsular (57).

En este sentido, el Tratado de París había supuesto no sólo la cesión de derechos en las Antillas, sino también la anulación de la representación española en el concierto internacional, motivo por el cual se precisaba la realización de una política de alianzas cierta y positiva con el fin de anular el influjo negativo creado por el aislamiento (58). Así, pues, la lección de 1898 debía ser aprovechada, ahora y siempre, por todos los políticos, pensadores y publicistas, a fin de prevenir situaciones que pudieran poner en peligro a España como nación. Además, la reflexión sobre el particular tenía que valorar correctamente el papel de la representación española, los medios con que contaba el país, y el peso de su destino y de su Historia, a la cual no podía renunciar, lo que le exigía ser algo más que un mero satélite o instrumento dentro de la vida política mundial (59). Por su parte, Labra en su Contestación al Discurso de la Corona de 1905 volvió a insistir sobre el tema de las relaciones con Iberoamérica, idea esta que, según su criterio, todavía no era demasiado popular en España. No obstante, esta actitud debía modificarse, sobre todo ante hechos como los

protagonizados por la Argentina y Cuba. Ciertamente, la República Argentina pedía con insistencia la regularización de sus tratos mercantiles con España y Cuba conocía la reactivación de la aproximación a la Península, lo que justificaba todo género de esperanzas para el futuro, abonadas por la emigración española a la isla y por la formación en ella de una colonia de gran importancia y actividad (60). Por eso, en orden a dichas relaciones con Hispanoamérica, se debía trazar una serie de líneas maestras, a través de las cuales se hiciesen efectivos los mencionados contactos. En este sentido, era preciso solicitar la atención del público español sobre el problema iberoamericano; explicar la historia y la vida actual de las Repúblicas hispánicas; razonar los medios y los procedimientos verdaderamente prácticos para que España se aproximase a aquellos países, y determinar las ventajas, deberes y compromisos que esa aproximación entrañaba.

Tras el 98, los términos del problema hispanoamericano se habían modificado, pero con anterioridad a esa fecha se pudo haber solucionado la cuestión, si no se hubiese adoptado la táctica del apartamiento y de las prevenciones de España respecto de América, negándose a proclamar la autonomía colonial, estableciendo el régimen arancelario proteccionista y aceptando la falta de representación parlamentaria de Ultramar. Por esta razón, ahora se debía pensar las soluciones prácticas, que sacasen a la aproximación ibérica "de la esfera de las aspiraciones generosas y de las perspectivas agradables", y en este sentido el 98 suponía un revulsivo, tanto para la vida interna de España como para su proyección exterior. Realmente, la derrota de 1898 produjo efectos morales inmediatos, palpables en el pesimismo que había invadido las esferas de la sociedad y en la ausencia de una auténtica opinión pública. A su vez, el pesimismo llevó a la desconsideración de nuestros propios medios,

a la impotencia, a la exageración de responsabilidades y a la abstención sistemática, abandonando las ilusiones y las esperanzas (61).

Dentro de este contexto, la afirmación de la personalidad española constituía, pues, un problema de primer orden, estructurado en torno a tres cuestiones: determinar lo que era la nación, es decir, la sociedad moral, política y económica, cuya personalidad se trataba de afirmar; precisar las necesidades del país en orden a la cooperación universal y fijar los medios para realizar los empeños exteriores e interiores. España había contribuido al desarrollo de la cultura y de la vida de América y ello se había traducido en influencias recíprocas del pueblo descubridor y del país colonizado, determinantes de un interés común, "a despecho de la distancia y de la concurrencia extranjera y por encima de la diferencia de banderas y de situación geográfica". De esta forma, la especial relación de España con América había desembocado en el problema hispanoamericano, que marcaba, de manera inexcusable, la personalidad internacional española (62).

Si bien era verdad que las Antillas podían haber sido un medio extraordinario para realizar la reconciliación de España con América, si se hubiese desarrollado una política distinta de la llevada a cabo, lo cierto fue que el 98 despertó la conciencia hispanoamericana frente a la agresión estadounidense, en relación con lo cual las Repúblicas ibéricas necesitaron invocar la Historia y la raza para buscar los intereses comunes, "precisamente, en los momentos en que triunfaba en el Mundo la idea de las grandes concentraciones de pueblos sobre la doble base de las comunes necesidades y tendencias y de las autonomías regionales y municipales". No obstante, constituía un peligro para las relaciones con América la idea del mantenimiento de la

reivindicación colonial, que había anticipado en el pasado el deseo de intervención de los españoles en las cuestiones políticas internas hispanoamericanas. Sin embargo, no parecía que esto volviese a ocurrir, basándose el nuevo planteamiento en el respeto hacia aquellas Repúblicas. De esta forma, España podía seguir prestando servicios de manera análoga a la de la época de la colonización, manteniéndose el vínculo, aunque de otro modo y para otros fines distintos de los de antaño. Realmente, las Repúblicas hispanas vivían dentro del ambiente contemporáneo y acreditaban su capacidad natural para ciertas prácticas y modos de vida, identificándose con las manifestaciones de progreso político y social y rectificando el criterio, según el cual la raza española estaba imposibilitada para enaltecer y sostener un orden de derecho fecundo y progresivo (63).

Dentro de este contexto, interesaba comprender bien la situación y los recursos de España, su condición respecto de las Repúblicas hispanoamericanas y el fin de la aproximación buscada. En cualquier caso, no se podía pretender la dirección de los antiguos reinos de América, actualmente pueblos soberanos, sino la adopción de una postura, según la cual España se convertiría en "la depositaria y principal defensora de las grandes tradiciones y de los deslumbrantes prestigios de la familia y si se quiere de la Raza". Ciertamente, dentro de la corriente universal contemporánea no se contemplaban predominios de región, ni reivindicaciones de soberanías desaparecidas, aparte de que España carecía de medios para enunciar tan sólo el propósito de una suprema dirección, que nadie podía concebir ya.

Así, pues, la actitud correcta consistía en buscar la aproximación sobre la base de la identidad de raza, lengua y religión, y ello no sólo con los Gobiernos, sino, sobre todo, desde el punto de vista humano y de las relaciones diplomáticas,

sin olvidar la faceta económica, relacionada con el establecimiento de un comercio directo entre España y América. En este sentido, era preciso tener presente que la aproximación hispanoamericana no se reducía a la aproximación y concierto de Estados, sino que se orientaba a la compenetración de pueblos "en vista de un ideal superior, relacionado con una mútua y gran tradición, y en vista, también, de un porvenir común y de una acción colectiva sobre la marcha general del Mundo" (64).

En orden a las nuevas perspectivas, había que tener en cuenta, principalmente, la corriente migratoria española hacia América, en progresiva ascendencia; la aproximación creciente de españoles y americanos al otro lado del Atlántico y la rectificación relativa al juicio valorativo sobre las críticas exageradas y frecuentemente infundadas, que antes se tenían con respecto a la empresa colonizadora española, estimada ya, aparte de deficiencias y de errores innegables, en su justo valor. De acuerdo con ello, se presentaban, pues, grandes posibilidades en beneficio de América y España como consecuencia del aumento de las relaciones regulares y permanentes (científicas, políticas, económicas y sociales) de uno y otro lado del Atlántico (65).

Al plantearse en 1908 en el Senado el tema del presupuesto del Ministerio de Estado, afloró el análisis de los elementos constitutivos de la política internacional española, cuestión para la cual, según Labra, se debían buscar medios y recursos, tomando una dirección cierta y rebatiendo la falsa idea, según la cual era necesario que España se dedicase "al cultivo de su jardín". Ciertamente, toda una serie de razones abonaba la exigencia en pro de la realización de una política internacional adecuada. En primer lugar, la posición geográfica de España, "en el extremo de Europa, tocando a Marruecos al lado y frente a las dos Américas, tocando a Portugal y en relación

directa con el Atlántico, el Mediterráneo y el Cantábrico". Después, el idioma, que constituía un medio de transmisión de ideas, que se identificaba con la idea misma, que determinaba sentimientos y que afectaba a ochenta millones de personas, que mediante la lengua se compenetraban con la Historia, con el pasado y con las costumbres hispanas. Por último, la emigración, que suponía, entre otras cosas, el interés del impulso y la razón por la que España se había volcado en una empresa verdaderamente colosal, muy distinta de la acción llevada a cabo por la emigración extranjera en sus diferentes matices, y que ahora creaba una fuerte ligazón con los países de América, conectando con sus costumbres y con sus sentimientos, lo que implicaba considerar la existencia de esa masa de emigrantes, de una manera especial, dado su peso específico y su peculiar valoración. Todas estas razones aconsejaban acentuar la acción diplomática personal y directa, teniendo en cuenta la coyuntura por la que atravesaban los tiempos actuales, que pedían una aceleración en el ritmo de realización de estos temas a tenor de las exigencias de la época y de los avances de otras naciones en esta materia (66).

En aquellos momentos, se presentaba una excepcional ocasión en orden al estrechamiento de relaciones entre España y las Repúblicas hispanoamericanas, debido a la acentuación de un vigoroso movimiento de simpatía respecto de la raza y de una fuerte corriente de identificación con la Madre Patria, unido todo ello al ánimo e influencia de los representantes diplomáticos españoles en aquellas tierras. Así, pues, debía alertarse sobre este particular a pensadores, patriotas y estadistas y a todos cuantos se ocupaban de estas cuestiones, a fin de crear una base, un supuesto y un ambiente, que determinara con una acción cierta y poderosa la idea de los Gobiernos (67).

Ciertamente, algunos tratadistas del siglo XIX habían recomendado el estudio de los problemas americanos en nombre de

la unidad y la complejidad de la Historia Contemporánea, en razón del creciente trato de las sociedades de América con el Viejo Mundo y por el carácter de anticipación que tenían muchas de las soluciones políticas y económicas intentadas o realizadas al otro lado del Atlántico. En todo caso, la atención, que los europeos prestaban, sobre todo los políticos y los diplomáticos, a las cuestiones hispanoamericanas estaba muy por debajo de lo que la necesidad requería, máxime en momentos como los presentes, que debían ser aprovechados por los elementos directores de uno y otro lado del Atlántico y muy particularmente, por los que se encontraban especialmente relacionados con la Historia, la raza, los emigrantes y los intereses políticos y económicos de aquellas naciones. Además, se precisaba que el Gobierno, los políticos, la prensa y cualquier elemento director de la sociedad se diera cuenta " de que ya no era la hora de los brindis, de las frases hermosas, de las promesas vagas y de los entusiasmos fugaces. Los tiempos y los hombres esperaban sólo fórmulas concretas, soluciones prácticas y obras inmediatas" (68). Dentro de este conjunto de posibilidades se revelaban de especial importancia las relaciones económicas y comerciales, que habían empezado a fructificar entre España y la República de Cuba, sobre las cuales se interesó el propio Labra. Precisamente, sobre este particular era necesario rectificar un grave error, según el cual después del 98 no cabía pensar en la existencia en Cuba de intereses ni de compromisos políticos o económicos por parte de España, por haber perdido toda representación política y toda importancia mercantil. Era cierto que en los tiempos inmediatamente posteriores al 98 había surgido un movimiento de pesimista con respecto a las relaciones entre España y América, basado en la idea de que habían pasado las horas de acción y de representación en el mundo, y que se recomendaba el abandono de cualquier postura positiva en este sentido. Sin embargo, paulatinamente se había ido corrigiendo un tanto este prejuicio, aunque la

rectificación no había sido completa y todavía pervivía un cierto pesimismo en materia de relaciones mercantiles entre España y América. En cualquier caso, no podía olvidarse que tras el 98 Cuba se había convertido en el tercer mercado de España y que además existían en las relaciones con aquel país, condiciones de normalidad jurídica y de influencia moral suficientes como para pensar en un esperanzador futuro.

En este orden de cosas, el papel desempeñado en toda América por la emigración española revestía, frente a otros procesos de esta índole, un carácter orgánico, constituyendo grandes Centros Regionales de importancia social y política, absolutamente indispensables, tanto desde el punto de vista de sus asociados como del de las asociaciones, cuyo valor y consideración eran tenidas en cuenta por los ciudadanos y los Gobiernos de los países hispanoamericanos. Por esta razón, la aproximación a América constituía un punto de esencial importancia para la vida nacional española, ya que había, además, en Cuba intereses morales y económicos que obligaban a toda clase de sacrificios "en honor de la Historia patria y en vista del porvenir" (69).

En general, las buenas perspectivas existentes causaban una magnífica impresión en favor de la idea y el sentimiento de la aproximación hispanoamericana. Sin embargo, en este asunto se planteaba ahora el problema de la puesta en práctica de la mencionada aproximación, sobre lo cual no existía una unanimidad de criterio. Unos pensaban en la realización de un intercambio universitario e intelectual, otros en las relaciones puramente mercantiles o en el contacto diplomático y entre Gobiernos, etc. Frente a esta multiplicidad de pareceres, Labra pensaba que la solución estaba en la reunión de todos estos factores, ya que dado el carácter eminentemente político de la cuestión, para su

completo desarrollo se necesitaba la acción oficial, pero también la cooperación entusiasta del conjunto de la sociedad.

Desde el punto de vista americano parecía que la afirmación de la personalidad hispana debía hacerse frente al movimiento estadounidense. En cualquier caso, la aproximación a aquellos países no constituía un interés exclusivo de España, sino que descansaba también en una necesidad de la América española, que ahora se expresaba en términos de gran energía y que pedía fórmulas prácticas de realización, debido a la acción creciente de intelectuales, políticos y ciudadanos de las naciones hispánicas en favor de su personalidad frente al movimiento paramericano. En este sentido, la América española tenía que encontrar fuerza en su tradición familiar, en sus notas fundamentales de raza y en el concurso de los españoles, que contribuían a la prosperidad y a la personalidad de aquellos países, ya que el movimiento de que se trataba era eminentemente americano y el concurso de España beneficiaba tanto a ésta como a América. No se trataba, pues, de que España desempeñase un papel directivo, lo que suponía un gran desconocimiento de las condiciones de la sociedad y de la política transatlánticas, sino de que se situase al lado de aquellas naciones con el carácter de "Hermana Mayor", buscando en la acción común la realización de nuevas circunstancias, de nuevas ideas, de nuevos empeños y la afirmación de nuevos avances en el Derecho Público Internacional. Para mantener estos propósitos de forma adecuada, se precisaba un nuevo sistema y un nuevo régimen en la vida diplomática y consular americana y una especial atención a la emigración española, factor inexcusable que mantenía en tensión todos los elementos del conjunto. Se trataba, en este sentido, de dinamizar el proceso, superando escollos al objeto de lograr esa tan deseada aproximación sobre la doble base de la libertad y la democracia (70).

Aparte de eso, el movimiento hispanoamericano, en opinión de Labra, no debía organizarse con un sentido de hostilidad hacia Estados Unidos; simplemente, había que afirmar la personalidad hispana en sus variadas posibilidades, lo cual no negaba la anglosajona, perfectamente armonizable con aquélla en la plenitud de la vida mundial y en la complejidad del Derecho Público contemporáneo. Por otro lado, lo importante en esta cuestión de la aproximación, aparte del intercambio universitario, del trato mercantil o de la relación diplomática, lo constituían la lengua y los emigrantes españoles que vivían en aquellas tierras, lo cual propiciaba el trato asiduo de esa masa personal con su nación de origen (71).

El carácter que España debía tener en el concierto mundial le venía dado, principalmente, por su larga historia en América, tanto por lo que había hecho allí como por lo que hacía en aquellos momentos. Las perspectivas eran, en este sentido, favorables: los hispanoamericanos buscaban la afirmación de la personalidad hispánica y los españoles, por su parte, lo hacían respecto de la americana, desarrollándose una política mútua de gran importancia, que estaba indicando a España que en ese rumbo estaba "el secreto de su porvenir y la base de su grandeza" (72). En este sentido y en relación con el tema del régimen consular y diplomático, podía decirse que el de la nación que se preciara de tal, debía hacer frente a las exigencias de la vida política internacional, generalizando, extendiendo y ampliando la representación diplomática y consular. Por ello, se precisaba una preparación del personal diplomático español en todos los campos para representar dignamente a la nación: "En todas partes, siempre, pero en particular en América, a donde nos llevan de un modo irresistible, atenciones, deberes y necesidades insuperables" (73).

Realmente, no se podía lograr una personalidad internacional adecuada sin una orientación exterior precisa, que excluía toda visión localista y parcial, so pena de dejar a la nación totalmente mediatizada. Dicha orientación se imponía, por otra parte, dada la posición geográfica española, el idioma y el valor representado por la emigración, afianzada en los últimos tiempos y especialmente caracterizada por su forma de asentamiento (74). Dentro de este contexto, los emigrantes españoles en América no sólo trabajaban y residían allí, sino que defendían una visión histórica concreta, que integraba al país de inmigración, sin olvidar el suyo propio, lo que suponía, en última instancia, la consagración de una labor de siglos y la victoria de toda una raza en beneficio de la civilización universal. Por esta razón, era del todo necesaria la acción gubernamental, a fin de lograr la reconstrucción de la familia hispánica de uno y otro lado del Atlántico, y para eso era indispensable que las clases directoras de la sociedad española se dieran cuenta de lo que ocurría y de la participación que podían y debían tomar en el asunto (75). En cualquier caso, estaba claro que en toda Hispanoamérica se acentuaba un movimiento de simpatía hacia la raza y de identificación con la Madre Patria, y que en aquellas tierras se daba una disposición excepcional en orden a las relaciones comunes, en virtud del papel que desempeñaban los representantes españoles, razón por la cual se debía mantener y fomentar la presencia española en América, ya que con ser España un factor europeo, era indiscutible que "no podía dejar de ser una Nación americana" (76).

Las circunstancias del momento habían llevado a España a ser geográfica y políticamente el centro de las grandes cuestiones internacionales contemporáneas y a colocarla en un dilema inexcusable, en el que debía ser una triste espectadora de

las resoluciones que adoptaran las grandes potencias, o intervenir en ellas con conciencia de su valía y representación (77). Ciertamente, a pesar de la pérdida de Cuba y Puerto Rico, España tenía un interés eminente en América y debía considerar "como cosa propia el progreso y la suerte de la América española, emancipada, independiente y soberana". Así, pues, se daban muchos y muy diversos hechos, que permitían desarrollar tanto la personalidad americana como la española y con ambas definir la íntima relación que existía entre una y otra en términos absolutos y en relación con las circunstancias propias del siglo XIX (78).

En ese orden de cosas, todos los esfuerzos debían dirigirse a la realización de nuevas acciones civilizadoras y a la afirmación de nuevos avances en el ámbito del Derecho Público Internacional. La lengua era, en ese sentido, un medio indispensable para facilitar el trato y para aproximar y unificar las ideas bajo la acción combinada de los recuerdos, las tradiciones, los sentimientos y las necesidades comunes de conservación, resistencia, avance y expansión. Precisamente, desde este punto de vista se debía favorecer la difusión del espíritu y de las ideas españolas y valorar en su justa medida la presencia de la emigración hispana en América, factor del concierto social y motor del cambio económico (79). Sin embargo, las relaciones con Hispanoamérica también entrañaban sus peligros. En primer lugar, por razón de las costumbres y las leyes, que, en general, hacían obligatoria la nacionalidad para los que nacían en América, fuera cual fuese su procedencia; después, por las exigencias relativas al servicio militar y, por último, por las propias dificultades del proceso de aproximación espiritual entre españoles y americanos.

Estas indicaciones hechas por Labra en el Senado tenían un carácter de advertencia no sólo para España, sino para la

propia América, porque convenía dejar bien claro que la aproximación de la familia hispánica no era única y exclusivamente cuestión española. Se trataba, realmente, de un tema que afectaba a toda la comunidad hispánica, porque contribuía al robustecimiento de la personalidad de España y de aquellas Repúblicas sin merma de la autonomía de cada una de éstas y sin pretensiones de hegemonía, dirección o superioridad por parte de la antigua metrópoli (80). Así, por ejemplo, en su momento Cuba había sido un elemento poderosísimo para establecer relaciones entre España y el continente americano, pero en el presente, lo que se hiciese en aquella isla constituía una recomendación transcendental para dicho continente, tanto o más que cuando Cuba era provincia española. Por esta razón, hacía falta cualquier clase de sacrificios compatibles con la vida nacional, y ello con carácter de urgencia, ya que uno de los defectos que siempre habían aquejado históricamente a España había sido "llegar tarde a las soluciones y luego no aprovecharse de la experiencia, ni siquiera de la experiencia propia, frecuentemente, dolorosísima" (81).

Ciertamente, la obra americanista implicaba dos cuestiones: el nuevo Descubrimiento de América, que debía realizarse en España, y la nueva Conquista de aquélla, que tenía que hacerse en el Nuevo Mundo. El Descubrimiento suponía un serio estudio y una amplia vulgarización de toda una serie de cuestiones tales como el valor de las Repúblicas hispanoamericanas, de sus hombres, de sus cosas y de sus instituciones; las relaciones intelectuales, políticas y económicas con Norteamérica y especialmente con Europa; la importancia de la inmigración de masas y de su acción política, y el hecho de la propia relación entre España y las Repúblicas hispanas. A su vez, la Reconquista del continente, "fruto del amor, el trabajo y el interés de la raza", estaba encomendada a

los españoles que vivían en aquellas tierras y a una firme política exterior del Gobierno atenta a todas las necesidades e intereses de España y América.

Esta labor en pro de la aproximación al Nuevo Mundo había recibido un gran impulso como consecuencia de una serie de factores, entre los que podían contarse el aumento considerable de la inmigración; el nuevo sentido de las modernas generaciones; la brillante campaña de artistas, literatos, profesores y catedráticos; la intensificación del panamericanismo, y el efecto natural del paso del tiempo, que había hecho posible la rectificación de las pasiones de la época de la Emancipación y el afianzamiento de la crítica imparcial de la Historia de España en América. Además, la vulgarización de las realidades hispanoamericanas implicaba una explicación particular y concreta, primero, de lo que era América entonces; segundo, de lo que valía y de lo que representaba en el concierto mundial contemporáneo, y tercero, de lo que suponía para España y de los medios con que ésta contaba en el Nuevo Mundo para utilizar las disposiciones de aquellas Repúblicas en función de su personalidad y de su misión histórica. En todo caso, convenía dejar bien claro que en este movimiento americanista España no pretendía mantenerse en una postura de dirección, sino de compañerismo, que dicho movimiento no era una empresa meramente literaria, pedagógica o mercantil, sino genérica y sobre todo política y social, y que no era en beneficio exclusivo de España, sino también de América, cual correspondía "al prestigio y porvenir de la raza" (82).

Según la opinión de Labra, había que oponerse a la pretensión de los políticos norteamericanos de proclamar su hegemonía en el Nuevo Mundo, ante lo cual los hispanoamericanos habían reaccionado al encontrarse con una postura contraria a la

vida, el prestigio y la personalidad de su propia tierra y su propia esencia. Por esta razón, había surgido dicha reacción y frente al panamericanismo había aparecido el hispanismo, que volvía la mirada hacia la tradición, en cuyo centro se hallaba España, "porque América tenía derecho, absolutamente, como nosotros a toda nuestra Historia, desde que comenzó el siglo XVI, hasta que, después de las Cortes de Cádiz, vino la separación" (83). En realidad, esta reacción, reforzada por la expulsión de España del continente americano y por los progresos de la propaganda panamericana, constituía una ferviente esperanza en el camino de la aproximación; esperanza que se veía reflejada, entre otras cosas, en los sucesivos estudios, serios e imparciales, que iban apareciendo sobre la colonización española, exentos ya "de las críticas apasionadas e implacables de los años anteriores" (84).

En orden al establecimiento de una comunicación franca y duradera con América, se hacía preciso abordar una serie de puntos, entre los que se contaban los siguientes: el desvanecimiento de las prevenciones; la estimación de lo que realmente era y representaba América en la actualidad; la consideración de los antecedentes españoles, no a título de superioridad, sino como estímulo para la concordia y la realización de nuevas y grandes empresas bajo los modernos supuestos internacionales y dentro de las exigencias de los tiempos; el abandono de toda idea de predominio; la comunicación de las ideas, las personas y las cosas; la concertación de los países hispánicos en una empresa común, grande y desinteresada, etc. Además, era preciso vencer un conjunto de obstáculos que dificultaban la constitución de la sociedad hispanoamericana al estorbar a los pueblos hispánicos del Nuevo Mundo la búsqueda de un punto de referencia que les permitiera su reorganización y aproximación. Así, al pretender reconstruir, dentro de las nuevas

condiciones creadas por el Derecho moderno y por las exigencias sociales universales, el carácter histórico común de uno y otro lado del Atlántico, no podían tomarse como marco de orientación los errores del sistema que había imperado en las Antillas y que se oponía a los resultados de las más recientes experiencias en materia de colonización, negando, sustancialmente, todo el espíritu encarnado por los políticos colonialistas y por los legisladores españoles en los siglos XVI y XVII.

Por esa razón, se tenía que plantear bien los problemas, sin jactancias ni ilusiones, aprovechando la corriente de aproximación existente e inspirándose en el gran sentido de la Historia hispana, a fin de lograr la recuperación de la influencia española en América, el afianzamiento de su representación en Europa y la realización en aquel continente de una obra dotada de un espíritu análogo al que había caracterizado la colonización en los siglos anteriores. Había, pues, que conseguir que todo el mundo comprendiese lo que eran y lo que valían las Repúblicas hispanoamericanas, los problemas que se debatían en aquellas tierras y la necesidad de completar y fortificar las respectivas personalidades con el concurso de todos los elementos posibles (85).

El Tratado de París de 1898 había supuesto algo muy trascendental para la Historia Internacional y para la política exterior de España, así como para las relaciones particulares de ésta con la América hispánica, pues había provocado la pérdida por España de su carácter de nación americana y evidenciado la desatentada política ultramarina realizada en la segunda mitad del siglo XIX y el profundo error de la política de aislamiento internacional. De esta forma, el Desastre había impuesto una nueva forma a la acción de España en América, "donde, desde entonces, no tenía posesión material de ningún género, pero sí un

vasto y favorable escenario para realizar una política de serio empeño y gran alcance" (86). Dentro de este contexto, todavía faltaba por hacer una gran labor: la relativa a la extensión de la influencia española en la América hispánica, enfrentada al sentido absorbente y exclusivo de Estados Unidos, y ello no sólo en función de los intereses de la antigua metrópoli, por razón de sus antecedentes y de la representación que tenían en aquellas tierras los inmigrantes, sino también por la economía, la política y la sociedad mundiales (87).

Precisamente, desde el primer momento, el problema ultramarino se había convertido, en la mente de los autonomistas, en una lucha sin tregua por la abolición de la esclavitud, por la identidad de derechos de españoles y antillanos y por la autonomía, y ello no sólo para lograr una mera modificación del régimen interior ultramarino y la defensa de los intereses locales, sino también una transformación de España, cuya primera fórmula había de ser la aproximación hispanoamericana, utilizando como poderosos medios para esta empresa la libertad de las provincias ultramarinas de entonces y la reconciliación de la antigua metrópoli con las Repúblicas hispanoamericanas. Así, la reconstrucción de la personalidad internacional de España suponía la reactivación de la tradición y de la representación americana, sostenida no sólo por los intereses y por la Historia, sino por la presencia de los emigrantes españoles y por la corriente de aproximación existente, y ello por motivos especiales y decisivos de esos países y de la política general del mundo (88).

Ciertamente, el paso del tiempo produjo el asentamiento de un orden más o menos regular de carácter liberal y democrático en América y España y un movimiento de aproximación y reconciliación de los pueblos español y americano, acompañado de la emigración al continente y del incremento de la propia estima,

frente a la política panamericana. En dicho proceso influyó, asimismo, el progreso de las opiniones y de las instituciones políticas de los últimos tiempos, tanto por la virtualidad de las ideas liberales y democráticas y la rectificación de los compromisos y actitudes de los Gobiernos, como por la atenuación de las prevenciones y preocupaciones de los elementos sociales del Nuevo Mundo, en relación con la representación política de la antigua metrópoli y con sus condiciones morales, intelectuales y económicas, así como con su actitud con respecto a Europa. En cualquier caso, no se podía negar la influencia que la libertad ejercía en las costumbres e inclinaciones de los pueblos, empujados por aquella fuerza a la tolerancia. Precisamente, la aproximación hispanoamericana y el empeño americanista tenían necesidad de un gran ambiente liberal y democrático. Por eso, desconocer el espíritu progresivo y expansivo de la época contemporánea equivalía a reducir los esfuerzos a algo absolutamente vacío de contenido (89).

En este sentido, para España "el actual movimiento hispanoamericano no respondía a un mero interés peninsular y mucho menos a una afición literaria o científica. Lo imponía una verdadera necesidad política y respondía a un interés vital y al instinto de conservación de los Grandes Pueblos" (90). Por esta razón, España, necesitada de América, no había terminado su papel en la obra de la civilización moderna y por tanto debía reaparecer, identificada con el sentido de la época contemporánea, entre las naciones del mundo hispanoamericano para reanudar con nuevas formas "la obra característica de la Gran Familia Hispánica" (91). De esta forma, los emigrantes españoles estaban en disposición de adherirse al desarrollo de la vida ultramarina, porque habían contribuido a su engrandecimiento, correspondiendo a la hospitalidad que allí se les había dado, y porque se necesitaba destruir cualquier sombra de colonialismo y

de revancha, para que quedara claro el apoyo a la idea de la personalidad americana, "la cual descansaba en una admirable armonía de los supuestos de la Historia de las Españas con las exigencias del progreso general y del Derecho Público del Mundo Contemporáneo" (92).

En aquellos momentos se planteaban dentro y fuera de España problemas análogos a los de antes, aunque con otra apariencia y con otro alcance, y ello pedía la afirmación de los ideales comunes y de las fórmulas de vida colectiva, que a su vez determinaban un gran sentido de armonía social y una fuerte tendencia progresiva. Por otra parte, España no podía ser, en ningún caso, un satélite de las grandes naciones, ni una excepción en el mundo político contemporáneo; antes al contrario, estaba obligada a continuar representando algo sustancial en la vida moderna por su historia, por su posición, por sus elementos étnicos, por su lengua, por su literatura y por los españoles que vivían fuera de España y singularmente en América (93). Mientras tanto, América se esforzaba por evidenciar en sus relaciones con la Madre Patria un gran sentido de concordia, de aproximación y fraternidad, lo que demostraba que el espíritu español "vivía y perduraba en toda su grandeza histórica" y que toda América caminaba hacia una reconciliación con la vieja metrópoli, buscando una unidad, cada vez más poderosa (94).

Así, pues, se precisaba una comunicación fácil, rápida y constante entre los centros intelectuales, las representaciones económicas, industriales y mercantiles y los organismos diplomáticos de uno y otro lado del Atlántico, para los cuales era de suma importancia hacer ver que la personalidad internacional necesitaba completarse con la nota americana. Realmente, las cosas que habían ocurrido ultimamente en América constituían para cualquier Gobierno español un motivo de atención

constante, a fin de utilizar los medios que le brindaba la sociedad hispanoamericana y que eran no sólo una obra española, sino también un complemento de la vida americana. Ningún pueblo, tal como señaló Labra, podía tener en América una representación semejante a la de España, que contaba en aquellas tierras con un gran número de personas que hablaban el mismo idioma, que tenían la misma religión y particularmente la misma Historia, lo que suponía una caracterización propia dentro del mundo contemporáneo. Además, a ello debía unirse el trasvase financiero, que suponía la acumulación de capitales hechos por los españoles en América y traídos a la península y la colocación de capitales españoles en los negocios americanos, todo lo cual implicaba un flujo monetario de gran importancia, capaz de contribuir a la dinamización de dicho mercado económico (95).

Ciertamente, el movimiento americanista en España había tomado un desarrollo extraordinario a partir de 1910, revistiendo incluso un cierto carácter popular, al tiempo que en América se había rectificado la desconsideración que pesaba sobre la Madre Patria como consecuencia de las pasiones desatadas por las guerras ultramarinas y de la propaganda en contra desarrollada durante muchos años por críticos adversos, cuya parcialidad y exageraciones estaban hoy reconocidas. En realidad, podía decirse que sin América no se comprendía a España y que la empresa del Descubrimiento y posterior Colonización era lo que nos daba más carácter y representación en el concierto mundial. Por ello podía afirmarse que con la pérdida de Cuba y Puerto Rico "no había terminado el compromiso de nuestro empeño colonial, iniciado hacía cuatrocientos años" y que la aproximación hispanoamericana era algo serio y trascendental, que afectaba a la personalidad y "al prestigio y fuerza de la Gran Familia Hispánica". En estas circunstancias, revestían especial importancia las relaciones de todo orden entre España y el extranjero, y principalmente con los

países a los que nos unían lazos de especial afecto, con lo cual ahora surgía con nuevos motivos, con carácter más apremiante y para fines distintos el mismo problema de la exteriorización y de la especial acción de España en América (96).

Por tales razones, las relaciones de España con América no podían reducirse únicamente a intereses mercantiles, ya que la obra colonial española, obra de expansión y de alcance mundiales, se orientaba por sus propias características hacia más amplios horizontes. Las circunstancias del momento ofrecían excepcionales coyunturas para que en España se acentuase la campaña política y económica americanista, distinta de las lucubraciones literarias o históricas, que habían preocupado a cierto número de personas, "entusiasmadas con los ideales de raza y con las grandezas de nuestro deslumbrador pasado". Además, a dicha campaña debían contribuir todos, tanto el Gobierno como las clases directoras y las asociaciones y corporaciones, obligadas a pensar en la exteriorización de España. Y precisamente pensando en ello, se tenía que considerar la importancia moral, económica, numérica y material de los españoles que vivían en América, los cuales, sin duda alguna, constituían el primer factor de la aproximación hispanoamericana. Por esta razón, aquellos españoles debían mantener el prestigio de España en América y recabar de la opinión pública peninsular la atención precisa y el reconocimiento de su fuerza y representación, poniendo de manifiesto sus necesidades y reclamaciones (97).

Así, pues, las cuestiones relativas a la aproximación hispanoamericana no estaban acabadas, en modo alguno, sino todo lo contrario. España no sólo había descubierto y conquistado América, sino que la había colonizado, razón por la cual debía rematar su labor "como Nación hermana (Hermana Mayor, si se quiere, por razones históricas) de las independientes Repúblicas

hispanoamericanas" (98). La personalidad de España debía basarse en la afirmación del pueblo español como nación soberana con carácter propio y sustantivo y con sentido de la representación hispánica, entendida como factor eminente de la civilización moderna y con derecho a figurar como uno de los elementos directivos de la política mundial contemporánea. Ello derivaba de los antecedentes históricos de España, del temple de su raza, de su posición, de sus condiciones geográficas, de su tradicional y constante fuerza expansiva y de la concurrencia de las directrices de Europa y América. Dentro de este contexto, se contemplaba una orientación internacional definida y estructurada en torno a una acción diplomática y de relaciones externas, sociales, intelectuales y económicas, expansiva y persistente, así como una cultura nacional en armonía con la dirección general, moral y política del mundo, nutrida por una vigorosa educación popular (99).

Ciertamente, España encontraría en la aproximación hispanoamericana elementos de fortificación y de vida, base y oportunidades para iniciativas y expansiones, que vigorizarían su acción en caminos y empresas, correspondientes a su papel histórico, pero también era verdad que aquella aproximación constituiría un positivo interés para los pueblos de Hispanoamérica al favorecer y robustecer su propia y singular personalidad y al mantener su carácter ibérico, "ya afirmando la identidad del origen y de los compromisos comunes en el trato con otros pueblos y frente a políticas contrarias y absorbentes, ya utilizando el vigor y el prestigio de los millares de españoles que en aquellas tierras vivían y que en ellas eran uno de los más considerables elementos políticos, económicos y sociales" (100).

Las Repúblicas hispanoamericanas, formadas por la acción directa de España, con sus propios elementos y su misma

sangre, en colaboración con las razas indígenas y con un espíritu de asimilación progresiva, a pesar de haberse separado de la Madre Patria no habían destruido sus recuerdos, sus simpatías, la similitud de costumbres, su lengua, ni la dirección general de sus ideas, lo cual favorecía extraordinariamente la labor de aproximación e identificación de los pueblos peninsular e hispanoamericano, coincidiendo esto con la necesidad de España de dar carácter y tono a su representación internacional, en la que debía borrar "los malos efectos del retraso, con que había actuado en el curso de la mayor parte del siglo XIX" (101).

En este orden de cosas, la aplicación a Cuba y Puerto Rico de una adecuada política colonial habría constituido un factor de suma importancia para la recuperación moral de la América hispana y "para una reconciliación fecunda y admirable de los antiguos miembros de la Familia Hispánica", si bien era verdad que la pérdida de las provincias ultramarinas había contribuido a facilitar esas relaciones de un modo especial y quizá insospechado. En cualquier caso, España no era comprensible sin América, puesto que "toda nuestra Historia era también la Historia del mundo latinoamericano, el cual tenía perfecto derecho a considerar como propias y al igual que las regiones peninsulares nuestras tradiciones, nuestras glorias y nuestras desgracias anteriores al segundo tercio del siglo XIX" (102).

Había que valorar, pues, positivamente las disposiciones de la sociedad hispanoamericana respecto del acercamiento de americanos y españoles, pero eso no quería decir que el proceso fuese fácil, ni que se pudiera quedar en los aspectos superficiales del problema. La tendencia era estimable, pero se necesitaba complementarla y extenderla. Por eso, se precisaba una persistente y sistemática labor, entre cuyos objetivos debían destacar el conocimiento de la situación y de

las condiciones de América y España, planteados dentro del moderno Derecho Público Internacional. Entre las dificultades existentes contaban en grado muy elevado las pretensiones de hegemonía por parte de Estados Unidos, frente a lo cual se tenía que fortificar el carácter étnico de las sociedades hispanoamericanas, recordar su historia y robustecer su personalidad de las mismas, basando todo ello en las tradiciones comunes, en los vínculos familiares, en la comunidad religiosa, en la similitud de costumbres y en la unidad de lengua (103).

Se trataba, pues, de conseguir que la familia hispánica mantuviese la representación que realmente la correspondía por su historia, sus éxitos, sacrificios, desgracias, energías y carácter. Pero para ello hacían falta soluciones concretas y prácticas y dejarse de fórmulas vagas, retóricas oficiales y programas resonantes, teniendo en cuenta, además, que el problema hispanoamericano no era un mero problema político o de gobierno, un empeño mercantil, un interés pedagógico, un tema científico o un alarde literario, sino también un complejo político internacional y social, que pedía el concurso de muchos elementos oficiales y extraoficiales de uno y otro lado del Atlántico. Por estas razones, hacía falta, de una parte, determinar con precisión el problema hispanoamericano en sus términos propios y en sus alcances más o menos inmediatos y, de otra, encontrar la manera rápida y positiva de conseguir el acercamiento de americanos y españoles, tanto para el conocimiento mutuo como para aportar los medios necesarios, a fin de emprender una labor pronta y eficaz en diferentes órdenes y con la cooperación de diversos miembros políticos, intelectuales, económicos y sociales (104).

Así, pues, la cuestión de la aproximación hispanoamericana contemplaba, tal como expuso Labra en el Senado,

dos aspectos íntimamente relacionados: primero, el acercamiento progresivo de españoles y americanos para su mútuo conocimiento y completa estimación a fin de preparar y conseguir la aproximación moral; segundo, la relación política, económica y social, en que había de descansar la acción de todos los miembros de la gran familia hispánica repartida por el mundo, sin exclusiones injustas o contraproducentes de otros elementos nacionales y universales y en beneficio general del Derecho y del progreso de la civilización. Por esta razón no había por qué hablar solamente de un pasado prestigioso, ni quedarse en los lamentos y en las propuestas; había que dominar la realidad, alentando las esperanzas y percatándose del destino, de los deberes y de la misión española en el mundo, motivo por el cual se debía reanudar la acción española con fe, esperanza "y con la convicción profunda, de que España no podía vivir sin personalidad y en el aislamiento" (105). En este sentido, el evidente movimiento de aproximación del Gobierno estadounidense a España y al Gobierno español se debía al convencimiento, dentro de la política de expansión de Estados Unidos y del propio panamericanismo, de que la manera adecuada de influir en Hispanoamérica era mediante una aproximación y una inteligencia con España (106).

En cualquier caso, en todas estas cuestiones de la aproximación iberoamericana no todo dependía del valor económico de las relaciones, ya que precisamente, lo que había salvado a todos los pueblos y determinado los grandes actos de la Humanidad era el movimiento espiritual, el movimiento de las ideas. En este sentido, España no sólo había representado en América la explotación mercantil, sino que también había llevado allí su carácter, su idea de lo que representaba en la Historia y el propio catolicismo, y esto había constituido la nota más característica de la civilización española, superior en muchos aspectos a las demás colonizaciones europeas (107). En vista,

pues, de tales planteamientos, era necesario desarrollar una gran política internacional, una política de exteriorización, sujeta a las leyes del tiempo y lanzada a las grandes corrientes de la época, aunque exenta de aventuras y violencias y con absoluto abandono de todo aquello, que pudiese saber a "monopolio, dictadura y esclavitud". En este orden de cosas, el alcance y la trascendencia de las relaciones de amistad con la América hispánica exigía el fortalecimiento de aquéllas "con algo más que sentimentalismos, con una política de penetración intensa, tanto en lo espiritual como en el referente a los intereses materiales", que debía ser guía y norte para el establecimiento de dichas relaciones con aquellas Repúblicas (108).

N O T A S.

- (1) Sobre estas cuestiones puede consultarse el fino e ilustrativo análisis de HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, MARIO: Ciclos Kondratieff y Modelos de Frustración Económica Ibero-Americana (Siglo XIX), "Revista de la Universidad de Madrid" (Madrid), XX, núm. 78 (1972), págs. 202-236.
- (2) Sobre la relación existente entre la Doctrina Monroe y el panamericanismo véase, QUENILLE, PIERRE: L'Amérique Latine. La Doctrine Monroe et le Panaméricanisme (París 1969).
- (3) Sobre el origen y desarrollo del panamericanismo véase, VAN AKEN, MARK J.: Pan-Hispanism. Its Origin and Development to 1866 (Berkeley 1959).
- (4) Para una caracterización valorativa de la cultura creada por España en Hispanoamérica puede consultarse HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, MARIO: Historia y Literatura de Hispanoamérica (1492-1820). La Versión Intelectual de una Experiencia (Madrid 1978).
- (5) Instituto Español de Estudios Estratégicos: España en la Crisis del Gran Colonialismo: Los Orígenes del Hispanoamericanismo, en "Seminario: La Defensa Nacional y el Mundo Hispánico" (Madrid 1983), págs. 12-13.
- (6) Sobre éstas y otras cuestiones relacionadas con la política española en Hispanoamérica durante el siglo XIX véase, DELGADO, JAIME: España y México en el Siglo XIX (Madrid 1950-1953), Vol. I, págs. 1-35 y 91-142.
- (7) DELGADO, JAIME: España ante el 98, "Boletín Americanista" (Barcelona), VII-XI, núm. 19-27 (1965-1969), pág. 56.
- (8) Ibid., pág. 48.
- (9) Instituto Español de Estudios Estratégicos: Ob. cit., págs. 26-27; 29-30 y 32-33.
- (10) Sobre este cambio de mentalidad véanse, NIETO FUNCIA, ALFREDO: Restauración de la Unidad y Hermandad Hispanoamericana (s.l. s.a.); REYES, R.: España y América (Ginebra 1911) y SEPICH, JUAN RAMON: Misión de los Pueblos Hispánicos (Madrid s.a.).
- (11) En relación con la búsqueda de la solidaridad cultural del mundo hispánico véanse, CHAVES, JULIO CESAR: Definición, Realidad y Sueño de la Hispanidad (Madrid 1963); GALLINAL HEBER, ALEJANDRO: El Espíritu de la Hispanidad, Base y Cima de Construcciones Universales (Madrid 1952) y HAMILTON, CARLOS: Comunidad de Pueblos Hispánicos (Madrid 1951).

- (12) DELGADO, JAIME: España ante el 98, "Boletín Americanista" (Barcelona), VII-XI, núm. 19-27 (1965-1969), pág. 57.
- (13) Instituto Español de Estudios Estratégicos: Ob. cit., págs. 39-40.
- (14) Sobre los valores y posibilidades del hispanismo véanse, SAIZ BARBERA, JUAN: España y la Idea de la Hispanidad: La Lucha de las Tres Españas (Madrid 1982) y La Verdad de España en América: El Triunfo de la Raza Hispánica (Madrid 1983). También puede consultarse: SANCHEZ PEREZ, J.M.: Lo Hispánico. Un Nuevo Concepto de Hispanidad (México 1971).
- (15) JOVER ZAMORA, JOSE MARIA: La Epoca de Alfonso XIII, en "Introducción a la Historia de España" (Barcelona 1969), págs. 918-921.
- (16) CARR, RAYMOND: España: 1808-1939 (Barcelona 1969), pág. 373.
- (17) Instituto Español de Estudios Estratégicos: Ob. cit., pág. 42. Una evolución general de todo el proceso puede seguirse en ZULETA ALVAREZ, ENRIQUE: La Idea de América en el Pensamiento Español Contemporáneo (1900-1936) (Mendoza 1979).
- (18) FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. III, págs. 195 y 202-204.
- (19) Ibid., Vol. III, págs. 205-206. Para un conocimiento en profundidad de la Generación del 98 véanse, LAIN ENTRALGO, PEDRO: La Generación del Noventa y Ocho (Madrid 1970) y sobre todo JESCHKE, HANS: La Generación de 1898. (Ensayo de una Determinación de su Esencia) (Madrid 1954).
- (20) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Guerra con Chile, "Revista Hispano-Americana" (Madrid), IV, núm. 2 (27-XI-1865), págs. 53-55.
- (21) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Emancipación de América, "El Abolicionista" (Madrid), II, núm. 9 (10-I-1873), pág. 75.
- (22) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Los Partidos en Ultramar, "La Tribuna" (Madrid), I, núm. 1 (2-V-1882).
- (23) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Intimidación Ibero-Americana, 1892-1894 (Madrid 1894), págs. 14-17.
- (24) LABRA, RAFAEL MARIA DE: España y las Repúblicas Sudamericanas (Madrid 1895), págs. 15-17.

- (25) Ibid., págs. 24 y 26-27.
- (26) Ibid., págs. 52-53.
- (27) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Derecho Público Contemporáneo Determinado por los Tratados Internacionales (Madrid 1900), págs. 3 y 15.
- (28) Ibid., págs. 83-84.
- (29) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898, Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900), págs. 5-6.
- (30) Ibid., págs. 80-81.
- (31) Ibid., págs. 83-84.
- (32) Ibid., págs. 88-90 y 92.
- (33) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Dirección Patriótica, "Unión Ibero-Americana" (Madrid), XIV, núm. 169 (30-VI-1900), pág. 6.
- (34) Ibid., XIV, núm. 170 (15-VII-1900), págs. 4-5.
- (35) Ibid., XIV, núm. 171 (30-VII-1900), pág. 6.
- (36) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Aproximación Hispano-Americana, "El Financiero Hispano-Americano" (Madrid), I, núm. 5 (3-V-1901), págs. 99-100.
- (37) Ibid., I, núm. 6 (10-V-1901), pág. 124.
- (38) Ibid., I, núm. 7 (17-V-1901), págs. 155-157.
- (39) Diario de Sesiones del Senado, 17 y 18 de Julio de 1901.
- (40) Ibid., 4 de Noviembre de 1901.
- (41) Ibid., 7 de Diciembre de 1901.
- (42) Ibid., 14 de Diciembre de 1901.
- (43) Ibid., 24 de Diciembre de 1901.
- (44) Ibid., 26 de Diciembre de 1901.
- (45) Ibid., 30 de Diciembre de 1901.
- (46) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 754-755.
- (47) Ibid., págs. 756-758.

- (48) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Congreso Hispano-Americano de 1900 (Madrid 1901), págs. 5-7.
- (49) Ibid., págs. 8-9 y 11-12.
- (50) Ibid., págs. 14-17.
- (51) Ibid., págs. 21-26; 29-31 y 41.
- (52) Diario de Sesiones del Senado, 17 de Febrero de 1902.
- (53) Ibid., 28 de Febrero de 1902.
- (54) Ibid., 27 de Noviembre de 1902.
- (55) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Sociedad Libre de Derecho Internacional, "Nuestro Tiempo" (Madrid), II, núm. 22 (1902), págs. 457-460.
- (56) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Exterior de España, "Unión Ibero-Americana" (Madrid), XVII, núm. 207 (30-IV-1903), págs. 2-3.
- (57) Diario de Sesiones del Senado, 8 de Junio de 1903.
- (58) Ibid., 9 de Junio de 1903.
- (59) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Derecho Internacional y Los Actuales Problemas Internacionales y Jurídicos (Madrid 1905), págs. 12-13.
- (60) Diario de Sesiones del Senado, 4 de Noviembre de 1905.
- (61) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Problema Hispano-Americano (Madrid 1906), págs. 16-22.
- (62) Ibid., págs. 31-34.
- (63) Ibid., págs. 53; 55; 57 y 66-68.
- (64) Ibid., págs. 71-76; 87-88 y 94.
- (65) LABRA, RAFAEL MARIA DE: España y América en el Centenario de 1808, "El Mercurio" (Barcelona), VIII, núm. 78 (1-V-1908), pág. 1511.
- (66) Diario de Sesiones del Senado, 2 de Diciembre de 1908.
- (67) Ibid., 3 y 4 de Diciembre de 1908.
- (68) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Los Problemas de América, "El Financiero Hispano-Americano" (Madrid), IX, núm. 408-409 (29-I-1909), págs. 55-57.
- (69) Diario de Sesiones del Senado, 3 y 4 de Marzo y 3 de Junio de 1909.
- (70) Ibid., 2 y 6 de Julio de 1910.

- (71) Ibid., 22 de Julio de 1910.
- (72) Ibid., 9 de Noviembre de 1910.
- (73) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Política Internacional. Orientación Americana de España (Madrid 1910), págs. 10; 15 y 17.
- (74) Ibid., págs. 21-25; 27; 29 y 31.
- (75) Ibid., págs. 49-52 y 57.
- (76) Ibid., págs. 63 y 82.
- (77) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Exterior de España (Madrid 1910), págs. 12-13.
- (78) Ibid., págs. 32-36.
- (79) Ibid., págs. 41-42.
- (80) Diario de Sesiones del Senado, 12 de Junio de 1911.
- (81) Ibid., 14 de Junio de 1911.
- (82) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Intimidad Hispano-Americana, "El Mercurio" (Barcelona), XI, núm. 128 (13-VII-1911), págs. 236-237.
- (83) Diario de Sesiones del Senado, 20 de Junio de 1912.
- (84) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Declaraciones y los Decretos de las Cortes de Cádiz sobre América (Madrid 1912), págs. 13-14.
- (85) LABRA, RAFAEL MARIA DE: España y América, 1812-1912. (Estudios Políticos, Históricos y de Derecho Internacional) (Madrid 1913), págs. X-XV.
- (86) Ibid., pág. 5.
- (87) Ibid., pág. 124.
- (88) Ibid., págs. 262-263.
- (89) Ibid., págs. 272-276.
- (90) Ibid., pág. 283.
- (91) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Centenario Español de 1812 (Madrid 1913), pág. 5.
- (92) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Estudios sobre las Cortes de Cádiz. El Panteón Doceañista (Madrid 1913), págs. 10-12.
- (93) Ibid., págs. 42-44.

- (94) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Cortes de Cádiz de 1810-1813. América y la Constitución Española de 1812. (Estudio Histórico Jurídico) (Madrid 1914), págs. 2 y 12.
- (95) Diario de Sesiones del Senado, 8 de Mayo de 1914.
- (96) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Colonial y la Revolución Española de 1868 (Madrid 1915), págs. 116-118 y 122.
- (97) Ibid., págs. 189-194.
- (98) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Mi Primer Discurso Parlamentario. (La Cuestión Colonial, 1871. Antecedentes, Debates, Efectos) (Madrid 1915), pág. 5.
- (99) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Personalidad Internacional de España (Madrid 1915), págs. 8-9.
- (100) Ibid., págs. 33-34.
- (101) Ibid., págs. 39-40 y 54.
- (102) Ibid., págs. 58-59 y 62.
- (103) LABRA, RAFAEL MARIA DE: El Problema Hispano-Americano (Madrid 1915), págs. 37-38 y 44.
- (104) Ibid., págs. 66-69.
- (105) Diario de Sesiones del Senado, 3 de Junio de 1916.
- (106) Ibid., 31 de Octubre de 1916.
- (107) Ibid., 7 de Diciembre de 1916.
- (108) FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: D. Rafael María de Labra y la Política de España en América y Portugal (Madrid 1922), págs. 26-28 y 31-33.

IV) CONCLUSIONES.

En realidad, la "liquidación" del Imperio ultramarino a fines del siglo XIX estuvo preludiada por una serie de hechos, generales unos, específicos otros, que determinaron su realización y de los que fue reflejo la contradicción existente, en esta materia como en otras, entre los postulados teóricos del pasado y las realidades prácticas del momento. El problema era complejo y, a la vez, lejano en el tiempo, ya que posiblemente podía remontarse al siglo XVII, pasados ya los momentos esforzados de las primeras generaciones que dieron a conocer América al Viejo Mundo. Efectuado el gran esfuerzo del Descubrimiento y de la posterior Conquista y Colonización del siglo XVI, al español dejaron de importarle intimamente, en líneas generales, América y sus problemas, y esta actitud se agudizó con el paso del tiempo. El extraordinario derroche de energías agotó a la nación y a ello vino a sumarse la quiebra de la potencialidad española en Europa. De esta forma, paulatinamente, sin que quizá fuese perceptible a las propias personas, fue invadiendo las conciencias individuales, para pasar después a ser una actitud colectiva, un sentimiento que produjo un progresivo alejamiento mental respecto de aquellas tierras, que fueron importando cada vez menos como tarea colonizadora. Esta situación enlazó con las reformas borbónicas para América y acabó configurándose plenamente en el siglo XIX con los postulados industriales e imperialistas de aquella centuria.

Ciertamente, las generaciones forjadoras del Imperio hacía ya mucho tiempo que habían desaparecido, y los hombres que tuvieron que enfrentarse con el movimiento emancipador se obcecaron en exceso por lo mucho que se había perdido (actitud psicológica), imperando poco a poco la fuerza de la inercia (1).

Por otra parte, junto al hecho anteriormente señalado y hasta cierto punto como su consecuencia lógica, se produjo un cambio sustancial en la mentalidad española sobre la empresa americana, que adquirió su plena configuración en el siglo XIX y que quedó caracterizado por la pérdida del sentido colonizador y su sustitución por criterios de índole colonialista. Este hecho determinó que ante la necesidad de replantear las relaciones metrópoli-provincias ultramarinas, tras la Emancipación, se discutieran distintos sistemas coloniales, poniendo y tomando como ejemplo los de otras naciones, cuando el patrón a seguir estaba en la propia tradición civilizadora española (2).

Tal como se había hecho antes (siglos XVI y XVII) al tratar a los reinos de América en pie de igualdad, de acuerdo con las exigencias de la época, se debió haber continuado después en relación con las necesidades de los nuevos tiempos (3). El no hacerlo así llevó consigo la discriminación y el distanciamiento, síntomas evidentes de la pérdida del sentido misional e igualitario. De esta forma, mientras los hombres de las Leyes de Indias trasplantaron a Ultramar las mismas ideas fundamentales y los mismos principios políticos existentes en la metrópoli, los políticos constitucionales se obstinaron en no llevar a cabo esa acción, porque la España del siglo XIX había transformado su mentalidad y se comportaba, por primera vez en su historia, como una nación no colonizadora, sino colonialista (4).

Posteriormente, tal como ocurrió a principios de siglo, los políticos liberales, al perder el sentido de consideración anterior, no se dieron cuenta de que precisamente una de las bases de los movimientos insurreccionales estaba en el espíritu de igualdad con España pedido por los criollos y denegado de forma sistemática. Esa falta de consideración real, consecuencia de la aludida transformación, supuso la constante negativa de

reformas, en consonancia con el siglo, hasta época muy tardía, de donde surgió, poco a poco, la conciencia separatista y la imposibilidad de encauzar armónicamente los anhelos criollos, que hubieran debido desarrollarse progresivamente hacia la independencia, culminación normal de todo proceso colonizador, preparando "las cosas, para que la forzosa separación llegara dulcemente y sin quebranto" (5).

Desde este punto de vista, la sublevación cubana, por ejemplo, se justificó históricamente como consecuencia de los defectos de trato político peninsular y correspondió al noble esfuerzo por el logro de un ideal: la independencia de la propia tierra (6). Sin embargo, también fueron comprensibles las torpezas cometidas por España, si las consideramos propias de los Imperios coloniales, cuya conducta se adoptó y que respondieron a los siguientes puntos: explotación de las provincias de Ultramar por una administración corrompida y dominada por el favoritismo; retraso en la toma de medidas, que adoptadas a tiempo hubieran supuesto soluciones; restablecimiento del orden antes que adopción de reformas, e imprevisión, obcecamiento y empeño en mantener el poder (7).

De acuerdo, pues, con la moderna orientación existente en materia colonial, aunque teóricamente los territorios de Ultramar fueron considerados provincias de la metrópoli, parte integrante de la Monarquía española (herencia teórica del pasado), que no se podía enajenar, tal como quedó recogido en las Leyes de Indias (Ley 13, Título 2, Libro II), en realidad se manejaron durante todo el siglo como una conquista militar (8) y en estas circunstancias, por muchos postulados teóricos que se mantuviesen, si no se aplicaban, como de hecho ocurrió, se estaba demostrando que en la práctica se consideraba a Ultramar como colonias y no como provincias. El mencionado cambio de actitud

también trajo consigo otra distorsión, otra descompensación, en el intento de imitar a las potencias coloniales, fuertemente dotadas gracias al desarrollo de una revolución industrial completa. Así, se decidió sustituir la tradicional acción civilizadora por la tarea de utilizar adecuadamente las materias primas ultramarinas, a fin de que produjesen un enriquecimiento progresivo, para lo que se precisaban unos mercados, cuya producción y consumo se debían orientar e incluso imponer (9).

Sin embargo, en este sentido la España decimonónica careció, de hecho, de posibilidades reales de actuación de cara al mundo ultramarino, ya que no estaba preparada para asumir el papel de potencia imperialista, puesto que no había vivido una revolución industrial auténtica, con lo cual abordó el siglo XIX de una forma deficiente y desacorde con los tiempos, lo que acentuó las diferencias con las naciones industriales europeas y provocó una desequilibrada situación infraestructural con respecto a aquéllas (10). De esta forma, los políticos españoles del momento, conocedores de los métodos colonialistas de los países europeos, quisieron ponerlos en práctica, ya que entendían el progreso en esa materia como la integración de España en el ámbito del capitalismo colonial y la renovación, como el monopolio en beneficio de la metrópoli y de la producción de sus posesiones, de acuerdo con las normas indicadas por el "Pacto Colonial" convertido ahora en panacea universal (11).

Realmente, la forma de incorporación española al proceso colonial moderno supuso un nuevo concepto de colonia, caracterizado por una serie de rasgos, entre los que destacaron: la distinción entre colonia y provincia; la consideración según la cual todo problema colonial suponía una implicación internacional, y la modificación de los conceptos de soberanía e independencia de las naciones (12). El nuevo planteamiento,

entendido como sinónimo de ventajas y riqueza conseguidas gratuitamente o con el mínimo esfuerzo, se impuso ante la posibilidad de beneficios, ahora más palpables y cuantiosos que nunca, si bien los medios para alcanzarlos, además de ser antitradicionales, difirieron mucho de los adecuados por deficiencias de estructura, lo que provocó la consiguiente distorsión.

Dentro de este planteamiento, las ideologías quedaron escindidas en dos ramas: los defensores de la línea tradicional (los menos) y los partidarios de un cambio definitivo, enraizado en un capitalismo emprendedor de signo europeo, que se mostraron críticos con respecto al sistema anterior, civilizador y portador de cultura (13). Mientras tanto, el resto de la nación permaneció escéptico y sólo se movió galvanizado por los problemas humanos del envío de tropas y de la muerte en la manigüa o por el sensacionalismo patriotero. En este sentido, tal como se ha indicado, se produjo un íntimo desequilibrio, fruto del deslumbramiento que la Europa industrializada, colonialista e imperialista ejerció sobre la España decimonónica, que quiso imitarla sin contar con las posibilidades materiales de aquélla, lo que provocó una ceguera, que llevó a ensayar procedimientos ineficaces y grotescos no acordes con nuestra tradicional manera de comportarnos (14).

Así, pues, se produjo una total descompensación, porque se fue contra un tradicional método de tratar los problemas coloniales y porque en la práctica no se podían aplicar, de hecho, esos métodos, dada la carencia de medios materiales. No obstante, en consonancia con los supuestos adoptados, la mayoría de los políticos españoles y, desde luego, de los grupos interesados se opusieron, a lo largo de mucho tiempo, a toda concesión, alegando que ello daría alas al separatismo. De esta

forma, imperó el egoísmo, ante el temor de la pérdida de los mercados y de las ventajas económicas, que abandonadas gradualmente hubiesen sido asimilables. A la larga, dicha pérdida se produjo de la misma manera, aunque sin posibilidad de encajarla (15). Así, cuando tuvo lugar una rectificación (Decretos Autonómicos de 1897), fue ya demasiado tarde. Había pasado todo un siglo, caracterizado por la incomprensión de una política desacorde con la tradición y con las realidades de los nuevos momentos y ese paso del tiempo hizo desgraciadamente irreversible el proceso, ahondando distancias; desengañando a los antillanos; engrosando las filas del separatismo; dando motivos, si no reales, por lo menos esgrimibles, a Estados Unidos para intervenir, y desembocando, en última instancia, en lo inevitable.

Por último, jugó el aspecto exterior, faceta siempre a tener en cuenta, situación artificial creada a principios de siglo, como consecuencia de las rivalidades internacionales, principalmente inglesas y norteamericanas, sobre el Caribe y concretamente sobre Cuba. Por ese motivo, en la fase final del proceso el desenlace no fue imputable a España. Ante el problema de evitar la guerra con Estados Unidos, España tenía la partida perdida desde el primer momento, con lo que todos los esfuerzos españoles se estrellaron contra la decisión norteamericana, que si bien ya existía desde antiguo, se vió espoleada ahora por el ambiente imperialista de los países industriales europeos, al que por supuesto tampoco fue ajeno Estados Unidos. Ciertamente, los territorios ultramarinos se perdieron, en última instancia, por la intervención estadounidense, aunque también contase el lastre de los desaciertos españoles anteriores a las últimas reformas. La insurrección cubana no lograba terminar, ni mucho menos, con el dominio español, y las ofertas de compra nunca se aceptaron por considerarlas atentatorias al honor nacional y contrarias al

concepto "provincial", reminiscencia de los postulados teóricos del pasado.

En estas circunstancias, el desenlace fue un enfrentamiento armado, querido por Estados Unidos, que jamás desearó la independencia de Cuba, sino Cuba. Sobre esta base, era evidente que ante la decisión de provocar la guerra, España no podía hacer nada por evitarla, ni tampoco su corolario, por esquivar la derrota, aunque la ilusión de algunos o de muchos hiciese creer lo contrario. No obstante, no fue menos cierto que se hizo lo que se pudo y que cabía esperar que la concesión de la autonomía y el posterior armisticio hubiesen sido apoyados por Estados Unidos, ya que esta potencia lo había auspiciado con anterioridad, lo cual hubiera evitado el enfrentamiento y pacificado la isla de Cuba. Sin embargo, los designios norteamericanos eran claros, tal como indicó Moret en el Congreso: "¿Por qué tenemos guerra?. Porque la política americana acecha el momento de apoderarse de Cuba y ahora se ha lanzado la República yanqui, convencida de que la rebelión terminaba" (16). Y, ante esto, no hubo forma de evitar lo que realmente era inevitable.

Todos estos problemas, todas estas cuestiones fueron abordadas por Labra a lo largo de su vida. Frente a ello, se constituyó en un paladín, que defendió denodadamente los postulados de la abolición de la esclavitud, de la reforma colonial y del hispanoamericanismo, aspecto en el cual insistió especialmente, a raíz de los acontecimientos de 1898. Con gran finura intelectual captó asimismo el cambio de conducta operado en la mentalidad de los políticos españoles, en relación con el quehacer ultramarino, hecho que criticó firmemente, al tiempo que se opuso con valentía al pesimismo que invadió el ser nacional con motivo del Desastre.

Don Rafael María de Labra fue un luchador incansable, que trabajó en solitario tanto en el Parlamento como en otros medios públicos y privados, por sus ideas y convicciones y que constituyó un verdadero ejemplo de honestidad y perseverancia, que con el paso del tiempo mereció el respeto y el reconocimiento de todos. Realmente, si bien durante gran parte de su vida fue ampliamente combatido con motivo de sus ideas y tuvo que enfrentarse con la incomprensión y la envidia de la mayoría de sus compatriotas, que no entendieron o no quisieron entender su postura y sus actividades, paulatinamente vió coronados sus esfuerzos con una serie de victorias tales como la abolición de la esclavitud y la concesión de las tan ansiadas reformas (aunque dicho proceso se truncase por la acción violenta de Estados Unidos) para terminar dedicando los últimos años de su vida a acrecentar la preocupación y las simpatías de los españoles hacia Hispanoamérica, en un intento superador de pasadas incomprensiones.

N O T A S.

- (1) RODRIGUEZ SAMPEDRO, CARLOS: Reflexiones sobre Varios Episodios Históricos Españoles ante el Actual Conflicto (Madrid 1915), pág. 62.
- (2) Ibid., pág. 82.
- (3) LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Política Colonial y la Revolución Española de 1868 (Madrid 1915), pág. 74.
- (4) Ibid., pág. 81.
- (5) FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 289.
- (6) AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98 (Madrid 1968), pág. 198.
- (7) Ibid., pág. 199.
- (8) FRANK, WALDO: Cuba, Isla Profética (Buenos Aires 1961), pág. 32.
- (9) LABRA, RAFAEL MARIA DE: Las Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898, Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900), pág. 15.
- (10) MESA, ROBERTO: El Colonialismo en la Crisis del XIX Español (Madrid 1967), págs. 12-13.
- (11) Ibid., págs. 46-47.
- (12) Ibid., págs. 43-45.
- (13) BLANCO HERRERO, MIGUEL: Política de España en Ultramar (Madrid 1888), pág. 315.
- (14) MESA, ROBERTO: Ob. cit., pág. 26.
- (15) SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional, "Cuadernos de Historia de España" (Buenos Aires), XLI-XLII, (1965), pág. 303.
- (16) AZCARATE, PABLO DE: Ob. cit., págs. 200-201.

V) BIBLIOGRAFIA.

1) Bibliografía de Rafael María de Labra.

1.1) Libros y Folletos.

LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en las Antillas españolas. (Contestación a Saco y a Cochin).- Morote.- Madrid 1879.

-----: La Abolición de la Esclavitud en las Antillas inglesas.- Madrid s.a.

-----: La Abolición de la Esclavitud en Inglaterra. (Discurso Pronunciado en el Ateneo Mercantil el Día 19 de Enero de 1879).- Madrid 1880.

-----: La Abolición de la Esclavitud en el Orden Económico.- J. Noguera.- Madrid 1873.

-----: La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico. (Paganda Antiesclavista).- Madrid 1873.

-----: La Abolición y la Sociedad Abolicionista Española. Madrid 1879.

-----: La Abolición y la Sociedad Abolicionista Española. 1873.- Madrid 1874.

-----: La Acción Internacional Contemporánea.- Madrid

-----: Algo de Todo. (Artículos, Suelos, Crítica, Jera, Notas de Viaje).- Delclós y Bosch.- Barcelona 1886.

-----: América en las Cortes de Cádiz. (Estudio Histórico).- Buenos Aires 1911.

-----: El Ateneo de Madrid, 1835-1905. (Notas Históricas).- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1906.

-----: El Ateneo de Madrid. (Sus Orígenes, Desarrollo, Representación y Porvenir).- Aurelio J. Alarcón.- Madrid 1878.

-----: La Autonomía Colonial ante las Cortes Españolas. (La Opinión Pública de la Península).- Madrid 1896.

-----: La Autonomía Colonial en España. (Discurso).- Imp. de los Sruc. de Cuesta.- Madrid 1892.

-----: La Brutalidad de los Negros.- Madrid 1876.

- (Confer 1912. -----: La Campaña Americanista Española de 1912.
a en la Casa de América de Barcelona).- Barcelona
- 1881-18 -----: Mi Campaña en las Cortes Españolas de
Imp. Aurelio J. Alaría.- Madrid 1885.
- Proposic Española Rico).- -----: Una Campaña Parlamentaria. (Colección de
es Presentadas y Discursos Pronunciados en las Cortes
e 1872-1873 por la Diputación Radical de Puerto
nández.- Madrid 1874.
- España Reconoc dada en -----: La Campaña Política Americanista de
la Conmemoración de la Ley de 1836 para el
nto de las Repúblicas Hispano-Americanas. (Conferencia
Casa de América de Barcelona).- Barcelona 1911.
- América Madrid -----: Carácter de la Dominación Española en
Resumen de Historia Política de Cuba y Puerto Rico).-
.
- de Infi Noguera -----: Carta que a Varios Electores del Distrito
(Oviedo) Dirige su Ex Diputado a Cortes.- Imp. José
adrid 1872.
- Pronunci -----: El Centenario Español de 1812. (Discursos
s en Cádiz, 1912).- Madrid 1913.
- Propagar -----: Los Centros y Sociedades Docentes y
as Españoles de Sentido Internacional.- Madrid s.a.
- Legislac -----: Los Códigos Negros. (Estudio de
Comparada).- Aurelio J. Alaría.- Madrid 1879.
- (Discurs en el Cu Noguera -----: Las Colonias de Inglaterra en América.
onunciado en el Ateneo Científico-Literario de Madrid
de Política y Sistemas Coloniales).- Imp. de J.
adrid 1874.
- y Siste Literari -----: La Colonización en la Historia. (Política
Coloniales). (Conferencias del Ateneo Científico-
Madrid).- A. de San Martín.- Madrid 1876.- 2 Vols.
- Galicia -----: El Congreso de Emigración de Santiago de
909. (Discursos y Fórmulas) .- Madrid 1910.
- (Discurs Madrid). -----: El Congreso Hispano-Americano de 1900.
onunciado en la Inauguración de este Congreso en
p. Alfredo Alonso.- Madrid 1901.
- (Confere Alfredo -----: La Constitución de Cádiz de 1812.
s dadas en el Fomento de las Artes de Madrid).- Imp.
so.- Madrid 1907.

-----: Las Cortes de Cádiz. (Conferencias del Fomento de las Artes).- Madrid 1884.

-----: Las Cortes de Cádiz de 1810-1813. América y la Constitución Española de 1812. (Estudio Histórico Jurídico).- Imp. del Sindicato de la Publicidad.- Madrid 1914.

-----: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios).- Madrid 1901.

-----: Cuba como País de Inmigración. (Memoria).- Madrid 1910.

-----: La Cuestión Colonial (1871-1896-1898). (Discursos, Notas, Advertencias, Comentarios y Extenso Prólogo sobre el Estado de la Cuestión Colonial en España desde 1870 a esta Parte).- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1898.

-----: La Cuestión Colonial. (Política Palpitante, 1868-1869. Cuba, Puerto Rico, Filipinas).- G. Estrada.- Madrid 1869.

-----: La Cuestión Colonial Española en 1869.- Madrid 1878.

-----: La Cuestión de Puerto Rico. (Cuestiones de Ultramar).- Imp. J. E. Morote.- Madrid 1870.

-----: La Cuestión de Puerto Rico. (Estudio de un Proyecto de Constitución Colonial).- Madrid 1870.

-----: La Cuestión Social en las Antillas Españolas. (Discurso Pronunciado en las Conferencias Anti-Esclavistas del Teatro Lope de Rueda).- Madrid 1872.

-----: La Cuestión de Ultramar. (Discurso Pronunciado en el Congreso de los Diputados).- Madrid 1871.

-----: Cuestiones Jurídicas.- Madrid s.a.

-----: Cuestiones Palpitantes de Política, Derecho y Administración. (Discursos).- Alfredo Alonso.- Madrid 1897.

-----: Las Declaraciones y los Decretos de las Cortes de Cádiz sobre América. (Conferencia).- Madrid 1912.

-----: El Derecho Internacional y los Actuales Problemas Internacionales y Jurídicos. (Colección de Conferencias Celebradas durante el Curso 1904-1905).- Imp. M. G. Hernández.- Madrid 1905.

- : El Derecho Internacional en España.- M. G. Hernández.- Madrid 1905.
- : Derecho Internacional Público. (Programa de las Lecciones Dadas en el Curso Académico de 1876-1877).- Imp. de la "Revista de Andalucía".- Málaga 1877.
- : El Derecho Público Contemporáneo Determinado por los Tratados Internacionales.- Alfredo Alonso.- Madrid 1900.
- : Discurso Leído en el Ateneo Científico-Literario y Artístico de Madrid con Motivo de la Apertura de las Cátedras el Día 11 de Noviembre de 1913.- Imp. Fortanet.- Madrid 1913.
- : Discursos Inaugurales del Fomento de las Artes de Madrid en 1888-1889.-Madrid s.a.
- : Discursos Políticos, Académicos y Forenses.- Imp. Aurelio J. Alarín.- Madrid 1884-1886.- 2 Vols.
- : Los Diputados Americanos en las Cortes de Cádiz. (Discurso Pronunciado en el Gran Teatro de Cádiz la Noche del 27 de Septiembre de 1910).- Tip. del Sindicato de la Publicidad.- Madrid 1911.
- : Los Diputados Americanos en las Cortes Españolas de 1872 a 1873. (Discursos, Mociones y Proposiciones).- Aurelio J. Alarín.- Madrid 1880.
- : A los electores de Sabana Grande (Puerto Rico) su Diputado a Cortes.- Imp. de M.G. Hernández.- Madrid 1873.
- : La Emancipación de los Esclavos en los Estados Unidos.- Imp. Manuel G. Hernandez.- Madrid 1873.
- : España en 1812 (Conferencias del Ateneo de Madrid).- Madrid 1912.
- : España y América, 1812-1912. (Estudios Políticos, Históricos y de Derecho Internacional).- Imp. del Sindicato de la Publicidad.- Madrid 1913.
- : España y las Repúblicas Sud-Americanas.- Madrid 1895.
- : El Estado Moral de España y la Acción del Ateneo de Madrid y de las Sociedades Económicas de Amigos del País. (Discurso Leído en el Ateneo con Motivo de la Inauguración de las Cátedras y de las Secciones. Curso 1917-1918).- Madrid 1917.

- : Estudios Biográfico-Políticos.- Madrid 1887-1912.- 2 Vols.
- : Estudios sobre las Cortes de Cádiz. El Panteón Doceañista.- Tip. Fortanet.- Madrid 1913.
- : Estudios de Derecho Internacional Contemporáneo.- Madrid s.a.
- : Estudios de Derecho Público. (Aspecto Internacional de la Cuestión de Cuba).- Alfredo Alonso.- Madrid 1900.
- : Estudios de Derecho Público. (El Congreso Hispano-Americano de 1900. La Acción Internacional de España).- Alfredo Alonso.- Madrid 1907.
- : Estudios Literarios.- Madrid s.a.
- : La Experiencia Abolicionista de Puerto Rico.- Sociedad Abolicionista Española.- Madrid 1874.
- : El Fomento de las Artes en 1885. (Discurso Leído en el Acto de la Apertura del Curso Académico de 1885-1886).- Imp. de Aurelio J. Alaria.- Madrid 1885.
- : Sobre Historia Internacional Contemporánea.- Madrid 1910.
- : Historia de las Relaciones Internacionales de España.- Madrid 1897.
- : La Inauguración de las Cortes Generales y Extraordinarias de España en Septiembre de 1810.- Madrid 1912.
- : Las Influencias de Europa en la América Española.- Madrid 1909.
- : El Instituto de Derecho Internacional de Gante.- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1907.
- : La Intimidad Hispano-Americana. (Las Instituciones Docentes y Sociales de la República de Cuba).- Fortanet.- Madrid 1912.
- : La Intimidad Ibero-Americana, 1892-1894.- Librería Hernando.- Madrid 1894.
- : Introducción a un Curso de Historia Política Contemporánea.- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1879.

- : Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales de España. (Discurso Pronunciado en el Ateneo Científico-Literario y Artístico de Madrid el 16 de Febrero de 1897).- Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.- Madrid 1897.
- : Introducción a la Política Contemporánea. (Conferencias de la Institución Libre de Enseñanza).- Madrid 1886.
- : La Justicia en Ultramar.- Escuela de Derecho.- Madrid 1863.
- : La Libertad de los Negros de Puerto Rico.- Madrid 1873.
- : Un Libro y un Monumento. I) América y la Constitución Española de 1812. II) El Panteón de Doceañistas Españoles y Americanos por M. L. Leafar.- Madrid 1914.
- : Movimiento Hispano-Americano. La Escuela Labra en Puerto Rico. (Extracto de un Discurso en el Senado. 7 de Diciembre de 1916).- Madrid 1916.
- : Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz. (Historia de la Primera Asamblea Constitucional).- Imp. "El Liberal".- Madrid 1866-1867.- 2 Vols.
- : El Negro Santos de Santo Domingo. (Conferencia Dada en el Fomento de las Artes la Noche del 8 de Enero de 1880).- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1880.
- : Nuestras Colonias de Africa. (Discurso).- Madrid 1898.
- : D. José María Orense (Marqués de Albaida). Estudio Biográfico.- Imp. de Aurelio J. Alaria.- Madrid 1882.
- : La Orientación Internacional de España.- Alfredo Alonso.- Madrid 1910.
- : La Pérdida de las Américas (Estudio Histórico del Periodo de 1808 a 1823). (Artículos Publicados en "Los Conocimientos Útiles").- Roig.- Madrid 1869.
- : La Personalidad Internacional de España. (Discurso Leído ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).- Fortanet.- Madrid 1915.
- : El Pesimismo de Última Hora. (Discurso Inaugural de las Conferencias Populares del Centro de Instrucción Comercial de Madrid. Curso 1899).- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1899.

- : La Política Antillana en la Metrópoli Española.- Imp. "El Liberal".- Madrid 1891.
- : La Política en las Antillas. (El Partido Liberal en Cuba).- Imp. Aurelio J. Alaria.- Madrid 1882.
- : La Política Colonial y la Revolución Española de 1868.- Sindicato de la Publicidad.- Madrid 1915.
- : La Política Exterior de España.- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1910.
- : La Política Exterior de España en 1914. (La Cuestión de Marruecos. La Cuestión de América).- Sindicato de la Publicidad.- Madrid 1914.
- : La Política Hispano-Americana. (Conferencia de la Unión Ibero-Americana de Madrid).- Madrid 1906.
- : Política Hispano-Americana. Españoles y Cubanos después de la Separación. (Interview con un Propagandista).- Imp. de Jaime Ratés Martín.- Madrid 1916.
- : Política Internacional. La Orientación Americana de España.- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1910.
- : La Política Panamericana: James Monroe, su Vida, su Obra y su Tiempo. (Conferencia de la Unión Mercantil de Madrid).- Madrid s.a.
- : Portugal y sus Códigos. (Estudio de Política y Legislación Contemporánea).- Madrid 1877.
- : Portugal Contemporáneo.- Madrid 1889.
- : La Preparación de la Revolución Contemporánea Española. (Conferencias del Ateneo).- Madrid 1911.
- : Los Presidentes Americanos de las Cortes de Cádiz. (Estudio Biográfico).- M. Alcover Rodríguez.- Cádiz 1912.
- : Mi Primer Discurso Parlamentario. (La Cuestión Colonial, 1871. Antecedentes, Debates, Efectos).- Madrid 1915.
- : El Primer Presupuesto de Cuba. (Discurso Pronunciado en el Congreso de los Diputados el 15 de Abril de 1880).- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1881.
- : La Primera Semana de las Cortes de Cádiz de 1810. (Conferencias del Ateneo de Madrid).- Madrid 1912.

- : El Principio de Intervención.
(Discurso).- Madrid 1882.
- : El Problema Colonial Contemporáneo.-
Madrid 1895.
- : El Problema Hispano-Americano. (Discurso
Pronunciado al Inaugurar las Conferencias Organizadas por la
Unión Ibero-Americana el Día 23 de Abril de 1905).- Imp. Hijos de
M. G. Hernández.- Madrid 1906.
- : El Problema Hispano-Americano. (Discurso
Leído en el Ateneo Científico-Literario y Artístico de Madrid el
Día 25 de Noviembre de 1915 con Motivo de la Inauguración de las
Cátedras y Secciones de aquella Sociedad).- Jaime Ratés.- Madrid
1915.
- : Problemas del Día: El Partido Republicano
en España. (Discurso Pronunciado el 15 de Octubre de 1899 en el
Teatro de los Campos Eliseos de Gijón).- Tip. Alfredo Alonso.-
Madrid 1900.
- : El Programa de la Campaña de Intimidad
Hispano-Americana. (Conferencia dada en la Sociedad Unión Ibero-
Americana de Madrid).- Madrid 1911.
- : El Programa de la Futura Campaña Hispano-
Americana. (Discurso Pronunciado el 22 de Junio de 1911 al
Clausurar las Conferencias del Centro de Cultura Hispano-
Americana).- s.p. de Imp.- s.l. s.a.
- : Programa Razonado de un Curso de Historia
del Derecho Internacional Público. (Introducción).- Institución
Libre Enseñanza.- Málaga s.a.
- : Las Propagandas Contemporáneas.- Madrid
s.a.
- : Puerto Rico en 1885. (De los Presupuestos
en Puerto Rico y Cuba). (Discursos Pronunciados en las Sesiones
de 30 de Mayo y 1 de Junio de 1885 en el Congreso de los
Diputados).- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1885.
- : La Reforma Colonial en España. (En las
Antillas).- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1896.
- : La Reforma Colonial Española de 1868 a
1898. (Historia Política).- Madrid 1905.
- : La Reforma Electoral en las Antillas
Españolas. (Discursos Precedidos de un Estudio sobre la Política
Antillana en la Metrópoli Española).- Imp. "El Liberal".- Madrid
1891.

-----: La Reforma Política de Ultramar (1868-1900).- Madrid 1902.

-----: Las Relaciones de España con las Repúblicas Hispano-Americanas.- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1910.

-----: Las Relaciones Exteriores de España. (Discurso).- Madrid 1899.

-----: Las Relaciones Jurídicas de España y el Sur de América.- Madrid 1891.

-----: Las Relaciones Oficiales de España y las Repúblicas Americanas en el Curso del Siglo XIX y Primer Decenio del XX.- Madrid s.a.

-----: De la Representación e Influencia de los Estados Unidos de América en el Derecho Internacional. (Conferencia Dada en la Institución Libre de Enseñanza).- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1877.

-----: La República de los Estados Unidos de América. (Orígenes, Instituciones Jurídicas, Carácter Social, Representación Moral y Política).- Tip. de Alfredo Alonso.- Madrid 1897.

-----: La República Francesa. (Conferencia).- Madrid 1894.

-----: La República y las Libertades de Ultramar.- Tip. Alfredo Alonso.- Madrid 1897.

-----: Las Repúblicas Contemporáneas. (Los Estados Unidos de América, 1802-1900).- Madrid 1908.

-----: Las Repúblicas Contemporáneas. (Francia Los Estados Unidos de América. Estudio de Política y Legislación Comparadas).- Alfredo Alonso.- Madrid 1903.

-----: Un Reto del Esclavismo. (El Reglamento Esclavista de 8 de Mayo de 1880).- Madrid 1881.

-----: La Revolución Norte-Americana del Siglo XVIII. (Fundación de los Estados Unidos de América).- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1881.

-----: La Situación de Cuba en 1884. (Discurso Pronunciado ante el Congreso de los Diputados el 20 de Junio de 1884 sobre Diversos Asuntos Seguido de un Apéndice).- Aurelio J. Alaria.- Madrid 1884.

-----: Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País. (Discurso Pronunciado en el Senado).- Cádiz 1912.

-----: Las Sociedades Económicas de Amigos del País (Estudio Histórico).- Madrid 1906.

-----: El Tratado de París de 1898 entre España y los Estados Unidos. (Conferencia Dada en el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid el 8 de Junio de 1899).- Madrid 1899.

-----: La Vida Internacional Portuguesa. (Conferencias Públicas dDdas en 1890).- Madrid s.a.

-----; GIBERGA, ELISEO; CASTAÑEDA, TIBURCIO y MORET, SEGISMUNDO: El Problema Colonial Contemporáneo.- Librería de Victoriano Suárez.- Madrid 1879.

1.2) Publicaciones Periódicas.

LABRA, RAFAEL MARIA DE: Nuestras Colonias.- "El Abolicionista" (Madrid), I, Núm. 4 (15-XI-1872), 25-27.

-----: La Emancipación de América.- Ibid., II, núm. 9 (10-I-1873), 75-76.

-----: Nuestras Colonias.- Ibid., V, núm.13 (25-II-1873), 109-112.

-----: La Emancipación de América.-Ibid., V, núm.21 (28-VI-1873), 169-170.

-----: La Explotación de los Africanos.-Ibid., VI, núm.2 (20-II-1875), 19-22.

-----: La Explotación de los Africanos.-Ibid., VI, núm.6 (28-IV-1875), 86-89.

-----: La Explotación de los Africanos.-Ibid., VI, núm.7 (15-V-1875), 99-100.

-----: La Explotación de los Africanos.-Ibid., VI, núm.11 (15-VII-1875), 164-167.

-----: La Explotación de los Africanos.-Ibid., VI, núm.12 (31-VII-1875), 180-182.

-----: Un Poco de Historia.-Ibid., VI, núm.14 (15-IX-1875), 211-213.

-----: La Reforma Económica Colonial de España.-Ibid., VI, núm.16 (15-XI-1875), 250-252.

-----: La Reforma Económica Colonial de España.-Ibid., VI, núm.17 (15-XII-1875), 259-261.

-----: La Reforma Económica Colonial de España.-Ibid., VI, núm.18 (31-XII-1875), 275-277.

-----: La Inmigración en Cuba.-Ibid., VII, núm.6 (3-IV-1876), 84-88.

-----: La Ferocidad de los Negros.-Ibid., VII, núm.9 (17-IV-1876),136-139.

-----: La Ferocidad de los Negros.-Ibid., VII, núm.10 (31-IV-1876),146-150.

-----: La Holganza de los Negros.-Ibid., VII, núm.11 (15-VI-1876),162-166.

-----: El Salvajismo de los Negros.-Ibid., VII, núm.12 (30-VI-1876),181-184.

-----: Las Reformas Coloniales y los Partidos Liberales de las Metrópolis.-Ibid., VII, núm.13 (16-VII-1876),193-196.

-----: Los Sistemas de Gobernación Colonial.-Ibid., VII, núm.14 (15-VIII-1876),209-210.

-----: Abolición de la Esclavitud.-"La America" (Madrid),XII, núm.19 (13-X-1868),7.

-----: La Representación de Ultramar.-Ibid., XII, núm. 20 (28-X-1868),8.

-----: La Representación de los Negros Libres.-Ibid., XII, núm. 21 (13-XI-1868),13.

-----: La Cuestión de Ultramar.-Ibid., XIII, núm. 23 (13-XII-1868),6-7.

-----: Política Negrera.-Ibid., XIV, núm. 1 (13-I-1870),4.

-----: Cargos de Conciencia.-Ibid., XIV, núm. 1 (13-I-1870),12.

-----: La Espontaneidad Local en Nuestras Antillas.-Ibid., XVII, núm. 20 (28-X-1873),10-12.

-----: La Colonización.-Ibid., XVIII, núm.1 (13-I-1874),2-4.

-----: La Colonización.-Ibid., XVIII, núm.2 (28-I-1874),2-3.

-----: La Colonias Españolas después del Tratado de París de 1898.-Anexo del "Boletín de la Sociedad Geográfica" (Madrid), XLII, (1900),5-110.

- : La Cuestión Colonial.- "Las Cortes"
(Madrid), I, núm 13 (26-II-1869), 3-4.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 16
(2-III-1869), 2-3.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 19
(5-III-1869), 3.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 23
(10-III-1869), 1-2.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 30
(18-III-1869), 2-3.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 39
(30-III-1869), 3-4.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 45
(6-IV-1869), 1.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 49
(10-IV-1869), 3.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 50
(11-IV-1869), 1.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 61
(24-IV-1869), 2-3.
- : La Cuestión Colonial.- Ibid., I, núm. 70
(5-V-1869), 3.
- : La Aproximación Hispano-Americana.- "El
Financiero Hispano-Americano" (Madrid), I, núm. 5 (3-V-1901), 99-
101.
- : La Aproximación Hispano-Americana.-
Ibid., I, núm. 6 (10-V-1901), 123-124.
- : La Aproximación Hispano-Americana.-
Ibid., I, núm. 7 (17-V-1901), 155-157.
- : Los Problemas de América.- Ibid., IX,
núm. 408-409 (29-I-1909), 54-57.
- : La Política Colonial en 1893.- "La
Justicia" (Madrid), VII, núm. 2.156 (Suplemento) (2-I-1894).
- : La Reforma Colonial.- Ibid., IX, núm.
2.984 (27-VI-1896).
- : España y América en el Centenario de
1808.- "El Mercurio" (Barcelona), VIII, núm. 78 (1-V-1908), 1508-
1511.

- : La Intimidad Hispano-Americana.- Ibid.,
XI, núm. 128 (13-VII-1911), 236-237.
- : La Sociedad Libre de Derecho
Internacional.- "Nuestro Tiempo" (Madrid), II, núm.22 (1902),
457-476.
- : La Situación de Puerto Rico.- "El
Progreso" (San Juan), II, núm.28 (5-III-1871).
- : La Colonización Moderna.- "Revista de
Andalucía" (Málaga), I, núm.1 (1874), 29-47.
- : La Colonización Moderna.- Ibid., I, núm.3
(1874), 121-140.
- : La Colonización Moderna.- Ibid., II,
núm.9 (1875), 105-116.
- : La Colonización Moderna.- Ibid., II,
núm.10 (1875), 161-173.
- : El Portugal Contemporáneo.- "Revista
Europea" (Madrid), VII, núm. 114 (30-IV-1876), 339-342.
- : El Brazo Militar y la Administración
Ultramarina.- "Revista Hispano-Americana" (Madrid), I, núm. 3
(10-I-1864), 251-274.
- : La Autonomía Colonial y las Rentas
Ultramarinas.- Ibid., II, núm. 5 (27-III-1865), 182-191.
- : Los Derechos Políticos en Ultramar.-
Ibid., III, núm. 10 (27-IX-1865), 361-366.
- : La Guerra con Chile.- Ibid., IV, núm. 2
(27-XI-1865), 53-58.
- : Los Partidos en Ultramar.- "La Tribuna"
(Madrid), I, núm. 1 (2-V-1882).
- : La Vieja Política Colonial.- Ibid., I,
núm. 4 (5-V-1882).
- : Partido Liberal de Cuba.- Ibid., I, núm.
19 (23-V-1882).
- : Partido Liberal de Cuba.- Ibid., I, núm.
22 (26-V-1882).
- : Lo Conquistado.- Ibid., I, núm. 82 (4-
VIII-1882).
- : La Autonomía Colonial.- Ibid., I, núm. 98
(23-VIII-1882).

- : Los Aliados de los Separatistas.- Ibid.,
I, núm. 109 (5-IX-1882).
- : Las Atocidades de Cuba.- Ibid., I, núm.
124 (22-IX-1882).
- : ¿Qué Quieren los Asimilistas?.- Ibid., I,
núm. 132 (1-X-1882).
- : Un Banquete.- Ibid., I, núm. 160 (3-XI-
1882).
- : La Suscripción Nacional.- Ibid., I, núm.
164 (8-XI-1882).
- : El Derecho Electoral en las Antillas.-
Ibid., I, núm. 182 (29-XI-1882).
- : La Autonomía Colonial.- Ibid., II, núm.
243 (8-II-1883).
- : El Primer Aniversario.- Ibid., II, núm.
314 (2-V-1883).
- : Dirección Patriótica.- "Unión Ibero-
Americana" (Madrid), XIV, núm. 169 (30-VI-1900),6-7.
- : Dirección Patriótica.- Ibid., XIV, núm.
170 (15-VII-1900),3-5.
- : Dirección Patriótica.- Ibid., XIV, núm.
171 (30-VII-1900),6-10.
- : La Política Exterior de España - Ibid.,
XVII, núm. 207 (30-IV-1903),1-3.
- : Los Diputados Americanos en las Cortes de
Cádiz - Ibid., XXIII, núm. 12 (30-IX-1909),1-5.

2) Bibliografía General.

2.1) Libros.

ABLANEDO, JUAN B.: La Cuestión de Cuba.- Tip. La Andaluza.-
Sevilla 1897.

ABOJADOR Y BENGOCHEA, SEBASTIAN: Artículos sobre la
Administración y Gobierno de la Isla de Cuba.- La Habana 1875.

-----: Sobre la Isla de Cuba.- F.
Hernández.- Madrid 1878.

-----: Sobre Reformas Administrativas en la Isla de Cuba.- s.i..- s.l. 1878.

La Abolición en Cuba. (A las Cortes Constituyentes la Sociedad Abolicionista Española).- Sociedad Abolicionista Española.- Madrid 1873.

La Abolición de la Esclavitud. (Epocas Célebres).- M. G. Hernández.- Madrid 1873.

Abolición de la Esclavitud en las Islas de Cuba y Puerto Rico.- Fortanet.- Madrid 1868.

La Abolición en Puerto Rico. (Primeros Efectos de la Ley de 22 de Marzo de 1873).- Madrid 1873.

El Abolicionista, Organo de la Sociedad Abolicionista Española.- Madrid 1885.

The Abolition of the Atlantic Slave Trade: Origins and Effects in Europe, Africa and the Americas.- Edited by David Eltis and James Walvin.- The University of Wisconsin Press.- London 1981.

ACOSTA Y ALVEAR, FRANCISCO DE: Apreciaciones sobre la Insurrección de Cuba.- Imp. La Propaganda Literaria.- La Habana 1872.

-----: Compendio Histórico del Pasado y Presente de Cuba y de su Guerra Insurreccional hasta el 11 de Marzo de 1875 con Algunas Apreciaciones Relativas a su Porvenir.- Juan José de las Heras.- Madrid 1875.

-----: Memoria sobre el Estado Actual de Cuba. Apreciaciones sobre las Reformas y la Abolición.- Andrés Pagé.- La Habana 1874.

ACOSTA Y QUINTERO, ANGEL: José Julián Acosta y su Tiempo.- San Juan 1899.

Actas del Congreso de Historia de los Estados Unidos. (Universidad de la Rábida, 5-9 de Julio de 1876).- Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.- Madrid 1978.

AIMES, HUBERT H.S.: A History of Slavery in Cuba, 1511 to 1868.- Octagon Books.- New York 1967.

ALCAZAR, JOSE DE: Historia de España en América. (Isla de Cuba).- Tip. a cargo de José Quesada.- Madrid 1898.

ALFAU Y BARALT, ANTONIO: Los Partidos Antillanos.-San Juan 1886.

ALGER, R.A.: The Spanish American War.- New York 1900.

ALLENDESALAZAR, JOSE MANUEL: El 98 de los Americanos.- Cuadernos para el Diálogo.- Madrid 1974.

ALONSO Y SANJURJO, EUGENIO: Apuntes sobre los Proyectos de Abolición de la Esclavitud en las Islas de Cuba y Puerto Rico.- Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo.- Madrid 1874.

ALTAMIRA Y CREVEA, RAFAEL: Mi Viaje a América: Libro de Documentos.- Librería General de Victoriano Suárez.- Madrid 1911.

ALVAREZ INSUA, WALDO: Finis: Ultimos Días de España en Cuba.- Romero.- Madrid 1901.

ALZOLA Y MINONDO, PABLO: El Problema Cubano.- Andrés P. Cardenal.- Bilbao 1898.

-----: Relaciones Comerciales entre la Península y las Antillas.- Madrid 1895.

AMBLARD, ARTURO: Notas Coloniales.- Madrid 1904.

AMER, CARLOS: Cuba y la Opinión Pública.- Higinio Gómez.- Madrid 1897.

The American Spanish War a History by the War Leaders.- Chas. C. Haskell and Sons.- London 1899.

Las Antillas ante el Parlamento Español en 1872.- Madrid 1873.

ANTILLON, ISIDORO DE: Disertación sobre el Origen de la Esclavitud de los Negros, Motivos que la Han Perpetuado... (Leída en la Real Academia Matritense... el 2 de Abril de 1802).- Palma de Mallorca 1811.

Apuntes sobre la Cuestión de Cuba por un Autonomista.- s.i.- s.l. 1897.

Apuntes del Ex-Ministro de Estado Duque de Tetuán para la Defensa de la Política Internacional y Gestión Diplomática del Gobierno Liberal-Conservador desde el 28 de Marzo de 1895 al 29 de Septiembre de 1897.- Madrid 1902.

ARMAS Y CESPEDES, FRANCISCO DE: De la Esclavitud en Cuba.- Tip. de F. Fortanet.- Madrid 1866.

-----: Régimen Político de las Antillas Españolas.- Palma de Mallorca 1882.

ARRIETA, JOSE JOAQUIN DE: Votos de otro Cubano o sea Cuba y España en las Presentes Circunstancias.- Tip. J. Noguerras.- Madrid 1869.

AZCARATE, NICOLAS: Votos de un Cubano.- Madrid 1869.

AZCARATE, PABLO DE: La Guerra del 98.- Alianza Editorial.- Madrid 1968.

BALAGUER, VICTOR: Memoria Redactada por el Ministro de Ultramar acerca de su Gestión en el Departamento de su Cargo.- Manuel Tello.- Madrid 1888.- 2 Vols.

BARANANO Y GUTIERREZ, POLICARPO: La Insurrección de Cuba Pintada por Sí Misma.- "El Imparcial".- Trinidad 1884.

BARNET, MIGUEL: Biografía de un Cimarrón.- Ariel.- Barcelona 1968.

BARON FORTACIN, M: Cuestión de Cuba. La Abolición de la Esclavitud.- J. M. Pérez.- Madrid 1879.

BASTIDE, ROGER: Les Amériques Noires.- París 1967.

BECKER Y GONZALEZ, JERONIMO: Historia Política y Diplomática de España desde la Independencia de los Estados Unidos hasta Nuestros Días, 1776-1895.- Madrid 1897.

-----: Historia de las Relaciones Exteriores de España durante el Siglo XIX.- Madrid 1924.- 4 Vols.

-----: La Política Española en las Indias.- Madrid 1920.

BENJAMIN, JULES ROBERT: The United States and Cuba. Hegemony and Dependent Development, 1880-1934.- Pittsburgh University Press.- Pittsburgh 1977.

BENOIST, CHARLES: Cánovas del Castillo, la Restauración Renovadora.- Edics. Literarias.- Madrid 1931.

-----: L'Espagne, Cuba et les Etats-Unis.- Perrin et Cie.- París 1898.

BERNAL, CALIXTO: La Reforma Política en Cuba y su Ley Constitutiva.- Fortanet.- Madrid 1881.

BERNAL, EMILIA: Cuestiones Cubanas.- Madrid 1928.

BETANCES, RAMON EMETERIO: Las Antillas para los Antillanos.- Instituto de Cultura Puertorriqueña.- San Juan 1975.

Bibliografía de la Guerra Chiquita, 1879-1880.- Biblioteca Nacional José Martí.- La Habana 1975.

Bibliografía de la Guerra de los Diez Años. (Centenario 1868).- Biblioteca Nacional José Martí.- La Habana 1968.

Bibliografía de la Guerra de Independencia (1895-1898).- Biblioteca Nacional José Martí.- La Habana 1976.

BILLINGTON, RAY ALLEN: American History before 1877.- Littlefield Adams and Co..- New Jersey 1981.

BLACK ATKINS, JOHN: The War in Cuba.- London 1899.

BLAINE, JAMES G.: Twenty Years of Congress: From Lincoln to Garfield.- Edit. Rand Avery.- Boston 1884.- 2 Vols.

BLANCO, JULIAN E.: El Proyecto de Ley sobre Reforma del Gobierno en Cuba y Puerto Rico.- A. Córdoba.- San Juan 1893.

BLANCO HERRERO, MIGUEL: Política de España en Ultramar.- Sucesores de Rivadeneyra.- Madrid 1888.

BONAFoux, LUIS: Betances.- Instituto de Cultura Puertorriqueña.- San Juan 1970.

BOSCH, JUAN: Cuba, la Isla Fascinante.- Edit. Universitaria.- Santiago de Chile 1955.

BRAU, SALVADOR: Lo que dice la Historia. Cartas al Sr. Ministro de Ultramar por el Director de "El Clamor del País" y Secretario General del Partido Autonomista Puertorriqueño.- Madrid 1893.

-----: Historia de Puerto Rico.- Edit. Coquí.- San Juan 1966.

BRENAN, GERALD: El Laberinto Español. (Antecedentes Sociales y Políticos de la Guerra Civil).- Edics. Ruedo Ibérico.- Barcelona 1977.

BRIDE, CHARLES: La Guerre Hispano- Américaine de 1898.- L. Baundin.- París 1899.

BROWN SCOTT, J.: Cuba. La América Latina. Los Estados Unidos.- La Habana 1926.

CABRERA, RAIMUNDO: Cuba y sus Jueces. Rectificaciones Oportunas.- Filadelfia 1891.

CALDWELL, ROBERT G.: The López Expeditions to Cuba, 1848-1851.- Princenton University Press.- Princenton 1915.

CANOVAS DEL CASTILLO, ANTONIO: Problemas Contemporáneos.- A. Pérez Dubrull.- Madrid 1884.

CARBONELL Y RIVERO, MIGUEL ANGEL: Antonio Maceo.- La Habana 1935.

-----: Juan Gualberto Gómez.- La Habana 1938.

CARR, RAYMOND: España 1808-1939.- Ariel.- Barcelona 1969.

- CARRANZA, ADOLFO S.: España en América.— Sucrs. de Rivadeneyra.— Madrid 1921.
- CARRILLO, JUSTO: Expediciones Cubanas.— La Habana 1930.
- CARVAJAL, J. DE: Reformas en la Isla de Cuba.— Hijos de M. G. Hernández.— Madrid 1888.
- CASAS, A. DE LAS: Cartas al Pueblo Americano sobre Cuba y las Repúblicas Latinoamericanas.— Tip. de "El Correo Español".— Buenos Aires 1897.
- CASAS, JUAN BAUTISTA: La Guerra Separatista de Cuba.— San Francisco de Sales.— Madrid 1896.
- CASTAÑEDA, TIBURCIO P.: La Explosión del Maine y la Guerra de los Estados Unidos con España.— Librería e Imp. La Moderna Poesía.— La Habana 1925.
- CEPEDA, FRANCISCO: Catecismo Autonomista o la Autonomía Colonial al Alcance de Todos.— Ponce 1868.
- : Conferencias de Abuli Celebradas con el Jefe de la Minoría Autonomista Parlamentaria D. Rafael María de Labra sobre Política Antillana.— "Revista de Puerto Rico".— Ponce 1890.
- CEPERO BONILLA, RAUL: Azúcar y Abolición. Apuntes para una Historia Crítica del Abolicionismo.— Edit. Echevarría.— La Habana 1948.
- CERVERA Y TOPETE, PASCUAL: Guerra Hispano-Americana. Colección de Documentos Referentes a la Escuadra de Operaciones de las Antillas.— Imp. del "Diario de la Marina".— Madrid 1904.
- CHADWICK, FRENCH ENSOR: The Relations of the United States and Spain. The Spanish-American War.— Russell and Russell.— New York 1968.— 2 Vols.
- CHALLENGER, RICHARD D.: Admirals, Generals and American Foreign Policy, 1898-1914.— Princenton University Press.— Princenton 1973.
- CHAVES, JULIO CESAR: Definición, Realidad y Sueño de la Hispanidad.— Instituto de Cultura Hispánica.— Madrid 1963.
- CHIDSEY, DONALD BARR: La Guerra Hispano-Americana, 1896-1898.— Grijalbo.— Barcelona 1973.
- CIBES VIADE, ALBERTO: El Gobernador Pezuela y el Abolicionismo Puertorriqueño (1848-1873).— San Juan 1978.
- COCHIN, AUGUSTIN: L'Abolition de L'Esclavage.— París 1861.
- : L'Espagne et L'Esclavage dans les Iles de Cuba et de Porto Rico.— París 1866.

Y TOSTE, CAYETANO: Historia de la Esclavitud en Puerto Rico. Formación y Documentos.- Sociedad de Autores Torriquenses.- San Juan 1972.

AZO, ENRIQUE: Los Americanos en Cuba.- Instituto Cubano del o.- La Habana 1972.

-----: Desde Yara hasta el Zanjón. (Apuntaciones óricas).- Tip. de "La Lucha" .- La Habana 1893.

Colonias.- Enrique de la Riva Imp.- Madrid s.a.

AS, VICTOR: La Escuadra del Almirante Cervera.- La Habana

HA, JOSE DE LA: Memoria sobre el Estado Político, Gobierno y nistración de la Isla de Cuba.- Trujillo.- Madrid 1853.

ejo de Administración de la Isla de Cuba. Su Organización, bucciones y Modo de Proceder.- Imprenta del Gobierno.- La na 1861.

E, F.A.: Las Aspiraciones del Partido Liberal de Cuba.- A. rez y Cía..- La Habana 1892.

ADA, JAMES W.: Two Nations over Time. Spain and the United es, 1776-1977.- Greenwood Press.- Westport 1978.

IN, ARTHUR F.: Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, -1886.- Texas University Press.- Austin 1967.

AS, GRAHAM A.: An Army for Empire. The United States Army in Spanish-American War.- Missouri University Press.- Columbia

PO DE LA SERNA, LEON: Informe sobre las Reformas Políticas, ales y Económicas que deben Introducirse en la Isla de Cuba entado a la Comisión de Reformas de 1879.- París 1879.

MONCLOVA, LIDIO: Baldorioty de Castro. (Su Vida y sus s).- Instituto de Cultura Puertorriqueña.- San Juan 1973.

-----: El Grito de Lares.- Instituto de Cultura torriquense.- San Juan 1968.

-----: Historia del Año 1887.- Edit. versitaria.- San Juan 1970.

-----: Historia de Puerto Rico en el Siglo XIX.- versidad de Puerto Rico.- San Juan 1952-1957.- 3 Vols.

bro Estadístico de la Isla de Cuba Correspondiente al Año 1846 nado por una Comisión de Oficiales y Empleados Particulares.- , del Gobierno y Capitanía General.- La Habana 1847.

Cuba y América.- Nueva York 1897-1899.- 3 Vols.

Cuba y España.- Sevilla 1873.

Cuba Española.- Madrid 1869.

Cuba y la Hacienda Española.- París 1873.

Cuba y el Librecombio. (Colección de Artículos Económicos).- Matanzas 1879.

Cuba her Past, Present and Future in Connection with Spain and the United States.- Washington 1897.

Cuba y Puerto Rico. Medios de Conservar... estas dos Antillas en su Estado de Esplendor.- Madrid 1866.

Cuba and the United States.- Atlanta 1897.

Decretos Estableciendo el Régimen Autonomico en las Islas de Cuba y Puerto Rico.- Viuda de M. Minuesa de los Ríos.- Madrid 1897.

DELGADO, JAIME: España y México en el Siglo XIX.- C.S.I.C. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.- Madrid 1950-1953.- 3 Vols.

DESCHAMPS CHAPEAUX, PEDRO: El Negro en la Economía Habanera del Siglo XIX.- Unión de Escritores y Artistas.- La Habana 1971.

DIAZ CANEJA, IGNACIO: La Autonomía de las Antillas.- San Juan 1887.

-----: La Cuestión Ultramarina.- San Juan 1885.

DIAZ SOLER, LUIS M.: Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico.- Edit. Universitaria. Universidad de Puerto Rico.- San Juan 1974.

DIEGO GARCIA, EMILIO DE: Puerto Rico bajo la Administración Española durante la Primera Mitad del Siglo XIX.- Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea.- Madrid 1985.

Discursos Leídos en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en Memoria del Sr. D. Rafael María de Labra.- R. Velasco.- Madrid 1918.

Disposiciones de España y de los Estados Unidos Referentes a la Guerra y Declaraciones de Neutralidad. (España. Ministerio de Estado).- Raoul Peant.- Madrid 1898.

Documentos Presentados a las Cortes en la Legislatura de 1898 por el Ministro de Estado Duque de Almodovar del Río. Negociaciones Generales con los Estados Unidos desde el 10 de Abril de 1898 hasta la Declaración de Guerra.- Sucs. de Rivadeneyra.- Madrid 1899.

DOMINGUEZ ROLDAN, GUILLERMO: Rafael María de Labra. (Estudio Leído en la Sociedad Económica de Amigos del País el Día 10 de Enero de 1919).- Imp. El Siglo XX.- La Habana 1920.

DROCIR DE OSORNO, CASTO: Cuba Española. El Problema de la Guerra.- Tip. de Alfredo Alonso.- Madrid 1896.

DULCE, DOMINGO: Informe Referente al Régimen y Administración de las Islas de Cuba y Puerto Rico Presentado por el Excmo. Sr. D. Domingo Dulce, Marqués de Castellflorite, al Ministro de Ultramar en Enero de 1867.- Madrid 1867.

ELIAS DE TEJADA, FRANCISCO: Las Doctrinas Políticas de Eugenio María de Hostos.- Instituto de Cultura Hispánica.- Madrid 1949.

ELY, ROLAND T: Cuando Reinaba su Majestad el Azúcar.- Edit. Sudamericana.- Buenos Aires 1963.

España y Cuba. Estado Político y Administrativo de la Grande Antilla bajo la Dominación Española.- Hijos de J. A. García.- Madrid 1896.

La España de la Restauración: Política, Economía, Legislación y Cultura.- I Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara. Segovia 1984.- Siglo XXI.- Madrid 1985.

Los Estados Unidos contra España por un Optimista.- Tip. de Ricardo Fe.- Madrid 1896.

ESTEVE Y NUÑEZ DE CASTRO, FEDERICO: Discursos Leídos en la Junta General Extraordinaria Celebrada en 1918 en la Real Sociedad Económica de Amigos del País en Memoria del Sr. D. Rafael María de Labra.- R. Velasco.- Madrid 1918.

ESTEVEZ Y ROMERO LUIS: Desde el Zanjón hasta Baire. (Datos para la Historia Política de Cuba).- Tip. La propaganda Literaria.- La Habana 1899.

ESTORCH, M.: Apuntes para la Historia sobre la Administración del Marqués de la Pezuela en la Isla de Cuba.- Manuel Galiano.- Madrid 1856.

ETTINGER, AMOS ASCHBACH: The Mission to Spain of Pierre Soulé, 1853-1855. (A Study in the Cuban Diplomacy of the United States).- Yale University Press.- New Haven 1932.

L.: Etude sur la Guerre Hispano-Américaine de 1898.- ne.- París 1899.

LA, ISIDRO: Los Estados Unidos contra la Libertad. (Estudio historia Diplomática Americana).- Barcelona 1923.

E, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad ra. Su Vejez).- Gustavo Gili.- Barcelona 1928.

-----: Mi Gestión Ministerial Respecto de la Isla uba.- Madrid 1898.

OO Y SOTOMAYOR, URBANO: Isla de Cuba. Inmigración de ajadores Españoles (Documentos y Memoria).- Madrid 1855.

ANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Cánovas: Su Vida y Su Política. - s.- Madrid 1951.

-----: Historia Política de la España emporánea.- Alianza Editorial.- Madrid 1968.- 3 Vols.

ANDEZ GOLFIN, LUIS: Breves Apuntes sobre las Cuestiones más rtantes de la Isla de Cuba.- Establecimiento Tipográfico del d Español.- Barcelona 1866.

ANDEZ MENDEZ, EUGENIO: El Significado Histórico del Grito de s.- Edics. El Ceni.- San Juan 1973.

ando Ortíz.- Selección y Prólogo de Julio Le Riverend.- Unión scritores y Artistas.- La Habana 1973.

ARA, ORESTES: The Last Spanish War.- London 1897.

-----: Mis Relaciones con Máximo Gómez.- La Habana

-----: Tentativas de Intervención Europea en América: -1898.- Hermes.- La Habana 1933.

ER DE COUTO, J.: Los Negros en sus Diversos Estados y iciones, tales como Son, como se Supone que Son y como Deben - Nueva York 1864.

ERA, FERMIN: Estudios sobre la Isla de Cuba: La Cuestión al.- Imp. del Colegio de Sordomudos y Ciegos.- Madrid 1866.

EREDO Y SOCARRAS, JOSE M.: La Revolución de Yara (1868-).- M. Pulido y Cía. Impresores.- La Habana 1902.

IEROA MERCADO, LOIDA: History of Puerto Rico: From de Begining he 1892.- Publishing Company Inc.- New York 1978.

FIGUEROA Y TORRES, ALVARO DE: D. Rafael María de Labra y la Política de España en América y Portugal. (Discurso Pronunciado en la Sesión Inaugural del Curso 1922-1923).- Gráfica "Ambos Mundos".- Madrid 1922.

-----: Sagasta o el Político.- Espasa-Calpe.- Madrid 1934.

FLACK, HORACE EDGAR: Spanish American Diplomatic Relations Preceding the War of 1898.- John Hopkins University.- Baltimore 1906.

FLINT, GROVER: Marching with Gómez. A War Correspondents Field Note-Book Kept during Four Months with the Cuban Army.- Lamson Wolfe and Company.- Boston 1898.

FLINTER, JORGE: Exámen del Estado Actual de los Esclavos en la Isla de Puerto Rico.- Coquí.- San Juan 1976.

FLORES, EUGENIO ANTONIO: La Guerra de Cuba.- M. G. Hernández.- Madrid 1895.

FONER, PHILIP SHELDEN: La Guerra Hispano-Cubano-Americana y el Nacimiento del Imperialismo Norteamericano, 1895-1902.- Akal.- Madrid 1975.- 2 Vols.

-----: Historia de Cuba y de sus Relaciones con los Estados Unidos.- Ciencias Sociales.- La Habana 1973.- 2 Vols.

FONTANA LAZARO, JOSEP: Cambio Económico y Actitudes Políticas en la España del Siglo XIX.- Ariel.- Barcelona 1973.

FONVIELLE, ERNESTO: Cuba y la Autonomía.- Montoya y Cía..- Madrid 1879.

FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico.- Instituto de Cultura Hispánica.- Madrid 1953.

FRANCO, JOSE LUCIANO: Antonio Macco. Apuntes para una Historia de su Vida.- Instituto Cubano del Libro.- La Habana 1973.- 3 Vols.

-----: La Batalla por el dominio del Caribe y el Golfo de México.- Instituto de Historia. Academia de Ciencias.- La Habana 1964.- 2 Vols.

-----: La Conspiración de Aponte.- Publicaciones del Archivo Nacional.- La Habana 1963.

-----: Política Continental Americana de España en Cuba: 1812-1830.- Imp. Archivo Nacional de Cuba.- La Habana 1947.

FRANK, WALDO: Cuba, Isla Profética.- Edit. Losada.- Buenos Aires 1961.

TE Y MONDEJAR, MANUEL DE LA: España y los Estados Unidos.-
del Suc. de J. Cruzado.- Madrid 1896.

EGO GARCIA, TESIFONTE: Cuba por Fuera. (Apuntes del
ral).- La Habana 1890.

-----: La Insurrección Cubana. Crónicas de la
aña.- Imp. Central de los Ferrocarriles.- Madrid 1897.

INAL HEBER, ALEJANDRO: El Espíritu de la Hispanidad, Base y
de Construcciones Universales.- Instituto de Cultura
ánica.- Madrid 1952.

IA ESCUDERO, JOSE MARIA: De Cánovas a la República.- Rialp.-
id 1951.

IA KOHLY, MARIO: Labor de Afirmación Hispanoamericana.
cursos).- Talleres Poligráficos.- Madrid 1931.

-----: Política Internacional Cubana (Relaciones
e Cuba y España).- Madrid s.a.

IA NIETO, MARIA DEL CARMEN; DONEZAR, JAVIER MARIA y LOPEZ
TA, LUIS: Crisis del Sistema Canovista, 1898-1923.- Guadiana
ublicaciones.- Madrid 1972.

-----: Restauración y Desastre, 1874-1898.-
iana de Publicaciones.- Madrid 1972.

IA OCHOA, MARIA ASUNCION: La Política Española en Puerto Rico
nte el Siglo XIX.- Universidad Complutense de Madrid.
ltad de Filosofía y Letras.- Madrid 1975.

IA DE POLAVIEJA Y DEL CASTILLO, CAMILO: Mando en Cuba del
ente General D. Camilo G. Polavieja. (Copia de la Memoria
gida al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar).- Suc. de
deneyra.- Madrid 1896.

-----: Relación Documentada
ni Política en Cuba: Lo que Ví, lo que Hice, lo que Anuncié.-
io Minuesa.- Madrid 1898.

ATY, JOHN A.: The American Nation.- Harper and Row.- New York
).- 2 Vols.

BEL POLANCO, VICENTE: El Grito de Lares: Gesta de Heroísmo y
ificio.- Edit. Antillana.- San Juan 1976.

PI Y FERRO, GIL: Estudios sobre la América.- "El Iris".- La
ana 1864.

-----: Historia de la Revolución y Guerra de Cuba.-
eta Oficial.- La Habana 1887.

-----: Situación de España y de sus Posesiones de Ultramar, su Verdadero Peligro y el Único de Conjurarlo.- Madrid 1871.

GIL SERRANO, RAFAEL: Nueva Visión de la Hispanidad.- Imp. Taravilla, Suc. de la Vda. de Galo Sáez.- Madrid 1976.

GOMEZ, FERNANDO: La Insurrección por Dentro. (Artículos Publicados en el "Diario de la Marina" y "Diario del Ejército").- M. Ruíz y Cía.- La Habana 1897.

GOMEZ, JUAN GUALBERTO: La Cuestión de Cuba en 1884. (Historia y Soluciones de los Partidos Cubanos).- Aurelio J. Alaria. Madrid 1885.

-----: La Isla de Puerto Rico.- José Gil y Navarro.- Madrid 1891.

GOMEZ, JUAN GUALBERTO y SENDRAS BURIN, ANTONIO: Bosquejo de la Historia de Puerto Rico (1493-1891).- Edit. San Juan.- San Juan 1972.

-----: La Isla de Puerto Rico desde la Conquista hasta Principios de 1891.- Madrid 1891.

GOMEZ, MAXIMO: Diario de Campaña.- La Habana 1940.

GOMEZ ACEVEDO, LABOR: Sanz, Promotor de la Conciencia Separatista en Puerto Rico.- Edit. Universitaria.- San Juan 1974.

GORLIER, CLAUDIO: Historia de los Negros de los Estados Unidos.- Edics. Iberoamericanas.- Madrid 1968.

GREEN, N.C.: The War with Spain and Story of Spain and Cuba.- Baltimore 1899.

GREEN, WILLIAM A.: British Slave Emancipation. The Sugar Colonies and the Great Experiment, 1830-1865.- Clarendon Press.- Oxford 1976.

GRINÁN PERALTA, LEONARDO: Carlos Manuel de Céspedes. Análisis Caracteriológico.- Santiago de Cuba 1954.

-----: Martí, Líder Político.- Instituto del Libro.- La Habana 1970.

GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: Azúcar y Población en las Antillas.- La Habana 1961.

-----: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos.- Edit. Ciencias Sociales.- La Habana 1975.

-----: La Guerra de los Diez Años, 1868-1878.-
Instituto Cubano del Libro.- La Habana 1972.- 2 Vols.

-----: Manual de Historia de Cuba. (Desde su
Descubrimiento hasta 1868). - Ed. ERRE.- Madrid 1975.

-----: Manual de Historia de Cuba (Económica,
Social y Política).- La Habana 1964.

GUERRA SANCHEZ, RAMIRO; PEREZ CABRERA, JOSE MARIA; REMOS, JUAN J.
y SANTOVENIA, EMETERIO S.: Historia de la Nación Cubana.- Edit.
Cultural.- La Habana 1952.- 10 Vols.

GUERRERO, RAFAEL: Crónica de la Guerra de Cuba (1895).- M.
Manucci.- Barcelona 1895-1897.

GUTIERREZ DE LA CONCHA, JOSE: Memoria sobre la Guerra de la Isla
de Cuba y sobre su Estado Político y Económico desde Abril de
1874 hasta Marzo de 1875.- Tip. de R. Labajos.- Madrid 1877.

HAMILTON, CARLOS: Comunidad de Pueblos Hispánicos.- Instituto de
Cultura Hispánica.- Madrid 1951.

HERNANDEZ ARBIZU, JUAN A.: Memoria sobre la Situación de la Isla
de Puerto Rico y Reformas que Deben Introducirse en su Régimen.-
Imp. Española.- Madrid 1869.

HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, MARIO: Historia y Literatura de
Hispanoamérica (1492-1820). La Versión Intelectual de una
Experiencia.- Castalia.- Madrid 1978.

HERRERA DE LA SERNA, NILDA: Montoro, su Vida y su Obra.- La
Habana 1952.

HILDRETH, RICHARD: The History of the United States of America.-
Harper and Brothers.- New York s.a.

HOFSTADTER, RICHARD: The Paranoid Style in American Politics and
other Essays.- New York 1965.

HOFSTADTER, RICHARD; MILLER, WILLIAM y AARON, DANIEL: The
Structure of American History.- Englewood Cliffs Prentice-Hall.-
1964.

HORREGO ESTRUCH, LEOPOLDO: Juan Gualberto Gómez.- La Habana 1954.

HUBERMAN, LEO y SWEETZ, PAUL M.: Cuba. Anatomía de una
Revolución.- Edit. Palestra.- Buenos Aires - Montevideo 1961.

HUNG HUI, JUAN: La Presencia de China en Cuba en el siglo XIX.-
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filosofía y
Letras.- Madrid 1975.

IBARRA, JORGE: Historia de Cuba.- La Habana 1968.

-----: Ideología Mambisa.- Instituto Cubano del Libro.- La Habana 1972.

INFIESTA, RAMON: El Pensamiento Político de Martí.- Universidad de La Habana.- La Habana 1953.

Información sobre Reformas en Cuba y Puerto Rico.- Nueva York 1867.- 2 Vols.

Instituto Español de Estudios Estratégicos: España en la Crisis del Gran Colonialismo: Los Orígenes del Hispanoamericanismo.- En "Seminario: La Defensa Nacional y el Mundo Hispánico".- C.E.S.E.D.E.N..- Madrid 1983.

Isla de Cuba.- Rivadeneyra.- Madrid 1885-1888-1891.- 3 Vols.

Isla de Cuba: Causas de la Insurrección.- Barcelona 1869.

La Isla de Cuba. Cuenta General de la Campaña.(Cuaderno Tercero que Comprende desde 1º de Enero a 30 de Junio de 1879).- M. Minuesa.- Madrid 1897.

JESCHKE, HANS: La Generación de 1898. (Ensayo de una Determinación de su Esencia).- Editora Nacional.- Madrid 1954.

JIMENEZ PASTRANA, JUAN: Los Chinos en las Luchas por la Liberación Cubana (1847-1930).- Instituto de Historia.- La Habana 1963.

JIMENEZ WAGENHEIM, OLGA: El Grito de Lares: A Socio-Historic Interpretation of Puerto Rico's Uprising against Spain in 1868.- Michigan University Press.- Ann Arbor 1983.

JOVER ZAMORA, JOSE MARIA: La Epoca de Alfonso XIII.- En "Introducción a la Historia de España".- Edit. Teide.- Barcelona 1969.

-----: 1898. Teoría y Práctica de la Redistribución Colonial. (Conferencia Pronunciada el Día 18 de Enero de 1978).- Fundación Universitaria Española.- Madrid 1979.

KIPLE, KENNETH F.: Blacks in Colonial Cuba. 1774-1899.- The Florida University Press.- Gainesville 1976.

KNIGHT, FRANKLIN W.: Slave Society in Cuba during the Nineteenth Century- Wisconsin University Press.- Wisconsin 1970.

LA FEYER, WALTER: The New Empire. An Interpretation of American Expansion, 1860-1898.- Cornell University Press.- Ithaca 1963.

LAFUENTE, MODESTO: Historia General de España.- Barcelona 1922.- 25 Vols.

LAIN ENTRALGO, PEDRO: La Generación del Noventa y Ocho.- Espasa-Calpe.- Madrid 1970.

LALINDE ABADIA, JESUS: La Administración Española en el Siglo XIX Puertorriqueño.- Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.- Sevilla 1980.

LAMBERT, FRANCIS J.D.: The Cuban Question in Spanish Restoration Politics, 1878-1898.- Oxford University Press.- Oxford 1968.

LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA.- Las Constituciones de Cuba.- Instituto de Cultura Hispánica.- Madrid 1952.

LEAL SPENGLER, EUSEBIO: La Guerra de los Diez Años en Cuba.- Banco Nacional de Cuba.- La Habana 1976.

LE RIVEREND, JULIO: Historia de Cuba.- Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.- La Habana 1975.

Libro Rojo Español. (Negociaciones Diplomáticas desde el Principio de la Guerra con los Estados Unidos hasta la Firma del Protocolo de Washington).- Madrid 1898.

LINDERMAN, GERARD F.: The Mirror of War. American Society and the Spanish-American War.- Michigan University Press.- 1974.

LIZASO, FELIX: Martí, Místico del Deber.- Buenos Aires 1952.

-----: Panorama de la Cultura Cubana.- México 1949.

Llamamiento de la Isla de Cuba a la Nación Española.- Hallet.- Nueva York 1854.

LLANOS, ADOLFO: La Guerra con los Estados Unidos.- Pulido y Díaz.- La Habana 1897.

LLORENTE, ANTONIO G.: Cuba y el Actual Ministro de Ultramar.- Imp. de Orejas.- Madrid 1872.

LODGE, H.C.: The War with Spain.- New York-London s.a.

MACEO Y GRAJALES, ANTONIO: Papeles de Maceo.- Imp. A. Muñiz y Hno.- La Habana 1948.- 2 Vols.

MACMASTER, JOHN BACH: A History the People of the United States from the Revolution to the Civil War.- D. Appleton and Co.- New York 1891.

MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.- Tip. Madoz y Sagasti.- Madrid 1845-1850.- 16 Vols.

MALDONADO DENIS, MANUEL: Puerto Rico: Una Interpretación Histórico-Social.- Siglo Veintiuno.- Mexico 1971.

MALDONADO MACANAZ, RAFAEL: Principios Generales del Arte de la Colonización.- Madrid 1878.

MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: El Movimiento Abolicionista en España (1865-1873).- Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras (Tesis de Licenciatura Mecanografiada).- Barcelona 1968.

MANNIX, DANIEL P. y COWLEY M.: Historia de la Trata de Negros.- Alianza Editorial.- Madrid 1968.

MAÑACH, JORGE: Martí el Apóstol.- Espasa-Calpe.- Madrid 1975.

MARTI, CARLOS: Los Catalanes en América. (Cuba).- Minerva.- Barcelona s.a.

MARTI, JOSE: Cuba, Nuestra América, los Estados Unidos.- Siglo XXI.- México 1973.

-----: Sobre España.- Ciencia Nueva.- Madrid 1967.

-----: En los Estados Unidos.- Alianza Editorial.- Madrid 1968.

-----: Ideario Separatista.- Publicaciones del Ministerio de Educación.- La Habana 1947.

-----: Nuestra América.- Ariel.- Barcelona 1970.

-----: Obras Completas.- Editorial Nacional de Cuba.- La Habana 1963 y sigs.

-----: Pensamiento Político.- Capitolio Nacional.- La Habana 1960.

-----: La República Española ante la Revolución Cubana.- Madrid 1873.

MARTINEZ ARANGO, FELIPE: Cronología Crítica de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana.- La Habana 1958.

MARTINEZ ESTRADA, EZEQUIEL: Martí Revolucionario.- Casa de las Américas.- La Habana 1967.

MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria.- Montaner y Simón.- Barcelona 1919-1925.- 2 Vols.

MAY, ERNEST R.: Imperial Democracy. The Emergency of America as Great Power.- New York 1961.

ENDEZ MELENDEZ, LEONOR: Cánovas y la Política Exterior
añola.- Aguirre.- Madrid 1944.

oria de los Trabajos Realizados por la Sección de Puerto Rico
Partido Revolucionario Cubano, 1895-1898.- Imp. de A.W.
es.- Nueva York 1898.

DEZ CAPOTE, LUIS: El Pacto del Zanjón.- La Habana 1929.

CHAN, RAFAEL M.: Cuba. Justificación de su Guerra de
ependencia.- Imp. de la Luz. -Bogotá 1896.

INO BRITO, ELOY G.: José Antonio Saco: Su Influencia en la
tura y en las Ideas Políticas de Cuba.- La Habana 1950.

K, FREDERICK: La Doctrina Monroe y el Expansionismo
teamericano, 1843-1849.- Paidós.- Buenos Aires 1968.

A, ROBERTO: El Colonialismo en la Crisis del XIX Español.-
t. Ciencia Nueva.- Madrid 1967.

-----: La Idea Colonial en España.- Fernando Torres D.L.
encia 1976.

essage from the President of the United States Transmitting the
ort of the Naval Court of Inquiry upon the Destruction of the
ted States Battle ship Maine in Havana Harbour, February 15,
18, together with the Testimony Taken before the Court.-
overnment Printing Office.- Washington 1898.

ETRE AMABILE, V.: La Question Cubaine et le Conflict
panoaméricaine.- París 1896.

HISTERIO DE ULTRAMAR: Documentos de la Comisión Creada por Real
reto del 15 de Agosto de 1879 sobre Reformas en la Isla de
a.- Madrid 1879.

-----: Junta Informativa de Ultramar. (Extracto
las Contestaciones Dadas en el Interrogatorio sobre las Bases
que Deben Fundarse las Leyes Especiales).- Imp. de la
blioteca Universal Económica.- Madrid 1869.

-----: Junta Informativa de Ultramar. (Extracto
las Contestaciones Dadas en el Interrogatorio sobre la Manera
Reglamentar el Trabajo de la Población de Color Asiática y los
lios de Facilitar la Inmigración, que sea más Conveniente en
las mismas Provincias).- Imp. de la Biblioteca Universal
nómica.- Madrid 1869.

PORT, MANUEL: Historia de la Guerra de Cuba.- Tip. Boletín
cantil.- s.l. 1896.

ROE, JAMES: Papers....- Government Printing Office.-
shington 1904.

MONTERO RIOS, EUGENIO: El Tratado de París. - Madrid 1904.

MONTORO, RAFAEL: Ideario Autonomista. - Publicaciones del Ministerio de Educación. - La Habana 1941.

MOORE, JOSEPH WEST: The American Congress. A History of National Legislation and Political Events (1774-1895). - Edit. Harper. - New York 1895.

MORALES, VIDA: Iniciadores y Primeros Mártires de la Revolución Cubana. - La Habana 1901. - 2 Vols.

MORAYTA, MIGUEL: Historia General de España desde los Tiempos Ante Históricos hasta Nuestros Días. - González Rojas. - Madrid 1896. - 9 Vols.

MORENO, F.: Cuba y su Gente. (Apuntes par la Historia). - Madrid. - 1887.

MORENO FRAGINALS, MANUEL: La Historia como Arma y otros Estudios sobre Esclavos, Ingenios y Plantaciones. - Crítica. - Barcelona 1983.

-----: Le Ingenio (1760-1860). - La Habana 1964.

MORISON, SAMUEL ELIOT y COMMAGER, HENRY STEELE: Historia de los Estados Unidos de Norteamérica. - F.C.E.. - México 1951. - 3 Vols.

MORISON, SAMUEL ELIOT; COMMAGER, HENRY STEELE y LEUCHTENBURG, WILLIAM E.: The Growth of the American Republic. - Oxford University Press. - New York 1980. - 2 Vols.

MOROTE, LUIS: La Moral de la Derrota. - G. Juste. - Madrid 1900.

MORRIS, CHARLES: The War with Spain. - Lippincott Company. - Philadelphia 1899.

MUÑOZ PEREZ, JOSE: Discurso y Reflexiones en torno a la Comunidad Hispánica de Naciones. Sus Fundamentos, Consecuencias y Posibilidades. - Escuela de Estudios Hispano-Americanos. - Sevilla 1982.

MURGA Y MUGARTEGUI, GONZALO DE: De la Abolición de la Esclavitud en las Islas de Cuba y Puerto Rico. - Tip. de F. Fortanet. - Madrid 1868.

NAVARRO AZCUE, CONCEPCION: La Abolición de la Esclavitud Negra en la Legislación Española, 1870-1886. - Edics. de Cultura Hispánica. - Madrid 1987.

NAVARRO Y RODRIGO, CARLOS: Las Antillas. - Madrid 1872.

INS, ALLAN y COMMAGER, HENRY STEELE: Historia de los Estados Unidos: Biografía de un Pueblo Libre. - Cía. General de Ediciones.- México 1985.

PO FUNCIA, ALFREDO: Restauración de la Unidad y Hermandad Iberoamericana. - s.i.- s.l. s.a.

LLANA Y RINCON, LUIS: La Abolición de la Esclavitud y el Proyecto del Sr. Moret. -Tip. de F. Fortanet.- Madrid 1870.

EGA Y RUBIO, JUAN: Compendio de Historia de España. - Antonio de Soto.- Madrid 1900.- 3 Vols.

-----: Historia de España. - Madrid 1920.- 8 Vols.

-----: Historia de la Regencia de Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena. -Felipe González Rojas.- Madrid 1906.- 2 Vols.

IZ, FERNANDO: Contrapunteo Cubano del Tabaco y del Azúcar. - Editorial.- Barcelona 1973.

-----: Los Negros Esclavos -Edit. Ciencias Sociales.- Habana 1975.

COLE, GEORGE: The Spanish War: An American Epic, 1898. - W.W. Norton and Co..- New York 1984.

ON, JESUS: El 98, Acontecimiento Internacional. - En "Días de Guerra (Historias e Historiadores Contemporáneos)".- Edit. Alpha.- Barcelona 1963.

AN, BOLIVAR: Procesato Puertorriqueño del Siglo XIX. (Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños desde sus Orígenes hasta 1898). - San Juan 1971.

ers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1898. - Government Printing Office.- Washington 1901.

REIRA, ANTONIO S.: El Año Terrible del 87. - Biblioteca de Historia de los Puertorriqueños.- San Juan 1935.

-----.: Hostos, Ciudadano de América - Instituto de Historia Puertorriqueña - San Juan 1964.

Pensamiento Español (1898-1899) - Introducción, Recopilación y Notas por Hélene Tzitsikas.- De Andrea.- México 1967.

EZ, LUIS MARIANO: Estudio sobre las Ideas Políticas de José Martí y Antonio Saco. - La Habana 1908.

EZ CABRERA, JOSE M.: Calixto García. - La Habana 1949.

EZ DELGADO, RAFAEL: Antonio Maura. - Tebas.- Madrid 1974.

- : El 98: Año del Desastre.- Tebas.- Madrid 5.
- EZ MORIS Y CUETO, L.: Historia de la Insurrección de Lares.- celona 1872.
- EZ DE LA RIVA, JUAN: El Barracón y otros Ensayos.- Ciencias iales.- La Habana 1975.
- EZ DE LA RIVA, FRANCISCO: El Café. Historia de su Cultivo y lotación en Cuba.- La Habana 1944.
- KINS, DEXTER: Historia de la Doctrina Monroe.- Buenos Aires 4.
- OJO, JOSE DE: Cuestiones Coloniales.- Madrid 1883.
- : Ensayos de Política Colonial.- Madrid 1885.
- UELA, JACOBO DE LA: Diccionario Geográfico, Estadístico, tórico de la Isla de Cuba.- Imp. Mellado.- Madrid 1863-1866.- ols.
- : Historia de la Isla de Cuba.- Bally here.- Madrid 1878.
- Y MARGALL, FRANCISCO: Las Grandes Conmociones Políticas del lo XIX en España.- Barcelona 1934.- 6 Vols.
- Y MARGALL, FRANCISCO y PI Y ARSUAGA, FRANCISCO: Historia de año en el Siglo XIX. (Sucesos Políticos, Económicos, Sociales Artísticos Acaecidos durante el Mismo).- Miguel Seguí.- celona 1902-1903.- 8 Vols.
- O, FERNANDO: Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del lo XIX.- Edics. Huracán.- Bogotá 1979.
- LTAIN, CANDIDO: La Isla de Cuba desde Mediados de Abril a es de Octubre de 1873.- La Universal.- Madrid 1879.
- E, FEDERIC B.: Hispanismo 1898-1936. Spanish Conservatives and erals and their Relations with Spanish America.- Indiana versity Press.- Notre Dame 1971.
- EYRO, ENRIQUE: Cómo Acabó la Dominación de España en América.- ís 1908.
- : Morales Lemus y la Revolución Cubana.- Unión de anos en el Exilio.- Nueva York 1970.
- ALA, ANTONIO: Anales de la Guerra de Cuba.- Felipe González as.- Madrid 1895.- 3 Vols.

-----: España y la Regencia. Anales de Dieciseis Años 5-1902).- Librería Victoriano Suárez.- Madrid 1904.

-----: Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta onclusión de la Actual Guerra Civil.- Manuel Tello.- Madrid -1876.

-----: Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta Fallecimiento de D. Alfonso XII.- F. González Rojas.- Madrid -1894.- 6 Vols.

Y UMBERT, ADOLFO: Cánovas del Castillo.- Hijos de M. G. ández.- Madrid 1901.

E DOMINGUEZ, FRANCISCO J.: Historia de la Guerra de los Diez . (Desde la Asamblea de Guaímara hasta la Destitución de edes).- Academia de la Historia de Cuba.- La Habana 1958.

ELL VILA, HERMINIO: Céspedes el Padre de la Patria Cubana.- sa-Calpe.- Madrid 1931.

-----: Historia de Cuba en sus Relaciones con Estados Unidos y España.- La Habana 1938.- 4 Vols.

-----: Narciso López y su Epoca, 1848-1850.- orial Cultural.- La Habana 1952.

UONDO, B.: Voto Particular sobre la Reforma Social de Cuba.- de J.J. de las Heras.- Madrid 1879.

PT, JULIUS W.: Expansionist of 1898. The Acquisition of Hawai the Spanish Islands.- Chicago 1964.

Proceso Abolicionista en Puerto Rico: Documentos para su idio.- Instituto de Cultura Puertorriqueña.- San Juan 1974.

to Rico por Dentro. Cartas Abiertas.- Imp. José Gil y arro.- Madrid 1888.

NILLE, PIERRE: L'Amérique Latine. La Doctrine Monroe et le américanisme.- Payot.- París 1969.

SADA, GONZALO DE: Epistolario.- Imp. "El Siglo XX".- La Habana 8.

-----: Mi Primera Ofrenda.- Nueva York 1892.

-----: The War in Cuba.- Arno Press.- New York 0.

ÑONES, FRANCISCO MARIANO: Apuntes para la Historia de Puerto o.- Tip. Comercial.- Mayagüez 1888.

IONES, JOSE MARCIAL: Historia de los Partidos Reformista y
servador.- Mayagüez 1889.

-----: Un Poco de Historia Colonial.- Academia
torriqueña de la Historia.- San Juan 1978.

CH, BASIL: American Interest in Cuba, 1848-1855.- New York
3.

, GEORGES BRONSON: La Verdad de la Guerra. Revelaciones de un
lodista Yankee.- Tip. Herres.- Madrid 1898.

Reformas en la Isla de Cuba.- Imp. de M. Minuesa.- Madrid
2.

D, WHITELAW: Making Peace with Spain. The Diary of Whitelaw
3. September-December 1898.- Texas University Press.- Austin
5.

ARAZ, G.: La Guerra de Cuba.- Madrid 1896.

ES, R.: España y América.- Imp. Ch. Zoellner.- Ginebra 1911.

ES GARCIA, ISMAEL: Francisco Mariano Quiñones: Vida y Obra.-
cs. Boringuén.- San Juan 1971.

O, JOSE JOAQUIN: Historia de los Voluntarios Cubanos.- Madrid
2.- 2 Vols.

HARDSON, JAMES D.: A Compilation of the Messages and Papers of
sidents, 1789-1897.- Congress.- Washington 1898.- 10 Vols.

O Y AMAT, JUAN: Historia Política y Parlamentaria de España
de los Tiempos Primitivos hasta Nuestros Días.- Escuelas
s.- Madrid 1861.- 3 Vols.

JORD, NORMAN K.: America a History of the United States.-
ntice.- Hall, Inc.- New Jersey 1985.

ERO MENDEZ, ANGEL: Crónica de la Guerra Hispano-Americana en
rto Rico.- Sucesores de Rivadeneyra.- Madrid 1932.

ERO MUÑIZ, JOSE: El Tabaco: Su Historia en Cuba.- La Habana
4.

ORIGUEZ, GABRIEL: La Idea y el Movimiento Antiesclavistas en
aña en el Siglo XIX.- Antonio San Martín.- Madrid 1887.

ORIGUEZ, JOSE IGNACIO: Estudio Histórico sobre el Origen,
envolvimiento y Manifestaciones Prácticas de la Idea de la
xión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de América.- La
ana 1900.

QUINONES, JOSE MARCIAL: Historia de los Partidos Reformista y Conservador.- Mayagüez 1889.

-----: Un Poco de Historia Colonial.- Academia Puertorriqueña de la Historia.- San Juan 1978.

RAUCH, BASIL: American Interest in Cuba, 1848-1855.- New York 1948.

REA, GEORGES BRONSON: La Verdad de la Guerra. Revelaciones de un Periodista Yankee.- Tip. Herres.- Madrid 1898.

Las Reformas en la Isla de Cuba.- Imp. de M. Minuesa.- Madrid 1862.

REID, WHITELOW: Making Peace with Spain. The Diary of Whitelaw Reid. September-December 1898.- Texas University Press.- Austin 1965.

REPARAZ, G.: La Guerra de Cuba.- Madrid 1896.

REYES, R.: España y América.- Imp. Ch. Zoellner.- Ginebra 1911.

REYES GARCIA, ISMAEL: Francisco Mariano Quiñones: Vida y Obra.- Edics. Borinquén.- San Juan 1971.

RIBO, JOSE JOAQUIN: Historia de los Voluntarios Cubanos.- Madrid 1872.- 2 Vols.

RICHARDSON, JAMES D.: A Compilation of the Messages and Papers of Presidents, 1789-1897.- Congress.- Washington 1898.- 10 Vols.

RICO Y AMAT, JUAN: Historia Política y Parlamentaria de España desde los Tiempos Primitivos hasta Nuestros Días.- Escuelas Pías.- Madrid 1861.- 3 Vols.

RISJORD, NORMAN K.: America a History of the United States.- Prentice.- Hall, Inc.- New Jersey 1985.

RIVERO MENDEZ, ANGEL: Crónica de la Guerra Hispano-Americana en Puerto Rico.- Sucesores de Rivadeneyra.- Madrid 1932.

RIVERO MUÑOZ, JOSE: El Tabaco: Su Historia en Cuba.- La Habana 1964.

RODRIGUEZ, GABRIEL: La Idea y el Movimiento Antiesclavistas en España en el Siglo XIX.- Antonio San Martín.- Madrid 1887.

RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Estudio Histórico sobre el Origen, Desenvolvimiento y Manifestaciones Prácticas de la Idea de la Anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de América.- La Habana 1900.

RODRIGUEZ MOREJON, A. G.: Raíces de la República de Cuba.-
Omega.- Miami 1964.

RODRIGUEZ OTERO, ELADIO: La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico: Su Significado en el Proceso de Liberación del Hombre y de la Patria.- s.i..- s.l. 1973.

RODRIGUEZ SAMPEDRO, CARLOS: Reflexiones sobre Varios Episodios Históricos Españoles ante el Actual Conflicto.- Madrid 1915.

ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos.- Edit. Hemisferio.- Buenos Aires 1965.

-----: Cuba y los Estados Unidos, 1805-1898.- La Habana 1949.

-----: Trece Conclusiones Fundamentales sobre la Guerra Libertadora Cubana de 1895.- C. Estudios Sociales.- México 1945.

ROMERO TORRADO, ANTONIO: El Problema de Cuba.- Tip. de los Sucesores de Cuesta.- Madrid 1896.

RUIZ BELVIS, SEGUNDO; ACOSTA, JOSE JULIAN y QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: Informe sobre la Abolición Inmediata de la Esclavitud en la Isla de Puerto Rico.- Madrid 1867.

-----: Proyecto para la Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico Presentado a la Junta de Información Reunida en Madrid el 10 de Abril de 1867.- Instituto de Cultura Puertorriqueña.- San Juan 1978.

RUSSELL, HENRY B.: An Illustrated History of our War with Spain.- Worthington and Co..- Hartford 1898.

SACO, JOSE ANTONIO: Colección de Papeles Científicos, Históricos, Políticos y de otros Ramos sobre la Isla de Cuba, ya Publicados, ya Inéditos.- París 1859.- 4 Vols.

-----: Contra la Anexión.- Edit. Cultural.- La Habana 1928.- 2 Vols.

-----: La Esclavitud en Cuba y la Revolución en España.- Madrid 1868.

-----: Historia de la Esclavitud de la Raza Africana en el Nuevo Mundo y en Especial en los Países Américo-Hispanos - Edit. Cultural.- La Habana 1938.- 4 Vols.

-----: Ideario Reformista.- Publicaciones de la Secretaría de Educación.- La Habana 1935.

SAGRA, RAMON DE LA: Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba.- Maulde y Renon Simón Racon y Cía.- París 1842-1861.- 13 Vols.

SAIZ BARBERA, JUAN: España y la Idea de la Hispanidad: La Lucha de las Tres Españas.- Asociación Española de Lulianos.- Madrid 1982.

-----: La Verdad de España en América: El Triunfo de la Raza Hispánica.- Asociación Española de Lulianos.- Madrid 1983.

SALON COSTA, JULIO: España en la Europa de Bismarck. La Política Exterior de Cánovas (1871-1881).- C.S.I.C. Escuela de Historia Moderna.- Madrid 1967.

La Salvación de Cuba: Guerra a los Yankees.- s.l. s.a.

SALVANY, JOSE TOMAS: España a Fines del siglo XIX.- Tip. de Fortanet.- Madrid 1891.

SANCHEZ PEREZ, J.M.: Lo Hispánico. Un Nuevo Concepto de Hispanidad.- B. Costa-Amic.- México 1971.

SANTOVENIA Y ECHAIDE, EMETERIO S.: Bolívar y Las Antillas Hispanas.- Espasa-Calpe.- Madrid 1935.

-----: Historia de Cuba.- Trópico.- La Habana 1939-1943.- 2 Vols.

SARDA, AGUSTIN: La Isla de Puerto Rico.- Madrid 1889.

SCARANO, FRANCISCO ANTONIO: Sugar and Slavery in Puerto Rico: The Plantation Economy of Ponce, 1800-1850.- Wisconsin University Press.- Madison 1984.

SCOTT, REBECCA J.: Slave Emancipation in Cuba: The Transition to Free Labor, 1860-1899.- Princenton University Press.- Princenton 1985.

SEDANO Y CRUZAT, CARLOS: Cuba desde 1850 a 1873.- Imp. Nacional.- Madrid 1873.

-----: Cuba (Estudios Políticos).- Imp. de Manuel G. Hernández.- Madrid 1872.

SENDRAS BURIN, ANTONIO: Cómo se Gobierna en Puerto Rico.- Madrid 1886.

-----: El Partido Autonomista Puertorriqueño.- Madrid 1888.

-----: D. Rafael María de Labra. Estudio Biográfico.- Imp. de Emilio Saco y Brey.- Madrid 1887.

SEPICH, JUAN RAMON: Misión de los Pueblos Hispánicos.- Seminario de Problemas Hispanoamericanos.- Madrid s.a.

SERRANO, CARLOS: Final del Imperio: España, 1895-1898.- Siglo Veintiuno.- Madrid 1984.

SERRANO Y DOMINGUEZ, FRANCISCO: Informe Presentado por el Excmo. Sr. Capitán General, Duque de la Torre, al Ministro de Ultramar en Mayo de 1867.- Madrid 1868.

Una Sesión de la "Tertulia Radical" de Madrid.- Madrid 1873.

SIGSBEE, CHARLES D.: The Maine An Account of her Destruction in Havana Harbour.- Fisher Unwin.- London 1899.

SILVELA, FRANCISCO: Discurso del Excmo. Sr. D. Francisco Silvela Pronunciado en el Congreso de los Diputados los Días 30 de Abril, 5 y 7 de Mayo de 1898 con Motivo de la Guerra con los Estados Unidos.- Imp. Fund. y Fab. de Tintes de los Hijos de J. A. García.- Madrid 1898.

SOUZA, BENIGNO: Biografía de un Regimiento Mambí: El Regimiento de Calixto García.- La Habana 1938.

-----: Máximo Gómez el Generalísimo.- La Habana 1936.

-----: Máximo Gómez y las Invasiones del 75 y del 95.- La Habana 1932.

SUAREZ DIAZ, ADA: El Dr. Ramón Emeterio Betances: Su Vida y su Obra.- Ateneo Puertorriqueño.- San Juan 1968.

SUAREZ INCLAN, ESTANISLAO: El Gobierno del Ministerio Presidico por el Sr. Posada Herrera con Respecto a la Administración de las Provincias de Ultramar.- Madrid 1884.

SULZER, WILLIAM: Cuba: Speech... in the house of Representatives: Monday, March 2, 1896.- New York-Washington 1896.

TACON, MIGUEL: Correspondencia Reservada del Capitán General Don Miguel Tacón con el Gobierno de Madrid: 1834-1836.- Consejo Nacional de Cultura. Biblioteca Nacional José Martí. Departamento de Colección Cubana.- La Habana 1963.

-----: Relación del Gobierno Superior y Capitanía General de la Isla de Cuba.- 1838.

TEMINE, EMILE: Historia de la España Contemporánea desde 1808 hasta Nuestros Días.- Ariel.- Barcelona 1982.

THOMAS, HUGH: Cuba. La Lucha por la Libertad (1762-1970).- Grijalbo.- Barcelona.- México 1973.- 3 Vols.

TITHERINGTON, R.H.: A History of the Spanish-American War.- New York 1900.

TORRE DEL RIO, MARIA ROSARIO DE LA: La Neutralidad Británica en la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898.- Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea.- Madrid 1985.

TORRENTE, MARIANO: Historia de la Revolución Hispano-Americana.- Imp. Moreno.- Madrid 1830.

-----: Política Ultramarina que Abraza todos los Puntos Referentes a las Relaciones de España con los Estados Unidos, con la Inglaterra y las Antillas y señaladamente la Isla de Santo Domingo.- Avrial.- Madrid 1854.

TRASK, DAVID F.: The War with Spain in 1898.- Macmillan Publishing Co..- New York 1981.

Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos de América... 1898.- s.i...- s.l. s.a.

TRELLES, M.: Bibliografía Cubana del Siglo XIX.- Matanzas 1915.

TUÑÓN DE LARA, MANUEL: La España del Siglo XIX.- Librería Española.- París 1968.

-----: Estudios sobre el Siglo XIX Español.- Siglo XXI.- Madrid 1973.

-----:(DTOR.): Historia de España.- Labor.- Barcelona 1980-1985.- 12 Vols.

-----: y OTROS: Sociedad, Política y Cultura en la España de los Siglos XIX y XX.- Edicusa.- Madrid 1973.

TURNBULL, DAVID: Cuba with Notices of Porto Rico and the Slave Trade.- Negro University Press.- New York 1969.

VALADES, JOSE C.: Breve Historia de la Guerra con los Estados Unidos.- Diana.- México 1980.

VALIENTE, PORFIRIO: Réformes dans les Iles de Cuba et de Porto Rico.- Paris 1869.

VAN AKEN, MARK J.: Pan-Hispanism. Its Origin and Development to 1866.- California University Press.- Berkeley 1959.

VAN BUREN, MARTIN: Calendar of the Papers....- Government Printing Office.- Washington 1910.

VARONA, ENRIQUE JOSE: Cuba contre Espagne.- Imp. G. Arbouin.- Troyes 1896.

VILLALBA HERVAS, MIGUEL: Historia Contemporánea. (De Alcolea a Sagunto).- Victoriano Suárez.- Madrid 1899.

WERSTEIN, IRVING: 1898. The Spanish-American War, Told with Pictures.- Cooper Square Publishers.- New York 1966.

WEYLER Y NICOLAU, VALERIANO: Mi Mando en Cuba (10 de Febrero de 1896 a 31 de Octubre de 1897. Historia Militar y Política de la Última Guerra Separatista durante Dicho Mando).- Imp. y Edit. Felipe González Rojas.- Madrid 1910-1911.- 5 Vols.

WHITAKER, ARTHUR PRESTON: The United States and the Independence of Latin America, 1800-1830.- The John's Hopskin Press.- Baltimore 1941.

WILCOX, M.: A Short History of the War with Spain.- New York 1898.

WILKERSON, M.M.: Public Opinion and the Spanish-American War. A Study in War Propaganda.- Baton Rouge 1932.

WILSON, WOODROW: A History of American People.- Harper and Brothers.- New York 1901-1902.- 5 Vols.

WINBERG, A.K.: Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History.- Baltimore 1935.

WISAN, J.E.: The Cuban Crisis as Reflected in the New York Press (1895-1898).- New York 1965.

ZARAGOZA, JUSTO: Las Insurrecciones de Cuba. Apuntes para la Historia Política de esta Isla en el Presente Siglo.- Manuel G. Hernández.- Madrid 1872-1873.- 2 Vols.

ZINN, HOWARD: A Peoples History of the United States.- Longman.- London 1980.

ZULETA ALVAREZ, ENRIQUE: La Idea de América en el Pensamiento Español Contemporáneo (1900-1936).- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.- Mendoza 1979.

ZURANO MUÑOZ, EMILIO: Alianza Hispano-Americana.- Imp. Juan Pueyo.- Madrid 1928.

2.2) Publicaciones Periódicas.

BERMEOSOLO, FRANCISCO: La Opinión Pública Norteamericana y la Guerra de los Estados Unidos contra España.- "Revista de Estudios Políticos" (Madrid), núm. 123 (1962), 219-233.

CABRERO FERNANDEZ, LEONCIO: La Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2 (1985), 181-215.

CHAMORRO, DEMETRIA y CARRILLO, ISABEL: Polémica sobre la Abolición del Trabajo Esclavo en las Colonias Españolas (1865-1886).- "Revista de Trabajo" (Madrid), núm. 26 (1969), 267-420.

DAMIAN, MABEL MARIA: El Pensamiento Político de Rafael María de Labra.- "Cuaderno Hispanoamericanos" (Madrid), LXXXII, núm.244 (1970), 125-152.

DELGADO, JAIME: España ante el 98.- "Boletín Americanista" (Barcelona), VII-XI, núm. 19-27 (1965-1969), 47-58.

Diario de Sesiones del Congreso de Diputados. (Correspondiente al periodo comprendido entre 1871 y 1898).

Diario de Sesiones del Senado. (Correspondiente al periodo comprendido entre 1879 y 1916).

DOMINGO ACEBRON, MARIA DOLORES: Los Hacendados Cubanos ante la Guerra de los Diez Años (1868-1878).- "Revista de Indias" (Madrid), núm. 172 (1983), 707-727.

GIL MUNILLA, OCTAVIO: Cuba Problema Español (1891-1898).- "Anuario de Estudios Americanos" (Sevilla), IX, (1952), 481-513.

HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, MARIO: El Abolicionismo en el Mundo Europeo: Mentalidad e Ideología.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2 (1986), 121-126.

-----: Ciclos Kondratieff y Modelos de Frustración Económica Ibero-Americana (Siglo XIX).- "Revista de la Universidad de Madrid" (Madrid), XX, núm. 78 (1972), 202-236.

-----: Las Cortes Españolas ante la Abolición de la Esclavitud en las Antillas. (Opinión Institucional ante un Tema de Política Social).- "Quinto Centenario" (Madrid), núm. 8 (1985), 15-36.

-----: David Turnbull y el Problema de la Esclavitud en Cuba.- "Anuario de Estudios Americanos" (Sevilla, XIV.

MARTINEZ CARRERAS, JOSE URBANO: España y la Abolición de la Esclavitud durante el Siglo XIX.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2 (1986), 167-179.

MORENO GARCIA, JULIA: El Abolicionismo en la Política Internacional del Siglo XIX: La Actitud de España.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2 (1986), 147-165.

NAVARRO AZCUE, CONCEPCION: La Esclavitud en Cuba, antes y después de las Leyes Abolicionistas.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2 (1986), 217-239.

OLIVAR BULNES, JUANA H.: Labra en las Cortes Españolas.- "Revista Bimestre Cubana" (La Habana), LXV, núm. 1-3 (1950), 190-262.

ORTIZ, FERNANDO: José Antonio Saco y sus Ideas Cubanas.- "Revista Bimestre Cubana" (La Habana), (1929).

PAZOS Y ROQUE, FELIPE: La Economía Cubana en el Siglo XIX.- "Revista Bimestre Cubana" (La Habana), XLVII, (1951), 83-106.

PEREZ LANDA, R. y JUSTIZ DEL VALLE, T.: Los Palenques en Cuba.- "Nuevos Rumbos" (La Habana), Octubre-Noviembre (1947).

RAHOLA, FEDERICO: La Personalidad Internacional de España y el Señor Labra.- "El Mercurio" (Barcelona), XII, núm. 153 (27-VI-1913), 193,

-----: Don Rafael María de Labra: Un Gran Español y un Eximio Americanista.- Ibid., XVIII, núm. 305 (25-IV-1918), 97-99.

ROMERO MORENO, JOSE MANUEL: Derechos Fundamentales y Abolición de la Esclavitud en España.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2 (1986), 241-257.

SANCHEZ ALBORNOZ, NICOLAS: A Propósito de Cuba en 1897. Una Especulación con la Rivalidad Internacional.- "Cuadernos de Historia de España" (Buenos Aires), XLI-XLII, (1965), 299-312.

SECO SERRANO, CARLOS: Espartero y Cuba: Entre Inglaterra y Norteamérica.- "Revista de Indias" (Madrid), XXIX, núm. 115-118 (1969), 581-605.

TORTELLA, GABRIEL: Reflexiones en torno al Imperialismo Norteamericano en 1898.- "Boletín del Seminario de Derecho Político" (Salamanca), núm. 13 (1964), 191-200.

VILA VILAR, ENRIQUETA: Presencia y Fuerza del Esclavo Africano en América: Trata, Mano de Obra y Cimarronaje.- "Revista de Indias" (Madrid), Anexo núm. 2, (1986), 104-119.

FERNANDO LAGUNA OCHOA.

LAS IDEAS HISPANOAMERICANISTAS DE RAFAEL MARIA DE LABRA.
(ULTRAMAR Y SUS PROBLEMAS DURANTE EL SIGLO XIX).

Director: Dr. Don Jaime Delgado Martín.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Facultad de Geografía e Historia.

Departamento de Historia de América.

Año, 1990.

V O L U M E N I I .

FERNANDO LAGUNA OCHOA.

LAS IDEAS HISPANOAMERICANISTAS DEL RAFAEL MARIA DE
LABRA. (ULTRAMAR Y SUS PROBLEMAS DURANTE EL SIGLO XIX).

APENDICE DOCUMENTAL.

I N D I C E.

Página.

I) TEXTOS DE RAFAEL MARIA DE LABRA.

Apéndice Número 1:	Defectos de la Abolición Gradual. ...	1
Apéndice Número 2:	Condicionamientos y Posibilidades para la Abolición de la Esclavi- tud en Puerto Rico.	2
Apéndice Número 3:	Argumentación en pro de la Aboli- ción Inmediata de la Esclavitud.....	7
Apéndice Número 4:	Responsabilidades con respecto al Proyecto de Abolición de la Escla- vitud en Puerto Rico.	9
Apéndice Número 5:	Tráfico Negrero y Trato Inferido a los Esclavos.	11
Apéndice Número 6:	Incidencia de la Trata en el Desa- rrollo de la Colonización.	13
Apéndice Número 7:	Perniciosa Actitud de los Escla- vistas.	14
Apéndice Número 8:	Postura Esclavista y Peligros In- herentes a ésta. Ineficacia de la Abolición Gradual.	16
Apéndice Número 9:	Necesidad de una Abolición Inme- diata en Cuba.	19
Apéndice Número 10:	Defensa en pro de la Abolición de la Esclavitud.	20
Apéndice Número 11:	Consideraciones en torno a la So- lución del Conflicto Cubano.	22
Apéndice Número 12:	Sentido y Valoración de la Autono- mía Colonial.	24
Apéndice Número 13:	Consideraciones acerca del Trata- miento de los Asuntos Ultramarinos..	25

Apéndice Número 14: Discurso de Rafael María de Labra en el Senado, Definiendo el Con- cepto de Autonomía Colonial.	26
--	----

II) OTROS DOCUMENTOS.

Apéndice Número 1: Proyecto de Bases para la Aboli- ción de la Esclavitud (1869).	28
Apéndice Número 2: Ley Decretada y Sancionada por - las Cortes Constituyentes sobre Abolición de la Esclavitud en la Isla de Puerto Rico (1870). (Ley Moret).	32
Apéndice Número 3: Ley Decretada y Sancionada por la Asamblea Nacional, Aboliendo la Esclavitud en la Isla de Puerto Rico (1873).	38
Apéndice Número 4: Ley Sancionada por S. M. y Publi- cada en el Congreso, Ordenando -- que Cese la Esclavitud en la Isla de Cuba (1880).	41
Apéndice Número 5: Proyecto de Bases para la Reforma Política y Económica (1869). (Pro- yecto Becerra).	49
Apéndice Número 6: Pacto del Zanjón (1878).	56
Apéndice Número 7: Comunicación Oficial del General Martínez Campos al Ministro de la Guerra Señor Ceballos (1878).	58
Apéndice Número 8: Programa del Partido Liberal de - Cuba.	60
Apéndice Número 9: Programa y Declaraciones del Par- tido Liberal o Autonomista de Cuba..	63
Apéndice Número 10: Programa del Partido de la Unión - Constitucional.	72

Apéndice Número 11: Programa y Declaraciones del Partido Autonomista de Puerto Rico.....	75
Apéndice Número 12: Enmiendas y Reforma de la Constitución Orgánica del Partido Autonomista Puertorriqueño, Votadas en la Asamblea de Mayagüez de Mayo de 1891.	80
Apéndice Número 13: Proyecto de Ley sobre Reforma del Gobierno y Administración Civil en las Islas de Cuba y Puerto Rico - (1893). (Proyecto Maura).	99
Apéndice Número 14: Ley Estableciendo las Bases para el Régimen del Gobierno y la Administración Civil de las Islas de Cuba y Puerto Rico (1895). (Ley - Abárzuza).	121
Apéndice Número 15: Manifestaciones del Presidente del Consejo de Ministros Señor Cánovas del Castillo ante los Senadores y Diputados Electos en los Comicios de la Primavera de 1896.	152
Apéndice Número 16: Real Decreto de 29 de Abril de 1897 (Publicado el Día 30), Ampliando con Nuevas Bases la Ley de 15 de Marzo de 1895 sobre Reforma del - Régimen de Gobierno y Administración de las Islas de Cuba y Puerto Rico.....	153
Apéndice Número 17: Declaraciones de Cánovas en "El Liberal" sobre las Posibilidades de Introducir Reformas en Ultramar (28 de Febrero de 1895).	169

Apéndice Número 18: Confidencias de Don Antonio María Fabié al General Martínez Campos sobre el Estado Real de la Isla - de Cuba (26 de Marzo de 1895).....	170
Apéndice Número 19: Comunicación del Capitán General Martínez Campos al Ministro de Ultramar Don Tomás Castellano, Exponiéndole las Repercusiones del Avance Insurreccional sobre la Situación Política Cubana (16 de Enero de 1896).	171
Apéndice Número 20: Palabras de Don Francisco Silvela, Combatiendo las Reformas de Cánovas, Pronunciadas en el Mítin Celebrado en el Teatro Alhambra de Madrid (12 de Junio de 1897).....	172
Apéndice Número 21: Conversación Mantenido entre Don Antonio Cánovas del Castillo y su ExMinistro de Ultramar Antonio María Fabié sobre la Situación Existente en Cuba y las Medidas a Adoptar (18 de Julio de 1897).	173
Apéndice Número 22: Nota Oficiosa del Gobierno Sagasta sobre la Política a Desarrollar en Cuba (6 de Octubre de 1897).	174
Apéndice Número 23: Constitución Autonómica (1897).....	175
Apéndice Número 24: Real Decreto de 8 de Marzo de 1898, Modificando la Constitución Autonómica.	200
Apéndice Número 25: Extracto de la Nota Enviada por - el Secretario de Estado John Quincy Adams al Ministro Norteamericano en Madrid Hugo Nelson (28 de -- Abril de 1823).	203

Apéndice Número 26: Manifiesto de Ostende (Aix-La-Chapelle, 15 de Octubre de 1854).....	205
Apéndice Número 27: Extracto de la Nota Enviada por el Secretario de Estado Norteamericano Richard Olney al Ministro Español en Washington (4 de Abril de 1896).	217
Apéndice Número 28: Declaraciones de McKinley ante los Líderes y la Masa de su Partido en relación con la Independencia de Cuba (18 de Julio de 1896).	220
Apéndice Número 29: Extracto del Ultimo Mensaje del -- Presidente Cleveland al Congreso -- en relación con la Cuestión de Cuba (7 de Diciembre de 1896).	221
Apéndice Número 30: Nota del Ministro de Estado Español Don Pío Gullón al Embajador -- Norteamericano en Madrid Mr. Stewart L. Woodford (23 de Octubre de 1897).	223
Apéndice Número 31: Resumen del Mensaje del Presidente McKinley al Congreso (6 de Diciembre de 1897).	225
Apéndice Número 32: Resumen de las Notas enviadas al Ministerio de Estado por el Embajador Español en Washington Señor Dupuy de Lome (14, 16 y 19 de Enero de 1898).	228

Apéndice Número 33: Resumen de la Respuesta Confiden- cial Dada al Embajadoror Norteame- ricano en Madrid, Mr. Woodford, por el Mediador Español en relación con la Oferta de Compra de Cuba Efectua <u>d</u> da por Estados Unidos (7 de Marzo de 1898).	230
Apéndice Número 34: Tratado de Paz entre España y Esta- dos Unidos de América (10 de Diciem- bre de 1898).	231

I) TEXTOS DE RAFAEL MARIA DE LABRA.

APENDICE NUMERO 1.
DEFECTOS DE LA ABOLICION GRADUAL.

"Muchos son los defectos de la abolición gradual. La excitación de esperanzas periodicamente defraudadas; el fomento de rencores amortiguados, mientras no se ve la posibilidad de la venganza, pero enérgicos, cuando con la conciencia de que llegará el día de la satisfacción, el negro siente la dureza del estado transitorio; la perturbación en el orden de los afectos íntimos por la separación de la madre y del hijo; el estrujamiento del negro por el amo ante la perspectiva de un término en la explotación; el espíritu de rebelión constantemente animado por el público reconocimiento de la injusticia de la esclavitud y por las disposiciones defensivas tomadas por los amos; la oposición permanente del capital y del trabajo; la inquietud de todas las esferas de la vida colonial y el porvenir locamente socavado a fuerza de miedos, torpezas y violencias, todo esto y mucho más es la consecuencia lógica de la abolición gradual. Pero nada de esto es comparable al gran inconveniente de este modo de emancipación, al inconveniente que se ha puesto de manifiesto, sin excepción, en todos los países donde de aquel modo se ha intentado. Y es el infierno de envidias, agitaciones, odios, aspiraciones frenéticas y sangrientas convulsiones, que excita en el negro esclavo el espectáculo diario de grandes masas de libertos que han salido de su tristísima situación por un evento cualquiera, por un capricho de la fortuna o por un arrebató del legislador". (LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en las Antillas Españolas. (Contestación a Saco y a Cochin) (Madrid 1869), pág. 31).

APENDICE NUMERO 2.

CONDICIONAMIENTOS Y POSIBILIDADES PARA LA
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO.

"El hecho de la esclavitud supone tres relaciones: la del esclavo y el Estado, la del Estado y el amo y la del amo y el esclavo.

Yo comprendo, yo me imagino el diálogo que en este momento de crisis puede entablarse entre el Estado y el amo, institución aquélla sin más fin que garantizar el derecho, y no siendo el derecho otra cosa que una relación humana, cuyos dos términos tienen que ser necesariamente dos personalidades, compréndese bien que el Estado sólo pueda ofrecer una contestación favorable al esclavo, que se le presenta diciendo: "Soy un hombre, porque la negrura de mi piel no ha podido empañar la pureza de mi alma y la miseria de mi situación no ha podido arrancarme el sello divino, que en la frente llevo. Gimo en la servidumbre, que me niega todas las calidades y todas las condiciones primeras del ser humano y las cadenas que me oprimen son pesada carga impuesta por la fuerza y contra la que la naturaleza y mi propia voluntad protestan constantemente. Pido, pues, al Estado que garantice mi derecho, reclamo del Estado la proclamación y la seguridad de mi libertad".

Comprendo también el diálogo entre el Estado y el proseedor de esclavos, máxime si el diálogo es sostenido con el Estado español por un poseedor de nuestras Antillas. "Soy culpable, puede decir el poseedor, de un crimen condenado ya por la Civilización, pero este crimen no ha sido mi exclusiva obra.

Más que crimen es una desgracia y me resigno a sufrir sus consecuencias. El esclavo será libre, ya perderé mi capital. Pero observad, que la esclavitud no fue creación mía, que la ley, que ya encontré, la sancionaba y la ley no sólo es precepto jurídico, si que enseñanza moral. Notad, que la ley me sostuvo en mi error y que llegó al punto de prohibir (sin mi voto y quizá contra mi gusto) la difusión de las ideas democráticas y de absoluta justicia en las Antillas y la formación de una modesta sociedad no para emancipar esclavos, si que para no comprar los bozales introducidos de contrabando. Notad, que el Estado también sacó sus provechos de mis esclavos ya por alcabala, ya por los antiguos asientos, ya por las demás contribuciones con que he sido gravado. Y bien: sea libre el esclavo. Mas, del hecho de esta esclavitud, ¿no ha sido también mi cómplice el Estado?. ¿Y por qué sólo yo he soportado la pena?. Comparte conmigo, Estado, la responsabilidad de nuestra culpa común". Y me explico entonces la indemnización como una consecuencia de la complicidad del amo y del Estado.

Pero, lo que no puedo comprender es lo que el amo haya de decir al siervo para retenerle en su poder. "Eres mi esclavo contra naturaleza, contra derecho y contra tu propia voluntad. Si te he comprado, tu no percibiste el precio. Si hoy te poseo, lo hago por la fuerza de las bayonetas. Si espero el resultado de tu trabajo, es fiándolo todo al látigo. Quizá, ha sonado la hora de tu redención, quizá se ha reconocido fuerte tu derecho a la libertad, pero yo no puedo perder un capital y no habrás de ser libre, mientras el Estado no me indemnice de la pérdida material, que tu emancipación me causa. Y no hables de justicia, de moral, de derecho, ni de nada. Tengo de mi parte la fuerza". ¿No se os alcanza, señores, la respuesta de este esclavo?.

Por manera que las tres relaciones, de que he hablado, son distintas y si en este litigio comprendo que pueda ser larga y

reñida la contienda del Estado y del amo por el tanto respectivo de su responsabilidad, no se me alcanza que pueda retardarse un instante el éxito de la demanda de tercería del esclavo, que por la acción reivindicatoria pide su libertad...

...Y siguiendo el plan establecido, veámos los argumentos de los opositores.

El primero es que este proyecto llega de improviso y que para todo, menos para la abolición inmediata, estaban preparados los poseedores. Y cuando yo oigo este argumento, que se repite demasiado, no acierto a salir de mi asombro. ¿Pero, qué preparación deseaban los amos de esclavos?. En el interior, considerad, señores, que así la situación de nuestras Colonias como las condiciones mismas de la esclavitud son tales, como jamás se han dado en país alguno de aquéllos, en que la abolición de la servidumbre se ha realizado.

En nuestras Colonias no se da el caso de que los esclavos superen, que ya no doblen o tripliquen, el número de los libres como en las Antillas inglesas y francesas...

...Además, otro hecho, que frecuentemente se ignora y que yo aquí sólo tocaré de pasada, es, que sólo a un error debe atribuirse la idea de que la producción de nuestras Antillas descansa unicamente en el trabajo esclavo, como sucedía en las Colonias extranjeras...

...Ya sé, que se dice que este proyecto repercutirá en Cuba. Estúdiase también el problema a su tiempo, como a su tiempo traeré aquí toda la cuestión de Cuba, que bien saben los señores

que me escuchan, que yo no tengo reparo para ciertas cosas, ni me imponen gritos y calumnias. Pero reparad, que, aun así, los señores conservadores no debían dirigir sus esfuerzos a combatir la ley en sus artículos, si que a demostrar pura y sencillamente su influencia en Cuba...

...Por manera, señores, que es falso de toda falsedad, que con la abolición repentina pueda paralizarse la producción de la Pequeña Antilla.

Pero se observará y este es el tercer argumento en el orden económico, que si no toda la producción si se resentirá la producción principal del país. Las Colonias, señores, se dedican principalmente a la producción de materias exportables, de géneros de lujo y gran valor y han llevado su empeño hasta el punto de reducir a estas materias toda su producción. Pero como la producción era muy cara, de aquí en gran manera el carácter esclavista, que las Colonias tuvieron, merced a la facilidad excepcional que la trata les daba de proveerse de brazos a un precio ínfimo. Por esto, luego de abolida la trata, se complicó la cuestión de un modo, que no debo examinar ahora, más por esto también todas aquellas Colonias, en que la producción no se redujo a la producción de azúcar, el café y el tabaco revistió un carácter menos esclavista.

Y en este caso se halla Puerto Rico...

...Señores Representantes, continuando al hilo de mi discurso, tócame ahora ocuparme de un punto de excepcional importancia, que ha sido objeto de muchas y notabilísimas publicaciones en el extranjero y que se ha traído al debate por los impugnadores del proyecto.

Tal es el ejemplo que nos han dado otros países, de lo cual quiere sacarse una razón para decirnos que Puerto Rico corre el mismo riesgo, que evitaron los legisladores extranjeros, abordando la abolición con cautela o que corrieron los países en que la abolición se hizo precipitada...

...Pero, centrado ya en el fondo del asunto, permitidme, que os llame la atención sobre la primera enseñanza que arroja la historia de la abolición y que formulo del siguiente modo: Ningún pueblo, que ha intentado la abolición gradual, ha podido llevarla a término, viéndose obligado al fin a adoptar la abolición inmediata".

(Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 27 de Febrero de 1873).

APENDICE NUMERO 3

ARGUMENTACION EN PRO DE LA ABOLICION.
INMEDIATA DE LA ESCLAVITUD.

"Los resultados, Sres. Representantes, de la abolición pueden reducirse a cuatro. El primero, que no se ha dado el caso de que uno sólo de los pueblos en que se haya comenzado por la abolición gradual aplazada haya podido prescindir al cabo de la inmediata como medio de evitar las perturbaciones, los conflictos y los desastres, producidos por la abolición gradual intentada...

...Pero otra segunda lección arroja la Historia y es la de que, si bien el inmediato resultado, el resultado del día siguiente de la abolición repentina, es una baja en la producción del país, éste se repone apenas pasado el quinquenio de la crisis, llegando a un estado superior al de los tiempos de la servidumbre. Y entrambos fenómenos se explican: el uno, porque toda reforma económica, incluso la abolición gradual, tiene que determinar cierta sorpresa, cierto desequilibrio, cierta pérdida de capital, de tiempo y de trabajo, que luego se compensa, si la reforma ha sido acertada, y el otro, porque el trabajo libre, por su propia naturaleza, es más fecundo y más económico que el trabajo esclavo por la intensidad y el valor del esfuerzo, así como por la economía de los trabajadores que supone...

...Y por esto también no me canso de proclamar que la abolición inmediata es preferible a la gradual no sólo por ser la única justa, si que por sus menores inconvenientes y sus mayores bondades en el terreno económico.

Pero contad, señores, que no son sólo estos los resultados que los males de la abolición nos ofrece, también se cuenta la complicación de la empresa emancipadora con otros hechos y otros empeños, los más a propósito para impedir el logro de aquélla. En primer término, se halla la cuestión de la inmigración, después la de la indemnización, en seguida, la reforma comercial y por último las complicaciones políticas y la maldad de las cosechas...

...Por manera, Sres. Representantes, que ni es exacto que la abolición inmediata haya producido desastrosos efectos y que su historia arroje grandes enseñanzas en favor de la abolición gradual, ni es verdad que el estado económico de la Isla de Puerto Rico sea comparable al de los otros países antes de la abolición, ni los problemas, que en aquéllos dificultaban la solución de la cuestión social, tienen importancia, ni aun vida en nuestras Colonias...

...Hay empero, un último punto de vista bajo el que se ha examinado el proyecto de ley, es el punto de vista político. La influencia de este proyecto en Cuba; la presión de los Estados Unidos, a que se cree que obedece; la situación política de Puerto Rico, que no lo consiente, y la gravedad de las circunstancias por que la Península atraviesa, que no lo tolera, tales son las cuestiones capitales que aquí se han tratado y sobre las que yo debo pronunciar algunas palabras.

Principiaré por adelantar una idea. Yo soy partidario de la abolición inmediata, así en Puerto Rico como en Cuba."
(Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 3 de Marzo de 1873).

APENDICE NUMERO 4.

RESPONSABILIDADES CON RESPECTO AL PROYECTO
DE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO.

"Porque, en verdad, señores, que yo no acierto a explicar, cómo después de cerca de los tres meses de planteado el problema y luego de una agitación política y de unos amplios debates en el Parlamento, en la tribuna y en la prensa, de que quizá no haya otro ejemplo en la Historia de nuestra Patria, todavía nos hallemos sin haber entrado en la discusión concreta del artículo 1º de este gravísimo, pero ya moralmente aprobado proyecto...

...Pues bien, decía que la esclavitud no existe sólo por la voluntad de las Colonias y que no es extraña la Metrópoli a esa existencia. En efecto, cuando el Estado ha sacado su provecho de la servidumbre, cuando la ha sostenido y fomentado, cuando la ley ha perseguido hasta a los que combatían la trata y ha prohibido que se constituyese en Ultramar una sociedad para no comprar bozales, ¿cómo puede decirse que los responsables de la esclavitud son pura y simplemente los que viven en nuestras Antillas?...

...La Sociedad Abolicionista, señores, ha tenido la doble misión de propagar la idea redentora y de procurar la emancipación del mayor número de esclavos posible. Para conseguir esto último ha debido acudir a dos medios: el primero, el de venir a la puerta de las Cortes españolas a pedir una ley de abolición...

...el segundo medio a que la Sociedad emancipadora acude...

...el segundo medio de la Sociedad, repito, es el de procurar, en cuanto sus fondos lo permitieran, realizar manumisiones parciales en las Antillas".

(Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 18 de Marzo de 1873).

APENDICE NUMERO 5.

TRAFICO NEGRERO Y TRATO INFERIDO A LOS ESCLAVOS.

"Y para que esta historia de negruras y abominaciones no tuviera otro término que la desesperación y la muerte en el pobre africano y la condensación de los odios y el estallido de la más espantosa catástrofe en las Colonias, no le bastaba al inocente negro, arrebatado al cariño de su esposa, a la solicitud de sus padres, al amor de sus hijos... en nombre de la fe de Cristo, de su propio bienestar, de su porvenir celeste; no le bastaba haberse salvado de las tempestades y los abismos del Océano; no le bastaba haber escapado de las horribles enfermedades que durante la travesía reducía a la mitad, a la tercera, a la cuarta parte el género conducido...; restábale la placidez del ingenio, restábale el "boca-abajo", el cepo, la persuasión de los perros, los interminables sufrimientos que le deparaban las Naciones cristianas en sus espléndidas posesiones de América entre el rosario tartamudeado por un clérigo concupiscente en el infecto barracón y las blasfemias del bárbaro e implacable mayoral, acompañado siempre del látigo civilizador y del persuasivo machete; sufrimientos indecibles en que tomaban parte, como eternas víctimas, la dignidad, el amor, la honra, el interés personal, el vigor físico, la esperanza, los más gratos y dulces recuerdos de la vida, los afectos más puros del alma, las inclinaciones más naturales del ser humano, sus necesidades primeras y con ellas el mútuo respeto, la integridad del derecho, la armonía de los intereses económicos, la vida de la moralidad, la economía y el buen orden social y en fin todo lo que asegura la tranquilidad y el progreso de los pueblos, apartándolos de las perspectivas de Sodoma y Babilonia; tormentos incomparables, porque a todo llegaban, contra lo que sin cesar ha protestado la raza envilecida y explotada casi desde el momento mismo de su importación en América...

...De este modo, hace trescientos años y para honra de nuestra tierra se levantaba el velo que cubría la servidumbre de los negros y se hacía plena justicia a la piedad y a la filantropía de los esclavistas, que hoy mismo se estremecen ante la terribilísima suerte de los pobres negros víctimas del despotismo de los reyes y del diablo en las costas de Africa, "¡anima vili!", de las experiencias, los extravíos y las ambiciones de ese puñado de locos o de demagogos, que con la emancipación instantánea pretenden abrirles las puertas de la esclavitud, del vicio".

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Explotación de los Africanos, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 2 (20-II-1875), págs. 21 y 22).

APENDICE NUMERO 6.

INCIDENCIA DE LA TRATA EN EL DESARROLLO DE LA COLONIZACION.

"Es un punto harto descuidado en el estudio de la Colonización moderna, el que se refiere a la influencia moral y política, más que económica de las instituciones coloniales y a los procedimientos usados por los colonizadores en el seno mismo de la Metrópoli, y esta influencia es, sin embargo, tan positiva y de tales resultados que echarla en olvido equivale a renunciar al conocimiento profundo y exacto de ese hecho tan importante y tan trascendental en la vida de estos cuatro últimos siglos que se llama la Colonización. ¿A quién, que con cierto espíritu indagador y con ánimo reflexivo tome el pulso a la serie de actos, deseos, compromisos, intereses y direcciones, que supone la trata, puede ocultársele la profunda perturbación que en la economía social europea había de producir el enaltecimiento de la avaricia siempre insatisfecha y nunca harta; el incentivo de una especulación monstruosa que como condición tenía la de no reparar en medios; el desarrollo de aquellos capitales amasados con sangre y lágrimas; la recluta de aquellos marineros apercebidos al sacrificio no ya de un sentimiento generoso, si que de todo respeto humano y de toda sombra de derecho?. El virus que el descargado barco negrero dejaba en las playas europeas al volver de una expedición en que todo cabía menos la Moral, el honor, el Derecho, la Economía, la Religión, el progreso, la Ciencia y la Civilización, aquel virus iba filtrándose por todas las capas sociales y lay de los pueblos que no tuvieran el revulsivo de un gran movimiento político o religioso!"

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Explotación de los Africanos, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 11 (15-VII-1875), pág. 164).

APENDICE NUMERO 7.

PERNICIOSA ACTITUD DE LOS ESCLAVISTAS.

"Ahora bien, ¿será necesario explicar la influencia letal que los hombres, que patrocinaban o materialmente hacían este maldito comercio, habían de ejercer en las Metrópolis?. El hombre no se parte porque la conciencia es una. ¡Pues qué!, hombres hechos al desprecio sistemático de todo lo que es noble y generoso, a la indiferencia o a la explotación de los grandes dolores, de los grandes crímenes; acostumbrados a no reparar en procedimientos y a pesararlo todo en la balanza en que uno de los platillos siempre está lleno de oro; educados en el culto del éxito, en la apoteosis del interés, en el desdén del pensamiento, en la ignorancia del destino superior y de la solidaridad del género humano...; hombres curtidos en la piratería, en el fraude, en la orgía de las abominaciones, habían de ser, cuando no honrados ciudadanos y eminentes patricios, personalidades inofensivas, reducidas a cultivar en el hogar doméstico los grandes sentimientos de la Patria y a velar con universal aplauso y rodeados de todos los respetos y de todas las consideraciones por el porvenir de sus tiernos hijos.

¡Ah!, ¡mentira, vil mentira!, la que separando la moral de la política está haciendo todavía en nuestros tiempos la desventura de los pueblos condenados a la más espantosa confusión de los intereses morales; al uso más perturbador de varios nombres de fórmulas siempre pomposas y resonantes vacías por dentro, cuando no llenas de podredumbre y de miseria; al espectáculo, a la apoteosis de todas las flaquezas, de todas las indignidades, excusadas con esa burda separación de la vida íntima y de la vida pública de los hombres.

Lo semejante llama a lo semejante y la conciencia corrompida para un efecto es conciencia perdida para todo. Habrá atenuaciones, eclipses, desvanecimientos, frecuentes disfraces. Pero el fondo continuará siempre el mismo: corrupción, infamia, crimen".

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Explotación de los Africanos, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 12 (31-VII-1875), pág. 182).

APENDICE NUMERO 8.

POSTURA ESCLAVISTA Y PELIGROS INHERENTES ESTA.

INEFICACIA DE LA ABOLICION GRADUAL.

"Acontece con los esclavistas una cosa singular. El nuevo hecho de defender lo existente les permite darse aires de conservadores, como si en el lenguaje del mundo culto pudiera admitirse como conservador el que sostiene la más inicua de las monstruosidades y pretende mantener lo que en puridad es la más perfecta negación de aquello que constituye la base y los términos indispensables de la Civilización moderna. Y satisfechos con sus humos de conservadores, échanla los esclavistas de discretos y prudentes y motejándonos a los que opinamos en contrario de exagerados y extravagantes hablan con cierta afectación del apoyo que presta a sus disparates el ejemplo de los pueblos bien gobernados y la historia de las más conocidas y de las mejor estudiadas experiencias.

Sólo que dá la extraña casualidad de que precisamente en el caso de la abolición los ejemplos y las experiencias estan, por completo, del lado del abolicionismo, lo cual puede muy bien ser absolutamente ignorado por esos pobres diablos, que fuera de sus negros, de sus chinos, de sus cesantías y de su tono de grandes señores no se han ocupado de seguro dos minutos de cosa que valga la pena...

...¿En qué parte se ha llevado a cumplido efecto una ley de abolición gradual? ¿Dónde se han resignado los negros a sufrir, hasta que sus amos quieran y sólo porque conviene a sus amos, una explotación brutal, disfrazada con el nombre de aprendizaje, de preparación o cosa parecida, que hace

imprescindible el mantenimiento del "boca-abajo" (quieralo o no la Ley) y entrega de un modo absoluto al pobre siervo a la potestad dominica, herida de muerte desde que en público es discutida?. ¿Dónde la sociedad, esa sociedad, de que tanto se preocupan los prudentes, dónde ha podido atenuar la intranquilidad en el orden público, la perturbación en el orden económico y la amenaza en el hogar doméstico, que entraña ese periodo de emancipaciones sucesivas y por esto mismo irritantes de esperanzas excitadas y defraudadas, de derechos reconocidos y vulnerados, de estrujamiento insolente, de liquidaciones apresuradas, de hacinamiento desatentado, de lágrimas, de miseria, de envidia y de temores?. ¿Dónde la abolición gradual, iniciada y nunca concluida, dónde ha dejado de producir desastres y desastres, mucho mayores por su actualidad y por su trascendencia que los males ocasionados por la abolición inmediata y simultánea?.

Decidlo hombres del Gobierno; decidlo hombres de los términos medios...; decidlo vosotros, que al denunciarnos a los radicales como demagogos os callais respecto de la espantosa catástrofe a que con vuestros consejos llevais a nuestras Colonias y de que, si acaso, sólo se salvan aquellos pocos propietarios que pueden liquidar y salir de aquellas desventuradas comarcas antes de que terminen esos decantados plazos de preparación para el trabajo libre. Nosotros, los hombres de la teoría, os retamos a que nos presentéis ejemplos.

Sin duda, pensando en esto es como los esclavistas se han decidido a fraguar un plan abolicionista en que no se ha de hablar de libertad, ni de emancipación, ni de plazos, ni de más derechos que los de los amos... ¡Vano empeño!, habiéndose de llevar a cabo en pueblos como nuestras Antillas, donde el régimen liberal tiene que implantarse inmediatamente, so pena de la más

espantosa catástrofe, y donde el espíritu febril de sus habitantes hará imposible, de todo punto imposible, el silencio sobre una cuestión que, cual la esclavista, afecta a todos los órdenes de la existencia colonial...

...Baste con decir que en todo plan de extinción de la esclavitud (no abolición) se hace caso omiso de la justicia y del derecho del negro, pretendiendo que la sociedad soportará buenamente la corrupción que entraña la subsistencia de la esclavitud, lo menos durante la generación actual, en medio de la convicción unánime de su maldad, dando por supuesto que las nuevas complicaciones, que el plan trae, no han de producir resultado, ni en el orden familiar, ni en el público en el económico y exigiendo a las gentes que crean, que lo que no ha conseguido su efecto, allí donde la esclavitud era poco numerosa y las condiciones políticas y sociales favorales al pensamiento (porque el pensamiento, como ya hemos dicho, tiene historia), lo alcance y muy satisfactorio en nuestras Antillas, donde la esclavitud es imponente por su número, estado y ramificaciones y donde la revolución política y social ha removido la tierra y nublado el cielo. Pero de esto, ni debemos, ni podemos hablar ahora.

Resulta, por tanto, que el esclavista anda muy equivocado en sus juicios y en sus afirmaciones sobre la abolición inmediata y simultánea. Es un hecho incontestable que todas las turbulencias, de que nos habla, han sido o antes del decreto de abolición o por causas extrañas a éste y que las más de las veces, si no todas, la ley emancipadora radical ha venido a cortar los conflictos, sembrando la paz, el amor y la esperanza".

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: Un Poco de Historia, "El Abolicionista" (Madrid), VI, núm. 14 (15-IX-1875), págs. 211 y 213).

APENDICE NUMERO 9.

NECESIDAD DE UNA ABOLICION INMEDIATA EN CUBA.

"Sólo que nosotros entendemos que esa abolición ha de ser inmediata y simultánea, porque así lo piden la Ciencia y el Derecho; así lo aconseja la historia de todas las aboliciones contemporáneas; así lo exige la gloriosísima experiencia abolicionista de Puerto Rico de 1873; así lo suponen las explicaciones dadas y los ofrecimientos hechos después de aquella fecha y en vista de aquel suceso por Gobiernos consevadores de España a Gabinetes extranjeros, y así, en fin, parece absolutamente inexcusable después del artículo 3º de la Paz del Zanjón, que reconoce explícitamente "la libertad a los esclavos o colonos asiáticos, que se hallen en las filas insurrectas". (Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 12 de Julio de 1879).

APENDICE NUMERO 10.

DEFENSA EN PRO DE LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.

"Nosotros sostuvimos, desde el primer día, la abolición inmediata y simultánea de la esclavitud, pero condicionada y complementada por radicales reformas económicas, que hubieran equivalido a una de aquellas indemnizaciones a los poseedores de esclavos que han sancionado las principales leyes abolicionistas en circunstancias normales y ordinarias. Porque entediamos que de la esclavitud no es responsables tan sólo el que ha poseído o posee esclavos, sino también, aunque en diferente proporción, el Estado; El Estado que por medio de sus leyes ha sostenido y hasta utilizado la institución, de modo que los perjuicios que pudiera causar la abolición debían afectar a todos los responsables, de hecho, de la servidumbre, en cuyo concepto hubiera sido fácil exigir a las provincias peninsulares, que hoy se alarman, con fundamento o sin él, ante ciertas reformas económicas, sacrificios basados en principios de alta moral...

...La abolición de la esclavitud es un hecho necesariamente perturbador. Lo ha sido en todas partes, porque afecta de una manera fundamental, por su índole particular, a la propiedad y a la producción colonial y, por otra parte, como mera, pero gravísima reforma económica, afecta a las relaciones generales del capital y del trabajo. Por eso, donde quiera que se ha realizado la abolición, han sido precisos desde quince a veinte años, para que los pueblos afectados por aquella trascendentalísima medida se rehiciesen, liquidando el pasado, restañando las heridas y modificando su antiguo modo de producción...

...Otra causa es, indudablemente, la esclavitud. Para abolirla en la Isla de Cuba utilizasteis el sistema más desacreditado del Mundo. No ha habido un solo país, en que se haya votado el procedimiento de la abolición gradual, que no haya sufrido un fracaso...

...Pero no se ha decretado nunca en ningún país la abolición de la esclavitud ya gradual, ya inmediata, que no haya ido acompañada de otras reformas; yo he sido incansable defensor de esa solución radical complementada por reformas económicas y financieras de gran alcance...

...La abolición se hizo en Puerto Rico de una manera maravillosa e indemnizando a los propietarios...

...Pero en Cuba vosotros dejasteis a los propietarios y a los amos la explotación del negro por espacio de ocho años y con ella subsistieron todas las inmoralidades del viejo régimen, multiplicadas por los peligros de la proclamación de la injusticia de la servidumbre y por las concupiscencias despertadas por la seguridad de que el abuso tendría un término legal".

(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 20 de Junio de 1884).

APENDICE NUMERO 11.

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SOLUCION DEL CONFLICTO CUBANO.

"El conflicto cubano sólo tiene una de estas tres soluciones: la cesión de la Grande Antilla a otro pueblo amigo, el abandono, o sea su independencia, y el mantenimiento de nuestro imperio en aquella Isla. No voy a discurrir sobre estos extremos, quiero únicamente insinuar mi juicio. Pues bien, la cesión equivaldría al pleno reconocimiento de nuestra actual impotencia para toda obra de exteriorización, esto es, para llevar nuestro espíritu y nuestro carácter fuera del horizonte sensible de esta tierra, dotada en otros tiempos de tan grandes facultades para colonizar. Y esto sería tanto más grave, cuanto que nuestra impotencia se patentizaría en los mismos días en que las grandes corrientes de la Civilización conducen a estos empeños de dilatación, y tanto más vergonzoso, cuanto que después de haber consentido, en que durante el último siglo y en lo que va de éste se bastardease en América y en Asia nuestra gran tradición, renunciásemos a la gloriosa empresa de rectificar nuestros extravíos y curar los males de nuestras Colonias. En cuanto al abandono... sería, simple y llanamente, un crimen de lesa humanidad.

En este supuesto, nos corresponde el mantenimiento de la integridad nacional, pero entiéndase bien, no como una mera satisfacción a nuestro amor propio ofendido, no sólo como una pena a los que se han rebelado contra la Madre Patria, no, en fin, como una empresa militar de fuerza. No. Cuba debe conservarse para España, más para que España cumpla en aquella tierra los grandes deberes que imponen la Justicia y la Civilización...

...Porque, no hay que dudarlo; si hoy no corregís aquellos excesos, mañana será imposible, y mañana es indispensable, de todo punto indispensable, proclamar la libertad en las Colonias. Sí, la libertad, porque a ella tiende todo en el mundo, porque sin ella no se vive en el siglo XIX, porque por ella clama y se muere todo cuanto es, cuanto vive, alienta, palpita y se mueve en la virgen América...

...Concluid la guerra de Cuba. Se debe concluir, porque nos va en ello la honra y el porvenir. Concluidla con vuestro criterio, pero concluidla pronto y bien...

...No quiero sentarme sin proclamar energicamente que, sobre todo, esto urge una necesidad y ésta se reduce a hacer la reforma de nuestras Colonias".

(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 10 de Julio de 1871).

APENDICE NUMERO 12.

SENTIDO Y VALORACION DE LA AUTONOMIA COLONIAL.

"Cuando se habla de autonomía hay que tener en consideración no el valor exacto de las palabras, caracterizadas por los adjetivos, sino el valor que las palabras tienen en el lenguaje científico; cuando se habla de autonomía se entiende la afirmación de la Ley; cuando se habla de autonomía individual se entiende la ley del individuo dentro de las condiciones sociales y bajo la jurisdicción del Estado; cuando se habla de la autonomía como condición fundamental en el Derecho Internacional de las Naciones se entiende el derecho a la independencia, se entiende la afirmación de la propia personalidad de la Nación en el concierto de los demás pueblos, y cuando se habla de la autonomía colonial se entiende que es la afirmación de la personalidad propia de las Colonias y como la Colonia es una sociedad subalterna y sometida en sus condiciones jurídicas y sociales al gran todo nacional, dicho se está, que la ley de la autonomía colonial implica la superior autoridad del Estado Nacional y por tanto vive dentro del Estado, de tal suerte que si se afirmase de cualquier modo que negaba el imperio y la consideración superior de la soberanía nacional o de la unidad del Estado, que es algo más, dicho se está, que ésta no sería la autonomía colonial, esto constituiría o un Estado independiente en vista de nuevas transformaciones o un Estado tributario o un Estado protegido, pero por consideraciones puramente históricas, y se encontraría en condiciones que no son las que tienen las Comarcas, sino que determinan aquéllas que han de cooperar a su transformación política y social".

(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 20 de Julio de 1886).

APENDICE NUMERO 13.

CONSIDERACIONES ACERCA DEL TRATAMIENTO
DE LOS ASUNTOS ULTRAMARINOS.

"...Y otro peligro grave que Yo palpo es, a saber, que las cuestiones ultramarinas se resuelven con el criterio de que las Colonias no vienen a tener más importancia que la de una especie de mercado, de tal suerte que si no pudiéramos colocar nuestro calzado, nuestras harinas y nuestros vinos no valía la pena de los sacrificios que hiciéramos...

...Pues bien yo veo otro peligro que por ahí se produce, que es el de creer que las cuestiones ultramarinas no tienen, más que un valor local y que se han de resolver con las pretensiones locales.

Error gravísimo, porque la Colonia es siempre independientemente de su valor como mercado, un dato positivo de la personalidad de una Nación y es necesario hacer todo género de sacrificios para su conservación, porque esto afecta no sólo a los intereses económicos de la Patria, sino a su honor, a su decoro y a su historia y es necesario convencerse de que el problema colonial no es un problema local que haya de resolverse sólo por las excitaciones y las exigencias de la localidad, sino con el concierto general de los problemas nacionales dentro de las facultades más amplias de los Gobiernos, porque afectan al honor, al decoro y a los más altos intereses de la Patria".
(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 3 de Julio de 1891).

APENDICE NUMERO 14.

DISCURSO DE RAFAEL MARIA DE LABRA EN EL SENADO,
DEFINIENDO EL CONCEPTO DE AUTONOMIA COLONIAL.

"Con todas estas salvedades, yo me atrevo a decir que es absolutamente indispensable proclamar ahora mismo, con modo solemne, la autonomía colonial en nuestras Antillas. Es decir, una autonomía acomodada al espíritu y a las tradiciones coloniales de España, sobre la base de la identidad perfecta de los derechos civiles y políticos de los españoles de allende y aquende del Atlántico, del sufragio universal y del Gobierno responsable, en el sentido de que sean responsables ante las Corporaciones populares insulares, capacitadas para atender y resolver todo lo puramente colonial, los funcionarios públicos encargados exclusivamente de la Administración insular. Y todo ello, bajo la soberanía indiscutible de la Nación española, representada por los poderes públicos de ésta y garantizada del todo y manera que la misma Nación en Cortes estime oportuno.

Después de esto, yo sostengo que esa autonomía colonial se debe aplicar inmediatamente, mañana mismo, a la Isla de Puerto Rico, pero con toda sinceridad y con toda resolución y sin que nadie pueda temer que el predominio de cualquiera de los grupos políticos insulares en las Corporaciones de aquella Isla sea el resultado de ninguna otra fuerza o influencia que la voluntad explícita de la mayoría de aquel país.

Asimismo, creo que es indispensable llevar urgentemente a las columnas de la "Gaceta" las fórmulas concretas y positivas de esa solución autonomista para Cuba con el explícito compromiso de proceder a su aplicación en el modo y manera que lo permitan

ahora las circunstancias, para que el régimen quede implantado en toda su plenitud en el punto y hora que cese materialmente la guerra en aquella comarca.

Del mismo modo, pienso que es inexcusable levantar la vida económica de Cuba por medio de una grande, resuelta e inmediata reforma arancelaria, de carácter eminentemente librecambista, que abarate o realmente haga posible la existencia particular y la industria en Cuba; que asegure a los productos de aquella tierra grandes mercados en todo el Mundo; que comprometa al extranjero a la defensa del orden y de la paz en las Antillas, y que respete la producción metropolitana del modo y manera que la respetan los aranceles coloniales ingleses. Es decir, no consintiendo que, en ningún caso, el producto extranjero resulte favorecido contra el producto colonial.

Por último, entiendo que corresponde al Gobierno por sus medios propios y característicos, que yo no puedo, ni debo, detallar ahora, levantar la opinión cubana; excitar el concurso caluroso y activo de aquel país; determinar el desarme y la reducción de los insurrectos, en vista de la libertad consagrada definitivamente en aquella tierra, que ahora agoniza por efecto de la guerra, y, en último extremo, procurar provocar y dirigir la contrarrevolución en nombre del derecho de España y de la autonomía colonial".

(Diario de Sesiones del Senado, 30 de Junio de 1896).

II) OTROS DOCUMENTOS.

APENDICE NUMERO 1.

PROYECTO DE BASES PARA LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD (1869).

Considerando, que la esclavitud es un ultraje a la naturaleza humana y una afrenta para la Nación, que, única en el mundo civilizado, la conserva en toda su integridad.

Considerando, que cuando no razones de justicia y de honra para la Revolución de Septiembre, otras de la más vulgar conveniencia exigen urgentemente la abolición de la esclavitud en nuestras Colonias.

Considerando, que de todos los sistemas presentados y llevados a efectos el más sencillo, el más natural y el más justo y por todo esto el más propio del momento revolucionario en que actualmente viven nuestra Patria, es el conocido con el nombre de Abolición inmediata y simultánea.

Considerando, que las condiciones del trabajo en Puerto Rico, la cultura y la economía de aquella sociedad, las proporciones en que están las razas y las clases, la situación moral de los esclavos, el carácter de la raza negra (cuyos individuos son casi en su totalidad criollos) y hasta la disposición geográfica y topográfica de la Isla hacen de todo punto injustificable cualquier temor de que el orden público se altere o la vida económica sufra un rudo ataque por efecto de una medida radical en la cuestión de la esclavitud.

Considerando, que por estas mismas razones y por las anteriormente expuestas todo aplazamiento en la abolición sería ocasionado a peligros y desgracias aun mucho mayores que las que han ocurrido y padecido todos los pueblos, que dentro de este siglo han acordado la abolición gradual para lanzarse luego como recurso de salvación en la inmediata.

Considerando, que es de equidad, al par que conviene al buen orden económico de la Isla, que el Estado indemnice a los actuales poseedores de esclavos el valor de éstos.

Considerando, que para los efectos de la indemnización, como para todos los que se relacionen con la obra emancipadora, debe contarse con la situación económica y con los recursos políticos y financieros del país, pero en la inteligencia de que las dificultades, que de esto surjan, nunca, ni por ningún concepto, deben perjudicar al liberto, harto maltratado por largos años de servidumbre.

La minoría de la Comisión que entiende en la resolución de la cuestión social, tiene el honor de proponer para su aprobación a la Junta Informativa de Reformas Políticas, Económicas y Sociales de la Isla de Puerto Rico las siguientes bases:

1a. A partir de 1º de Enero de 1870 queda abolida la esclavitud en la Isla de Puerto Rico.

2a. Los libertos entrarán inmediatamente, después de promulgada la Ley de abolición, en el pleno goce de los derechos

civiles que nuestros Códigos garantizan a todos los hombres libres, así como de los políticos que la Constitución les reconozca.

3a. Los libertos tendrán el derecho a permanecer en las casas, ingenios y fábricas, donde en la actualidad se hallan trabajando como esclavos, durante un plazo que no excederá de noventa días.

Los amos deberán atender en todo este plazo a su subsistencia y prestarles todos los cuidados acostumbrados en tiempo de esclavitud, exigiendo en cambio de los libertos un trabajo que no excederá de cinco días por semana.

4a. Los libertos mayores de sesenta años y los inutilizados de cualquier edad tendrán derecho a permanecer en las casas de sus antiguos amos y a ser por éstos sostenidos durante un plazo de un año dentro del que la Diputación Insular de Puerto Rico acordará lo conveniente respecto de su destino definitivo.

5a. Queda suprimida toda clase de castigos corporales en los plazos arriba marcados.

Las diferencias que con motivo de las dos bases anteriores sobrevinieren entre amos y libertos las resolverán los jueces de paz.

6a. Los Ayuntamientos de la Isla se harán cargo de la tutela de los libertos huérfanos menores de edad.

Los libertos no huérfanos, pero menores de edad, seguirán a sus padres.

7a. El Estado indemnizará a los poseedores de esclavos del valor de éstos.

8a. Para los efectos de la indemnización se procederá a la tasación individual de los esclavos por peritos nombrados "ad hoc".

Por los mayores de sesenta años, los inutilizados de cualquier edad y los nacidos después del 17 de Septiembre de 1868 no se pagará indemnización.

9a. La Diputación Insular de Puerto Rico arbitrará la manera de hacer efectiva la indemnización, contando con la parte de los ingresos de la Isla que hubieren de destinarse al pago de las atenciones generales de la Nación.

Madrid, 1º de Octubre de 1869.

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Abolición de la Esclavitud en las Antillas Españolas. (Contestación a Saco y a Cochin) (Madrid 1869), págs. 113-115).

APENDICE NUMERO 2.

LEY DECRETADA Y SANCIONADA POR LAS CORTES CONSTITUYENTES
SOBRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD
EN LA ISLA DE PUERTO RICO (1870). (LEY MORET).

AL REGENTE DEL REINO.

Las Cortes Constituyentes de la Nación española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Art. 1º. Todos los hijos de madres esclavas que nazcan después de la publicación de esta ley son declarados libres.

Art. 2º. Todos los esclavos nacidos desde el 17 de Septiembre de 1868 hasta la publicación de esta ley son adquiridos por el Estado mediante el pago a sus dueños de la cantidad de cincuenta escudos.

Art. 3º. Todos los esclavos que hayan servido bajo la bandera española o de cualquier manera hayan auxiliado a las tropas durante la actual insurrección de Cuba son declarados libres. Igualmente quedan reconocidos como tales todos los que hubieren sido declarados libres por el Gobernador Superior de Cuba, en uso de sus atribuciones. El Estado indemnizará de su valor a los dueños, si han permanecido fieles a la causa española; si pertenecieren a los insurrectos no habrá lugar a indemnización.

Art. 4º. Los esclavos que a la publicación de esta ley hubieren cumplido sesenta años son declarados libres sin indemnización a sus dueños. El mismo beneficio gozarán los que en adelante llegaren a esa edad.

Art. 5º. Todos los esclavos que por cualquier causa pertenezcan al Estado son declarados libres. Asimismo, aquéllos que a título de emancipados estuvieren bajo la protección del Estado entrarán desde luego en el pleno ejercicio de los derechos de los ingenuos.

Art. 6º. Los libertos por ministerio de esta ley, de que hablan los artículos 1º y 2º, quedarán bajo el patronato de los dueños de la madre, previa indemnización, conforme a lo prescrito en el art. 11.

Art. 7º. El patronato, a que se refiere el artículo anterior, impone al patrono la obligación de mantener a sus clientes, vestirlos, asistirlos en sus enfermedades y darles la enseñanza primaria y la educación necesaria para ejercer un arte o un oficio.

El patrono adquiere todos los derechos de tutor, pudiendo a más aprovecharse del trabajo del liberto sin retribución alguna hasta la edad de dieciocho años.

Art. 8º. Llegado el liberto a la edad de dieciocho años, ganará la mitad del jornal de un hombre libre, según su clase y oficio. De este jornal se le entregará desde luego la mitad, reservándose la otra mitad para formarle un peculio de la

manera que determinen disposiciones posteriores.

Art. 9º. Al cumplir los veintidos años el liberto adquirirá el pleno goce de sus derechos, cesando el patronato, y se le entregará su peculio.

Art. 10. El patronato terminará también:

1º. Por el matrimonio del liberto, cuando lo verifiquen las hembras después de los catorce años y los varones después de los dieciocho.

2º. Por abuso justificado del patrono en castigos o por faltas a sus deberes consignados en el art. 7º.

3º. Cuando el patrono prostituya o favorezca la prostitución del liberto.

Art. 11. El patronato es transmisible por todos los medios conocidos en Derecho y renunciable por justas causas.

Los padres legítimos o naturales que sean libres podrán reivindicar el patronato de sus hijos, abonando al patrono una indemnización por los gastos hechos en beneficio del liberto.

Disposiciones posteriores fijarán la base de esta indemnización.

Art. 12. El Gobernador Superior Civil proveerá en el término de un mes, desde la publicación de esta ley, las listas de los esclavos que estén comprendidos en los artículos 3º y 5º.

Art. 13. Los libertos y libres a que se refiere el artículo anterior quedarán bajo la protección del Estado, reducida a protegerlos y a proporcionarles el medio de ganar su subsistencia sin coartarles de modo alguno su libertad.

Los que prefieran volver al Africa serán conducidos a ella.

Art. 14. Los esclavos a que se refiere el art. 4º podrán permanecer en la casa de sus dueños que adquirirán en este caso el carácter de patronos.

Cuando hubieren optado por continuar en la casa de sus patronos, será potestativo en éstos retribuirlos o no, pero en todo caso, así como en el de imposibilidad física de mantenerse por sí, tendrán la obligación de alimentarlos, vestirlos y asistirlos en sus enfermedades, así como el derecho de ocuparlos en trabajos adecuados a su estado.

En el caso de negarse el liberto a cumplir la obligación de trabajar, como en el de producir trastornos en la casa del patrono, la autoridad decidirá, oyendo antes al liberto.

Art. 15. Si el liberto por su voluntad saliere del patronato de su antiguo amo, no tendrá ya efecto para con éste las obligaciones contenidas en el precedente artículo.

Art. 16. El Gobierno arbitrará los recursos necesarios para las indemnizaciones a que dará lugar la presente ley por medio de un impuesto sobre los que, permaneciendo aun en servidumbre, estén comprendidos en la edad de once a sesenta años.

Art. 17. El delito de servicia justificado y penado por los Tribunales de Justicia traerá consigo la consecuencia de la libertad del siervo que sufre el exceso.

Art. 18. Toda ocultación, que impida la aplicación de los beneficios de esta ley será castigada con arreglo al Título XIII del Código Penal.

Art. 19. Serán considerados libres todos los que no aparezcan inscritos en el censo formado en la Isla de Puerto Rico en 31 de Diciembre de 1869 y en que deberá quedar terminado en la Isla de Cuba en 31 de Diciembre del corriente año de 1870.

Art. 20. El Gobierno dictará un reglamento especial para el cumplimiento de esta ley.

Art. 21. El Gobierno presentará a las Cortes, cuando en ellas hayan sido admitidos los Diputados de Cuba, el proyecto de ley de emancipación indemnizada de los que queden en servidumbre después del planteamiento de esta ley.

Interin esta emancipación se verifica queda suprimido el castigo de azotes que autorizó el capítulo 13, reglamento de Puerto Rico, y su equivalente en Cuba.

Tampoco podrán venderse separadamente de sus madres los hijos menores de catorce años, ni los esclavos que esten unidos en matrimonio.

De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino para su promulgación como ley.

Palacio de las Cortes, 23 de Junio de 1870.=Manuel Ruíz Zorrilla, Presidente.=Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.=Julián Sánchez Ruano, Diputado Secretario.=Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.=Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

(Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 23 de Junio de 1870. Apéndice 2º al número 313).

APENDICE NUMERO 3.

LEY DECRETADA Y SANCIONADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL,
ABOLIENDO LA ESCLAVITUD EN LA ISLA DE PUERTO RICO (1873).

La Asamblea Nacional, en uso de su soberanía, decreta y sanciona la siguiente ley:

Art. 1º. Queda abolida para siempre la esclavitud en la Isla de Puerto Rico.

Art. 2º. Los libertos quedan obligados a celebrar contratos con sus actuales poseedores, con otras personas o con el Estado por un tiempo que no bajará de tres años.

En estos contratos intervendrán, con el carácter de curadores de los libertos, tres funcionarios especiales nombrados por el Gobierno Superior con el nombre de protectores de los libertos.

Art. 3º. Los poseedores de esclavos serán indemnizados de su valor en el término de seis meses después de publicarse esta ley en la "Gaceta de Madrid".

Los poseedores con quienes no quisieran celebrar contratos sus antiguos esclavos obtendrán un beneficio del veinticinco por ciento sobre la indemnización que hubiera de corresponderles en otro caso.

Art. 4º. Esta indemnización se fija en la cantidad de treinta y cinco millones de pesetas que se hará efectiva mediante un empréstito, que realizará el Gobierno sobre la exclusiva garantía de las rentas de la Isla de Puerto Rico, comprendiendo en los presupuestos de la misma la cantidad de tres millones y medio de pesetas anuales para intereses y amortización de dicho empréstito.

Art. 5º. La distribución se hará por una Junta compuesta del Gobernador Superior Civil de la Isla como Presidente; del Jefe económico; del Fiscal de la Audiencia; de tres Diputados provinciales elegidos por la Diputación; del Síndico del Ayuntamiento de la capital; de dos propietarios elegidos por los cincuenta poseedores del mayor número de esclavos y de otros dos elegidos por los cincuenta poseedores del menor número.

Los acuerdos de esta Comisión serán tomados por mayoría de votos.

Art. 6º. Si el Gobierno no colocase el empréstito, entregará los títulos a los actuales poseedores de esclavos.

Art. 7º. Los libertos entrarán en el pleno goce de los derechos políticos a los cinco años de publicada la ley en la "Gaceta de Madrid".

Art. 8º. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de esta ley y para atender a las necesidades de beneficencia y de trabajo que la misma hiciera precisas.

Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento.

Palacio de la Asamblea Nacional, 22 de Marzo de 1873.
=Francisco Salmerón y Alonso, Presidente.= Cayo López,
Representante Secretario. =Eduardo Benot, Representante
Secretario. =Federico Balart, Representante Secretario.
(Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 22 de Marzo de 1873.
Apéndice 3º al número 31).

APENDICE NUMERO 4.

LEY SANCIONADA POR S. M. Y PUBLICADA EN EL CONGRESO,
ORDENANDO QUE CESE LA ESCLAVITUD EN LA ISLA DE CUBA (1880).

Señor: Las Cortes han aprobado el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Art. 1º. Cesa el estado de esclavitud en la Isla de Cuba con arreglo a las prescripciones de la presente ley.

Art. 2º. Los individuos que sin infracción de la Ley de 4 de Julio de 1870 se hallaren inscritos como siervos en el censo ultimado en 1871 y continuaren en servidumbre a la promulgación de la ley quedarán durante el tiempo, que en ella se determina, bajo el patronato de sus poseedores.

El patronato será transmisible por todos los medios conocidos en Derecho, no pudiendo transmitirse sin transmitir al nuevo patrono el de los hijos menores de doce años y el de su padre o madre respectivamente. En ningún caso podrán separarse los individuos que constituyan familia, sea cual fuere el origen de ésta.

Art. 3º. El patrono conservará el derecho de utilizar el trabajo de sus patrocinados y el de representarlos en todos los actos civiles y judiciales con arreglo a las leyes.

Art. 4º. Serán obligaciones del patrono:

- 1º. Mantener a sus patrocinaados.
- 2º. Vestirlos.
- 3º. Asistirlos en sus enfermedades.
- 4º. Retribuir su trabajo con el estipendio mensual que en esta ley se determina.
- 5º. Dar a los menores la enseñanza primaria y la educación necesaria para ejercer un arte, oficio u ocupación útil.
- 6º. Alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades a los hijos de los patrocinaados que se hallen en la infancia y en la pubertad, nacidos antes y después del patronato, pudiendo aprovecharse sin retribución de sus servicios.

Art. 5º. A la promulgación de esta ley se entregará a los patrocinaados una cédula en la forma que determine el reglamento, haciendo constar en ella la suma de los derechos y obligaciones de su nuevo estado.

Art. 6º. El estipendio mensual a que se refiere el artículo 4º en su párrafo cuarto será de uno a dos pesos para los que tengan más de dieciocho años y no hayan alcanzado la mayor edad. Para los que la hayan cumplido el estipendio será de tres pesos mensuales.

En caso de inutilidad para el trabajo de los patrocinaados, por enfermedad o por cualquier otra causa, el patrono no estará obligado a entregar la parte del estipendio que corresponda al tiempo que dicha inutilidad hubiere durado.

Art. 7º. El patronato cesará:

- 1º. Por extinción, mediante el orden gradual de edades de los patrocinados, de mayor a menor, en la forma que determina el art. 8º, de modo que concluya definitivamente a los ocho años de promulgada esta ley.
- 2º. Por acuerdo mútuo del patrono y del patrocinado sin intervención extraña, excepto la de los padres si fueren conocidos, y en su defecto de las Juntas locales respectivas, cuando se trate de menores de veinte años, determinada esta edad en la forma que expresa el art. 13.
- 3º. Por renuncia del patrono, salvo si los patrocinados fueren menores, sexagenarios o estuvieren enfermos o impedidos.
- 4º. Por indemnización de servicios, mediante entrega al patrono de la suma de treinta a cincuenta pesos anuales, según sexo, edad y circunstancias del patrocinado, por el tiempo que faltare a éste de los cinco primeros años de patronato y el término medio de los tres restantes.
- 5º. Por cualquiera de las causas de manumisión establecidas en las leyes civiles y penales o por faltar el patrono a los deberes que le impone el art. 4º.

Art. 8º. La extinción del patronato mediante el orden de edades de los patrocinados a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior se verificará por cuartas partes del número de individuos sujetos a cada patrono, comenzando al terminar el quinto año y siguiendo al final de los sucesivos hasta que cese definitivamente al concluir el octavo.

La designación de los individuos que deban salir del patronato mediante la edad se hará ante las Juntas locales con un mes de anterioridad a la terminación del quinto año y demás sucesivos.

Si hubiere de la misma edad más individuos de los que deban salir del patronato en un mismo año, un sorteo verificado ante dichas Juntas designará los que hayan de salir del patronato, que serán los que obtengan número más bajo.

Cuando el número de patrocinados, siendo mayor de cuatro, no fuera divisible por éste, el exceso aumentará un individuo a cada una de las primeras designaciones. Si el número de patrocinados no llega a cuatro, la designación se hará por terceras partes, por mitad o de una vez, pero la obligación del patrono no será exigible, sino al final del sexto, séptimo y octavo año respectivamente.

El reglamento fijará la forma, método y extensión de los registros y empadronamientos que hayan de servir para las designaciones.

Art. 9º. Los que dejen de ser patrocinados en virtud de lo dispuesto en el art. 7º gozarán de sus derechos civiles, pero quedarán bajo la protección del Estado y sujetos a las leyes y reglamentos, que impongan la necesidad de acreditar la

contratación de su trabajo o un oficio u ocupación conocidos. Los que fuesen menores de veinte años y no tuviesen padres quedarán bajo la inmediata protección del Estado.

Art. 10. La obligación de acreditar la contratación de su trabajo para los hayan salido del patronato durará cuatro años y los que la quebranten, a juicio de la autoridad gubernativa, asesorada de las Juntas locales, serán tenidos por vagos para todos los efectos legales y podrán ser destinados a prestar servicio retribuido en las obras públicas por el tiempo que, según los casos, determine el reglamento. Transcurridos los cuatro años a que este artículo se contrae los que fueron patrocinados disfrutarán de todos sus derechos civiles y políticos.

Art. 11. Los individuos que estén coartados a la promulgación de esta ley conservarán en su nuevo estado de patrocinados los derechos adquiridos por la coartación. Podrán además utilizar el beneficio consignado en el caso cuarto del art. 7º, entregando a sus patronos la diferencia que resulte entre la cantidad que tuvieren dada y la que corresponda por indemnización de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo y caso mencionados.

Art. 12. Los individuos que en virtud de lo dispuesto en la Ley de 4 de Julio de 1870 sean libres por haber nacido con posterioridad al 17 de Septiembre de 1868 estarán sujetos a las prescripciones de aquella ley, excepto en todo lo que pueda serles más ventajosa la presente.

Los libertos en virtud del art. 19 de la expresada Ley de 1870 quedarán bajo la inmediata protección del Estado y obligados a acreditar, hasta que transcurran cuatro años, la

contratación de su trabajo y demás condiciones de ocupación a que se refieren los artículos 9º y 10 de la presente.

Art. 13. Se entenderá que son menores para los efectos de esta ley los que no hayan cumplido veinte años, si la edad puede justificarse, y, en caso contrario, se deducirá ésta por las Juntas locales, en vista de las circunstancias físicas del menor, previo informe pericial.

Art. 14. Los patronos no podrán imponer a los patrocinados, ni aun bajo el pretexto de mantener el régimen del trabajo dentro de las fincas, el castigo corporal prohibido por el párrafo segundo del art. 21 de la Ley de 4 de Julio de 1870. Tendrán, sin embargo, las facultades coercitivas y disciplinarias que determine el reglamento, el cual contendrá a la vez las reglas necesarias para asegurar el trabajo y el ejercicio moderado de aquella facultad. Podrán también los patronos disminuir los estipendios mensuales proporcionalmente a la falta de trabajo retribuido, según los casos y en la forma que el reglamento fije.

Art. 15. En cada provincia se formará una Junta presidida por el Gobernador y en su defecto por el Presidente de la Diputación Provincial, compuesta de un Diputado provincial, del Juez de primera instancia, del promotor fiscal, del procurador síndico de la capital y de dos contribuyentes, uno de los cuales será patrono.

En los Municipios donde convenga, a juicio de los respectivos Gobernadores y previa aprobación del Gobernador General, se formarán también Juntas locales presididas por el Alcalde y compuestas del procurador síndico, de uno de los mayores contribuyentes y de dos vecinos honrados. Estas Juntas y

el Ministerio fiscal vigilarán por el exacto cumplimiento de esta ley y tendrán, además de las atribuciones que la misma determina, las que el reglamento les confiera.

Art. 16. Los patrocinados estarán sometidos a los Tribunales ordinarios por los delitos y faltas de que fueren responsables con arreglo al Código Penal, exceptuándose de esta regla los de rebelión, sedición, atentado y desórdenes públicos, respecto de los cuales serán juzgados por la jurisdicción militar.

Esto no obstante, los patronos tendrán derecho a que la autoridad gubernativa les preste su auxilio contra los patrocinados que perturben el régimen del trabajo, cuando su acción no fuere suficiente para impedirlo, pudiendo aquélla a la tercera reclamación justificada obligar al patrocinado a trabajar en las obras públicas por el periodo que fije el reglamento, según los casos, dentro del tiempo que reste para la extinción del patronato. Si el patrocinado reincidiere, después de haber sido destinado una vez al servicio expresado, lo abandonase o perturbase gravemente el orden del mismo, podrá el Gobernador General, dando cuenta razonada al Gobierno, ordenar que se le traslade a las islas españolas de la costa de Africa, donde permanecerá sujeto al régimen de vigilancia que fijare el reglamento.

Art. 17. El reglamento a que se refiere esta ley se formará por el Gobernador General de la Isla, oyendo al Arzobispo de Santiago de Cuba y al Obispo de La Habana, a la Audiencia de esta última y al Consejo de Administración, dentro de los sesenta días de recibida aquélla, y al cumplirse este plazo improrrogable publicará y planteará simultáneamente dicha autoridad la ley y el reglamento sin perjuicio de remitirlo por el primer correo a la

aprobación del Gobierno, que resolverá definitivamente lo que corresponda en el plazo de un mes, previa audiencia del Consejo de Estado.

Art. 18. Quedan derogadas todas las leyes, reglamentos y dos posiciones que se opongan a la presente ley, sin perjuicio de los derechos ya adquiridos por los esclavos y libertos conforme a la de 4 de Julio de 1870 en todo lo que no esté expresamente modificado por los artículos anteriores.

Y el Congreso de los Diputados lo presenta a la sanción de V.M.

Palacio del Congreso, 31 de Enero de 1880.-Señor - Conde de Toreno, Presidente.-Eduardo Garrido Estrada, Diputado Secretario.-Ezequiel Ordóñez, Diputado Secretario.-El Conde de la Encina, Diputado Secretario.-Cándido Martínez, Diputado Secretario.

Publíquese como ley.-Alfonso.-Palacio, 2 de Febrero de 1880.-El Ministro de Gracia y Justicia, Saturnino Alvarez Bugallal.

(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 5 de Febrero de 1880. Apéndice 8º al número 96).

APENDICE NUMERO 5.

PROYECTO DE BASES PARA LA REFORMA POLITICA Y ECONOMICA (1869).
(PROYECTO BECERRA).

Considerando, que el régimen político y administrativo de la Isla de Puerto Rico está en pugna con las exigencias de los tiempos, obsta al progreso de aquella sociedad, implica una irritante injusticia y daña el buen nombre de nuestra Patria, un día la primera Nación colonizadora del Mundo.

Considerado, que si bien la Junta Informativa de Reformas para Puerto Rico en su primera sesión resolvió que todos sus acuerdos debían inspirarse en el principio de la asimilación, también terminantemente declaró que este principio no era ni podía ser el de la identidad.

Considerando, que en virtud de este acuerdo y a la par atendiendo al art. 108 de la Constitución de la Monarquía -cuando no a otras superiores razones de justicia y de conveniencia- se debe proponer al Gobierno la promulgación en Ultramar de aquel Código político, con las modificaciones que hicieren necesarias el estado, distancia y demás condiciones particulares de nuestras Colonias.

Considerando, que estas modificaciones no pueden referirse al Título I de la Constitución, porque los derechos allí consignados, los unos no se refieren a condición alguna pasajera, sino que descansan inmediatamente en la naturaleza humana y se reconocen al individuo sólo por ser hombre, y los otros emanan del carácter de español, que a nadie puede negarse por razón de raza, color, origen, posición o cultura intelectual.

Considerando, que es de todo punto inconveniente y a más casi imposible referir la política ultramarina, de un modo absoluto, a la política peninsular, pues que las condiciones en que viven nuestras Antillas, los recursos que aquellas Colonias pueden utilizar y el género de influencias que están en aptitud de hacer valer, sobre la marcha general de las cosas públicas y principalmente sobre el buen orden y excelente gestión de sus intereses particulares, son completamente semejantes a los de la Metrópoli.

Considerando, que en este supuesto es necesario dotar a Puerto Rico de una autonomía superior a la de las demás provincias españolas, sin que por esto se rompa la unidad nacional.

Considerando, que reconocida cierta superioridad de facultades a las corporaciones coloniales y sustraídas al dominio general ciertas fases de la vida de la Isla de Puerto Rico, es lógico disminuir la intervención e influencia de ésta en las cosas de la Península.

Y considerando, que a estos puntos es a los que deben contraerse las modificaciones de que habla el art. 108 de la Constitución vigente, dado que no se declare esta obra contradictoria en sus términos e inesplicable en su interior desarrollo, y supuesto que no se prescinda de los discursos pronunciados en la Asamblea Constituyente, con ocasión del artículo citado, y que vienen a ser como su interpelación auténtica.

Los firmantes tienen el honor de proponer a la Junta Informativa las siguientes bases:

- 1a. Declaración explícita de que la Isla de Puerto Rico forma parte integrante de la Nación española.
- 2a. Promulgación de la Constitución de 1869 en aquella Isla, salvo el art. 3º que se modificará con arreglo a las bases siguientes.
- 3a. La Isla de Puerto Rico enviará sólo al Senado seis Senadores.

Para ser Senador por Puerto Rico se necesitará sólo ser español, mayor de edad y gozar de los derechos civiles.

El cargo de Senador será retribuido por las cajas de aquella Isla.

Sólo el Senado entenderá en las leyes y gobernación de Puerto Rico.

Para los asuntos de la Península los Senadores por Puerto Rico tendrán las mismas facultades que los de la Metrópoli.

- 4a. En Puerto Rico se constituirá una Asamblea Insular, compuesta de dos cuerpos: un Consejo y una Diputación.

El primero lo formarán los comisionados de los Ayuntamientos de la Isla -un comisionado por cada Ayuntamiento-.

La segunda la constituirán los elegidos por sufragio universal directo en la proporción de un Diputado por cada veinticinco mil almas.

- 5a. Los acuerdos de la Asamblea Insular requieren o no para ser eficaces la aprobación del Gobernador Superior de la Isla, según los casos.

A- No requiere la Asamblea el concurso del Gobernador:

- 1º. Para proponer al Gobierno Superior metropolitico lo que estimare oportuno y hacer ante el Senado la acusación ministerial, cuando hubiere lugar a ella.
- 2º. Para discutir o votar el presupuesto de ingresos de la Isla.
- 3º. Para establecer presidios, organizar el servicio de correos y los demás ramos de Fomento.
- 4º. En todos los casos marcados en el art. 14 de la Ley Orgánica Provincial vigente en la Península como inmediatamente ejecutivos sin ulterior recurso.
- 5º. En todos los casos marcados en el art. 16 de la citada Ley como no ejecutivos hasta la aprobación del Gobernador Civil.
- 6º. En los casos marcados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del art. 17 de la Ley citada como no ejecutivos hasta obtener la aprobación superior.

B- La Asamblea necesita del concurso del Gobernador:

- 1º. Para modificaciones que intentare hacer en los Códigos y en las Leyes generales de la Metrópoli, que por su iniciativa o la del Senado se lleven a aquella Isla.
- 2º. Para el presupuesto de gastos.
- 3º. Para contratar empréstitos.
- 4º. Para toda ley que intente sobre puntos no comprendidos en el párrafo A de esta base.
- 6a. Caso de oposición entre la Asamblea y el Gobernador decidirá el Senado en el preciso término de cuatro meses.
Transcurrido éste, sin que el Senado haya resuelto, se entenderá, que es aprobada la decisión de la Asamblea.

- 7a. El Gobernador puede interponer su veto dentro de los quince días siguientes a la adopción de cualquier acuerdo de la Asamblea, siempre que éste contradiga claramente los artículos de la Constitución española o una ley del Senado.
El conflicto lo resolverá el Senado conforme a la base 6a.
- 8a. La Asamblea puede ser disuelta por una ley del Senado y en circunstancias críticas por el Gobernador de la Isla.
En cualquier caso debe procederse a nuevas elecciones dentro del término de dos meses.
- 9a. En los casos en que conforme a la Ley de responsabilidad ministerial haya lugar a esta por abusos cometidos en la gestión de las cosas ultramarinas, la Asamblea de Puerto Rico podrá diputar una comisión de su seno que lleve la acusación al Senado.
Esta comisión será retribuida por la caja general de la Isla.
- 10a. Todos los acuerdos coloniales serán discutidos y votados lo mismo en el Consejo que en la Diputación de Puerto Rico.
El derecho de iniciativa es igual para los dos cuerpos.
También lo tendrá el Gobernador Superior de la Isla para llevar sus proyectos a la Asamblea.
Caso de conflicto entre el Consejo y la Diputación resolverá una comisión mixta.
- 11a. Al Consejo corresponde privativamente:
- 1º. Aconsejar al Gobernador en los casos graves, como conflictos internacionales y otros análogos, cuya urgencia no deje a aquél hacer la consulta a la Metrópoli, conforme determinen las leyes.

- 2º. Presentar las ternas, para que el Gobernador de la Isla elija las personas que han de desempeñar los cargos dotados con menos de dos mil pesos anuales y que han de ser retribuidos por la caja general de la Isla.

Se exceptúan de lo ultimamente preceptuado los cargos de Secretarios del Gobernador.

Esta disposición regirá en tanto no se publique una ley, en que esté consignada la oposición para el ingreso en la carrera de funcionario público, declarándose la inamovilidad de los empleados.

- 12a. El Senado no podrá legislar sobre los puntos a que se refiere el párrafo B de la base 5a.

Al votarse todos los años los presupuestos de la Nación, el Senado cuidará de incluir la parte que en el de gastos corresponda a la Isla de Puerto Rico.

Se entenderá gastos generales para este efecto todos los que no se refieran

A la Administración Civil.

A la Administración Económica.

Al ramo de Fomento.

13a. Ni el Senado, ni la Asamblea Insular podrán tomar disposición alguna que impida la entrada, circulación y establecimiento en la Isla de Puerto Rico de las personas y las cosas procedentes de la Metrópoli o de las demás Colonias españolas.

- 14a. En la Isla de Puerto Rico habrá un Gobernador Superior, para cuyo cargo no se necesitará el carácter militar.

El Gobernador Superior de Puerto Rico tendrá a sus órdenes la fuerza armada.

Sus atribuciones serán:

- 1º. Las consignadas en el cap. II del Título V de la Ley Orgánica Provincial.
- 2º. Las que las leyes especiales le atribuyan.
- 3º. Las que se derivan de las bases arriba escritas.
- 4º. La de suspender cualquier ley del Senado que pudiera producir mal efecto, consultando previamente al Consejo de la Isla y dando inmediatamente cuenta al Gobierno metropolitano.
- y 5º. La de suspender en casos críticos, y previa consulta a la Asamblea Insular, las garantías de que habla el art. 31 de la Constitución y la de declarar la Isla en estado de guerra, comunicando en seguida estos acuerdos al Gobierno de la Metrópoli, para que éste obtenga la aprobación del Senado.
- 15a. Para modificar estas bases, lo mismo que para reformar la Constitución, serán convocados expresamente, y bajo un pie de estricta igualdad respecto de la Península, los Diputados de Puerto Rico a las Cortes Constituyentes de la Nación española.

Madrid, 25 de Octubre de 1869.

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Cuestión de Puerto Rico. (Cuestiones de Ultramar) (Madrid 1870), págs. 117-119).

APENDICE NUMERO 6.

PACTO DEL ZANJON (1878).

Constituidos en Junta el pueblo y fuerza armada del Departamento del Centro y agrupaciones parciales de otros Departamentos, como único medio hábil de poner término a las negociaciones pendientes en uno o en otro sentido y teniendo en cuenta el pliego de proposiciones autorizadas por el General en Jefe del Ejército español, resolvieron, por su parte, modificar aquéllas, presentando los siguientes artículos de capitulación:

Art. 1º. Concesión a la Isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfrutaba la Isla de Puerto Rico.

Art. 2º. Olvido de lo pasado respecto de los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta el presente y libertad de los encausados o que se hallen cumpliendo condena dentro o fuera de la Isla. Indulto general a los desertores del Ejército español, sin distinción de nacionalidad, haciendo extensiva esta cláusula a cuantos hubiesen tomado parte directa o indirectamente en el movimiento revolucionario.

Art. 3º. Libertad a los colonos asiáticos y esclavos que se hallen hoy en las filas insurrectas.

Art. 4º. Ningún individuo que en virtud de esta capitulación reconozca y quede bajo la acción del Gobierno español podrá ser compelido a prestar ningún servicio de guerra, mientras no se establezca la paz en todo el territorio.

Art. 5º. Todo individuo que en virtud de esta capitulación desee marchar fuera de la Isla queda facultado y le proporcionará el Gobierno español los medios de hacerlo sin tocar en poblaciones, si así lo deseara.

Art. 6º. La capitulación de cada fuerza se hará en despoblado, donde con atelación se depositarán las armas y demás depósitos de guerra.

Art. 7º. El General en Jefe del Ejército español, a fin de facilitar los medios de que puedan avenirse los demás Departamentos, franqueará todas las vías de mar y tierra de que pueda disponer.

Art. 8º. Considerar lo pactado con el Comité del Centro como general y sin restricciones particulares para todos los Departamentos de la Isla que acepten estas condiciones.

Campamento de San Agustín, 10 de Febrero de 1878.- E. L. Luaces.-Rafael Rodríguez, Secretario.

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Crisis Colonial de España (1868-1898). (Estudios de Política Palpitante y Discursos Parlamentarios) (Madrid 1901), págs. 89-90).

APENDICE NUMERO 7.

COMUNICACION OFICIAL DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS AL
MINISTRO DE LA GUERRA SEÑOR CEBALLOS (1878).

"Por fin, creo que tenemos la ansiada paz... Desde el año 69, que desembarqué en esta Isla, me preocupó la idea de que la insurrección, si bien reconocía como causa el odio a España, éste no era producido, sino por las causas que han separado nuestras Colonias de la Madre Patria, aumentadas en el caso actual por las promesas que en diversas épocas se habían hecho a las Antillas... Cuando pasó un día y otro, sin que las esperanzas se satisficieran, sino que, por el contrario, la mayor o menor expansión que concedió alguna que otra Autoridad era recogida con exceso por la que le sucedía; cuando se convencieron de que la Colonia seguiría así siempre; cuando los malos empleados de la peor Administración de Justicia agravaban más y más las dificultades; cuando las Capitanías de partido, rebajándose, cada vez más vinieron a parar a gente sin instrucción ni educación que eran unos reyezuelos tiránicos, que podían ejercer sus dilapidaciones y tal vez sus vejaciones por la distancia a que residía la autoridad superior, el espíritu público, hasta entonces contenido, hizo desear con vehemencia esas libertades...

...Hay que resolver la cuestión de brazos; hay que estudiar el pavoroso, pero insostenible problema de la esclavitud, antes de que el extranjero nos imponga una resolución; hay que estudiar el Código Penal; señalar el enjuiciamiento; resolver la forma de las contribuciones; formar el catastro; ocuparse algo de las Obras e Instrucción públicas. Pues bien, todos estos problemas, cuya solución afecta al pueblo, deben ser resueltos con audiencia de sus representantes no por

los informes de Juntas, para cuyo nombramiento es el favoritismo o la política la base. La solución no se puede dejar al arbitrio del Capitán General, del Director del ramo o del Ministro de Ultramar que en general, por muy competentes que sean, no conocen el país".

(Citado por RODRIGUEZ SAMPEDRO, CARLOS: Reflexiones sobre Varios Episodios Históricos Españoles ante el Actual Conflicto (Madrid 1915), págs. 74-76).

APENDICE NUMERO 8.

PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL DE CUBA.

Cuestión Social.

Exacto cumplimiento del art. 21 de la Ley Moret en su primer inciso que dice así: "El Gobierno presentará a las Cortes, cuando en ellas hayan sido admitidos los Diputados de Cuba, el proyecto de ley de emancipación indemnizada de los que queden en servidumbre después del planteamiento de esta ley". Reglamentación simultánea del trabajo de color libre y educación moral e intelectual del liberto.

Inmigración blanca exclusivamente, dando la preferencia a la que se haga por familias y removiendo todas las trabas que se oponen a la inmigración peninsular y extranjera, ambas por iniciativa particular.

Cuestión Política.

Las libertades necesarias. Extensión de los derechos individuales que garantiza el Título I de la Constitución a todos los españoles, a saber: Libertad de imprenta, reunión y asociación. Inmunidad del domicilio, del individuo, de la correspondencia y de la propiedad. Derecho de petición. Además, la libertad religiosa y la de la ciencia en la enseñanza y en el libro.

Admisión de los cubanos, al par que los demás

españoles, a todos los cargos y destinos públicos, con arreglo al art. 15 de la Constitución. Inmediata entrada en el escalafón general de los funcionarios de Justicia, del ramo de Instrucción Pública y de las demás carreras administrativas.

Aplicación íntegra de las Leyes Municipales, Provincial, Electoral y demás orgánicas de la Península a las Islas de Cuba y Puerto Rico, sin otras modificaciones que las que exijan las necesidades e intereses locales, con arreglo al espíritu de lo convenido en el Zanjón.

Cumplimiento del art. 89 de la Constitución, entendiéndose el sistema de "Leyes Especiales" que determina, en el sentido de la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional.

Separación e independencia de los poderes civil y militar.

Aplicación a la Isla de Cuba del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley Hipotecaria, de la del Poder Judicial, del Código de Comercio novísimo y demás reformas legislativas con las modificaciones que exijan los intereses locales. Formación de un Código Penal.

Cuestión Económica.

Supresión del derecho de exportación sobre todos los productos de la Isla.

Reforma de los aranceles de Cuba en el sentido de que los derechos de importación sean puramente fiscales, desapareciendo los que existan con el carácter de derechos diferenciales, sean específicos o de bandera.

Rebaja de los derechos que pagan en las aduanas de la Península los azúcares y las mieles de Cuba hasta reducirlos a derechos fiscales.

Tratado de Comercio entre España y las Naciones extranjeras, particularmente con los Estados Unidos, y sobre la base de la más completa reciprocidad arancelaria entre aquélla y Cuba y otorgando a todos los productos extranjeros en las aduanas y puertos de la Isla las mismas franquicias y privilegios que aquéllos conceden a nuestras producciones en los suyos.

Conversión de la Deuda. Reparación del crédito público. Liquidación de la cuenta con el Banco Español de La Habana.
(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Política de Ultramar (1868-1900) (Madrid 1902), págs. 183-185).

APENDICE NUMERO 9.

PROGRAMA Y DECLARACIONES DEL PARTIDO LIBERAL
O AUTONOMISTA DE CUBA.

Manifiesto al País de 1º de Agosto de 1878.

Después de más de cuarenta años de espera, Cuba vuelve al fin al ejercicio de un derecho imprescindible, cuyo olvido durante tan dilatado periodo ha sido causa de sacrificios sangrientos y de lamentables perturbaciones.

Ese supremo derecho es la facultad de los ciudadanos de concurrir por delegación o directamente a la formación de las leyes que han de regirlos; la facultad de elegir o de ser elegidos, sin la cual no hay fuerza de legitimidad en el que manda, ni dignidad en el que obedece.

Pero esa valiosa prerrogativa no se ejerce provechosamente sin trabajo y disciplina. Abandonada al azar o al capricho es siempre vencida ante la astucia o la habilidad, mientras, al contrario, apoyada en la asociación que reconcentra las fuerzas y encamina las voluntades o es seguro su triunfo, o lo pierde, porque no lo había merecido.

Y esa victoria de la asociación y de la disciplina sólo puede convertirse por medio de la organización de los partidos, agrupaciones de individuos, que identificándose en ideas, intereses o aspiraciones se congregan para un fin social, formulan un credo y escriben un programa, obedientes a una necesidad tan natural, que vemos el hecho producirse en todas las

sociedades, tan pronto como sus miembros consagran el derecho de opinar sobre la cosa pública o de juntarse para la vida en común.

La Isla de Cuba, con una población activa, inteligente y trabajadora, con grandes elementos de civilización y de cultura, con riquezas materiales que pedían franco movimiento y con fuerzas intelectuales ávidas de espacio y libertad, no podía menos que obedecer a esa ley social y que agrupase también dividida en partidos que representasen sus intereses diversos. A pesar de la interdicción de sus derechos políticos, la tutela colonial y las restricciones no lograron abatir su espíritu joven y ardiente, estimulado a la acción y a la actividad por su opulencia sin igual, por sus relaciones mercantiles con todo el Mundo y por su vecindad con la gran República, escuela fecunda de las libertades modernas. Esas impacientes aspiraciones se veían contrastadas por intereses no menos fuertes: la conservación de grandes riquezas fundadas en un orden social que no consentía cambio ni censura, las tradiciones de tres siglos de dominación sin trabas y un noble sentimiento de nacionalidad, exaltado por la ausencia y que en su extravío juzgaba que entre regiones separadas por el Océano la unión no podía asegurarse, sino con vínculos de hierro.

He aquí, de qué manera sin formulario de doctrina, sin credo escrito, sin consagración legal, sin organización sistemática nacieron en Cuba dos partidos como en todas partes, representando las dos fuerzas que se contraponen en todas las sociedades: lo viejo y lo nuevo, la inmovilidad y el retroceso por un lado, el progreso y el movimiento por otro. ¿Cómo negar que han existido antes de ahora esos dos partidos? Los mismos que han pregonado, que no había, que no debía haber partidos en Cuba, esos mismos eran órganos inconscientes de un partido que, acaso sin saberlo, defendían sus intereses y tendencias, puesto que sostenían la inmovilidad, enemiga de sectas y controversias, con

tal que la riqueza pueda florecer asentada sobre un orden indiscutible y en silencio disciplinado.

Existían, pues, dos partidos, pero no en filas y frente a frente con sus banderas desplegadas, sino en disorde confusión, disimulando sus iras y fomentando odiosas rivalidades. ¡Ojalá hubieran ellos tenido entonces campo abierto, campo legal en los comicios, en la tribuna, en la prensa para conciliar sus antagonismos, moderar sus aspiraciones y enmendarse mutuamente, turnando en el mando y haciéndose concesiones recíprocas!. ¡Cuánto no habríamos todos ganado en cultura, bienestar y riqueza!. Pero triunfó el sistema de la inmovilidad y el silencio y las iras reconcentradas se abrieron paso como torrentes que se desbordan, sembrando el suelo de ruinas y hundiendo bajo los escombros los más vitales intereses de unos y otros.

Cruel ha sido el escarmiento, pero comprado a costa de una útil enseñanza: la necesidad de dejar en adelante libre y pacífico el campo a las aspiraciones legítimas y al ejercicio de los derechos políticos; que a la contienda de las pasiones y al antagonismo de la fuerza bruta sustituya al arbitramento del sufragio, el desahogo de la imprenta libre, la persecución y la fuerza de las razones.

Por fortuna, hemos llegado al fin a este punto. Recogido hemos ya la sangrienta cosecha que sembraron las pasiones exacerbadas. Pasó aquella horrenda lucha entre hermanos y amigos en que las derrotas cubrían de luto a los vencedores y las victorias se regaban con lágrimas para los vencidos.

Otra lucha nos llama ahora, que tendrá también sus triunfos y sus derrotas, pero los combatientes después de la lid se darán las manos, satisfechos de haber peleado por el bien sin destruirse entre sí, porque la unión podrá más que el número, la

disciplina más que la fuerza, la perseverancia más que la ira.

Pronto acudirán a las urnas los electores de toda la Isla y urge ya que empiecen a organizarse los partidos, para que el sufragio pueda ejercerse sin desconcierto, dirigido por la voluntad inteligente y bajo la inspiración de principios fijos y de fines bien señalados.

Varios miembros del Partido Liberal de la Habana, ciudad, que tanto por su preponderancia numérica con relación a las provincias, como por la magnitud de los intereses concentrados en la capital de la Isla se considera con algún título para tomar la iniciativa, se han reunido en diversas ocasiones y, apenas constituidos, se han apresurado a dirigir su voz amiga al país por medio de este Manifiesto, esperando su leal concurso en la campaña que se va a abrir.

Críticos son los momentos y grandes para el porvenir de Cuba los resultados que penden del sufragio. Todos tenemos, pues, el deber de hacer uso de nuestros derechos legales. El retraimiento sería la derrota y ésta traería consigo una reacción, tanto más temible cuanto que vendría legitimada bajo el manto de la legalidad. No hay que dar oído a la desconfianza, dudando de la eficacia de nuestro esfuerzo, ni hacer caso de los irascibles que gritan: O todo, o nada. Funesta fórmula del despecho, que hoy sólo serviría para sembrar recelos o para disfrazar la indolencia.

Al organizar nuestro partido debe ser nuestro primer cuidado recomendar que no tenga cabida el exclusivismo, que se rechace todo espíritu de intolerancia, que no se pregunte a nadie su origen y procedencia, con tal que sea conocida su actitud y la sinceridad de su consagración a las aspiraciones de Cuba.

Cuáles sean éstas, nadie lo ignora: son las de la mayor parte de sus habitantes, nativos o peninsulares; son los principios de la escuela liberal en todos los países, escritos en todas las Constituciones modernas y que, fundados en la naturaleza y en los derechos del hombre, no están sujetos a los grados del termómetro, ni a las paralelas de latitud, siendo por eso tan necesarios en América como en Europa. No necesitan verlos explicados, ni definidos nuestros amigos, que forman la mayoría del país. Sus intereses sin representación legal; su trabajo sin garantías; su pensamiento sin libertad; su industria sin mercados; su riqueza sin arraigo; su sed, su antiquísima sed de igualdad y de justicia, todo eso clama en sus oídos a todas horas y sin acudir al texto de las cartillas democráticas, ni a los tratados de Política. La voz de su conciencia les grita que la racional y ordenada satisfacción de todas esas necesidades no podrán hallarla, sino en la práctica de los principios liberales y de los dogmas de nuestra escuela.

Pero muchos hombres de buena fe y que conocen sus intereses y deseos, pero sin haberlos formulado con toda la exactitud y precisión necesarias, suelen dejarse seducir a veces por los amañes de la astucia, pródiga de vagas promesas o elásticas declaraciones. Para evitar ese peligro y ofrecer un criterio seguro lo primero que hacen los partidos al constituirse es acordar un programa, que resuma clara y brevemente sus principios y propósitos.

La Junta Provisional presenta el siguiente proyecto, dividido en tres secciones, a saber: Cuestión Social, Cuestión Política, Cuestión Económica. Pocas palabras nos bastarán para esclarecer el espíritu de los artículos que contienen.

Cuestión Social.- Los grandes intereses del orden

social y del económico, que en ésta se entrañan, no pueden someterse a otra decisión que la soberana de las Cortes. No es tampoco posible su aplazamiento. La más pronta ejecución de lo que ha prescrito el art. 21 de la Ley Moret dará base estable a nuestra riqueza y satisfacción a los fueros de la justicia y de la humanidad.

Cuestión Política.- Los seis artículos de esta sección se encaminan a satisfacer la primera necesidad del país, la más ardiente, antigua, nunca saciada y cada día más imperiosa necesidad: un régimen estable sobre estas dos seguras bases: justicia y libertad.

Según las leyes orgánicas, promulgadas de conformidad con las capitulaciones de la paz, todo nuestro régimen político puede resumirse en breves frases: identidad del gobierno político y administrativo de Cuba con el de Puerto Rico. Y este último, ¿en qué consiste? En la aplicación de algunas Leyes Orgánicas de la Península. La única garantía constitucional de esa aplicación se encuentra en el art. 89 de la Constitución, que dice: "El Gobierno queda autorizado para aplicar a las provincias de Ultramar, con las modificaciones que juzgue convenientes, y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen en la Península".

Ese sistema de "Leyes Especiales", modificables al arbitrio del Gobierno y de las Cortes, pudiera bien llamarse régimen de "Leyes Especiales" sin verdadera asimilación, puesto que la última condición es puramente facultativa, no obligatoria.

Algo más necesita el país, el goce de los derechos naturales del individuo, el escudo de las garantías constitucionales, no sujetas a variación, según el capricho

arbitrario del gobernante o la condescendencia de una sumisa mayoría. De esa manera, se establece otro sistema, que es el llamado de asimilación con "Leyes Especiales". Nuestro programa considera, pues, como fundamental y permanente y no simplemente potestativa la asimilación de derechos políticos y por lo tanto reclama la aplicación a las Antillas de todos los derechos consignados para todos los españoles en el Título 1º de la Constitución.

Respecto de las llamadas "Leyes Especiales" hemos creído, que debíamos dar a esa expresión el sentido que tuvo en la mente de los legisladores, tanto en las Cortes Constituyentes de 1837 y 1845 como en todas las posteriores, que no fue nunca el de restricción ni privación de derechos, sino simplemente el de adaptación de las leyes de la Península a las condiciones locales de las Antillas. Interpretadas de esta manera, podemos esperar que, procurándose la mayor posible descentralización económica y administrativa, las Cortes estudien oportunamente la creación de un Consejo que tenga a su cargo todas las cuestiones de interés general de la Isla y peculiar suyo, conforme al plan que el ilustre General Serrano, práctico conocedor de nuestras necesidades, propuso al Gobierno de la Nación en su notable informe de 10 de Mayo de 1867.

Cuestión Económica.- Los artículos de esta sección responden a exigencias tan palmarias, que no pueden hallar resistencia o contradicción, si no es en los intereses personales, fundados en privilegios que la ciencia reprueba y condena la justicia. Ellos se resumen en estas frases: suspensión en nuestros aranceles de los derechos de exportación sobre los azúcares, como igualmente de todos los de importación que puedan considerarse como diferenciales o protectores, conservando sólo los fiscales, requisito necesario para celebrar Tratados de

Comercio que nos proporcionen mercados ventajosos para nuestras producciones, baratura en los artículos que dan alimento a la población o instrumentos a la industria, y precios tan remuneradores para nuestros frutos principales que puedan sobreponerse a la carestía de brazos.

No hay en Cuba intereses tradicionales y dignos de respeto, que puedan rechazar la firme y resuelta aplicación de las doctrinas del libre cambio, mientras que, al contrario, su situación geográfica, la especialidad de sus productos, la pobreza de su industria, obligada a proveerse de todo en el extranjero, y finalmente su posición tan favorable, para que sus puertos lleguen a ser escalas y depósitos del comercio entre las dos Américas y entre el Nuevo y el Viejo Mundo, todo está clamando por el ensanche de las franquicias mercantiles, cuyo feliz ensayo a principios de siglo fue el primer impulso en el prodigioso vuelo que alcanzó después su riqueza y cuya virtud y eficacia sería hoy poderosa para salvarla en muy poco tiempo de la indigencia y la postración en que está sumida con la seguridad de que el leve daño, que causaren momentáneamente a los monopolios ya establecidos, sería grandemente resarcido por estas dos compensaciones espléndidas: un extraordinario aumento de ingresos fiscales que aliviarían muchas cargas en los presupuestos de la Península y una gran fuerza moral en los nuevos vínculos afianzados entre España y Cuba por la justicia y la gratitud.

La Junta Provisional cree que las consideraciones expuestas y los principios que han de dar norma y guía al gran Partido Liberal quedan exactamente formulados en el siguiente Programa que somete a la aprobación del país.

Habana, 1º de Agosto de 1878.- José María Gálvez.- Juan

Spotorno.- Carlos Saladrigas.- Francisco de P. Gay.- Miguel Bravo y Sentíes.- Ricardo Delmonte.- Juan Bruno Zayas.- José Eugenio Bernal.- Joaquín G. Lebrede.- Pedro Armenteros y del Castillo.- Emilio L. Luaces.- Antonio Govín.- Manuel Pérez de Molina, Director de "El Triunfo".

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 180-189).

APENDICE NUMERO 10.

PROGRAMA DEL PARTIDO DE UNION CONSTITUCIONAL.

Cuestión Política.

Aplicación íntegra a las provincias de Cuba de la Constitución de la Monarquía, la cual distribuye y ordena las funciones de los Poderes públicos y garantiza la libertad de imprenta, la de reunión pacífica, la de asociación para los fines de la vida humana, la de petición y los demás derechos que reconoce a los españoles.

Aplicación a Cuba, en el sentido de la posible y racional asimilación a las demás provincias españolas, de las leyes que se hayan dictado o se dicten para asegurar el respeto recíproco de los derechos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a la propia Constitución, y de las orgánicas vigentes en la Península, así como de cuantas otras en ella se promulguen.

Leyes especiales dentro del mismo criterio de asimilación, con relación a los intereses particulares de Cuba.

Remoción de todo obstáculo que impida el libre ingreso en los destinos públicos a cuantos españoles tengan aptitud para ellos, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento.

Nueva ley, eficaz, de responsabilidad judicial y

medidas que aseguren la moralidad en todos los ramos y servicios de la Administración.

Cuestión Económica.

Supresión del derecho de exportación.

Reforma arancelaria en el sentido de la posible rebaja de derechos, especialmente en los artículos de primera necesidad.

Celebración de tratados entre España y las potencias extranjeras, en particular con los Estados Unidos, mercado principal de nuestros frutos, sobre bases de amplia reciprocidad que favorezcan los intereses agrícolas, mercantiles y fabriles de Cuba.

Aplicación de medidas que faciliten nuestro comercio con los puertos nacionales hasta llegar a la declaración de cabotaje.

Especial defensa de la producción agrícola y de la industria manufacturera de nuestro tabaco.

Arreglo definitivo de la Deuda Pública.

Rebaja racional en los impuestos y reparto equitativo de los que deban subsistir.

Economías en los gastos públicos.

Atención preferente a la reconstrucción de las comarcas
asoladas por la guerra.

Cuestión Social.

Abolición de la esclavitud, con arreglo a las bases
esenciales de la Ley Moret, modificada en su plazo en el límite
que permitan las necesidades morales y materiales del país y
convenientemente adicionada en todo lo que tienda a favorecer la
condición de los siervos que aun queden en ese estado después de
la promulgación de aquella ley, sin indemnización pecuniaria a
los propietarios.

Inmigración encomendada a la iniciativa particular y
eficazmente protegida por el Estado en condiciones de libertad de
contratación, atendiéndose así a la necesidad de braceros que
experimenta el país y facilitándose la resolución del problema
social.

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Reforma Política de Ultramar (1868-
1900) (Madrid 1902), págs. 182-183).

APENDICE NUMERO 11.

PROGRAMA Y DECLARACIONES DEL PARTIDO
AUTONOMISTA DE PUERTO RICO.

Constitución Orgánica Proclamada en la Asamblea
de Ponce el 10 de Marzo de 1887.

TITULO I.

PRINCIPIOS DEL PARTIDO.

Capítulo Unico.

Artículo 1º. El Partido cuya constitución emana de la Asamblea reunida en Ponce los días 7, 8 y 9 de Marzo de 1887 se denominará: Partido Autonomista Portorriqueño.

Art. 2º. Dicho Partido tratará de obtener la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares y el principio fundamental de su política será alcanzar la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional.

Art. 3º. La fórmula clara y concreta de este principio es el régimen autonómico, que tiene por bases la representación directa de los intereses locales a cargo de la Diputación Provincial y la responsabilidad, también directa, de los que tengan a su cargo el ejercicio de las funciones públicas en lo que toca a la administración puramente interior o local.

Art. 4º. Como consecuencia de esta doctrina, el Partido pedirá que en esta Antilla queden resueltas definitivamente por

la Autoridad competente los asuntos administrativos locales y que se administre el país con el consurso legal de sus habitantes, concediendo a la Diputación la facultad de acordar en todo lo que toque y se relacione con los asuntos puramente locales y sin intervención alguna en lo que tenga carácter nacional, así como la de votar y formar los presupuestos de ingresos y gastos locales por su naturaleza, objeto y fin, y sin perjuicio de las atribuciones de las Cortes en materia de presupuesto nacional.

Art. 5º. El Partido no rechaza la unidad política, antes bien proclama la identidad política y jurídica, según la cual en Puerto Rico, lo mismo que en la Península, regirán la propia Constitución, la Ley Electoral, la de Reunión, la propia representación en Cortes, la propia Ley de Asociación, la de Imprenta, la de Procedimientos Civiles y Criminales, la Orgánica de Tribunales, la del Matrimonio Civil, la de Orden Público y la misma Ley Provincial y Municipal, es decir, que en punto a derechos civiles y políticos el Partido pide que se iguale a las Antillas con la Península.

Art. 6º. Y en virtud de la descentralización administrativa que el Partido pide las cuestiones locales que por regla general deben reservarse a las Antillas son las siguientes: Instrucción Pública, Obras Públicas, Sanidad, Beneficencia, Agricultura, Bancos, Formación y Política de las poblaciones, Inmigración, Puertos, Aguas, Correos, Presupuesto local, Impuestos y Aranceles y Tratados de Comercio, éstos subordinados siempre a la aprobación del Gobierno Supremo, de manera que al hacer esa reserva la Metrópoli continúe en el goce supremo de la soberanía y en la práctica del imperio, entendiéndolo exclusivamente en todo lo relativo al Ejército, Marina y Tribunales de Justicia, Representación Diplomática y Administración general del país; señalando a éste el cupo que le

corresponde en el presupuesto general del Estado; llevando la dirección de la política general; velando por la fiel observancia de las leyes; resolviendo todos los conflictos de Corporaciones y entidades; nombrando y separando, con arreglo a las leyes generales de la Nación, a sus representantes en las diversas esferas de los poderes públicos, y teniendo la facultad de suspender y anular los acuerdos de la Diputación Insular, cuando lleven el vicio de incompetencia o sean contrarios a los intereses nacionales.

Art. 7º. Dado el carácter local de la Unión o Partido Autonomista, se deja a cada uno de sus afiliados completa libertad para ingresar en los partidos políticos de la Metrópoli, que acepten o defiendan la autonomía de las Antillas de sustentar sus ideas particulares respecto de la forma de gobierno.

.....
.....

TITULO II.

RELACIONES CON LOS AUTONOMISTAS CUBANOS.

Artículo Unico. Siendo uno mismo en su esencia o principios fundamentales el Programa del Partido Autonomista Cubano y el que acaba de proclamar el de igual nombre Portorriqueño, se declara conveniente la unión de ambos Partidos para recabar más pronto la realización de sus comunes ideales, dejando a la Delegación o al Directorio el acordar las bases, forma y oportunidad de esa unión.

REGLAS TRANSITORIAS.

Art. 1º. Habiéndose elegido una Delegación provincial, interina o provisional, ejercerá desde luego todas las facultades aprobadas para la definitiva, mientras ésta no se constituya.

Art. 2º. Si algún Distrito dejase de elegir en tiempo el candidato que le corresponde, se entenderá que acepta el designado por la Asamblea, hasta que los autonomistas de la sección respectiva cubran legalmente el cargo, con arreglo a la Constitución orgánica del Partido.

Art. 3º. Cuando se constituya la Delegación provincial definitiva, la interina le entregará todas las actas y documentos, que le correspondan, cesando la última en su cometido.

Art. 4º. El Partido Autonomista, habiendo aceptado unánimemente el programa autonómico del eminente repúblico D. Rafael María de Labra, en prueba de gratitud por sus importantes servicios le proclama "leader", es decir, guía y vocero principal de este Partido en la Metrópoli.

Art. 5º. La próxima e inmediata Asamblea General, que celebre este Partido para tratar de sus asuntos generales, se verificará en la ciudad de Mayagüez, a menos que por circunstancias especiales la Delegación lo estime imposible o inconveniente.

Ponce, Marzo 10 de 1887.- El Presidente, Román

Baldorioty de Castro.- El Vicepresidente, Salvador Carbonell.-
Vocales: Francisco Mejía.- Francisco Cepeda.- Julián E. Blanco.-
Secretarios: José Guzmán Benítez.- Juan Hernández López.- Rosendo
Matienzo Cintrón.- José Gómez Briosó.

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid
1892), págs. 251-255).

APENDICE NUMERO 12.

ENMIENDAS Y REFORMA DE LA CONSTITUCION ORGANICA
DEL PARTIDO AUTONOMISTA PUERTORRIQUEÑO, VOTADAS EN
LA ASAMBLEA DE MAYAGÜEZ DE MAYO DE 1891.

A continuación se inserta el Programa íntegro del Partido Autonomista Portorriqueño, tal y como salió de la Asamblea de Mayagüez de Mayo de 1891 y que es el que actualmente rige.

En el texto que sigue aparecen subrayados aquellos artículos enteramente nuevos introducidos por la Asamblea en el primitivo Programa de Ponce y aquellas modificaciones que se hicieron en la propia Asamblea de otros artículos antiguos, que en su mayor parte se conservan.

En la parte doctrinal la gran novedad consiste en el art. 7º que ha sustituido completamente al del mismo número en el Programa antiguo y que representa un gran sentido de aproximación a la política general de la Metrópoli.

Luego vienen otros cambios importantes en los organismos del Partido y en la fijación de la capitalidad de éste cerca de los de los demás partidos y de los Centros superiores oficiales; he aquí el Programa:

TITULO I.

Principios del Partido.

Capítulo Unico.

Artículo 1º. El Partido, cuya constitución emana de la Asamblea reunida en Ponce los días 7, 8 y 9 de Marzo de 1887, se denominará: Partido Autonomista Portorriqueño.

Art. 2º. Dicho Partido tratará de obtener la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares y el principio fundamental de su política será alcanzar la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional.

Art. 3º. La fórmula clara y concreta de este principio es el régimen autonómico, que tiene por bases la representación directa de los intereses locales a cargo de la Diputación Provincial y la responsabilidad, también directa, de los que tengan a su cargo el ejercicio de las funciones públicas, en lo que toca a la administración puramente interior o local.

Art. 4º. Como consecuencia de esta doctrina, el Partido pedirá que en esta Antilla queden resueltas definitivamente por la Autoridad competente los asuntos administrativos locales y que se administre el país con el concurso legal de sus habitantes, concediendo a la Diputación la facultad de acordar en todo lo que toque y se relacione con los asuntos puramente locales y sin intervención alguna en lo que tenga carácter nacional, así como la de votar y formar los presupuestos de ingresos y gastos locales por su naturaleza, objeto y fin, y sin perjuicio de las atribuciones de las Cortes en materia de presupuesto nacional.

Art. 5º. El Partido no rechaza la unidad política, antes bien, proclama la identidad política y jurídica, según la cual, en Puerto Rico, lo mismo que en la Península, regirán la propia Constitución, la Ley Electoral, la de Reunión, la propia representación en Cortes, la propia Ley de Asociación, la de Imprenta, la de Procedimientos Civiles y Criminales, la Orgánica de Tribunales, la del Matrimonio Civil, la de Orden Público y la misma Ley Provincial y Municipal, es decir, que, en punto a derechos civiles y políticos, el Partido pide que se iguale a las Antillas con la Península.

Art. 6º. Y en virtud de la descentralización administrativa que el Partido pide, las cuestiones locales que, por regla general, deben reservarse a las Antillas son las siguientes: Instrucción Pública; Obras Públicas; Sanidad; Beneficencia; Agricultura; Bancos; Formación y Policía de las poblaciones; Inmigración; Puertos; Aguas; Correos; Presupuesto local; Impuestos y Aranceles, y Tratados de Comercio, éstos subordinados siempre a la aprobación del Gobierno Supremo, de manera que al hacer esa reserva la Metrópoli continúe en el goce supremo de la soberanía y en la práctica del imperio, entendiéndolo exclusivamente en todo lo relativo al Ejército, Marina y Tribunales de Justicia, Representación Diplomática y Administración general del país; señalando a éste el cupo que le corresponde en el presupuesto general del Estado; llevando la dirección de la política general; velando por la fiel observancia de las leyes; resolviendo todos los conflictos de Corporaciones y entidades; nombrando y separando, con arreglo a las leyes generales de la Nación, a sus representantes en las diversas esferas de los poderes públicos, y teniendo la facultad de suspender y anular los acuerdos de la Diputación Insular, cuando lleven el vicio de la incompetencia o sean contrarios a los intereses nacionales.

Art. 7º. La Delegación, de acuerdo con el "leader" del Partido y por medio de los comisionados que ella designe y que éste presidirá, queda facultada para acordar y realizar inteligencias o alianzas del Partido Autonomista Portorriqueño con los demócratas peninsulares que acepten o defiendan el sistema autonómico administrativo de las Antillas.

TITULO II.
ORGANISMOS DEL PARTIDO.
CAPITULO PRIMERO.
La Prensa Liberal.

Artículo 1º. El Partido Autonomista reconoce en toda la prensa política, sea cual fuere la opinión que represente o defienda, el órgano más poderoso de la libertad; sea que la niegue, sea que la afirme, la prensa será siempre la palanca y el trofeo más grande del pensamiento liberal de nuestro tiempo.

Art. 2º. Los periódicos cuyos publicistas profesen nuestros principios, ilustren nuestra conducta y sostengan las decisiones de nuestros Comités son, sin duda alguna, los órganos más importantes del Partido.

Art. 3º. Este debe hacerse, pues, una obligación de sostenerlos, donde existan, o de crearlos, donde no los hubiere y convengan, uniéndose al efecto varios Comités inmediatos.

Art. 4º. Nuestros periódicos deben ser consecuentes con el Partido en todas las cuestiones de principio y particularmente en los periodos electorales una vez acordadas las candidaturas. Procurar desunirnos en tales momentos o mostrarse pasivos durante el combate equivale a abrirles ancha brecha en nuestras filas a

los contrarios, equivale a vender el Partido por pasión, por debilidad o por otras causas igualmente reprobables.

Art. 5º. Fuera de estos casos, nuestros periódicos no deben recibir consigna de nadie, sino es de la conciencia propia de sus redactores. Ellos tienen el derecho de emplear, con entera independencia, la crítica racional, cuando crean que el Partido sufre detrimento por los actos de nuestros Comités o de nuestros hombres.

Art. 6º. La severa censura de los actos de la Administración y de la conducta pública de los empleados en el ejercicio de sus funciones, el maduro exámen y recto análisis de las leyes, ora sean liberales, ora sean reaccionarias, la polémica con los adversarios de nuestro credo político y aun con los propios amigos serán servicios fecundos para el país y para el Partido, siempre que guarde las reglas de una buena educación en las formas, sustente ideas, respete las Instituciones y subordine la pasión política a los fueros de la verdad. Consecuente con los principios, rigurosa en el fondo, ática en la forma, tal debe ser nuestra prensa.

Art. 7º. Dentro de estos límites, la prensa autonomista es la prensa del Partido y tiene derecho a sus simpatías y a su cooperación. Fuera de ellos, el periódico obra por su propia cuenta y responsabilidad. No es órgano del Partido, por más que con él tenga afinidades.

Art. 8º. El Partido procurará sostener en Madrid un periódico dedicado a la defensa de nuestros ideales. Será dirigido, mientras sea posible, por el "leader" del Partido. El Directorio atenderá al sostenimiento de este órgano en la prensa por los medios que creyere más convenientes.

CAPITULO II.
Comités de Sección.

Art. 9º. Los Comités son autónomos para todo lo relativo a la localidad y además representan el poder ejecutivo del Partido en cada Sección de los Distritos electorales.

Art. 10. El número de sus miembros será impar y se compondrá de tantos liberales como se juzgue conveniente en cada Sección.

Art. 11. Se elegirán cada dos años en la primera quincena de Junio y son reelegibles sus miembros. Y si terminado el bienio se citase para nueva elección por dos veces consecutivas y no concurriere a la primera convocatoria la mayoría de electores inscritos, ni a la segunda la cuarta parte de los mismos, se entenderá autorizado el Comité para seguir en el ejercicio de sus funciones por dos años más.

Art. 12. La mayoría de sus miembros tendrá necesariamente derecho electoral reconocido y todos tendrán su residencia en el territorio de la sección. Para elegirlos podrán votar todos los autonomistas inscritos en el Registro de la localidad. Al elegirse los miembros propietarios, se designarán en la misma papeleta otros tantos suplentes, que pasarán a reemplazar a los primeros por el orden del número de votos que hubieren obtenido, en caso de muerte, renuncia o ausencia de más de un mes, cambio de domicilio, falta de asistencia a tres sesiones ordinarias consecutivas o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. El miembro propietario que hubiere obtenido mayor número de votos presidirá la primera sesión, en la cual se elegirá por los demás Vocales propietarios y de su seno al Presidente, Secretario y Tesorero por mayoría de votos presentes.

A falta de Presidente electo, presidirá el Vocal que hubiere obtenido mayor número de votos entre los Vocales propietarios.

Art. 13. Sus Presidentes dirán de oficio al Directorio el número de sus miembros y la época de su fundación, para que se les inscriba en el Registro de los Comités del Partido.

Art. 14 Anotada la lista de suplentes y no estando completo el número de miembros del Comité, éste elegirá libremente, de entre los que hayan ejercido anteriormente el cargo, a los que crea convenientes, de modo que esté siempre completo su número. Si durante el bienio renunciase el Presidente electo, se designará de entre los Vocales al que deba sustituirle.

Art. 15. El Comité nombrará Comisiones auxiliares y Delegados en los barrios, tanto de su seno como de fuera de él, siempre que así lo requiera el cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 16. Cada Comité formará su Reglamento interior.

Art. 17. Cada Comité local tendrá copia exacta del Padrón de contribuyentes (por todos conceptos) de la Sección y llevará nota correcta de las altas y bajas que en el año ocurran y un Registro de los autonomistas que vivan en la localidad, sean o no electores.

Art. 18. También llevará la relación de los electores por contribución y por capacidad, inscribiendo en listas distintas el Censo electoral para Diputados a Cortes, para Compromisarios y para Diputados provinciales y Concejales.

Art. 19. Cada Comité local, auxiliado en caso necesario por los demás del Distrito y por las personas de influencia de sus simpatías, desplegará la mayor actividad para llevar todos los años a los gremios repartidores de la contribución el mayor número de hombres de su confianza con las instrucciones oportunas, a fin de cortar uno de los abusos más grandes que se han empleado para privar a nuestros amigos del derecho de votar, rebajándoles indebidamente una mezquina fracción de las contribuciones.

Art. 20. Los Comités estudiarán las leyes electorales en sus más mínimos detalles y con las listas de electores siempre a la vista promoverán las inclusiones y exclusiones que correspondan, llevando estos expedientes por todos sus trámites hasta obtener plena justicia.

Art. 21. Los Comités establecidos en la cabeza del Distrito judicial correspondiente tienen el deber de proteger estas diligencias, activando su rápida terminación.

Art. 22. Las diligencias necesarias para la elección de Ayuntamientos y Compromisarios autonomistas quedan especialmente encargadas a los Comités de cada Sección. Los demás del Distrito, en cuanto de ellos dependa, les prestarán eficaces auxilios.

Art. 23. Las diferencias que surjan en el seno de cada Comité o entre uno y otro de ellos y que no puedan quedar arregladas amigablemente en tres sesiones, que se celebrarán con este objeto, serán sometidas al Directorio del Partido, remitiendo copias certificadas de las actas correspondientes. El Directorio, con vista de ellas y de los informes que estime convenientes, resolverá sin apelación. La aplicación de este artículo no tendrá lugar, cuando se trate de diferencias surgidas

con motivo de la designación de candidatos para Diputados a Cortes o provinciales.

CAPITULO III.

Comités de Distrito.

Art. 24. Abierto el periodo electoral, los Comités de las Secciones correspondientes a cada Distrito para elecciones de Diputados provinciales y a Cortes se reunirán en la cabecera del mismo para tomar acuerdo acerca del candidato que se haya de elegir y de los medios para utilizar todos los votos de los electores autonomistas. Si la elección de Diputado provincial correspondiese a una sola Sección, a esta tocará, única y exclusivamente, la designación.

Art. 25. Los Comités de cada Sección, en unión de los autonomistas de la localidad, designarán dos representantes, que concurrirán a la cabecera del Distrito y reunidos allí los representantes de todas las Secciones elegirán por mayoría de los mismos el candidato a la Diputación Provincial, entendiéndose que para los efectos de esta disposición sólo tendrán voto en la elección de que se trata los autonomistas capacitados, o sea los que estuvieren inscritos en los Registros de los Comités. Igual procedimiento deberá observarse cuando se trate de nombrar Delegados y suplentes para el Directorio.

Art. 26. Los recursos pecuniarios y los servicios personales, que se requieran para las elecciones por Distrito, formarán un fondo común, que se distribuirá en las Secciones proporcionalmente a las circunstancias locales.

Art. 27. Los acuerdos de estos Comités serán tomados

por mayoría de votos de los concurrentes, siendo moralmente obligatorios para todos los autonomistas.

CAPITULO IV.

Delegación Provincial y Directorio del Partido.

Art. 28. La Delegación del Partido será elegida por un cuatrienio y se compondrá de tantos Delegados y suplentes, cuantos Distritos hubiere para Diputados a Cortes.

Art. 29. El Comité de cabecera del Distrito procederá, como está prescrito en el art. 25, hasta llevar a cabo la elección de un Delegado y un suplente.

Art. 30. Los elegidos podrán serlo, aunque no sean electores.

Art. 31. Cada uno de los elegidos recibirá copia del acta de su elección, autorizada por el Presidente y los Secretarios, que le servirá de credencial.

Art. 32. Otra copia igual será remitida por el Comité citado al Comité local, que resida en la capitalidad del Partido.

Art. 33. Dentro de los nueve días siguientes al de la elección, los elegidos presentarán sus credenciales al Presidente de dicho Comité local, cuyo funcionario con el Secretario las confrontarán, en presencia del interesado, con las actas de su referencia. Si ambos documentos estuvieren conformes, lo certificarán al pie o al margen de la credencial, si no

estuvieren conformes, no se pondrá certificación ninguna. En uno y otro caso se devolverá la credencial al interesado.

Art. 34. Los Delegados que se reúnan celebrarán sus primeras sesiones hasta dejar constituida la Delegación, bajo la dirección de un Presidente, que será el de mayor edad, y un Secretario, que será el más joven entre los presentes en la primera reunión. Las credenciales del Presidente y del Secretario estarán certificadas.

Art. 35. En la primera sesión se acordará pedir al Comité local las actas que estén en su poder. El Secretario de este Comité las entregará personalmente en la sesión siguiente con una relación ordenada por Distritos, certificada por él y con el Vº. Bº. del Presidente. Comprobada que sea dicha relación, se le expedirá recibo detallado, que será custodiado en el archivo del Comité. Dichas actas quedarán desde entonces bajo la custodia del Presidente provisorio de la Delegación, quien las entregará al cesar al Directorio que se nombre.

Art. 36. La segunda sesión se consagrará a verificar los poderes de los Delegados presentes, confrontando primero las credenciales certificadas y después las demás con las actas respectivas. Se discutirán los casos dudosos y se aprobarán o desaprobarán las actas por escrutinio secreto y mayoría de votos.

Art. 37. El interesado defenderá la validez de su acta, pero no tomará parte en la votación.

Art. 38. Para representar aquellos Distritos que hubieran dejado desiertas estas elecciones, los Delegados presentes y el Comité local, convocado por el Presidente provisorio, se reunirán en sesión electoral, que será la tercera

de la Delegación, y abierta ésta elegirán provisionalmente los Delegados y suplentes que faltaren. Si a los tres meses después de esta elección los dichos Distritos no hubieren cumplido todavía con sus deberes en esta parte, se entenderá que los abandonan y la Delegación quedará definitivamente elegida por el cuatrienio.

Art. 39. Si dentro de estos tres meses se presentaren las credenciales y actas de los Distritos morosos, se procederá como prescribe el art. 36, cesando los Delegados provisionales de los Distritos cuyas actas fueron aprobadas.

Art. 40. Residiendo la soberanía del Partido en la Asamblea General, cuando la reunión de ésta coincida con el periodo señalado para renovar la Delegación, corresponde a dicha Asamblea elegirla, prescindiéndose en ese caso de las prescripciones consignadas en los artículos 32 y 34.

Esto no obsta, para que puedan los Comités de Distrito llenar las funciones que les concede la Constitución, nombrando un Delegado y un suplente dentro del plazo de sesenta días, contando desde la fecha de aquella elección, entendiéndose que de no hacerlo así, ratificando o rectificando la designación hecha por la Asamblea, será firme ésta a todos los efectos constitucionales.

Art. 41. La Delegación se dividirá por iguales partes en tres Direcciones: la 1a., de Política; la 2a., Jurídica; la 3a., Económica. Dichas Direcciones tendrán por objeto principal estudiar las necesidades de la provincia y del Partido bajo estos tres aspectos.

Art. 42. Cada una informará y despachará los asuntos de su competencia, según los acuerdos de la Delegación en pleno.

Art. 43. Cada una tendrá un Director y un Ponente, elegidos por la Delegación.

Art. 44. El Director de Política será el Presidente de las sesiones de la Delegación; los Ponentes de la primera y de la segunda Direcciones serán los Secretarios de ésta y el Ponente de la Económica será el Tesorero.

Art. 45. Juntos asistirán a las sesiones y formarán la Mesa de la Delegación.

Art. 46. Los otros dos Directores suplirán, por su orden, al de Política en todas sus funciones.

Art. 47. Los tres Directores reunidos y presididos por el de Política, constituyen el Directorio del Partido y el Ejecutivo de la Delegación.

Art. 48. La Delegación en pleno discutirá y acordará, por mayoría de votos, sobre todos los asuntos promovidos por la iniciativa de los Delegados, de las Direcciones o del Directorio.

Art. 49. La Delegación nombrará un Secretario General del Partido, retribuido con la asignación anual de mil quinientos pesos. Además, se señala la cantidad de mil pesos para los demás gastos de la Secretaría. El nombramiento de Secretario ha de recaer en un Delegado o suplente.

Art. 50. El Directorio distribuirá a l s Direcciones los trabajos correspondientes, según su especialidad. Tomará los acuerdos que convengan a la mejor dirección del Partido, sometiéndolos a la deliberación de la Delegación cuando requieran el concurso de su autoridad, y dará cuenta de toda su conducta al finalizar cada año de su ejercicio.

Art. 51. Esclarecerá cualquier punto concreto de su conducta, siempre que fuere interpelado, fijando la sesión en que habrá de contestar la interpelación.

Art. 52. El Director de Política presidirá todos los actos de la Delegación y del Directorio y llevará la correspondencia del Partido en sus relaciones con las Autoridades públicas, los Comités, los autonomistas y los particulares dentro y fuera de la provincia.

Art. 53. La Delegación podrá nombrar, por iniciativa propia o a propuesta de las Direcciones o del Directorio, Subdelegados en los Distritos de la provincia o cerca de los partidos y hombres públicos de la Nación, cuando lo juzgue conveniente para el mejor servicio del Partido.

Art. 54. La Delegación celebrará sus sesiones ordinarias cada seis meses, fijando los días, horas y número de sesiones y el Presidente citará cuando sea necesario celebrar alguna extraordinaria.

Art. 55. La Delegación será normalmente renovada por la mitad cada dos años, según las reglas prescritas para su elección.

Art. 56. El Directorio convocará para este fin a los Comités con dos meses de anticipación.

Art. 57. La Delegación redactará el Reglamento para su gobierno interior y cuantos juzgue conducentes para la mejor aplicación de este plan.

CAPITULO V. Capitalidad del Partido.

Art. 58. La capitalidad del Partido Autonomista radicará desde ahora en la capital de la Isla, donde residen el Gobierno General de la provincia y los Centros superiores políticos y económicos, ante los cuales ha de acudir activamente con sus gestiones la Dirección del Partido.

DISPOSICIONES GENERALES.

1a. La Asamblea, profundamente reconocida a los eminentes servicios del ilustre hombre público D. Rafael María de Labra, acuerda aclamarle nuevamente "leader" del Partido y Jefe de nuestra representación parlamentaria en la Metrópoli.

2a. Los fondos para los gastos electorales y para los demás servicios del Partido serán sufragados por los liberales de cada Sección, según sus recursos y patriotismo. El contribuyente exigirá recibo de su contribución.

3a. La iniciativa para solicitar estos fondos pertenece a los Comités y al Directorio, mediante acuerdos motivados.

4a. El balance de las entradas y de los gastos, las cuentas y sus comprobantes estarán siempre en las Tesorerías respectivas a disposición de los autonomistas contribuyentes, para que las examinen a su satisfacción.

5a. Si encontraren defectos en la forma o en el fondo, darán parte por escrito a la Corporación correspondiente, deponsiéndolo en la Secretaría y exigiendo el oportuno recibo.

6a. El Secretario que hubiere dado el recibo presentará el parte en la primera sesión, dando lectura de él después de la del acta y antes de tratar ningún otro asunto.

7a. Oída la lectura, el Presidente fijará día para tratar con preferencia el asunto, citando al denunciante, a quien se concederá voz en lo relativo a la cuestión, hasta que se tome acuerdo definitivo.

8a. La Delegación, por acuerdo propio o a moción de cinco Comités del Partido, podrá disponer reuniones públicas, ya en su residencia, ya fuera de ella, cuando los intereses públicos o las necesidades del Partido las exijan.

Todos los Comités tienen el derecho y el deber de celebrar reuniones públicas y en sus respectivas demarcaciones en las circunstancias ya indicadas.

Cuando las reuniones públicas hayan de ser generales del Partido, serán convocadas por la Delegación o el Directorio, ya en virtud de su propia iniciativa o a petición de veinte Comités.

9a. Todos los actos del Partido, ya generales, ya parciales, deben tener la mayor publicidad y en cuanto sea pertinente todos los acuerdos de general interés deben tomarse por sufragio universal del Partido.

10a. Todos los Comités, así como todo autonomista, puede dirigirse al Directorio, tanto para dar cuanto para pedir informes de conocida utilidad al Partido.

11a. El Directorio, de acuerdo con la mayoría de los Comités, y previa consulta con la Delegación, publicará periódicamente listas de hombres públicos, peninsulares e insulares, que profesen los principios del Partido, dándolos a conocer, si fuese necesario, por medio de notas biográficas, cartas autógrafas u otros documentos fehacientes, a fin de que los Distritos que no tengan candidatos propios puedan fijarse en ellos con entera confianza.

12a. Los autonomistas que fuesen nombrados Compromisarios para la elección de Senadores se pondrán de acuerdo con la Delegación por correspondencia acerca de los candidatos. Con anticipación de veinte días, cuando menos, se indicará por medio de la prensa el nombre de los candidatos y en caso de divergencias y de necesidad de nuevo acuerdo se reunirá al efecto el Directorio, quedando obligado a dar aviso con la oportuna anticipación, si se resuelve no tomar parte en la elección.

13a. Los Comités de Sección contribuirán con una cantidad fija anual, en proporción a su importancia y fuerza, la cual habrá de establecer la Delegación para cada año, sin perjuicio de lo que pueda corresponderles por gastos extraordinarios. Los Comités de Sección podrán a su vez repartir

disponiéndose su publicación, en consonancia con lo acordado por la Delegación provincial de que certifico.- Salvador Brau.-
Vº.Bº., Blanco.

(LABRA, RAFAEL MARIA DE: La Autonomía Colonial en España (Madrid 1892), págs. 272-289).

APENDICE NUMERO 13.

PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION CIVIL
EN LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO (1893) (PROYECTO MAURA).

A LAS CORTES.

Más que la controversia porfiada y viva de los partidos locales, el común asentimiento y la experiencia de cada día denuncian como vicioso el régimen administrativo de nuestras Antillas, señaladamente de la Isla de Cuba. Los nobles afanes de todos y especial empeño de algunos predecesores del Ministro que suscribe, aplicados a corregirlo, a su tiempo dan testimonio del mal y de los sanos propósitos de los Gobiernos, pero nunca resultaron eficaces para la enmienda.

Tres lustros han pasado desde que la paz fue ventajosamente restablecida y poco menos desde que la emancipación de los esclavos normalizó la vida social; superados los tremendos estragos de la guerra y de la esclavitud, la prosperidad general, hoy en vías de florecimiento, corona y premia el singular y asombroso esfuerzo del pueblo cubano; una serie de reformas que se podrían notar de apresuradas, si no las justificase el feliz éxito, mudó en cortísimo espacio de tiempo el derecho y las costumbres políticas, y cuando todo allí revive, se regenera, se asienta y puebla de esperanzas el porvenir, sigue siendo la Administración pública la constante ocasión de quejas y amargos reproches, auxiliar involuntario de los que no desisten todavía de emponzoñar con el desamor a la Madre Patria el corazón de sus conciudadanos.

Honradamente no puede disimular el desconcierto de los servicios quien está obligado a procurar el remedio. Confesó los

males el digno predecesor del Ministro que suscribe y con el designio de corregirlos propuso y decretó numerosas e interesantes providencias, tantas y tales, que después de aquella general turbación sería todavía más estimable, que suele ser de ordinario, el reposo. Porque está de ello advertido el Gobierno, quisiera que sus deberes le consintiesen abstenerse de toda otra novedad, la cual de por sí es un inconveniente y sólo se justifica por el apremio de las necesidades públicas. Resulta hoy ineludible este apremio, porque si la experiencia de las últimas reformas no basta todavía para que respecto del acierto de todas ellas se pronuncie definitivo juicio, sin duda alguna acredita ya que respecto del organismo administrativo no alcanzaron el propósito de enmendarlo, antes dieron pábulo al desorden y enervaron los ya mellados resortes que malogran y frustan el esfuerzo asiduo de los Jefes de los Servicios.

Mientras éstos permanezcan en tal estado, ni aun se puede decir que corre el tiempo hábil para aquilatar y experimentar las disposiciones que removieron todo el sistema tributario y que pusieron en conmoción todos los intereses de la Isla de Cuba, porque la condición más vital para el buen éxito de cualquier presupuesto consiste en una administración regular y ordenada.

No por esto se ha de reputar estéril, ni siquiera en la parte que concierne al régimen administrativo, la empresa denodada y vigorosa del anterior Ministro y de las anteriores Cortes, que dan advertencias muy provechosas, y por ellas, por el estudio de antecedentes menos próximos y por la observación atenta de los hechos ha confirmado el que suscribe su convencimiento de que importa llegar hasta las raíces más hondas del mal y corregir de una manera general y concertada todos los Institutos que contribuyen a la obra administrativa, dejándoles

de modo que guarden entre sí proporción y correspondencia, so pena de perpetuar el desasosiego y la inestabilidad sin conseguir en cambio la mejoría.

Tales son los motivos que determinan al Gobierno a solicitar de las Cortes la pronta aprobación del adjunto Proyecto.

El exámen cuidadoso de sus términos hará ver que conservando íntegra la soberanía de la Nación española, sin desmembrar el Poder Legislativo dentro de la Constitución de la Monarquía, se extrema cuanto cabe extremar la inmediata intervención de los pueblos antillanos en la gestión, dirección y gobierno de los asuntos que, aun siendo nacionales por ser suyos, más peculiarmente les interesan y atañen.

Otórgase grandísima latitud a sus iniciativas, para que rijan y arbitren los medios de prosperar su cultura general y de fomentar su riqueza, y se franquean las vías constitucionales para promover la mejora de las leyes que puedan resultar mal avenidas con sus conveniencias, dentro de la común y sagrada solidaridad de la Nación entera.

Radícase, dentro de cada una de las Antillas, el ordinario término y definitivo despacho de todos los negocios administrativos, llegando en la satisfacción de este general anhelo de sus habitantes hasta donde cabe llegar, supuesto que el Gobierno de S. M. ha de seguir respondiendo ante las Cortes de la gestión ultramarina.

Se aunan en estrechísimo consorcio, compenetrándose en todos los grados de la jerarquía, la acción gubernativa y las

iniciativas y fiscalización de los elegidos en los comicios. De este modo, se logrará evitar conflictos peligrosos, que el apartamiento de organismos heterogéneos hacía inevitables, y también se conseguirá que todos los agentes del Poder público en funciones de gobierno o de administración vivan sujetos a la fiscalización y a la censura de los representantes electivos de los administrados, preservativo más eficaz, sin duda, que las trabas exageradas, que al arbitrio ministerial pongan las leyes para la provisión de los cargos públicos, porque estas trabas no suelen bastar para impedir los desacertados nombramientos y en cambio amparan muchas veces el abuso y después de conocido estorban para la corrección.

En virtud de esta Ley, si las Cortes acogen favorablemente el proyecto y si S.M. en su día se digna sancionarla, quedarán asociadas a la obra legislativa y administrativa no sólo las opiniones preponderantes, sino también las que profesen en minoría los electores y no sólo por la alta intervención que ahora ejercen ya los representantes de las Antillas en ambas Cámaras, sino también con el más directo y más extenso influjo que se da a los Diputados provinciales en la aprobación, formación o iniciación de todos los presupuestos de ingresos y gastos municipales, provinciales y generales. Será eficaz seguramente esta reforma, para que el régimen tributario se acomode en todo tiempo a las circunstancias y se asiente del modo que menos embarace la expansión de los incomparables y vigorosos gérmenes de riqueza de aquellas Islas. Satisfará, en fin, el anhelo que por igual sienten sus moradores y los que interpretan en el Gobierno los constantes votos de la Nación entera que consiste en el bienestar y la prosperidad de aquellos pueblos.

Al propio tiempo, no sólo se vigoriza, sino que parece más propia expresión decir que se reconstituye la autoridad del

Gobernador General y también se restaura la hoy demolida unidad de la acción administrativa, sin la cual unidad resulta desparramada, difusa e impotente toda la administración y desordenado todo el servicio público.

La diversa situación actual de las cosas y las diferentes circunstancias de Cuba y Puerto Rico hacen en aquella Isla más honda que en ésta la innovación que se propone, pero aun en la Grande Antilla se ha procurado que no cause transtorno, ni rompa la continuidad de los servicios. Se respetan las divisiones territoriales y se hace consistir el nuevo régimen en otro enlace y otra combinación de los Institutos y Organismos que existen o existieron y fueron conocidos. Ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, ni el Gobierno regional o provincial, ni el Gobierno General, ni la Dirección de Administración Local, ni la Intendencia General de Hacienda pueden sonar como novedades, y si bien es cierto que la constitución del Consejo de Administración se altera en considerable medida, ni se hace novedad en su carácter consultivo, ni con propiedad pueden ser calificadas como nuevas, cosas que de tanto tiempo atrás, con tan copiosas razones y tan autorizados dictámenes venía recomendando la opinión pública.

El Ministro que suscribe cree cumplir una de sus mayores obligaciones iniciando esta reforma y espera de ella grandes bienes para el estado político y remedios eficaces para los sufrimientos administrativos, desiguales, pero notorios en ambas Antillas, y aunque ha consagrado largas reflexiones al estudio del Proyecto, dispónese a aprovechar y recoger las enseñanzas que la sabiduría de las Cortes aportará para el mejoramiento de la obra, la cual no se puede mirar, pues no lo es, como privativa de un solo partido, y recomienda con todo encarecimiento la urgencia, porque tiene bien averiguado la imposibilidad de mantener el actual desconcierto, ruinoso para el

Tesoro y nocivo para otros intereses todavía más vitales de la Nación.

Por todo ello, tiene el honor de someter a la aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY
PARA EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION CIVIL DE LAS ISLAS
DE CUBA Y PUERTO RICO.

Artículo 1º El régimen del Gobierno y de la Administración Civil de la Isla de Cuba se acomodará a las siguientes bases:

BASE 1a.

La Ley Municipal vigente en la Isla quedará modificada en cuanto sea menester para los fines siguientes:

Las cuestiones relativas a la constitución de los Municipios o de las Corporaciones municipales (agregación, segregación, deslinde de términos, incidencias de elecciones, capacidad de los electos y demás análogas) serán resueltas sin ulterior recurso por la Diputación Provincial.

Los territorios despoblados, sobre los cuales no se pueda hacer efectiva la jurisdicción municipal, serán excluidos de los términos, mediante deslinde de éstos que aprobará la Diputación, quedando dichos territorios bajo el mando de las Autoridades Gubernativas, Civiles y Militares.

Serán Alcaldes los Concejales elegidos por los

Ayuntamientos, mientras el Gobernados General no estime oportuno nombrar otro miembro de la Corporación, debiendo ejercer aquellas Autoridades, además de las funciones activas de la Administración, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos, la representación y delegación del Gobierno.

En todo caso de suspensión gubernativa de acuerdos municipales, adoptados en virtud de la peculiar competencia de los Ayuntamientos, el asunto pasará desde luego a conocimiento del Tribunal Ordinario, si la suspensión hubiere sido acordada por razón de delincuencia, o a conocimiento de la Diputación Provincial, para que confirme o revoque la suspensión, si el motivo de ésta fuese haber recaído el acuerdo en asuntos positivamente extraños a la competencia municipal o haber infringido las leyes.

En todo lo que no corresponda a la exclusiva competencia municipal, los Gobernadores regionales, Delegados del Gobierno General, podrán suspender los acuerdos de las Corporaciones municipales y amonestar, apercibir o multar a sus individuos.

Para la destitución gubernativa de cualquiera de éstos, el Gobernador General deberá oír previa y necesariamente al Consejo de Administración.

Todo individuo de Corporación municipal que hubiese dictado providencia o votado acuerdo, lesivo para los derechos de particulares, será responsable de indemnización o de restitución a los perjudicados ante los Tribunales que según los casos sean competentes, mientras tal responsabilidad no quede extinguida con sujeción a las reglas ordinarias del Derecho.

En los asuntos definidos como de la privativa competencia municipal, cada Ayuntamiento gozará de toda la libertad de acción compatible con la obediencia de las leyes generales y con el respeto a los derechos de los particulares.

Para que los Ayuntamientos y las Juntas de Asociados designen los recursos y arbitren los medios que prefieran en cada pueblo para cubrir los gastos del Municipio y satisfacer el contingente provincial, se les concederá toda la latitud de facultades que sea compatible con el sistema tributario del Estado.

Los presupuestos ordinarios municipales podrán ser reformados de año en año, pero mientras tanto regirán indefinidamente, acudiéndose a las necesidades eventuales y transitorias por medio de presupuestos y recursos extraordinarios. Nunca los gastos que se autoricen podrán exceder la cuantía de los efectivos recursos disponibles de cada Municipio.

La Diputación Provincial revisará los acuerdos de las Corporaciones municipales, relativos a formación o alteración de sus presupuestos, sin mermar las facultades discrecionales de aquéllas, cuidará de que no se autorice gasto alguno, que exceda de los recursos efectivos, y de que con preferencia a toda otra necesidad se solventen los débitos o atrasos que resultaren de un año para otro y las obligaciones que hubieren sido declaradas por ejecutoria de los Tribunales competentes. El Gobernador General y sus Delegados sólo tendrán en estos asuntos la intervención necesaria para asegurar la observancia de las leyes y la compatibilidad de los recursos municipales con los ingresos del Estado.

Las cuentas anuales de los Alcaldes, comprensivas de

los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, serán publicadas en la localidad, revisadas y censuradas, con vista de las reclamaciones, por los Gobernadores de región, oyendo a los responsables acerca de los reparos, y aprobadas o desaprobadas en definitiva por la Diputación Provincial la que declarará, en su caso, sin ulterior recurso, las responsabilidades administrativas, a reserva de las que competan a los Tribunales Ordinarios.

BASE 2a.

Será reformada la Ley Provincial vigente en la Isla de Cuba con los fines siguientes:

Para los efectos de los arts. 82 y 84, con arreglo al 89 de la Constitución, toda la Isla formará una sola provincia, dividida en las seis regiones que actualmente están gobernadas como provincias distintas.

La única Diputación Provincial de la Isla ejercerá en pleno todas sus funciones, estará formada por dieciocho Diputados, cuyos cargos durarán cuatro años, y se renovará por mitad de dos en dos años, verificándose la elección una vez en las regiones de la Habana, Santa Clara y Puerto Príncipe y otra vez en Pinar del Río, Matanzas y Santiago de Cuba. Elegidos de una vez todos los Diputados al planteamiento de esta Ley o en otro caso extraordinario que ocurra, la primera renovación se hará cesando a los dos años los del primer grupo de regiones.

La Diputación elegirá su Presidente, examinará y aprobará, en su caso, las actas y la capacidad legal de los electos y resolverá todas las cuestiones tocantes a su propia constitución con arreglo a las leyes.

El Gobernador General, oída la Junta de Autoridades, podrá suspender la Diputación o, sin aquel requisito, decretar por sí la suspensión de seis individuos, mientras quede bastante número de ellos para deliberar, en los casos siguientes: 1º. Cuando la Diputación o alguno de sus miembros traspase el límite de sus facultades legítimas con menoscabo de la autoridad gubernativa o judicial o con riesgo de alteración del orden público. 2º. Por razón de delincuencia. En el primer caso, dará cuenta inmediatamente al Gobierno, para que éste levante la suspensión o decrete la destitución por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, dentro del plazo de dos meses, trascurridos los cuales, sin una u otra providencia, quedará alzada de derecho la suspensión. En el segundo caso, entenderán, desde luego, en el asunto los Tribunales competentes y se estará a lo que éstos resolviesen, tanto sobre la suspensión como en lo relativo a las responsabilidades definitivas.

La Diputación Provincial podrá proponer al Gobierno, por conducto del Gobernador General, la iniciativa de reforma de las leyes promulgadas en la Isla. Con sujeción a ellas acordará todo cuanto estime conveniente para el régimen, en toda la Isla, de las Obras Públicas; de las comunicaciones Telegráficas y Postales, Terrestres y Marítimas; de la Agricultura, la Industria y Comercio; de la Inmigración y Colonización; de la Instrucción Pública; de la Beneficencia, y de la Sanidad. Formará y aprobará todos los años los presupuestos con suficientes recursos para dotar aquellos servicios. Ejecutará las funciones que la Ley Municipal le asigne y cuantas le atribuyan otras leyes especiales. Censurará y, en su caso, aprobará las cuentas del presupuesto provincial, que serán rendidas todos los años por la Dirección General de Administración Local, declarando las responsabilidades administrativas que resultaren.

Los ingresos del presupuesto provincial consistirán:
1º. En el producto de los bienes y las rentas que pertenezcan a la provincia o a los establecimientos e Institutos, cuyo gobierno y dirección compete a la Diputación Provincial. 2º. En los recargos que las leyes autoricen y que la Diputación acuerde sobre las contribuciones e impuestos del Estado, cuya percepción esté encomendada a la Intendencia General de Hacienda. 3º. En el contingente que la Diputación señale a los Municipios, guardando siempre entre éstos la proporción en que se halle la entidad de los respectivos presupuestos.

Al Gobernador General, como Jefe Superior de las Autoridades de la Isla, incumbirá ejecutar todos los acuerdos de la Diputación. Al efecto, como Delegada de aquél, la Dirección de Administración Local tendrá a su cargo los servicios dotados con el presupuesto provincial y la contabilidad referente al mismo y será responsable de la inobservancia de las leyes y de las resoluciones legítimas de la Diputación.

Cuando el Gobernador General reputare contrario a las leyes o a los intereses generales de la Nación cualquier acuerdo de la Diputación Provincial, podrá suspender su ejecución, adoptar por sí mismo interinamente las providencias que exigieren las necesidades públicas, que quedaren desatendidas por efecto de la suspensión, y, previo informe del Consejo Administrativo, someter el asunto al Ministerio de Ultramar. También conocerá éste, y en su caso el Consejo de Ministros, de las responsabilidades administrativas que con ocasión de la censura de cuentas provinciales hubiere declarado la Diputación, cuando pudieren resultar exigibles al Gobernador General.

Si algún acuerdo de la Diputación Provincial lesiona derechos de particulares, los que hubiesen contribuido con su

voto a adoptarlo serán responsables de indemnización o de restitución al perjudicado ante los Tribunales competentes, los cuales podrán también decretar, a instancia de parte, la suspensión del acuerdo litigioso.

Como Delegados del Gobernador General habrá Gobernadores regionales en las seis demarcaciones, que ahora son provincias, no haciéndose novedad en las categorías, calidades y dotaciones actuales de estos funcionarios. Todos ellos ejercerán en la demarcación respectiva iguales atribuciones y serán éstas las que les competían antes del Decreto de 31 de Diciembre de 1891, en cuanto no resulten modificadas por la presente Ley.

BASE 3a.

El régimen electoral de los Ayuntamientos y de la Diputación Provincial se modificará para facilitar a las minorías el acceso a dichas Corporaciones, en la medida que señalan las leyes vigentes en la Península.

No serán reelegibles para la Diputación o para los Ayuntamientos de Municipios, que consten de más de veinte mil almas, los que hubieren pertenecido a la misma Corporación durante los cuatro años anteriores.

BASE 4a.

El Consejo de Administración de la Isla de Cuba estará constituido y funcionará del modo que a continuación se expresa:

Serán Presidente y Vocales natos:

El Gobernador General.

El Reverendísimo Arzobispo de Santiago de Cuba o en su ausencia el Reverendo Obispo de La Habana.

El Comandante General del Apostadero.

El General Segundo Cabo.

El Presidente de la Audiencia Pretorial.

El Coronel Decano del Cuerpo de Voluntarios.

Los Diputados provinciales que hayan entrado en el segundo bienio de su cargo.

Al implantarse esta Ley y cuando quiera que la Diputación hubiere sido renovada de una vez en su totalidad, serán Vocales natos del Consejo aquellos Diputados provinciales que estén más próximos a cesar en sus cargos con arreglo a la base 2a.

El Gobierno nombrará por Real Decreto otros nueve Consejeros, dos de los cuales tendrán las calidades legales, la categoría y el sueldo de Jefes Superiores de Administración, y estarán encargados de las ponencias que sean necesarias para preparar las deliberaciones del Consejo.

Tendrá éste una Secretaría con el personal indispensable para el despacho de los asuntos.

Exceptuados los dos Consejeros Ponentes, el cargo de Vocal del Consejo será honorífico y gratuito para todos los miembros.

Para ser nombrado Consejero, exceptuados los dos Ponentes, se requiere alguna de las calidades siguientes:

Ser o haber sido Presidente de Cámara de Comercio, de la Sociedad Económica de Amigos del País, del Casino Español de La Habana o del Círculo de Hacendados.

las indispensables, si llegase el caso, para asegurar el pago de la Deuda y los servicios necesarios para la seguridad del Estado y la Administración de Justicia.

2º. Sobre las cuentas generales que la Intendencia de Hacienda rendirá, sin excusa, todos los años dentro del semestre siguiente a cada ejercicio económico, comprensivas de los ingresos y los gastos, liquidados y realizados en la administración del presupuesto general de la Isla.

3º. Sobre los asuntos del Patronato de Indias.

4º. Sobre los acuerdos de la Diputación Provincial que den ocasión a que intervenga el Gobierno con arreglo a la base 2a.

5º. Sobre las propuestas de reformas legislativas que emanen de la Diputación antes de elevarlas al Gobierno.

6º. Sobre la destitución o separación de Alcaldes y Regidores.

7º. Sobre los demás asuntos de carácter administrativo que las leyes determinen.

Podrá además el Gobernador General pedir al Consejo cuantos informes considere convenientes.

BASE 5a.

El Gobernador General será el representante del Gobierno de la Nación en la Isla de Cuba. Ejercerá como Vicerreal Patrono las facultades inherentes al Patronato de Indias. Tendrá

el mando superior de todas las Fuerzas Armadas de Mar y Tierra existentes en la Isla. Será Delegado de los Ministerios de Ultramar, de Estado, de Guerra y de Marina y le estarán subordinadas todas las demás Autoridades de la Isla. Su nombramiento o separación emanará de la Presidencia del Consejo de Ministros con acuerdo de éste, a propuesta del Ministro de Ultramar.

Además de las otras funciones que por precepto de las leyes o por especial delegación del Gobierno le correspondan, serán atribuciones suyas:

Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la Isla las Leyes, Decretos, Tratados, Convenios Internacionales y demás disposiciones u órdenes que le comuniquen los Ministerios de que es Delegado.

Vigilar e inspeccionar todos los servicios públicos.

Comunicarse directamente sobre negocios de Política Exterior con los Representantes, Agentes Diplomáticos y Consules de España en América.

Suspender las ejecuciones de pena capital cuando la gravedad de las circunstancias lo exigiese y la urgencia no diere lugar a solicitar y obtener de S.M. el indulto, oyendo el parecer de la Junta de Autoridades.

Suspender, con audiencia de esta misma Junta y bajo su responsabilidad, cuando circunstancias extraordinarias impidan comunicarse previamente con el Gobierno, las garantías expresadas en los arts. 4º, 5º, 6º y 9º y párrafos 1º, 2º y 3º del art. 13

de la Constitución del Estado, y aplicar la legislación de Orden Público.

Como Jefe Superior de la Administración Civil en la Isla también corresponderá al Gobernador General:

Mantener la integridad de la jurisdicción administrativa con arreglo a las disposiciones que rigen en materia de competencias de jurisdicción y de atribuciones.

Dictar las disposiciones generales necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, dando cuenta de ellas al Ministerio de Ultramar.

Señalar los establecimiento penales en que se deban cumplir las condenas, disponer el ingreso en ellos de los penados y designar el punto de confinamiento cuando los Tribunales impongan esta pena.

Suspender a los funcionarios de la Administración, cuyo nombramiento corresponda al Gobierno, dando a éste cuenta razonada, y proveer interinamente las vacantes con arreglo a las disposiciones vigentes.

Sostener con los Ministerios, de que es Delegado, la comunicación de todas las Autoridades de la Isla.

A la Junta de Autoridades, cuando proceda convocarla, serán citados el Reverendo Obispo de La Habana o el Reverendo Arzobispo de Santiago de Cuba, si se hallase presente; el Comandante General del Apostadero; el General Segundo Cabo; el

Presidente y el Fiscal de la Audiencia de La Habana; el Intendente de Hacienda y el Director de Administración Local.

Los acuerdos de esta Junta, que se harán constar en acta duplicada, remitiendo un ejemplar al Ministerio de Ultramar, no osbtarán, para que el Gobernador General resuelva, bajo su responsabilidad en todo caso, lo que crea más conveniente.

El Gobernador General no podrá hacer entrega de su cargo ni ausentarse de la Isla, sin expreso mandato del Gobierno, y será reemplazado en casos de vacante, ausencia o imposibilidad por el General Segundo Cabo y en defecto de éste por el Comandante General del Apostadero, mientras el Gobierno no designase otra persona para la interinidad.

Quedará suprimido el Juicio de Residencia y la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de las responsabilidades definidas en el Código Penal que se imputaren al Gobernador General.

Este no podrá modificar o revocar sus providencias, si hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, si fueren declaratorias de derechos, si hubiesen servido de base a sentencia judicial o contencioso-administrativa o versasen sobre su propia competencia.

Las providencias que recaigan en materia de gobierno o en el ejercicio de facultades discrecionales y las de carácter general y reglamentario podrán ser revocadas por el Gobierno, cuando éste las juzgue contrarias a las leyes o inconvenientes para el gobierno y buena administración de la Isla.

BASE 6a.

La Administración Civil y Económica de la Isla, bajo la superior dependencia del Gobernador General, quedará organizada con sujeción a las siguientes reglas:

El Gobernador General con su Secretaría, que estará a cargo de un Jefe de Administración, despachará directamente los asuntos de Política; Patronato de Indias; Conflictos Jurisdiccionales; Orden Público; Seguridad; Extranjería; Cárceles; Penales; Estadística; Personal, y Comunicación entre todas las Autoridades de la Isla y con el Gobierno y cualesquiera otros que no estén asignados a distinta competencia.

La Intendencia General de Hacienda, que estará desempeñada por un Jefe Superior de Administración, tendrá a su cargo toda la Gestión Económica, Contabilidad, Intervención y Rendición de Cuentas del presupuesto del Estado en la Isla. De ella dependerán inmediatamente las Secciones Administrativas de las seis regiones, salvas las facultades de inspección, que el Gobernador General delegue, en casos determinados, en los Gobernadores regionales.

La Dirección General de la Administración Local, desempeñada por un Jefe Superior de Administración, estará encargada de los servicios que se doten con el presupuesto provincial, de llevar la contabilidad, de rendir y depurar las cuentas anuales del mismo presupuesto, de los asuntos municipales y de cumplir todos los acuerdos de la Diputación.

Las plantillas de las oficinas y el procedimiento para el despacho de los asuntos se acomodarán al designio de conseguir la más extremada sencillez en los trámites y la responsabilidad individual de los funcionarios.

La vía gubernativa quedará agotada con la resolución del Jefe o la Autoridad Superior en la Isla, a cuya competencia corresponda cada asunto según esta base. Aquella resolución causará estado para dejar expedita, en su caso, la vía contencioso-administrativa.

Se podrá acudir, sin embargo, en todo tiempo, con el recurso extraordinario de queja al Gobernador General, respecto de los asuntos en que entiendan la Intendencia y la Dirección de Administración, y también al Ministerio de Ultramar, respecto de cualesquiera asuntos de la administración y del gobierno de la Isla, pero la queja no interrumpirá el plazo hábil ni la sustanciación de la reclamación contencioso-administrativa. Cuando el Gobernador General o el Ministerio de Ultramar fuesen requeridos, por medio del recurso de queja, para ejercitar las facultades de alta inspección, y que en todo caso les están reservadas, se abstendrán de adoptar resoluciones que sean confirmatorias de las que hubiesen causado estado, más cuando entiendan que procede revocarlas, las providencias que ellos dicten se subrogarán en el lugar de las que hayan terminado la vía administrativa, quedando sin efecto las reclamaciones que en la contenciosa estén a la sazón pendientes, y, pudiéndose iniciar de nuevo este recurso contra las tales providencias revocatorias.

BASE 7a.

Las leyes que regulan las elecciones de Senadores en la Isla serán modificadas, para que, no obstante la existencia de una sola Diputación Provincial, los tres Diputados provinciales de cada región, juntamente con los Compromisarios de la misma, concurren a elegir los Senadores que corresponden a las actuales provincias.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicado, en cuanto tenga aplicación posible, a la provincia de

Puerto Rico con las siguientes modificaciones.

Las cuentas que publicarán anualmente los Alcaldes serán revisadas por el Jefe de la Sección de Administración Local que existirá en el Gobierno General, cuyo jefe tendrá también en esta Isla las funciones atribuidas en Cuba a la Dirección de Administración.

La Diputación Provincial se compondrá de doce Diputados que serán elegidos de tres en tres por cuatro circunscripciones, las cuales se formarán agrupando los partidos o distritos judiciales de la Isla según el número de habitantes, los medios de comunicación y las demás circunstancias atendibles al efecto.

Serán Presidentes y Vocales natos del Consejo de Administración el Gobernador General, el Reverendo Obispo, el General Segundo Cabo, el Presidente de la Audiencia Territorial, el Coronel del Cuerpo de Voluntarios y los Diputados provinciales que hayan entrado en el segundo bienio de su cargo.

El Gobierno nombrará por Real Decreto otros seis Consejeros, dos de los cuales tendrán el carácter de Ponentes, todo según se expresa en la base 4a. del artículo anterior.

La Administración Civil, de la cual seguirá formando parte la Intendencia con sus actuales atribuciones, se ordenará separando las funciones de la Administración Local, que estarán a cargo de un Jefe de esta Sección, y las de carácter gubernativo, a semejanza de lo que establece la base 6a. del artículo anterior. Las resoluciones de la Intendencia, del Jefe de la Administración Local y del Gobernador General en los asuntos reservados a su directa competencia causarán estado para los efectos que señala la aludida base.

Art. 3º. El Ministro de Ultramar dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de esta Ley y adaptará a ella el texto de las ahora vigentes que resultan modificadas.

Madrid, 5 de Junio de 1893.- Antonio Maura y Montaner.
(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 5 de Junio de 1893, Apéndice 3º al número 47).

APENDICE NUMERO 14.

LEY ESTABLECIENDO LAS BASES PARA EL REGIMEN DEL GOBIERNO
Y LA ADMINISTRACION CIVIL DE LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO
(1895) (LEY ABARZUZA).

Don Alfonso XIII, por la Gracia de Dios y de la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1º. El régimen del Gobierno y de la Administración Civil de la Isla de Cuba se acomodará a las siguientes bases:

Base 1a. La Ley Municipal y la Ley Provincial vigentes en la Isla quedarán modificadas, en cuanto sea menester, para los siguientes fines:

Las cuestiones relativas a la constitución de los Municipios, agregación, segregación y deslindes de términos municipales serán resueltas por el Consejo de Administración, previo informe de la Diputación Provincial respectiva.

También quedará modificada la Ley Provincial en todo aquello en que estas bases atribuyan la competencia al Consejo de Administración.

Las cuestiones relativas a la constitución de los Ayuntamientos, incidencias de elecciones, capacidad de los electos y demás análogas serán resueltas por la Diputación Provincial.

Serán Alcaldes los Concejales elegidos por los Ayuntamientos, mientras el Gobernador General no estime oportuno nombrar otro miembro de la Corporación. Los Alcaldes ejercerán, además de las funciones activas de la Administración, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos, la representación y delegación del Gobierno.

En todo caso de suspensión gubernativa de acuerdos municipales, el asunto pasará desde luego a conocimiento del Tribunal Ordinario, si la suspensión hubiere sido acordada por razón de delincuencia, o a conocimiento de los Gobernadores Civiles, previo informe de la Diputación Provincial, si el motivo de la suspensión fuese haber recaído el acuerdo en asuntos positivamente extraños a la competencia municipal o haber infringido las leyes.

Los Gobernadores Civiles podrán suspender los acuerdos de las Corporaciones municipales y amonestar, apercibir, multar o suspender a sus individuos, cuando traspasen el límite de la competencia municipal.

Para la destitución gubernativa de Alcaldes y Concejales, en los casos que la ley determine, el Gobernador General deberá oír previa y necesariamente al Consejo de Administración.

Todo individuo de Corporación municipal que hubiese dictado providencia o votado acuerdo, lesivo para los derechos de

particulares, será responsable de indemnización o de restitución a los perjudicados ante los Tribunales, que según los casos sean competentes, mientras tal responsabilidad no quede extinguida con sujeción a las reglas ordinarias del Derecho.

En los asuntos definidos como de la privativa competencia municipal, cada Ayuntamiento gozará de toda la libertad de acción compatible con la obediencia a las leyes y con el respeto a los derechos de los particulares.

Para que los Ayuntamientos y las Juntas de Asociados designen los recursos y arbitren los medios que prefieran en cada pueblo para cubrir los servicios y las obligaciones del Municipio, se les concederá toda la latitud de facultades que sea compatible con el sistema tributario del Estado.

Las Diputaciones Provinciales podrán revisar los acuerdos de las Corporaciones municipales, relativos a formación o alteración de sus presupuestos, sin mermar las facultades discrecionales de aquéllas, cuidando de que no se autorice gasto alguno, que exceda de los recursos efectivos, y de que con preferencia a toda otra necesidad se solventen los débitos o atrasos que resultaren de un año para otro y las obligaciones que hubieran sido declaradas por ejecutoria de los Tribunales competentes. El Gobernador General y los Gobernadores sólo tendrán en estos asuntos la intervención necesaria para asegurar la observancia de las leyes y la compatibilidad de los recursos municipales con los ingresos del Estado.

Las cuentas anuales de los Alcaldes, comprensivas de los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, serán publicadas en las localidades, revisadas y censuradas, con vista de las reclamaciones, por las Diputaciones Provinciales y

aprobadas por los Gobernadores Civiles, si no excediesen de cien mil pesetas y si excediesen de esa suma por el Consejo de Administración. Las Diputaciones y el Consejo declararán, en su caso, las responsabilidades administrativas, a reserva de las que competan a los Tribunales Ordinarios.

Los acuerdos de las Diputaciones Provinciales serán apelables ante el Consejo de Administración.

Base 2a. El Consejo de Administración estará constituido de la siguiente manera:

Será Presidente el Gobernador General propietario o interino.

El Gobierno nombrará por Real Decreto quince Consejeros.

Tendrá éste una Secretaría con el personal indispensable para el despacho de los asuntos.

El cargo de Vocal del Consejo será honorífico y gratuito para todos los miembros.

Para ser nombrado Consejero se requiere, además de llevar cuatro años de residencia en la Isla, alguna de las cualidades siguientes:

Ser o haber sido Presidente de Cámara de Comercio, de

la Sociedad Económica de Amigos del País o del Círculo de Hacendados.

Ser o haber sido Rector de la Universidad o Decano del Colegio de Abogados de capital de provincia por espacio de dos años.

Figurar con cuatro años de antelación entre los cincuenta mayores contribuyentes de la Isla por impuesto sobre la propiedad inmueble o por el ejercicio de profesión, industria o comercio.

Haber ejercido el cargo de Senador del Reino o de Diputado a Cortes en dos o más Legislaturas.

Haber sido dos o más veces Presidente de las Diputaciones Provinciales de la Isla; haber sido durante dos o más bienios Vocal de la Comisión provincial o durante ocho años Diputado provincial.

Haber sido durante dos o más bienios Alcalde en capital de provincia.

Haber sido durante dos o más años Consejero de Administración hasta la promulgación de esta Ley.

Cuando lo estime oportuno podrá el Consejo llamar a su seno, por conducto del Gobernador General, para oírlos, sin que por eso tengan voto a los Jefes de los Servicios Administrativos.

El Consejo se compondrá, además, de quince Consejeros, elegidos por el mismo Censo que las Diputaciones Provinciales.

Estos cargos durarán cuatro años y se renovarán cada dos, verificándose la elección una vez en las provincias de La Habana, Pinar del Río y Puerto Príncipe y otra en las de Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba.

La Habana elegirá cuatro, Santiago tres y las demás provincias dos cada una.

Elegidos de una vez todos los Consejeros al plantearse esta Ley o en caso de destitución total, la primera renovación tendrá efecto a los dos años, cesando los del primer grupo de provincias.

En los casos ordinarios las elecciones se verificarán al mismo tiempo que las de Diputados provinciales y en un solo acto.

El Consejo examinará las actas y determinará respecto de la capacidad legal de los electos y de los de real nombramiento y resolverá todas las cuestiones referentes a su propia constitución con arreglo a las leyes.

En la primera sesión de cada año nombrará dos Vicepresidentes y dos Secretarios entre todos los Consejeros. El Gobernador General podrá delegar en aquéllos para el despacho ordinario de los asuntos.

Base 3a. El Consejo de Administración acordará cuanto

estime conveniente para el régimen en toda la Isla de las Obras Públicas; de las Comunicaciones Telegráficas y Postales, Terrestres y Marítimas; de la Agricultura, la Industria y el Comercio; de la Inmigración y Colonización; de la Instrucción Pública; de la Beneficencia, y de la Sanidad, sin perjuicio de la alta inspección y de las facultades inherentes a la soberanía que las leyes reserven al Gobierno de la Nación.

Formará y aprobará todos los años el presupuesto con suficientes recursos para dotar aquellos servicios. Ejercitará las funciones que las Leyes Municipal y Provincial le asignen y cuantas le atribuyen otras leyes especiales. Censurará y, en su caso, aprobará las cuentas de su presupuesto, que serán rendidas todos los años por la Dirección General de Administración Local, declarando las responsabilidades administrativas que resultaren.

Los ingresos del presupuesto local consistirán:

1º. En el producto de los bienes y las rentas que pertenezcan al Estado o a los establecimientos e Institutos cuyo régimen económico competa al Consejo.

2º. En los recargos que dentro de los límites que las leyes autoricen acuerde el Consejo sobre las contribuciones e impuestos del Estado.

Al Gobernador General, como Jefe Superior de las autoridades de la Isla, incumbirá ejecutar los acuerdos del Consejo.

Al efecto, como Delegada de aquél, la Dirección General de Administración Local tendrá a su cargo los servicios dotados

en el presupuesto local y la contabilidad referente al mismo y será responsable de la inobservancia de las leyes y de las resoluciones legítimas del Consejo de Administración.

Cuando el Gobernador General reputare contrario a las leyes o a los intereses generales de la Nación cualquier acuerdo del Consejo, suspenderá su ejecución y adoptará por sí mismo interinamente las providencias que exigieren las necesidades públicas, que quedaren desatendidas por efecto de la suspensión, sometiendo inmediatamente el asunto al Ministerio de Ultramar.

Si algún acuerdo del Consejo lesionara indebidamente derechos de particulares, los que hubiesen contribuido con su voto a adoptarlo serán responsables de indemnización o de restitución al perjudicado ante los Tribunales competentes.

El Gobernador General, oída la Junta de Autoridades, podrá suspender el Consejo o, sin aquel requisito, decretar la suspensión de sus individuos, mientras quede bastante número para deliberar:

1º. Cuando el Consejo o alguno de sus miembros trapase el límite de sus facultades legítimas con menoscabo de la autoridad gubernativa o judicial o con riesgo de alteración del orden público.

2º. Por razón de delincuencia.

En el primer caso, dará cuenta inmediatamente al Gobierno, para que éste levante la suspensión o decrete la destitución por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, dentro

del plazo de dos meses, transcurridos los cuales, sin una u otra providencia, quedará alzada de derecho la suspensión.

En el segundo caso, entenderá, desde luego, en el asunto el Tribunal competente, que será la Audiencia de La Habana en pleno, y se atenderá a lo que éste resolviese sobre la suspensión.

En lo relativo a las demás responsabilidades tendrán los acusados el recurso de casación.

El Consejo será oído:

1º. Sobre los presupuestos generales de gastos e ingresos, cuyos proyectos, que habrá formado la Intendencia, serán elevados todos los años dentro del mes de Marzo o antes al Ministerio de Ultramar con las modificaciones propuestas por el Consejo.

Aunque el Gobierno varíe el proyecto para presentarlo a las Cortes, a fin de proveer a los servicios y obligaciones generales del Estado, acompañará siempre, como informe, el redactado por el Consejo de Administración.

2º. Sobre las cuentas generales que la Intendencia de Hacienda rendirá, sin excusa, todos los años dentro del semestre siguiente a cada ejercicio económico, comprensivas de los ingresos y gastos, liquidados y realizados en la administración del presupuesto general de la Isla.

3º. Sobre los asuntos del Patronato de Indias.

4º. Sobre los acuerdos de los Gobernadores Civiles que lleguen en alzada hasta el Gobernador General.

5º. Sobre la destitución o separación de Alcaldes y Regidores.

6º. Sobre los demás asuntos de carácter general que las leyes determinen.

Podrá además el Gobernador pedir al Consejo cuantos informes estime convenientes.

El Consejo celebrará periódicamente sesiones ordinarias y las extraordinarias a que lo convocare el Gobernador General.

Base 4a. El Gobernador General será el representante del Gobierno de la Nación en la Isla de Cuba. Ejercerá como Vicerreal Patrono las facultades inherentes al Patronato de Indias. Tendrá el mando superior de todas las Fuerzas Armadas de Mar y Tierra existentes en la Isla. Será Delegado de los Ministerios de Ultramar, de Estado, de Guerra y de Marina y le estarán subordinadas todas las demás Autoridades de la Isla. Su nombramiento o separación emanará de la Presidencia del Consejo de Ministros con acuerdo de éste.

Además de las otras funciones que por precepto de las leyes o por especial delegación del Gobierno le correspondan, serán funciones suyas:

Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la Isla las Leyes, Decretos, Tratados, Convenios Internacionales y demás

disposiciones emanadas del Poder Legislativo.

Publicar, cumplir y hacer que se cumplan los Decretos, Reales Ordenes y demás disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo y que le comuniquen los Ministerios de que es Delegado.

Cuando, a su juicio, las resoluciones del Gobierno de Su Majestad pudieran causar daño a los intereses generales de la Nación o a los especiales de la Isla, suspenderá su publicación y cumplimiento, dando cuenta de ello y de las causas que motiven la resolución, por el medio más rápido, al Ministerio respectivo.

Vigilar e inspeccionar todos los servicios públicos.

Comunicar directamente sobre negocios de Política Exterior con los Representantes, Agentes Diplomáticos y Cónsules de España en América.

Suspender las ejecuciones de pena capital cuando la gravedad de las circunstancias lo exigiese y la urgencia no diere lugar a solicitar y obtener de S. M. el indulto, oyendo el parecer de la Junta de Autoridades.

Suspender, con audiencia de esta misma Junta y bajo su responsabilidad, cuando circunstancias extraordinarias impidan comunicarse previamente con el Gobierno, las garantías expresadas en los artículos 4º, 5º, 6º y 9º y párrafos 1º, 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución del Estado, y aplicar la legislación de Orden Público.

Como Jefe Superior de la Administración Civil en la

Isla, también corresponderá al Gobernador General:

Mantener la integridad de la jurisdicción administrativa con arreglo a las disposiciones que rigen en materia de jurisdicción y atribuciones.

Dictar las disposiciones generales necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, dando cuenta de ellas al Ministerio de Ultramar.

Cuando el Gobierno haya dictado reglamentos u ordenes para el debido cumplimiento de las leyes, el Gobernador General se ajustará estrictamente a lo dispuesto por aquél.

Señalar los establecimientos penales en que se deben cumplir condenas, disponer el ingreso en ellos de los penados y designar el punto de confinamiento cuando los Tribunales impongan esta pena.

Suspender a los funcionarios de la Administración, cuyo nombramiento corresponda al Gobierno, dando a éste cuenta razonada, y proveer interinamente las vacantes con arreglo a las disposiciones vigentes.

Sostener con los Ministerios, de que es Delegado, la comunicación de todas las Autoridades de la Isla.

Compondrán la Junta de Autoridades el Rvdo. Obispo de La Habana o el Rvdo. Arzobispo de Santiago de Cuba, si se halla presente; el Comandante General del Apostadero; el General

Segundo Cabo; el Presidente y el Fiscal de la Audiencia de La Habana; el Intendente de Hacienda y el Director de Administración Local.

Los acuerdos de esta Junta, que se harán constar en acta duplicada, remitiendo un ejemplar al Ministerio de Ultramar, no obstarán, para que el Gobernador General resuelva, bajo su responsabilidad en todo caso, lo que crea más conveniente.

El Gobernador General no podrá hacer entrega de su cargo ni ausentarse de la Isla, sin expreso mandato del Gobierno, y será reemplazado en casos de vacante, ausencia o imposibilidad por el General Segundo Cabo en propiedad y en defecto de éste por el Comandante General del Apostadero, mientras el Gobierno no designe otra persona para la interinidad.

La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de las responsabilidades definidas en el Código Penal que se imputaren al Gobernador General.

De las responsabilidades administrativas en que el mismo incurra conocerá el Consejo de Ministros.

El Gobernador General no podrá modificar o revocar sus propias providencias, cuando hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, fuesen declaratorias de derechos o hubiesen servido de base a sentencia judicial o contencioso-administrativa o versasen sobre su propia competencia.

Base 5a. La Administración Civil y Económica de la Isla, bajo la superior dependencia del Gobernador General, quedará organizada con sujeción a las siguientes reglas:

El Gobernador General con su Secretaría, que estará a cargo de un Jefe de Administración, despachará directamente los asuntos de Política; Patronato de Indias; Conflictos Jurisdiccionales; Orden Público; Seguridad; Extranjería; Cárceles; Penales; Estadística; Personal, y Comunicación entre todas las Autoridades de la Isla y con el Gobierno y cualesquiera otros que no estén asignados a distinta competencia.

La Intendencia General de Hacienda, que estará desempeñada por un Jefe Superior de Administración, tendrá a su cargo toda la Gestión Económica, Contabilidad, Intervención y la Rendición de Cuentas del presupuesto del Estado en la Isla.

De ella dependerán inmediatamente las Secciones Administrativas de las provincias, salvas las facultades de inspección, que el Gobernador General delegue, en casos determinados, en los Gobernadores Civiles.

La Dirección General de Administración Local, desempeñada por un Jefe Superior de Administración, estará encargada de los servicios que se doten con el presupuesto formado por el Consejo de Administración, de llevar la contabilidad, rendir y depurar las cuentas anuales del mismo presupuesto, de los asuntos municipales y de cumplir todos los acuerdos de dicho Consejo de Administración.

Las plantillas de las oficinas y el procedimiento para el despacho de los asuntos se acomodarán al designio de conseguir la más extremada sencillez en los trámites y la responsabilidad individual de los funcionarios.

Las leyes determinarán los casos en que la resolución

del Jefe o Autoridad Superior en la Isla, a cuya competencia corresponda cada asunto según esta base, causará estado para dejar expedita, en su caso, la vía contencioso-administrativa.

Se podrá acudir, sin embargo, en todo tiempo, con el recurso extraordinario de queja al Gobernador General, respecto de los asuntos en que entiendan la Intendencia y la Dirección de Administración, y también al Ministerio de Ultramar, respecto de cualquiera asunto de la administración o el gobierno de la Isla, pero la queja no interrumpirá el procedimiento administrativo, ni el plazo hábil, ni el curso de la reclamación contencioso-administrativa.

La cosa juzgada en esta vía será inalterable en los términos que señala la ley especial por que se rige.

El Gobernador General y el Ministro de Ultramar, ejercitando las facultades de alta inspección, bien por su iniciativa, bien en virtud de queja, cuidarán de no interrumpir el curso ordinario de los asuntos, mientras no necesiten tomar alguna providencia para remediar o prevenir daños irreparables antes de la resolución definitiva de la Autoridad competente.

Art. 2º. El régimen del Gobierno y de la Administración Civil de la Isla de Puerto Rico se acomodará a las siguientes bases:

Base 1a. La Ley Municipal vigente en la Isla quedará modificada, en cuanto sea menester, para los fines siguientes:

Las cuestiones relativas a la constitución de los Municipios o de las Corporaciones municipales (agregación,

deslinde de términos, incidencias de elecciones, capacidad de los electos y demás análogos) serán resueltas sin ulterior recurso por la Diputación Provincial.

Serán Alcaldes los Concejales elegidos por los Ayuntamientos, mientras el Gobernador General no estime oportuno nombrar otro miembro de la Corporación. Los Alcaldes ejercerán, además de las funciones activas de la Administración, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos, la representación y delegación del Gobierno.

En todo caso de suspensión gubernativa de acuerdos municipales el asunto pasará desde luego a conocimiento del Tribunal Ordinario, si la suspensión hubiere sido acordada por razón de delincuencia, o a conocimiento de la Diputación Provincial, para que confirme o revoque la suspensión, si el motivo de ésta fuese haber recaído el acuerdo en asuntos positivamente extraños a la competencia municipal o haber infringido las leyes.

Los Delegados del Gobierno General podrán suspender los acuerdos de las Corporaciones municipales y amonestar, apercibir, multar o suspender a sus individuos cuando traspasen el límite de la competencia municipal.

Para la destitución gubernativa de Alcaldes y Concejales, en los casos que la ley determine, el Gobernador General deberá oír previa y necesariamente al Consejo de Administración.

Todo individuo de Corporación municipal que hubiese dictado providencia o votado acuerdo, lesivo para los derechos de particulares, será responsable de indemnización o de restitución

a los perjudicados ante los Tribunales, que según los casos sean competentes, mientras tal responsabilidad no quede extinguida con sujeción a las reglas ordinarias del Derecho.

En los asuntos definidos como de la privativa competencia municipal, cada Ayuntamiento gozará de toda libertad de acción compatible con la obediencia a las leyes generales y con el respeto a los derechos de los particulares.

Para que los Ayuntamientos y las Juntas de Asociados designen los recursos y arbitren los medios que prefieran en cada pueblo para cubrir los servicios y obligaciones del Municipio, se les concederá toda la latitud de facultades que sea compatible con el sistema tributario del Estado.

La Diputación Provincial podrá revisar los acuerdos de las Corporaciones municipales, relativos a formación o alteración de sus presupuestos, sin mermar las facultades discrecionales de aquéllas, cuidando de que no se autorice gasto alguno, que exceda de los recursos efectivos, y de que con preferencia a toda otra necesidad se solventen los débitos o atrasos que resultaren de un año para otro y las obligaciones que hubieren sido declaradas por ejecutoria de los Tribunales competentes. El Gobernador General y sus Delegados sólo tendrán en estos asuntos la intervención necesaria para asegurar la observancia de las leyes y la compatibilidad de los recursos municipales con los ingresos del Estado.

Las cuentas anuales de los Alcaldes, comprensivas de los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, serán publicadas en la localidad, revisadas y censuradas, con vista de las reclamaciones, por los Delegados, oyendo a los responsables acerca de los reparos, y aprobadas o desaprobadas en definitiva

por la Diputación Provincial la que declarará, en su caso, sin ulterior recurso, las responsabilidades administrativas, a reserva de las que competan a los Tribunales Ordinarios.

Quedará modificado el artículo 118 de la vigente Ley Municipal de Puerto Rico en sentido de que a los Ayuntamientos corresponde, previo concurso, el nombramiento de sus Secretarios.

Base 2a. Será reformada la Ley Provincial vigente en la Isla de Puerto Rico con los fines siguientes:

Para los efectos de los artículos 82 y 84, con arreglo al 89 de la Constitución, toda la Isla seguirá formando una sola provincia, dividida en dos regiones.

La Diputación Provincial de la Isla ejercerá en pleno todas sus funciones estará formada por doce Diputados, seis de cada región, cuyos cargos durarán cuatro años, y se renovará por mitad de dos en dos años, verificándose la elección una vez en la región de San Juan y otra en la de Ponce. Elegidos de una vez todos los Diputados al plantearse esta Ley o en caso de destitución total, la primera renovación tendrá efecto a los dos años, cesando los de la primera región.

La Diputación elegirá su Presidente, examinará y aprobará, en su caso, las actas y la capacidad legal de los electos y resolverá todas las cuestiones tocantes a su propia constitución con arreglo a las leyes. De los recursos que se entablen contra estas decisiones de la Diputación conocerá exclusivamente la Audiencia Territorial de la Isla.

El Gobernador General, oída la Junta de Autoridades,

podrá suspender la Diputación o, sin aquel requisito, decretar por sí la suspensión de sus individuos, mientras quede bastante número de ellos para deliberar:

1º. Cuando la Diputación o alguno de sus miembros traspase el límite de sus facultades legítimas con menoscabo de la autoridad gubernativa o judicial o con riesgo de la alteración del orden público.

2º. Por razón de delincuencia.

En el primer caso, dará cuenta inmediatamente al Gobierno, para que éste levante la suspensión o decrete la destitución por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha en que salga el primer correo directo para la Península, transcurridos los cuales, sin una u otra providencia, quedará alzada de derecho la suspensión. En el segundo caso, entenderán, desde luego, en el asunto los Tribunales competentes y se estará a lo que éstos resolvieren, tanto sobre la suspensión como en lo relativo a las responsabilidades definitivas.

La Diputación Provincial acordará con arreglo a las leyes y reglamentos cuanto estime conveniente para el régimen en toda la Isla de las Obras Públicas; de las Comunicaciones Telegráficas y Postales, Terrestres y Marítimas; de la Agricultura, la Industria y el Comercio; de la Inmigración y Colonización; de la Instrucción Pública; de la Beneficencia, y de la Sanidad, sin perjuicio de la alta inspección y de las facultades inherentes a la soberanía que las leyes reserven al Gobierno de la Nación. Formará y aprobará todos los años los presupuestos con suficientes recursos para dotar aquellos servicios. Ejecutará las funciones que la Ley Municipal le asigne

y cuantas le atribuyan otras leyes especiales. Censurará y, en su caso, aprobará las cuentas del presupuesto provincial, que serán rendidas todos los años por la Sección de Administración Local, declarando las responsabilidades administrativas que resultaren.

Los ingresos del presupuesto consistirán: 1º. En el producto de los bienes y las rentas, que pertenezcan a la provincia o a los establecimientos e Institutos, cuyo gobierno y dirección compete a la Diputación Provincial. 2º. En los recargos que las leyes autoricen y que la Diputación acuerde sobre las contribuciones e impuestos del Estado, cuya percepción esté encomendada a la Intendencia General de Hacienda. 3º En el contingente que la Diputación señale a los Municipios, guardando siempre entre éstos la proporción en que se halle la entidad de los respectivos presupuestos.

Al Gobernador General, como Jefe Superior de las Autoridades de la Isla, incumbirá ejecutar todos los acuerdos de la Diputación. Al efecto, como Delegada de aquél, la Sección de Administración Local en el Gobierno General tendrá a su cargo los servicios dotados con el presupuesto provincial y la contabilidad referente al mismo y será responsable de la inobservancia de las leyes y de las resoluciones legítimas de la Diputación.

Cuando el Gobernador General reputare contrario a las leyes o a los intereses generales de la Nación cualquier acuerdo de la Diputación Provincial, suspenderá su ejecución y adoptará por sí mismo interinamente las providencias que exigieren las necesidades públicas, que quedaran desatendidas por efecto de la suspensión, y, previo informe del Consejo de Administración, someterá el asunto al Ministerio de Ultramar.

Si algún acuerdo de la Diputación Provincial lesionara

derechos de particulares, los que hubiesen contribuido con su voto a adoptarlo serán los responsables de indemnización o restitución al perjudicado ante los Tribunales competentes.

Habrá en las regiones de San Juan y Ponce Delegados del Gobierno General con las categorías, calidades, dotaciones y facultades convenientes para facilitar el despacho de los asuntos administrativos y la acción gubernativa del Gobernador General.

Base 3a. El Consejo de Administración de la Isla de Puerto Rico estará constituido y funcionará del modo que a continuación se expresa:

Serán Presidente y Vocales natos:

El Gobernador General.

El Rvdo. Obispo de Puerto Rico.

El General Segundo Cabo.

El Comandante Principal de Marina.

El Presidente y el Fiscal de la Audiencia Territorial.

El Teniente Coronel del Cuerpo de Voluntarios de la capital.

Los Diputados provinciales de la región en que esté más próxima la elección ordinaria para la renovación bienal.

El Gobierno nombrará por Real Decreto otros seis Consejeros, dos de los cuales tendrán las calidades legales, la categoría y el sueldo de Jefes de Administración de la. clase, y estarán encargados de las ponencias que sean necesarias para preparar las deliberaciones del Consejo.

Tendrá éste una Secretaría con el personal indispensable para el despacho de los asuntos.

Exceptuados los dos Consejeros Ponentes, el cargo de Vocal del Consejo será honorífico y gratuito para todos los miembros.

Será requisito indispensable para desempeñar el cargo de Ponente en el Consejo de Administración haber servido un año en la Isla como Jefe de Administración.

Para ser nombrado Consejero, exceptuados los dos Ponentes, se requiere alguna de las calidades siguientes:

Ser o haber sido Presidente de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Económica de Amigos del País o de la Asociación de Agricultores.

Ser o haber sido Director del Instituto de San Juan o Decano del Colegio de Abogados de San Juan de Puerto Rico por espacio de dos años.

Figurar con cuatro años de antelación entre los cincuenta mayores contribuyentes de la Isla por impuestos sobre la propiedad inmueble o entre los cincuenta mayores contribuyentes por ejercicio de profesión, industria o comercio.

Haber sido Senador o Diputado a Cortes en dos o más Legislaturas.

Haber sido elegido dos o más veces Presidente de la Diputación o dos años Alcalde de San Juan de Puerto Rico.

Cuando lo estime oportuno podrá el Consejo llamar a su seno, por conducto del Gobernador General, para oírlos, sin que por esto tengan voto, a los Jefes de los Servicios Administrativos.

Las funciones del Consejo serán puramente consultivas. Deliberará siempre en pleno, sin perjuicio de las Comisiones que acuerde conferir a sus individuos para el esclarecimiento de los asuntos en que haya de informar.

Deberá ser oído:

1º. Sobre los presupuestos generales de gastos e ingresos, cuyos proyectos, que habrá formado la Intendencia, serán elevados todos los años dentro del mes de Marzo o antes al Ministerio de Ultramar con las modificaciones hechas por el Consejo. Aunque el Gobierno varíe el proyecto para presentarlo a las Cortes, a fin de proveer los servicios y obligaciones generales del Estado, acompañará siempre, como informe, el redactado por el Consejo.

2º. Sobre las cuentas generales que la Intendencia de Hacienda rendirá, sin excusa, todos los años dentro del semestre siguiente a cada ejercicio económico, comprensivas de los ingresos y gastos, liquidados y realizados en la administración del presupuesto general de la Isla.

3º. Sobre los asuntos del Patronato de Indias.

4º. Sobre los acuerdos de la Diputación Provincial que den ocasión a que intervenga el Gobierno con arreglo a la base 2a.

5º. Sobre las peticiones de reformas legislativas que emanen de la Diputación antes de elevarlas al Gobierno.

6º. Sobre la destitución o separación de Alcaldes y Regidores.

7º. Sobre los demás asuntos de carácter administrativo que las leyes determinen. Podrá además el Gobernador General pedir al Consejo cuantos informes considere convenientes.

Base 4a. El Gobernador General será el representante del Gobierno de la Nación en la Isla de Puerto Rico. Ejercerá como Vicerreal Patrono las facultades inherentes al Patronato de Indias. Tendrá el mando superior de todas las Fuerzas Armadas de Mar y Tierra existentes en la Isla. Será Delegado de los Ministerios de Ultramar, de Estado, de Guerra y de Marina y le serán subordinados todas las demás Autoridades de la Isla. Su nombramiento o separación emanará de la Presidencia del Consejo de Ministros con acuerdo de éste, a propuesta del Ministro de Ultramar.

Además de otras funciones que por precepto de las leyes o por especial delegación del Gobierno le correspondan, serán atribuciones suyas:

Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la Isla las Leyes, Decretos, Tratados, Convenios Internacionales y demás disposiciones emanadas del Poder Legislativo.

Publicar, cumplir y hacer que se cumplan los Decretos, Reales Ordenes y demás disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo

y que le comuniquen los Ministerios de que es Delegado. Cuando, a su juicio, las resoluciones del Gobierno de S.M. pudieran causar daños a los intereses generales de la Nación o a los especiales de la Isla, suspenderá su publicación y cumplimiento, dando cuenta de ello y de las causas que motiven la resolución, por el medio más rápido, al Ministerio respectivo.

Vigilar e inspeccionar todos los servicios públicos.

Comunicarse directamente, sobre negocios de Política Exterior con los Representantes, Agentes Diplomáticos y Cónsules de España en América.

Suspender las ejecuciones de pena capital cuando la gravedad de las circunstancias lo exigiese y la urgencia no diere lugar a solicitar y obtener de S.M. el indulto, oyendo el parecer de la Junta de Autoridades.

Suspender, con audiencia de la misma Junta y bajo su responsabilidad, cuando circunstancias extraordinarias impidan comunicarse previamente con el Gobierno, las garantías expresadas en los artículos 4º, 5º, 6º y 9º y párrafos 1º, 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución del Estado, y aplicar la legislación de Orden Público.

Como Jefe Superior de la Administración Civil en la Isla también corresponderá al Gobernador General:

Mantener la integridad de la jurisdicción administrativa con arreglo a las disposiciones que rigen en materia de jurisdicción y atribuciones.

Dictar las disposiciones generales necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, dando cuenta de ellas al Ministerio de Ultramar. Cuando el Gobierno haya dictado reglamentos u ordenes para el debido cumplimiento de las leyes, el Gobernador General se ajustará estrictamente a lo dispuesto por aquél.

Señalar los establecimientos penales en que se deban cumplir las condenas, disponer el ingreso en ellos de los penados y designar el punto de confinamiento cuando los Tribunales impongan esta pena.

Suspender a los funcionarios de la Administración, cuyo nombramiento corresponda al Gobierno, dando a éste cuenta razonada, y proveer interinamente las vacantes con arreglo a las disposiciones vigentes.

Sostener con los Ministerios, de que es Delegado, la comunicación de todas las Autoridades de la Isla.

Compondrán la Junta de Autoridades:

El Rvdo. Obispo de San Juan de Puerto Rico.

El General Segundo Cabo.

El Comandante Principal de Marina.

El Presidente y el Fiscal de la Audiencia de San Juan.

El Intendente de Hacienda.

Y el Jefe de la Sección de Administración Local.

Los acuerdos de esta Junta, que se harán constar en acta duplicada, remitiendo un ejemplar al Ministerio de Ultramar,

no obstarán, para que el Gobernador General resuelva, bajo su responsabilidad en todo caso, lo que crea más conveniente.

El Gobernador General no podrá hacer entrega de su cargo ni ausentarse de la Isla, sin expreso mandato del Gobierno, y será reemplazado en casos de vacante, ausencia o imposibilidad por el General Segundo Cabo en propiedad y en defecto de éste por el Comandante General del Apostadero, mientras el Gobierno no designe otra persona para la interinidad.

La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de las responsabilidades definidas en el Código Penal que se imputaren al Gobernador General. De las responsabilidades administrativas, en que el mismo incurra conocerá el Consejo de Ministros.

El Gobernador General no podrá modificar o revocar sus propias providencias, cuando hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, fuesen declaratorias de derechos o hubiesen servido de base a sentencia judicial o contencioso-administrativa o versasen sobre su propia competencia.

Las providencias que recaigan en materia de gobierno o en ejercicio de facultades discrecionales y las de carácter general y reglamentario podrán ser revocadas por el Gobierno, cuando éste las juzgue contrarias a las leyes o inconvenientes para el gobierno y buena administración de la Isla.

Base 5a. La Administración Civil y Económica de la Isla, bajo la superior dependencia del Gobernador General, quedará organizada con sujeción a las siguientes reglas:

El Gobernador General con su Secretaría, que estará a

cargo de un Jefe de Administración, despachará directamente los asuntos de Política; Patronato de Indias; Conflictos Jurisdiccionales; Orden Público; Seguridad; Extranjería; Cárceles; Penales; Estadística; Personal, Comunicación entre todas las Autoridades de la Isla y con el Gobierno y cualesquiera otros, que no estén asignados a distinta competencia.

La Intendencia General de Hacienda, que estará desempeñada por un Jefe Superior de Administración, tendrá a su cargo toda la Gestión Económica, la Contabilidad, la Intervención y la Rendición de Cuentas del presupuesto del Estado en la Isla. De ella dependerán inmediatamente las Secciones Administrativas de las dos regiones, salvas las facultades de inspección, que el Gobernador General delegue, en casos determinados, en los Gobernadores regionales.

La Sección de Administración Local, desempeñada por un Jefe de Administración, estará encargada de los servicios que se doten con el presupuesto provincial, de llevar la contabilidad, rendir y depurar las cuentas anuales del mismo presupuesto, de los asuntos municipales y de cumplir todos los acuerdos de la Diputación.

Las plantillas de las oficinas y el procedimiento para el despacho de los asuntos se acomodará al designio de conseguir la más extrema sencillez en los trámites y la responsabilidad individual de los funcionarios.

Las leyes determinarán los casos en que la resolución del Jefe o Autoridad Superior de la Isla, a cuya competencia corresponda cada asunto según esta base, causará estado para dejar expedita, en su caso, la vía contencioso-administrativa.

Se podrá acudir, sin embargo, en todo tiempo, con el recurso extraordinario de queja al Gobernador General, respecto de los asuntos en que entiendan la Intendencia y la Dirección de Administración, y también al Ministerio de Ultramar, respecto de cualesquiera asuntos de la administración o del gobierno de la Isla, pero la queja no interrumpirá el procedimiento administrativo, ni el plazo hábil, ni el curso de la reclamación contencioso-administrativa. La cosa juzgada en esta vía será inalterable en los términos que señala la ley especial por que se rige.

El Gobernador General y el Ministro de Ultramar, ejercitando las facultades de alta inspección, bien por su iniciativa, bien en virtud de queja, cuidarán de no interrumpir el curso ordinario de los asuntos, mientras no necesiten tomar alguna providencia para remediar o prevenir daños irreparables antes de la resolución definitiva de la Autoridad competente.

Art. 3º. El procedimiento electoral y la división de las provincias en Distritos para las elecciones provinciales se modificarán por el Gobierno en las dos Islas para facilitar a las minorías el acceso a los Ayuntamientos, a las Diputaciones y al Consejo de Administración de Cuba y para aplicar a las elecciones de Concejales, Diputados provinciales y Consejeros de la Administración, en cuanto a la inclusión y exclusión de electores y rectificación y formación anual del Censo electoral, lo dispuesto en el Real Decreto de 27 de Diciembre de 1892 sobre la reforma de la Ley Electoral para la elección de Diputados a Cortes. También se hará extensivo a toda clase de elecciones lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 17 del mencionado Real Decreto.

Se computará, como si fuesen impuestas por el Estado,

para todos los efectos electorales las cuotas contributivas que imponga el Consejo de Administración en Cuba y la Diputación Provincial en Puerto Rico, en virtud de las nuevas facultades que se les otorgan por esta Ley.

Artículo Adicional. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haga de las facultades que le conceda esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Los Consejeros de Administración que se elijan en la Isla de Cuba a la promulgación de esta Ley permanecerán en sus puestos hasta la primera renovación de las Diputaciones Provinciales, después de transcurridos dos años a contar desde la fecha de la elección.

Segunda. Desde la promulgación de esta Ley se procederá a la rectificación del Censo para las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en ambas Antillas y de Consejeros de Administración en la de Cuba, por los procedimientos que han de establecerse con arreglo al artículo 3º.

El Ministro de Ultramar dictará por Real Decreto las medidas necesarias y fijará los plazos para las diversas operaciones de la rectificación, en términos que ésta quede ultimada, antes de proceder a ninguna clase de elecciones, para el establecimiento del Consejo de Administración de Cuba o para la renovación de la mitad de las actuales Corporaciones populares.

La renovación de éstas no se diferirá por ningún concepto, en ningún caso, a no ser la de los Ayuntamientos que en el presente año, y si el Gobierno lo considerase necesario, podrá diferirse hasta la primera quincena del mes de Junio próximo.

En los años siguientes, la rectificación se hará en los términos establecidos por el Real Decreto de 27 de Diciembre de 1892 a que se refiere el artículo 3º.

Por tanto:

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así Civiles como Militares y Eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.

Dado en Palacio, a 15 de Marzo de 1895.

YO, LA REINA REGENTE.

El Ministro de Ultramar,
BUENAVENTURA DE ABARZUZA.

(Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 27 de Marzo de 1895. Apéndice 5º al número 88).

APENDICE NUMERO 15.

MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
SEÑOR CANOVAS DEL CASTILLO ANTE LOS SENADORES Y DIPUTADOS
ELECTOS EN LOS COMICIOS DE LA PRIMAVERA DE 1896.

"La cuestión que ahora nos preocupa en primer término es la de Cuba. Ella alcanza una gravedad tan extraordinaria y una importancia de tal naturaleza, que es preciso que el hombre de Estado sea Nación entera, fija la vista en sus destinos, y con absoluta conciencia de sus deberes resuelva, como resolverá, en último término, todo aquello que juntos nos toca resolver. Peligroso sería el resolverse únicamente a poner término a la guerra con la guerra sin prepararse, en ningún caso, en ninguna eventualidad, para, cuando el honor lo consienta, hacer ciertas concesiones, pero tanto o más peligroso sería, y a mi juicio, mucho más peligroso, creer que con tales o cuales concesiones se había domado a un Partido Separatista, que no busca nada de eso, que no quiere nada de eso, que lo rechaza. La conciencia de la Patria dirá ella misma, qué conducta es conveniente y cuál es posible para salvar sus intereses y con los intereses su honor y su integridad".

(FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud, Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), págs. 336-337).

APENDICE NUMERO 16.

REAL DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1897 (PUBLICADO EL DIA 30),
AMPLIANDO CON NUEVAS BASES LA LEY DE 15 DE MARZO DE 1895
SOBRE REFORMA DEL REGIMEN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE
LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO.

En vista de las razones aducidas por Mi Gobierno en la exposición que precede a Mi Real Decreto de 4 de Febrero del corriente año; oído, como en él se previene, el Consejo de Estado en pleno; de acuerdo con el parecer del Gobernador, Capitán General de la Isla de Cuba, el cual ha hecho conocer al Gobierno que por el estado de guerra pueden ya implantarse las reformas del régimen y Administración Civil de aquella Antilla en la parte occidental de la misma, con arreglo a lo consignado en el artículo 4º de la ampliación de las reformas a que se refiere Mi citado Decreto de 4 de Febrero, y de conformidad, por último, con Mi Consejo de Ministros:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino,

Vengo a decretar lo siguiente:

Artículo 1º. La Ley sobre reforma del régimen de Gobierno y Administración Civil de la Isla de Cuba de 15 de Marzo de 1895 se aplicará conforme a las siguientes Bases, que en todo lo necesario serán desenvueltas por los reglamentos:

Base I.- Los Ayuntamientos y las Diputaciones

Provinciales de la Isla de Cuba gozarán de toda la libertad de acción compatible con la obediencia a las leyes y con el respeto al derecho de los particulares.

Nombrarán y separarán libremente todos sus empleados.

Serán Presidentes de las Diputaciones Provinciales los Diputados elegidos por las mismas. En cada Diputación habrá una Comisión provincial formada por los Diputados que cada semestre elija la Diputación. La Comisión provincial elegirá su Presidente.

Serán Alcaldes y Tenientes de Alcalde los Concejales elegidos por los Ayuntamientos. Los Alcaldes ejercerán sin limitación alguna las funciones activas de la Administración municipal como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos.

La Diputación Provincial respectiva podrá suspender los acuerdos de las Corporaciones municipales y amonestar, apercibir, multar o suspender a sus individuos, cuando traspasen el límite de la competencia municipal, dando de todo cuenta para su aprobación y ejecución al Gobernador Civil. En el caso de que éste no apruebe, en todo o en parte, las resoluciones de la Corporación provincial, podrá alzarse ésta ante la respectiva Audiencia Territorial en pleno, que decidirá sin ulterior recurso.

Para cubrir los servicios y las obligaciones de los Municipios y las Diputaciones Provinciales se les concederá toda la latitud de facultades que sea compatible con el sistema tributario a que correspondan los presupuestos general y local de la Isla, entendiéndose que serán independientes los recursos del presupuesto provincial de los del municipal.

La creación de establecimientos de Instrucción Pública en las provincias corresponderá exclusivamente a las Diputaciones respectivas y en los pueblos a los Ayuntamientos.

El Gobernador General y los Gobernadores Civiles sólo tendrán en estos asuntos la intervención necesaria para asegurar la observancia de las leyes generales y la incompatibilidad con los recursos provinciales y municipales de los nuevos gastos de los respectivos presupuestos locales.

Las cuentas anuales de los Alcaldes, comprensivas de los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, serán publicadas en las localidades, revisadas, censuradas y aprobadas, en su caso, con vista de las reclamaciones, cualquiera que sea su cuantía, por la Junta municipal. Del acuerdo de la Junta se podrá recurrir ante la Comisión provincial y, en el caso de que ésta imponga responsabilidades, procederá la alzada ante la respectiva Audiencia Territorial en pleno, que decidirá sin ulterior recurso, con sujeción a las leyes administrativas y penales que sean aplicables.

Base II.- El Consejo de Administración se compondrá de treinta y cinco Consejeros. De éstos, veintiuno serán elegidos por el mismo Censo que las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos y según preceptúa el artículo 3º de la Ley de 15 de Marzo de 1895; la provincia de La Habana elegirá cinco; las de Santa Clara y Santiago de Cuba, cuatro cada una; las de Pinar del Río y Matanzas, tres cada una, y dos la de Puerto Príncipe.

Otros nueve Consejeros serán: El Rector de la Universidad de La Habana; el Presidente de la Cámara de Comercio de la capital de la Isla; el Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana; el Presidente del Círculo de

Hacendados; el Presidente de la Unión de Fabricantes de Tabacos; un miembro de los Cabildos catedrales de La Habana y de Santiago de Cuba, los cuales, constituidos en Colegios electorales, lo designarán cada cuatro años; un representante de todos los gremios de La Habana, el cual elegirá cada cuatro años los Presidentes de dichos gremios, y dos en representación de los mayores contribuyentes de la provincia de La Habana, elegidos cada cuatro años, uno, por los cien que paguen mayor cuota de contribución sobre fincas rústicas y urbanas y otro, por los cien que paguen cuota más alta de contribución sobre industrias, comercio, artes y profesiones.

Los cinco restantes Consejeros serán los Diputados a Cortes o Senadores elegidos en mayor número de elecciones generales y, en igualdad de condiciones, los de más edad.

El Gobernador General será el Presidente honorario del Consejo y presidirá sin voto las sesiones a que asista. Será Presidente electivo el Consejero que el Gobernador General designe.

El cargo de Consejero es honorífico, gratuito, sujeto a responsabilidad y sólo es renunciable por justa causa al ser aceptado. Será, asimismo, incompatible con el de Senador o Diputado a Cortes, debiendo optarse entre estos cargos o el de Consejero en el plazo de dos meses.

Podrán ser electos Consejeros todos los que teniendo aptitud para ser Diputados a Cortes lleven dos años de vecindad en la Isla.

En ningún caso podrán serlo los que exceptúa para el cargo de Diputado el artículo 19 de la Ley Provincial vigente.

Tendrá el Consejo una Secretaría con el personal indispensable para el despacho de los asuntos que esta ley le encomienda.

El nombramiento y separación de todo el personal de esta Secretaría será de su única y exclusiva competencia.

El Consejo elegirá cada semestre una Comisión de ponencias que tendrá la misión de informar acerca de todos los asuntos de la competencia del Consejo.

Esta Comisión se compondrá de cinco Consejeros, cada uno de los cuales disfrutará de una indemnización que acordará el Consejo y que no excederá de dos mil pesos por semestre.

Base III.- Las Cortes determinarán cuáles hayan de considerarse por su naturaleza gastos obligatorios inherentes a la soberanía y fijará cada tres años la cuantía de los ingresos necesarios para cubrirlos, salvo siempre el derecho de las mismas Cortes para alterar esta disposición.

El Consejo de Administración acordará cada año las contribuciones e impuestos que sean necesarios para atender a la totalidad de los gastos y cubrir los ingresos aprobados por las Cortes en el presupuesto del Estado para la Isla, salvo el derecho constitucional de estas últimas para introducir en la materia las modificaciones que considere indispensables.

El Consejo de Administración podrá renunciar las facultades que se conceden en el párrafo anterior, entendiéndose en tal caso renunciadas por la duración del ejercicio del

presupuesto, las concedidas en los números 2 y 3 del párrafo 1 de la Base IV.

Si el Consejo de Administración renunciare dichas facultades o si el 1 de Junio de cada año no hubiere acordado y votado las contribuciones e impuestos accesorios para cubrir los ingresos, con que hayan de satisfacerse los gastos obligatorios del presupuesto del Estado, suplirá su acción, en la totalidad o en la parte que resultare indotada, el Gobernador General por medio de la Intendencia de Hacienda.

El Consejo de Administración formará y aprobará también todos los años el presupuesto local con suficientes recursos para dotar los servicios que le estén encomendados. Además, comprenderá y votará en dicho presupuesto los recursos necesarios para el personal y el material de la Secretaría del Gobierno General y de la Dirección de Administración Local, de la Intendencia de Hacienda y de la Intervención de los seis Gobiernos Civiles de la Isla, declarados gastos obligatorios de dicho presupuesto.

Respecto de los gastos obligatorios del presupuesto local, tendrá en su caso el Gobernador General iguales facultades, que las expresadas en el párrafo IV de esta Base relación con el presupuesto del Estado.

Cualquier cambio o alteración que acuerde el Consejo y afecte a los servicios obligatorios del presupuesto local, si no fuese aceptado por el Gobernador General, se someterá a la aprobación definitiva del Ministro de Ultramar con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del de Estado. No recayendo resolución en el término de dos meses, quedará firme el acuerdo del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración votará el presupuesto local antes del día 1 de Junio de cada año.

Los ingresos del presupuesto local consistirán, además de los ya otorgados, en las contribuciones e impuestos que acuerde el Consejo y que no sean incompatibles con la existencia de los ingresos afectos al presupuesto del Estado.

La creación de nuevos establecimientos de enseñanza en que puedan seguirse las diversas carreras del Estado, salvo las de Guerra y Marina, corresponderá al Consejo de Administración cuando tengan aquéllos carácter general en la Isla.

El Consejo de Administración podrá acudir en reclamación o queja al Gobernador General, si hubiere lugar a ello, de los actos y de las resoluciones del Director de Administración Local.

Base IV.- Las facultades del Consejo de Administración, tocante a la materia arancelaria, serán las siguientes:

1a. Fijar, a propuesta del Intendente de Hacienda, las reglas para la administración del impuesto arancelario.

2a. Acordar, oyendo al Intendente de Hacienda o a propuesta de éste, cuanto estime conveniente respecto de cualesquiera derechos de exportación.

3a. Señalar y modificar libremente, oyendo asimismo al Intendente de Hacienda o a propuesta de él, cuanto estime conveniente respecto de cualesquiera derechos de exportación.

4a. Informar previa y necesariamente y proponer también cualquier alteración que la experiencia aconsejare, respecto de las disposiciones generales o complementarias del Arancel o de las clasificaciones, notas y repertorio del mismo.

Dichas facultades se otorgan con las siguientes limitaciones:

1a. Se mantiene para los productos nacionales, siendo de procedencia nacional directa a su importación en Cuba, la protección racional e indispensable que se determina en los derechos diferenciales, que gravarán con el carácter de mínimos y por igual a todas las procedencias extranjeras.

2a. Los derechos fiscales, cuya cuantía señale el Consejo de Administración, no han de ser diferenciales, sino gravar por igual a todas las procedencias, incluso la nacional.

3a. Los derechos que se señalaren a la exportación no serán diferenciales, sino que han de gravar por igual a la misma mercancía, cualquiera que fuese su destino. Cabrá establecer excepción a favor de la que se destinare directamente al consumo nacional, pudiendo en este sólo caso conceder el Consejo de Administración exención o rebaja diferencial de los derechos que señalare.

4a. La prohibición de exportar, si llegase a dictarse, no alcanzará a los productos que se exporten directamente para el consumo nacional.

5a. Las facultades concedidas en los números 2 y 3 del

párrafo primero de esta Base se ejercitarán por el Consejo de Administración y, en su defecto, por el Gobernador General con la obligación que determina la Base III en su párrafo segundo. Los derechos fiscales a la importación y en su caso los de exportación, que se señalen, serán inalterables durante el transcurso del ejercicio del presupuesto a que estén afectos sus rendimientos.

La forma del Arancel de importación será la que sigue: Constará de dos columnas, es a saber, la., la de los derechos fiscales que se exigirán a todas las importaciones, cualquiera que sea su procedencia, incluso la nacional y 2a., la de los derechos diferenciales que gravarán por igual a las procedencias extranjeras, constituyendo su importe la protección indispensable que se reserva a favor de lo nacional.

Los derechos fiscales de la columna general serán libremente modificados, mediante los recargos, rebajas o dispensas, que tenga por conveniente dictar el Consejo de Administración, en uso de las facultades y con las limitaciones antes expresadas.

Las Cortes señalarán el máximo de la protección que se reserva para la producción nacional. No podrá alterarse dicho máximo sin su concurso, siendo éste preciso para toda alteración de los derechos diferenciales.

El Gobierno señalará para los artículos comprendidos en las respectivas partidas del Arancel los derechos que constituyan por primera vez la columna diferencial.

Estos derechos diferenciales que no necesitarán por lo

general exceder de un veinte por ciento del valor de los artículos, no excederán del treinta y cinco por ciento de dicho valor, aun respecto de las partidas del Arancel en que hubiese de llegarse a este tipo excepcional y máximo. Para traspasar en algún artículo el límite del treinta y cinco por ciento y que pueda elevarse hasta el cuarenta por ciento se necesitará un acuerdo especial de las Cortes.

El Gobierno dispondrá la revisión de la Tabla de Valoraciones, previa información contradictoria, considerándose "ipso facto" rebajado el derecho diferencial señalado en la correspondiente partida del Arancel, en los casos en que por la limitación que establece la regla anterior y de resultados de la expresada revisión de la Tabla de Valoraciones, proceda la reducción. La Tabla de Valoraciones, una vez conformada, se considerará inalterable por espacio de diez años, salvo resolución de las Cortes.

No siendo posible la inmediata realización de todas las condiciones y trámites que en esta Base se establecen, para lo sucesivo y no conviniendo, por otra parte, aplazar la reforma de los Aranceles que actualmente rigen para Cuba, el Ministerio de Ultramar publicará y aplicará, en virtud de las disposiciones vigentes en la materia y en uso de la autorización concedida en la Ley de 28 de Junio de 1895, un Arancel interino, cuyas estructura y tarifas se ajusten a las disposiciones de esta Base, rigiendo con carácter provisional los derechos fiscales que en la columna correspondiente se señalen y cuanto se relacione con el Arancel de exportación.

Los Tratados o Convenios Comerciales que afecten a los Aranceles de la Isla de Cuba serán especiales. No se concederá en

ellos el trato de Nación más favorecida ni el beneficio de cláusula, que sea equivalente. Sobre la procedencia de las concesiones especiales, que en principio proyectare el Gobierno, será oído el Consejo de Administración antes de que se ultime el concierto para su aprobación por las Cortes.

Base V.- El Gobernador General nombrará y separará a todos los empleados de la Secretaría del Gobierno General, de la Administración Civil y Económica y de los Gobiernos Civiles, conforme a lo que dispone la Base VII.

Base VI.- La Secretaría del Gobierno General estará a cargo de un Jefe Superior de Administración.

El Intendente de Hacienda, el Interventor y el Director de Administración Local propondrán al Gobernador General el nombramiento de todos los empleados de su respectiva dependencia, con arreglo a lo que la Base VII previene, y podrán asimismo proponer su separación.

La Dirección de Comunicaciones, desempeñada por un Jefe de Administración, tendrá a su cargo los servicios que se doten por el Consejo de Administración, relativos al ramo de Comunicaciones Telegráficas y Postales, Terrestres y Marítimas, y la obligación de rendir y depurar las cuentas anuales de dicho ramo y de cumplir todos los acuerdos del Consejo que con el mismo se relacionen.

Base VII.- Todos los empleados de la Administración Civil y Económica de la Isla de Cuba, con excepción del Secretario del Gobierno General, del Intendente de Hacienda, del Interventor, del Director de Administración Local, del de

Comunicaciones y de los Gobernadores Civiles de las seis provincias, serán nombrados, cuando ocurran las vacantes, por el Gobernador General de la Isla de Cuba, conforme a las leyes vigentes o a las que se dicten en lo sucesivo entre los naturales de la misma y entre los que residan o hayan residido en ella durante dos años consecutivos.

El Gobernador General someterá al examen del Consejo las condiciones de aptitud legal de los nombrados.

En el nombramiento de los funcionarios de los Cuerpos facultativos y del ramo de Comunicaciones se observarán las disposiciones legales y reglamentarias que a ellos se refieren.

Los empleados de la Secretaría del Gobierno General y de los Gobiernos Civiles serán nombrados y separados libremente por el Gobernador General. Los empleados de la Administración Local, los de la Administración de Hacienda y de Aduanas (salvo el caso de que se crease un Cuerpo pericial) y los de la Intervención serán nombrados por el Gobernador General, a propuesta respectivamente de los Jefes de dichas dependencias. Podrán ser separados por el Gobernador General, a propuesta de dichos Jefes o directamente por la propia Autoridad, en los casos en que lo estimase necesario.

El Gobernador General podrá nombrar Inspectores de Instrucción Pública, dos para cada una de las provincias de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba y uno para cada una de las de Pinar del Río, Matanzas y Puerto Príncipe.

Igualmente podrá el Gobernador General, a propuesta de los Gobernadores Civiles, nombrar Delegados de éstos en los

términos municipales. Ejercerán los Delegados la autoridad gubernativa en las localidades y tendrán a sus órdenes las Fuerzas de Policía. En ningún caso podrán intervenir en las funciones de los Alcaldes y de los Ayuntamientos.

También podrá el Gobernador General en todos los casos, en que lo estime conveniente, a propuesta de los Gobernadores Civiles, conferir esta delegación a los Alcaldes.

Base VIII.- Las vacantes de funcionarios de la Administración de Justicia que ocurran en lo sucesivo y que correspondan a turno de libre elección se proveerán por el Ministerio de Ultramar precisamente ya en naturales de la Isla de Cuba, ya en quienes hayan residido en ella o residan. Los expedientes respectivos de los aspirantes se tramitarán por los Presidentes de las Audiencias Territoriales de la Isla y se remitirán al Ministerio por conducto del Gobernador General.

Los Jueces municipales serán nombrados en todos los términos judiciales mediante ternas formadas por votación de los Concejales de los Ayuntamientos respectivos y de los electores para Compromisarios en la elección de Senadores, ajustándose a las prescripciones de la ley para el nombramiento de Compromisarios.

La terna se elevará al Gobernador General, el cual nombrará a uno de los tres propuestos.

En los términos municipales donde haya de elegir dos o más Jueces se procederá a una votación para cada terna.

Los Jueces municipales electos deberán reunir las condiciones que exige en la Isla de Cuba la legislación vigente.

Base IX.- El Consejo de Administración respetará los actuales contratos en todos los servicios del Estado y de la Hacienda de la Isla que podrá renovar o desechar a la terminación de los mismos.

Queda facultado el Consejo de Administración para aplicar la Ley de Tesorerías de la Península, concertándose con el Banco Español de la Isla de Cuba.

Queda facultado igualmente el Consejo para contratar o encargar a dicho Banco Español la recaudación de las rentas, con la aprobación necesaria del Ministro de Ultramar.

Base X.- Un Decreto especial, de que en todo caso se dará cuenta a las Cortes, contendrá las disposiciones convenientes para el mantenimiento del orden público y para reprimir cualquier intento de separatismo que en lo sucesivo pudiera repetirse, sea cualquiera el medio que se emplee.

Art. 2º. El Gobierno reunirá en un solo Cuerpo las precedentes Bases y las de la Ley de 15 de Marzo de 1895, armonizando los textos de unos y otros, y dará en su día cuenta a las Cortes.

Las Bases así reunidas serán desarrolladas en una reglamentación posterior, que no podrá alterar su estricto sentido, limitándose sólo a relacionarlas con el resto de la

legislación vigente, según lo dispuesto en la citada Ley de 15 de Marzo de 1895.

Tan pronto como se ordene la aplicación de las Bases de la Ley de 15 de Marzo de 1895 y las de este Decreto en Cuba, regirán dichas disposiciones, en todo cuanto sea posible, como artículo de ley sin perjuicio de la reglamentación indispensable.

Art. 3º. Lo dispuesto en este Decreto, ampliación de la Ley de 15 de Marzo de 1895, se aplicará a la Isla de Puerto Rico, tan pronto como se lleve a ejecución en la parte occidental de la Isla de Cuba, en todo aquello que sea compatible con la diferencia de condiciones de la primera de dichas Antillas y de los organismos ya establecidos en la misma.

La reglamentación publicada en relación con Puerto Rico se modificará también en todo lo necesario, a fin de que sea semejante a la que forme para Cuba.

Art. 4º. Se aplicarán desde luego las Bases votadas por las Cortes y las de este Decreto suplementario en las provincias de La Habana, Matanzas, Pinar del Río y Santa Clara.

La fecha de su aplicación en las restantes provincias de la Isla de Cuba la fijará el Gobierno, tan pronto como lo permita el estado de la guerra en las mismas.

Art. 5º. El Gobierno dará las instrucciones oportunas para la inmediata ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio, a 29 de Abril de 1897.

MARIA CRISTINA.

El Presidente del Consejo

De Ministros,

Antonio Cánovas del Castillo.

FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico
(Madrid 1953), págs. 209-220).

APENDICE NUMERO 17.

DECLARACIONES DE CANOVAS EN "EL LIBERAL" SOBRE LAS POSIBILIDADES
DE INTRODUCIR REFORMAS EN ULTRAMAR (28 DE FEBRERO DE 1895).

"Apoyo decidido al Gobierno, para que restablezca el orden perturbado y a todo trance mantenga la integridad de la Patria. Este apoyo mío incondicional, para cuanto a España interesa, tenía y tiene una sólo limitación. Me consultaron sobre la suspensión de garantías constitucionales en la Isla de Cuba y asentí a ella, porque jamás deben regatearse medios legítimos al Poder, pero asentí a condición de que ese estado anormal ni significara un paso atrás en el camino emprendido por las reformas, ni creara el menor entorpecimiento a la marcha regular y ordenada de los partidos que en Cuba son fieles a la Madre Patria. Lo perentorio es restablecer allí la paz material y con ella la paz moral. Para conseguirlo estoy dispuesto a todo esfuerzo y a todo sacrificio".

(FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 311).

APENDICE NUMERO 18.

CONFIDENCIAS DE DON ANTONIO MARIA FABIE AL GENERAL
MARTINEZ CAMPOS SOBRE EL ESTADO REAL DE LA ISLA DE CUBA.
(26 DE MARZO DE 1895).

"Las noticias que poseo, procedentes de informaciones serias y muy recientes, presentan la insurrección de muy distinta manera que las referencias oficiales. Hoy en Cuba España no cuenta, más que con la adhesión de los peninsulares establecidos allí, el resto de la población, lo mismo el elemento criollo, que la raza de color, está volcado, por completo, del lado de la independencia y apoya y apoyará a los separatistas con todas sus fuerzas y recursos. Además, los Estados Unidos, siguiendo su política tradicional, ahora con Cleveland, lo mismo que antes con Fillmore y Jefferson Davies, serán el enemigo con quien tropezaremos, a la espera siempre de un momento de debilidad o de vencimiento para arrebatarnos la presa".

(FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 320).

APENDICE NUMERO 19.

COMUNICACION DEL CAPITAN GENERAL MARTINEZ CAMPOS AL MINISTRO DE ULTRAMAR DON TOMAS CASTELLANO, EXPONIENDOLE LAS REPERCUSIONES DEL AVANCE INSURRECCIONAL SOBRE LA SITUACION POLITICA CUBANA (16 DE ENERO DE 1896).

"Ayer se acentuó más el movimiento de la opinión en la mayoría del Partido Constitucional y algo en el Reformista; la Junta directiva del Partido Constitucional calmó los ánimos y resolvió, en vista del conflicto, influir en Madrid para mi separación; los reformistas han publicado artículos respetuosos para mí, pero indudablemente con la misma tendencia. En su vista, he reunido tres personalidades de cada partido y he tenido una entrevista de exposición de hechos; los conservadores y los reformistas, ante la gravedad del conflicto y porque han perdido la fe en mis procedimientos, creen que debo ser relevado; los autonomistas, por el contrario, creen que debo continuar. El Gobierno resolverá".

(MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol, I, págs. 254-255).

APENDICE NUMERO 20.

PALABRAS DE DON FRANCISCO SILVELA, COMBATIENDO LAS REFORMAS DE CANOVAS, PRONUNCIADAS EN EL MITIN CELEBRADO EN EL TEATRO ALHAMBRA DE MADRID (12 DE JUNIO DE 1897).

"Yo he podido decir, en otra parte, sin que nadie pueda con razón contestarlo, que las reformas de Cuba significan la dimisión solemne, presentada por España ante América, del derecho a gobernar las provincias de las Antillas. La guerra de Cuba respresenta una conquista de una nacionalidad por otra y significa el vencimiento de un pueblo totalmente hostil a España, y en ese caso un problema en esas condiciones, planteado a esa distancia, es un problema insoluble para cualquier Nación por poderosa que ella sea. Es preciso decirlo con claridad y con virilidad. Hay que ir a la liquidación de este asunto".

(FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 351).

APENDICE NUMERO 21.

CONVERSACION MANTENIDA ENTRE DON ANTONIO CANOVAS DEL CASTILLO Y SU EX-MINISTRO DE ULTRAMAR ANTONIO MARIA FABIE SOBRE LA SITUACION EXISTENTE EN CUBA Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR (18 DE JULIO DE 1897).

"Hice, estoy haciendo y haré todos los esfuerzos inimaginables para acabar la guerra. Por lo que toca a Filipinas estoy tranquilo. Creo que aquello acabará pronto y bien, pero lo que afecta a Cuba, cada día que pasa me convenzo más de que las cosas están peor, pues los militares no solamente no aciertan, sino que además abusan de una manera escandalosa de la situación. Los Generales, Jefes y Oficiales no se dan cuenta de que el país no puede soportar la carga y de que los Estados Unidos están a la espera de la ocasión de intervenir, y si la intervención viene sólo se resolverá con una sumisión humillante, pues no hay que pensar en la guerra con el coloso americano, imposible por parte de España. Doy de término a los militares para acabar la guerra de Cuba hasta fin de año. Cuando vuelva del descanso breve que quiero tomar, haré una reorganización del Ministerio y convocaré las Cortes para exponer mi plan. En esta jornada última, quizá, de mi vida política me tienen que acompañar aquéllos que, a semejanza de usted, estan conmigo desde 1870. No admito réplica, Cosgayón, Elduayen y usted formarán parte del Gabinete y no llevo a Pidal también, porque lo necesito en la Presidencia del Congreso. Si con el esfuerzo que juntos hagamos no ha terminado la insurrección cubana, de modo que no tenga más remedio que reconocerlo así Estados Unidos, el 31 de Diciembre daré paso al Partido Liberal, para que resuelva el problema con una solución autonómica y yo me retiraré a mi casa".

(FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), págs. 353-354).

APENDICE NUMERO 22.

NOTA OFICIOSA DEL GOBIERNO, SAGASTA SOBRE LA POLITICA
A DESARROLLAR EN CUBA (6 DE OCTUBRE DE 1897).

"Sea cualquiera el juicio que se forme sobre la posibilidad de alcanzar la paz por la sólo acción de la guerra, sin que a ello contribuya la acción política, ni la internacional, es un hecho evidente que el Ejército ha conseguido ya en el territorio cubano no sólo cuanto puede exigir el honor de las armas, sino todo lo que racionalmente cabe esperar del empleo de la fuerza en contienda de índole semejante. La pacificación ha de venir ahora de la acción política, porque, si el Ejército vence siempre y en todas partes, como que representa las energías de la Patria, todos los esfuerzos del Mundo no son bastantes para mantener la paz con el sólo empleo de las bayonetas. Sin perjuicio de lo cual, mientras quede un rebelde en armas habrá de continuarse el esfuerzo militar, hasta donde sea necesario, para lograr la sumisión completa".

(FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. III, pág. 23 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs. 337-338).

APENDICE NUMERO 23.

CONSTITUCION AUTONOMICA (1 8 9 7).

Real Decreto:

De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

TITULO PRIMERO.

Del Gobierno y Administración de las Islas de Cuba y Puerto Rico.

Artículo 1º. El Gobierno y Administración de las Islas de Cuba y Puerto Rico se regirá en adelante con arreglo a las siguientes disposiciones.

Art. 2º. El Gobierno de cada una de las Islas se compondrá de un Parlamento Insular, dividido en dos Cámaras, y de un Gobernador General, representante de la Metrópoli, que ejercerá en nombre de ésta la autoridad suprema.

TITULO SEGUNDO.

De las Cámaras Insulares.

Art. 3º. La facultad de legislar sobre los asuntos coloniales en la forma y en los términos marcados por las leyes corresponde a las Cámaras Insulares con el Gobernador General.

Consejero de Administración del antiguo Consejo de este nombre; Presidente de la Cámara de Comercio de la capital; Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana; Presidente de la Liga de Comerciantes, Industriales y Agricultores de Cuba; Decano del Ilustre Colegio de Abogados de la capital; Alcalde de La Habana o Presidente de su Diputación Provincial durante dos bienios o Presidente de una Diputación Provincial durante tres; Deán de cualquiera de los dos Cabildos catedrales. 3a. Podrán ser igualmente elegidos o designados los propietarios que figuren en la lista de los cincuenta mayores contribuyentes por territorial o en la de los cincuenta primeros por comercio, profesiones, industrias o artes.

Art. 8º. El nombramiento de los Consejeros de la Corona que se designen, se hará por Decretos especiales en los cuales se expresará siempre el título en que el nombramiento se funda.

Los Consejeros así nombrados ejercerán el cargo durante su vida.

Los Consejeros electivos se renovarán por mitad cada cinco años y en totalidad cuando el Gobernador General disuelva el Consejo de Administración.

Art. 9º. Las condiciones necesarias para ser nombrado o elegido Consejero de Administración podrán variarse por una Ley del Reino, a petición o propuesta de las Cámaras Insulares.

Art. 10 Los Consejeros de Administración no podrán admitir empleo o ascenso, que no sea de escala cerrada, título ni condecoración, mientras estuviesen abiertas las sesiones, pero

tanto el Gobierno Local como el Central podrán conferirles, dentro de sus respectivos empleos o categorías, las comisiones que exija el servicio público. Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores el cargo de Secretario del Despacho.

TITULO CUARTO.

De la Cámara de Representantes.

Art. 11. La Cámara de Representantes se compondrá de los que nombren las Juntas Electorales, en la forma que determina la ley y en la proporción de uno por cada veinticinco mil habitantes.

Art. 12. Para ser elegido Representante se requiere ser español, de estado seglar, mayor de edad, gozar de todos los derechos civiles, ser nacido en la Isla de Cuba o llevar cuatro años de residencia en ella y no hallarse procesado criminalmente.

Art. 13. Los Representantes serán elegidos por cinco años y podrán ser reelegidos indefinidamente.

La Cámara Insular determinará con qué clase de funciones es incompatible el cargo de Representante y los casos de reelección.

Art. 14. Los Representantes a quienes el Gobierno Central o el Local confieran pensión, empleo o ascenso, que no sea de escala cerrada, comisión con sueldo, honores o condecoraciones cesarán en su cargo sin necesidad de declaración alguna, si dentro de los quince días inmediatos a su nombramiento no participan a la Cámara la renuncia de la gracia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a los Representantes que fueren nombrados Secretarios del Despacho.

TITULO QUINTO.

De la Manera de Funcionar las Cámaras Insulares
y de las Relaciones entre Ambas.

Art. 15. Las Cámaras se reúnen todos los años. Corresponde al Rey y en su nombre al Gobernador General convocarlas, suspender, cerrar sus sesiones y disolver separada o simultáneamente la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración con la obligación de convocarlas de nuevo o de renovarlas dentro de tres meses.

Art. 16. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores formará su respectivo reglamento y examinará las calidades de los individuos que los componen, así como la legalidad de su elección. Mientras la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración no hayan aprobado su reglamento, se regirán por el del Congreso de los Diputados o por el del Senado, respectivamente.

Art. 17. Ambas Cámaras nombrarán su Presidente, Vicepresidente y Secretarios.

Art. 18. No podrá estar reunido uno de los dos Cuerpos Colegisladores sin que también lo esté el otro.

Art. 19. Las Cámaras Insulares no pueden deliberar juntas, ni en presencia del Gobernador General. Sus sesiones serán públicas, aun cuando en los casos que exijan reserva podrá

cada una celebrar sesión secreta.

Art. 20. Al Gobernador General, por medio de los Secretarios del Despacho, corresponde, lo mismo que a cada una de las dos Cámaras, la iniciativa y proposición de los Estatutos Coloniales.

Art. 21. Los Estatutos Coloniales sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero a la Cámara de Representantes.

Art. 22. Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman por pluralidad de votos, pero para votar acuerdos de carácter legislativo se requiere la presencia de la mitad más uno del número total de individuos que lo componen. Bastará, sin embargo, para deliberar la presencia de la tercera parte de los miembros.

Art. 23. Para que una resolución se entienda votada por el Parlamento Insular será preciso que haya sido aprobada en iguales términos por la Cámara de Representantes y por el Consejo de Administración.

Art. 24. Los Estatutos Coloniales, una vez aprobados en la forma descrita en el artículo anterior, se presentarán al Gobernador General por las Mesas de las Cámaras respectivas para su sanción y promulgación.

Art. 25. Los Consejeros de Administración y los individuos de la Cámara de Representantes son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo.

Art. 26. Los Consejeros de Administración no podrán ser procesados, ni arrestados sin previa resolución del Consejo, sino cuando sean hallados "in fraganti" o cuando aquél no esté reunido, pero en todo caso se dará cuenta a este Cuerpo lo más pronto posible, para que determine lo que corresponda.

Tampoco podrán los Representantes ser procesados, ni arrestados durante las sesiones sin permiso de la Cámara, a no ser hallados "in fraganti", pero en este caso y en el de ser procesados o arrestados, cuando estuvieren cerradas las Cámaras, se dará cuenta lo más pronto posible a la de Representantes para su conocimiento y resolución. La Audiencia Pretorial de La Habana conocerá de las causas criminales contra los Consejeros y Representantes en los casos y en la forma que determinen los Estatutos Coloniales.

Art. 27. Las garantías consignadas en el artículo anterior no se aplicarán a los casos en que el Consejero o Representante se declare autor de los artículos, libros, folletos o impresos de cualquier clase, en los cuales se invite o provoque a la sedición militar, se injurie o calumnie al Gobernador General o se ataque la integridad nacional.

Art. 28. Las relaciones entre las Cámaras se regularán, mientras otra cosa no se disponga, por la Ley de Relaciones entre ambos Cuerpos Colegisladores de 19 de Julio de 1837.

Art. 29. Además de la potestad legislativa colonial, corresponde a las Cámaras Insulares:

1º. Recibir al Gobernador General el juramento de guardar la Constitución y las leyes que garantizan la autonomía de la Colonia.

2º. Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho, los cuales, cuando sean acusados por la Cámara de Representantes, serán juzgados por el Consejo de Administración.

3º. Dirigirse al Gobierno Central por medio del Gobernador General para proponerle la derogación o modificación de las leyes del Reino vigentes, para invitarle a presentar proyectos de ley sobre determinados asuntos o para pedirle resoluciones de carácter ejecutivo en los que interesen a la Colonia.

Art. 30. En todos los casos en que, a juicio del Gobernador General, los intereses nacionales puedan ser afectados por los Estatutos Coloniales precederá a la presentación de los proyectos de iniciativa ministerial su comunicación al Gobierno Central. Si el proyecto naciera de la iniciativa parlamentaria, el Gobierno Colonial reclamará el aplazamiento de la discusión hasta que el Gobierno Central haya manifestado su juicio.

En ambos casos, la correspondencia que mediaré entre los dos Gobiernos se comunicará a las Cámaras y se publicará en la "Gaceta".

Art. 31. Los conflictos de jurisdicción entre las diferentes Asambleas Municipales, Provinciales e Insular o con el Poder Ejecutivo, que por su índole no fueran referidas al Gobierno Central, se someterán a los Tribunales de Justicia con arreglo a las disposiciones del presente Decreto.

TITULO SEXTO.

De las Facultades del Parlamento Insular.

Art. 32. Las Cámaras Insulares tienen la facultad para acordar sobre todos aquellos puntos que no hayan sido especial y taxativamente reservados a las Cortes del Reino o al Gobierno Central, según el presente Decreto o lo que en adelante se dispusiera con arreglo a lo preceptuado en el artículo 2º adicional.

En este sentido y sin que la enumeración suponga limitación de sus facultades, les corresponde estatuir sobre cuantes materias y asuntos incumben a los Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda y Fomento en sus tres aspectos de Obras Públicas, Instrucción y Agricultura.

Les corresponde además el conocimiento privativo de todos aquellos asuntos de índole puramente local que afecten principalmente al territorio colonial y en este sentido podrán estatuir sobre la Organización Administrativa; sobre División Territorial, Provincial, Municipal o Judicial; sobre Sanidad Marítima o Terrestre; sobre crédito público y Bancos, y sobre el sistema monetario.

Estas facultades se entienden sin perjuicio de las que sobre las mismas materias correspondan, según las leyes, al Poder Ejecutivo Colonial.

Art. 33. Corresponde igualmente al Parlamento Insular formar los reglamentos de aquellas leyes votadas por las Cortes del Reino, que expresamente se les confíen. En este sentido, le compete muy especialmente, y podrá hacerlo desde su primera reunión, estatuir sobre el procedimiento electoral, formación del

Censo, calificación de los electores y manera de ejercitar el sufragio, pero sin que sus disposiciones puedan afectar al derecho del ciudadano, según le está reconocido por la Ley Electoral.

Art. 34. Aun cuando las leyes relativas a la Administración de Justicia y de organización de los Tribunales son de carácter general, y obligatorias por tanto para la Colonia, el Parlamento Colonial podrá, con sujeción a ellas, dictar las reglas y proponer al Gobierno Central las medidas que faciliten el ingreso, conservación y ascenso en los Tribunales Locales de los naturales de la Isla o de los que en ella ejerzan la profesión de abogados.

Al Gobernador General en Consejo le corresponden las facultades que, respecto del nombramiento de los funcionarios, subalternos y auxiliares del orden judicial y demás asuntos con la Administración de Justicia relacionados, ejerce hoy el Ministro de Ultramar, en cuanto a la Isla de Cuba se refiere.

Art. 35. Es facultad exclusiva del Parlamento Insular la formación del presupuesto local, tanto de gastos como de ingresos y del de ingresos necesarios para cubrir la parte que a la Isla corresponda en el presupuesto nacional.

Al efecto, el Gobernador General presentará a las Cámaras, antes del mes de Enero de cada año, el presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente, dividido en dos partes.

La primera, contendrá los ingresos necesarios para cubrir los gastos de la soberanía; la segunda, los gastos e ingresos propios de la Administración Colonial.

Ninguna de las Cámaras podrá pasar a deliberar sobre el presupuesto colonial sin haber votado definitivamente la parte referente a los gastos de soberanía.

Art. 36. A las Cortes del Reino corresponde determinar cuáles hayan de considerarse por su naturaleza gastos obligatorios inherentes a la soberanía y fijar además cada tres años su cuantía y los ingresos necesarios para cubrirlos, salvo siempre el derecho de las mismas Cortes para alterar esta disposición.

Art. 37. La negociación de los Tratados de Comercio que afecten a la Isla de Cuba, bien se deban a la iniciativa del Gobierno Insular, bien a la del Gobierno Central, se llevará siempre por éste, auxiliado en ambos casos por Delegados especiales debidamente autorizados por el Gobernador Colonial, cuya conformidad con lo convenido se hará constar al presentarlos a las Cortes del Reino.

Estos Tratados, si fueren aprobados por éstas, se publicarán como Leyes del Reino y como tales regirán en el territorio insular.

Art. 38. Los Tratados de Comercio, en cuyas negociaciones no hubiese intervenido el Gobierno Insular, se le comunicarán en cuanto fueren Leyes del Reino, a fin de que pueda, en un periodo de tres meses, declarar si desea o no adherirse a sus estipulaciones. En caso afirmativo, el Gobernador General lo publicará en la "Gaceta" como Estatuto Colonial.

Art. 39. Corresponderá también al Parlamento Insular la formación del Arancel y la designación de los derechos que hayan

de pagar las mercancías, tanto a su importación en el territorio insular como a la exportación del mismo.

Art. 40. Como transición del régimen actual al que ahora se establece y sin perjuicio de lo que puedan convenir en su día los dos Gobiernos, las relaciones mercantiles entre la Península y la Isla de Cuba se regirán por las siguientes disposiciones:

1a. Ningún derecho, tenga o no carácter fiscal y establézcase para la importación o la exportación, podrá ser diferencial en perjuicio de la producción insular o peninsular.

2a. Se formará por los dos Gobiernos una lista de artículos de procedencia nacional directa, a los cuales se les señalará, de común acuerdo, un derecho diferencial sobre sus similares de procedencia extranjera.

En otra lista análoga, formada por igual procedimiento, se determinarán los productos de procedencia insular directa, que habrán de recibir trato privilegiado a su entrada en la Península, y el tipo de los derechos diferenciales. Este derecho diferencial en ningún caso excederá para ambas procedencias del treinta y cinco por ciento.

Si en la formación de ambas listas y en la fijación de los derechos protectores hubiera conformidad entre los dos Gobiernos, las listas se considerarán definitivas y se pondrán desde luego en vigor. Si hubiere discrepancia se someterá la resolución del punto litigioso a una Comisión de Diputados del Reino, formada por iguales partes de cubanos y peninsulares. Esta

Comisión nombrará su Presidente. Si sobre su nombramiento no se llegara a un acuerdo presidirá el de más edad. El Presidente tendrá voto de calidad.

3a. Las Tablas de las Valoraciones relativas a los artículos enumerados en las dos listas mencionadas en el número anterior se fijarán de común acuerdo y se revisarán contradictoriamente cada dos años. Las modificaciones que en su vista proceda hacer en los derechos arancelarios se llevarán, desde luego, a cabo por los respectivos Gobiernos.

TITULO SEPTIMO.

Del Gobernador General.

Art. 41. El Gobierno Supremo de la Colonia se ejercerá por un Gobernador General, nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo de Ministros. En este concepto ejercerá como Vice-Real Patrono las facultades inherentes al Patronato de Indias; tendrá el mando superior de todas las Fuerzas Armadas de Mar y Tierra existentes en la Isla; será Delegado de los Ministerios de Estado, Guerra, Marina y Ultramar; le estarán subordinadas todas las demás Autoridades de la Isla, y será responsable de la conservación del orden y de la seguridad de la Colonia.

El Gobernador General, antes de hacerse cargo de su destino, prestará en manos del Rey el juramento de cumplirlo fiel y lealmente.

Art. 42. El Gobernador General, como representante de la Nación, ejercerá por sí y auxiliado por su Secretario todas las funciones indicadas en el artículo anterior y las que puedan

corresponderle como Delegado directo del Rey en los asuntos de carácter nacional.

Corresponde al Gobernador General como representante de la Metrópoli:

1º. Designar libremente los empleados de su Secretaría.

2º. Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la Isla las Leyes, Decretos, Tratados, Convenios Internacionales y demás disposiciones emanadas del Poder Legislativo, así como los Decretos, Reales Ordenes y demás disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo y que le fueran comunicados por los Ministerios de que es Delegado. Cuando a su juicio y al de sus Secretarios del Despacho las resoluciones del Gobierno de Su Majestad pudieran causar daños a los intereses generales de la Nación o a los especiales de la Isla, suspenderá su publicación y cumplimiento, dando cuenta de ello y de las causas que motiven su resolución al Ministerio respectivo.

3º. Ejercer la gracia del indulto en nombre del Rey, dentro de los límites que especialmente se le hayan señalado en sus instrucciones, y suspender las ejecuciones de pena capital, cuando la gravedad de las circunstancias lo exigiese o la urgencia no diere lugar a solicitar y obtener de Su Majestad el indulto, oyendo en todo caso el parecer de sus Secretarios del Despacho.

4º. Suspender las garantías expresadas en los artículos 4º, 5º, 6º y 9º y párrafos 1º, 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución del Estado, aplicar la legislación de Orden Público y tomar cuantas medidas crea necesarias para conservar la paz en

el interior y la seguridad en el exterior del territorio que le está confiado, oyendo previamente al Consejo de Secretarios.

5º. Cuidar de que en la Colonia se administre pronta y cumplidamente la justicia, que se administrará siempre en nombre del Rey.

6º. Comunicar directamente sobre negocios de Política Exterior con los Representantes, Agentes Diplomáticos y Cónsules de España en América.

La correspondencia de este género se comunicará íntegra y simultaneamente al Ministro de Estado.

Art. 43. Corresponden al Gobernador General, como Autoridad Superior de la Colonia y Jefe de la Administración:

1º. Cuidar de que sean respetados y amparados los derechos, facultades y privilegios reconocidos o que en adelante se reconozcan a la Administración Colonial.

2º. Sancionar y publicar los acuerdos del Parlamento Insular, los cuales les serán sometidos respectivamente por el Presidente y Secretarios de las Cámaras respectivas.

Cuando el Gobernador General entienda que un acuerdo del Parlamento Insular extralimita sus facultades, atenta a los derechos de los ciudadanos, reconocidos en el Título I de la Constitución, o a las garantías que para su ejercicio le han señalado las leyes o compromete los intereses de la Colonia o del

Estado, remitirá el acuerdo al Consejo de Ministros del Reino, el cual, en un periodo que no excederá de dos meses, lo aprobará o devolverá al Gobernador General, exponiendo los motivos que tenga para oponerse a su sanción y promulgación. El Parlamento Insular, en vista de estas razones, podrá volver a deliberar sobre el asunto y modificarlo, si así lo estima conveniente, sin necesidad de proposición especial. Si transcurrieran dos meses, sin que el Gobierno Central hubiera manifestado opinión sobre un acuerdo de las Cámaras, que le hubiere sido transmitido por el Gobernador General, éste procederá a su sanción y promulgación.

3º. Nombrar, suspender y separar a los empleados de la Administración Colonial, a propuesta de los respectivos Secretarios del Despacho y con sujeción a las leyes.

4º. Nombrar y separar libremente los Secretarios del Despacho.

Art. 44. Ningún mandato del Gobernador General, en virtud de su carácter de Representante y Jefe de la Colonia, puede llevarse a efecto si no está refrendado por un Secretario del Despacho, que por este sólo hecho se hace de él responsable.

Art. 45. Las Secretarías del Despacho serán cinco:
Gracia y Justicia y Gobernación.
Hacienda.
Instrucción Pública.
Obras Públicas y Comunicaciones.
Agricultura, Industria y Comercio.

La Presidencia corresponderá al Secretario que designe el Gobernador General, el cual podrá nombrar un Presidente sin Departamento determinado.

El aumento o disminución de las Secretarías del Despacho, así como la determinación de los asuntos, que a cada una corresponde, pertenecen al Parlamento Insular.

Art. 46. Los Secretarios del Despacho pueden ser individuos de la Cámara de Representantes o del Consejo de Administración y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos, pero sólo tendrán voto en aquél a que pertenezcan.

Art. 47. Los Secretarios del Despacho serán responsables de sus actos ante las Cámaras Insulares.

Art. 48. El Gobernador General no podrá modificar o revocar sus propias providencias, cuando hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, fueren declaratorias de derechos, hubieren servido de base a sentencia judicial o contencioso-administrativa o versasen sobre su propia competencia.

Art. 49. El Gobernador General no podrá hacer entrega de su cargo ni ausentarse de la Isla sin expreso mandato del Gobierno. En casos de ausencia de la capital que le impidieren despachar los asuntos e imposibilidad de ejercerlo, podrá designar la persona o personas que hubieren de sustituirlo, si el Gobierno no lo hubiese hecho de antemano o si en sus instrucciones no estuviera previsto el modo de hacer la sustitución.

Art. 50. El Tribunal Supremo conocerá en única instancia de las responsabilidades definidas en el Código Penal que se imputaren al Gobernador General.

De las responsabilidades administrativas en que incurra conocerá el Consejo de Ministros.

Art. 51. El Gobernador General, a pesar de lo dispuesto en los diferentes artículos de este Decreto, podrá obrar por sí y bajo su responsabilidad, sin audiencia de sus Secretarios del Despacho, en los siguientes casos:

1º. Cuando se trate de la remisión al Gobierno de los acuerdos de las Cámara Insulares, especialmente cuando entienda que en ellos se atenta a los derechos garantizados en el Título I de la Constitución de la Monarquía o a las garantías que para su ejercicio han señalado las leyes.

2º. Cuando haya de ponerse en ejecución la Ley de Orden Público, sobre todo, si no hubiere tiempo o manera de comunicarlo al Gobierno Central.

3º. Cuando se trate de la ejecución y cumplimiento de Leyes del Reino sancionadas por Su Majestad y extensivas a todo el territorio español o al de su gobierno.

Una Ley determinará el procedimiento y los medios de acción que en estos casos podrá emplear el Gobernador General.

TITULO OCTAVO.

Del Régimen Municipal y Provincial.

Art. 52. La organización municipal es obligatoria en todo grupo de población superior a mil habitantes.

Los que no lleguen a esa cifra podrán organizar los servicios de carácter común por convenios especiales.

Todo Municipio legalmente constituido estará facultado para estatuir sobre la Instrucción Pública; las Vías Terrestres, Fluviales o Marítimas; la Sanidad Local, y los presupuestos municipales, y para nombrar y separar libremente a sus empleados.

Art. 53. Al frente de cada provincia habrá una Diputación, elegida en la forma que determinan los Estatutos Coloniales y compuesta de un número de individuos proporcional a su población.

Art. 54. Las Diputaciones Provinciales son autónomas en todo lo referente a la creación y dotación de establecimientos de Instrucción Pública; Servicios de Beneficencia; Vías Provinciales Terrestres, Fluviales o Marítimas; formación de sus presupuestos, y nombramientos y separación de sus empleados.

Art. 55. Tanto los Municipios como las Provincias podrán establecer libremente los ingresos necesarios para cubrir sus presupuestos sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario general de la Isla. Los recursos del presupuesto provincial serán independientes de los del municipal.

Art. 56. Serán Alcaldes y Tenientes de Alcalde los Concejales elegidos por los Ayuntamientos.

Art. 57. Los Alcaldes ejercerán, sin limitación alguna, las funciones activas de la Administración municipal, como

ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos y representantes suyos.

Art. 58. Tanto Concejales como Diputados provinciales serán responsables civilmente de los daños y perjuicios causados por sus actos. Esta responsabilidad será exigible ante los Tribunales Ordinarios.

Art. 59. Las Diputaciones Provinciales nombrarán libremente sus Presidentes.

Art. 60. Las elecciones de Concejales y Diputados provinciales se harán de manera que las minorías tengan en ellas su legítima representación.

Art. 61. La Ley Provincial y Municipal vigente en Cuba seguirá rigiendo, en cuanto no se oponga a las disposiciones del presente Decreto, mientras el Parlamento Colonial no estatuya sobre estas materias.

Art. 62. Ningún Estatuto Colonial podrá privar a los Municipios ni a las Diputaciones de las facultades reconocidas en los artículos anteriores.

TITULO NOVENO.

De las Garantías para el Cumplimiento
de la Constitución Colonial.

Art. 63. Todo ciudadano podrá acudir a los Tribunales cuando entienda que sus derechos han sido violados o sus

intereses perjudicados por los acuerdos de un Municipio o de una Diputación Provincial.

El Ministerio Fiscal, si a ello fuere requerido por los agentes del Poder Ejecutivo Colonial, perseguirá igualmente ante los Tribunales las infracciones de la ley o las extralimitaciones de facultades cometidas por los Ayuntamientos y Diputaciones.

Art. 64. En los casos a que se refiere el artículo anterior serán Tribunales competentes, para las reclamaciones contra los Municipios, la Audiencia del Territorio, y para las reclamaciones contra las Diputaciones Provinciales, la Audiencia Pretorial de La Habana.

Dichos Tribunales, cuando se trate de extralimitación de facultades de las referidas Corporaciones, resolverán en Tribunal Pleno. De las resoluciones de las Audiencias Territoriales podrá apelarse a la Audiencia Pretorial de La Habana y de las de ésta al Tribunal Supremo del Reino.

Art. 65. Las facultades concedidas en el artículo 62 a todo ciudadano se podrán también ejercer colectivamente por medio de la acción pública, nombrando al efecto apoderado o representante.

Art. 66. Sin perjuicio de las facultades que le están otorgadas en el Título V, el Gobernador General, cuando lo estime conveniente, podrá acudir en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo Colonial ante la Audiencia Pretorial de La Habana, para que ésta dirima los conflictos de jurisdicción entre el Poder Ejecutivo Colonial y sus Cámaras Legislativas.

Art. 67. Si surgiera alguna cuestión de jurisdicción entre el Parlamento Insular y el Gobernador General, en su calidad de Representante del Poder Central, que a petición del primero no fuera sometida al Consejo de Ministros del Reino, cada una de las dos partes podrá someterla a la resolución del Tribunal Supremo del Reino que resolverá en pleno y en una sola instancia.

Art. 68. Las resoluciones que recaigan en los casos previstos en los artículos anteriores se publicarán en la Colección de Estatutos Coloniales y formarán parte de la Legislación Insular.

Art. 69. Todo acuerdo municipal que tenga por objeto la contratación de empréstitos o de deudas municipales carecerá de fuerza ejecutiva, si no fuere aprobado por la mayoría de los vecinos, cuando así lo hubiere pedido la tercera parte de los Concejales.

Un Estatuto especial determinará la cuantía del empréstito o de la deuda que según el número de vecinos que compongan el Ayuntamiento será necesario para que tenga lugar el "referéndum".

Art. 70. Todas las disposiciones de carácter legal que emanen del Parlamento Colonial o de los Tribunales se compilarán con el nombre de Estatutos Coloniales en una Colección Legislativa, cuya formación y publicación estará confiada al Gobernador General como Jefe del Poder Colonial.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Artículo 1º A fin de llevar a cabo con la mayor rapidez posible y con la menor interrupción de los servicios la transición del sistema actual al que se crea por este Decreto, el Gobernador General, cuando crea llegado el momento oportuno, previa consulta al Gobierno Central, nombrará los Secretarios del Despacho a que se refiere el art. 45 y con ellos constituirá el Gobierno interior de la Isla de Cuba hasta la constitución de las Cámaras Insulares. Los Secretarios nombrados cesarán en sus cargos al prestar el Gobernador General juramento ante las Cámaras Insulares, procediendo el Gobernador acto continuo a sustituirlos con los que, a su juicio, representen de la manera más completa las mayorías de la Cámara de Representantes y del Consejo de Administración.

Art. 2º. La manera de hacer frente a los gastos que origine la Deuda que en la actualidad pesa sobre los Tesoros español y cubano y la que se hubiere contraído hasta la terminación de la guerra, será objeto de una ley en la cual se determinará la parte que corresponda a cada uno de los dos Tesoros y los medios especiales para satisfacer sus intereses y amortización y reintegrar en su caso el capital.

Hasta que las Cortes del Reino resuelvan ese punto no se alterarán las condiciones en que hayan sido contratadas las referidas deudas, ni en el pago de los intereses y amortización, ni en las garantías de que disfruten, ni en la forma con que hoy se hacen los pagos.

Una vez hecha la distribución por las Cortes, corresponderá a cada uno de los Tesoros el pago de la parte que respectivamente se le haya asignado.

En ninguna eventualidad dejarán de ser escrupulosamente respetados los compromisos contraídos con los acreedores bajo la fe de la Nación española.

Dado en Palacio, a 25 de Noviembre de 1897.

MARIA CRISTINA.

El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta.

(LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), págs. 477-497).

APENDICE NUMERO 24.

REAL DECRETO
DE 8 DE MARZO DE 1898, MODIFICANDO
LA CONSTITUCION AUTONOMICA.

Gobierno General de la Isla de Cuba
Secretaría.

Por la Presidencia del Consejo de Ministros se dice a este Gobierno General, con fecha de 8 del corriente, bajo el número 389, la Real Orden siguiente:

Excmo. Sr.: El Rey q. D. g. y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha servido expedir el siguiente Decreto:

De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, vengo a decretar lo siguiente:

Artículo 1º. El artículo sexto del Real Decreto de 25 de Noviembre de 1897 sobre el régimen autonómico de la Isla de Cuba quedará redactado en los términos siguientes:

Artículo 6º. Para tomar asiento en el Consejo de Administración se requiere: ser español; haber cumplido treinta y cinco años; haber nacido en la Isla o llevar en ella cuatro años de residencia constante; no estar procesado criminalmente; hallarse en la plenitud de los derechos políticos; no tener sus bienes intervenidos y no tener participación en contratos con el

Gobierno Central o con el de la Isla. Los accionistas de las sociedades anónimas no se considerarán contratistas del Gobierno, aun cuando lo sean las sociedades a que pertenezcan.

Art. 2º. El artículo séptimo del propio Real Decreto de 25 de Noviembre se considerará redactado de la manera siguiente:

Artículo 7º. Podrán ser elegidos o designados Consejeros de Administración los que además de las condiciones generales señaladas en el artículo anterior tengan algunas de las especiales siguientes: 1a. Poseer con dos años de antelación renta propia anual de dos mil pesos procedentes de bienes inmuebles que radiquen en la Isla. 2a. Ser o haber sido Senador del Reino o tener las condiciones, que para ejercer dicho cargo señala el Título III de la Constitución; Presidente del Consejo de Secretarios del Despacho o Secretario del Despacho; Presidente o Fiscal de la Audiencia de La Habana; Rector de la Universidad de la misma; Consejero de Administración del antiguo Consejo de ese nombre; Presidente de la Cámara de Comercio de la capital; Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana; Presidente del Círculo de Hacendados; Presidente de la Unión de Fabricantes de Tabacos; Presidente de la Liga de Comerciantes, Industriales y Agricultores de Cuba; Presidente de la Academia de Ciencias de La Habana; Decano del Ilustre Colegio de Abogados de la capital; Alcalde de La Habana si el Ayuntamiento procediere de elección popular; Presidente de la Diputación Provincial si ésta fuera de elección popular; Deán de cualquiera de los Cabildos catedrales. 3a. Podrán ser igualmente elegidos o designados los que figuren en las listas de los cincuenta mayores contribuyentes por territorial o en la de los cincuenta primeros por comercio, profesiones, industria y artes.

Art. 3º. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente Decreto.

Dado en Palacio, a ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho.

María Cristina.- El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

De Real Orden lo comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Y acordado por S. E. su cumplimiento en 24 del actual, de su orden se publica en la "Gaceta" de La Habana para general conocimiento.

Habana, 26 de Marzo de 1898.- El Secretario del Gobierno General, José Congosto.

LAZCANO Y MAZON, ANDRES MARIA: Las Constituciones de Cuba (Madrid 1952), págs. 497-499).

APENDICE NUMERO 25.

EXTRACTO DE LA NOTA ENVIADA POR EL SECRETARIO DE ESTADO
JOHN QUINCY ADAMS AL MINISTRO NORTEAMERICANO EN MADRID
HUGO NELSON (28 DE ABRIL DE 1823).

"Estas Islas son, por su posición local, apéndices naturales del Continente norteamericano y una de ellas, la Isla de Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser, por una multitud de razones, de trascendental importancia para los intereses, políticos y comerciales de nuestra Unión. Cuando se echa una mirada hacia el curso que tomarán probablemente los acontecimientos en los próximos cincuenta años, casi es imposible resistir la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra República Federal será indispensable para la constitución de la Unión y para el mantenimiento de su integridad. Es obvio que para ese acontecimiento no estamos todavía preparados y que a primera vista se presentan numerosas y formidables objeciones contra la extensión de nuestros dominios más allá del mar... Pero hay leyes de gravitación política, como las hay de gravitación física, y así como una fruta separada de su árbol por la fuerza del viento no puede, aunque quiera, dejar de caer al suelo, así Cuba, una vez separada de España y rota la conexión artificial que la liga a ella, será incapaz de sostenerse por sí sola y tendrá que gravitar necesariamente hacia la Unión norteamericana y hacia ella exclusivamente, mientras que a la Unión misma, en virtud de la propia ley, le será imposible dejar de admitirla en su seno".

(GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 151-153; PORTELL VILA, HERMINIO: Historia de Cuba en sus Relaciones con los Estados Unidos y España (La Habana 1938), Vol. I, págs. 225 y sigs. y RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: Estudio Histórico sobre el Origen, Desenvolvimiento y

Manifestaciones Prácticas de la Idea de la Anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de América (La Habana 1900), págs. 57-60).

APENDICE NUMERO 26.

MANIFIESTO DE OSTENDE (AIX-LA-CHAPELLE,

15 DE OCTUBRE DE 1854).

Señor:

Los firmantes, de acuerdo con el deseo expresado por el Presidente en los distintos despachos confidenciales recibidos respectivamente, y a ese efecto, nos hemos reunido en conferencia, primero en Ostende, Bélgica, el 9, 10 y 11 del corriente mes y luego en Aix-la Chapelle, Prusia, en los días siguientes hasta el de la fecha.

Ha habido un intercambio completo y sin reservas de nuestros puntos de vista y sentimientos y nos alegra informarle que el resultado ha sido una feliz coincidencia de opiniones en los importantes y graves asuntos que sometiera a nuestra consideración.

Hemos llegado a la conclusión y estamos totalmente convencidos de ella de que el Gobierno de los Estados Unidos debiera hacer un esfuerzo inmediato y enérgico por comprar la Isla de Cuba a España a cualquier precio que pueda ser obtenida, no excediendo la suma de () dólares.

La propuesta debiera, en nuestra opinión, ser hecha de manera tal que pueda ser presentada por medio de las fórmulas diplomáticas necesarias a las Supremas Cortes Constituyentes que están por reunirse en asamblea. Acerca de esta cuestión trascendental, en la que los pueblos de España y de los Estados Unidos están tan profundamente interesados, todos nuestros

procedimientos deberán ser abiertos, francos y públicos. Deberán ser de un carácter tal que puedan desafiar la aprobación del Mundo.

Creemos firmemente que, debido al desarrollo de los acontecimientos, ha llegado la hora en que tanto los intereses de España como los de los Estados Unidos se cifran en la venta de la Isla y que la transacción será igualmente honrosa para ambas Naciones.

En estas circunstancias, no podemos anticipar un fracaso, a no ser a causa de las malignas influencias de Potencias Extranjeras que no tienen el menor derecho a interferir en este asunto.

Procedemos a enumerar algunas de las razones que nos han llevado a la antedicha conclusión; para obtener la necesaria claridad las especificaremos en dos grupos distintos:

1º. Los Estados Unidos debieran, de ser posible, comprar Cuba lo antes posible.

2º. Existe una gran probabilidad de que el Gobierno y las Cortes de España se muestren dispuestos a venderla, ya que la transacción promovería los mejores y más altos intereses del pueblo español.

Luego:

1º. Cuanquier persona pensante debe de tener en claro que, debido a la peculiaridad de su posición geográfica y a las

consideraciones que de ella puedan deducirse, Cuba es tan necesaria a la República Norteamericana como cualquiera de sus actuales miembros y que pertenece naturalmente a la gran familia de Estados de los que la Unión es tutela providencial.

Debido a su situación controla la boca del Mississippi y su inmenso comercio que se incrementa anualmente y que debe buscar su camino de expansión en el Océano.

En los numerosos ríos navegables, considerando un total de curso adicional de cerca de unas treinta mil millas, que desembocan por ese río al Golfo de México el aumento de población dentro de los últimos diez años ha sido mayor que el de toda la Unión en el momento en que Louisiana fue anexionada.

La salida principal y natural de los productos de toda esta población, su directa comunicación con los Estados del Pacífico y del Atlántico, nunca puede estar segura, mientras Cuba sea dependiente de una Potencia distante, en cuya posesión ha probado ser una constante fuente de molestias y de perturbación a sus intereses.

Ciertamente, la Unión jamás podrá disfrutar de reposo ni conquistar una seguridad verdadera, mientras Cuba no esté comprendida entre sus límites.

Su inmediata adquisición por parte de nuestro Gobierno es de capital importancia y no podemos dudar de que será una acción devotamente deseada por sus habitantes.

El intercambio que su proximidad a nuestras costas ha

engendrado y promovido entre ellos y los ciudadanos de los Estados Unidos en el transcurso del tiempo ha unido sus intereses y fortunas, de manera tal, como si fueran un solo pueblo y tuvieran un mismo destino.

Existen razones por las que una demora en la adquisición de esta Isla sea algo extremadamente peligroso para los Estados Unidos.

El sistema de inmigración y de trabajo recientemente organizado dentro de nuestros límites y la tiranía y la opresión que caracteriza a sus gobernantes inmediatos amenazan con una insurrección que, en cualquier momento, podría resultar de terribles consecuencias para el pueblo norteamericano.

Cuba por lo tanto se ha convertido para nosotros en un peligro incesante y en una causa permanente de ansiedad y de alarma.

Pero no necesitamos extendernos en esos tópicos. No podemos dejar de considerar que las Potencias Extranjeras en contravención de la Ley Internacional interpondrían sus influencias con España para prevenir nuestra adquisición de la Isla. En este momento los habitantes de Cuba están sufriendo el peor de todos los gobiernos posibles: un gobierno de un despotismo absoluto, delegado por un poder distante a agentes irresponsables que son sustituidos en cortos intervalos y que aprovechan su corta ventaja para permitirse acumular fortunas por los medios más bajos.

En tanto perdure este sistema, la Humanidad pedirá en vano la supresión del tráfico de esclavos africanos en la Isla.

Esto resultará imposible, mientras ese infame tráfico permanezca como una tentación irresistible y como una fuente de inmensas ganancias para los oficiales necesitados y avaros, quienes, para lograr sus objetivos, no tienen escrúpulos en pisotear los principios más sagrados.

El Gobierno español en su capital puede estar bien dispuesto, pero la experiencia ha probado que no puede controlar a esos lejanos depositarios de su poder.

Además, las Potencias Comerciales del Mundo no pueden dejar de percibir y apreciar las grandes ventajas que podría reportar para su pueblo la disolución de la conexión forzada y antinatural entre España y Cuba y la subsiguiente anexión de la Isla por los Estados Unidos. El comercio de Inglaterra y Francia con Cuba, en ese caso, tendría de inmediato un carácter importante y beneficioso y se extendería rápidamente con el incremento de población y prosperidad de la Isla.

2º. Pero si los Estados Unidos y todas las Potencias Comerciales del Mundo se beneficiarían con esta transferencia, asimismo los intereses de España serían grande y esencialmente promovidos.

Ese país no puede sino ver cómo la suma de dinero que estamos dispuestos a pagar por la Isla afectaría el desarrollo de sus vastos recursos naturales.

Dos tercios de esta suma, si se emplean en la construcción de un sistema de vías ferroviarias, demostrarían, en última instancia, ser una fuente de mayor riqueza para el pueblo español que la ofrecida por las Cortes. Su prosperidad podría comenzar en el momento de la ratificación del tratado de cesión.

Francia ya ha construido vías férreas desde El Havre, Marsella, Valenciennes y Estrasburgo (vía París) hasta la frontera española y espera con ansiedad el día en que España se encuentre en condiciones de extender estos caminos por sus provincias del norte hasta Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga y los límites con Portugal.

Una vez logrado el objetivo, España podría transformarse en un centro de atracción para muchos viajeros, asegurándose un mercado permanente y sustancioso para sus distintas producciones. Sus campos, bajo el estímulo que los precios remunerativos darían a la industria, podrían hacer grandes cosechas de granos y sus viñedos podrían producir una cantidad muy importante de vinos de selección. España rápidamente podría convertirse en lo que una generosa Providencia siempre quiso que fuera una de las primeras Naciones de la Europa continental, rica, poderosa y feliz.

Mientras que dos tercios del precio por la Isla serían suficientes para la realización de sus mejoras públicas más importantes, esa Nación podría satisfacer, con el remanente de cuarenta millones de dólares, las demandas que presionan tan fuertemente sobre su crédito y crear un fondo de base que le aliviaría gradualmente de la asfixiante deuda que ahora paraliza sus energías.

Su actual situación financiera es tan ruinosa que sus mejores bonos se están vendiendo en su propia Bolsa de valores a un tercio de su valor nominal, mientras que otra clase de bonos, en los que no paga interés, sólo tienen un valor nominal y se los cita a un valor de un sexto de la cantidad por la que fueron emitidos. Además, estos valores están en manos principalmente de acreedores británicos, quienes, de un día a otro, podrían obtener

la interposición efectiva de su Gobierno con el propósito de forzar los pagos. Las intimidaciones a ese efecto ya han salido de posiciones importantes y poderosas y, a menos que una nueva fuente de entradas posibilite que España pueda satisfacer esas exigencias, no es improbable que las amenazas se cumplan.

En el caso de que España rechazara la presente oportunidad de desarrollar sus recursos y de terminar con su mala situación financiera puede ser que jamás vuelva a tener otra semejante.

Cuba en sus días más prósperos jamás dejó en su Tesorería, después de deducir las expensas de su gobierno, una entrada anual y clara de más de un millón y medio de dólares. Las expensas han aumentado a tal nivel que deja un déficit a cargo de la Tesorería de España de seiscientos mil dólares.

En consecuencia, desde el punto de vista pecuniario la Isla es más una carga que una fuente de ingresos para la Madre Patria.

En ningún momento Cuba dejó a España el uno por ciento de la importante suma que los Estados Unidos están dispuestos a pagar por su adquisición. Y España corre el peligro de perder Cuba sin remuneración.

La extrema opresión que ahora se reconoce justifica que cualquier pueblo luche por sacarse de encima el yugo de sus opresores. Los sufrimientos que la Administración local, corrupta, arbitraria e implacable ocasiona a los habitantes de Cuba no puede dejar de estimular y mantener con vida el espíritu de resistencia y revolución contra España, que ultimamente ha puesto tan de manifiesto. En esta situación, sería vano esperar

que las simpatías del pueblo de los Estados Unidos no estén ardorosamente puestas a favor de su oprimido vecino.

Sabemos que el Presidente es justamente inflexible en su determinación por hacer cumplir las leyes de neutralidad, pero si los cubanos se elevan en rebelión contra la opresión que están sufriendo, ningún poder humano podrá evitar que los ciudadanos de los Estados Unidos y los hombres liberales de los demás países corran en su ayuda. Además, vivimos en una época aventurera en la que espíritus determinados y osados abundan en cualquier parte del Mundo.

Por lo tanto, no es improbable que Cuba sea libertada de España por medio de una revolución triunfante y, en ese caso, España perdería la Isla y el precio que estamos dispuestos a pagar, un precio mucho más alto del que jamás pagó ningún pueblo a otro por una provincia.

También se debe subrayar que el arreglo de este vejante problema, con la cesión de Cuba a los Estados Unidos, evitaría para siempre posibles y peligrosas complicaciones entre diversas Naciones.

Es cierto que si los mismos cubanos organizan una insurrección contra el Gobierno español y que si otras Naciones independientes ayudan a España en esa circunstancia, ningún poder humano podrá prevenir, en nuestra opinión, que el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos tomen parte en tal guerra civil en apoyo de sus vecinos y amigos.

Pero si España, sorda a las voces de sus propios intereses, apoyándose en un orgullo terco y en un falso sentido del honor, rehusase vender Cuba a los Estados Unidos, entonces la

Pregunta obligada sería: ¿Cuál debe ser la posición del Gobierno norteamericano en estas circunstancias?

La supervivencia es la ley de los Estados así como la de los individuos. En diferentes periodos históricos todas las Naciones han actuado de acuerdo con este postulado. Aun cuando ha sido usado como pretexto para cometer las injusticias más flagrantes (como en la partición de Polonia y en otros casos similares que señala la Historia), este mismo principio, pese a haberse abusado de él, siempre ha sido reconocido.

Los Estados Unidos jamás han adquirido un metro de territorio, sino por medio de una compra justa o, como en el caso de Texas, por medio de la solicitud libre y voluntaria del pueblo de ese Estado independiente que decidió unir su destino al nuestro.

Hasta los territorios adquiridos a México no son una excepción a esta regla, pues, aun cuando podríamos haberlos pretendido por el derecho de conquista en una guerra justa, los compramos por una suma que fue considerada por ambos lados como un equivalente amplio y completo.

Nuestra Historia pasada prohíbe que adquiramos la Isla de Cuba sin el consentimiento de España, a menos que esté justificado por la gran Ley de supervivencia. Nosotros debemos, en cualquier caso, conservar nuestra consistente rectitud y nuestro autorrespeto.

Mientras sigamos esta regla, podemos ignorar las censuras del Mundo que en tantas oportunidades nos han sido hechas injustamente.

Cuando ofrezcamos a España un precio por Cuba que sea mayor que su valor presente y esta oferta sea rechazada, será el momento de plantearse la pregunta: ¿Cuba en posesión de España representa un serio peligro para nuestra paz interior y para la existencia de nuestra amada Unión?.

Si esta pregunta se contesta de forma afirmativa, entonces toda ley divina o humana justificará que liberemos ese territorio de España, si es que tenemos el poder, y esto basados en el mismo principio que justificaría que un individuo tirara abajo la casa en llamas de su vecino, si no dispusiera de otros medios para evitar que las llamas destruyeran su propia casa.

En esas circunstancias, no deberíamos tener en cuenta los costos, ni considerar lo que España pudiera oponer en contra nuestra. Nos debemos abstener de entrar en la cuestión de si la presente situación de la Isla justifica una medida semejante. Sin embargo, no cumpliríamos con nuestro deber, ni seríamos merecedores de nuestros bizarros antepasados, traicionándonos ante la posteridad, si permitiésemos que Cuba se africanizase y que se convirtiera en un segundo Santo Domingo con todos los horrores para la raza blanca y que sus llamas se extendiesen a nuestras costas vecinas, poniendo en serio peligro o consumiendo la blanca textura de nuestra Unión.

Tememos que el curso y la dirección de los acontecimientos tiendan rápidamente hacia una catástrofe de esa naturaleza. Sin embargo, tenemos esperanzas en lo mejor, aunque debemos estar preparados para lo peor.

Asimismo, nos abstenemos de considerar la presente situación de este problema entre Estados Unidos y España. Los oficiales españoles en Cuba han cometido una larga serie de

agravios y afrentas contra nuestro pueblo, aun sin reparar en ello. Pero, ultimamente, una flagrante violación de los derechos de los ciudadanos americanos y de su bandera ha sido perpetrada en el puerto de La Habana en circunstancias que, sin una inmediata reparación, habrían justificado recurrir a la guerra para reivindicar nuestro honor nacional. Esa afrenta no sólo está sin reparar, sino que, además, el Gobierno español ha justificado deliberadamente a sus subordinados y ha asumido la responsabilidad que a ellos correspondía.

Nada nos puede mostrar, de manera tan impresionante, como las circunstancias de este caso el peligro a que constantemente están expuestas las pacíficas relaciones que siempre ha querido tener los Estados Unidos con las Naciones extranjeras. Enfrentados como están España y Estados Unidos, este último país se ha abstenido de recurrir a medidas extremas.

Pero este estado de cosas no puede continuar por más respeto que tengamos por la dignidad de España como Nación independiente, y las recomendaciones que ahora presentamos han sido dictadas por la firme convicción de que la cesión de Cuba a los Estados Unidos con estipulaciones tan beneficiosas a España como las sugeridas es el único medio de terminar nuestras diferencias y asegurar a los dos países contra futuras conflagraciones.

Asimismo, hemos sido testigos de los felices resultados obtenidos por ambos países después de un arreglo similar en el caso de Florida.

Muy respetuosamente,

JAMES BUCHANAN
J. Y. MASON-PIERRE SOULE.

HON. W. L. MARCY, Secretario de Estado.

CHIDSEY, DONALD BARR: La Guerra Hispano-Americana, 1896-1898
Barcelona 1973), págs. 175-184).

APENDICE NUMERO 27.

EXTRACTO DE LA NOTA ENVIADA POR EL SECRETARIO DE ESTADO
NORTEAMERICANO RICHARD OLNEY AL MINISTRO ESPAÑOL EN
WASHINGTON (4 DE ABRIL DE 1896).

"Era de temer que España se encontrase en la imposibilidad de continuar la lucha y que tuviera que abandonar la Isla a la heterogénea combinación de elementos y razas que actualmente se encontraban en armas contra ella. Esa terminación del conflicto no podía ser mirada sin recelo, aun por el más fiel amigo de Cuba y por el más entusiasta abogado del gobierno popular. Existían poderosísimas razones para temer que si España se retiraba de la Isla desaparecería enseguida el único vínculo de unión que existía entre las diferentes facciones de los insurrectos. Sobrevendría una guerra de razas, tanto más sanguinaria, cuanto mayores eran la disciplina y experiencia adquiridas durante la insurrección, y aun en el caso de que temporalmente hubiese paz no se lograría, sino a merced del establecimiento de una República blanca y otra negra que, aunque al principio convinieran en dividirse la Isla entre ellas, serían enemigas desde el primer día y no descansarían hasta que una de las dos hubiera sido subyugada por la otra...

...Personas prudentes y honradas habían insistido en que una intervención para terminar este conflicto era el deber inmediato e imperativo de los Estados Unidos, que no podían tolerar por más tiempo la continuación de la guerra, pero que no querían intervenir y no pensaban, ni en la incorporación, ni en la anexión; por eso se ofrecían a mediar, a fin de "cooperar con España para la inmediata pacificación de la Isla bajo una base, que dejando a España sus derechos de soberanía, consiguiese para el pueblo de la Isla todos aquellos derechos y poderes del

gobierno propio local que pudieran razonablemente pedir..."

...La mediación no podría ser rechazada por ninguna de las partes. Ni una, ni otra podrían juzgarla mal o recelar de sus fines. No podía hacerlo España, porque el respeto de los Estados Unidos a la soberanía española y la determinación de no inferirle daño habían sido mantenidos durante muchos años a gran costo y a pesar de muchas tentaciones. Los insurgentes tampoco. Cualquier cosa que conviniera el Gobierno de los Estados Unidos, que no brindara satisfacción a las razonables aspiraciones y demandas de los cubanos provocaría la indignación del pueblo norteamericano..

...Hasta aquí, España había hecho frente a la insurrección con la espada en la mano; no había dado muestra alguna que indicara que la rendición y sumisión serían seguidas, sino de la vuelta al antiguo régimen. ¿No sería prudente modificar esta política y acompañar la aplicación de la fuerza militar con una declaración oficial de los cambios que se proponían en la administración de la Isla con objeto de suprimir todo motivo de queja?. A España competía considerar y determinar, cuáles debían ser esos cambios. Pero si fuesen tales que los Estados Unidos pudieran recomendar su adopción por quitar sustancialmente todo fundado motivo de queja, usarían de su influencia, para que fueran aceptados, y era apenas posible dudar que sería élla poderosísima para tratar la terminación de las hostilidades y la restauración de la paz y el orden en la Isla. A falta de otro resultado se lograría que la insurrección perdiera, en gran parte, si no por completo, el auxilio y el apoyo moral de que ahora disfrutaba por parte de los Estados Unidos".

(GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 322-323; MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo

la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs.280-281 y ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), págs. 111-112).

APENDICE NUMERO 28.

DECLARACIONES DE MCKINLEY ANTE LOS LIDERES Y LA MASA
DE SU PARTIDO EN RELACION CON LA INDEPENDENCIA DE CUBA
(18 DE JULIO DE 1896).

"Desde el momento de realizar su propia independencia el pueblo de los Estados Unidos ha mirado con simpatía los esfuerzos de los otros pueblos americanos por libertarse de la dominación europea. Observamos con profundo interés la lucha de los patriotas cubanos contra la crueldad y la opresión y son nuestros mejores deseos que tengan un completo éxito en su lucha por la libertad. Dado que el Gobierno de España ha perdido el control de Cuba y que es incapaz de proteger la propiedad y las vidas de los ciudadanos americanos residentes allí o de cumplir las obligaciones contraídas, creemos que el Gobierno de los Estados Unidos hará activo uso de su influencia y de sus buenos oficios para restablecer la paz y para dar la independencia a la Isla".

(ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Cuba no Debe su Independencia a los Estados Unidos (Buenos Aires 1965), págs. 114-115).

APENDICE NUMERO 29.

EXTRACTO DEL ULTIMO MENSAJE DEL PRESIDENTE CLEVELAND AL CONGRESO
EN RELACION CON LA CUESTION DE CUBA (7 DE DICIEMBRE DE 1896).

"Cuando la inhabilidad de España para resolver con buen éxito el problema de la insurrección haya quedado manifiesta, cuando esté demostrado que su soberanía en Cuba se ha extinguido, a todos los fines que dan legitimidad a su existencia, y cuando una lucha sin esperanza para restablecer dicha soberanía haya degenerado en una contienda; que no signifique sino un inútil sacrificio de vidas humanas y la destrucción total de lo que es objeto del conflicto, puede presentarse una situación en la cual nuestras obligaciones, respecto de la soberanía de España, sean invalidadas por otros deberes más altos que no vacilaremos ni en reconocer, ni en cumplir. Aplazando la elección de los medios y de los métodos para el momento en que hayamos de actuar, lo haremos depender de las condiciones que entonces prevalezcan...

...Puede llegar el momento en que una política previsora y justa y el cuidado de nuestros intereses, así como el de los de otras Naciones y el de los ciudadanos de las mismas, unido todo a consideraciones de humanidad y al deseo de ver a un rico y fértil país intimamente vinculado a nosotros a salvo de una devastación completa, obligue a nuestro Gobierno a la acción necesaria para amparar y servir los mencionados intereses y al propio tiempo para prometerle a Cuba y a sus habitantes una oportunidad, para que gocen de las bendiciones de la paz".

(FABIE, ANTONIO MARIA: Cánovas del Castillo. (Su Juventud. Su Edad Madura. Su Vejez) (Barcelona 1928), pág. 339; FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. II, págs. 390-394; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La

Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 325-327 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs. 304-306).

APENDICE NUMERO 30.

NOTA DEL MINISTRO DE ESTADO ESPAÑOL DON PIO GULLON AL
EMBAJADOR NORTEAMERICANO EN MADRID MR. STEWART L. WOODFORD

(23 DE OCTUBRE DE 1897).

"A la acción militar, ni un sólo día interrumpida y tan enérgica y viva como las circunstancias lo exijan, pero siempre humanitaria y atenta a respetar cuánto sea posible los derechos privados, habrá de acompañar la acción política, encaminándose francamente a la autonomía de la Colonia, por tal manera que del íntegro afianzamiento de la inmutable soberanía española surja la nueva personalidad que habrá de gobernarse a sí propio en los asuntos que le sean peculiares por medio de un Organismo Ejecutivo y del Consejo o Cámara Insular. Para realizar este plan, que sostiene como solemne compromiso político adquirido voluntariamente y desde la oposición, propónese el Gobierno de S.M. modificar en la parte necesaria la legislación vigente, haciéndolo en forma de Decretos para su más rápida aplicación y dejando para las Cortes del Reino, con el consurso de Senadores y Diputados antillanos, la resolución del problema económico y la distribución proporcionada de los gastos de la Deuda. Decidido el Gobierno de S.M., por espontánea deliberada resolución, a plantear en Cuba la autonomía, surge por la fuerza de los hechos el caso que había previsto el eminente Mr. Cleveland en su Mensaje de 7 de Diciembre de 1896, y dada la solidaridad internacional de los Gobiernos que en un país se suceden no hay que dudar de que el actual dignísimo Presidente convendrá con su antecesor en que no existe justo motivo para sospechar que deje de efectuarse sobre esta base la pacificación de la Isla de Cuba. De la rectitud, del amor a la paz, de la amistad del Presidente de los Estados Unidos confía el Gobierno de S.M. el Rey de España

que le ayudará en esta noble y humanitaria empresa, oponiéndose con eficaz energía a que la insurrección reciba de los Estados Unidos los auxilios morales y materiales que le prestan su única fuerza y sin los cuales estaría vencida o lo sería muy pronto. Es pues indispensable, ante todo, que el Presidente decida su proceder respecto a España en lo que afecta al problema cubano y que manifieste con precisión, si está dispuesto a que cesen, de una vez con carácter absoluto y para siempre las expediciones filibusteras que, al violar con el mayor desenfado las leyes de amistad, perjudican y menoscaban los respetos que el Gobierno americano se debe a sí mismo en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Preciso es que no se repitan hechos tan lamentables como el de la última expedición de la goleta "Silver Heels", partiendo de Nueva York a pesar del aviso previo de la Legación de S. M. en Washington y a presencia de las autoridades federales, porque sólo así quedarán evidenciadas las pacíficas aspiraciones de ese Gobierno y será posible la inteligencia amistosa. Con la nueva política iniciada ya por el Gobierno de S. M. desaparece hasta el pretexto de aquellas simpatías populares hacia la insurrección, que como argumento poderoso se mencionaron en varios Mensajes presidenciales, puesto que dentro del régimen autonómico encontrarán los cubanos la propia solución patrocinada como la más conveniente hasta por los poderes supremos de los Estados Unidos".

(FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. III, pág. 31 y Nota núm. 14 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs. 338-340).

APENDICE NUMERO 31.

RESUMEN DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE MCKINLEY AL CONGRESO
(6 DE DICIEMBRE DE 1897).

"Considero el reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos cubanos como imprudente en la actualidad e inadmisible por lo mismo. Si, andando el tiempo, se juzgase aceptable esta medida como derecho y deber del Poder Ejecutivo, la adoptaría éste. La intervención basada en motivos de humanidad ha sido aconsejada con frecuencia y no ha dejado de ser tomada en cuenta por sí misma, ansiosa y ardorosamente, pero ¿ debe acudirse hoy a tal medida, cuando es patente que ha ocurrido un cambio sembrado de esperanzas en la política de España en Cuba?. Ha ocupado el poder un nuevo Gobierno en la Madre Patria y de antemano se ha comprometido a declarar que todos los esfuerzos del Mundo no bastarían para mantener la paz en Cuba por medio de las bayonetas; que las vagas promesas de reformas después de la sumisión no aportan solución alguna al problema insular; que con la sustitución de los jefes, por el contrario, sobrevendrá un cambio en el antiguo sistema de hacer la guerra, sustituido por otro en armonía con la nueva política; que ya no pretenderá colocar a los cubanos en la "terrible alternativa de huir a la manigüa o de sucumbir de miseria"; que se establecerán las reformas, de acuerdo con las necesidades y las circunstancias de los tiempos, y que estas reformas, encaminadas a conceder plena autonomía a la Colonia y a crear un eficaz derecho electoral y una administración del país por el país, habrán de confirmar y afirmar la soberanía de España mediante una justa distribución de los poderes y las cargas sobre una base de interés mútuo y que no

se halle minado por un sistema de procederes egoístas. Los primeros actos del nuevo Gobierno van enderezados por esos honrosos caminos. Que en las pocas semanas que el Gobierno del señor Sagasta lleva de existencia ha dado pruebas de la sinceridad de sus declaraciones, es innegable. No impugnaré yo su sinceridad, ni debe tampoco permitirse que la impaciencia embarace la empresa que ha acometido. Honradamente debemos a España y a nuestras amistosas relaciones con esa Nación el darle una oportunidad razonable para realizar sus esperanza y para probar la pretendida eficacia del nuevo orden de cosas, al cual se ha comprometido de una manera irrevocable. Ha relevado al General, cuyas órdenes brutales inflamaban la imaginación americana e indignaban al Mundo civilizado. Ha modificado la horrible orden de concentración y se ha comprometido a cuidar de los abandonados y a permitir que los que quieran volver a cultivar sus campos puedan hacerlo, y les asegura la protección del Gobierno español en sus legítimas ocupaciones. Acaba de poner en libertad a los prisioneros del "Competitor" antes condenados a muerte y que habían servido de asunto a frecuente correspondencia diplomática durante éste y el anterior Gobierno. No hay ya ni un sólo súbdito americano detenido o cumpliendo condena en Cuba de quien tenga conocimiento este Gobierno...

...El porvenir próximo demostrará, si hay probabilidades de conseguir la indispensable condición de una paz honrosa, justa para los cubanos y para España, al par que equitativa para nuestros intereses tan intimamente ligados con el bienestar de Cuba. Si esta paz no se consigue, no quedará más remedio que afrontar la necesidad de que los Estados Unidos emprendan otra suerte de acción. Si en lo sucesivo pareciese ser un deber impuesto por nuestras obligaciones a nosotros mismos, a la Civilización y a la Humanidad el intervenir con la fuerza, lo haremos, pero no por culpa nuestra, sino sólo, porque la

necesidad para emprender tal acción sea tan clara que asegure el apoyo y la aprobación del Mundo civilizado".

(FERNANDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Historia Política de la España Contemporánea (Madrid 1968), Vol. III, págs. 35-36; GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), págs. 335-336 y MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs. 343-344).

APENDICE NUMERO 32.

RESUMEN DE LAS NOTAS ENVIADAS AL MINISTERIO DE ESTADO POR EL
EMBAJADOR ESPAÑOL EN WASHINGTON SEÑOR DUPUY DE LOME
(14, 16 Y 19 DE ENERO DE 1898).

"La nota que darán mañana todos los periódicos, que nos son adversos, es que lo sucedido en La Habana no encierra más que el principio de mayores y más serios disturbios y que las autoridades no podrán sostener el orden" (Nota del 14 de Enero).

"La prensa sensacional está como en los peores días y el Gobierno y sus consejeros, aunque a mí nada me dicen, parecen haber perdido toda fe en el éxito de España y hasta cierto punto la serenidad. Acabo de tener una conferencia con el jefe del servicio del "Herald", persona aquí importante y generalmente bien informada. Me ha dicho que a consecuencia de los recientes sucesos el Presidente de la República ha manifestado que, según sus informes, la autonomía había fracasado en Cuba y que se temían graves desordenes en La Habana y en toda la Isla" (Nota del 16 de Enero).

"El Gobierno americano no puede hacer, ni hará ahora manifestación alguna, porque se siente sin fuerza para ello, pues una parte de la mayoría parlamentaria le sigue, porque espera que pueda hacer algo en favor de los insurrectos. El mal que los sucesos de La Habana han producido consiste, en que, según he sabido reservadamente, parece que el General Lee se ha dejado influir por los muchos americanos que fueron a Cuba y ha

comunicado a este Gobierno que la autonomía ha fracasado, habiendo dado los motines de La Habana apariencias de verdad a esta opinión" (Nota del 19 de Enero).

(MAURA GAMAZO, GABRIEL: Historia Crítica del Reinado de Don Alfonso XIII durante su Minoridad bajo la Regencia de su Madre Doña María Cristina de Austria (Barcelona 1919-1925), Vol. I, págs. 356-357).

APENDICE NUMERO 33.

RESUMEN DE LA RESPUESTA CONFIDENCIAL DADA AL EMBAJADOR
NORTEAMERICANO EN MADRID, MR. WOODFORD, POR EL MEDIADOR ESPAÑOL
EN RELACION CON LA OFERTA DE COMPRA DE CUBA EFECTUADA POR
ESTADOS UNIDOS (7 DE MARZO DE 1898).

"España ha hecho cuanto podía hacer y se esperaba que hiciera, retirando a Weyler; enviando a Blanco; abandonando la política de concentración; estableciendo una guerra legítima; rescindiendo los edictos sobre el tabaco; impulsando las plantaciones y las recolecciones; otorgando la autonomía; ofreciendo un completo perdón a los rebeldes; permitiendo a Cuba establecer sus aranceles, y finalmente entrando deliberada y honestamente en las negociaciones para abrir el mercado de Cuba a un Tratado recíproco con los Estados Unidos. Estaba dispuesta a ampliar esa autonomía, si era necesario, pero no se retiraría de la Isla, a menos que se le arrojase por la fuerza. He visto en los periódicos rumores sobre el deseo de los Estados Unidos de comprar a Cuba, pero España no venderá jamás la Isla. Ningún Gobierno español podría hacerlo y conservar el poder. España podría ser compelida a abandonar Cuba o a concederle la independencia, pero nunca vendería, ni cedería la Isla a los Estados Unidos. Nunca podrían los Estados Unidos adquirir la Isla con el consentimiento de España. Si querían tomarla, tendrían que apoderarse de ella por conquista".

(GUERRA SANCHEZ, RAMIRO: La Expansión Territorial de los Estados Unidos, a Expensas de España y de los Países Hispanoamericanos (La Habana 1975), pág. 344 y PABON, JESUS: El 98, Acontencimiento Internacional, en "Días de Ayer (Historias e Historiadores Contemporáneos)" (Barcelona 1963), págs. 173-174).

APENDICE NUMERO 34.

TRATADO DE PAZ ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(10 DE DICIEMBRE DE 1898).

Su Majestad la Reina Regente de España, en nombre de Su Augusto Hijo Don Alfonso XIII y los Estados Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre las Naciones, han nombrado con este objeto a sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Majestad la Reina Regente de España a: Don Eugenio Montero Ríos, Presidente del Senado;

Don Buenaventura de Abárzuza, Senador del Reino, Ministro que ha sido de la Corona;

Don José de Garnica, Diputado a Cortes, Magistrado del Tribunal Supremo;

Don Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas;

Don Rafael Cerero, General de División.

Y el Presidente de los Estados Unidos de América a:

William R. Day, Cushman K. Davis, William P. Frye, George Gray y Whitelaw Reid, ciudadanos de los Estados Unidos.

Los cuales reunidos en París después de haberse comunicado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y válida forma, y previa la discusión de las materias pendientes, han convenido en los siguientes artículos:

Artículo 1º. España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba.

En atención a que dicha Isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla les impone el Derecho Internacional para la protección de vidas y haciendas.

Art. 2º. España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones.

Art. 3º. España cede a los Estados Unidos el Archipiélago conocido por las Islas Filipinas que comprende las islas situadas dentro de las líneas siguientes:

Una línea que corre de Oeste a Este cerca de veinte (20º) grados paralelo de la latitud Norte a través de la mitad del Canal navegable de Bachi, desde el ciento dieciocho al ciento veintisiete (118-127º) grados de longitud Este de Greenwich; de aquí a lo largo del ciento veintisiete (127º) grado meridiano de longitud Este de Greenwich al paralelo cuatro grados cuarenta y cinco minutos (4º 45') de latitud Norte; de aquí, siguiendo el paralelo de cuatro grados cuarenta y cinco minutos de latitud Norte (4º 45') hasta su intersección con el meridiano de longitud ciento diecinueve grados y treinta y cinco minutos (119º 35') Este de Greenwich, al paralelo de latitud siete grados cuarenta minutos (7º 40') Norte; de aquí, siguiendo el paralelo de latitud siete grados cuarenta minutos (7º 40') Norte, a su intersección con ciento dieciseis (116º) grado meridiano de longitud Este de Greenwich; de aquí, por una línea recta, a la intersección del décimo (10º) grado paralelo de latitud Norte con el ciento dieciocho (118º) grado meridiano de longitud Este de Greenwich, el punto en que comienza esta Demarcación.

Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (\$ 20.000.000) dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.

Art. 4º Los Estados Unidos durante el término de diez años, a contar desde el canje de ratificaciones del presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y las mercancías españolas bajo las mismas condiciones que los buques y las mercancías de los Estados Unidos.

Art. 5º. Los Estados Unidos al ser firmado el presente Tratado transportarán a España, a su costa, a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser capturada Manila. Las armas de estos soldados les serán devueltas.

España al canjearse las ratificaciones del presente Tratado procederá a evacuar las Islas Filipinas, así como la de Guam en condiciones semejantes a las acordadas por las Comisiones nombradas para concertar la evacuación de Puerto Rico y otras Islas de las Antillas Occidentales, según el Protocolo de 12 de Agosto de 1898 que continuará en vigor hasta que sean cumplidas sus disposiciones completamente.

El término dentro del cual será completada la evacuación de las Islas Filipinas y la de Guam será fijado por ambos Gobiernos. Serán propiedad de España: banderas y estandartes; buques de guerra no apresados; armas portátiles; cañones de todos los calibres con sus montajes y accesorios; pólvora; municiones; ganado y material y efectos de toda clase pertenecientes a los Ejércitos de Mar y Tierra de España en las Filipinas y Guam. Las piezas de grueso calibre que no sean artillería de campaña, colocadas en las fortificaciones y costas,

quedarán en sus emplazamientos por el plazo de seis meses a partir del canje de ratificaciones del presente Tratado y los Estados Unidos podrán durante ese tiempo comprar a España dicho material, si ambos Gobiernos llegan a un acuerdo satisfactorio sobre el particular.

Art. 6º España al ser firmado el presente Tratado pondrá en libertad a todos los prisioneros de guerra y detenidos o presos por delitos políticos, a consecuencia de las insurrecciones en Cuba y Filipinas y de la guerra con los Estados Unidos.

Recíprocamente, los Estados Unidos pondrán en libertad a todos los prisioneros de guerra hechos por las fuerzas americanas y gestionarán la libertad de todos los prisioneros españoles en poder de los insurrectos de Cuba y Filipinas.

El Gobierno de los Estados Unidos transportará, por su cuenta, a España y el Gobierno de España transportará, por su cuenta, a los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con arreglo a la situación de sus respectivos hogares, a los prisioneros que pongan o que hagan poner en libertad respectivamente en virtud de este artículo.

Art. 7º. España y los Estados Unidos de América renuncian mutuamente por el presente Tratado a toda reclamación de indemnización nacional o privada de cualquier género de un Gobierno contra el otro o de sus súbditos o ciudadanos contra el otro Gobierno, que pueda haber surgido desde el comienzo de la última insurrección en Cuba y sea anterior al canje de ratificaciones del presente Tratado, así como a toda indemnización en concepto de gastos ocasionados por la guerra.

Los Estados Unidos juzgarán y resolverán las reclamaciones de sus ciudadanos contra España a que renuncia en este artículo.

Art. 8º. En cumplimiento de lo convenido en los artículos 1º, 2º y 3º de este Tratado, España renuncia en Cuba y cede en Puerto Rico y en las otras Islas de las Indias Occidentales, en la Isla de Guam y en el Archipiélago de las Filipinas todos los edificios, muelles, cuarteles, fortalezas, establecimientos, vías públicas y demás bienes inmuebles que con arreglo a Derecho son del dominio público y como tal corresponden a la Corona de España.

Queda, por lo tanto, declarado que esta renuncia o cesión, según el caso, a que se refiere el párrafo anterior en nada puede mermar la propiedad o los derechos que corresponden con arreglo a las leyes al poseedor pacífico de los bienes de todas clases de las provincias, municipios, establecimientos públicos o privados, corporaciones civiles o eclesiásticas o de cualquiera otras colectividades que tienen personalidad jurídica para adquirir y poseer bienes en los mencionados territorios renunciados o cedidos, y los de los individuos particulares, cualquiera que sea su nacionalidad.

Dicha renuncia o cesión, según el caso, incluye todos los documentos que se refieran exclusivamente a dicha soberanía renunciada o cedida, que existan en los Archivos de la Península. Cuando estos documentos existentes en dichos Archivos sólo en parte correspondan a dicha soberanía, se facilitarán copias de dicha parte, siempre que sean solicitadas. Reglas análogas habrán recíprocamente de observarse en favor de España, respecto de los documentos existentes en los Archivos de las Islas antes mencionadas.

En las antecitadas renuncia o cesión, según el caso, se hallan comprendidos aquellos derechos de la Corona de España y de sus Autoridades sobre los Archivos y Registros oficiales, así administrativos como judiciales de dichas Islas, que se refieran a ellas y a los derechos y propiedades de sus habitantes. Dichos Archivos y Registros deberán ser cuidadosamente conservados y los particulares, sin excepción, tendrán derecho a sacar, con arreglo a las leyes, las copias autorizadas de los contratos, testamentos y demás documentos que formen parte de los protocolos notariales que se custodien en los Archivos administrativos o judiciales, bien éstos se hallen en España o bien en las Islas de que se hace mención anteriormente.

Art. 9º. Los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente Tratado podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando, en uno u otro caso, todos sus derechos de propiedad o de sus productos y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio podrán conservar su nacionalidad española, haciendo ante una oficina de registro dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este Tratado una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad; a falta de esta declaración se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir.

Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.

Art. 10. Los habitantes de los territorios, cuya

soberanía España renuncia o cede, tendrán asegurado el libre ejercicio de su religión.

Art. 11. Los españoles residentes en los territorios cuya soberanía cede o renuncia España por este Tratado estarán sometidos en lo civil y en lo criminal a los Tribunales del país en que residan, con arreglo a las leyes comunes que regulen su competencia, pudiendo comparecer ante aquéllos en la misma forma y empleando los mismo procedimientos que deban observar los ciudadanos del país a que pertenezca el Tribunal.

Art. 12. Los procedimientos judiciales pendientes al canjearse las ratificaciones de este Tratado en los territorios sobre los cuales España renuncia o cede su soberanía se determinarán con arreglo a las reglas siguientes:

I. Las sentencias dictadas en causas civiles entre particulares o en materia criminal antes de la fecha mencionada y contra las cuales no haya apelación o casación, con arreglo a las leyes españolas, se considerarán como firmes y serán ejecutadas en debida forma por la Autoridad competente en el territorio, dentro del cual dichas sentencias deban cumplirse.

II. Los pleitos civiles entre particulares que en la fecha mencionada no hayan sido juzgados continuarán su tramitación ante el Tribunal en que se halle el proceso o ante aquél que lo sustituya.

III. Las acciones en materia criminal pendientes en la fecha mencionada ante el Tribunal Supremo de España contra ciudadanos del territorio que según este Tratado deja de ser español continuarán bajo su jurisdicción hasta que recaiga la

sentencia definitiva, pero una vez dictada esa sentencia su ejecución será encomendada a la Autoridad competente del lugar en que la acción se suscitó.

Art. 13. Continuarán respetándose los derechos de propiedad literaria, artística e industrial adquiridos por españoles en la Isla de Cuba y en las de Puerto Rico, Filipinas y demás territorios cedidos al hacerse el canje de las ratificaciones de este Tratado. Las obras españolas científicas, literarias y artísticas que no sean peligrosas para el orden público en dichos territorios continuarán entrando en los mismos con franquicia de todo derecho de Aduanas por un plazo de diez años, a contar desde el canje de ratificaciones de este Tratado.

Art. 14. España podrá establecer Agentes Consulares en los puertos y plazas de los territorios, cuya renuncia y cesión es objeto de este Tratado.

Art. 15. El Gobierno de cada país concederá por el término de diez años a los buques mercantes del otro el mismo trato en cuanto a todos los derechos de puerto, incluyendo los de entrada y salida, de faro y tonelaje que concede a sus propios buques mercantes no empleados en el comercio de cabotaje.

Este artículo puede ser denunciado en cualquier tiempo, dando noticia previa de ello cualquiera de los dos Gobiernos al otro con seis meses de anticipación.

Art. 16. Queda entendido que cualquier obligación aceptada en este Tratado por los Estados Unidos con respecto a Cuba está limitada al tiempo que dure su ocupación en esta Isla,

pero al terminar dicha ocupación aconsejarán al Gobierno que se establezca en la Isla que acepte las mismas obligaciones.

Art. 17. El presente Tratado será ratificado por Su Majestad la Reina Regente de España y por el Presidente de los Estados Unidos de acuerdo y con la aprobación del Senado y las ratificaciones se canjearán en Washington dentro del plazo de seis meses desde esta fecha o antes, si posible fuese.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman y sellan este Tratado.

Hecho por duplicado en París, a diez de Diciembre del año de mil ochocientos noventa y ocho.

Eugenio Montero Ríos.

B. de Abárzuza.

J. de Garnica.

W. R. de Villa-Urrutia.

Rafael Cerero.

William R. Day.

Cushman K. Davis.

Wm. P. Frye.

Geo. Gray.

Whitelaw Reid.

(FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico
(Madrid 1953), págs. 261-268).